

Carrera de Posgrado.
Doctorado en Ciencias Sociales.
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
Universidad Nacional De Jujuy.
2024

TITULO:

La cuestión indígena: De juicios y tierras. Análisis de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Jujuy (2015-2023).

"Tesis para aspirar al Grado de Doctora en Ciencias Sociales"

TESISTA: ESP. EMILCE DAIANA SCHINDLER.

DIRECTORA: DRA. PATRICIA MARISEL ARRUETA.

CO-DIRECTORA: MG. MARIA VICTORIA GONZÁLEZ DE PRADA.

SAN SALVADOR DE JUJUY, NOVIEMBRE DE 2024.

A mi hijo, con amor

Y “Al Negro”, porque se lo prometí.

AGRADECIMIENTOS.

El tiempo dedicado a este proyecto ha sido extenso y estoy profundamente agradecida con todas las personas e instituciones que me han acompañado y apoyado a lo largo del camino. *Gracias, todo en mi memoria.*

Lo audaz que se pone una, cuando tiene la certeza de ser amada y este es el resultado: *mi tesis*, que *no es solo mía*, sino también el reflejo del amor, apoyo y confianza de quienes me han sostenido en este proceso.

A la Universidad Nacional de Jujuy, por ser el espacio que me brindó la posibilidad de alcanzar mis metas académicas, la *Universidad Pública y Gratuita,* lugar de debates profundos y esenciales para el crecimiento intelectual, social y personal. *Gracias, por ayudarme a pensar de manera colectiva.*

A mi directora, Dra. Patricia Marisel Arrueta, por la libertad y la apertura. *Gracias,* también *por las preguntas y los desafíos.*

A Mg. Abog. María Victoria González de Prada, por guiarme como co-directora, por la lectura minuciosa, tu claridad, siempre con respetuosos aportes. *Gracias, por el compromiso.*

A Dra. Valeria Fernanda Chapur, por recordarme, en cada ocasión, que la mejor tesis es la tesis terminada. *Gracias por tu apoyo académico y emocional en los momentos de incertidumbre*.

A María José, por la escucha. *Gracias, por el constante impulso de seguir*.

A mi amiga Pía, las charlas, los cafés, las imágenes, los Excel probados y descartados. *Gracias, por tu compañía.*

A Vale. *Gracias, por los cuidados.*

A mi compañero de vida Andrés. *Gracias, por tu apuesta.*

A mi hijo Camilo. *Gracias, por el amor.*

Y finalmente, a vos, *Emi* primera generación de universitarios. Lo lograste. *Te abrazo.*

ÍNDICE GENERAL

Agradecimientos. 3
Resumen. 8
Organización de la Tesis. 10
Introducción. 15
La investigación en los estudios sociales y el campo jurídico. 15
Los objetivos de la investigación. 18
Justificación. 20
Antecedentes. 21
PARTE I: ENFOQUE-ANTROPOLÓGICO Y JURÍDICO 29
Capítulo I. Marco metodológico y territorial en Jujuy. 30
Lo indígena en la provincia de Jujuy. 30
Recorte poblacional. 31
Las regiones de Jujuy. 33
Los grupos étnicos de Jujuy. 36
Fuentes de datos y análisis. 41
Fuentes secundarias: Las sentencias judiciales. 43
Fuentes Primarias: Las entrevistas a los comuneros. 49
Triangulación de fuentes de datos. 53
Consideraciones éticas y jurídicas en el tratamiento de las fuentes. 55
Capítulo II. La cuestión indígena en Latinoamérica. 57
La cuestión indígena. 57
Los derechos indígenas desde la antropología jurídica. 59
La colonialidad del poder y la creación de cuerpos legales. 62
Manifestaciones contemporáneas de lo colonial. Los nexos interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad. 69
Reconocimiento de sistemas jurídicos indígenas y otros sistemas legales basados en la cultura. 70
Dinámicas de poder y resistencia en contextos jurídicos y sociales. 73
Identidad colectiva en la formulación de estrategias identitarias. 78
El territorio como fundamento de la identidad indígena. 82
La construcción de la subjetividad comunitaria a través del territorio y las dinámicas de poder. 90
Capítulo III. Teorías de la juridización y su uso por las comunidades indígenas. 98
La juridización de las identidades indígenas. 98

Sesgo y limitaciones en la juridización del derecho indígena. 104
Capacidad de las comunidades indígenas para juridizar derechos y resistir fuerzas hegemónicas. 109
Los instrumentos internacionales de protección. 111
Los instrumentos nacionales. 113
Antes de la reforma constitucional de 1994. 113
Después de la reforma constitucional de 1994. 114
La propiedad comunitaria indígena en el código de Vélez Sarsfield, el anteproyecto y en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 118
Reconocimiento constitucional del multiculturalismo. 124
El postpositivismo y la dimensión argumentativa. 126
Teoría sobre los casos difíciles y su aplicación en la interpretación de derechos constitucionales. 128
Reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas en contraposición al monismo jurídico del Estado. El pluralismo jurídico y plurijuridismo. 131
Capítulo IV. La dogmática judicial y la crítica jurídica 134
La aplicación de modelos de equidad. 134
Rawls y la equidad distributiva. 134
Análisis de las teorías de la justicia después de Rawls. 137
Nozick y el Estado mínimo. 138
Dworkin y el derecho como integridad. 139
Sen y la idea de justicia. 142
Cohen, principios de comunidad y reciprocidad. 143
La inclusión de la perspectiva feminista. 144
La influencia de la teoría de la justicia en las corrientes contemporáneas. 145
El humanismo, como principio fundamental de equidad. 147
Multiculturalismo y tolerancia. 149
Taylor y la equidad en sociedades culturalmente diversas. 149
Kymlicka, los derechos de las minorías y la justicia interseccional. 150
Young, la crítica a los ideales de imparcialidad y universalidad. 151
Pluralismo y justicia distributiva. 152
La propuesta de interculturalidad. La justicia a través del diálogo entre diferentes culturas y sistemas jurídicos. 154
La crítica al sistema jurídico desde la perspectiva de la teoría crítica. 155
Teoría de la acción comunicativa y su relevancia en el análisis jurídico. 156

La Perspectiva jurídica de Horkheimer. 160
Adorno y su dialéctica negativa. 162
Pluralismo jurídico y crítica a la legitimidad en el derecho. 163
Interrelación entre derecho y sociedad. Crítica a las estructuras de poder y legitimidad. 166
PARTE II: ENFOQUE ANALÍTICO Y REFLEXIVO 168
Capítulo V. La justicia en los conflictos territoriales. 169
Argumentos específicos y esencia de las sentencias. 171
Categorías de las sentencias. 178
Agrupamiento de sentencias por categorías.. 184
Consistencia y tendencias de las sentencias. 186
Capítulo VI. Las Voces comunitarias. 196
Análisis de la Tabla 3. 199
Dinámicas comunitarias. 208
Nube de palabras. 211
Similitudes y divergencias en las entrevistas. 213
Identificación de patrones. 220
Visualizando las narrativas. 231
Capítulo VII. Las tensiones de sentido entre la justicia estatal y la cosmovisión territorial indígena. 233
Colonialidad del poder y dinámicas de control social. 234
Resistencia y juridización. 237
Desigualdad y justicia. 241
Territorio y prácticas sociales. 245
Crítica y Transformación. 249
Conclusión. Repensar el derecho para reconocer la diversidad. 255
Recapitulación de los hallazgos principales. 255
Aportaciones al campo de estudio. 256
Propuestas para el futuro. 256
Reflexión final: Hacer justicia es una responsabilidad colectiva. 257
Bibliografía: 260
Apéndice A- Sentencias judiciales. 298
Apéndice B- Diseño de Entrevista. 386
Apéndice C- Consentimiento Informado 388
Apéndice D - Lista y desglose de entrevistas a comuneros. 389

Apéndice E: Gráfico jerárquico de las narrativas de las comunidades indígenas sobre territorio y justicia 414

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geopolítica de la provincia de Jujuy. 31

Figura 2. Porcentaje de la población en viviendas particulares que se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarias, por jurisdicción. Año 2022. 32

Figura 3. Comunidades indígenas con personería jurídica según pueblo provincia de Jujuy. Año 2023 36

Figura 4: Interrelación entre las categorías de análisis. 211

Figura 5. Nube de palabras basada en las entrevistas comunitarias. 213

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Casos seleccionados 170

Tabla 2. Identificación de precedentes y cambios jurisprudenciales 195

Tabla 3. Categorías de análisis y la relación con las prácticas y problemáticas de las comunidades 197

Tabla 4: Análisis integral de las dinámicas comunitarias y sus interrelaciones 209

Tabla 5: Tensión de sentido entre sentencias judiciales y experiencias comunitarias 253

Tabla 6: Comparación entre sentencias judiciales y percepciones comunitarias 253

Resumen

Esta tesis doctoral se centra en el análisis de los conflictos territoriales que enfrentan las comunidades indígenas de la provincia de Jujuy y cómo estas han utilizado el sistema judicial como herramienta para defender sus derechos en un contexto histórico de exclusión. El objetivo principal es examinar las sentencias judiciales emitidas entre 2015 y 2023 por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Jujuy, tras la implementación del nuevo Código Civil y Comercial (2015), evaluando las tensiones entre los derechos individuales y colectivos dentro del marco legal argentino y su impacto en las comunidades indígenas.

Utilizando un enfoque cualitativo, la investigación emplea el estudio de casos para explorar las experiencias de las comunidades en torno a la tenencia de la tierra y sus implicancias jurídicas. Las sentencias judiciales seleccionadas proporcionan una base sólida para analizar cómo se han gestionado estos conflictos en el ámbito judicial, mientras que las entrevistas semiestructuradas con comuneros ofrecen una perspectiva vivencial, cultural y humana que complementa el análisis legal. Estas entrevistas, realizadas con miembros de las comunidades afectadas, permitieron capturar la dimensión subjetiva de los conflictos, evidenciando cómo las comunidades perciben las sentencias judiciales y cómo estas influyen en sus estrategias de resistencia y organización territorial.

La triangulación de fuentes facilita la comprensión holística y multidimensional de la problemática, permitiendo identificar patrones, tensiones y desafíos en la interacción entre el sistema legal estatal y las realidades socioculturales de las comunidades indígenas.

Los resultados revelan que, si bien el marco normativo vigente reconoce derechos colectivos de los pueblos indígenas, en la práctica, las sentencias judiciales tienden a priorizar los derechos individuales sobre los colectivos, reproduciendo así estructuras coloniales que perpetúan la exclusión de las comunidades aborígenes. Las entrevistas reflejan un sentimiento generalizado de desconfianza hacia el sistema judicial, percibido como ajeno a las realidades y cosmovisiones indígenas. No obstante, a pesar de estas limitaciones, las comunidades continúan utilizando el sistema judicial como una herramienta de resistencia frente a las presiones estatales y económicas que amenazan sus territorios.

Una de las conclusiones más destacadas es que el pluralismo jurídico, reconocido formalmente en el nuevo Código Civil y Comercial, presenta grandes desafíos para su implementación efectiva. El sistema judicial no logra integrar plenamente las particularidades culturales de las comunidades

indígenas, lo que genera tensiones entre las normativas formales de propiedad individual y la cosmovisión indígena de la tierra como un bien colectivo y culturalmente significativo.

Esta tesis ofrece una reflexión sobre la interacción del sistema judicial con los derechos indígenas, centrándose en los conflictos que surgen al aplicar las normativas estatales en las prácticas culturales de las comunidades aborígenes.

Palabras clave: comunidades indígenas, conflictos territoriales, Jujuy, pluralismo jurídico, sentencias judiciales, propiedad comunitaria, resistencia, derechos colectivos, triangulación de fuentes.

Organización de la Tesis.

La tesis se estructura en dos partes diferenciadas, cada una con un enfoque y propósito específico, lo que permite abordar de manera integral el tema central de la investigación: los conflictos territoriales que enfrentan las comunidades indígenas de Jujuy y el uso de la juridización como herramienta para defender sus derechos en dicha provincia.

En la *Introducción*, se plantea el problema central de la investigación, subrayando la importancia del campo jurídico dentro de los estudios sociales como una vía para comprender la interacción entre las normas legales y las realidades sociales. La interdisciplinariedad se presenta como clave para analizar los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas en un contexto de globalización y pluralidad cultural. Además, se establecen los objetivos generales y específicos y se justifica la relevancia teórica y práctica del estudio. Se introducen también los antecedentes teóricos pertinentes, que documentan las relaciones entre las comunidades indígenas y el Estado.

Parte I: Enfoque Antropológico y Jurídico.

La primera parte, eminentemente descriptiva, presenta el marco general de la investigación y desarrolla las principales categorías teóricas que sustentan el análisis. Esta parte consta de tres capítulos:

El Capítulo I, titulado *Marco metodológico y territorial en Jujuy*, contextualiza el escenario de investigación en la provincia de Jujuy, centrándose en las dinámicas indígenas. Comienza con un recorte poblacional que detalla las características demográficas de la provincia, seguido de un análisis de sus principales regiones geográficas y la diversidad de los grupos étnicos que las habitan. Estos elementos son cruciales para comprender el contexto social y cultural en el que se desarrollan los conflictos territoriales.

El capítulo expone las fuentes de datos y análisis, diferenciando entre fuentes primarias y secundarias. Las fuentes secundarias se centran en el análisis de sentencias judiciales, permitiendo evaluar cómo se manejan legalmente los derechos territoriales de las comunidades indígenas. En complemento, las fuentes primarias se basan en las entrevistas realizadas a comuneros, lo que ofrece una perspectiva vivencial de los conflictos territoriales y las estrategias de resistencia que estas comunidades emplean.

Se detalla el proceso de triangulación de fuentes de datos, en el que se integran y contrastan los resultados obtenidos de las sentencias y las entrevistas. Este enfoque proporciona una comprensión más rica y profunda de las dinámicas que afectan a las comunidades indígenas.

Finalmente se abordan las consideraciones éticas necesarias para preservar la confidencialidad y la transparencia a lo largo de toda la investigación.

El Capítulo II: *La cuestión indígena en Latinoamérica*, aborda un análisis profundo de las dinámicas históricas, antropológicas y jurídicas que han impactado a los pueblos indígenas en Latinoamérica. Inicia con una revisión del contexto histórico y antropológico, explorando los procesos de colonización y sus efectos en la configuración social y política de las comunidades indígenas. A partir de allí, se introduce el concepto de colonialidad del poder, examinando cómo estas estructuras coloniales influyeron en la creación de cuerpos legales que han perpetuado la exclusión y subordinación de los pueblos originarios.

Las manifestaciones contemporáneas de lo colonial van mostrando cómo, a pesar de los avances en reconocimiento de derechos, persisten como formas de control y exclusión. En este contexto, se exploran los nexos entre interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad, conceptos clave que buscan transformar estas relaciones de poder y promover un reconocimiento más amplio de las identidades y derechos indígenas.

Se discute el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas y la coexistencia con otros sistemas legales basados en la cultura. Esta sección profundiza en el pluralismo jurídico, resaltando cómo los sistemas legales contemporáneos deben adaptarse para respetar y proteger las particularidades culturales y los derechos territoriales de las comunidades indígenas, en un marco de interculturalidad y decolonialidad.

El Capítulo III: *Teorías de la juridización y su uso por las comunidades indígenas*, profundiza en cómo las comunidades indígenas han utilizado la juridización como herramienta para defender sus derechos en contextos tanto nacionales como internacionales. También se aborda la capacidad de las comunidades para juridizar sus derechos y resistir las fuerzas hegemónicas, explorando las estrategias utilizadas para confrontar y adaptarse a las estructuras de poder estatales.

Se examinan los instrumentos internacionales y nacionales de protección de los derechos indígenas, estableciendo una distinción entre el contexto previo y posterior a la Reforma Constitucional de 1994, reconocida como un hito en el reconocimiento de los derechos territoriales y colectivos de los pueblos indígenas. Además, se analiza su impacto en el nuevo Código Civil y Comercial de 2015, en comparación con el Código de Vélez Sarsfield y el anteproyecto que lo precedió. La discusión se centra en el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena en estos marcos legales, destacando tanto los avances logrados como las tensiones surgidas durante su implementación.

También se explora el reconocimiento constitucional del multiculturalismo, señalando cómo esta perspectiva pluralista desafía el monismo jurídico del Estado. Se desarrolla el concepto de pluralismo jurídico y plurijuridismo, abogando por una coexistencia de sistemas legales que respeten las particularidades culturales y jurídicas de los pueblos indígenas. Además, se introduce el postpositivismo y la dimensión argumentativa como enfoques teóricos que permiten una interpretación más flexible y contextual de los derechos constitucionales, especialmente en casos difíciles, donde los derechos de las comunidades indígenas entran en conflicto con los principios jurídicos tradicionales.

El Capítulo IV: *La dogmática judicial y la crítica jurídica*, analiza cómo el sistema judicial ha gestionado los conflictos territoriales que afectan a las comunidades indígenas de Jujuy, utilizando diversas teorías de la justicia para evaluar las decisiones judiciales y su impacto en la equidad distributiva. Se aborda la aplicación de modelos de justicia, partiendo del concepto de equidad, y se exploran las distintas corrientes que influyen en la interpretación de derechos.

Se incluye una crítica al derecho desde una perspectiva que cuestiona los principios tradicionales de imparcialidad y universalidad, resaltando las dificultades de aplicar estos ideales en sociedades multiculturales. Se examina la justicia distributiva en sistemas pluralistas, así como la importancia de la interculturalidad.

Parte II: Enfoque Analítico y Reflexivo.

En la segunda parte, caracterizada por un enfoque más analítico y reflexivo, se expone el proceso de análisis de los datos recabados y su articulación con el marco teórico. A lo largo de tres capítulos, se profundiza en la interpretación de las decisiones judiciales y los testimonios, revelando patrones, tensiones y desafíos enfrentados por las comunidades indígenas.

El Capitulo V: *La justicia en los conflictos territoriales indígenas*, se examina la gestión judicial de los conflictos territoriales que afectan a las comunidades indígenas de la provincia de Jujuy. Se presenta una selección representativa de sentencias judiciales con el objetivo de analizar cómo la justicia ha abordado estas problemáticas. La selección de casos se fundamenta en su relevancia territorial, priorizando aquellos en los que las comunidades indígenas de Jujuy participan como actores principales o como demandados.

Las sentencias incluidas corresponden a resoluciones emitidas en última instancia por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Jujuy, en el período comprendido entre agosto de 2015 y enero

de 2023. Estos criterios de selección buscan ofrecer una perspectiva comprehensiva sobre el rol del máximo órgano judicial en la resolución de estos conflictos.

El análisis identifica patrones y tendencias de especial relevancia, centrándose en la capacidad del sistema judicial para responder a las particularidades culturales de las comunidades indígenas. Además, se examinan los precedentes establecidos y los cambios jurisprudenciales que han surgido a lo largo del período estudiado.

El Capítulo VI: *Las voces comunitarias*, se centra en las dinámicas de poder y resistencia que emergen en los contextos jurídicos y sociales de las comunidades indígenas, analizadas a través de entrevistas realizadas a sus miembros. El capítulo explora cómo la identidad colectiva juega un papel fundamental en la formulación de estrategias de resistencia y en la construcción de un sentido de pertenencia frente a las imposiciones externas. Se analiza cómo estas comunidades utilizan el territorio no solo como un recurso material, sino como un elemento simbólico y cultural, central para la cohesión social e identitaria.

El capítulo también aborda la relación entre la construcción de identidad y las prácticas de apropiación del espacio, integrando diversas teorías sobre el espacio y su dimensión social y cultural. Se examinan enfoques que ven el espacio como una construcción simbólica y funcional en la vida comunitaria, y cómo éste refuerza las dinámicas de resistencia y pertenencia.

Finalmente, se analiza la construcción identitaria a través del territorio, abordando cómo este actúa como eje articulador para las comunidades indígenas, no sólo como un bien físico, sino como parte integral de su identidad colectiva. A través de las entrevistas, se examina cómo las narrativas personales y comunitarias revelan estrategias de resistencia y preservación cultural frente a las dinámicas de poder. Este análisis cualitativo proporciona una visión profunda de las formas en que las comunidades conciben y defienden su relación con el territorio en un contexto de desafíos tanto legales como culturales.

El Capítulo VII: *Las tensiones de sentido entre la justicia estatal y la cosmovisión territorial indígena,* presenta la interpretación y contextualización de los hallazgos obtenidos del análisis de sentencias judiciales y entrevistas. A través de la triangulación de fuentes, se identifican patrones y tensiones entre la visión formal del sistema judicial y las concepciones colectivas del territorio de las comunidades indígenas. Se evalúa la pertinencia de estos resultados en relación con las teorías nombradas previamente. Se discuten las similitudes y divergencias con investigaciones anteriores, permitiendo una evaluación profunda sobre cómo los hallazgos de esta investigación

se alinean o difieren de los marcos teóricos establecidos en torno a la justicia, el poder y la resistencia.

Finalmente, en la *Conclusión*, se integran las reflexiones parciales de los capítulos desarrollados, ofreciendo conclusiones generales sobre la interacción entre el sistema judicial y los derechos territoriales de las comunidades indígenas de Jujuy. Se destaca la tensión entre el marco legal formal y las realidades socioculturales de estas comunidades.

Introducción.

La investigación en los estudios sociales y el campo jurídico.

El análisis del campo jurídico dentro de los estudios sociales ha permitido la construcción de enfoques más complejos y dinámicos para comprender las normas y su interacción con las realidades sociales. Tradicionalmente, el derecho ha sido concebido como un conjunto de reglas inmutables y autónomas, independientes de las circunstancias sociales, políticas y económicas en las que se aplican. Esta visión estática y dogmática ha sido predominante en gran parte del siglo XIX y XX, particularmente bajo el positivismo jurídico, que postulaba que el derecho debía separarse de cualquier influencia moral o social para garantizar su objetividad y eficacia (Aboslaiman, 2013; Ferrater Mora, 1982; Follari, 2000; Hoekema, 2014; Reale, 1997).

Uno de los principales defensores de esta corriente Kelsen, (2011) argumentaba que el derecho debía ser entendido como un sistema cerrado, en el que las normas operan de manera autosuficiente y sin necesidad de referencia a consideraciones externas. Esta postura hacía del derecho un mecanismo técnico de regulación que, en esencia, desestimó las interacciones sociales que inevitablemente lo moldean (Kelsen, 2011). Sin embargo, esta visión comenzó a ser cuestionada a medida que los estudios sociojurídicos, desarrollados durante la segunda mitad del siglo XX, pusieron de relieve que el derecho no puede ser comprendido como un fenómeno independiente de las estructuras sociales y culturales que lo rodean (Aranzamendi, 2015; Nizama Valladolid y Nizama Chávez, 2020).

El derecho deja de ser visto como una entidad estática, se presenta entonces como una manifestación que interactúa constantemente con las dinámicas sociales, los conflictos políticos y los valores culturales de los grupos que regula. Este enfoque es especialmente relevante en contextos latinoamericanos, donde las realidades sociales son complejas y los sistemas jurídicos tradicionales muchas veces no logran abordar adecuadamente los problemas de desigualdad y justicia (Cano-Nava, 2011; Gargarella, 2013; Sousa Santos, 2014).

El cambio hacia un enfoque más contextual y dinámico del derecho ha sido facilitado por el desarrollo de teorías como el tridimensionalismo jurídico en los que Reale (1997), ofrece una alternativa al enfoque unidimensional del positivismo jurídico. Según Reale (1967, 1997) el derecho debe ser entendido desde tres dimensiones fundamentales: la norma, los hechos sociales y los valores. Estas tres dimensiones interactúan de manera constante y determinan cómo se crea, interpreta y aplica el derecho en una sociedad determinada. Al reconocer la influencia de los

valores y los hechos sociales en la norma jurídica, el tridimensionalismo permite una comprensión más integral del derecho, que no solo regula conductas, sino que también refleja y responde a las tensiones sociales y a los valores compartidos por una comunidad. Follari (2000) y Gadamer (2003) coinciden en que este enfoque multidimensional del derecho ofrece una visión más completa, en la que la norma no es simplemente una regla abstracta, sino una respuesta a las necesidades y valores sociales de un momento histórico particular.

En este contexto, la noción de experiencia jurídica ha sido transformada, ya no se trata de una simple proposición lógica de naturaleza ideal, sino de una realidad cultural y social donde los hechos y los valores están intrínsecamente vinculados. La norma jurídica, bajo esta concepción, surge como el resultado culminante de un proceso histórico-social en el que los hechos sociales y los valores de una comunidad se integran para dar forma a las reglas que rigen su convivencia. Esta visión, propuesta por Reale (1997), supera el enfoque lógico y dogmático del derecho, y permite una interpretación más rica y matizada, donde la norma jurídica no solo regula conductas, sino que también refleja los conflictos y consensos sociales que han dado forma a su creación. Como subrayan Aboslaiman (2013) y Witker (2015), esta integración de los valores y los hechos sociales en la interpretación del derecho permite superar la rigidez del positivismo, ofreciendo una visión más fluida y adaptable del sistema jurídico.

El concepto de implicación polar, desarrollado también por Reale (1967), es fundamental en esta reformulación de la experiencia jurídica. Esta idea sostiene que la relación entre el sujeto y el objeto del conocimiento es bidireccional, lo que significa que el derecho, como objeto de estudio, no puede ser comprendido de manera aislada, sino siempre en interacción con la subjetividad del observador. Esto implica que los juristas y estudiosos del derecho no pueden analizar las normas de manera aislada de las circunstancias sociales y políticas en las que se desarrollan y aplican. El derecho, en este sentido, no es una realidad estática, sino un fenómeno dinámico que se transforma y evoluciona a medida que interactúa con los hechos sociales y los valores que lo sustentan (Witker, 2015).

La metodología cualitativa ha sido clave en el desarrollo de estos enfoques más complejos y contextuales del derecho. A diferencia de los enfoques cuantitativos, que buscan generalizar los fenómenos jurídicos y medir su eficacia en términos numéricos, la investigación cualitativa permite una comprensión más profunda y detallada de cómo las normas jurídicas interactúan con las experiencias de los grupos sociales. Este enfoque ha sido especialmente valioso en el estudio de temas como los derechos humanos y los derechos indígenas, donde las normativas legales no solo regulan comportamientos, sino que también reflejan las dinámicas sociales, políticas y

culturales de las comunidades en las que se aplican (Aboslaiman, 2013; Nizama Valladolid y Nizama Chávez, 2020; Witker, 2015).

Aranzamendi (2008), destaca que uno de los grandes aportes de la epistemología jurídica es su capacidad para cruzar fronteras metodológicas y abordar problemas desde una perspectiva holística. En este sentido, la investigación cualitativa en el derecho permite construir categorías jurídicas que reflejan la complejidad de las relaciones sociales concretas (Méndez, et al., 2020).

Esta capacidad de la metodología cualitativa para adaptarse a la complejidad del campo jurídico es lo que la convierte en una herramienta indispensable para el análisis contemporáneo. En sociedades multiculturales como las de América Latina, donde los sistemas normativos estatales coexisten con normativas indígenas y comunitarias, el enfoque cualitativo resulta especialmente útil para analizar la interacción entre estas diferentes formas de regulación y los conflictos que emergen de ellas (Hoekema, 2014; Méndez, et al., 2020; Merry, 2003; Sousa Santos, 1997).

El pluralismo jurídico, pone de relieve esta coexistencia de normativas y subraya las tensiones que emergen cuando los sistemas normativos indígenas entran en conflicto con el derecho estatal. Según este enfoque, el derecho no debe ser entendido como un sistema hegemónico, sino como un campo en el que interactúan diversas realidades sociales y culturales. En el contexto latinoamericano, este pluralismo es particularmente relevante, ya que muchas comunidades indígenas siguen utilizando sus propias formas de regulación, a menudo en tensión con el derecho. Esta coexistencia de sistemas normativos genera una serie de desafíos que deben ser abordados desde una perspectiva pluralista y multidimensional (Ariza Higuera y Bonilla Maldonado, 2007).

Finalmente, desde una perspectiva crítica, autores como Habermas (1991) y Horkheimer (1998) han señalado que el derecho, lejos de ser un sistema neutral, a menudo opera en beneficio de los grupos dominantes, perpetuando desigualdades sociales y económicas. Para evitar que el derecho se convierta en un mecanismo de dominación, es esencial que esté en constante diálogo con las ciencias sociales, adoptando un enfoque interdisciplinario que permita comprender las complejidades de la sociedad y abogar por la justicia social. Esto es especialmente importante en el análisis de los derechos colectivos y los derechos humanos, donde las estructuras jurídicas tradicionales no siempre logran reconocer las necesidades específicas de los grupos más vulnerables (Kominek, 2007; Wolkmer, 2018).

La interdisciplinariedad, por tanto, se presenta como una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos que plantea la globalización, la pluralidad cultural y los derechos colectivos. Según Sánchez Zorrilla (2011) las metodologías jurídicas que integran enfoques de diversas disciplinas

permiten evidenciar el impacto del derecho en la vida social, proporcionando una visión más completa y eficaz del derecho en sociedades multiculturales.

Los objetivos de la investigación.

Históricamente arraigadas en su territorio, las comunidades aborígenes han enfrentado desafíos legales y culturales en la protección de sus tierras contra usurpaciones y disputas con actores externos. La intervención judicial ha sido un recurso clave en la búsqueda de soluciones a estos conflictos. Sin embargo, la aplicación de marcos legales estatales ha chocado con los derechos ancestrales y culturales de estas comunidades, generando tensiones y divisiones internas (Abramovich y Curtis, 2002; Anaya, 2005; Barabas, 2004; Zimerman 2015).

El propósito de esta tesis es entender la problemática jurídica que enfrentan las comunidades indígenas en relación con la tierra y la propiedad comunitaria en la provincia de Jujuy, mediante el análisis del tratamiento judicial de la cuestión indígena. Durante el proceso de esta investigación, se documenta la problemática territorial de los pueblos indígenas de la provincia de Jujuy y el modo en que los jueces abordan cada caso que involucra sus tierras y derechos.

En el campo de las Ciencias Sociales, el estudio de las comunidades indígenas y sus derechos territoriales en la provincia de Jujuy adquiere una relevancia significativa, esta investigación no solo permite entender las dinámicas de exclusión y resistencia que estas comunidades han enfrentado históricamente, sino que también proporciona una visión crítica sobre cómo las leyes pueden perpetuar o desafiar estas dinámicas.

En un contexto global donde las identidades culturales y los derechos indígenas están en constante discusión, este estudio se posiciona como una herramienta para analizar la intersección entre derecho, cultura y poder.

Además, la implementación del nuevo Código Civil y Comercial en 2015 en Argentina ofrece un contexto único para examinar cómo los cambios legales pueden impactar directamente en la vida de las comunidades indígenas.

Este estudio es fundamental para documentar y analizar estos procesos, destacando la necesidad de desarrollar políticas que sean verdaderamente inclusivas y equitativas. Al abordar estos temas, la investigación no solo contribuye al conocimiento académico, sino que también proporciona

información valiosa de las comunidades, promoviendo un entendimiento más integral y equilibrado.

En consecuencia, es posible que, a pesar de la existencia de un marco normativo destinado a proteger la propiedad comunitaria indígena, su implementación y efectividad sea limitada, pudiendo, las leyes actuales ser insuficientes para garantizar los derechos de las comunidades indígenas sobre sus tierras.

Un aspecto documentado y analizado, es cómo las comunidades manifiestan su resistencia a través de su permanencia en el territorio que consideran propio. Esta permanencia trasciende el mero hecho de estar allí; se convierte en una energía que nace y se mantiene. Las lógicas y dinámicas internas de estas comunidades respaldan esta permanencia, ofreciendo nuevas formas de mirar y entender el mundo. De esta manera, desafían las concepciones y categorías fijas con las que incluso la justicia ha intentado comprender estos fenómenos (Agredo Cardona, 2006; Feierstein, 2007; Grimson y Karasik, 2017; Lenton, 2014; Mandrini, 2008; Parolo, 2007; Yankilevich, 2016).

Las resoluciones judiciales sobre conflictos territoriales proporcionan cierta estabilidad y seguridad territorial, sin embargo, han impactado significativamente en la dinámica demográfica de las comunidades, ya que la adjudicación de tierras ha producido cambios en su distribución y densidad de población, así como en las relaciones sociales dentro de las comunidades (Briones 2002, 2005; Grimson y Karasik, 2017).

Propongo entonces, como objetivo general analizar el desarrollo de los términos y tratamientos jurídicos utilizados por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ante las demandas territoriales de las comunidades indígenas, y las tensiones de sentido que resultan de los fallos judiciales dictados en la provincia de Jujuy, durante los años 2015 al 2023.

Para dicho fin, prestaré especial atención a los siguientes objetivos específicos:

1. Indagar los principales antecedentes de reclamos por la propiedad de la tierra presentados por las comunidades indígenas en Jujuy.
2. Reconocer los determinantes causales de los conflictos y enfrentamientos que dieron origen a las acciones legales.
3. Analizar críticamente las interpretaciones y argumentos de los jueces, ante cada demanda y conflicto comunitario y el tratamiento de la propiedad de la tierra en cada sentencia.

El aporte de esta investigación radica en su capacidad para proporcionar una comprensión integral de los conflictos territoriales en Jujuy, articulando los aspectos legales con las experiencias vividas por las comunidades indígenas. Esta dualidad de perspectivas enriquece la discusión sobre la eficacia y las limitaciones del marco legal actual, y sugiere caminos para futuras políticas y reformas legales.

Además, al documentar y analizar estos encuentros desde una perspectiva cualitativa y empírica, la tesis contribuirá significativamente al conocimiento académico y práctico sobre los derechos indígenas y la gestión de conflictos territoriales. Este enfoque ofrece información valiosa para legisladores, académicos y las propias comunidades, ayudando a desarrollar estrategias más efectivas y equitativas en la promoción y protección de los derechos indígenas.

Justificación.

Este estudio permite comprender las implicaciones jurídicas, sociales, políticas y culturales de los conflictos por la tierra, en la provincia de Jujuy, permitiendo explorar eventualmente soluciones más integrales y justas que respeten los derechos de las comunidades indígenas.

Su enfoque de examen profundo y detallado de las interpretaciones judiciales, los procesos de dominación legal y las percepciones de las comunidades, ofrecen una visión completa de los desafíos que enfrentan estas últimas en su lucha por la tierra y la justicia. Identificar y analizar estos obstáculos es crucial para promover la igualdad de oportunidades y la equidad en el ejercicio de los derechos y la justicia.

Las comunidades indígenas, históricamente han sufrido despojo y usurpación de sus tierras, lo que ha llevado a situaciones graves de expropiación y explotación de recursos sin su consentimiento, esta tesis busca arrojar luz sobre cómo el sistema judicial ha tratado estas cuestiones en la provincia de Jujuy, especialmente en el período de 2015 a 2023, al visibilizar las interpretaciones y decisiones judiciales respecto a las demandas de estas comunidades, se pretende subrayar la importancia de los derechos territoriales en las comunidades.

Desde una perspectiva profesional del Derecho, esta investigación es valiosa para formar profesionales más competentes y sensibles a las experiencias y perspectivas de las comunidades aborígenes. La comprensión crítica de cómo se han manejado los conflictos territoriales en las sentencias judiciales permitirá a los profesionales del derecho desarrollar un mayor respeto y comprensión de la cultura, tradiciones y derechos de estas comunidades.

Antecedentes.

La problemática indígena/tierras/territorio ha suscitado polémica desde hace mucho tiempo, sobre todo en el ámbito social y legal. Esto ha generado que muchos académicos se hayan interesado por distintos aspectos y que se observen de los más variados antecedentes relacionados a esta temática.

Entre las contribuciones más destacadas en el estudio de la política indigenista argentina, se encuentra la tesis de Lenton (2014) titulada "De centauros a protegidos. La construcción del sujeto de la política indigenista argentina desde los debates parlamentarios (1880 – 1970)", se analiza la evolución de la figura del indígena en la política argentina, desde su representación como "centauros" o "salvajes" que debían ser asimilados y civilizados, hasta un enfoque más inclusivo que reconoce y protege sus derechos y diversidad cultural. Esta transformación no solo refleja cambios en las políticas indigenistas, sino también una evolución en la percepción social y política de los pueblos indígenas en Argentina. A lo largo del período estudiado, las políticas hacia los pueblos indígenas experimentaron un cambio significativo, inicialmente, en el marco de la modernización capitalista, se promovía la asimilación de los indígenas mediante la educación y la civilización forzada, sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XX, comenzó a reconocerse legalmente algunos derechos fundamentales, como la propiedad de tierras ancestrales y el respeto a la identidad cultural. Este reconocimiento fue resultado de una creciente presión social y política que demandaba una mayor inclusión y respeto hacia las comunidades indígenas.

En su análisis, desde el campo antropológico también introduce la noción de la matriz territorio-nación-estado, que se relaciona con la triangulación territorialización-temporalización-identidad. Esta matriz opera en la constitución de sentidos y sentimientos de pertenencia, sosteniendo que es inseparable de una matriz discursiva que la constituye, la que, a su vez, es constituida por ella. Este enfoque permite entender cómo las políticas territoriales y las representaciones temporales e identitarias han moldeado las interacciones entre el estado y las comunidades indígenas.

En su tesis Lenton (2014) realiza un exhaustivo análisis de fuentes documentales, principalmente debates parlamentarios, para trazar la evolución de la política indigenista argentina, explorando las interrelaciones entre territorio, nación y estado, y cómo estas han influido en la identidad y la organización social de las comunidades indígenas. Los efectos de estas interacciones son múltiples, incluyendo el despojo de tierras, la marginalización social y la lucha constante por el reconocimiento y la justicia.

Uno de los hallazgos más importantes de su trabajo, es la identificación de un cambio gradual pero significativo en las representaciones parlamentarias de los indígenas, en las primeras décadas del siglo XX, los debates reflejan una visión predominantemente paternalista y civilizadora. Sin embargo, con el tiempo, se observa una creciente sensibilidad hacia los derechos indígenas y una mayor disposición a reconocer su autonomía y sus contribuciones culturales. Este cambio se debe, en parte, a la influencia de movimientos indígenas y de derechos humanos a nivel internacional (Lenton, 2014). A pesar de estos avances, la autora señala que todavía queda mucho trabajo por hacer para garantizar la plena igualdad y participación de los indígenas en la sociedad argentina. Las políticas indigenistas han sido, en muchas ocasiones, insuficientes o mal implementadas, dejando a las comunidades en una situación de vulnerabilidad. La recuperación de tierras ancestrales no solo es un acto de justicia histórica, sino también un elemento central en la revitalización de las culturas indígenas sostiene y argumenta que el reconocimiento legal de estas tierras debe ir acompañado de políticas de apoyo que fortalezcan las capacidades económicas y sociales de las comunidades (Lenton,2014).

En “Etnicidad, historicidad y complejidad. Del Colonialismo al Indigenismo y al Estado pluricultural en México”, Bartolomé (2017) realiza un análisis profundo de la transición del colonialismo al indigenismo y finalmente al Estado pluricultural en México, desde un enfoque interdisciplinario que integra perspectivas históricas, antropológicas y sociológicas para comprender las dinámicas que han dado forma a la identidad étnica y a la diversidad cultural del país.

En su trabajo destaca, cómo el periodo colonial impuso una serie de cambios lingüísticos, religiosos y territoriales que han tenido repercusiones duraderas en las comunidades indígenas. La imposición del castellano y la religión católica, junto con el despojo de tierras, no solo alteraron las estructuras sociales y culturales indígenas, sino que también afectaron profundamente su sentido de pertenencia e identidad. Este proceso de colonización, según el autor, creó una realidad compleja y multifacética que no puede ser reducida a una sola narrativa o a un momento cronológico específico.

El análisis de Bartolomé (2017) explora cómo las comunidades indígenas han resistido y adaptado a las políticas indigenistas que buscaban su asimilación y desaparición. Esto, no solo les ha permitido la supervivencia de su cultura, sino también ha contribuido a la formación de un Estado pluricultural que reconoce la diversidad étnica como un valor fundamental, ello es sostenido sobre la relación entre el territorio, la historicidad y la identidad, ya que la recuperación de tierras

ancestrales y el reconocimiento de los derechos territoriales son esenciales para la revitalización de las culturas indígenas. Afirma, que estos avances deben ser acompañados por políticas públicas que promuevan el desarrollo sostenible y el bienestar económico de las comunidades indígenas, evitando la perpetuación de la pobreza y la exclusión social.

En su discusión sobre el indigenismo, Bartolomé (2017) critica las políticas paternalistas y asimilacionistas que dominaron gran parte del siglo XX, ya que buscaban integrar a los indígenas en la sociedad nacional a costa de su identidad cultural y autonomía. A partir de la década de 1970, comienza a surgir un nuevo enfoque que promueve la participación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones y el respeto por su diversidad cultural. La influencia de movimientos internacionales de derechos humanos y de pueblos indígenas en la reconfiguración de las políticas estatales en México, ha sido fundamental para avanzar en el reconocimiento de los derechos colectivos y la autodeterminación de los pueblos indígenas, no obstante, el autor advierte que la retórica estatal sobre el pluralismo cultural a menudo no se traduce en acciones concretas y efectivas.

El trabajo de Magallanes (2019), "Políticas públicas, agencia judicial y derechos indígenas: aportes para una comprensión de los conflictos territoriales en el sur mendocino (Argentina)", se enfoca en los conflictos territoriales que afectan a las comunidades indígenas de Mendoza, Argentina. A través de un enfoque etnográfico, explora dos dimensiones principales: las políticas públicas que regulan el acceso a la tierra y las incongruencias entre titularidad y posesiones familiares o comunitarias, con las jerarquías preexistentes entre diversas concepciones de legalidad, territorio y cultura en los espacios gubernamentales y judiciales.

En su análisis, identifica cómo las políticas públicas perpetúan desigualdades al regular el acceso a la tierra a partir de privilegiar la propiedad privada por sobre las posesiones comunitarias, creando un conflicto constante entre las comunidades y el estado. Señala, también que ese contexto se ve agravado por las jerarquías que existen en los espacios judiciales y gubernamentales, donde las interpretaciones hegemónicas de legalidad y cultura a menudo deslegitiman las reclamaciones de las comunidades indígenas.

Su estudio destaca que el reconocimiento de los derechos territoriales es una forma crucial de existencia pública para sectores históricamente excluidos y que la legalización de estos derechos en pleitos judiciales no solo fortalece la visibilización de identidades y prácticas indígenas, sino que también influye en la formación de políticas públicas y en la interpretación de expertos y

discursos sociales. Sostiene, que los conflictos territoriales, más allá de ser simples disputas por la tierra, representan escenarios donde se redefinen las identidades colectivas y se construyen nuevas subjetividades políticas (Magallenes, 2019)

Desde el campo de la antropología jurídica, Yankillevich, (2019a) "El lado ilegítimo de la legalidad: Análisis antropológico del proceso de (re)construcción jurídica de los derechos de los pueblos indígenas en la provincia de Jujuy (1983-2003)", explora cómo la estructura jurídica provincial estuvo influenciada por el retorno a la democracia y el avance del neoliberalismo, y cómo esto se reflejó en los proyectos de ley que afectaron a las comunidades indígenas. La base de datos obtenida en 1983 y 1989 de la Legislatura de Jujuy, consistente en proyectos de ley emitidos por un sector de la sociedad con una ideología específica, permite visibilizar las creencias, intereses, principios y pautas fundamentales que inspiran, vertebran y movilizan a toda norma sancionada desde el Estado y cómo estos proyectos reflejan una estructura jurídica que busca categorizar y objetivar las identidades indígenas, dentro del contexto más amplio del desarrollo económico y las políticas neoliberales de la época.

El estudio (Yankillevich, 2019a) refiere que se llevaron a cabo iniciativas legales significativas, como la creación del Instituto Jujeño de Colonización y la sanción de la ley N° 23.302 a nivel nacional, que reconoce la personería jurídica de las comunidades indígenas, con las que se pretendía redefinir el estatus jurídico de las comunidades indígenas y establecer nuevas formas de relación entre el Estado y estas poblaciones, reflejando los cambios políticos y económicos de la época, ya que estos proyectos de ley no solo buscaban integrar a las comunidades indígenas en el marco legal existente, sino que también intentaban regular y controlar sus territorios y recursos.

El enfoque metodológico de Yankillevich, (2019a) incluye un análisis crítico de los discursos parlamentarios y la consideración del derecho como un proceso sociocultural, sostiene que el estudio de la estructura legislativa permite rastrear las raíces ideológicas de las normas y comprender los conflictos y tensiones en la (re)construcción de las identificaciones étnicas. Este análisis revela cómo el Estado provincial intentó categorizar y objetivar las identidades indígenas a través de la legalidad, mientras que las comunidades indígenas luchaban por el reconocimiento y garantía de sus derechos. Su análisis, destaca las contradicciones y tensiones que existen entre el indígena legislado y el verdaderamente validado por el gobierno de la provincia de Jujuy. La autora explora cómo las leyes y políticas de la época intentaron definir y controlar las identidades indígenas, pero también cómo estas comunidades resistieron y negociaron su reconocimiento y

derechos, enfoque que permite una comprensión más matizada de las dinámicas de poder y la interacción entre el Estado y las comunidades indígenas.

Dentro del campo de la antropología social y cultural, Lager (2022) en su tesis "Autonomía y resistencia de las comunas étnicas de la costa del Ecuador. El modo de vida comunitario: ¿una propuesta decolonial?" examina cómo las comunas Montañita, Olón y Libertador Bolívar en la provincia de Santa Elena han preservado su autonomía y resistencia frente a las influencias hegemónicas desde la época colonial hasta la actualidad. La autora se enfoca en cómo estas comunidades, inicialmente agroganaderas, se han transformado en destinos turísticos que atraen a visitantes nacionales e internacionales. Su trabajo busca entender los mecanismos que las comunas utilizan para garantizar su supervivencia y autonomía en un contexto de crecientes dependencias económicas y presiones externas.

El estudio detalla la evolución histórica de estas comunas, destacando cómo durante el siglo XX, especialmente con la expansión del turismo en los años 90, las comunidades enfrentaron la privatización y el fraccionamiento de sus tierras. La llegada de turistas y la venta de tierras a extranjeros y empresarios transformaron las estructuras comunales, generando tensiones entre la preservación de valores comunitarios y la adaptación a nuevas realidades económicas. Se utiliza un enfoque etnográfico, de entrevistas semiestructuradas, observación participante y análisis de documentos oficiales, quien combina su experiencia personal y profesional para ofrecer una visión profunda y matizada de las dinámicas internas de estas comunas. Su investigación incluye etnografías virtuales realizadas durante la pandemia de Covid-19, destacando las estrategias de las comunidades para enfrentar la crisis y mantener su cohesión social.

El turismo, aunque una fuente importante de ingresos ha traído nuevos desafíos, como la creación de dependencias y conflictos territoriales. La tesis documenta cómo las comunas han manejado estas tensiones mediante alianzas sociales y políticas, negociando con actores externos para mantener su autonomía y proteger sus territorios mostrando una compleja interacción entre resistencia y adaptación. Lager aporta una comprensión más profunda de cómo las comunas actúan como actores decoloniales, reconfigurando sus identidades y estructuras frente a las influencias globales y hegemónicas.

En el campo de la Ciencia Política, Pragier (2021) en su trabajo “Los pueblos indígenas frente a la explotación del litio en el norte argentino: comunidades similares, respuestas distintas", aborda las distintas respuestas de las comunidades indígenas de la Puna argentina ante la explotación de

litio. La investigación se centra en las comunidades de Salinas Grandes y de Olaroz, situadas en Jujuy y Salta, con el objetivo de comprender por qué comunidades cercanas y con características culturales e institucionales similares responden de manera distinta ante los proyectos mineros.

Se plantea Pragier (2021) que las respuestas de aceptación o rechazo por parte de las comunidades dependen de los marcos interpretativos que estas construyen en relación con los proyectos mineros. Estos marcos están influenciados por los procesos de reivindicación indígena (PCRI) de cada comunidad, los PCRI pueden ser tempranos o tardíos, y esta diferencia temporal afecta la manera en que las comunidades perciben y responden a los proyectos, ya sea con un enfoque compensatorio o autonomista.

La metodología empleada en la investigación combina un análisis profundo de cada caso y una comparación entre ellos. Se utiliza la técnica de rastreo de procesos para identificar las causas y efectos de los diferentes PCRI y sus respectivos marcos interpretativos. La investigación se apoya en entrevistas detalladas, observaciones directas y el análisis de documentos y normativas, lo que permite una comprensión exhaustiva de las dinámicas en juego.

El estudio de los casos de Susques y Salinas Grandes muestra diferencias significativas en sus respuestas, ya que las comunidades de Susques adoptaron un enfoque compensatorio, lo que llevó a aceptar los proyectos mineros después de negociaciones con las empresas. En contraste, las comunidades de Salinas Grandes adoptaron un enfoque autonomista, rechazando los proyectos y demandando autonomía y consultas previas informadas. Su análisis revela, que los procesos históricos de reivindicación de derechos son cruciales para entender los marcos interpretativos de las comunidades Este enfoque demuestra cómo las experiencias y trayectorias históricas influyen en las percepciones y respuestas de las comunidades.

Dentro del campo de la antropología Barbetta (2019) en su publicación “Conflictos por la propiedad de la tierra en la provincia de Chaco, Argentina: Contribuciones a una agenda de investigación” aborda los conflictos por la propiedad de la tierra en la provincia del Chaco, Argentina, en el contexto de la consolidación del modelo del agronegocio. Este modelo ha llevado a una mayor concentración de tierras, lo que ha profundizado los procesos de exclusión y expulsión de familias rurales. Además, ha incrementado la conflictividad en torno a la propiedad de la tierra y el uso de recursos naturales en áreas rurales, donde los campesinos e indígenas reivindican sus modos de vida y su derecho a la tierra y al territorio.

La propuesta de su trabajo es analizar y comprender estos conflictos desde una perspectiva judicial, utilizando una metáfora geométrica de la pirámide de litigio. Esto implica que, una vez desencadenado un conflicto, el ámbito en que se manifiesta puede variar enormemente según los objetivos y mecanismos disponibles para los litigantes. Su enfoque se centra en los litigios que se desarrollan en el ámbito judicial, ya que, en una tradición democrática, es allí donde se determina lo justo y lo injusto. Se realiza a través de un relevamiento de litigios judiciales a partir de la consulta en línea de expedientes, en las seis circunscripciones judiciales de la provincia de Chaco. El estudio se enfoca en materias relacionadas con la disputa por la propiedad o posesión de la tierra, como la prescripción adquisitiva, los desalojos, las reivindicaciones y los interdictos. Estos casos revelan la ocupación de tierras como una forma de acceso para pequeños productores y campesinos, destacando la resistencia inherente a la formación del campesinado dentro del desarrollo capitalista.

Su trabajo identifica tres configuraciones principales de litigios en tierras privadas, la primera configuración incluye la regularización de posesiones a través de la prescripción adquisitiva veinteñal, donde la ocupación de la tierra data de generaciones atrás, la segunda configuración refiere a la existencia de un mercado de tierras dinámico, donde se compran y venden derechos posesorios y mejoras, la tercera configuración aborda la clásica disputa entre pequeños productores/campesinos y empresarios agropecuarios, con litigios que incluyen acciones reivindicativas, desalojos e interdictos. En cuanto a los litigios sobre tierras fiscales, el poder judicial ha jugado roles variados. Por un lado, ha protegido el patrimonio provincial frente a la mercantilización de la tierra pública y, por otro, administra justicia ante problemas derivados del manejo de la tierra fiscal por parte del Instituto de Colonización, resaltando que las irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales han sido significativas, involucrando la venta de tierras a precios irrisorios a personas y empresas cercanas al poder político, lo que ha acrecentado la conflictividad.

Finalmente, su trabajo resalta la importancia de analizar la función política de los jueces en los litigios por la tierra, no sólo en términos de control social, sino también en la afirmación de derechos, sugiere futuras agendas de investigación que aborden el acceso a la justicia para pequeños productores y la problemática de la entrega y fiscalización de la tierra pública como un posible crimen estatal-corporativo (Barbetta, 2019).

La investigación de Pérez Castellón (2013), desde un análisis jurídico ambiental en "Justicia Constitucional en Bolivia: Desafíos y oportunidades para la tutela de los derechos de los pueblos

indígenas en conflictos socioambientales", aborda la efectividad de la justicia constitucional en la protección de los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia, especialmente en el contexto de conflictos socioambientales.

En su análisis, explica cómo las organizaciones indígenas, ante la debilidad institucional del Estado, han recurrido a acciones directas para reivindicar sus derechos, sostiene que esta estrategia refleja una falta de confianza en la capacidad del sistema judicial para proteger sus intereses, lo que se ve exacerbado por una justicia constitucional que, en su fase inicial, no logró proporcionar una protección efectiva. La investigación revisa el funcionamiento y las limitaciones del Tribunal Constitucional durante este período, subrayando la necesidad de reformas para mejorar su desempeño. También examina las oportunidades que presenta la nueva justicia constitucional plurinacional, establecida en la Constitución de 2009, para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, esta nueva estructura constitucional busca abordar las deficiencias del pasado y ofrece mecanismos potencialmente más robustos para la protección de los derechos indígenas, el autor argumenta que esta transición ofrece una oportunidad significativa para redefinir el papel de la justicia constitucional en Bolivia, haciendo hincapié en la necesidad de un mayor compromiso del Estado y de la sociedad civil en la supervisión y el apoyo a la justicia constitucional.

Su estudio detalla también, cómo los conflictos socio-ambientales en Bolivia están intrínsecamente ligados al modelo de desarrollo extractivista del país, que ha llevado a frecuentes enfrentamientos entre las comunidades indígenas y las empresas extractivas, debidos a la falta de implementación efectiva de los derechos reconocidos y señala que el Estado, por acción u omisión, a menudo incumple su rol de garante de derechos, y las asimetrías de poder y recursos entre las empresas y las organizaciones indígenas complican aún más la situación. La tesis concluye que sólo a través de un esfuerzo concertado y sostenido se podrán garantizar los derechos de los pueblos indígenas y resolver de manera justa y equitativa los conflictos socio ambientales en Bolivia.

Parte I: Enfoque-Antropológico y Jurídico

Capítulo I. Marco metodológico y territorial en Jujuy.

Lo indígena en la provincia de Jujuy.

En el siglo XVIII, la economía de Jujuy se centraba en la cría de llamas, ganado ovino y vacuno, así como en la elaboración de productos derivados y la invernada de mulas destinadas a centros mineros y urbanos en la región de Charcas, hoy parte de Bolivia. Con la creación de la república, se produjeron cambios legislativos que afectaron a los pueblos que habitaban originariamente la región. En términos declarativos, los indígenas fueron reconocidos como ciudadanos iguales, sin embargo, a medida que el Estado se consolidaba, quienes no estaban sometidos, eran vistos como un obstáculo para ocupar las tierras (García Moritán y Ventura, 2007).

Hacia finales del siglo XIX, Argentina experimentó una transformación demográfica por la llegada masiva de inmigrantes europeos. En este contexto, los indígenas eran percibidos como un símbolo de atraso y un problema para la formación del Estado-nación (Lagos y Gutiérrez, 2006) observándose un cambio en el discurso oficial ántes y después de la Campaña del Desierto, pasando de una postura de exterminio a una de integración, que buscaba incorporar a los indígenas a la vida civilizada. En este proceso, algunos grupos indígenas fueron asignados a trabajos en la agroindustria azucarera del noroeste, la minería en la Puna, el ejército y labores domésticas o de peonaje (García Moritán y Ventura, 2007).

En 1992, se creó en Jujuy el primer Registro de Comunidades Aborígenes, otorgando personerías jurídicas bajo la normativa reguladora de las asociaciones civiles. Hasta ese momento, se negaba la existencia de una población indígena significativa en la provincia. En 1997, el gobierno provincial firmó un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para la organización definitiva del Registro Provincial de Comunidades Aborígenes, que actualmente opera bajo la Secretaría de Derechos Humanos. Las personerías jurídicas otorgadas por este registro tienen validez nacional y están inscritas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI). Además, las comunidades con personería jurídica nacional también están incorporadas al registro provincial (García Moritán y Ventura, 2007).

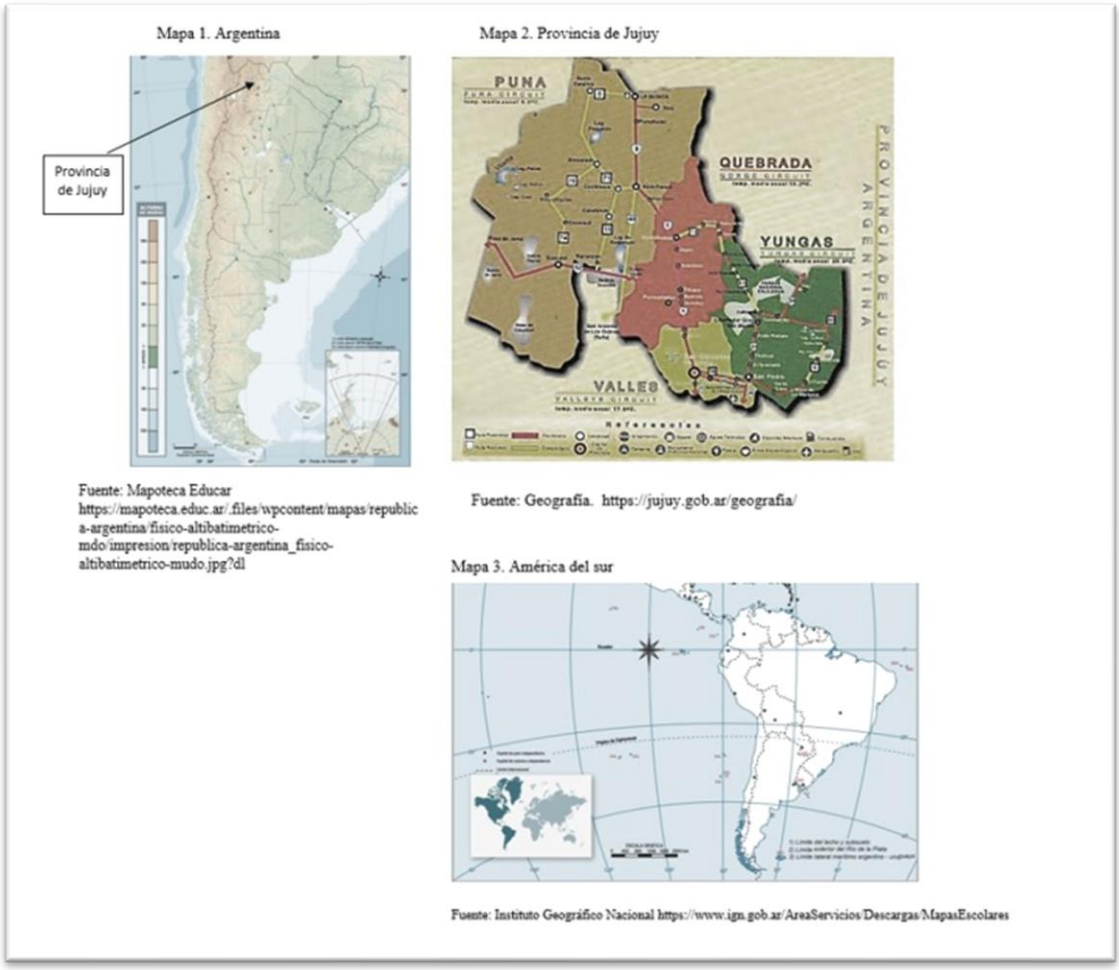
El informe técnico elaborado por el Ministerio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de la provincia de Jujuy (2023) presentó un análisis exhaustivo sobre el reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas en la región. En este se destaca que Jujuy es una de las provincias con mayor proporción de población indígena de

Argentina, superando significativamente el promedio nacional. Según el censo de 2010, la población indígena en Jujuy representa más del triple del promedio nacional del 2.4% (Ministerio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, 2023).

Recorte poblacional.

El universo de esta investigación se sitúa en la provincia de Jujuy. La misma se encuentra dentro del sistema andino sudamericano, con una geografía que se escalona de oeste a este, desde la Cordillera de los Andes, pasando por el Altiplano, la Quebrada y los Valles, como puede observarse en la Figura 1. Esta división geográfica da lugar a cuatro regiones bien diferenciadas por su relieve, clima, biomas y actividades económicas, influenciadas por la instalación humana desde tiempos prehistóricos hasta la actualidad (Gobierno de Jujuy, 2024).

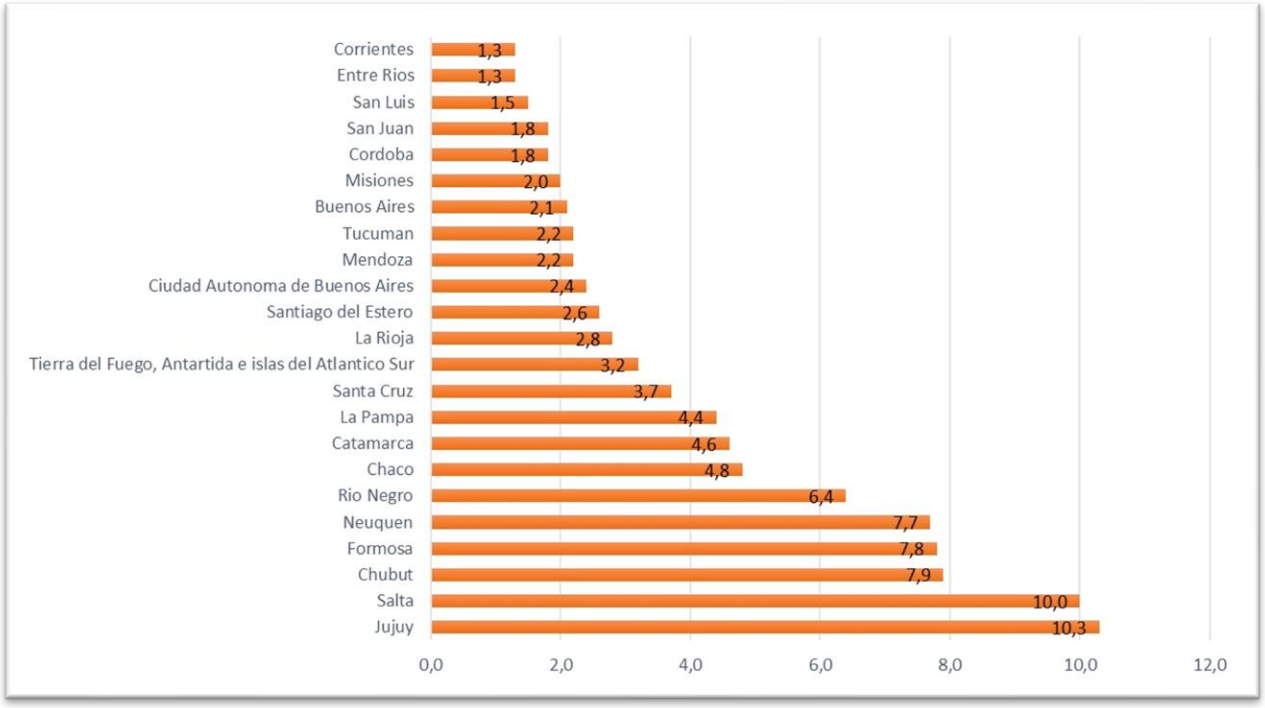
Figura 1. Ubicación geopolítica de la provincia de Jujuy.



Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a su población, durante el Censo 2022 en Argentina, el Instituto Nacional de Estadística y Censos [INDEC] (2022) incluyó una pregunta sobre el nombre del pueblo indígena u originario con el que la persona se identifica, así como si habla o entiende su lengua. De esos datos, surge que Jujuy, con un 10,1%, es la provincia con mayor proporción de población indígena en el país. Le siguen Salta con un 10% y Chubut con un 7,9%. En el otro extremo, Corrientes y Entre Ríos presentan solo un 1,3% de población indígena, como se observa en la Figura 2.

Figura 2. Porcentaje de la población en viviendas particulares que se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarias, por jurisdicción. Año 2022.



Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Resultados definitivos.

En el mismo censo, se contabilizaron 45.618.787 personas en total, de las cuales 1.306.730 se reconocen indígenas o descendientes de pueblos originarios, representando el 2,9% de la población, un aumento respecto al 2,4% registrado en el Censo 2010. De estos, 674.455 son mujeres y 632.275 son varones. A mediados de 2024, se publicaron los resultados definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2022 donde se identificaron 58 pueblos indígenas u originarios en todo el país y el 29,3% de esta población habla o entiende la lengua de su pueblo.

En Jujuy, la población total es de 809.364 habitantes, de los cuales 81.538 se reconocen como indígenas. En cuanto a la distribución por departamentos, en Cochinoca, de 14.998 habitantes, 8.098 se identifican como indígenas; en Dr. Manuel Belgrano, de 319.469 habitantes, 21.417 se reconocen como indígenas; en El Carmen, de 122.259 habitantes, 3.876 son indígenas; en Humahuaca, de 20.877 habitantes, 8.774 son indígenas; en Ledesma, de 94.132 habitantes, 6.845 son indígenas; y en Palpalá, de 65.522 habitantes, 4.464 se reconocen como indígenas.

En Rinconada, de 1.797 habitantes, 1.240 se identifican como indígenas; en San Antonio, de 6.729 habitantes, 309 son descendientes indígenas; en San Pedro, de 88.237 habitantes, 3.779 son indígenas; en Santa Bárbara, de 20.497 habitantes, 2.111 son indígenas; en Santa Catalina, de 2.641 habitantes, 1.615 son indígenas; en Susques, de 3.966 habitantes, 3.223 son indígenas; y en Tilcara, de 14.621 habitantes, 4.510 son indígenas.

En Tumbaya, de 5.298 habitantes, 2.700 se reconocen como indígenas; en Valle Grande, de 2.490 habitantes, 1.185 son indígenas; y en Yavi, de 25.831 habitantes, 7.392 son indígenas.

La provincia de Jujuy ocupa el primer lugar en la distribución del pueblo Kolla con un 46,7%, seguido por Salta con un 31,4% y Buenos Aires con un 9,2%. En cuanto al pueblo guaraní, Jujuy está en sexto lugar con un 5,6%, detrás de Buenos Aires (36,9%), Salta (26,2%), CABA (7%), Misiones (6,2%) y Corrientes (6,1%). Y también se encuentra en la distribución del pueblo Diaguita con un 1,9% (octavo lugar), del pueblo Mapuche con un 0,01% (décimo octavo lugar) y del pueblo Toba con un 0,2% (décimo sexto lugar).

Las regiones de Jujuy.

La provincia de Jujuy se divide en cuatro regiones eco geográficas; la Puna, la Quebrada de Humahuaca, los Valles y las Yungas. Se presenta una breve descripción de cada una de las regiones, resaltando sus particularidades y la influencia que han tenido en la vida social y económica de la provincia.

a) Puna

La región Puna abarca los departamentos de Yavi, Santa Catalina, Rinconada, Cochinoca, Susques y una parte del departamento Humahuaca. Aunque existe una delimitación política y una caracterización fitogeográfica, la Puna se percibe como una unidad sociocultural. Sin embargo, esta percepción no implica negar las diferencias internas. Antes de la llegada de los españoles, la Puna estaba habitada por diversos grupos. En la cuenca de Miraflores-Guayatayoc vivían los

Casabindo y los Cochinoca. En la cuenca del Río Grande de San Juan (al norte) se encontraban los Chicha, dedicados a actividades pastoriles y agrícolas. Hacia el oeste, se ubicaban los Atacama, originarios de los oasis de San Pedro y Loa Superior, predominantemente pastores. Al sur, cerca de la Quebrada de Humahuaca, vivían los Omaguaca (García Moritán y Ventura, 2007).

Durante el período colonial, la encomienda fue la forma más común de organización laboral. En Jujuy, la población de Casabindo y Cochinoca fue encomendada, entre otros, al Marqués del Valle de Tojo. La legislación colonial les otorgaba el derecho sobre sus tierras comunales, derecho que fue desconocido después de la independencia. Los descendientes del marqués reclamaron esas tierras y comenzaron a cobrar arriendo. Desde inicios de la década de 1870, las tensiones entre los campesinos indígenas de Casabindo y Cochinoca y algunas élites derivaron en un conflicto que culminó en una revuelta contra los terratenientes y el estado provincial. Después de varias batallas, entre 1872 y 1875, los indígenas fueron derrotados en la batalla de Quera, cuyo principal objetivo era la recuperación de la tierra (García Moritán y Ventura, 2007).

b) Quebrada

La Quebrada está formada por los departamentos de Tumbaya, Tilcara y Humahuaca, aunque sus territorios exceden lo que se define como Quebrada. En estos departamentos se hallaron los vestigios humanos más antiguos de la provincia, con comunidades originarias de más de 10.000 años de antigüedad, como en Inca Cueva y Huachichocana. Hacia el 2500 a. C., la Quebrada fue ocupada por grupos con características sociales, económicas y tecnológicas diferentes, posiblemente provenientes de las tierras bajas, cuya vinculación con la zona oriental queda reflejada en el tipo de materiales recuperados (García Moritán y Ventura, 2007).

La formación de aldeas en la Quebrada se fue consolidando y hacia el 700 d. C. ya estaban establecidas en muchos sectores de la cuenca del río Grande. Desde el Angosto del Perchel hacia el norte vivían los Omaguaca, subdivididos en Omaguaca y Uquía, mientras que los Tilcara ocupaban el área desde el Angosto hasta Hornillos. En Purmamarca vivían los Purmamarca y más al sur en Volcán los Tilián. Los Ocloya y los Osa habitaban hacia los valles y dependían de los caciques de Humahuaca y Tilcara, respectivamente.

Después del levantamiento de Viltipoco en 1594, los Tilián fueron trasladados al valle de Salta, y los Ocloya, Paypaya y Osa fueron llevados al valle de Jujuy. Los indígenas de la Quebrada fueron concentrados en pueblos de indios, manteniendo su identidad hasta mediados del siglo XIX. Eran principalmente agricultores, conocían técnicas de irrigación y cultivo en terrazas, y practicaban la

alfarería, la metalurgia y la textilería. También tenían un culto a los muertos elaborado y realizaban deformaciones craneanas asociadas a rituales. Durante las guerras de independencia, la Quebrada mantuvo su rol de vía de comunicación y fue escenario de batallas, manteniendo su vínculo comercial con Bolivia (García Moritán y Ventura, 2007).

c) Ramal

El Ramal incluye los departamentos de Ledesma, San Pedro, Santa Bárbara y Valle Grande. En esta región, el Complejo San Francisco fue una tradición cultural ampliamente difundida entre el 700 a. C. y el 300 d. C. El sitio arqueológico Moralito, en el departamento San Pedro, tiene una datación radiocarbónica de aproximadamente 2000 años antes del presente, probablemente Toda la zona estuvo habitada por indígenas con una cultura agroalfarera, basada en el cultivo de maíz, porotos, zapallo, papas y quínoa. Hace unos 1500 años, la identidad guaraní comenzó a configurarse en las actuales tierras de Paraguay y Brasil. Más tarde, esta población se desplazó hacia diversas regiones, enfrentándose con el avance del imperio incaico en el siglo XV.

Con la llegada de los españoles, la zona adquirió importancia como vía hacia Charcas, aumentando los ataques y consolidando la condición fronteriza del área. Las guerras entre los hispano-criollos y la población Guaraní, desde la destrucción de un asentamiento colonial en 1564 hasta la matanza de Curuyuqui en 1892, reflejan este conflicto (García Moritán y Ventura, 2007).

d) Valles

Los Valles comprenden los departamentos de Palpalá, Dr. Manuel Belgrano, San Antonio y El Carmen. Entre 500 a. C. y 700 d. C., la ocupación de los valles pareciera haberse concentrado en la cuenca del río Ocloyas, conectada directamente con el valle del río San Francisco. Entre los siglos XI y XV, los territorios de la cuenca superior del río Corral de Piedras, conectados a la Quebrada de Humahuaca, estuvieron densamente habitados. Investigaciones sugieren que los Ocloya fueron relocalizados por el imperio incaico para cumplir tareas agrícolas, metalúrgicas y de defensa.

Con la ocupación española, muchas tierras fueron reclamadas por hacendados. Desde la fundación de San Salvador de Jujuy, las Yungas fueron explotadas, aunque existió una diferencia en la ocupación de Tiraxi Chico y Grande, y las tierras al sudeste, que fueron asiento de las encomiendas de Paypaya, Ossa y Ocloya. Las guerras de independencia afectaron la zona de los Valles

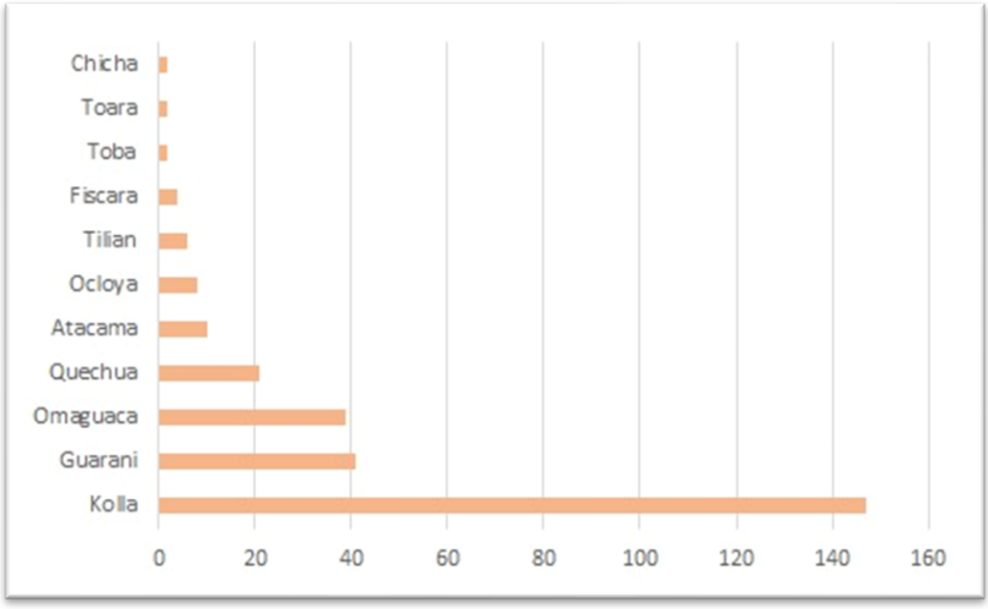
Centrales, disminuyendo el valor de la tierra y retrayendo la producción ganadera (García Moritán y Ventura, 2007).

Los grupos étnicos de Jujuy

La provincia de Jujuy se destaca entre las provincias argentinas por tener el mayor porcentaje de población indígena del país, según el INDEC (2022). Esta adscribe a distintos grupos étnicos según una distribución regional específica (Bergesio, Golovanevsky y González 2018).

En cuanto a los datos estadísticos proporcionados por el Observatorio de Derechos Humanos, el Pueblo Kolla está comprendido por 147 comunidades que representan el 54% del total de comunidades aborígenes de Jujuy. Se puede encontrar en mayor cuantía en la región Puna (96), seguido por la Quebrada (38) y en mucho menor cantidad en los Valles (7) y las Yungas (6). En segundo lugar, encontramos al Pueblo Guaraní con 41 comunidades (15%) localizadas únicamente en la región Yunga, y luego el Pueblo Omaguaca con 37 comunidades (14%) localizadas en la región Quebrada. El resto de los pueblos: Quechua, Atacama, Ocloya, Tilián, Fiscara, Toba, Toara y Chicha conforman el 17% del total. Todo ello puede visualizarse en la figura 3 (Observatorio de Derechos Humanos, 2023).

Figura 3. Comunidades indígenas con personería jurídica según pueblo provincia de Jujuy. Año 2023.



Fuente: Observatorio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. La versión original y completa de este gráfico puede encontrarse en: https://susepu.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/sites/79/2023/07/Comunidades-Ind%C3%ADgenas-de-Jujuy-con-Personer%C3%ADa.pdf

1. Kolla

El término "Kolla" puede ser confuso debido a que todo el cuarto sur del Tawantisuyu se llamaba Collasuyu, y sus habitantes eran conocidos como "collas". Sin embargo, específicamente, el señorío Kolla fue una organización sociopolítica ubicada al norte y noreste del lago Titicaca. Fueron herederos de Tiwanaku y aspiraban a ser el grupo dominante en los Andes. En la actualidad, la palabra "Kolla" se utiliza para referirse a los habitantes de la Puna, algunos de la Quebrada, y en general, a la población de origen quechua o aymara en Argentina (García Moritán y Ventura, 2007).

Sus miembros son considerados campesinos debido a su estilo de vida y actividades productivas durante el año. La mayoría de las familias poseen ganado como vacas, ovejas, caballos, burros, cabras y animales de granja. El ganado es un bien económico fundamental, usado para autoconsumo o como reserva para vender en caso de necesidad económica. La principal actividad ganadera es el cuidado y traslado de los vacunos entre diferentes pisos altitudinales. Las actividades agrícolas se realizan en distintos tipos de parcelas, algunas con uso de alternancia breve y otras con prolongados descansos. Según la altitud, cultivan maíz, papa, oca, quínoa, trigo, alfalfa, cebada, zapallo, cayote, frutales y cítricos, entre otros (García Moritán y Ventura, 2007; Longhi y Krapovickas, 2018).

Algunas comunidades residen en centros urbanos o cerca de localidades como La Quiaca, Yavi, Abra Pampa, Huacalera, Tilcara, Purmamarca, Valle Grande y San Francisco. En cuanto al uso del idioma quechua, se estima que en las provincias de Salta y Jujuy prácticamente ha dejado de utilizarse, aunque en algunas comunidades de Santa Catalina se está trabajando en su recuperación. Es posible que en el futuro algunos grupos Kolla adopten denominaciones más específicas, relacionadas con las parcialidades que habitaron el espacio andino jujeño anteriormente (García Moritán y Ventura, 2007).

2. Omaguaca

"Omaguaca" en aymara significa "agua sagrada" y en quechua significa "cabeza sagrada", se sugiere que los Omaguacas hablaban kunza y quechua, similar a la población Atacama. En la actualidad, las comunidades autodefinidas como Omaguaca residen en la Quebrada de

Humahuaca, principalmente en el departamento Humahuaca. Sus principales actividades incluyen la horticultura y la cría de cabras y ovejas. En la última década, algunos se han involucrado en la gestión de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad (2003). Además, promueven su identidad a través de iniciativas como el Centro Omaguaca de estudios regionales y desarrollos estratégicos "Cacique Viltipoco" y la publicación "Viltipoco 10000", una revista de opinión y contrainformación Omaguaca (García Moritán y Ventura, 2007).

3. Atacama

La palabra "Atacama" podría derivar del quechua "tacama", que significa "pato negro", o de "hatum tucuman", que significa "gran confín". Se cree que su lengua originaria fue el kunza, relacionada con el cacán y el quechua. Actualmente, estas comunidades se encuentran en la Puna, en el departamento Susques, que pertenecía al corregimiento de Atacama. Habitan de manera dispersa o en pequeños conglomerados, con grandes distancias entre ellos. La mayoría de las familias poseen ganado, principalmente ovejas, llamas y cabras. Durante el invierno trasladan el ganado a zonas más bajas y cálidas, y en verano suben hasta las cumbres, a las vegas. Es común que posean tres viviendas: una rural, un puesto temporario o estancia, y una urbana. Obtienen electricidad de sistemas de energía dispersa (solar) o generadores, lo que limita sus actividades. También trabajan en yacimientos de sal y confeccionan artesanías para uso doméstico, que a veces venden o intercambian en ferias regionales. Muchos jóvenes migran a otras zonas puneñas en busca de empleo. Su población es de aproximadamente 3600 habitantes. Poseen 7 títulos comunitarios, 2 combinados y 1 en trámite. La ruta que une Susques con la capital de la provincia y la apertura del Paso de Jama ha incrementado el turismo en la zona, generando mayor actividad económica para este grupo (García Moritán y Ventura, 2007).

4. Ocloya

Las cinco comunidades Ocloya residen en las localidades de Tilquiza, Laguna de Tesorero y Tiraxi (departamento Dr. Manuel Belgrano, Valles), cerca del río Normenta (departamento Ledesma, Ramal), y en el departamento Tumbaya (Quebrada). No existen datos precisos sobre su lengua, aunque se cree que tenían un idioma particular. Habitan en pequeños poblados o de forma dispersa, desarrollando una economía de subsistencia basada en la ganadería y la agricultura. Tienen vacas y, en menor medida, ovejas y caballos. Realizan actividades agrícolas en distintas parcelas; en las más alejadas siembran maíz y en las más cercanas cultivan huertas donde cosechan verduras. En

algunos casos trabajan la tierra de forma colectiva. También realizan trabajos artesanales en cuero y lana de manera independiente (García Moritán y Ventura, 2007).

5. **Tilián**

Las comunidades actuales residen cerca de la localidad de Volcán, en el departamento Tumbaya, en la Quebrada. Entre las cuatro comunidades registradas suman una población cercana a los 350 habitantes. Tres de ellas pueden considerarse periurbanas y mantienen reclamos territoriales, mientras que la restante no ha iniciado ningún reclamo. Relatos locales indican que sus antepasados adoptaron la decisión de no reproducirse como estrategia defensiva ante el invasor colonial y posteriores escenarios de opresión (García Moritán y Ventura, 2007).

6. **Fiscara**

Las comunidades Fiscara se encuentran en la región de la Quebrada en el departamento de Tilcara. La información sobre este grupo es limitada en comparación con otros pueblos indígenas de la provincia. Sus prácticas culturales y modos de vida tradicionales están en proceso de documentación y estudio para preservar y revitalizar su herencia (García Moritán y Ventura, 2007).

7. **Toba**

La única comunidad Toba de la provincia está en el departamento El Carmen (Los Valles). La palabra "tová" en guaraní significa "frente", refiriéndose a la costumbre de rasurarse hasta la mitad de la cabeza. Los españoles los llamaron "frentones". El pueblo Toba es originario del Chaco austral, desde donde migraron a otras zonas. Este asentamiento en Jujuy se produjo como resultado de una migración estacional que se volvió permanente. En esta comunidad viven unos 110 individuos, y sus integrantes hablan toba, una lengua de la familia lingüística Guaycurú (García Moritán y Ventura, 2007).

8. **Toara**

En el departamento Cochinoca, a 9 km al este de Abra Pampa, se encuentra la localidad de Tabladitas, habitada por la comunidad que se autodenomina Toara. Este pueblo se define a partir de la transmisión oral de sus ancestros y de un documento que se conserva en la iglesia local, datado en 1878. Los relatos indican que este sector formaba parte de un camino que conectaba Hornaditas, la Quebrada de Sapagua, el Abra Azul Pampa, el Abra del Condorcito, Ugchara y

Tabladitas, donde se pasaba la noche. El camino continuaba hasta Cangrejillos, Yavi, y luego a Bolivia. En la zona había dos grupos rivales: los Cochinoca y los Toara de Tabladitas. Durante parte del año, un número importante de habitantes se traslada a otros lugares de la Puna, preferentemente Abra Pampa, para trabajar (García Moritán y Ventura, 2007).

9. Chicha

El pueblo Chicha habitó históricamente en la región de los Andes centrales, principalmente en Bolivia, aunque también se mencionan en el contexto de la provincia de Jujuy, Argentina. Su cultura estaba influenciada por la civilización Tiwanaku y posteriormente por los Incas. Eran conocidos por sus habilidades en la agricultura, especialmente en la construcción de terrazas de cultivo en las montañas. Estas terrazas permitían el cultivo eficiente en terrenos escarpados y maximizaban el uso del agua disponible. La sociedad Chicha estaba organizada en comunidades con estructuras de liderazgo local y prácticas agrícolas y ceremoniales bien desarrolladas (Bengoa, 2009).

Actualmente, las comunidades que se autodenominan Chicha están en proceso de recuperar y revitalizar sus tradiciones y costumbres ancestrales. Se encuentran en áreas rurales de Jujuy y mantienen prácticas agrícolas y ganaderas similares a las de sus ancestros (García Moritán y Ventura, 2007).

10. Quechua

Las comunidades quechuas se encuentran dispersas en distintas áreas, principalmente en la región de la Puna, son descendientes de los Incas y mantienen vivas muchas tradiciones culturales, incluyendo el idioma quechua, la agricultura de terrazas y las festividades comunitarias. Su cultura es rica en tradiciones y prácticas ancestrales que continúan siendo una parte integral de su vida diaria (García Moritán y Ventura, 2007).

11. Guaraní

Los integrantes de este grupo se autodenominan Guaraní, Ava Guaraní (gente guaraní) y Tupí Guaraní. A menudo, quienes hablan o escriben sobre ellos, los llaman Chiriguano, una palabra de origen quechua que significa "frío" y "estiércol" (chiri = frío y guano = estiércol). Esta denominación traduce la fusión entre el sector invasor de origen tupí-guaraní, llamado chiri, y el sector local de origen arawak, llamado chané del lado andino y guana del paraguayo. Sin embargo, Chiriguano y Chaguanco son considerados términos despectivos por este grupo étnico. Este grupo

es excepcional entre los pueblos americanos, ya que no tenían territorio ni una identidad homogénea. La mayoría de los Guaraní en Jujuy provienen de Bolivia y su asentamiento data de fines del siglo XIX y comienzos del XX, migrando hacia "mbaporenda" (lugar donde hay trabajo) o como resultado de la Guerra del Chaco (1932-1935). Trabajaron en fincas, aserraderos e ingenios azucareros, y al abandonar los ingenios, migraron a ciudades cercanas u ocuparon pequeños espacios rurales. El idioma guaraní pertenece a la familia lingüística Tupí-Guaraní y su uso en las comunidades es variable. En algunas, solo lo hablan las personas mayores, mientras que en otras se están llevando a cabo acciones para revitalizar la lengua (Guiteras Mombiola y Córdoba, 2021).

Fuentes de datos y análisis.

La metodología adoptada es de enfoque cualitativo, basada en el estudio de casos. Este enfoque permite analizar de manera detallada cómo las normativas legales se entrelazan con las experiencias de las comunidades indígenas y cómo las sentencias judiciales no solo influyen, sino que también reflejan las estructuras socioculturales existentes (Valles, 1997). A través de este análisis, se examinan las repercusiones legales de los conflictos territoriales y se exploran las percepciones de las comunidades aborígenes ante las dinámicas jurídicas, integrando aspectos legales, sociales y culturales (Neiman y Quaranta, 2006).

La población de estudio se encuentra definida por las Comunidades Aborígenes de la provincia de Jujuy, las que han sido protagonistas de una compleja trama social y legal en conflictos territoriales resueltos judicialmente.

La relación entre la población y los conflictos territoriales judicializados se encuentra atravesada por una variedad de factores, históricos, económicos políticos y socioculturales. La percepción de justicia y equidad en la resolución de estos conflictos varía entre los diferentes actores, lo que destaca la necesidad de un enfoque holístico e interdisciplinario para abordar los problemas subyacentes (Anaya, 2005; Aparicio, 2007; Assies, 2006; Clech Lam, 2004; De Castro, Hogenboom y Baud, 2015; Hernández Castillo y Flores Arreozola, 2024; Solórzano Fonseca, 2017; Stavenhagen, 2002; Yrigoyen Fajardo, 2000).

Para llevar a cabo el análisis, se emplearon dos fuentes fundamentales: en primer lugar, como fuente secundaria, se recurrió a las sentencias judiciales emanadas de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Jujuy, correspondientes al período entre agosto de 2015 (fecha considerada por la entrada en vigor del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación) y enero de 2023. Estas sentencias, son el resultado de procesos legales rigurosos, que además de establecer distintos

precedentes legales, ofrecen una comprensión profunda de los argumentos presentados por todas las partes implicadas.

Explorar las sentencias es relevante porque representan un momento clave en la evolución del marco legal que afecta los derechos territoriales de las comunidades indígenas. La implementación del nuevo Código Civil y Comercial en 2015 introdujo modificaciones sustanciales en el tratamiento de la propiedad comunitaria y los derechos territoriales, lo que impactó directamente en las comunidades aborígenes. Estas sentencias no sólo reflejan cómo el sistema judicial interpreta y aplica este nuevo marco legal, sino que también muestran cómo estas decisiones afectan la realidad de las comunidades indígenas en su lucha por el reconocimiento de sus derechos sobre las tierras que habitan ancestralmente.

En cuanto a las fuentes primarias, se realizaron diez (10) entrevistas semiestructuradas a personas pertenecientes a las Comunidades Aborígenes, quienes participaron activamente en los procesos judiciales analizados. Las entrevistas fueron fundamentales para captar las percepciones y experiencias subjetivas de los actores involucrados, permitiendo explorar cómo interactúan con el sistema judicial y comprender la dimensión humana de los conflictos territoriales. Briones y Carrasco (2018) destacan la importancia de las entrevistas para entender cómo los sistemas judiciales tratan los derechos territoriales indígenas desde la perspectiva de las comunidades, ofreciendo una visión complementaria a la proporcionada por las sentencias judiciales. En la misma línea, Lenton (2010) subraya el papel del Estado en los conflictos territoriales y cómo las decisiones judiciales pueden tanto reforzarse como desafiar las dinámicas de poder, lo que resalta la relevancia de capturar las voces de las comunidades afectadas.

A través de las conversaciones, fue posible indagar en las emociones, preocupaciones, y esperanzas que expresan los miembros de las comunidades aborígenes, así como comprender los impactos socioeconómicos y culturales de los procesos legales en sus vidas cotidianas y en la cohesión de sus comunidades (Bourdieu, 1991; Comaroff y Comaroff, 2009; Ferrándiz Martín y Feixa Pampols, 2004; Garcés Pérez y Figueiredo, 2021; Gianuzzi, 2012; Hernández Castillo y Flores Arreozola, 2024; da Silva, 2010; Sousa Santos, 2007; Stavenhagen, 2008).

El enfoque cualitativo ha permitido indagar no sólo los aspectos formales y legales, sino también las realidades sociales y culturales que influyen en la interpretación y aplicación del derecho. Al llegar a este punto, es crucial integrar y comparar las diferentes fuentes para revelar las dinámicas que emergen en estos contextos. Así, la vinculación de ambas fuentes de información

proporcionará una visión exhaustiva de la interacción entre el sistema judicial y las realidades vividas por estas comunidades en la provincia de Jujuy.

Fuentes secundarias: Las sentencias judiciales.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) es el tribunal más alto de la República Argentina y representa el órgano supremo del Poder Judicial. Su misión es garantizar la supremacía de la Constitución, actuar como su intérprete final, proteger los derechos y garantías establecidos en ella. El Poder Judicial de la Nación, con la CSJN como su instancia final, ejerce la función jurisdiccional para resolver los conflictos entre ciudadanos, así como entre estos y el Estado. A través de sus sentencias, la CSJN realiza la interpretación y sistematización del ordenamiento jurídico en su totalidad y lleva a cabo el control de constitucionalidad de las normas y actos estatales (Corte Suprema de Justicia de la Nación, s.f.).

La Secretaría de Jurisprudencia de la CSJN, en los cuadernillos de acceso público, sostiene en reiterados precedentes que la CSJN consolida como regla que la sentencia debe entenderse como una unidad lógico-jurídica, en la que su parte dispositiva es la conclusión necesaria de las premisas fácticas y normativas efectuadas en sus fundamentos (Fallos: 344:1266; 344:545; 321:1642; 320:985, disidencia de los jueces Fayt y Boggiano; Fallos: 316:609, entre muchos otros). Dicha enunciación se ha reafirmado por la aseveración de que la sentencia constituye un todo indivisible (Fallos: 344:3585; 330:4040; 330:1366; 329:5074, voto del juez Fayt; 328:412; 315:2291). Por lo tanto, no cabe admitir antagonismos entre la parte dispositiva y los fundamentos que la sustentan (Fallos: 324:1584), ya que existe una recíproca integración (Fallos: 327:3660, disidencia del juez Petracchi; 311:2120; 311:509). Existen numerosos y antiguos precedentes donde la CSJN resaltó que es la parte dispositiva de la sentencia lo que constituye el fallo y no sus considerandos o la apreciación de los elementos de prueba (Fallos: 118:243; 113:64; 111:339 y 28:129). Pero también señaló que, si bien para establecer el alcance y los límites de la decisión que emana de un fallo debe atenderse a su parte dispositiva, no es menos cierto que no debe prescindirse de sus fundamentos, pues toda sentencia constituye una unidad en la que aquella parte no es sino la conclusión final y necesaria de los análisis de los presupuestos de hecho y legales tenidos en cuenta en su fundamentación (345:1101, voto de los jueces Rosatti y Lorenzetti; “Moro”, del 29/05/2012; 324:2210; 324:547; 324:132; 314:1633; 308:732). Destacó el Tribunal que la sentencia debe configurar un todo indivisible, demostrativo de una unidad lógico-jurídica, ya que no es el imperio del tribunal ejercido en la parte dispositiva lo que le da validez y fija sus alcances, sino que estos

dos aspectos dependen también de las motivaciones que sirven de base al pronunciamiento (Corte Suprema de Justicia de la Nación, s.f.).

La sentencia se utiliza como fuente de investigación, es decir, aquella decisión judicial tomada en un acto institucionalizado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Jujuy. Comprender la sentencia, es entender el texto, el lenguaje y su significado específico, tanto con el que se expresan los jueces para tomar la decisión como para argumentarla. Por lo que es imprescindible saber interpretar los términos jurídicos y la manera como son usados (Binder, 2001; Ferrajoli, 2000; Gargarella, 1995; Nieto y Fernández, 2006).

El análisis cualitativo de sentencias judiciales desempeña un papel esencial en la comprensión del sistema legal. Este enfoque social estructurado, tal como lo proponen Gargarella (2013) y Guastini (2015), implica un proceso riguroso de selección, codificación sistemática y análisis detallado, con el objetivo de descubrir patrones y argumentaciones fundamentales para una interpretación más profunda (Ander-Egg, 1995).

Las sentencias tenidas en cuenta en esta investigación fueron seleccionadas rigurosamente del Sistema Integral de Gestión Judicial (SIGJ), de acceso libre y gratuito del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, las cuales son representativas del tema de estudio por tener un impacto significativo en la problemática territorial, lo que aseguró que el análisis abarque distintos aspectos fundamentales de la jurisprudencia sobre el tema (Bulygin y Mendonca, 2005; Sautu, et al., 2005).

Se seleccionó una muestra representativa de sentencias judiciales que cumplieran con criterios específicos, asegurando su relevancia y pertinencia en el análisis de los conflictos territoriales que involucran a comunidades aborígenes en la provincia de Jujuy. Los criterios seleccionados fueron los siguientes:

- **Problemática:** La problemática abordada en las sentencias está circunscrita a los conflictos territoriales.

- **Instancia judicial:** Se incluyeron únicamente sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Jujuy, en su calidad de última instancia dentro de la provincia, garantizando así que las decisiones analizadas reflejan la máxima autoridad judicial en el contexto provincial.

- **Sujeto involucrado:** Las sentencias seleccionadas involucran a comunidades aborígenes, en calidad de actores o demandados en los conflictos territoriales y que constituyen el objeto central de esta investigación.

- **Fecha de publicación:** Se consideraron sentencias emitidas entre agosto de 2015 y enero de 2023, período que coincide con la entrada en vigor del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, lo que permite analizar el impacto de este marco normativo en la resolución de los conflictos territoriales.

- **Codificación de Sentencias:** Para facilitar el análisis y seguimiento de las sentencias seleccionadas, se respetó el número asignado por el tribunal. Este número oficial, junto con la fecha de publicación, garantiza su identificación y referencia exacta a lo largo del estudio.

Se procedió a analizar el contenido en unidades de información manejables. Esto implica dividir el texto en fragmentos más pequeños con los argumentos específicos del tribunal y la esencia de la decisión. Este proceso de fragmentación facilita la organización de la información y permite un análisis detallado y preciso respecto del contenido (Ander-Egg, 1995; Guastini,2015).

Se identificaron las categorías principales de las sentencias: Los argumentos legales, los principios constitucionales y las referencias a precedentes jurisprudenciales.

Estás categorías permiten abordar de manera integral el entendimiento de la construcción jurídica, mediante el análisis de su estructura, fundamentos y contexto de las decisiones judiciales.

1. Argumentos legales: Esta categoría desglosa los razonamientos que sustentan la decisión del tribunal. Los argumentos legales precisan la institución jurídica utilizada y representan el marco normativo aplicado a cada caso y detallan cómo el tribunal interpreta y aplica la legislación. A través de ellos, se analiza el enfoque jurídico adoptado y la lógica argumentativa utilizada, lo cual resulta crucial para entender la posición del tribunal frente a los aspectos específicos de cada conflicto. Este análisis permite identificar la interpretación y coherencia en el uso de las normas, revelando la postura del tribunal ante los problemas que enfrenta.

2. Principios constitucionales: Esta categoría es esencial para evaluar cómo las decisiones judiciales se alinean con los valores y derechos fundamentales que establece la Constitución. Los principios constitucionales, tales como la equidad, la igualdad, la

libertad y el respeto a la diversidad cultural, actúan como guía para garantizar que las decisiones se fundamenten en el marco de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. Al analizar esta categoría, es posible identificar cómo el tribunal equilibra estos principios en su razonamiento, en particular cuando se presentan conflictos entre derechos colectivos e individuales.

3. Referencias a precedentes jurisprudenciales: Esta categoría es indispensable para comprender la continuidad o evolución en la jurisprudencia del tribunal. Las referencias a precedentes permiten observar si el tribunal se apoya en decisiones anteriores para resolver casos similares, garantizando así la seguridad jurídica y la coherencia en la interpretación de la ley. Además, el análisis de los precedentes anticipa y revela tendencias jurisprudenciales y la posible adaptación o reinterpretación del derecho en respuesta a las cambiantes realidades sociales y culturales. En conflictos territoriales y de derechos indígenas, esta categoría ayuda a identificar si la jurisprudencia se está alineando progresivamente con estándares internacionales y normativas que protegen los derechos de estos colectivos.

Posteriormente, las sentencias se agrupan en seis nuevas categorías de análisis: Estas agrupaciones se apoyan en características comunes en relacion a los temas legales tratados y permiten interpretarlas en grupos o como unidades coherentes de análisis (Guastini, 2015).

Las seis categorías de análisis:

1. Propiedad comunitaria y usucapión: Las sentencias agrupadas en esta categoría abordan conflictos de propiedad entre comunidades indígenas y particulares, con un enfoque específico en la usucapión y los derechos colectivos. La justificación de esta categoría radica en la naturaleza común de los conflictos, donde las disputas sobre la posesión de tierras se relacionan directamente con la defensa de los derechos territoriales comunitarios frente a reclamaciones individuales.

Este agrupamiento permite un análisis más profundo de cómo los tribunales interpretan y protegen los derechos de propiedad de las comunidades indígenas.

2. Protección ambiental y derechos indígenas: Esta categoría incluye sentencias que abordan la relación entre la protección ambiental y los derechos territoriales de las comunidades indígenas. La agrupación se justifica por la intersección entre los derechos ambientales y

territoriales, donde los tribunales deben equilibrar la conservación del medio ambiente con la protección de los derechos indígenas.

Este grupo de sentencias permite analizar cómo las normativas ambientales y los derechos colectivos se integran en las decisiones judiciales, resaltando la importancia de la participación de las comunidades en la gestión de sus territorios

3. Desalojos y derechos de propiedad: Las sentencias incluidas en esta categoría se centran en conflictos relacionados con desalojos y la evaluación de los derechos de propiedad y posesión.

Esta categoría de análisis permite examinar cómo los tribunales protegen o limitan los derechos de propiedad en contextos de desalojo, aplicando las normativas legales pertinentes para la resolución de estos conflictos.

4. Competencia judicial y procedimientos: Esta categoría agrupa sentencias que tratan sobre la competencia judicial y la correcta aplicación de los procedimientos legales. La justificación de esta agrupación radica en la naturaleza procesal de los conflictos, donde el enfoque principal es la jurisdicción y la adherencia a los procedimientos establecidos.

Este grupo de sentencias permite analizar cómo los tribunales garantizan el debido proceso y la seguridad jurídica en casos que involucran la correcta aplicación de la ley y la determinación de la jurisdicción competente.

5. Rechazo de recursos y amparos: Las sentencias agrupadas en esta categoría se enfocan en la denegación de recursos o amparos debido al incumplimiento de requisitos legales o la falta de pruebas suficientes.

La coherencia de esta categoría se encuentra en la revisión judicial de la admisibilidad de las solicitudes, donde los tribunales aplican criterios estrictos para aceptar o rechazar los recursos. Este agrupamiento permite analizar el rigor procesal y la fundamentación legal requerida para que los recursos sean admitidos.

6. Protección de propiedad privada: Esta categoría incluye sentencias que se centran en la protección de la propiedad privada frente a reclamaciones comunitarias. La justificación de esta agrupación radica en que todas las sentencias abordan la defensa de los derechos

de propiedad privada, evaluando la legitimidad de las reclamaciones comunitarias y asegurando que se cumplan los requisitos legales y procesales.

Este grupo de sentencias permite explorar cómo los tribunales protegen la propiedad privada en conflictos con comunidades, subrayando la importancia de la seguridad jurídica en estos contextos.

Consecutivamente, se realiza un análisis minucioso de la consistencia y las tendencias presentes en cada agrupación de sentencias, permitiendo la identificación de patrones relevantes. Este proceso implica una interpretación detallada de cada sentencia como un documento integral, lo que ofrece una comprensión más profunda y precisa de las problemáticas tratadas en cada fallo (Guastini, 2015; Yuni y Urbano, 2014).

La consistencia, se refiere a la repetición y uniformidad en la aplicación de principios legales, precedentes, y razonamientos judiciales a lo largo de las sentencias. Es un análisis que busca identificar si los tribunales siguen un enfoque similar en casos comparables, utilizando los mismos fundamentos legales y decisiones previas (Alexy, 2011; Guastini, 2015).

La tendencia, se refiere a un cambio o evolución en las decisiones judiciales a lo largo del tiempo, que refleja cómo el contexto social, jurídico, o internacional puede influir en la manera en que se interpretan y aplican las leyes (Alexy, 2011; Guastini, 2015).

Este análisis proporciona una visión estructurada de los patrones y cómo los tribunales manejan tanto la estabilidad como la adaptación en la interpretación y aplicación del derecho en los casos analizados (Yuni y Urbano, 2014).

Una vez identificados los patrones, se realizó un análisis temático, el cual permite reconocer temas más amplios que emergen de los casos abordados por los tribunales. Estos temas revelan, los enfoques fundamentales que subyacen a las decisiones judiciales, proporcionando una comprensión más profunda de la aplicación del derecho y los principios de justicia en el contexto analizado (Yuni y Urbano, 2014).

Finalmente, el análisis de las sentencias concluye con la identificación de precedentes y cambios jurisprudenciales significativos, evaluando si las decisiones judiciales se alinean con la jurisprudencia establecida, si la contradicen, o si contribuyen a su evolución. Especial atención se presta a la interpretación y aplicación del nuevo Código Civil y Comercial de 2015, y su impacto en las decisiones judiciales. Se presenta su visualización en el Capítulo V, Tabla 2.

Fuentes Primarias: Las entrevistas a los comuneros.

La entrevista es una herramienta que ha permitido, en esta tesis, indagar no solo en los acontecimientos actuales que afectan a las comunidades aborígenes de Jujuy, sino también en sus recuerdos y percepciones del pasado, así como en sus anticipaciones y expectativas hacia el futuro. Esto ha sido crucial para comprender las dinámicas de poder, justicia y resistencia que se manifiestan en los conflictos territoriales y su resolución judicial (Ander-Egg, 1995; Yuni y Urbano, 2014).

El diseño de las entrevistas se ha planificado meticulosamente para garantizar que se alineen con los objetivos de esta investigación, respetando su enfoque y propósito. Cada tema abordado en las entrevistas ha sido cuidadosamente seleccionado y estructurado para responder de manera precisa a las preguntas centrales del estudio, a la vez que se busca profundizar en la comprensión contextualizada de las tensiones existentes entre el sistema judicial y las realidades socioculturales de las comunidades indígenas. Este enfoque ha permitido que las entrevistas se constituyan en una fuente esencial de vinculación de datos, en conjunto con el análisis de las sentencias judiciales, proporcionando una perspectiva integrada y holística de los fenómenos investigados (Yuni y Urbano, 2014).

La entrevista estuvo compuesta por diferentes categorías de análisis que se fundamentan a continuación:

1) Contexto cultural y territorial:

Se pretendió entender cómo la cultura de la comunidad está integrada con su entorno geográfico (Murillo Masís y Ruiz Umaña, 2020). Las preguntas exploran la historia del grupo con el lugar, incluyendo migraciones históricas, relaciones con otros grupos y la importancia del territorio en sus prácticas culturales y rituales. Fue fundamental indagar cómo las tradiciones, prácticas sociales y sistemas de gobierno local se ven influenciados por el entorno territorial.

2) Significado y relación con la tierra o territorio que habita:

El enfoque se centró en la conexión espiritual, emocional y física de la comunidad con su tierra (Molano, 2007). Las preguntas se dirigieron a comprender el papel que la tierra juega en la identidad del grupo, cómo influye en su cosmovisión, y la manera en que las prácticas cotidianas y ceremoniales están vinculadas al uso y respeto del territorio. Se incluyen narrativas sobre lugares específicos, considerados sagrados o esenciales para la comunidad.

3) Percepción y conocimiento de la sentencia judicial relacionada a conflictos territoriales:

Se abordó la interacción entre las comunidades y los sistemas legales externos (Abramovich y Curtis, 2002; Carrasco, 2000). Se formularon preguntas para descubrir cómo la comunidad percibe y entiende las decisiones judiciales en conflictos sobre la tierra, y en qué medida estos fallos son conocidos y comprendidos por diferentes miembros de esta. También buscó comprender cómo estas percepciones influyen en su relación con el Estado y otras entidades externas.

4) Adaptaciones, cambios y perspectivas a futuro a partir de las sentencias judiciales:

Las preguntas exploraron las consecuencias de las decisiones judiciales en la vida de la comunidad. Se indagó sobre los ajustes que han tenido que realizar en su vida diaria, sus prácticas culturales o su organización social en respuesta a las sentencias (Anaya, 2005). Además, se consultó sobre sus esperanzas y planes para el futuro, cómo ven la evolución de sus derechos territoriales y qué estrategias consideran adoptar para asegurar o mejorar su situación territorial.

Las comunidades indígenas se reconocen como descendientes de civilizaciones prehispánicas y reivindican su preexistencia en territorios que, con el tiempo, se constituyeron en estados nacionales. Aunque la conexión con el territorio se establece como un principio fundamental de identidad (Romero Tovar, 2009) estas no son estáticas ni inmutables, sino que emergen de procesos dinámicos de construcción de intereses y demandas. Desde esta perspectiva, y en el marco de la comprensión del proceso en estudio, las identidades de las etnias y naciones indígenas se conciben como procesos políticos en constante transformación (Gómez Suárez, 2002), moldeados por su interacción con el entorno circundante (Segato, 2021). Este enfoque pone de relieve el carácter dinámico de los procesos identitarios y subraya la interacción entre los actores sociales como clave para una comprensión integral del fenómeno analizado.

En este caso, el objetivo principal fue obtener una comprensión profunda y contextualizada de los temas y cuestiones relevantes para las comunidades aborígenes involucradas en conflictos de territorialidad, a través de entrevistas semiestructuradas con individuos directamente afectados por estas disputas.

La selección de personas pertenecientes a comunidades aborígenes atravesadas por conflictos de territorialidad garantiza que las entrevistas, están dirigidas a individuos con experiencia directa y relevante en el tema de estudio, aumentando la probabilidad de obtener información detallada y significativa (Yuni y Urbano, 2014).

El método de interacción se orientó hacia una muestra intencional o de conveniencia, donde los participantes fueron seleccionados específicamente debido a su experiencia y participación en los conflictos de territorialidad y en las sentencias seleccionadas. Esta estrategia de muestreo permite centrarse en individuos con un conocimiento profundo y directo del tema, maximizando así la calidad y la relevancia de los datos recopilados (Ander-Egg, 1995).

Se realizaron un total de diez entrevistas semiestructuradas a personas pertenecientes a comunidades aborígenes, que han sido parte en las sentencias seleccionadas y que transitaron jurídicamente conflictos de territorialidad, con el objetivo de lograr la recolección de datos de comprensión profunda y contextualizada de los temas y cuestiones que le fueron relevantes.

Los entrevistados fueron alentados a compartir sus vivencias personales, desde los primeros indicios de conflicto hasta los desafíos y las dificultades enfrentadas durante el proceso judicial. Además de explorar los aspectos legales y jurídicos de la disputa territorial, se les animó a reflexionar sobre el impacto que dichos conflictos han tenido en sus vidas cotidianas, en sus identidades culturales y en el bienestar de sus comunidades en general.

Las diez entrevistas realizadas se pueden consultar en el apartado Apéndice, se encuentran ordenadas cronológicamente y como se dijo previamente, se identifican con números para respetar la identidad y anonimato de los entrevistados.

Se lleva a cabo un análisis exhaustivo de las narrativas organizadas en torno a cada categoría temática, profundizando en la manera en que estas expresan las experiencias vividas por los participantes. Las entrevistas posibilitan un análisis relacional que identifica las conexiones y vínculos entre las distintas categorías, las cuales se articulan de forma dinámica, configurando tanto la identidad comunitaria como las estrategias adoptadas para enfrentar los desafíos actuales.

Los resultados de este análisis permiten, visualizar e interpretar claramente las interrelaciones entre las categorías examinadas. Esta representación, tanto visual como contextual, constituye una herramienta clave para comprender cómo las comunidades indígenas enfrentan los retos contemporáneos, no como fenómenos aislados, sino como parte de un entramado interconectado que moldea sus respuestas y estrategias (Ander-Egg, 1995).

Se lleva a cabo un análisis detallado de las interrelaciones entre las categorías identificadas. El contenido de las entrevistas permitió no solo destacar la frecuencia de los términos más recurrentes, sino también analizar su relevancia simbólica dentro de las narrativas comunitarias. A

través de la técnica de la nube de palabras, se visualizan de manera gráfica los conceptos fundamentales, proporcionando una representación clara de los elementos que estructuran las experiencias y problemáticas que estas comunidades enfrentan (Ander-Egg, 1995; Briñis Zambrano, 2017).

Este análisis se enriquece con un enfoque hermenéutico, que permite interpretar el significado contextual de los términos identificados en las narrativas. Este enfoque facilita una comprensión integral de las interrelaciones entre los ámbitos cultural, territorial y jurídico, evidenciando cómo las comunidades indígenas articulan sus respuestas frente a las problemáticas que enfrentan (Meo, 2010; Seid, 2016).

Posteriormente, se realiza una comparación de las respuestas, destacando tanto las similitudes como las diferencias entre los testimonios de los entrevistados. Este proceso permite identificar puntos comunes y divergencias significativas en las narrativas, aportando un análisis profundo de los consensos y disensos presentes en las experiencias compartidas (Yuni y Urbano, 2014). Para apoyar esta interpretación, se incluyen preguntas reflexivas que organizan las evidencias extraídas de las entrevistas. Estas preguntas se acompañan de herramientas visuales que facilitan la comprensión de las coincidencias y diferencias entre los testimonios, proporcionando una perspectiva clara de cómo los entrevistados abordan los temas clave desde diversos ángulos, revelando consensos y matices únicos (Ander-Egg, 1995).

Finalmente, se identifica y analiza una serie de patrones en los discursos de los entrevistados, revelando sentimientos, percepciones y tensiones que emergen en sus narrativas. Estos patrones ofrecen una visión estructurada y profunda de sus experiencias y perspectivas, enriqueciendo la comprensión del entramado social y cultural que subyace en sus relatos (Briñis Zambrano, 2017; Guber, 2001; Meo, 2010).

El cierre del análisis metodológico de las fuentes primarias se expone en un mapa jerárquico, que visualiza de manera clara y estructurada las relaciones entre las categorías emergentes a partir de las entrevistas. Esta herramienta metodológica permite organizar las respuestas de los entrevistados en torno a temas centrales, como la conexión espiritual con la tierra, los sentimientos de injusticia y desconfianza, y la percepción de amenaza externa. Los subnodos del mapa jerárquico reflejan las citas textuales de los entrevistados, evidenciando cómo sus narrativas se entrelazan con estos temas principales (Ander-Egg, 1995; Salgado Lévano, 2007).

El mapa jerárquico, al igual que las recomendaciones metodológicas de Diez (1998), facilita la comprensión de los resultados al presentar de manera visual las interacciones entre las categorías, subrayando las interdependencias discursivas entre los temas clave. Además, esta representación no solo organiza la información empírica de forma clara, sino que también permite que el lector identifique fácilmente los puntos de convergencia y divergencia en las entrevistas (Ander-Egg, 1995).

Siguiendo los principios metodológicos expuestos por Salgado Lévano (2007) la visualización de datos cualitativos a través de un mapa jerárquico refuerza la credibilidad y rigor metodológico del análisis al garantizar que las relaciones entre los temas y las experiencias de los entrevistados se presenten de manera transparente y coherente. Este enfoque visual no solo enriquece el análisis, sino que también facilita su transferibilidad, permitiendo que otros investigadores comprendan y reproduzcan el proceso metodológico basado en la evidencia empírica.

En conclusión, el uso del mapa jerárquico como cierre metodológico de las fuentes primarias asegura que los resultados de las entrevistas sean interpretados de forma estructurada, coherente y visualmente accesible, alineándose con los principios de rigor y transparencia que caracterizan la investigación cualitativa (Ander-Egg, 1995).

Triangulación de fuentes de datos.

El análisis conjunto de datos provenientes de sentencias judiciales y entrevistas a comunidades aborígenes permitió una comprensión integral de las realidades sociales, jurídicas y culturales que enfrentaron y enfrentan estas comunidades. Este enfoque holístico e interdisciplinario, fundamentado en conceptualizaciones de teorías sociales previamente expuestas, permitió establecer categorías de análisis comparativo cuyo propósito principal es comprender las interacciones entre estas dinámicas en los contextos legales y comunitarios (Bulygin y Mendonca, 2005; Habermas, 2005; Horkheimer, 1998; Sousa Santos, 2014; Wolkmer, 2003).

La visualización de los resultados obtenidos mediante la triangulación de las fuentes de datos se realizó a través de tablas comparativas. Estas herramientas analíticas proporcionaron claridad y precisión en la interpretación de la tensión de sentido generada por la coexistencia de dos perspectivas diferentes sobre una misma problemática, facilitando así la identificación de puntos de conflicto y posibles áreas de consenso.

A continuación, se detallan las categorías de análisis comparativo establecidas:

1. Colonialidad del poder y dinámicas de control social.

Se observa cómo las sentencias judiciales y las narrativas de las comunidades aborígenes reflejan la perpetuación de estructuras de poder coloniales. A través de la comparación de estas fuentes, se identifica cómo el sistema jurídico reproduce exclusión y desigualdad, revelando la persistencia de la colonialidad del poder en el ámbito judicial y su impacto en las comunidades indígenas.

2. Resistencia y juridización.

El análisis se profundiza utilizando la teoría de Bourdieu (1991) sobre el campo y habitus, evaluando cómo las comunidades indígenas se posicionan frente a las estructuras de poder mediante estrategias de resistencia. Al comparar las estrategias observadas en las sentencias judiciales con las narrativas de resistencia presentes en las entrevistas, se visualiza cómo las comunidades confrontan con la juridización, el sistema legal como una herramienta de defensa como de confrontación, ante las imposiciones del Estado.

3. Desigualdad y justicia.

Las teorías de justicia junto con las teorías críticas permiten evaluar si las sentencias judiciales abordan o perpetúan desigualdades estructurales. Este cruce de sentencias y entrevistas muestra cómo las experiencias de las comunidades reflejan las manifestaciones de desigualdad, en sus interacciones cotidianas y cómo la justicia, puede perpetuar, así como cuestionar estas estructuras de poder.

4. Territorio y prácticas sociales.

El análisis de la relación entre las comunidades y su territorio se conecta con las teorías sobre la apropiación del espacio y la construcción de identidad. A partir de la comparación entre las decisiones judiciales y las narrativas de las entrevistas, se explora cómo las sentencias impactan en la legitimación o erosión de la soberanía territorial y cultural, revelando las tensiones entre la protección legal de la propiedad comunitaria y las realidades sociales de las comunidades.

5. Crítica y transformación.

La teoría crítica se utiliza para cuestionar las estructuras de poder y legitimidad presentes en las sentencias judiciales. Este cruce de datos entre las decisiones legales y las experiencias de las comunidades permite visibilizar las tensiones entre la teoría y la práctica, y plantea las bases para una potencial transformación social y legal.

Consideraciones éticas y jurídicas en el tratamiento de las fuentes.

Las consideraciones éticas y jurídicas que orientaron el tratamiento de las fuentes en la tesis abarcan tanto las sentencias judiciales analizadas como las entrevistas semiestructuradas realizadas a los comuneros. El respeto por la integridad de los datos, la protección de la confidencialidad de los participantes y el compromiso con la transparencia en la gestión de la información fueron los pilares fundamentales que guiaron el desarrollo de este estudio (Briñis Zambrano, 2017; Guber, 2001; Masciotra 2018; Meo, 2010; Santi, 2016).

En cuanto a las sentencias judiciales utilizadas como fuente de investigación, se mantuvo en todo momento un riguroso control sobre la integridad y precisión de los textos. Las transcripciones de las sentencias fueron realizadas con exactitud, evitando cualquier tipo de distorsión que pudiera comprometer la calidad del análisis. Cada sentencia se consideró como una unidad lógico-jurídica, respetando tanto las premisas fácticas como normativas que sustentan las decisiones judiciales. Dichas sentencias pueden consultarse en el Apéndice, se encuentran identificadas numéricamente, lo que asegura la autenticidad de la muestra y permite una clara referencia a las fuentes originales.

Por razones éticas, se preservó el anonimato de todos los actores involucrados en los procesos judiciales. No se mencionaron los nombres de las comunidades, los profesionales intervinientes ni los miembros del SCJ de la provincia de Jujuy. Esta precisión puede verificarse en el Apéndice que incluye las transcripciones detalladas de las sentencias.

En el marco de las entrevistas semiestructuradas realizadas a los comuneros, se tomaron todas las medidas necesarias para asegurar la protección de la identidad y los derechos de los participantes. Siguiendo las recomendaciones de Meo (2010), el consentimiento informado fue tratado no solo como un formato, sino como un proceso continuo que garantizó la plena comprensión de los fines de la investigación. A cada participante se le explicó, de forma clara y detallada, los objetivos del estudio, los posibles riesgos y beneficios, así como las medidas adoptadas para proteger su anonimato (Masciotra 2018; Santi, 2016).

El consentimiento informado fue presentado por escrito y explicado minuciosamente a los participantes, quienes lo firmaron al estar de acuerdo con los términos. Se garantizó que la confidencialidad fuera preservada, evitando mencionar los nombres de los entrevistados, las comunidades a las que pertenecen o los profesionales involucrados. En su lugar, los participantes fueron referenciados de manera anónima mediante un número asignado, con el objetivo de proteger su identidad durante todo el proceso de investigación (Masciotra, 2018).

Las entrevistas fueron grabadas con el consentimiento expreso de los participantes, utilizando un dispositivo móvil. Posteriormente, fueron transcritas manualmente con el programa Word, sin utilizar mecanismos automáticos de transcripción, para asegurar la fidelidad a los testimonios originales. Durante el proceso de desgrabación, se tomaron notas clave que permitieron identificar patrones de discurso, como sentimientos y percepciones recurrentes, lo que facilitó el análisis de las tensiones de sentido entre las vivencias de los comuneros y los procesos judiciales en los que se vieron involucrados.

Las transcripciones completas de las entrevistas están disponibles en el Apéndice de este trabajo, lo que permite garantizar la transparencia en la presentación de los datos y posibilita la revisión detallada de los testimonios recogidos. Asimismo, se respetó la espontaneidad de muchas de las entrevistas, las cuales se desarrollaron en el marco de reuniones comunitarias, enriqueciendo el análisis con testimonios naturales y genuinos. En otros casos, las entrevistas fueron previamente concertadas, lo que permitió la preparación de preguntas más específicas sobre los temas a tratar.

Se garantizó el respeto de los derechos de los participantes, así como la integridad de los datos, asegurando que los resultados de la investigación sean tanto rigurosos como éticamente sólidos.

Capítulo II. La cuestión indígena en Latinoamérica.

La cuestión indígena.

La cuestión indígena abarca una compleja serie de desafíos históricos, sociales, políticos y económicos que han afectado profundamente a los pueblos originarios de América Latina. En esencia, esta problemática refleja la lucha persistente de las comunidades indígenas por el pleno reconocimiento de sus derechos colectivos, territoriales, culturales y políticos, los cuales han sido sistemáticamente negados o minimizados por las estructuras estatales a lo largo de la historia (Carrasco, 2000; Espósito, 2014; Frites, 2011; Lagos y Gutiérrez, 2006; Lenton, 2018; Rivera Cusicanqui, 2010).

A lo largo del tiempo, estos derechos han sido minimizados, generando una resistencia que se extiende desde las primeras etapas coloniales hasta nuestros días (Carrasco, 2000). La cuestión indígena, por lo tanto, se configura como una batalla constante contra los procesos de exclusión, invisibilización y asimilación promovidos por políticas estatales y coloniales, las cuales han intentado homogeneizar la diversidad cultural y étnica de los territorios (Briones, 2005; Espósito, 2017; Lenton, 2010; Madrazo, 2005).

En las últimas décadas, los pueblos indígenas de América Latina han emergido como actores políticos y sociales de gran relevancia, tanto en sus países de origen como a nivel internacional. Este fenómeno ha llevado a la consolidación de movimientos de resistencia que impulsan la reivindicación de derechos étnicos, culturales y territoriales. Peralta y Arrueta (2017) destacan que las estrategias de lucha por la liberación del sujeto indígena han sido una constante en la historia latinoamericana. Sin embargo, estos esfuerzos no han tenido la misma magnitud en todas las regiones. Mientras que en países como Bolivia y Ecuador los movimientos indígenas han adquirido un papel central a través de insurgencias armadas, movilizaciones masivas y participación electoral, en Argentina la visibilidad de estos movimientos ha sido menor.

La lucha por la autonomía y el respeto de los derechos indígenas en Argentina comparte ciertos rasgos con los movimientos de otros países latinoamericanos, aunque también presenta características propias que responden a su historia particular. Bonfil Batalla (1972) sostiene que la categoría de indígena en América Latina no se refiere únicamente a características étnicas o culturales, sino que representa una categoría social construida a partir de relaciones de subordinación con otros sectores del sistema social global, una relación que tiene sus raíces en la colonización. Esta perspectiva subraya que la condición de ser indígena no se trata únicamente de una diferencia cultural, sino de una experiencia de subordinación impuesta por un sistema colonial

y estatal que ha perdurado en el tiempo, manifestándose en la exclusión social y la marginación de estos pueblos (Belli, Slavutsky y Torres, 2017; Carrasco, 2000; Lagos y Gutiérrez, 2006; Lenton, 2018; Peralta y Arrueta, 2017).

En este contexto, la figura del sujeto indígena en Argentina fue perdiendo protagonismo a medida que las políticas liberales y neoliberales, especialmente en el siglo XX, promovieron la invisibilización de lo indígena y exaltaron al migrante europeo como el modelo representativo de lo nacional. Esta dinámica provocó una profunda fragmentación étnica en la sociedad argentina, separando a los migrantes europeos, criollos e indígenas, y acentuando las desigualdades identitarias y culturales (Carrasco, 2000; Espósito, 2014; Frites, 2011; Lenton, 2018; Rivera Cusicanqui, 2010).

En Argentina, la cuestión indígena adquiere una relevancia particular debido a la contradicción existente entre el reconocimiento formal de los derechos indígenas en la Constitución de 1994 y las dificultades prácticas que enfrentan las comunidades para ejercer dichos derechos. La reforma constitucional de 1994 marcó un hito al reconocer la preexistencia de los pueblos originarios y consagrar sus derechos territoriales. Sin embargo, la implementación efectiva de estos derechos continúa siendo obstaculizada por múltiples barreras legales y administrativas. Entre estos desafíos, la restitución de tierras emerge como un tema central en la lucha de las comunidades indígenas por alcanzar la plena realización de sus derechos (Belli, Slavutsky y Torres, 2017; Fernández, 2017; Peralta y Arrueta, 2017).

Para los pueblos indígenas, el territorio trasciende su dimensión como recurso económico; constituye un elemento central de su identidad, cultura y espiritualidad. Según los estudios de Belli, Slavutsky y Torres (2017), a pesar del reconocimiento legal de los derechos territoriales en Argentina, las comunidades indígenas continúan enfrentando serias dificultades para lograr la efectiva entrega de las tierras que les corresponden. Estas dificultades se derivan de procesos burocráticos complejos y prolongados, que perpetúan su exclusión y marginación. Esta situación pone de manifiesto una contradicción significativa entre el reconocimiento constitucional de los derechos territoriales y su implementación práctica.

Además del derecho territorial, la cuestión indígena en Argentina está estrechamente relacionada con la construcción de identidades colectivas. Los pueblos indígenas no solo luchan por la restitución de sus tierras, sino también por el reconocimiento de su identidad cultural y su derecho a existir como colectivos diferenciados dentro de la sociedad nacional. Fernández (2017) argumenta que los relatos orales y escritos han jugado un papel clave en la construcción de las

identidades colectivas indígenas, tanto en el fortalecimiento de su resistencia como en la perpetuación de estereotipos negativos. A lo largo de la historia, estos relatos han sido utilizados para justificar la marginación de los pueblos indígenas, presentándolos como "el otro", un sujeto ajeno a la nación moderna y europea que se construyó en Argentina. Sin embargo, esos mismos relatos también han servido como herramientas de resistencia y empoderamiento cultural, permitiendo a las comunidades indígenas reafirmar su identidad y su derecho a existir como sujetos colectivos con una historia y un futuro propios (García Canclini, 1993; Hernández Castillo y Rueda, 2021; Prats, 2000; Yankillevich, 2016).

Stavenhagen (2004) señala que los pueblos indígenas han sido sistemáticamente excluidos de los marcos normativos dominantes de los Estados-nación en América Latina. El reconocimiento de los derechos indígenas debe ir más allá de una simple integración dentro de los sistemas legales existentes. En cambio, es necesario respetar y proteger las formas de organización social, las cosmovisiones y la relación especial que los pueblos indígenas tienen con su territorio. La demanda territorial no es solo una cuestión de derechos de propiedad, sino una reivindicación fundamental de su identidad y cultura. En este sentido, el territorio es visto como un espacio sagrado, vinculado a la historia y la espiritualidad de los pueblos indígenas, y su lucha por recuperarlo es también una lucha por su supervivencia como pueblos (Frites, 2011).

Bengoa (2009) complementa esta visión al argumentar que la emergencia indígena en América Latina no es solo un fenómeno de reconocimiento de derechos, sino un cuestionamiento profundo de las estructuras de poder y de las formas en que los Estados han tratado a las minorías étnicas. Los movimientos indígenas han obligado a los Estados a repensar su relación con las comunidades indígenas y a replantear las estructuras de poder que han perpetuado su exclusión (García Canclini, 1993; Hernández Castillo y Rueda, 2021).

Los derechos indígenas desde la antropología jurídica.

La antropología jurídica proporciona un marco teórico y crítico para analizar el derecho no sólo como un sistema normativo, sino como un campo de poder que moldea y transforma las relaciones sociales, particularmente en contextos de asimetría de poder. Correas (1993) argumenta que el derecho no es un mecanismo neutro de regulación social, sino una herramienta ideológica profundamente imbricada en la reproducción de las relaciones capitalistas y el control social. Este enfoque es particularmente relevante para el análisis de los procesos de juridización que afectan a los pueblos indígenas y otros colectivos marginados.

Correas (1994) enfatiza que el derecho funciona como una ideología formalizada que encubre las relaciones de poder detrás de un velo de objetividad y lejos de ser un conjunto de normas aplicadas de manera universal, el derecho se presenta como un discurso prescriptivo que autoriza ciertos comportamientos y sanciona otros, en función de los intereses dominantes. Este proceso de producción y reproducción del derecho asegura que las relaciones sociales continúen estructurando en torno a las dinámicas de poder vigentes (Das y Poole, 2008; Schavelzon, 2010; Yankillevich, 2019b).

Desde este enfoque, la antropología jurídica permite el análisis crítico de cómo los sistemas jurídicos legitiman y perpetúan formas específicas de exclusión y marginalización al colocar en primer plano las estructuras de poder y los intereses que subyacen en la producción del derecho, se desvela el carácter profundamente ideológico de las normativas legales (Correas, 1993; Yankillevich, 2019b).

La conceptualización de juridización, es entendida como el proceso mediante el cual el Estado transforma las identidades fluidas y dinámicas de ciertos colectivos en categorías legales objetivas y fijas. Este proceso, como argumenta Correas (1993), es particularmente problemático en el caso de las identidades indígenas, donde el derecho impone marcos normativos que muchas veces no reflejan la realidad vivida por estas comunidades (Schavelzon, 2010).

En el contexto de los pueblos indígenas de Argentina, la incorporación de sus derechos en el ordenamiento jurídico nacional ha sido un proceso que, aunque busca reconocer su preexistencia étnica y cultural, lo hace bajo términos que están predeterminados por el Estado y sus instituciones. Este proceso de juridización implica la creación de identificaciones jurídicas que distorsionan las identidades vividas (Correas, 1993). Las primeras son construcciones impuestas desde el marco legal del Estado, mientras que las segundas son construcciones dinámicas y autoperceptivas que emergen de la interacción cotidiana y la experiencia cultural. Así, la intervención del derecho en la vida de las comunidades indígenas no solo las regula, sino que también redefine quiénes son, qué derechos tienen y cómo deben ejercer esos derechos (Das y Poole, 2008; Schavelzon, 2010).

Este proceso de juridización implica la creación de identificaciones jurídicas que distorsionan las identidades vividas (Correas, 1993). Las primeras, al ser construcciones impuestas desde el marco legal del Estado, tienden a reducir y simplificar la complejidad de las identidades dinámicas y autoperceptivas que emergen de la interacción cotidiana y de la experiencia cultural de las comunidades. En este sentido, la intervención del derecho en la vida de las comunidades indígenas

no solo regula sus prácticas, sino que también redefine quiénes son, qué derechos poseen y cómo deben ejercerlos (Correas, 2004; Das y Poole, 2008; Schavelzon, 2010; Yankillevich, 2019b).

Lejos de constituir una simple formalización de derechos, este proceso de juridización se configura como un mecanismo de control social. Al categorizar a las comunidades indígenas bajo definiciones legales predeterminadas, el Estado delimita las formas en que estas comunidades pueden negociar su identidad y sus derechos territoriales. Así, el derecho no solo actúa como un reflejo de las relaciones de poder existentes, sino también como un instrumento activo en la creación y reproducción de dichas relaciones (Correas, 1993). Este enfoque pone de manifiesto la función del derecho como herramienta que, en lugar de empoderar plenamente a las comunidades indígenas, refuerza dinámicas de subordinación y exclusión.

Es en este campo de conflicto donde la lucha por el reconocimiento de los derechos indígenas adquiere relevancia. Como sostiene Correas (1994), el derecho es un discurso de poder, y su función principal es legitimar las estructuras de dominación que subyacen en la sociedad capitalista. La creación de normativas legales que reconocen los derechos territoriales de los pueblos indígenas, por ejemplo, no se produce en un vacío, sino en un contexto en el que el Estado busca controlar y gestionar estos territorios de acuerdo con intereses económicos y políticos más amplios. La intervención del derecho en estos procesos debe ser vista, por tanto, como parte de una estrategia más amplia de control y regulación de las poblaciones indígenas.

A pesar de su carácter ideológico y su papel en la reproducción de las relaciones de poder, el derecho también puede ser una herramienta de resistencia. La antropología jurídica no solo analiza cómo el derecho moldea y regula las vidas de las personas, sino también cómo estas utilizan las normativas legales para resistir y reivindicar sus derechos. En el caso de los pueblos indígenas, las comunidades han recurrido a los marcos legales para hacer valer sus demandas territoriales y culturales, aunque estas normativas están limitadas por los intereses del Estado (Das y Poole, 2008; Schavelzon, 2010).

Correas (1993) señala que el derecho puede ser utilizado por aquellos sectores que buscan transformar las relaciones de poder, advierte también que esta resistencia debe ser entendida como parte de una lucha constante, ya que el derecho, en última instancia, sigue siendo una herramienta controlada por el Estado y sus instituciones. Las comunidades indígenas que logran utilizar el derecho para su beneficio lo hacen dentro de los límites establecidos por el Estado, lo que refleja las tensiones inherentes en el uso del derecho como herramienta de emancipación.

La colonialidad del poder y la creación de cuerpos legales.

El sistema colonial, instaurado desde la llegada de los europeos a América Latina, fue fundamental en la configuración de las estructuras jurídicas que perduran hasta nuestros días. Este sistema no solo implicaba la dominación política y económica, sino también la imposición de un orden legal diseñado para mantener y justificar dicha dominación, Quijano (2020) en su análisis sobre la colonialidad del poder, destaca cómo el colonialismo no se limitó a la explotación de recursos, sino que también instauró un marco normativo que clasificaba y subordinada a las poblaciones colonizadas en función de una jerarquía racial y étnica (Segato, 2021; Sousa Santos, 2007).

Durante el periodo colonial, los cuerpos legales se crearon con el propósito de consolidar el control sobre los territorios conquistados y sus habitantes. Estas leyes estaban diseñadas para beneficiar a los colonizadores europeos, garantizándoles el acceso y control sobre la tierra y los recursos naturales, mientras que las poblaciones indígenas y afrodescendientes eran relegadas a posiciones de servidumbre y marginalidad Mignolo (2010) explica cómo estas estructuras legales y políticas se establecieron para perpetuar el poder colonial y asegurar los intereses de los colonizadores. De manera similar, Quijano (2014) analiza cómo estas instituciones fueron diseñadas para mantener el dominio sobre los territorios y las poblaciones subyugadas.

Un ejemplo paradigmático de esta dinámica histórica es el sistema de encomiendas, el cual legitimaba la explotación de la mano de obra indígena bajo el pretexto de su evangelización y protección. En la práctica, sin embargo, este sistema operaba como un mecanismo de esclavitud encubierta, consolidando el control colonial sobre las poblaciones originarias. Dunbar-Ortiz (2001) analiza cómo las políticas coloniales en las Américas estaban diseñadas para despojar a los pueblos indígenas de sus tierras y recursos, utilizando estructuras como las encomiendas para institucionalizar esta explotación. Por su parte, Galeano (2010) describe cómo las leyes y las estructuras coloniales favorecían de manera sistemática a los colonizadores europeos, facilitando la apropiación de los recursos naturales y la explotación de la mano de obra indígena y afrodescendiente.

En esta misma línea, Rivera Cusicanqui (2010) aporta un análisis crítico sobre la continuidad histórica de estas dinámicas de opresión. La autora examina cómo las leyes, tanto coloniales como postcoloniales, han perpetuado la marginación de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, reproduciendo estructuras de desigualdad y explotación profundamente arraigadas en la época colonial. Estos enfoques evidencian que, lejos de ser erradicadas, las prácticas de despojo y

subordinación han sido reformuladas bajo nuevos discursos legales y políticos, reafirmando su impacto en las relaciones sociales y económicas contemporáneas.

La imposición de un sistema jurídico eurocéntrico tuvo efectos duraderos en las sociedades colonizadas, porque imponían una visión del mundo que desvalorizaba y reprimía los sistemas normativos y culturales indígenas, proceso de legalización de la dominación, que contribuyó a la desarticulación de las estructuras sociales autóctonas y a la creación de nuevas identidades sociales subordinadas (Mignolo, 2007; Quijano, 2014; Sousa Santos, 2009).

> En Europa están en formación, o ya están formadas, las instituciones modernas de autoridad: los Estados-nación modernos y sus respectivas identidades. Pero en la no-Europa sólo son percibidas las tribus y las etnias como el pasado pre-moderno, pues ellas serán reemplazadas en algún futuro por Estados-nación "como en Europa (Quijano, 2014, p. 311.)

Lo descripto se extendió más allá del periodo colonial, ya que muchas de las estructuras legales coloniales se mantuvieron intactas o fueron solo parcialmente modificadas. Las élites criollas, que heredaron el poder de los colonizadores europeos, adaptaron el marco legal existente para mantener su control sobre las tierras y la economía, perpetuando así las desigualdades establecidas durante la colonia (Galeano, 2010; Mignolo, 2010; Quijano, 2020).

Uno de los principales mecanismos utilizados fue la promulgación de leyes que regulaban la propiedad de la tierra. En muchas colonias, los colonizadores europeos usurparon vastas extensiones de tierra de las comunidades indígenas, implementando sistemas de propiedad que despojaron a estas poblaciones de sus territorios ancestrales. Este despojo se justificaba legalmente mediante la doctrina del terra nullius, que declaraba las tierras habitadas por los pueblos indígenas como vacías y, por lo tanto, disponibles para su colonización. Este marco legal, no solo facilitó la apropiación de recursos naturales, sino que también estructuró una jerarquía social donde los colonizadores poseían los medios de producción, mientras que los indígenas y otros grupos colonizados eran relegados a roles marginales y explotados como mano de obra (Assís Clímaco et al., 2023; Veracini, 2011; Wolfe, 2006).

> Se trata de la perspectiva cognitiva producida en el largo tiempo del conjunto del mundo eurocentrado del capitalismo colonial / moderno, y que naturaliza la experiencia de las gentes en este patrón de poder. Esto es, la hace

> percibir como natural, en consecuencia, como dada, no susceptible de ser cuestionada (Quijano, 2014, p. 287).

Además de las normativas relacionadas con la propiedad de la tierra, el sistema colonial implementó regulaciones estrictas sobre el trabajo, institucionalizando la explotación laboral a través de mecanismos como la encomienda y la mita en América Latina. Estas prácticas, sustentadas en cuerpos legales coloniales, legitimaban el trabajo forzado y la servidumbre, consolidando una estructura de dependencia y explotación permanente para las poblaciones colonizadas.

Las leyes laborales coloniales no solo operaban como herramientas de extracción económica, sino también como instrumentos de control social, diseñados para mantener a las poblaciones bajo una vigilancia estricta y un régimen disciplinario impuesto por los colonizadores. Estas normativas reforzaban la subordinación, perpetuando desigualdades estructurales que aún resuenan en la actualidad (Assís Clímaco et al., 2023; Galeano, 2010; Rivera Cusicanqui, 2010).

De este modo, el orden jurídico colonial se configuró como un dispositivo central para la consolidación del poder imperial, articulando la explotación económica con la dominación sociopolítica en un sistema que negaba cualquier posibilidad de autonomía a los pueblos colonizados. Este marco legal no solo legitimaba las estructuras de poder existentes, sino que también las reforzaba al establecer jerarquías que perpetuaban la subordinación.

Según Quijano (2014), "desde la inserción de América en el capitalismo mundial moderno/colonial, las personas han sido clasificadas y continúan siendo clasificadas según tres ejes interrelacionados: trabajo, género y raza" (p. 312). Estas categorías, organizadas dentro de una estructura global común definida por la colonialidad del poder, han sido fundamentales para la reproducción de un sistema que combina explotación económica con opresión cultural y social.

La propuesta de Mignolo (2010) parte de una gramática de la descolonialidad que sugiere la necesidad de un nuevo lenguaje, con una nueva lógica para abordar las cuestiones de justicia y derechos en el contexto poscolonial. Esta gramática de la descolonialidad tiene como base la idea de la pluriversalidad, que reconoce la existencia de múltiples universos de conocimiento y experiencia. En lugar de imponer una única visión del derecho y de justicia, este enfoque promueve el diálogo y la cooperación entre diferentes perspectivas y tradiciones jurídicas, creando un espacio para que las voces marginadas sean escuchadas y respetadas.

> La colonialidad: el lado más oscuro de la modernidad, se ocupa fundamentalmente de la matriz colonial de poder. Es concebir una relación inicua entre modernidad y colonialidad en el sentido de que no puede haber modernidad sin colonialidad y que la colonialidad sigue siendo constitutiva de la modernidad, expresándose la modernidad como retórica y la segunda como lógica en un marco de anverso y reverso de un mismo elemento. Mignolo, 2010, p. 210).

Las perspectivas decoloniales, tal como lo sostiene Mignolo (2010) proponen una reestructuración de las instituciones legales para que reflejen y respeten la diversidad cultural y las realidades sociales de todas las comunidades. Esto incluye la creación de mecanismos legales que permitan la participación efectiva de las comunidades indígenas en la formulación de políticas y leyes que afectan sus vidas, así como el desarrollo de marcos legales que protejan sus derechos colectivos, incluyendo los derechos territoriales, culturales y de autodeterminación.

> La postura de Fanon y las anticipaciones de Mariátegui en 1920 predijeron las consecuencias y deterioro bajo la retórica de la modernidad de la formación de colonias en las Indias Occidentales y de los peligros de la nueva historia imperial de los Estados Unidos y su política hacia América Latina (Mignolo, 2010, p. 211).

También enfatiza Mignolo (2010), sobre la necesidad de un desprendimiento epistémico, un proceso que implique desaprender los marcos de conocimiento coloniales y construir nuevos paradigmas basados en la pluriversalidad y el diálogo intercultural, argumenta que las estructuras legales occidentales, presentadas como universales reflejan una perspectiva particular y excluyente. Es necesario, para construir un sistema legal verdaderamente inclusivo, reconocer y valorar las múltiples formas de entender y vivir el derecho y la justicia, arraigadas en las experiencias y saberes locales de las comunidades históricamente excluidas.

> Son instancias de apropiación por parte de actores epistémica y ontológicamente racializados que en lugar de hacer méritos para ser aceptados en la sociedad que los y las niega, optan por la trayectoria descolonial, esto es, por el desprendimiento en vez de la asimilación en inferioridad de condicione. De aquí surge entonces la epistemología fronteriza como método de pensamiento descolonial, donde los actores involucrados tienen en común

> la experiencia de la herida colonial, “la experiencia de los damnés, de las y los no adecuados al orden “normal” de la sociedad. (Mignolo, 2010, p. 210).

Es América del Sur, la que está viviendo cambios, innovaciones y rupturas históricas, señala Walsh (2008) la que perfila nuevas formaciones, construcciones y articulaciones sociopolíticas y epistémicas de Estado y que son resultado en parte de las estrategias de acción y lucha de los movimientos ancestrales, de su insurgencia política-epistémica y se están abriendo camino a la posibilidad de un nuevo horizonte, de un vuelco o giro, de carácter decolonial.

> Procesos que han permitido –en forma casi naturalizada– la reproducción de la estratificación, la violencia y la segregación dentro de un Estado y sociedad «civilizadamente» excluyentes. El hecho de que hoy este mismo discurso de mestizaje –ahora renovado con los reclamos del hibridismo del mundo globalizado– sirve para sostener los argumentos de que la racialización, el racismo y la injusticia racial no existen –es decir para negar el uso pasado y presente de «raza» como patrón de poder y por ende, de descalificar las luchas en torno a políticas reparativas y de transformación estatal– es evidencia de la operación continua de la colonialidad, inclusive entre intelectuales (blanco-mestizos) de la llamada izquierda (Walsh, 2008, p. 137).

Desde la perspectiva decolonial, Mignolo (2010) y Quijano (2020) sostienen que comprender la exclusión jurídica sostenida por el sistema colonial, no puede simplemente ser una cuestión de falta de acceso o representación dentro de los sistemas legales existentes, es una manifestación de decolonización del conocimiento, del poder y del ser, abogando por una reconfiguración radical de los conceptos y prácticas legales, entendiendo que el objetivo es desmantelar las estructuras de poder coloniales, lo cual es fundamental para construir sistemas legales que reflejen la diversidad y la justicia social en un contexto poscolonial. Este tipo de proceso implica la inclusión de nuevas voces y perspectivas en el ámbito jurídico, asegurando una representación más equitativa y justa para todas las comunidades.

> El lugar central de la “corporeidad”, en este plano, lleva a la necesidad de pensar, de repensar, vías específicas para su liberación, esto es, para la liberación de las gentes, individualmente y en sociedad, del poder, de todo poder. Y la experiencia histórica hasta aquí apunta a que no hay camino distinto

> que la socialización radical del poder para llegar a ese resultado. Eso significa, la devolución a las gentes mismas, de modo directo e inmediato, del control de las instancias básicas de su existencia social: trabajo, sexo, subjetividad, autoridad. (Quijano, 2014, p. 325).

En el contexto de las perspectivas decoloniales, la exclusión jurídica se manifiesta en varias formas, una de las más evidentes es la falta de reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades indígenas. A pesar de las declaraciones internacionales y las reformas legales en algunos países, muchas de estas comunidades continúan luchando por el reconocimiento legal de sus tierras ancestrales. Esta exclusión jurídica se perpetúa a través de la complicidad entre el Estado y los intereses corporativos que buscan explotar los recursos naturales en tierras indígenas.

> Porque es esa distribución del poder entre las gentes de una sociedad la que las clasifica socialmente, determina sus recíprocas relaciones y genera diferencias sociales, ya que sus características, empíricamente observables y diferenciables, son resultado de esas relaciones de poder, sus señales y sus huellas. Se puede partir de éstas para un primer momento y nivel de aprehensión de las relaciones de poder, pero no tiene sentido hacer residir en ellas la naturaleza de su lugar en la sociedad (Quijano, 2014 p. 321).

Otro aspecto crucial de la exclusión jurídica es la imposición de un sistema legal homogéneo que ignora las particularidades culturales y las formas de organización social de las comunidades indígenas. Los sistemas normativos indígenas, que valoran la tierra de manera colectiva y priorizan la resolución de conflictos a través de la reconciliación y la restauración, son frecuentemente deslegitimados por el derecho occidental, el cual enfatiza la propiedad privada y la justicia retributiva. Esta imposición no solo excluye a las comunidades indígenas de la protección legal, sino que también socava su autonomía y capacidad de autogobierno (Anaya, 2005; Quijano, 2020; Stavenhagen, 2008).

En este contexto, Quijano (2014) señala que "la dominación hace posible la explotación y no se la encuentra, sino muy raramente, actuando por separado" (p. 315). Este planteamiento subraya cómo el sistema legal occidental opera no solo como un mecanismo de exclusión, sino también como un instrumento de dominación que perpetúa las dinámicas de subordinación y explotación en contra de las comunidades indígenas.

También subraya la necesidad de reconocer y legitimar la pluralidad jurídica, esto implica aceptar la coexistencia de múltiples sistemas legales dentro de un mismo territorio, permitiendo que los sistemas normativos indígenas y afrodescendientes sean reconocidos y respetados. La pluralidad jurídica no es solo una cuestión de justicia histórica, sino también una manera de fortalecer la democracia y la equidad, permitiendo que todas las voces y formas de conocimiento participen en la construcción del orden social (Quijano, 2014).

> Ha llegado el momento, y el proceso ya está en marcha, para la re-escritura de la historia mundial desde la perspectiva y la conciencia crítica desde la colonialidad y desde la corpopolítica y la geopolítica del conocimiento" (96); todo lo cual conduce, a través del desprendimiento, a teorías críticas descoloniales y a la pluriversalidad no eurocentrada de un paradigma-otro. El primer paso para una gramática de la descolonialidad —nos propone Mignolo— es "aprender a desaprender para poder así re-aprender (Mignolo, 2010, p. 211).

Las luchas decoloniales constituyen un elemento fundamental para analizar los procesos de transformación social en América del Sur, al centrarse en el desmantelamiento de las jerarquías y desigualdades estructurales que han persistido como legado del colonialismo y el neocolonialismo. Estas luchas no solo representan un esfuerzo por corregir las injusticias históricas, sino que también son esenciales para la construcción de un nuevo contrato social que valore la diversidad cultural y promueva la justicia y la equidad entre los distintos pueblos.

Lejos de limitarse a reformas superficiales, las luchas decoloniales plantean una reconfiguración profunda de las estructuras de poder, cuestionando las lógicas hegemónicas y abriendo paso a modelos alternativos de organización social. Este proceso incluye la reivindicación de la autonomía de los pueblos indígenas y su reconocimiento como actores centrales en la construcción de sociedades plurales e inclusivas. En este contexto, dichas luchas no solo desafían las narrativas dominantes, sino que también contribuyen a la creación de espacios de participación y decisión que prioricen la redistribución del poder y el reconocimiento de los saberes y prácticas subalternos (Mignolo, 2007; Quijano, 2020).

Manifestaciones contemporáneas de lo colonial. Los nexos interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad.

Desde una perspectiva lingüística y culturalmente informada, Walsh (2008) subraya la importancia de distinguir entre los términos multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad, ya que cada uno posee genealogías y significados específicos que reflejan enfoques y contextos históricos distintos. Este análisis implica un cambio profundo en la forma de concebir y valorar el conocimiento, promoviendo una interacción y un diálogo genuino entre culturas bajo condiciones de igualdad.

Walsh (2008) argumenta que esta distinción no solo desafía las epistemologías hegemónicas, sino que también reivindica los conocimientos y prácticas indígenas, históricamente relegados al margen de los sistemas de saber dominantes. De este modo, la interculturalidad, en particular, se presenta como una propuesta política y epistemológica que busca transformar las relaciones de poder, abriendo espacios para la coexistencia de múltiples formas de conocimiento y promoviendo un equilibrio entre diferentes cosmovisiones.

La multiculturalidad y la pluriculturalidad en Walsh (2008) son términos descriptivos que se emplean para caracterizar la coexistencia de diversas culturas en un espacio determinado, promoviendo su reconocimiento, tolerancia y respeto. En términos generales, la multiculturalidad tiene sus raíces en las sociedades occidentales, asociada a un relativismo cultural que reconoce la diversidad cultural pero que, a menudo, pasa por alto las dimensiones relacionales y las desigualdades sociales persistentes. Este término ha sido adoptado frecuentemente, orientando políticas estatales y transnacionales de inclusión, especialmente dentro de un marco neoliberal que promueve la integración de las diversas culturas en el mercado global sin necesariamente abordar las inequidades subyacentes.

Por otro lado, la pluriculturalidad es un término que ha ganado mayor relevancia en América del Sur, reflejando las especificidades de la región donde, durante siglos, pueblos indígenas y afrodescendientes han convivido con poblaciones blanco-mestizas. En este contexto, el mestizaje y la mezcla racial han desempeñado un papel significativo. La pluriculturalidad denota la coexistencia de múltiples culturas en el mismo territorio, aunque esta convivencia no siempre implica una interrelación profunda y equitativa entre las diferentes culturas (Walsh, 2008).

La interculturalidad, en cambio, se diferencia (Walsh, 2008) claramente de los términos anteriores al enfatizar no sólo la coexistencia de diversas culturas, sino también la interacción y el diálogo

equitativo entre ellas. La interculturalidad promueve una relación más dinámica y bidireccional entre las culturas, buscando no solo el reconocimiento mutuo sino también la transformación conjunta y el enriquecimiento recíproco. Este enfoque es particularmente relevante en contextos donde la historia de dominación y exclusión ha generado profundas inequidades, y donde la interculturalidad se plantea como una herramienta para desmantelar las estructuras de poder coloniales y promover una justicia social y epistémica.

A pesar de sus diferencias, el uso intercambiable de los términos multiculturalidad, interculturalidad y pluriculturalidad es frecuente, incluso en muchas de las Constituciones reformadas de América del Sur durante la década de los noventa. Estas reformas suelen hacer referencia al carácter diverso de los países sin siempre distinguir claramente entre los conceptos. No obstante, es fundamental reconocer que mientras la multiculturalidad tiende a concebir las culturas como entidades separadas y relativamente autónomas dentro de un marco dominante, la pluriculturalidad y la interculturalidad buscan reconocer y fomentar la convivencia y el diálogo equitativo entre las diversas culturas en un mismo espacio territorial (Walsh, 2008).

La importancia de su diferenciación es esencial no sólo distinguir entre estos términos sino también comprender sus implicaciones prácticas y políticas en la promoción de sociedades más justas e inclusivas, encontrando en la interculturalidad, con su énfasis en la interacción y el diálogo, un camino prometedor para abordar y superar las desigualdades que persisten en contextos de diversidad cultural (Walsh, 2008).

Reconocimiento de sistemas jurídicos indígenas y otros sistemas legales basados en la cultura.

El legado colonial ha dejado una profunda huella en las sociedades indígenas y en sus sistemas normativos. Según Villoro (1998) y Rivera Cusicanqui (2010), la imposición de sistemas legales coloniales no solo marginó las prácticas normativas indígenas, sino que también intentó borrar su existencia mediante la centralización del poder normativo en el Estado. Este proceso de homogeneización legal ha complicado la integración de los sistemas jurídicos indígenas en el marco legal estatal actual, subrayando la necesidad de un enfoque cuidadoso y respetuoso para reconocer su validez y legitimidad (Sousa Santos, 1997,1998; Stavenhagen, 2010; Yrigoyen Fajardo, 2000).

En este sentido, la historia de la colonización subraya la importancia de un pluralismo jurídico que respete las particularidades culturales de los pueblos indígenas. Según Arizpe (1984), el arraigo

de los conceptos de integración y centralización lleva a la reapertura del debate en torno a la sociedad plural, destacando la necesidad de un enfoque que permita la coexistencia de diferentes sistemas legales dentro de un mismo territorio sin que unos se impongan sobre los otros (Sousa Santos 1991, Yrigoyen Fajardo, 2004).

El reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas y otros sistemas legales basados en la cultura es esencial para la construcción de un pluralismo jurídico que respete la diversidad cultural y étnica en América Latina. Este reconocimiento no solo es un paso hacia la justicia histórica, sino también una necesidad actual para la preservación de las identidades y prácticas culturales de los pueblos indígenas. El pluralismo jurídico es fundamental para construir sociedades más equitativas, donde la diversidad cultural sea reconocida y respetada, permitiendo que los sistemas normativos indígenas no sólo coexisten, sino que también se integren en los marcos legales nacionales sin ser absorbidos o dominados por el derecho estatal (Rivera Cusicanqui, 2010; Sousa Santos, 2003; Stavenhagen, 2002; Villoro, 1998; Yrigoyen Fajardo, 2004). La articulación del pasado y el presente, respecto a los sucesos producidos por los colonizadores y los colonizados, reconfiguran constantemente las narrativas de la historia natural (Huanca-Arohuanca, et al. 2020).

Yrigoyen Fajardo (2004) y Villoro (1996) subrayan la importancia de este reconocimiento para la justicia social en América Latina, donde los derechos consuetudinarios indígenas deben ser incorporados en el derecho estatal sin que esto implique su desaparición o subordinación. Para estos autores, la coexistencia de sistemas normativos que operan en paralelo al derecho estatal es un reflejo de la diversidad cultural y una manifestación de la autonomía de los pueblos indígenas. En este sentido, la justicia pluralista implica no solo el reconocimiento formal de estos sistemas, sino también la creación de un espacio legal donde puedan operar de manera independiente y eficaz (Rivera Cusicanqui, 2010; Stavenhagen, 2002; Villoro, 2020).

Correas (1993) argumenta que el pluralismo jurídico es viable en la teoría, pero que su aplicación está limitada por la ideología de soberanía del Estado moderno, que impide reconocer la coexistencia de sistemas jurídicos en un mismo territorio. Esta ideología, profundamente arraigada en la formación de los juristas y funcionarios del Estado, dificulta la aceptación de los sistemas jurídicos indígenas como válidos y eficaces, aunque cumplan con los mismos requisitos normativos que el derecho estatal.

El pluralismo jurídico no solo debe ser entendido como la coexistencia de diferentes sistemas legales, sino también como un diálogo continuo entre estos sistemas y el Estado. Este diálogo debe

basarse en el respeto mutuo y la comprensión de que cada sistema legal tiene su propia lógica y legitimidad. Para lograr este objetivo, es esencial que los Estados adopten un enfoque de igualdad compleja, como propone Walzer (1996), que se respete las particularidades de cada sistema legal y garantice que ninguno domine o suprima a los demás.

El reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas no es solo una cuestión de justicia histórica, sino también una necesidad para la supervivencia de las identidades y prácticas culturales de los pueblos originarios. En todos los países de la marginalidad se plantea la autonomía de la moral y la ciencia implicadas al ejercicio del poder (Huanca-Arohuannca, et al. 2020).

Esto resalta la importancia de permitir que los sistemas jurídicos indígenas operen con autonomía dentro de sus propias esferas, sin la interferencia o dominación del Estado. El arraigo de los conceptos de integración y centralización, los acontecimientos llevan a la reapertura del debate en torno a la sociedad plural (Arizpe, 1984).

Esto implica una dinámica de resistencia y preservación de las identidades culturales frente a la hegemonía del derecho estatal Rivera Cusicanqui (2010) y Stavenhagen (2002) argumentan que el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas es una forma de resistencia ante la homogeneización cultural y legal impuesta por el Estado moderno. Estos sistemas no solo preservan las prácticas legales tradicionales, sino que también protegen la autonomía de los pueblos indígenas al establecer normas que regulan la vida comunitaria de acuerdo con sus cosmovisiones y valores.

Este enfoque de resistencia es central para comprender el papel del derecho indígena en la construcción de una justicia pluralista. Los sistemas normativos indígenas no son meramente alternativos al derecho estatal, sino que son parte integral de las comunidades indígenas, regulando la distribución de derechos y recursos, así como las relaciones sociales dentro de ellas. Para Rivera Cusicanqui (2010), esta autonomía es esencial para la preservación de la identidad cultural y para la continuidad de las prácticas ancestrales que han sido marginadas por el colonialismo y el posterior proceso de centralización estatal.

Walzer (1996), en su concepto de igualdad compleja, sostiene que un verdadero pluralismo jurídico no se limita a la coexistencia de sistemas legales, sino que implica un diálogo continuo y respetuoso entre ellos. Este diálogo debe basarse en el reconocimiento de la legitimidad de los sistemas jurídicos indígenas y en la protección de su autonomía frente a la dominación estatal. En este marco, el enfoque pluralista propone que cada sistema legal posee su propia lógica interna y

legitimidad, lo que requiere que el Estado no imponga su normatividad sobre los sistemas indígenas, sino que coexista con ellos de manera justa y equitativa.

La igualdad compleja, según Huanca-Arohuanca et al. (2020), "deviene, entonces, el opuesto a la tiranía, pues establece el conjunto de relaciones que hacen imposible la dominación, lo que genera una relación pluralista y democrática para los pueblos subyacentes" (p. 106). Este enfoque pluralista promueve no solo la coexistencia, sino también la construcción de un sistema jurídico inclusivo y respetuoso de la diversidad cultural, lo que representa un avance hacia una verdadera justicia social.

La integración de los sistemas jurídicos indígenas dentro del marco legal estatal plantea desafíos significativos. Como argumenta Correas (2013), la ideología de soberanía del Estado moderno dificulta la aceptación de estos sistemas, ya que su coexistencia implica un reto directo a la centralización del poder normativo estatal.

El reconocimiento de estos sistemas no solo debe ser formal, sino que debe estar acompañado de un compromiso real por parte del Estado para protegerlos de la marginalización y la absorción por parte del derecho estatal dominante. Sousa Santos (2007), sostiene que el pluralismo jurídico debe ser entendido como un proceso dinámico que requiere un diálogo constante entre los diferentes sistemas legales, donde ninguno domine o suprima a los demás. Este enfoque garantiza que los sistemas jurídicos indígenas puedan operar con autonomía dentro de sus propias esferas, sin interferencias externas que comprometan su eficacia.

Dinámicas de poder y resistencia en contextos jurídicos y sociales.

Los conceptos de campo y habitus desarrollados por Bourdieu (2007a, 2007b, 1990, 1991), permiten una comprensión profunda de las dinámicas de poder y resistencia en diversos contextos sociales y jurídicos. Estas herramientas teóricas han sido ampliamente utilizadas para analizar cómo las estructuras sociales condicionan las prácticas y estrategias de los individuos y colectivos, y cómo, a su vez, estos actores responden y negocian con dichas estructuras.

El campo se entiende como un espacio social estructurado, donde interactúan agentes con diferentes niveles de poder y recursos, mientras que el habitus se refiere a un conjunto de disposiciones adquiridas, que configuran las percepciones, pensamientos y acciones de los individuos en relación con su posición dentro del campo. Estas categorías analíticas han sido clave para estudiar las relaciones de dominación y resistencia, destacando las formas en que los agentes

sociales se posicionan y enfrentan las dinámicas de poder (Baranger, 2004; Corcuff, 2005a; Costa, 2006).

El habitus, es producto tanto de la historia individual como colectiva, y define los límites de lo posible para cada grupo de agentes, según su posición en el campo social. La lucha de poder, dentro de un campo jurídico se manifiesta a través del uso del capital legal, cultural y simbólico para establecer y mantener la legitimidad de ciertas interpretaciones y aplicaciones del derecho, que refieren cómo las estructuras de poder y legitimidad dentro de los campos sociales influyen en la creación y perpetuación de desigualdades (Cárcova, 2003; Corcuff, 2005b; García Inda, 2001; Kennedy, 2004; Marí, 1986; Rojo, 2005).

> El habitus es el principio generador de respuestas más o menos adaptadas a las exigencias de un campo, es el producto de toda la historia individual pero también, a través de las experiencias formadoras de la primera infancia de toda la historia colectiva de la familia y de la clase (Bourdieu, 1979b, p. 112 citado en Gutiérrez, 2006, p. 81).

El concepto de campo en Bourdieu (1991), se refiere a los espacios sociales estructurados donde se llevan a cabo las luchas por distintos tipos de capital. Cada campo posee sus propias reglas y estructuras que determinan qué tipos de capital son valorados. En el contexto jurídico, el campo legal se estructura alrededor de la legitimidad y el poder de definir la ley y su aplicación, es Bourdieu quien describe los campos como espacios de juego históricamente constituidos donde existen relaciones objetivas entre instituciones y agentes (Comaroff y Comaroff, 2009; Wacquant, 2013).

> El espacio social, y los grupos que en él se distribuyen, son el producto de luchas históricas (en las cuales los agentes se comprometen en función de su posición en el espacio social y de las estructuras mentales a través de las cuales aprehenden ese espacio (Bourdieu, 1987b, p. 26 citado en Gutiérrez, 2006, p. 89).

Según Baranger (2004), estos campos son producto de luchas históricas y se configuran por la posición de los agentes en el espacio social y las estructuras mentales a través de las cuales aprehenden dicho espacio. La lucha de poder dentro de un campo jurídico se manifiesta a través del uso del capital legal, cultural y simbólico para establecer y mantener la legitimidad de ciertas interpretaciones y aplicaciones del derecho. Das y Poole (2008) y Briones (1998), examinan cómo

el derecho se convierte en un instrumento de dominación cuando legitima ciertas identidades y excluye otras, produciendo y canonizando clasificaciones sociales.

> El capital se presenta bajo tres especies fundamentales (cada una de ellas teniendo sub-especies), a saber, el capital económico, el capital cultural y el capital social. A estas tres especies se debe añadir el capital simbólico que es la forma que una u otra de esas especies reviste cuando se la percibe a través de categorías de percepción que reconocen su lógica específica o, si se prefiere, que desconocen lo arbitrario de su posesión y de su acumulación (Bourdieu y Wacquant, 1992, p. 94 citado en Baranger, 2004).

Se observa que los agentes o actores sociales están integrados por una red de relaciones complejas y el campo, según Bourdieu (2007b), representa la configuración virtual de las posibilidades y alcances de estas relaciones, porque un campo no se limita a espacios físicos, sociedades específicas, ni a estratificaciones sociales; más bien, puede atravesar toda construcción social.

Es Bourdieu (2007b), quien sostiene que lo real es la relación objetiva de los agentes dentro de un campo y esa objetividad se basa en la identificación de posiciones al interior del campo. La posición se refiere a la ubicación de un agente en relación con otro, ya sea como individuo o institución, dentro de una relación de dominio o poder (García Inda, 2001; Raffestin, 1993).

El capital cultural, como una forma de capital reconocida por Bourdieu (2007c), incluye conocimientos, habilidades y otros atributos culturales que los individuos y grupos utilizan para mantener o mejorar su posición en el campo social. Este capital es fundamental para la preservación de las significaciones subgrupales, que son esenciales para la identidad y resistencia de los grupos subordinados. En el contexto de las luchas jurídicas y sociales, la preservación del capital cultural implica el reconocimiento y valorización de las prácticas, lenguajes y símbolos propios de los grupos subalternos. Esto no solo fortalece su resistencia, sino que también desafía las estructuras dominantes al cuestionar la universalidad de la cultura hegemónica (Cuche, 2001; Briones, 1998; Escobar 2014; Haesbaert, 1997; Segato, 2007).

Uno de los aspectos clave en las luchas que enfrentan diversos agentes o instituciones, todos con suficiente capital específico —ya sea económico, cultural o social— para ocupar posiciones de dominio en sus respectivos campos, es la conservación o transformación de la tasa de cambio entre estos tipos de capital. Este concepto de tasa de cambio alude a la relación de equivalencia simbólica mediante la cual se puede convertir un tipo de capital en otro dentro de un campo social

determinado y, al mismo tiempo, el poder sobre las instancias burocráticas que están en condiciones de modificarlo mediante medidas administrativas (Bourdieu, 2007c).

En estos contextos se entiende a la resistencia como las prácticas de los grupos subordinados que desafían las estructuras dominantes del campo (Bourdieu, 2007b). Estas prácticas están informadas por su habitus y su posición en el campo, permitiendo identificar alternativas y tomar decisiones en función de sus intereses y experiencias históricas. La capacidad de estas comunidades para defender sus derechos en el campo jurídico depende en gran medida de su acceso al capital legal y su habilidad para movilizar recursos simbólicos que legitimen sus reivindicaciones (Cuche, 2001; Escobar, 2014; Haesbaert, 1997).

La lucha simbólica es un aspecto crucial en la resistencia cultural de los grupos subordinados, Bourdieu (2007b), quien sostiene que el capital simbólico es el poder de hacer ver y hacer creer, de imponer una visión del mundo social que legitime las posiciones de poder. Las comunidades indígenas plantean su lucha simbólica y manifiestan en la reivindicación de su identidad cultural y sus derechos territoriales frente a las narrativas hegemónicas que buscan deslegitimar sus reclamaciones. La resistencia cultural, se convierte así en una forma de lucha simbólica donde el capital cultural y simbólico juega un papel fundamental en la preservación y fortalecimiento de las significaciones subgrupales (García Canclini, 1993; Hall, 2003).

Bourdieu y Wacquant (1992) creen que los campos imponen cierta admisión con los que se puede descartar a ciertos agentes del interior del campo. En el análisis de las sentencias relacionadas con la problemática territorial de los pueblos indígenas, es imprescindible entender que los agentes sociales no son meramente partículas mecánicamente empujadas por fuerzas externas, sino que, según la teoría de Bourdieu (1990), son detentores de capitales y, dependiendo de su trayectoria y de la posición que ocupan en el campo en virtud de su dotación de capital (tanto en volumen como en estructura), tienen una propensión a orientarse activamente hacia la preservación de la distribución de capital o hacia la subversión de dicha distribución (Bobbio, 1989; Sousa Santos, 2007).

En el contexto de las luchas territoriales de los pueblos indígenas, esta analogía es particularmente relevante, ya que las comunidades indígenas no son pasivas en su interacción con las estructuras legales y políticas que afectan sus territorios. Por el contrario, son agentes activos que poseen diversos tipos de capital (cultural, social, simbólico y, en menor medida, económico) que utilizan

para resistir y desafiar las estructuras de poder que buscan excluirlos y despojarlos de sus tierras (Bonfil Batalla, 1972; Bourdieu, 1990; Mignolo, 2010; Sousa Santos, 2002).

El concepto de admisión puede aplicarse aquí para describir cómo las barreras legales y administrativas funcionan para excluir a las comunidades indígenas del acceso equitativo a la justicia. Estas barreras actúan de manera similar a cómo la falta de poder adquisitivo excluye a los pobres del mercado de consumo. Sin embargo, al igual que en el campo del capitalismo, donde la oferta y la demanda están siempre consideradas, en el campo jurídico y territorial las posibilidades concretas de las comunidades indígenas también deben ser tenidas en cuenta, aunque a menudo no lo son en la práctica, debido a la concentración del capital legal y simbólico en manos de grupos dominantes (Bourdieu, 2007c; Mignolo, 2010; Sousa Santos, 2007).

La dominación en el campo jurídico y territorial se concentra en un solo grupo, creando una rigidez que afecta negativamente a las comunidades marginadas, sin embargo, estas, al detentar diversos tipos de capital, pueden orientarse hacia la subversión de esta distribución desigual, permitiéndoles resistir y, potencialmente, cambiar las estructuras de poder que buscan mantenerlas subordinadas (Cuche, 2001; Escobar, 2014; Haesbaert, 1997).

Los agentes sociales no son partículas mecánicamente empujadas y tironeadas de aquí para allá por fuerzas externas. Son, más bien, detentores de capitales y dependiendo de su trayectoria y de la posición que ocupen en el campo en virtud de su dotación (volumen y estructura) de capital, tienen una propensión a orientarse activamente ya sea hacia la preservación de la distribución de capital o hacia la subversión de dicha distribución. (Bourdieu y Wacquant, 1992, García Inda, 2001).

Por último, Bourdieu (2007a) señala que hay aspectos de nuestra cultura que operan de manera tácita, influyendo en nuestras acciones y pensamientos sin ser objeto de análisis consciente ni de exposición directa en los textos y tradiciones académicas. Esta influencia sutil y profunda se conoce como el inconsciente cultural, un fenómeno que permea la vida social y cultural a pesar de no discutirse abiertamente en la tradición letrada y académica occidental. Sin embargo, sigue teniendo una influencia significativa en la manera en que las personas piensan y actúan.

En esta línea, Briones (2005) y García Canclini (1993) subrayan cómo estas fuerzas culturales tácitas moldean tanto las estructuras sociales como las prácticas individuales, destacando la importancia de incorporar estos aspectos ocultos en el análisis sociocultural. Según Bourdieu

(1997), "aunque ese inconsciente cultural que todavía portamos jamás encuentra expresión directa y abierta en la tradición letrada del Occidente" (p. 13), su impacto se manifiesta en las dinámicas sociales y culturales de manera significativa, influenciando prácticas y formas de pensamiento que rara vez son cuestionadas de manera explícita.

La sociedad mantiene su orden social y cósmico a través de la violencia simbólica, que se entiende como una coerción impuesta mediante la adhesión involuntaria del dominado a las percepciones y estructuras de la dominante y esto ocurre porque el dominado sólo dispone de los instrumentos de conocimiento compartidos con el dominante, que son en realidad la forma incorporada de la estructura de dominación, lo que hace que esta relación parezca natural (García Inda, 2001).

La violencia simbólica, como explica Bourdieu (1991), se inscribe profundamente en el cuerpo, la mente, las decisiones y los valores, configurando una estructura inconsciente que opera tanto a nivel individual como colectivo, al punto de ser percibida como inevitable. Este tipo de dominación se perpetúa mediante la internalización de normas y estructuras de poder que los sujetos reproducen y refuerzan en sus prácticas cotidianas. Cuando un individuo se desvía de estas normas, el grupo social tiende a sancionarlo, promoviendo una autocorrección que se realiza a través del habitus, entendido como un sistema de disposiciones incorporadas que orienta las acciones de los agentes en un campo social determinado.

En esta misma línea, Sousa Santos (2007) y Briones (2002) profundizan en el análisis de cómo las estructuras de poder y dominación se reproducen a través de mecanismos culturales y simbólicos profundamente arraigados. Estos autores subrayan que la violencia simbólica no solo garantiza la reproducción de las jerarquías sociales, sino que también opera invisibilizando las relaciones de poder que la sostienen, consolidando desigualdades y limitando las posibilidades de resistencia y transformación social

Identidad colectiva en la formulación de estrategias identitarias.

La identidad colectiva de los pueblos indígenas en Argentina se encuentra profundamente condicionada por la interacción entre las estructuras jurídicas y la subjetividad individual y colectiva. Las políticas públicas y las leyes han desempeñado un rol determinante en la configuración de estas identidades, y el concepto de habitus, tal como lo desarrolla Bourdieu (1991), resulta clave para comprender la formulación de estrategias identitarias en este contexto.

Stavenhagen (2010) sostiene que las políticas de derechos humanos han ejercido un impacto significativo en la reconfiguración de las identidades indígenas, al promover el reconocimiento y la protección de derechos colectivos. Por su parte, Bonfil Batalla (1972) destaca que las estructuras legales pueden actuar como mecanismos tanto de afirmación como de negación de lo indígena, dependiendo de su diseño e implementación. En esta misma línea, Bengoa (2009) subraya la relevancia de las políticas estatales en la emergencia, transformación y visibilización de las identidades indígenas en América Latina, enfatizando que estas políticas operan en un espacio de tensiones entre las demandas de los pueblos indígenas y las dinámicas del poder estatal.

Este análisis pone de manifiesto que las identidades indígenas no son estáticas ni homogéneas, sino el resultado de procesos históricos, políticos y sociales complejos, moldeados por las interacciones entre las comunidades indígenas y las estructuras estatales y jurídicas.

El proceso de formación del Estado-nación argentino en el siglo XIX fue marcado por la guerra de apropiación de territorios indígenas y el exterminio y sometimiento de estas sociedades. Esta guerra resultó en la expropiación de tierras y recursos, erosionando las capacidades de subsistencia de los pueblos indígenas y sometiéndolos políticamente al Estado, este proceso conocido como genocidio y el etnocidio, aspecto fundacional de la construcción del Estado-nación argentino (Gordillo y Hirsch, 2010; Teruel 2019; Trinchero, 2010) es el que configuró las estructuras jurídicas que gobiernan las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, lo que consecuentemente también moldeó la subjetividad de estos pueblos, imponiendo una identidad de alteridad y subalternidad (Briones y Morita Carrasco, 2018; Vázquez y Bigot, 2021).

Con el retorno de la democracia en 1983, según Lenton (2010) especialmente con la Reforma Constitucional de 1994, se reconocieron los derechos de los pueblos indígenas en el más alto nivel jurídico, se reafirmó su preexistencia étnica y cultural, el respeto a su identidad y el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de tierras, encontrándose un reconocimiento legal que ha permitido y permite, según Hernández Castillo y Rueda (2021) la formulación de estrategias de resistencia y afirmación cultural, contribuyendo al empoderamiento de las comunidades indígenas en el ámbito social y político, desafiando las narrativas históricas de invisibilidad y marginalización.

La noción de habitus, según Bourdieu (1991), se construye y se constituye en la práctica, porque forma lo que configura el sentido histórico de las decisiones de los agentes que actúan, no por un universal racional, sino tras la evaluación de sus propias posiciones al interior del campo y de sus

posesiones de capital. La construcción de valor y del capital no es un trabajo individual, sino que se construye en las relaciones (Bourdieu y Wacquant, 1992).

Las formas de organización social que los grupos indígenas y campesinos tienen para resolver colectivamente su reproducción social pueden ser analizadas como organizaciones de clase y estas organizaciones, pueden considerarse como unidad de análisis y como sujeto de las estrategias de reproducción, en este caso, de las estrategias territoriales (Bengoa, 2009; Bonfil Batalla, 1972; Bourdieu, 1991; Stavenhagen, 2002).

Las estrategias territoriales podrían definirse como los cursos de acción asumidos colectivamente en el marco de disputas por la apropiación del espacio entre diversos agentes, orientadas a facilitar el acceso a la tierra, mantenerlo cuando se ve amenazado o efectivizarse a partir de la reivindicación de un derecho específico (Grimson y Karasik, 2017; Vázquez y Bigot, 2021).

A través de la acción colectiva, se desarrolla un proceso de construcción identitaria que encuentra en la apropiación del espacio un referente privilegiado, configurándose como un elemento central tanto de la identidad como de la territorialidad de un grupo social. En este marco, Grimson y Karasik (2017) señalan que las prácticas vinculadas a una estrategia territorial no siempre poseen un correlato territorial inmediato cuando se analizan de forma aislada; sin embargo, en su conjunto, estas prácticas contribuyen a la generación de una territorialidad inscrita en un sistema más amplio (Karasik, 2006).

Por su parte, Hadad y Gómez (2007) destacan que las estrategias territoriales no solo representan procesos de construcción de identidades colectivas, sino que también constituyen una herramienta para la reivindicación de derechos territoriales en contextos sociales y culturales diversos. Estas estrategias trascienden la dimensión física del territorio, integrando elementos culturales, sociales y políticos, lo que permite entender la territorialidad como un proceso dinámico y complejo, profundamente relacionado con las luchas por el reconocimiento y la justicia social.

La interacción entre las estructuras jurídicas y la subjetividad es fundamental para entender la dinámica de la identidad colectiva indígena, ya que las políticas de reconocimiento y los derechos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales han permitido a las comunidades indígenas articular sus identidades de maneras nuevas y más visibles. Sin embargo, estas políticas también enfrentan desafíos significativos en su implementación, al respecto Stavenhagen (2002), plantea que pueden habilitarse como también limitar la agencia de las comunidades en toma de

decisiones, a su vez Sierra (1996) examina qué políticas de reconocimiento pueden perpetuar las desigualdades y la marginalización, y Lenton (2010), en un análisis más profundo, refiere que las tensiones entre las leyes y su aplicación efectiva reflejan las limitaciones inherentes al marco capitalista y al Estado-nación en la plena realización de los derechos indígenas.

En el análisis de Bourdieu (2007c), la intersección de diferentes tipos de capital (económico, cultural, social y simbólico) es imprescindible para entender las dinámicas de poder en cualquier campo social. La lucha simbólica es un aspecto crucial en la resistencia cultural de los grupos subordinados, en la capacidad de imponer significados y construir la realidad social de una manera que legitime las posiciones de poder existentes. Por su parte, Briones y Morita Carrasco (2018), también señalan cómo la intersección de diversos tipos de capital y las luchas simbólicas influyen en las estrategias de resistencia y la construcción de identidades colectivas, subrayando la importancia de comprender estas dinámicas para analizar las relaciones de poder en distintos contextos sociales.

En diversos contextos, la lucha simbólica de las comunidades indígenas se manifiesta en la reivindicación de identidad cultural y derechos territoriales frente a las narrativas hegemónicas que buscan deslegitimar sus reclamaciones. La resistencia cultural se convierte así en una forma de lucha simbólica donde el capital cultural y simbólico juega un papel fundamental en la preservación y fortalecimiento de las significaciones subgrupales (Grimson y Karasik 2017).

La resistencia en estos contextos se entiende como las prácticas de los grupos subordinados que desafían las estructuras dominantes del campo. Estas prácticas están informadas por su habitus y su posición en el campo, permitiendo identificar alternativas y tomar decisiones en función de sus intereses y experiencias históricas. Las estrategias de reproducción social, según Bourdieu (1991), son prácticas mediante las cuales los individuos o las familias tienden, de manera consciente o inconsciente, a conservar o aumentar su patrimonio y, correlativamente, a mantener o mejorar su posición en la estructura de relaciones de clase. Estas estrategias se construyen no solo como respuesta a condiciones coyunturales, sino que responden principalmente a una lógica social construida en una trayectoria histórica particular (Bourdieu, 2007c).

La identidad colectiva y la subjetividad de los pueblos indígenas en Argentina están profundamente influenciadas por la interacción entre las estructuras jurídicas y el habitus, disposiciones adquiridas a lo largo de una historia de opresión y resistencia, que, combinadas con nuevas oportunidades legales, permiten a las comunidades indígenas formular estrategias

identitarias que buscan afirmar su presencia y derechos en el contexto contemporáneo. Este proceso evidencia tanto la adaptabilidad y resistencia de los pueblos indígenas como las limitaciones y posibilidades de las estructuras jurídicas en la configuración de identidades colectivas. Así, las luchas por el reconocimiento y la reivindicación de derechos no solo configuran nuevas formas de acción política, sino que también fortalecen las identidades colectivas y las prácticas culturales que son fundamentales para la cohesión y la continuidad de estas comunidades (Bengoa, 2009; Bonfil Batalla, 1972; Briones y Morita Carrasco, 2018; De la Cadena y Starn, 2010; Stavenhagen, 2008).

El territorio como fundamento de la identidad indígena.

El estudio del territorio y su apropiación constituye un eje central en las ciencias sociales, siendo abordado por numerosos teóricos que han contribuido significativamente a nuestra comprensión de cómo las prácticas sociales configuran y transforman el espacio. Lefebvre (1972) destacó que el espacio social no es un elemento neutro, sino una construcción social que refleja y reproduce las relaciones de poder. Por su parte, Harvey (2019, 2021) profundizó en cómo las dinámicas del capital y el poder moldean los espacios urbanos y rurales, evidenciando las tensiones entre las fuerzas económicas y las prácticas sociales.

Scott (1998) aportó una perspectiva crítica al analizar cómo los estados imponen su control y visión sobre el territorio, con implicaciones profundas en las formas de vida de las comunidades locales. En una línea similar, Massey (1994) argumentó que el espacio es un producto social en constante transformación, atravesado por dinámicas de género y poder que reconfiguran sus significados. Escobar (2014) complementa este enfoque al explorar cómo las comunidades locales resisten y reconfiguran sus espacios mediante prácticas culturales y políticas que desafían las lógicas hegemónicas.

En el contexto latinoamericano, Stavenhagen (2008) examinó la interacción entre las políticas estatales y los territorios indígenas, destacando las tensiones entre las demandas de los pueblos originarios y las dinámicas del poder estatal. Quijano (2020), por su parte, analizó cómo las estructuras coloniales continúan influyendo en la configuración del espacio y las identidades de la región, perpetuando desigualdades históricas. Finalmente, Svampa (2008) subrayó el papel fundamental de los movimientos sociales en la reconfiguración del territorio, al posicionarlo como un espacio de lucha por la justicia social y el reconocimiento de derechos colectivos en América Latina.

La dimensión simbólica y material de la territorialidad se presenta como un aspecto central en el análisis de la relación entre las comunidades indígenas y su entorno. En primer lugar, el territorio no es solo un espacio físico, sino que se configura como un ambiente de vida, acción y pensamiento comunitario, asociado a procesos de construcción de identidad. En este sentido, la apropiación del territorio por parte de las comunidades implica tanto una dimensión material, referida a la utilización y gestión de recursos naturales, como una dimensión simbólica, que involucra la representación cultural y el sentido de pertenencia al lugar (Escobar, 2014; Massey, 1994; Quijano, 2014; Scott, 1998; Stavenhagen, 2008; Svampa, 2008).

Desde la perspectiva antropológica, el territorio se entiende como un espacio que alberga y refleja la identidad cultural de las comunidades. Este espacio se construye socialmente a través de la interacción de diversos actores y el establecimiento de relaciones de poder que definen y redefinen sus límites y significados. La construcción de la identidad territorial es un proceso continuo que integra tanto aspectos históricos como culturales, configurando un territorio vivo y dinámico que se adapta a las circunstancias y necesidades de la comunidad, Hernández Castillo y Flores (2024) también destacan que estas dinámicas territoriales reflejan la resistencia y adaptación de las comunidades ante las cambiantes condiciones sociales y políticas. García Canclini (1993) argumenta que el territorio es un espacio de interacción cultural donde se producen y reproducen las identidades colectivas. En sintonía, y asertivamente Segato (2007), resalta la importancia del territorio en la lucha por los derechos y la autonomía de las comunidades indígenas.

La noción de territorialidad se encuentra profundamente vinculada con las ideas de capital social y cultural, elementos esenciales en la configuración y sostenibilidad de los territorios. Ostrom (1995) destaca que el conocimiento y el saber-hacer locales, junto con la capacidad de los actores para fomentar un desarrollo endógeno, constituyen el capital cultural y social inherente al territorio. Este capital, entendido como un recurso intangible pero indispensable, es fundamental para el desarrollo sostenible, ya que proporciona a las comunidades las herramientas necesarias para gestionar sus recursos de manera autónoma y resiliente frente a las presiones externas y los desafíos derivados de los cambios económicos y ambientales.

En esta línea, diversos autores han señalado la importancia del capital social y cultural en la dinámica territorial. Acselrad (2013) resalta la relevancia de las prácticas culturales en la construcción de estrategias de sostenibilidad, mientras que Appadurai (1996) subraya cómo las capacidades locales se articulan en procesos de resistencia frente a la globalización. Ares y Risler (2013) enfatizan el papel de las redes comunitarias en la gestión de recursos, y Arias (2010) y

Barros (2000) argumentan que el fortalecimiento del capital cultural y social es clave para garantizar la resiliencia y la autonomía de las comunidades en contextos de vulnerabilidad.

Los productos tradicionales, como los alimentos y artesanías, adquieren un significado especial cuando se asocian con el territorio y las prácticas culturales locales. Esto crea un vínculo entre los productores y consumidores, basado en la confianza y el reconocimiento mutuo, que fortalece la cohesión social y la sostenibilidad del desarrollo territorial (Barth, 1969; Escobar, 2014; Gudynas, 2009; Pecqueur y Zimmerman, 2004; Toledo y Argueta, 1993).

De este modo, la territorialidad se concibe no únicamente como un componente físico, sino como una construcción multidimensional en la que el capital social y cultural ocupa un lugar central para la promoción de modelos de desarrollo inclusivos y sostenibles. Esta perspectiva permite abordar el territorio como un espacio dinámico que integra dimensiones simbólicas y materiales, fundamentales para comprender cómo las comunidades indígenas interactúan con su entorno y construyen su identidad colectiva.

La incorporación de estas dimensiones en las políticas de desarrollo territorial resulta crucial, ya que contribuye a la sostenibilidad y a la valorización de los recursos locales, promoviendo un desarrollo que respete y potencie la diversidad cultural, así como los valores y prácticas comunitarias. Este enfoque no solo refuerza la capacidad de las comunidades para gestionar sus recursos de manera autónoma, sino que también fomenta un modelo de desarrollo que se alinea con las prioridades y necesidades locales, reconociendo la importancia de la cultura como un recurso estratégico (Appadurai, 1996; Arias, 2010; Ares y Risler, 2013; Barros, 2000; Pecqueur y Zimmerman, 2004).

Así, la territorialidad emerge como un concepto clave en el diseño de políticas públicas y estrategias de desarrollo, al ofrecer un marco integrador que articula las dimensiones culturales, sociales y materiales del territorio.

La visión estructural de la realidad social, según Durkheim (1990), propone una aproximación científica rigurosa que permite captar las regularidades empíricas inherentes al funcionamiento de las instituciones colectivas. Un componente central de este enfoque es la diferenciación entre los espacios sagrados y profanos, una distinción que se articula a través de prácticas rituales. Estas prácticas no solo delimitan el territorio físico, sino que también desempeñan un papel crucial en la consolidación de la identidad colectiva y en la promoción del sentido de pertenencia dentro de la comunidad.

Durkheim (1990) sostiene que la sociedad ejerce una influencia determinante sobre la manera en que los individuos perciben y utilizan el espacio, subrayando que las prácticas espaciales no son meras elecciones individuales, sino que están profundamente condicionadas por estructuras sociales que trascienden a los actores individuales. En sus propias palabras, estas estructuras comprenden “las maneras de hacer, de pensar y de sentir, exteriores al individuo y que están dotadas de un poder de coerción en virtud del cual se le imponen” (p. 5). Esta perspectiva resalta el carácter coercitivo de las estructuras sociales y su capacidad para moldear tanto el comportamiento como las percepciones individuales, evidenciando el papel central de lo colectivo en la configuración de las acciones humanas.

Asimismo, Durkheim (1990) enfatiza la importancia de las representaciones colectivas en la configuración del espacio. Estas representaciones, que incluyen normas, valores y creencias compartidas, no solo guían el comportamiento individual, sino que también estructuran y organizan el espacio social. En este sentido, el espacio se convierte en una construcción social que refleja las dinámicas colectivas y las estructuras simbólicas que subyacen a la vida en sociedad.

En términos de la dimensión simbólica de la territorialidad, se destaca que los espacios adquieren significados culturales a través de las prácticas sociales y las representaciones colectivas. La existencia de ciertos lugares, considerados sagrados o simbólicamente importantes debido a su asociación con eventos históricos o rituales religiosos, refleja cómo los significados atribuidos a los espacios son creados y mantenidos mediante la interacción social y las prácticas culturales. En este sentido, Durkheim (1990) argumenta que "las cosas sociales sólo se realizan por medio de los hombres; son un producto de la actividad humana" (p. 18).

Además, los rituales no solo marcan el uso del espacio, sino que también refuerzan la cohesión social y la identidad colectiva de la comunidad. Esto se manifiesta en los rituales y ceremonias que tienen lugar en ciertos espacios, definidos como "modos de acción que refuerzan las representaciones colectivas y consolidan el territorio como un espacio sacralizado y socialmente significativo" (Durkheim, 1990, p. 118).

La religión y las creencias colectivas influyen en la percepción y uso del espacio, estas creencias dan lugar a espacios sagrados que tienen un significado especial para la comunidad y que son objeto de veneración y respeto (Durkheim, 1990).

La dimensión material de la territorialidad refiere cómo las prácticas sociales organizan y utilizan el espacio de manera concreta, y cómo la organización material del espacio puede reflejar y

reforzar las estructuras sociales y las relaciones de poder dentro de una comunidad (Durkheim, 1990).

En cuanto a extensión de la dimensión material del espacio, subraya la importancia de las infraestructuras y la organización física del entorno. Las infraestructuras, como los caminos, puentes y edificios públicos, no solo facilitan la vida cotidiana, sino que también reflejan y refuerzan las estructuras sociales. La planificación urbana también juega un papel crucial en la configuración del espacio. Las decisiones sobre dónde ubicar viviendas, parques y áreas comerciales están influenciadas por consideraciones sociales, económicas y políticas. Estas decisiones reflejan las prioridades y valores de la sociedad y tienen un impacto duradero en la organización del espacio (Durkheim, 1991).

La relación entre la acción y las reglas que estructuran el espacio revela cómo las normas sociales no solo orientan el comportamiento individual, sino que también determinan la organización y el uso del espacio en una sociedad. Las normas que regulan la propiedad de la tierra y los derechos de uso desempeñan un papel fundamental en la distribución y utilización del territorio, configurando las dinámicas espaciales dentro del contexto social. En este sentido, Durkheim (1992) afirma que: "la moral es un sistema de reglas de acción que predeterminan la conducta" (p. 23), destacando que estas reglas no operan de manera aislada, sino que están intrínsecamente ligadas a la organización espacial y al funcionamiento colectivo.

Además, argumenta que las reglas y las representaciones colectivas no se imponen mecánicamente, sino que interactúan con las acciones individuales (Durkheim, 1991). En su análisis, también subraya la importancia de la educación y la socialización en la transmisión de las normas y valores que estructuran el espacio. A través de la educación, los individuos aprenden las normas y prácticas que guían el uso del espacio, lo que garantiza la reproducción de las estructuras sociales a lo largo del tiempo.

Esta perspectiva nos permite comprender cómo las sociedades organizan y utilizan el espacio de manera que refleja y refuerza sus estructuras sociales y culturales, integrando tanto la dimensión simbólica y material, en la comprensión y complejidad de la organización espacial en las sociedades humanas.

El territorio, cargado de significados culturales, es constantemente interpretado y reinterpretado por individuos y comunidades. Este enfoque, según lo plantea Geertz (1987), sugiere que la cultura debe entenderse como un sistema de símbolos: "Un esquema históricamente transmitido de

significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas con las cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida" (p. 88).

Los símbolos y significados culturales influyen profundamente en la manera en que las comunidades se apropian y utilizan el espacio, transformando el territorio en un proceso tanto físico como simbólico.

Geertz (1987) también utiliza la metáfora teatral para describir cómo las culturas pueden ser interpretadas, planteando que el territorio, al igual que la cultura, está compuesto por símbolos y significados que deben ser descifrados. Los rituales desempeñan un rol crucial en esta apropiación, sacralizando el espacio y estableciendo una conexión espiritual y cultural. Según el autor, los rituales son: "modos de acción que refuerzan las representaciones colectivas y consolidan el territorio como un espacio sacralizado y socialmente significativo" (p. 118). Esto evidencia que el pensamiento cultural tiene una naturaleza pública y compartida, y que la apropiación del territorio no es un acto individual, sino un proceso colectivo.

La forma en que una comunidad se relaciona con su espacio refleja su sistema de significados, y los conflictos territoriales pueden entenderse como luchas por la preservación de estos valores culturales. En este sentido, Geertz (1987) destaca que: "los significados y las interpretaciones son compartidos y negociados públicamente" (p. 70). En el contexto de las comunidades indígenas, esta apropiación territorial se convierte en una forma de resistencia cultural frente a las amenazas externas, reafirmando continuamente su conexión simbólica y cultural con el territorio. Así, la interpretación cultural del espacio invita a considerar el territorio no solo como un espacio físico, sino como un constructo dinámico y significativo, esencial para la cohesión y supervivencia de las comunidades indígenas.

La comprensión del espacio en las sociedades humanas, según el enfoque estructuralista de Lévi-Strauss (1990), se basa en la premisa de que las estructuras mentales y sociales configuran el territorio. El espacio no es simplemente un entorno físico, sino una extensión de las estructuras simbólicas que organizan la vida social. Los mitos, leyendas y categorizaciones simbólicas resultan esenciales para entender cómo las comunidades dividen, ordenan y se apropian de los espacios que habitan. En esta visión, la mente humana opera de manera universal, siguiendo patrones inconscientes que moldean nuestra percepción y organización del mundo, una idea influenciada por la teoría lingüística de Saussure (1945), que sostiene que el lenguaje se estructura

relacionalmente y a través de diferencias y aplica este principio a la cultura, argumentando que las estructuras culturales también funcionan como sistemas de diferencias binarias, que son universales y subyacentes a todas las sociedades humanas.

Desde esta perspectiva, la organización espacial, al igual que otros aspectos culturales, está determinada por estructuras mentales inconscientes y universales. A pesar de las diferencias culturales entre las sociedades, Lévi-Strauss (1990) sostiene que "la mente humana es en todas partes una y la misma cosa, con las mismas capacidades" (p. 40). Estas estructuras mentales, que operan sin la intervención consciente de los individuos, organizan el espacio de manera sistemática, reflejando un orden preexistente en el mundo. En este sentido, el autor señala que "es absolutamente imposible concebir el significado sin orden. Hablar de reglas y hablar de significados es hablar de la misma cosa" (p. 30).

El enfoque estructuralista no solo examina la dimensión simbólica, sino que también resalta la importancia de la sincronía en el análisis cultural. A diferencia de los enfoques históricos, que se centran en la evolución y el cambio, la sincronía aborda las estructuras permanentes que subyacen a las manifestaciones culturales, especialmente en las sociedades ágrafas, donde la historia escrita no existe. Como explica Lévi-Strauss (1990), "la historia tal como la escribimos está prácticamente –y en su totalidad– basada en documentos escritos" (p. 60). Este enfoque permite comprender cómo las estructuras culturales permanecen constantes a lo largo del tiempo, proporcionando una base sólida para interpretar las dinámicas culturales y su relación con el espacio.

La organización del espacio en las sociedades humanas puede entenderse, entonces, como una extensión de esta lógica estructural. La dimensión simbólica del espacio revela cómo las sociedades asignan significados culturales y valores a los lugares que ocupan, mientras que la dimensión material de la territorialidad explora cómo las prácticas sociales organizan y utilizan el espacio de manera concreta. Los patrones de asentamiento y la distribución de las aldeas, por ejemplo, son expresiones de las oposiciones binarias que caracterizan el pensamiento humano, tales como las dicotomías naturaleza-cultura, sagrado-profano, y centro-periferia. Estas oposiciones no sólo determinan la organización espacial, sino que también refuerzan las estructuras sociales subyacentes.

La visión de la organización material del espacio, está profundamente influenciada por las estructuras culturales. Según Lévi-Strauss (1982), "el contenido extrae su realidad de su estructura, y lo que se llama forma es la 'puesta en estructura' de las estructuras locales en qué consiste el

contenido" (p. 136). Esta perspectiva estructuralista proporciona una comprensión profunda de cómo las estructuras mentales y culturales organizan el espacio y la territorialidad. Al integrar tanto la dimensión simbólica como la material, se puede comprender mejor cómo las sociedades se apropian de su entorno de una manera que refleja y refuerza sus valores y las estructuras culturales subyacentes. Las oposiciones binarias que estructuran el territorio son fundamentales para entender cómo las comunidades interactúan y establecen una relación con su entorno.

Por otro lado, la visión funcionalista de Malinowski (1985) ofrece una perspectiva que destaca la interrelación entre las prácticas culturales y las necesidades humanas fundamentales. En su análisis etnográfico de las Islas Trobriand, resalta que las prácticas agrícolas y las ceremonias relacionadas con la cosecha de ñames no solo cumplen funciones materiales, sino que también refuerzan las estructuras sociales y simbólicas. Según el autor, "la agricultura en las Islas Trobriand no es solo una actividad económica, sino un complejo ritual que refuerza la estructura social y las relaciones de poder dentro de la comunidad" (Malinowski, 1975, p. 214).

La dimensión material de la territorialidad se refleja en cómo las sociedades organizan su espacio físico de manera eficiente y productiva. En las Islas Trobriand, por ejemplo, la distribución de los huertos de ñame está planificada para garantizar un acceso equitativo a los recursos, manteniendo la cohesión social: "la organización espacial de los huertos refleja la estructura social de la comunidad, con cada parcela asignada a individuos o familias específicas según su posición en la jerarquía social" (Malinowski, 1985, p. 216). Esta planificación no se limita únicamente a los huertos, sino que también se extiende a la ubicación estratégica de las viviendas. Las casas de los líderes y jefes, situadas en lugares prominentes, reafirman su estatus y autoridad dentro de la comunidad.

La dimensión simbólica de la territorialidad también es esencial. Los rituales asociados con el espacio, como los de la cosecha, no solo celebran la producción agrícola, sino que también refuerzan la identidad comunitaria y las relaciones de reciprocidad. Malinowski (1975) describe estos rituales como "una expresión simbólica de la cooperación y la solidaridad comunitaria, que reafirma las obligaciones mutuas entre los miembros" (p. 220). Además, los mitos y narrativas de origen desempeñan un rol crucial en la construcción simbólica del espacio, otorgando un significado cultural profundo a lugares específicos. Estos mitos legitiman las reclamaciones territoriales y las jerarquías sociales, proporcionando un marco común de referencia para la cohesión social.

La territorialidad, por tanto, integra tanto los aspectos materiales como los simbólicos. La forma en que una sociedad organiza su espacio físico refleja y refuerza sus estructuras sociales y culturales. Un ejemplo emblemático de esta interacción es el sistema de intercambio Kula, una red ceremonial entre las islas del archipiélago Trobriand, que no solo facilita el intercambio de bienes materiales, sino que también fortalece las alianzas sociales y políticas. En palabras de Malinowski (1978), "El Kula no es solo un intercambio de bienes materiales, sino un intercambio de prestigio y honor que refuerza las jerarquías sociales y las alianzas políticas" (p. 232).

Además, Malinowski (1978) subraya la importancia de la adaptabilidad de las prácticas territoriales ante condiciones cambiantes, la flexibilidad en el uso de la tierra permite a las comunidades responder a fluctuaciones en la disponibilidad de recursos y a cambios sociales, lo que resulta crucial para la resiliencia y la sostenibilidad a largo plazo de estas sociedades. La construcción de infraestructuras, como caminos y canales de riego, también refleja la interacción entre las dimensiones material y simbólica de la territorialidad. Estas obras no solo mejoran la productividad, sino que simbolizan el esfuerzo colectivo y la capacidad organizativa de la comunidad.

La perspectiva funcionalista de Malinowski (1978) demuestra que la territorialidad va más allá del simple uso del suelo, es una construcción cultural compleja que refleja y refuerza las estructuras sociales y las relaciones de poder dentro de una comunidad. La integración de los aspectos materiales y simbólicos en su análisis ofrece una visión holística de cómo las sociedades humanas interactúan con su entorno, organizando su espacio no solo para satisfacer necesidades materiales, sino también para cumplir funciones simbólicas esenciales para su cohesión social.

La construcción de la subjetividad comunitaria a través del territorio y las dinámicas de poder.

La construcción de la identidad de las comunidades aborígenes puede entenderse a través del análisis de las relaciones de poder, saber y las prácticas discursivas de Foucault (1994). La construcción identitaria de las comunidades aborígenes es un proceso dinámico influenciado por las relaciones de poder y saber. A través de la resistencia y la recuperación de sus saberes sometidos, estas comunidades han podido afirmar una identidad que desafía las imposiciones externas y celebra su herencia cultural. La teoría de Foucault (2001) proporciona un marco útil para entender cómo estas dinámicas de poder y saber influyen en la formación de la identidad, destacando la importancia de las prácticas discursivas y la resistencia en este proceso (Briones, 2005; Escobar, 2014; Quijano, 2020).

Foucault (2000), argumenta que el poder no es simplemente una fuerza negativa que reprime, sino que también es productivo, creando realidades y verdades. En el contexto de las comunidades aborígenes, las estructuras de poder han tratado de imponer identidades y conocimientos que se alineen con los intereses de los colonizadores. Esto se puede observar en políticas de asimilación, sistemas educativos y discursos legales que han intentado redefinir la identidad aborigen de acuerdo con las normas hegemónicas. En este sentido, las políticas coloniales han intentado producir una realidad en la que la identidad aborigen se vea subordinada y redefinida (Badie, 1995; Briones, 2005; Cardoso de Oliveira, et al, 2007; Foucault, 2001).

Se incorpora la conceptualización de la insurrección de los saberes sometidos, refiriéndose a la recuperación y valorización de conocimientos históricos que han sido marginados o reprimidos. Según Foucault (2000), este concepto destaca cómo las comunidades aborígenes, a través de la reivindicación de sus saberes tradicionales y prácticas culturales, desafían las narrativas dominantes. Este proceso de recuperación es crucial para la construcción de una identidad colectiva que resista las imposiciones externas y celebre la riqueza de su herencia cultural. La liberación de estos saberes permite a las comunidades reafirmar su identidad y oponerse a la asimilación cultural.

En este marco, Foucault (2000) explica que "la genealogía sería entonces una empresa que tendría como finalidad romper el sometimiento de los saberes históricos y liberarlos para que puedan luchar contra la coerción que ejerce el discurso que se considera teórico, unitario, formal y científico" (p. 21). Este enfoque genealógico no solo busca cuestionar las estructuras de poder que han silenciado estos saberes, sino también ofrecer una plataforma para su recuperación y resistencia frente a la dominación hegemónica.

Las prácticas discursivas desempeñan un papel fundamental en la construcción de la identidad. Según Foucault (2001), el discurso no solo refleja la realidad, sino que también la construye: "En nuestras sociedades, dicha transformación técnica de los individuos, o lo que llama producción de lo real, no es más que la forma moderna de servidumbre que designa con el nombre de normalización" (p. 11). Este enfoque subraya cómo los discursos operan como mecanismos de poder que moldean las percepciones, conductas y formas de ser de los individuos, contribuyendo a la creación y perpetuación de estructuras de dominación a través de procesos de normalización.

En el caso de las comunidades aborígenes, los discursos oficiales han intentado definir y limitar su identidad. Sin embargo, a través de la auto-representación en espacios políticos, culturales y académicos, estas comunidades han podido reconfigurar los discursos sobre su identidad. Esto

incluye la creación de narrativas que enfatizan la resistencia, la autonomía y la continuidad cultural. Al rechazar estas formas de normalización, las comunidades aborígenes están reclamando su derecho a definir su identidad de acuerdo con sus propios valores y tradiciones (Clifford, 2010; De la Cadena y Starn, 2010; Foucault, 2001; Hobsbawm y Ranger, 2002).

Otro concepto clave que explica Foucault (2001) es el de normalización, que se refiere al proceso mediante el cual las normas sociales son internalizadas por los individuos, moldeando su comportamiento y su auto-percepción. Según el autor, "el poder no es algo que posee la clase dominante; no es una propiedad, sino que es una estrategia. Es decir, el poder no se posee, se ejerce" (p. 31). Este planteamiento subraya que el poder no reside exclusivamente en una estructura o clase, sino que se despliega a través de relaciones sociales, ejerciendo su influencia de manera descentralizada y contribuyendo a la perpetuación de las normas que regulan la vida cotidiana.

Las comunidades aborígenes han enfrentado procesos de normalización que buscan homogenizarlas y hacerlas conformes con la cultura dominante. No obstante, estas comunidades han desarrollado formas de resistencia que desafían estas normas, afirmando su identidad única y sus formas de vida tradicional. En este contexto, las estrategias de poder utilizadas por las comunidades aborígenes para resistir y redefinir su identidad son fundamentales para comprender su construcción identitaria, este acto de resistencia es un componente vital de su identidad colectiva (Briones, 1998; Escobar, 2014; Foucault, 2001; Gordillo y Hirsch, 2010).

La construcción identitaria de las comunidades aborígenes, según Toledo Jofré (2012) se fundamenta en un proceso dinámico y continuo que se articula a través de la interacción con su entorno social y natural, y con los otros individuos de la comunidad. En este sentido, la identidad es una construcción permanente, resultado de la interacción constante entre el sujeto y su contexto, así como de las experiencias acumuladas a lo largo de su historia (Barth, 1969; Hall, 2003; Handler, 1986).

La noción de sujeto en las comunidades aborígenes se vincula intrínsecamente con su identidad colectiva, como señala Giddens (1998) esto implica que la identidad del sujeto aborigen no solo se define por sus características propias, sino también por su pertenencia a un grupo y su interacción constante con la comunidad y el entorno. La identidad colectiva es una construcción social que se fortalece a través de prácticas compartidas, tradiciones y la resistencia a las imposiciones externas, lo que permite a las comunidades aborígenes mantener su cohesión y continuidad cultural (Bourdieu, 1990; Durkheim, 1992; Geertz, 1987).

Toledo Jofré (2012) destaca la importancia de la historia y el contexto en la construcción identitaria, afirmando que esta interacción no es pasiva; el sujeto aborigen interpreta y reinterpreta sus condiciones de existencia, creando significados sobre su entorno y transformándolo de acuerdo con sus experiencias y necesidades. Este proceso de interpretación y reinterpretación es fundamental para la construcción de la identidad, ya que permite al sujeto adaptarse y responder a las cambiantes condiciones de su entorno (Durkheim, 1992; Geertz, 2000; Giddens, 1998).

La reflexividad juega un papel crucial en la construcción identitaria. Según Bruner (1991) para las comunidades aborígenes, esta capacidad de reflexión es esencial, ya que les permite mantener una continuidad identitaria a pesar de los cambios y transformaciones que puedan experimentar. La identidad se construye, entonces, a partir de una continua negociación entre el pasado, el presente y el futuro, donde el sujeto aborigen evalúa y redefine su posición y sus relaciones dentro de su comunidad y con su entorno (Geertz, 1987; Giddens, 1998; Hall, 2003).

La identidad de las comunidades aborígenes también se ve influenciada por la corporeidad, como indica Giddens (1998) la corporeidad no es solo una dimensión material, sino que también vehicula significaciones y permite desarrollar las acciones que se propone el sujeto. En las comunidades aborígenes, el cuerpo se convierte en un recurso para marcar y comunicar la identidad y las pertenencias.

A través de prácticas culturales como la danza, la pintura corporal y los rituales, los sujetos aborígenes expresan y refuerzan su identidad colectiva, consolidando así su sentido de pertenencia y continuidad. Estas prácticas culturales son formas poderosas de resistencia simbólica y afirmación de identidad, tal como lo discuten autores que destacan la importancia de estas expresiones culturales en la construcción y mantenimiento de identidades colectivas frente a la hegemonía cultural y las presiones de asimilación (Bartolomé, 2017; Briones, 1998; Cardoso de Oliveira, 2007).

La identidad de las comunidades aborígenes también se ve influenciada por la corporeidad, como indica Giddens (1998) la corporeidad no es solo una dimensión material, sino que también vehicula significaciones y permite desarrollar las acciones que se propone el sujeto.

En las comunidades aborígenes, el cuerpo se convierte en un recurso para marcar y comunicar la identidad y las pertenencias. A través de prácticas culturales como la danza, la pintura corporal y los rituales, los sujetos aborígenes expresan y refuerzan su identidad colectiva, consolidando así

su sentido de pertenencia y continuidad (Briones y Ramos, 2010; Giddens, 1998; Merlan, 2010; Turner, 1988).

La construcción identitaria de las comunidades aborígenes es un proceso complejo y multidimensional que involucra la interacción continua con el entorno, la reflexividad, la corporeidad y la narrativa. La identidad no es estática ni fija, sino que se construye y reconstruye constantemente en respuesta a las experiencias y las condiciones del contexto. Este proceso permite a los sujetos aborígenes mantener una continuidad y coherencia identitaria, a la vez que adaptarse y resistir a las transformaciones que puedan enfrentar. La identidad colectiva emerge, así como una síntesis dinámica de la historia, las prácticas culturales y las relaciones sociales, constituyendo un elemento fundamental para la cohesión y la resiliencia de las comunidades aborígenes (Bruner, 1991; Giddens, 1998; Toledo Jofré, 2012; Turner, 1988).

La construcción de la identidad en las comunidades indígenas de Argentina ha sido objeto de numerosos estudios que han analizado los procesos de identificación y los desafíos enfrentados en el contexto de una historia marcada por la opresión y la exclusión. Briones (1998, 2005) y Lazzari (2010) destacan cómo el discurso estatal de blanqueamiento y europeización intentó imponer una identidad nacional homogénea, generando imaginarios de extinción de los pueblos indígenas y cuestionando la autenticidad de sus identidades contemporáneas. Este discurso, profundamente arraigado en las políticas y narrativas oficiales, contribuyó a la invisibilización de las comunidades indígenas y sus reivindicaciones.

Por otro lado, Gordillo y Hirsch (2010) y Segato (2007) analizan cómo las comunidades indígenas recurren a sus prácticas culturales y a la memoria histórica como herramientas para resistir y redefinir sus identidades frente a las dinámicas de opresión y marginalización. Estas prácticas, además de desafiar las narrativas hegemónicas, se convierten en un acto de agencia y resiliencia que fortalece la identidad colectiva.

Cañuqueo (2015) pone énfasis en las disputas territoriales como un eje central en la construcción de la identidad comunitaria, destacando el impacto que estas tienen en la reafirmación de los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas. Del Río y Pérez (2011), por su parte, examinan cómo las percepciones del espacio social, especialmente en el contexto de la Conquista del Desierto, han configurado las relaciones entre las comunidades indígenas y el territorio, subrayando las implicancias históricas y sociales de estos procesos.

La identidad de una comunidad, según Briones (2005), está intrínsecamente vinculada al territorio que habita, entendido no solo como un espacio físico, sino como un entorno de vida, acción y pensamiento. La apropiación del espacio se realiza a través de acciones sociales, políticas y económicas que entretejen la historia y la cultura de los pueblos, configurando el territorio como un eje central en la construcción de su identidad colectiva.

Raffestin (1993) plantea que el territorio es una construcción social y política, definida por la acción de diversos actores que establecen relaciones tanto con los límites geográficos como con las dimensiones simbólicas que lo configuran. En este sentido, el territorio trasciende su materialidad, convirtiéndose en un espacio cargado de significados y valores culturales.

De la Cadena y Starn (2010) destacan el papel fundamental de las prácticas culturales y las narrativas históricas en la consolidación del vínculo entre la comunidad y su territorio. Subrayan que la memoria colectiva es esencial para definir la identidad territorial, ya que refuerza la conexión entre el pasado, el presente y las aspiraciones de futuro de las comunidades.

Por su parte, Gordillo y Hirsch (2010) y Briones (2002) exploran cómo las comunidades indígenas reafirman su identidad y pertenencia a través de procesos de resistencia y recuperación territorial frente a las imposiciones externas. Estas acciones, más allá de ser reacciones frente a las dinámicas de exclusión, constituyen estrategias activas de reafirmación cultural y política que fortalecen su sentido de pertenencia y su lucha por el reconocimiento de sus derechos territoriales.

Las fronteras simbólicas, precedidas por la diferenciación determinada por los grupos, juegan un papel crucial en la construcción de la identidad territorial, es Haesbaert (1997) quien subraya que estas fronteras no solo delimitan el espacio físico, sino que configuran el espacio cultural y simbólico, donde se desarrollan prácticas que legitiman la identidad territorial, Brunet y Cincunegui (2021) describen el territorio construido como un espacio de relaciones sociales, donde existe un sentimiento de pertenencia de los actores locales respecto a la identidad asociada al espacio de acción colectiva y de apropiación. Además, Barth (1969) y Escobar (2014) destacan cómo las prácticas culturales y las narrativas históricas refuerzan la conexión entre la comunidad y su territorio, subrayando la importancia de la memoria colectiva en la definición de la identidad territorial.

El concepto de territorialidad de Albagli (2004), está asociado al sentimiento de pertenencia y al modo de actuar en un espacio geográfico dado (Haesbaert, 1997; Raffestin, 1993). Este sentimiento de pertenencia y las acciones en el territorio forman lo que Ostrom (1995) definió

como capital cultural y social, esencial para el desarrollo del territorio, también Barros (2000) resalta la importancia del capital social local, aunque señala que la perspectiva histórica y cultural puede limitar la capacidad de acción para el desarrollo territorial. Este enfoque muestra cómo la identidad territorial se configura a través de la interacción de la comunidad con su entorno y las prácticas culturales que refuerzan esta conexión (Escobar, 2014; Ostrom, 1995; Segato, 2007).

La construcción identitaria a través del territorio es un proceso dinámico y continuo, influenciado por las relaciones de poder, el acceso y uso del patrimonio natural, así como por la interacción constante entre actores locales y externos. Como señala Kuper (1999), "El sentido de tradición cultural no es estático, sino que se transforma constantemente debido a las relaciones sociales y el uso del patrimonio natural local" (p. 37). Este proceso se refleja en cómo las comunidades configuran y reconfiguran su identidad colectiva en respuesta a las presiones y oportunidades del entorno (Escobar, 2014; Haesbaert, 1997; Raffestin, 1993; Segato, 2007).

En la práctica, la construcción identitaria se refleja en la relación de los actores locales con su entorno y entre sí, Pecqueur y Zimmerman (2004) diferencian entre territorios dados y territorios construidos, siendo estos últimos el resultado de la interacción de actores sociales en un espacio geográfico que busca resolver un problema común. Este tipo de territorio es relevante para las comunidades que buscan afirmar su identidad y soberanía a través de su historia y cultura.

La reterritorialización, como lo llama Sousa Santos (2002) implica el redescubrimiento del sentido de lugar y comunidad, criticando las teorías de aculturación y sugiriendo que las nuevas construcciones de identidad se han dado gracias a un reencuentro con las tradiciones culturales (Cardoso de Oliveira, et.al. 2007; Carneiro, 1985).

La legitimación de la soberanía territorial (Brunet y Cincunegui, 2021) se da a través de prácticas simbólicas que refuerzan el sentido de pertenencia y la identidad cultural (Escobar, 2014; Haesbaert, 1997; Raffestin, 1993; Segato, 2007).

Es Cuche (2001) y Haesbart (1997) explican que las fronteras simbólicas y territoriales son esenciales para la construcción y legitimación de la soberanía territorial, permitiendo a las comunidades resistir frente a las fuerzas externas (Albagli, 2004; Massey, 1994; Raffestin, 1993).

La construcción identitaria a través del territorio implica un proceso dinámico de apropiación del espacio, creación de fronteras simbólicas, y valorización de productos locales. Este proceso fortalece la identidad cultural, la cohesión social y promueve el desarrollo económico sostenible,

siendo esencial para la legitimación de la soberanía territorial y la resistencia frente a fuerzas externas (Cardoso de Oliveira, et.al. 2007; Hernández Castillo y Rueda, 2021).

Capítulo III. Teorías de la juridización y su uso por las comunidades indígenas.

La juridización de las identidades indígenas.

La juridización de las identidades indígenas, es sostenida y entendida como la calificación jurídica que intenta objetivar y categorizar su identidad como así también los derechos del grupo social al que representan (Broekman, 1993). La juridización implica una dimensión geopolítica de alcance global, relacionada con el multiculturalismo, como lógica cultural del capitalismo multinacional, esta globalización neoliberal en el campo de los derechos humanos, desarrolla nuevos procesos de identificación (Zizek, 2001), los que pueden evidenciarse en el contexto argentino, por un periodo de aparición de legislaciones indigenistas, las que durante la década de 1980, intentaron regular integralmente las relaciones entre indígenas y no indígenas, alcanzado su punto culminante en 1994 con la inclusión del artículo Nº 75 inciso 17 en la nueva Constitución Nacional Argentina (Leone, 2018).

En América Latina, este fenómeno según Leone (2018), comenzó a evidenciarse principalmente a partir de los años ochenta del siglo XX, el proceso de juridicidad o juridización del derecho indígena a la diferencia cultural es la que incluye, ciertas dimensiones de los modos de vida de los pueblos originarios, consiguiendo irrumpir el sistema legal de los Estados.

Al seleccionar y marcar de manera específica a ciertos sujetos y grupos, la juridización (Jacques, 1996) crea la aboriginalidad, estableciendo nuevos lugares de inscripción dentro de la estructura hegemónica del orden social. Sin embargo, al proponer reconocimientos diferenciales basados en la adscripción étnica, esta juridización también abre nuevos espacios para la subjetivación y la reivindicación política (Leone, 2016).

El control social a través de la juridización se evidencia, como dimensión política en las reformas constitucionales y legales que varios países de América Latina implementaron entre 1988 y 1999, estas reformas, aunque incluían reconocimientos formales de los derechos indígenas, también facilitaban la implementación de políticas neoliberales de ajuste estructural. Este doble propósito revela cómo la juridización puede ser instrumentalizada para legitimar y perpetuar estructuras de poder que desfavorecen a las comunidades indígenas (García Veritá, 2015; Gómez, 2002; Leone, 2018; Stavenhagen, 2002).

En el marco del uso de la ley, Stavenhagen (2010) argumenta que el derecho, particularmente en su forma estatal, ha sido históricamente una herramienta de control social utilizada por los poderes

dominantes para mantener la hegemonía y la estructura de desigualdad social. Esta visión, de análisis colonial, reafirma la postura de que la teoría de la dependencia actúa para legitimar y perpetuar la exclusión y dominación de las comunidades indígenas.

> La historia de la colonización está perfectamente documentada al respecto. Que el llamado "descubrimiento del otro" fue en realidad un "encubrimiento del otro". Fue un no entender al otro. Y así como los europeos no entendieron a los pueblos indígenas, así también los pueblos indígenas tuvieron dificultades en entender a los españoles, a los portugueses, a los ingleses, a los franceses, a los holandeses que llegaron a estas costas. Y en otras partes del mundo igual (Stavenhagen, 2010, p. 14).

Las leyes nacionales, al ignorar sistemáticamente el derecho consuetudinario indígena según Stavenhagen (2002), han contribuido a la violación sistemática de los derechos humanos, esta perspectiva se distingue de las visiones funcionalistas que concibieron el derecho consuetudinario fuera de la historia y del poder, y de los estudios de corte evolutivo que lo ubicaron como expresión atávica de costumbres premodernas (Sierra y Chenaut, 2002).

> Hay un desconocimiento mutuo que tiene 500 años, y que se inició con la colonia. Se inició –lo sabemos muy bien porque nos lo dicen nuestros libros de historia– cuando los españoles se preguntan si los indios que han nombrado y descubierto, caracterizado y catalogado de alguna manera, son seres humanos o no. Si los indios tienen alma o no tienen alma. Si los indios pueden ser evangelizados y cristianizados por los conquistadores o deben ser liquidados y eliminados como animales salvajes. Eso se hablaba incluso en los grandes tratados teológico-jurídicos del siglo XVI y siguió en los siglos XVII y XVIII en algunos escritos. Pero si esto fue la colonia –y ya sabemos cómo se fue resolviendo esto durante la época colonial–, el debate no terminó con la independencia política de nuestras repúblicas latinoamericanas, sino que se acentuó, incluso, en la época republicana; nada más que cambió de carácter, cambió de términos, cambió de conceptos. A principios del siglo XIX, que fue una época en que el colonialismo europeo se extendió en África y en Asia, el problema de la población indígena, tal como lo veían los europeos, era el de la confrontación entre la barbarie y la civilización. Entre los salvajes y los civilizados. Esto lo planteó, a su manera, Sarmiento en Argentina, en la primera parte del siglo XIX. Pero esto llenó las discusiones

> de los juristas, los historiadores, los filósofos ingleses, franceses, alemanes, durante el siglo XIX. (Stavenhagen, 2010, p. 15).

Los movimientos indígenas, han utilizado la juridización para plantear crecientemente el reconocimiento, vigencia y privilegio de un derecho propio que regule la vida social indígena. Ese reclamo es un medio, para oponerse a un orden normativo que no reconoce la diversidad y que penaliza las prácticas que la constituyen, fundamentándose en la idea de que el derecho es una pieza clave en la estrategia del Estado para disolver las particularidades de los pueblos y asegurar las condiciones que posibilitan el ejercicio de la hegemonía (Aylwin, 2014; Sierra, 1996; Sousa Santos, 2007; Stavenhagen, 2010; Yrigoyen Fajardo, 2000)

Según Gómez (2002), se establecía sistemáticamente la verdad jurídica por encima de la verdad real o histórica, evidenciando ello, una creciente separación en los procesos judiciales, con la finalidad de señalar el contexto estructural de exclusión, que los indígenas enfrentan en el sistema judicial, caracterizado como un racismo judicial (Del Valle Escalante, 2013).

En este contexto, la juridización ha sido adoptada y adaptada por las propias comunidades indígenas como una estrategia para defender y promover sus derechos territoriales y culturales (Gordillo y Hirsch, 2010), convirtiéndose en una herramienta de resistencia y empoderamiento social, las comunidades indígenas han utilizado el marco legal para reclamar el reconocimiento de sus derechos colectivos, incluyendo la autonomía territorial y el derecho a mantener y desarrollar sus propias culturas y sistemas de gobierno (Díaz Polanco y Sánchez, 2002; Gómez, 2002; Leone, 2016; Stavenhagen, 2008).

El proceso de creación de una plataforma común de lucha para todos los pueblos indígenas de un país o región se logra mediante la juridización de sus demandas. Este proceso enfrenta varias paradojas. Una de ellas es que, cuanto más amplia y compleja se vuelve la plataforma del movimiento nacional, menos parece atender las demandas específicas de las comunidades locales. Sin embargo, avanzar hacia la formulación de una plataforma común ayuda a que se reconozcan las reivindicaciones a nivel local. Al mismo tiempo, es necesario que estas demandas locales se presenten como una gran demanda a nivel nacional (Anaya, 2005; Segato, 2007; Sousa Santos, 2007; Stavenhagen, 2002).

Documentar el derecho consuetudinario indígena, particularmente a través del seguimiento de disputas, otro aspecto de la juridización, lo convierte en una unidad de análisis accesible que no

solo involucra mecanismos de resolución de conflictos, sino también el conocimiento de los principios y valores que regulan el comportamiento colectivo en contextos indígenas específicos (Sierra y Chenaut, 2002).

El desafío planteado por Stavenhagen (2002) es más profundo y propone capturar la tensión entre normas y prácticas como un referente productivo para analizar el deber ser de normas y valores y la distancia con las acciones que generan conflictos reales. Esto resalta cómo las normas operan no como códigos abstractos, sino como herramientas para evaluar acciones específicas que se perciben como ofensivas o delictivas (Collier, 1995). Esta mirada revela cómo las comunidades operan como campos sociales semi-autónomos (Moore, 1973), con normativas y sistemas de regulación propios que interactúan significativamente con la justicia estatal, aunque muchas veces limitada a asuntos considerados no graves y excluyéndolas en casos de mayor gravedad (Stavenhagen, 2004)

El término derecho consuetudinario y costumbre jurídica, usados para destacar la dinámica de las normas comunitarias (Gómez, 2002; Sierra, 1996; Sierra y Chenaut, 2002; Valdivia Dounce, 2009), pronto fueron descartados ante su descalificación en contextos de movilización política (Sierra, 1996). Estas discusiones fueron retomadas al examinar los impactos del colonialismo y la globalización sobre los sistemas jurídicos indígenas y los derechos humanos (Arnaud y Fariñas, 2006; Clavero 2006; Sierra 2021). Los desafíos conceptuales sobre el derecho indígena de entonces persisten hoy, adquiriendo nuevos significados, especialmente en el ámbito de los peritajes antropológicos y entre los antropólogos jurídicos, quienes buscan destacar la diferencia cultural en procesos judiciales. Se cuestiona si es viable avanzar en conceptualizaciones dinámicas del derecho propio que reconozcan su particularismo cultural sin ignorar su historicidad ni su capacidad de adaptarse a nuevas realidades. Además, se interroga cómo las cosmovisiones indígenas pueden ser traducidas al lenguaje jurídico, que tiende a fragmentar y simplificar sus estructuras para hacerlas comprensibles para los jueces (Clavero, 1995; López Bárcenas, 2002; Medina Hernández, 2000; Soriano, 1997).

Stavenhagen (2010) desarrolló una definición avanzada del derecho consuetudinario indígena, destacando cuatro aspectos centrales: primero, concebir el derecho como un elemento fundamental de la estructura social y la identidad de un pueblo; segundo, considerar la integralidad del derecho propio, rechazando la separación entre lo jurídico y lo social; tercero, explorar la relación continua entre los derechos colonizados y el derecho estatal, cuestionando visiones aislacionistas del

derecho propio; y cuarto, abordar el desafío metodológico de estudiar un derecho oral y no escrito, que no se define de antemano.

La complejidad de la juridización se refleja en las dinámicas internas de los movimientos indígenas. Las organizaciones conservan su carácter territorial y productivo, mientras que las organizaciones nacionales se vuelven más políticas y enfrentan dificultades para promover proyectos de fomento productivo, enfatizando más las rupturas que las alianzas que definen sus fronteras (Stavenhagen, 2002).

Este proceso de conversión de demandas en un reclamo genérico de reforma constitucional y legal ha sido fundamental para el avance de los derechos indígenas en varios países de la región, porque es la juridización la que permite a los pueblos indígenas establecer un marco normativo que defiende y promueve sus intereses específicos, desafiando las estructuras de poder dominantes y buscando una mayor autonomía y autodeterminación (Sousa Santos, 2007).

La juridización, por tanto, no solo ha sido un medio para canalizar demandas y resolver conflictos, sino también una plataforma para la resistencia y la afirmación de derechos. Los movimientos indígenas han sabido utilizar esta herramienta para impulsar cambios significativos, desafiando las estructuras de poder y abogando por un reconocimiento más amplio de sus derechos colectivos. Este proceso continúa evolucionando, adaptándose a los desafíos y oportunidades que surgen en el ámbito político y social. La capacidad de las comunidades indígenas para navegar y utilizar la juridización en beneficio propio seguirá siendo un elemento crucial en su lucha por la preservación de su identidad y la consecución de sus derechos colectivos (Broekman, 1993; Correas, 2007; Engelman Garreta, 2019; Lenton, 2014; Sousa Santos, 2007; Stavenhagen, 2002).

La experiencia de movimientos indígenas en América Latina demuestra que, a pesar de los intentos de control social a través de la juridización, las comunidades indígenas han encontrado maneras de utilizar el derecho para afirmar su autonomía y luchar por un cambio social profundo (Aylwin, 2014).

Estas reflexiones pueden ser interpretadas hoy en día dentro del marco crítico de la colonialidad del poder (Quijano, 2020), que deconstruye la producción del conocimiento hegemónico. Este proceso ha implicado la imposición de ideologías racializadas que subordinan los sistemas normativos indígenas como formas de subderecho, evidenciado en el concepto de usos y costumbres utilizado tanto en la judicialización de los derechos indígenas como por los propios

actores indígenas. Este concepto revela las condiciones estructurales de subordinación desde las cuales los indígenas articulan sus reclamaciones (Carrasco, 2000; Lenton, 2010; Mignolo, 2010).

Los avances recientes en la antropología jurídica (Azaola Garrido, 1990; Cardoso de Oliveira et al., 2007; Krotz, 2002; Nader, 2002; Sierra Camacho, 2004) al documentar las manifestaciones contemporáneas del derecho indígena y su impacto en el ámbito judicial, contribuyen a desestabilizar las concepciones hegemónicas del derecho y a disputar su definición en los mismos espacios de producción jurídica, en términos de reconocimiento de la diferencia cultural y la defensa de los derechos humanos. Esto se observa en el apoyo a casos que implican la protección de las jurisdicciones indígenas (Carrasco, 2000; Lenton, 2010; Mignolo, 2010).

Stavenhagen (2002) refiere que la juridización puede desempeñar un doble papel. Por un lado, servir como una herramienta de control social y de mantenimiento del status quo, especialmente en las sociedades donde la desigualdad y la exclusión están profundamente arraigadas. Por otro lado, proporcionar una vía para el cambio social, al dar a los grupos desfavorecidos un medio para reivindicar y proteger sus derechos.

Este es particularmente el caso de las comunidades indígenas, quienes recurren a las leyes y a los sistemas legales para la defensa de sus derechos territoriales y culturales. No obstante, cuando el proceso de juridización se vuelve excesivo, se genera una dependencia de los sistemas legales que puede desestimar la cuestión planteada mediante formalismos exegéticos. Asimismo, cuando los sistemas legales y judiciales resultan inaccesibles o sesgados para ciertos grupos, terminan por reforzar las desigualdades sociales existentes.

Las cuestiones territoriales adquieren especial relevancia al problematizar los casos concretos de defensa territorial, marcados por el anhelo de las comunidades de obtener titularidad sobre sus derechos. Sin embargo, este proceso está condicionado por la supremacía de aquellos que determinan su lugar dentro de las estructuras legales e institucionales (Rivera Cusicanqui, 2010; Sousa Santos, 2007).

Al explicar esta articulación de fuerzas desiguales Rivera Cusicanqui (2010) sostiene con relación a la toma de decisiones judiciales de la problemática territorial, se contraponen dos realidades: la estadocentrista legal, que cuenta con apoyo y aceptación institucional, política y jurídica y que se manifiesta a través de la propiedad privada; y otra lógica, basada en la existencia y manejo de bienes colectivos y comunitarios con extensión territorial.

Sesgo y limitaciones en la juridización del derecho indígena.

La identidad indígena, se origina en los matices y peculiaridades que la problemática adquiere debido al impacto de variables como el contexto histórico, geográfico, económico y político, mucho se ha discutido acerca de la perdurabilidad de las identidades nacionales en tiempos de comunicaciones veloces e intercambios globalizados (Grimson, 2007; Loza, 2013).

La experiencia histórica de las naciones latinoamericanas demuestra que los Estados modernos de la región surgieron a partir de un proyecto comunitario que se fundamentaba en la existencia de sociedades pre-nacionales. Estas sociedades, aunque presentaban similitudes culturales, tenían una relevancia política limitada. Los Estados modernos integraron estos particularismos, localismos y relatos históricos para construir un nuevo tejido social y simbólico, creando un imaginario colectivo que unifica e identifica al pueblo (Lenton, 2010).

El incremento del proceso de juridización del derecho indígena, que se ha desarrollado en paralelo con el avance del neoliberalismo como forma político-económica de acumulación de capital transnacional; inicia una tendencia de mayor apertura en el reconocimiento tanto de los derechos de los pueblos indígenas como de su misma existencia (Barnetson, 2009; Briones, 2005; García Moritán y Cruz, 2012; Lenton, 2018; Martínez Sarasola, 2012).

De todas las modalidades posibles de asimilación del indio a la sociedad nacional, enfatizaba la idea de integración, a través del mercado laboral.

> Este concepto del indígena como "trabajador-indígena" se ha ido incorporando en el discurso de tal manera que muchos legisladores se refieren a los indios llamándolos directamente "obreros" o "trabajadores" de tal o cual región o establecimiento, y enfatizan su condición de clase explotada, por sobre otras cualidades tradicionalmente atribuidas a la raza. (Lenton, 2010: pág. 17).

Durante el período colonial, la categoría de indio se configuró como una categoría jurídica vinculada a determinados atributos, lo cual conllevaba específicos derechos y obligaciones, la institución de la mita y encomienda, por la que Corona exigía pagar mediante un tributo sus deudas, estos trabajos vinculados a la explotación de recursos naturales (Madrazo, 2005; Sica y Ulloa, 2006) se visualiza la categorización en el ámbito local de la jurisdicción colonial de Jujuy.

Con el paso a la república, esa cualidad jurídica diferenciadora fue eliminada, y se abandonó el estatus especial otorgado hasta entonces a los indígenas, los aspectos laborales de las relaciones interétnicas y la preferencia estereotipo, en lo formal otorgaba el mismo tratamiento jurídico que para el resto de las personas libres (Levaggi, 1990), las investigaciones de Fandos y Teruel (2009, 2012) y Teruel (2019) muestran cómo esa reconfiguración jurídica implicó, entre otras cosas, la pérdida de sus tierras comunales (Bernal, 1984; Michel, et.al., 2004). De esta forma, el trabajo disciplinado y constante era un arma esencial en su adaptación a la vida civilizada, las constituciones y leyes terminarían por definir e imponer un ciudadano ideal (Sábato, 2016).

Recién a partir del retorno de la democracia en la década de 1980, y al calor de una intensa demanda por la extensión de los derechos humanos, el Congreso Nacional sancionó su primera Ley 23.302 de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes, en respuesta a la presión tanto de la jurisprudencia internacional como de la movilización interna de la militancia indígena (Lenton, 2010). Sin embargo, para hacer uso de sus derechos, los pueblos indígenas deben emprender una lucha diaria con los funcionarios estatales primero y ante la justicia después (Carrasco, 2000) y esta realidad pone de manifiesto las dificultades adicionales que enfrentan en su búsqueda de justicia.

Durante su formación, el Estado nacional argentino se enfocó en resolver los problemas relacionados con el orden y el progreso (Oszlak, 2015) para lograrlo, desarrolló aparatos de represión y regulación que se consolidaron institucionalmente mediante la creación de una estructura jurídico-política. Esta estructura permitió transformar intereses parciales y específicos en derechos universales y abstractos (Congost, 2019), estableciendo así un espacio-tiempo nacional y estatal.

En este contexto, la cultura funciona como un entramado de dispositivos identitarios que configuran un régimen de pertenencia, legitimando así la normatividad que se erige como referencia central para todas las relaciones sociales dentro del territorio nacional. Desde una perspectiva decolonial, como la presentada por De Sousa Santos (1998), estos dispositivos no solo refuerzan las estructuras de poder existentes, sino que también perpetúan una visión monolítica de la identidad nacional. Este régimen de pertenencia se manifiesta en múltiples ámbitos, desde el sistema educativo hasta la narrativa oficial de la historia nacional, incluyendo ceremonias oficiales y días festivos, cada uno de estos elementos contribuye a consolidar una narrativa dominante que invisibiliza y marginaliza las voces y experiencias de los grupos subalternos. Es decir, el régimen de pertenencia no solo define quién pertenece y quién no, sino que también establece las normas

y valores que sustentan la cohesión social dentro de un marco estatal hegemónico (Sousa Santos, 2007).

De esta manera, se construyó una comunidad entre dominadores y dominados, estableciendo las variables que determinarían los grupos ubicados en el centro de esta comunidad y aquellos sospechados de no pertenecer o de ser inauténticos (Lenton, 2010). Esta dinámica de inclusión y exclusión contribuyó a la configuración de un orden social que reflejaba y perpetuaba las estructuras de poder y control del Estado nacional argentino.

Esto implica que los proyectos políticos de construcción de Estados nacionales modernos no pueden considerarse separados de un proceso de significación, en el que las prácticas adquieren sentidos que disputan la legitimidad del proceso. Las dinámicas históricas sedimentan significados en cada país, posibilitando ciertas prácticas hegemónicas e imposibilitando otras. Es crucial resaltar la coexistencia de estas diferencias y similitudes para escapar de las retóricas esencialistas que invisibilizan los conflictos y desigualdades, y que no logran comprender la situacionalidad propia (Quijano, 2010).

La obra de Stavenhagen (2002) refiere que las construcciones étnicas suelen ser explicaciones discursivas que legitiman, en muchos casos, la existencia de un conflicto y sus manifestaciones más violentas. Es decir, que los discursos étnicos se valen de las necesidades de identidad colectiva de un grupo, apropiándose de elementos históricos referidos a la conciencia colectiva. Estos relatos son instrumentos poderosos para fundamentar ideologías étnicas y movilizar políticamente, permitiendo que un grupo o manifestación alcance la posición hegemónica en la construcción nacional en un momento determinado.

La relevancia del análisis de las categorías jurídicas en las construcciones étnicas radica en su capacidad para configurar los derechos que los pueblos indígenas están autorizados a reivindicar. Estas categorías jurídicas no solo establecen qué derechos pueden ser reclamados, sino que también influyen directamente en la orientación y el diseño de las políticas públicas. De este modo, determinan cómo se implementan estas políticas y qué tipo de reconocimiento y protección reciben las demandas y necesidades específicas de los pueblos indígenas. Esta configuración es fundamental para entender las dinámicas de poder y los procesos de inclusión o exclusión que se dan en el ámbito jurídico y político (Bourdieu, 1991; Lemaitre Ripoll, 2009; Lenton, 2014; Sousa Santos, 1991). En Carrasco (2000), se examinan las consecuencias jurídicas para los pueblos indígenas al ser clasificados en diferentes categorías, ya que las categorizaciones sociales, al ser

portadoras de identidad, moldean y reconfiguran no solo la percepción de los grupos indígenas, sino también su significado.

Desde esta perspectiva, la reconstrucción de la identidad, es la surgida entre la interacción entre el Estado y los pueblos indígenas, adoptando particularidades únicas en cada región, como lo señala Briones (2005), esto produce distintos "niveles provinciales de estatalidad" que operan como instancias clave de articulación, generando representaciones localizadas sobre el "estado-como-idea" y sobre la política, son instancias que administran sus propias formaciones locales de alteridad (Briones, 2005).

Uno de los principales riesgos en la categorización de las comunidades, es la tendencia a simplificar y reducir las complejidades de los conflictos sociales a marcos legales formales que pueden no captar completamente las dimensiones culturales, históricas y sociales involucradas, la obra de Stavenhagen (2002) subraya que la aplicación rígida de las leyes nacionales a menudo no contempla las especificidades y necesidades de las comunidades indígenas, generando tensiones adicionales y exacerbando los conflictos existentes.

Asimismo, estas representaciones no son únicamente producto de las prácticas estatales. Sin embargo, como señala Briones (2005) las prácticas estatales juegan un papel fundamental en la configuración de las formaciones nacionales de alteridad, y es crucial comprender la lógica espacial a través de la cual los estados actualizan estas formaciones de alteridad, en las que se basa su ejercicio de regulación.

La dependencia excesiva de sistemas legales y formalismos exégetas puede llevar a la alienación de las comunidades que no se identifican con las normas y procedimientos del sistema dominante, es Stavenhagen (2002) quien resalta cómo los sistemas legales impuestos desde una perspectiva eurocéntrica tienden a marginar y excluir a los grupos étnicos que poseen sus propios sistemas normativos y formas de resolver conflictos. Esta imposición de un marco legal externo puede debilitar las estructuras sociales y organizativas tradicionales, socavando la autonomía y la capacidad de autogobierno de las comunidades indígenas.

El ámbito de competencia del Estado puede ser visto como un espacio de negociación y conflicto donde se resuelven los problemas sociales vigentes, mediante la expansión de una estructura normativa que no pertenece al orden natural, sino a la creación histórica de los seres humanos.

Estas estructuras son representaciones hegemónicas de la nación que producen realidades y alteridades históricas (Pujadas, 1990).

Los sistemas legales y judiciales suelen estar impregnados de sesgos que reflejan las desigualdades sociales y culturales de la sociedad en la que operan, señala Stavenhagen (2008) que estos sesgos pueden manifestarse en la aplicación de la ley, donde las comunidades indígenas y otros grupos marginados pueden enfrentar discriminación y prejuicios sistemáticos. En el mismo sentido, Carrasco (2000) destaca que muchas veces el acceso de los indígenas a sus derechos depende de un trámite administrativo o judicial previo, Saba (2016) también argumenta que el estado tiene deudas pendientes con los grupos desventajados en términos de igualdad y derechos. Este sesgo, no solo afecta la impartición de justicia, sino que también socava la confianza de estas comunidades en el sistema judicial, perpetuando un ciclo de exclusión y desconfianza (Stavenhagen, 2010).

La accesibilidad a los sistemas legales y judiciales es otro desafío significativo para las comunidades indígenas por barreras lingüísticas, culturales y geográficas pueden limitar el acceso a la justicia, la falta de representación adecuada y de mecanismos de apoyo adaptados a sus realidades específicas, reforzando su marginación (Stavenhagen, 2008).

La idea más fuerte, que sostiene Stavenhagen, (2010) es que los conflictos étnicos a menudo están ligados a la construcción y mantenimiento de la forma nación, que tiende a homogenizar la diversidad étnica y cultural en nombre de la unidad nacional. Esta homogeneización puede dar lugar a políticas asimilacionistas que ignoran o suprimen las identidades y derechos de las minorías étnicas.

La jurisdicción y la soberanía territorial son temas críticos en el análisis de los conflictos étnicos. Stavenhagen (2004) observa que muchos de estos conflictos surgen de la disputa por el control y la administración de territorios que las comunidades indígenas consideran ancestrales. La imposición de jurisdicciones legales estatales sobre estos territorios, sin el consentimiento y la participación de las comunidades locales, puede desencadenar resistencia y conflictos prolongados. La reconciliación de estas jurisdicciones con los derechos territoriales indígenas es fundamental para la resolución pacífica de los conflictos.

Las políticas de integración nacional a menudo implican la asimilación de las minorías étnicas a una cultura nacional dominante, lo que puede ser percibido como una forma de opresión cultural.

Stavenhagen (2010) critica estas políticas, argumentando que la verdadera integración debe reconocer y celebrar la diversidad cultural en lugar de suprimirla. Las políticas asimilacionistas no solo fallan en resolver los conflictos étnicos, sino que también perpetúan las desigualdades y las tensiones sociales.

Las desigualdades socioeconómicas son un factor clave en la génesis y perpetuación de los conflictos étnicos, Stavenhagen (2004) destaca que cuando las comunidades indígenas perciben que están siendo explotadas económicamente y que sus recursos están siendo apropiados sin beneficio para ellas, desarrollan discursos y movimientos de resistencia étnica. La justicia económica y la distribución equitativa de recursos son esenciales para mitigar estos conflictos y promover la paz social.

El reconocimiento de los derechos culturales y la participación política de las comunidades indígenas son fundamentales para una ciudadanía inclusiva y equitativa, Stavenhagen (2010) aboga por la implementación de políticas que reconozcan y protejan los derechos culturales de estas comunidades, así como por su participación efectiva en la toma de decisiones políticas que afectan sus vidas. Sin esta inclusión, las políticas nacionales corren el riesgo de perpetuar la exclusión y el conflicto.

Capacidad de las comunidades indígenas para juridizar derechos y resistir fuerzas hegemónicas.

En los debates contemporáneos sobre el derecho indígena se destacan múltiples temas clave, que subrayan la importancia de enfoques interdisciplinarios y contextuales para abordar las problemáticas específicas que enfrentan los pueblos indígenas en diversas regiones del mundo (Giraudo, 2008). Entre estos temas, la autonomía y la autodeterminación, entendidas como la capacidad de autogobierno, son fundamentales para la existencia y el desarrollo de estos pueblos (Stavenhagen, 2010; Anaya, 2005).

La cuestión de los recursos naturales y la necesidad de reconocer y proteger los derechos territoriales de las comunidades indígenas frente a amenazas de explotación y despojo también han sido ampliamente analizadas. Autores como Burchardt y Dietz (2014) y Escárzaga Nicté (2004) destacan cómo estas problemáticas son centrales en las luchas indígenas por su supervivencia y desarrollo. Asimismo, la interculturalidad y la plurinacionalidad emergen como propuestas que buscan fomentar la inclusión y el respeto mutuo entre diferentes sistemas legales y culturales. En este sentido, Rivera Cusicanqui (2010) y Stavenhagen (2002), Sousa Santos (2003), Villoro (1998)

y Yrigoyen Fajardo (2004) abogan por un marco legal y social que valore la diversidad cultural y jurídica, promoviendo un diálogo equitativo entre los saberes tradicionales indígenas y el conocimiento científico occidental.

La decolonialidad en el ámbito jurídico plantea un enfoque crítico sobre la persistencia de estructuras coloniales en los sistemas legales actuales y resalta la necesidad de descolonizar el derecho para alcanzar una justicia más equitativa y representativa, como argumentan Mignolo (2010) y Quijano (2000, 2014). Este análisis se conecta con las reflexiones de Nader (2002) y Sieder (2011), quienes abordan las barreras estructurales y sociales que enfrentan los pueblos indígenas en su acceso a la justicia y en su búsqueda de sistemas judiciales más justos y accesibles.

Otro aspecto relevante es la intersección entre género y derechos indígenas. Hernández Castillo (2011), Ulloa (2007) y Castelnuovo (2012) subrayan la necesidad de reconocer y abordar las desigualdades de género, destacando las luchas de las mujeres indígenas tanto dentro como fuera de sus comunidades. Estas perspectivas permiten comprender cómo las dinámicas de género interactúan con las problemáticas territoriales y culturales.

La capacidad de las comunidades indígenas para juridizar sus derechos y resistir las fuerzas hegemónicas representa un proceso multifacético que requiere tanto la positivación y constitucionalización de sus normas como la implementación de estrategias efectivas de litigio y defensa legal. Según Aylwin (2014), Sierra (2021), Sousa Santos (2007) e Yrigoyen Fajardo (2000), este proceso refleja una interacción dinámica entre los sistemas normativos indígenas y el derecho estatal, destacando la importancia de un enfoque crítico que considere los límites y las posibilidades de la juridificación como herramienta de resistencia y emancipación.

El territorio, en este contexto, adquiere una dimensión fundamental. Los conceptos de tierra y territorio encapsulan las dimensiones espirituales del vínculo entre los pueblos originarios y su entorno, abarcando no solo el espacio físico, sino también su función como salvaguarda de la identidad cultural, el idioma, los valores y los modos de vida (Anaya, 2005; Canessa, 2006; Langer y Muñoz, 2003; Mecle Armiñana, 2001; Merry, 1991). Así, el territorio no solo es un espacio físico, sino un espacio socialmente producido y culturalmente construido, donde se entrelazan identidad espacial e identidad comunal (García Canclini, 1993).

La propiedad comunitaria, entendida como el reconocimiento de los derechos ancestrales de las comunidades indígenas sobre la tierra, constituye un componente esencial de justicia histórica, reconociendo su preexistencia étnica y cultural tras siglos de despojo por parte de colonizadores y políticas estatales (Fandos y Teruel, 2012). En este sentido, los instrumentos internacionales, como

la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, han establecido principios fundamentales para el reconocimiento y la protección de los derechos territoriales. En el ámbito del derecho internacional, se distingue entre las nociones de "tierra" y "territorio": la primera refiere al espacio físico, mientras que la segunda incluye las dimensiones culturales y sociales asociadas a ese espacio (Zimmerman, 2015).

No obstante, persisten desafíos significativos. Los intereses económicos y políticos suelen entrar en conflicto con los derechos indígenas, dificultando la implementación efectiva de estos instrumentos. La protección de los derechos indígenas requiere un compromiso continuo de los Estados para respetar y garantizar estos derechos, tanto en sus políticas como en sus prácticas (Anaya, 2005).

Los instrumentos internacionales de protección.

El proceso de internacionalización de los derechos de los pueblos indígenas se integra en un contexto más amplio de universalización de los derechos humanos (Aguilar Cavallo, 2011; Colautti, 1999). Este proceso comenzó en la posguerra con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), bajo el auspicio de la ONU. A partir de entonces, se fue consolidando una comunidad internacional donde se debatía la universalización frente a la especificidad de cada pueblo o región. Sin embargo, este proceso sigue siendo incompleto, ya que hay una diferencia significativa entre poseer un derecho y ejercerlo efectivamente. En este marco de discusiones sobre los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas emergieron en la esfera internacional (Díaz Polanco,2006; Iturralde, 2000). Estas transformaciones y sus efectos fueron acompañados por la globalización y la gobernabilidad neoliberal (Iturralde, 2000).

Los Instrumentos Internacionales de Protección:

1. Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007, establece que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado. Los Estados deben reconocer y proteger estos derechos, respetando las costumbres, tradiciones y sistemas de tenencia de la tierra de estos pueblos. La Declaración subraya la importancia del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de la adopción de medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente.

2. La (OIT, 1989), ratificado por varios países, en nuestro país por la Ley 24.071 en el año 1992, este instrumento reconoce los derechos colectivos e individuales de los Pueblos Indígenas y tribales en los países independientes y establece obligaciones y responsabilidades de

los Estados, se trata de uno de los instrumentos más importantes en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Establece, que los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas antes de autorizar cualquier programa de explotación de recursos en sus tierras. Además, asegura que estos pueblos participen en los beneficios derivados de tales actividades y reciban una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir debido a las mismas (Anaya, 2005; Bello, 2004; Gudynas, 2011; Meza, 2013; Zibechi, 2014).

3. Sistema Interamericano de Derechos Humanos, protege los derechos de los pueblos indígenas a través de dos organismos principales: La (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], s.f.) y la (Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], s.f.).

4. La (CIDH), creada en 1959, actúa como un órgano principal en la promoción y defensa de los derechos humanos en las Américas a emitido numerosas recomendaciones y medidas cautelares para proteger los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en contextos de conflictos territoriales y explotación de recursos naturales. La (Corte IDH) también ha adoptado medidas para proteger a los defensores de los derechos humanos y líderes de las comunidades indígenas que luchan por los derechos territoriales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha representado una contribución invaluable a la protección de los pueblos indígenas en América Latina. Sin embargo, su desarrollo enfrenta grandes desafíos debido a las especificidades culturales de estos pueblos y su histórica exclusión dentro de los Estados nacionales. Aunque la Corte ha demostrado una notable capacidad para adaptarse y abordar estos problemas, no siempre logra una traducción fluida de las demandas indígenas al lenguaje jurídico internacional (Paredes Paredes, 2021).

Un aspecto crucial en la jurisprudencia de la Corte IDH es el reconocimiento de la propiedad comunal indígena. Desde el caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua (Corte IDH, 2001), se ha intentado resolver la demanda de recuperación de tierras. En este y otros casos, la Corte ha fallado en contra de los Estados, reconociendo la posesión tradicional como equivalente a un título de dominio otorgado por el Estado. Sin embargo, el concepto de propiedad comunal indígena sigue enfrentando desafíos debido a las diferencias culturales y legales que complican su implementación.

Otro caso significativo es el de Asociación Lhaka Honhat vs. Argentina (Corte IDH, 2020), que se refiere a las comunidades indígenas de la provincia de Salta. En este fallo, la Corte ordenó al Estado argentino demarcar, titular y entregar las tierras tradicionales a las comunidades, además de garantizar su derecho a un ambiente sano. Este fallo reafirma el derecho de los pueblos

indígenas a la propiedad comunitaria de sus tierras ancestrales y a vivir en un entorno libre de contaminación. Asimismo, la Corte destacó la obligación del Estado de eliminar las interferencias externas, como la presencia de terceros no indígenas y ganado en las tierras indígenas.

Los instrumentos nacionales.

Antes de la reforma constitucional de 1994.

La posición de indígena se encuentra reconocida de forma limitada, sin posibilidad de disfrutar plenamente de derechos, en relación con el goce de titulaciones de propiedad, el artículo 128 de Constitución de 1819 estableció:

> Siendo los indios iguales en dignidad y en derechos a los demás ciudadanos, gozarán de las mismas preeminencias y serán regidos por las mismas leyes. Queda extinguida toda tasa o servicio personal bajo cualquier pretexto o denominación que sea. El cuerpo legislativo promoverá eficazmente el bien de los naturales por medio de leyes que mejoren su condición hasta ponerlos al nivel de las demás clases del estado (Constitución de 1819, art. 128).

El artículo reconoce al indígena como un ser con plena capacidad, en supuesta igualdad en dignidad y derechos, con la condición de que el cuerpo legislativo, va a crearle leyes especiales (Abreut de Bergher, 2012). La función de equipararlos con los demás ciudadanos y con las demás clases, implícitamente los sitúa en una posición inferior, normativa, que continuaba el deseo de preservar una cultura distinta a la europea (Bengoa, 2009; Bonfil Batalla, 1972; Rivera Cusicanqui, 2010; Villoro, 1996).

En relación con la Constitución de 1826, Abreut de Bergher (2012), sostiene que su contenido representó un retroceso significativo en comparación con su predecesora, al estipular que los derechos de ciudadanía quedaban suspendidos para aquellos que no sabían leer ni escribir. Esta disposición implicó que la mayoría de los indígenas, al no dominar el idioma castellano, fueran automáticamente excluidos de la protección constitucional. Según la autora, la igualdad proclamada en la constitución era más teórica que real, ya que quienes eran considerados incapaces eran colocados bajo la tutela de un protector, perpetuando una jerarquía normativa que contradecía los principios de igualdad formalmente establecidos.

Después de la reforma constitucional de 1994.

Para comprender la operatividad del derecho de propiedad comunitaria aborigen (Bidart Campos, 2005; Ferreyra, 2015; Gelli, 2022; Nino, 2005; Rosatti, 2019; Sabsay y Onaindia, 2009; Sagüés, 2017; Travieso, 1996) es esencial referirse a la Reforma Constitucional de 1994 (Constitución de la Nación Argentina, 1994) y las facultades asignadas al Congreso mediante la incorporación del nuevo artículo 75 en la Constitución Nacional en lo que respecta al derecho indígena, hay dos incisos en particular que requieren un análisis detallado. El artículo, en su inciso 17:

> Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. (Constitución de la Nación Argentina, 1994, art. 75, inc. 17).

El inciso 22, incorporado a través de la reforma, eleva once tratados internacionales al rango de jerarquía constitucional, lo que ha dado lugar a la construcción del Bloque de Constitucionalidad Federal. De este modo, la Constitución no puede desentenderse de la legislación internacional ni de su jurisprudencia, estando obligada a respetarlas (Maceira, 2011).

El inciso 22, refiere:

> Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de

> todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. (Constitución de la Nación Argentina, 1994, art. 75, inc. 22).
>
> .

Según Rosatti (2017), al momento de la reforma constitucional, existían tres posibles caminos respecto al derecho indígena. El primero consistía en eliminar la vieja cláusula de convertirlos al catolicismo, sin ninguna otra regulación que los respetara. El segundo camino consideraba a los pueblos originarios como un sector minoritario dentro del Estado Nacional. Finalmente, la tercera opción, que fue la elegida por el Congreso, consistía en garantizar la participación de las comunidades en la vida nacional, respetando su cultura. Al respecto, el autor afirma: "Desde el punto de vista jurídico-político, los indígenas nacidos en nuestro país son claramente argentinos; desde el punto de vista sociocultural, son habitantes con derechos diferenciados" (p. 96).

La doctrina señala, que la mayoría de la Comisión encargada de la reforma constitucional decidió incluir en la Constitución la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, como un nuevo derecho y garantía, y la minoría proponía una formulación diferente, reconocimiento de la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas, según Gelli (2011), esta elección refleja para el autor, una orientación hacia un modelo de estado liberal, ya que la nueva reforma de la Constitución representó un avance significativo en comparación con reformas anteriores, y que aborda de manera explícita la cuestión de la propiedad comunitaria indígena y sus características dentro del derecho argentino.

Como se ha mencionado, la regulación de los derechos indígenas se centraba únicamente en la búsqueda de igualdad con los demás ciudadanos, sin reconocer la necesidad de una regulación diferenciada que respetará sus valores ancestrales. Esta reforma introduce un marco legal que no solo reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, sino que también

establece derechos específicos que reflejan sus particularidades socioculturales y sus formas tradicionales de organización y propiedad (Ferreyra, 2014; Gelli, 2011; Sagüés, 2017; Vilas, 2003).

Ahora bien, es Bidart Campos (2005) quien al analizar el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, señala que la reforma considera a los pueblos indígenas argentinos como población equivalente. El autor subraya la importancia de reconocer la preexistencia étnica y cultural de estos pueblos, afirmando que no se debe ignorar la herencia acumulada en sus comunidades, ni aislarlos de la sociedad, sino integrarlos adecuadamente. En relación con la posesión y propiedad comunitaria, el autor argumenta que estos derechos son fundamentales para garantizar el asentamiento geográfico de los pueblos indígenas y aclara que la disposición que permite a las provincias ejercer concurrentemente estas atribuciones, les implica la responsabilidad, de proteger los derechos de las minorías. Señala también que se reconoce el derecho a la diferencia, estrechamente vinculado con la identidad personal y es la inclusión de esta nueva cláusula, la que, enmarcada en el pluralismo democrático, no contradice la abolición y prohibición de prerrogativas de sangre y nacimiento establecidas en el artículo 16 de la Constitución Nacional ya que no se otorgan privilegios ni prerrogativas, sino que se expresa una justa manifestación del derecho a la diferencia, esencial en un estado democrático (Ferreyra, 2014; Gargarella, 1995; Sagüés, 2017; Vilas, 2003).

Este reconocimiento, implica la aceptación de estilos de vida y formas de organización diferentes, regulando los derechos indígenas en busca de igualdad con los demás ciudadanos, sin dejar de considerar la necesidad de respeto por sus valores ancestrales y sin ignorar que la inclusión del inciso 22 en la Constitución Nacional, que incorpora la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 169 de la OIT, es crucial, reconocimiento garantiza que, mientras exista la comunidad, no perderán sus tierras y territorios, ya que se trata de un derecho irrenunciable e inalienable (Gargarella, 1995; Kemelmajer de Carlucci y Boretto, 2017; Maceira, 2011).

En coherencia con el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece la competencia del Estado nacional de dictar leyes para proteger la identidad y pluralidad cultural, se indica la importancia de implementar políticas públicas efectivas para proteger los derechos indígenas tanto a nivel federal como provincial, es por ello, que se incluye también la ley 23.302 (1985) y ley 26.160 (2006).

La Ley Nacional 23.302, promulgada en 1985, representa un hito significativo en la política indígena argentina al establecer un marco legal destinado a salvaguardar y fomentar el desarrollo de las comunidades aborígenes en el país. Su propósito fundamental radica en la protección

integral de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades, incluido el derecho ancestral a la propiedad de las tierras que históricamente han ocupado (Martínez Sarasola, 2012; Bidart Campos, 2005).

En su esencia, esta legislación instituye la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), con la responsabilidad primordial de ejecutar políticas públicas orientadas hacia la protección y el progreso de las comunidades indígenas, así como de promover programas específicos destinados a mejorar sus condiciones de vida (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen [ENDEPA], 2014).

La Ley 23.302 (1985) implementa un conjunto de medidas dirigidas a fomentar el desarrollo social y económico de estas comunidades. Entre estas disposiciones se encuentra la creación de un fondo especial destinado a la financiación de proyectos comunitarios, el estímulo a la educación bilingüe e intercultural y el respaldo a las actividades productivas agrícolas y artesanales propias de los pueblos indígenas. Asimismo, la ley consagra el derecho de las comunidades indígenas a participar activamente en los procesos de toma de decisiones que inciden en sus derechos y territorios, fomentando así un enfoque de gobernanza participativa que respeta su autonomía y valoriza su voz en la configuración de políticas públicas que les conciernen directamente (Aguilar, Cavallo, 2011; Feijoó, 2009; Giarracca y Teubal, 2017; Henríquez Ramírez, 2013; Vilas, 2003)

La Ley 26.160, promulgada en 2006, representa un hito legislativo en Argentina al declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras históricamente ocupadas por las comunidades indígenas. Este marco legal suspende la ejecución de sentencias de desalojo por un período determinado y establece la realización de un exhaustivo relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de dichas tierras (Ministerio Público de la Defensa, 2010). El propósito fundamental de la ley es salvaguardar los derechos territoriales de las comunidades indígenas y prevenir su desplazamiento forzoso, en respuesta a las numerosas situaciones de conflicto y desalojo que han afectado a estas comunidades en Argentina. El programa nacional para el relevamiento territorial de las comunidades indígenas (RETECI), creado por esta ley, tiene como objetivo identificar y registrar las tierras ocupadas tradicionalmente por estos pueblos, proporcionando así una base legal para su protección y reconocimiento oficial (Aranda, 2010; Giarracca y Teubal, 2017; Pita Pico, 2021; Svampa, 2008; Trinchero, 2010).

Sin embargo, a pesar de su trascendencia, la implementación efectiva de la Ley 26.160 (2006) ha enfrentado importantes obstáculos. La falta de recursos financieros y humanos ha dificultado el avance del relevamiento territorial, mientras que la resistencia de ciertos sectores políticos y económicos ha limitado su efectividad. A pesar de estas dificultades, la ley ha sido prorrogada en

múltiples ocasiones, lo que evidencia el reconocimiento de su importancia y la necesidad de continuar trabajando en la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Argentina (Anaya, 2005; Aranda, 2010; Giarracca y Teubal, 2017; Grimson y Karasik, 2017; Svampa, 2008).

La propiedad comunitaria indígena en el código de Vélez Sarsfield, el anteproyecto y en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

El Código Civil Argentino fue promulgado en 1869 y entró en vigor en 1871 (Ley 340). Este documento, alineado con la doctrina de la época, consolidó un marco jurídico que no incluía el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades indígenas en el territorio nacional.

El Código Civil Argentino de 1871, redactado por Dalmacio Vélez Sársfield (Ley 340), seguía la tendencia de los códigos de su época al establecer el derecho de propiedad romano-germánico como el único paradigma para regular la relación entre las personas y los bienes. Indudablemente, no contempló la existencia de derechos que pudieran ser atribuidos a las comunidades originarias, ya que en ese período histórico prevalecía la intención de extinguir o asimilar a los pueblos indígenas en la sociedad europeizada. Aún menos, el codificador consideró la posibilidad de reconocer algún tipo de posesión que pudiera dar lugar a la propiedad comunitaria indígena (Abásolo, 2004; Gargarella, 2010; Gelli, 2011; Parise, 2022; Salvatore, 2020).

En cuanto a las personerías jurídicas, se limitó a reconocer las personas jurídicas públicas y privadas mencionadas en el artículo 33. Entre las personas jurídicas públicas, se incluían el Estado nacional, los estados provinciales y municipales, los entes autárquicos y la Iglesia Católica. Entre las personas jurídicas privadas, se reconocían las asociaciones y fundaciones cuyo principal objetivo fuera el bien común, así como las sociedades civiles y comerciales. De esta manera, se sugería que únicamente se podría admitir la existencia de organizaciones indígenas si se integraban en la sociedad y se conformaban a alguna de estas formas de organización reconocidas (Bidart Campos, 2005; Gelli, 2011; Rosatti, 2017; Sabsay y Onaindia, 2009; Sagüés, 2017).

Es importante tener en cuenta que paralelamente a la vigencia del Código de Vélez, en 1985, el Congreso sancionó la Ley 23.302 de Política Indígena, que introduce entre otros institutos jurídicos, la regulación de la propiedad comunitaria y la personería jurídica comunitaria.

El dilema es el lugar de regulación que ocupara la propiedad comunitaria indígena, ya que no cumple con los requisitos establecidos por el derecho privado para la constitución de los derechos

reales[1], estos últimos deben referirse a bienes que están en el comercio y tienen un contenido primordialmente patrimonial y económico.

Sin embargo, tampoco puede considerarse que se asemeje a los derechos personales[2]. Esta es una categoría sustancialmente distinta, tal como lo expuso Vélez Sarsfield al regular los derechos de la personalidad, los cuales son inmateriales y pertenecen a otros aspectos de la vida de las personas (Barcesat y Corti, 2015; Bidart Campos, 2005; Gargarella y Courtis, 2009; Gelli, 2022; Kemelmajer de Carlucci y Boretto, 2017).

Como explicación de la esencia de los derechos reales, el Código Civil establece que, "se llaman cosas en este código, los objetos materiales susceptibles de tener un valor..." (art. 2.311). Los objetos inmateriales no se consideran cosas, sino bienes, y a estos no les son aplicables los derechos reales (art. 2.312). En el mismo sentido, el Código estipula que: "Todas las cosas que están en el comercio son susceptibles de posesión. Los bienes que no fueren cosas no son susceptibles de posesión" (art. 2.400). Por lo que entendemos que, el carácter que los indígenas otorgan a su territorio no es meramente material y, contrariamente a lo que estipula el Código, sus componentes no se encuentran en el comercio (Bidart Campos, 2005; Gelli, 2022; Kemelmajer de Carlucci y Boretto, 2017).

Según el criterio establecido por el mismo Código Civil, un simple pedazo de tierra no suele significar más que un objeto susceptible de un valor económico, una cosa, y como tal, intercambiable por otros bienes o por dinero. Los indígenas, en cambio, encuentran en el término territorio una representación más adecuada a su cosmovisión, siendo este el espacio necesario y esencial para el desarrollo y la transmisión de su cultura ancestral. En ese territorio se encuentran sus raíces y toman sentido sus celebraciones religiosas. Es donde se encuentra su linaje familiar, con las tumbas de sus antepasados, y por ello es el sitio señalado por su cultura para su desarrollo

[1] Dalmacio Vélez Sarsfield no plasmó ninguna definición de los derechos reales en el articulado del Código Civil. Si, en cambio, se encuentra nociones de este instituto en sus notas. La nota del artículo 497: "*Derecho personal es aquel en que una persona es individualmente sujeto pasivo del derecho. Derecho real es aquel en que ninguna persona es individualmente sujeto pasivo del derecho. O, en términos más sencillos, un derecho personal es aquel que da la facultad de obligar individualmente a una persona a una prestación cualquiera, a dar, a suministrar, a hacer o no hacer alguna cosa. Un derecho real es aquel que da la facultad de sacar de una cosa cualquiera un beneficio mayor o menor*". Se describe en la nota del título IV del Libro III que el derecho real "*es el que crea entre la persona y la cosa una relación directa e inmediata, de tal manera que no se encuentran en ella sino dos elementos, la persona que es sujeto activo del derecho, y la cosa que es el objeto*" (Código Civil de la República Argentina, 1869).

[2] La categoría de persona en la que se designa a un sujeto que es titular de los derechos subjetivos. Se trata, por tanto, ya de una categoría conceptual propiamente jurídica, pero de alcance más bien instrumental o técnico. También influye la idea kantiana de que la persona es un fin en sí sobre la base de su autonomía, por lo tanto, constituye una categoría conceptual propiamente jurídica, de alcance técnico (Silva Bascuñán, 2008).

personal, comunitario y espiritual (Azzali y Barberi, 2019; Bengoa, 2009; Bonfil Batalla, 1972; Galeano, 2010; Rivera Cusicanqui, 2010; Svampa, 2008).

Es importante destacar que, en la cosmovisión indígena, el modo de poseer un territorio es absolutamente diferente al modelo de posesión derivado de la cultura europea dominante (Lenton, 2014), la cual conformó los presupuestos filosóficos y fácticos de nuestro sistema jurídico formal y alimentó la creación de nuestros Códigos de Fondo, tales como los Códigos Civil y Penal (Bazán, 2003; Bengoa, 2009; Bonfil Batalla, 1972; Ferrajoli, 2000; Rivera Cusicanqui, 2010; Sousa Santos, 1991; Svampa, 2008).

De manera similar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en 2008, parece haber comprendido esta perspectiva en el caso de la comunidad Eben Ezer de la provincia de Salta, cuando afirmó que la garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas:

> Debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias, derechos consuetudinarios, su vestimenta, filosofía y valores (CSJN, 2008, p. 4).

El caso "Sede, Alfredo y otros c/ Vila, Herminia y otros s/ Desalojo", resuelto por el juez Emilio Riat en San Carlos de Bariloche el 12 de agosto de 2004, constituye un precedente relevante en el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena en Argentina. En esta disputa, Alfredo Sede y otros demandaron el desalojo de inmuebles rurales contra Herminia Vila y otros ocupantes, argumentando que estos no tenían derecho a permanecer en las tierras tras la finalización de una relación laboral previa.

Los demandados, miembros de la comunidad indígena Kom Kiñe Mu de la reserva Ancalao, se opusieron a la demanda invocando su derecho a la propiedad comunitaria y ancestral sobre las tierras en cuestión. Alegaron que el conflicto no podía resolverse mediante un proceso de desalojo, ya que este se limita a derechos personales, sino que requería un proceso petitorio y posesorio que abordara la cuestión de fondo relacionada con los derechos reales. Además, sostuvieron que su posesión ancestral sobre las tierras debía prevalecer y, subsidiariamente, que habrían adquirido la propiedad por prescripción.

Este caso subraya la importancia de interpretar los derechos territoriales indígenas bajo un marco que contemple no solo los principios del derecho civil tradicional, sino también los derechos colectivos y ancestrales consagrados constitucionalmente y reconocidos por normativas

internacionales. La resolución de este conflicto marcó un hito en el debate sobre la propiedad comunitaria en Argentina, destacando la necesidad de una perspectiva jurídica que integre las particularidades culturales y territoriales de las comunidades indígenas.

El juez Riat consideró la ocupación tradicional de la comunidad indígena y su reconocimiento por la ley provincial, destacando que la posesión de los demandados era anterior a los títulos de los actores. En consecuencia, decidió que la cuestión excede el marco de un proceso de desalojo, que se limita a determinar la tenencia material y no los derechos de propiedad más amplios. Así, rechazó la demanda de desalojo y las costas fueron impuestas por su orden. Este fallo resalta la importancia de reconocer y respetar los derechos ancestrales y comunitarios de las comunidades indígenas, alineándose con el marco constitucional y legal que protege estos derechos en Argentina. La decisión subraya la necesidad de considerar el contexto histórico y cultural de la ocupación indígena, y establece un precedente para la defensa de los derechos territoriales de las comunidades indígenas frente a intentos de desalojo basados en títulos de propiedad que no consideran la posesión ancestral (Azzali y Barberi, 2019; Grimson y Karasik, 2017).

La propiedad comunitaria reconocida a las comunidades indígenas no afecta el derecho a usar, gozar y disponer de un bien, sino que varía el modo de su ejercicio. En este modo particular de ejercicio, los comuneros están vinculados por lazos de solidaridad, siendo cada uno de ellos dueño de la totalidad del bien, con las restricciones impuestas por la explotación comunitaria y las exigencias de la justicia social (Anaya, 2005; Lezcano,2015; Nino, Maurino y Fiss, 2007; Belli, Slavutsky y Torres, 2017).

> La propiedad comunitaria de estos pueblos trasciende el concepto de derecho real que nosotros tenemos, porque no solo se refiere a la apropiación de las cosas, sino también a un modo de vida, de ser, de quehacer y de relacionarse con el otro (González de Prada, 2013, p. 1296).

Siguiendo la jurisprudencia internacional (Comunidad Mayagna Awas Tingni vs. Nicaragua, 2001, párr. 151; Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, 2006, párr. 128), la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado.

A partir del 23 de agosto de 2012, se inició el tratamiento de la posible incorporación de la cuestión jurídica indígena en el proyecto de reforma del Código Civil, a través de audiencias públicas organizadas por la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación. La Comisión debía expedirse en un

plazo de 90 días, tomando como base el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el 8 de junio del mismo año ante el Senado de la Nación (Congreso de la Nación Argentina, 2012). Sin embargo, estas disposiciones fueron objeto de debate y, finalmente, no se incorporaron en el texto definitivo del Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado en 2014 y vigente desde 2015.

El Anteproyecto del Código Unificado pretendía incorporar la propiedad comunitaria indígena como un derecho civil privado, lo que generó diversas controversias. La propuesta inicial intentaba adaptar la propiedad comunitaria indígena a los principios del derecho civil tradicional, sin considerar adecuadamente las particularidades culturales y sociales de las comunidades indígenas. La visión era que este tipo de propiedad se asemejara a la propiedad privada, pero adaptada a las especificidades de las comunidades indígenas, permitiendo así una integración más fácil en el sistema jurídico existente (Gargarella, 2010; Gelli, 2022; Kemelmajer de Carlucci y Boretto, 2017; Rodríguez Duch, 2013; Svampa, 2008).

Este esfuerzo representó un intento ambicioso de unificar y modernizar la legislación civil y comercial en Argentina. No obstante, la inclusión de la propiedad comunitaria indígena como un derecho civil privado suscitó críticas y oposición de diversos sectores. Los defensores de los derechos indígenas argumentaron que esta perspectiva no respetaba la naturaleza colectiva y comunitaria de la propiedad indígena. Sostenían que era necesario un enfoque jurídico que refleja adecuadamente las particularidades culturales y espirituales de estos pueblos (Canet, 2006 Gargarella, 2013; Gil Domínguez, 2016; Kemelmajer de Carlucci y Boretto, 2017; Svampa, 2008; Trejo, 2016).

En 2015, se presentó en el Congreso de la Nación Argentina un proyecto de ley destinado a establecer un marco legal específico para la propiedad comunitaria indígena. Este proyecto tenía como objetivo garantizar la protección de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, asegurando su inenajenabilidad y protegiendo sus derechos frente a terceros. Entre las propuestas incluidas en el proyecto se destacaban la creación de un registro nacional de tierras indígenas, el reconocimiento de la propiedad comunitaria como inembargable e inalienable, y la implementación de mecanismos específicos para la resolución de conflictos territoriales (Giarracca y Teubal 2017; Gil Domínguez, 2016; Manzanelli, 2021).

La presentación del proyecto de ley de 2015 respondió a la imperiosa necesidad de contar con una legislación específica que amparara los derechos territoriales de las comunidades indígenas en Argentina. Además de las medidas previamente mencionadas, el proyecto proponía la creación de un sistema de registro y titulación de tierras comunitarias, la implementación de programas de desarrollo sostenible, y la promoción de la participación de las comunidades indígenas en la

gestión y protección de sus territorios. No obstante, su importancia y la evidente necesidad de dicha legislación, el proyecto no fue aprobado, reflejando las dificultades y resistencias presentes en el ámbito legislativo para el reconocimiento pleno de los derechos indígenas (Gil Domínguez, 2016; Manzanelli, 2021).

La propiedad comunitaria indígena no puede considerarse un derecho real en los términos tradicionales del derecho civil, debido a sus características únicas y la relación especial que las comunidades indígenas tienen con sus tierras. Este tipo de propiedad se basa en la posesión colectiva y la relación cultural y espiritual con el territorio, lo que la distingue de la propiedad privada individual. La doctrina jurídica sostiene que la propiedad comunitaria indígena debe ser entendida como un derecho sui generis, que requiere un marco normativo específico que respete y proteja las particularidades culturales y sociales de las comunidades indígenas (Azzali y Barberi, 2019; Canet, 2006; Gargarella y Courtis 2009; Gil Domínguez, 2004; Sousa Santos, 2007; Svampa, 2008).

El concepto de propiedad comunitaria indígena se fundamenta en la cosmovisión de los pueblos originarios, que consideran la tierra como un elemento integral de su identidad cultural y espiritual. Para las comunidades indígenas, la tierra no es simplemente un recurso económico, sino un componente esencial de su vida y existencia. Este enfoque holístico contrasta con la visión occidental de la propiedad, que se centra en la dominación y explotación de los recursos naturales. Por lo tanto, es crucial que el marco jurídico reconozca y respete estas diferencias, y desarrolle una legislación específica que garantice los derechos territoriales de los pueblos indígenas (Azzali y Barberi, 2019; Gargarella, 2013; Gil Domínguez, 2016; Kemelmajer de Carlucci y Boretto, 2017; Sousa Santos, 2007; Svampa, 2008).

El sistema interamericano de derechos humanos ha desempeñado un papel crucial en la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido varios fallos importantes que reconocen y protegen los derechos de las comunidades indígenas a sus tierras y recursos naturales, estos fallos han influido en la jurisprudencia nacional y han reforzado la necesidad de una protección efectiva de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Argentina (Briones, 2005; Gargarella, 2013; Gil Domínguez, 2016; Sagüés, 2017; Svampa, 2008).

El reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena es un paso fundamental hacia la justicia histórica para los pueblos originarios de Argentina. Sin embargo, el camino hacia la plena implementación de estos derechos es complejo y requiere un compromiso continuo por parte del Estado y la sociedad en su conjunto. La creación de un marco legal robusto y específico, junto con

la voluntad política para su implementación, es esencial para asegurar que los derechos territoriales de las comunidades indígenas sean respetados y protegidos en la práctica. Solo entonces se podrá garantizar un desarrollo justo y sostenible para los pueblos originarios, en armonía con sus valores culturales y espirituales (Briones, 2005; Gil Domínguez, 2016; Sagüés, 2017).

En la redacción final del Código Civil y Comercial, se dedicó un único artículo a la propiedad comunitaria indígena. Este artículo reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y su derecho a la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Sin embargo, remite a la necesidad de una ley especial que regule específicamente este derecho, destacando la particularidad de la propiedad comunitaria en contraste con la propiedad privada convencional. Aunque este reconocimiento constituye un avance significativo, su implementación práctica depende de la creación de la mencionada ley especial, la cual aún está pendiente. (González Sassón, 2018).

El artículo 18 del nuevo Código Civil y Comercial (Ley 26.994) establece que la propiedad comunitaria indígena es inalienable, imprescriptible, inembargable y no está sujeta a tributos. Este reconocimiento es un avance significativo en el marco jurídico argentino, pero la falta de una ley especial que desarrolle y reglamente estos principios ha limitado su aplicación efectiva. Las comunidades indígenas continúan enfrentando desafíos en la protección de sus tierras y derechos territoriales, siendo necesaria la creación de una ley especial para garantizar la efectividad de estas disposiciones (Gargarella, 2013; Gelli, 2011; Gil Domínguez, 2016; Herrera, Caramelo y Picasso, 2015; Kemelmajer de Carlucci y Boretto, 2017; Lorenzetti, 2017; Medina Hernández, 2000; Sagüés, 2017).

Reconocimiento constitucional del multiculturalismo.

El multiculturalismo se ha convertido en un eje central de las políticas de reconocimiento y derechos en diversas partes del mundo (Rivera Cusicanqui, 2010; Sousa Santos, 2003; Stavenhagen, 2010; Villoro, 1998; Yrigoyen Fajardo, 2004).

El reconocimiento constitucional del multiculturalismo en Argentina se inserta en un contexto histórico marcado por las luchas y reivindicaciones de los pueblos indígenas y otras minorías culturales, quienes durante décadas han demandado el respeto y la protección de sus derechos. La ratificación del Convenio 169 de la OIT en 1992 representó un hito fundamental en este proceso, estableciendo un marco normativo que impone al Estado la obligación de respetar y promover los derechos de estos pueblos (Bidart Campos, 2005).

Posteriormente, la reforma constitucional de 1994 incorporó estos principios en el texto constitucional, reconociendo explícitamente en el artículo 75, inciso 17, la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas (Bidart Campos, 2005). Este reconocimiento no se limita a un mero simbolismo, sino que acarrea implicancias legales y políticas de gran envergadura, estableciendo un nuevo paradigma en la protección de los derechos colectivos y culturales en el país (Briones, 2002; Gargarella, 2010; Gelli, 2011; Gil Domínguez, 2016; Sabsay y Manili,2010; Svampa, 2008).

Varios principios fundamentales guían la interpretación y aplicación del derecho del multiculturalismo en Argentina, entre estos principios, se destaca la igualdad y la no discriminación, que aseguran que todas las culturas dentro del territorio argentino sean tratadas con el mismo respeto y consideración, el principio de autodeterminación es esencial, permitiendo a los pueblos indígenas el control sobre sus instituciones, territorios y recursos naturales. Estos principios son considerados mandatos de optimización, en el sentido que deben ser realizados de la mejor manera posible dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes (Alexy, 2002a; Barabas 2004; González de Prada, 2018).

Los mandatos de optimización son principios jurídicos que no imponen obligaciones absolutas, sino que exigen su realización en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas existentes. Este concepto, desarrollado por Alexy (2002a), es fundamental para entender cómo se aplican los derechos reconocidos en la Constitución, especialmente en contextos complejos (Alexy, 2003b; Guastini, 2014), como el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas (Bidart Campos, 2005; Gargarella, 2013; Gelli, 2022; Gil Domínguez, 2004; González de Prada, 2018).

En el ámbito del multiculturalismo, los mandatos de optimización permiten que los derechos de los pueblos indígenas, como la propiedad comunitaria de la tierra, sean protegidos y promovidos de manera flexible, considerando las circunstancias específicas de cada caso (Bidart Campos, 2005; Gargarella, 2013; Gil Domínguez, 2004; González de Prada, 2018).

La aplicación de estos mandatos implica una ponderación cuidadosa en situaciones de conflicto entre principios, como entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a la propiedad comunitaria indígena. No se trata de invalidar uno de los derechos en conflicto, sino de encontrar una solución que maximice la realización de ambos principios dentro de las limitaciones del caso concreto. Este enfoque es particularmente relevante en contextos donde las culturas indígenas y la cultura dominante tienen visiones y prácticas diferentes respecto a la propiedad y el uso de la tierra. (Gelli, 2022; González de Prada 2018; Lorenzetti, 2017).

El Poder Judicial desempeña un papel central en la implementación de los mandatos de optimización. Los jueces, al interpretar y aplicar la Constitución y los tratados internacionales, deben considerar estos mandatos como guías para maximizar la protección de los derechos fundamentales en cada caso específico. Aunque los principios y las reglas funcionan de manera distinta, ambos son igualmente vinculantes y deben ser considerados por los jueces en los casos relevantes, con el objetivo de asegurar una justicia equitativa y el respeto a los derechos fundamentales en un Estado de derecho plural y multicultural (Bianchi, 2013; Fos Medina, 2012; González de Prada, 2018; Lorenzetti, 2017; Rosatti, 2019; Treacy, 2011).

A pesar de los avances normativos, la implementación efectiva del reconocimiento constitucional del multiculturalismo enfrenta varios desafíos. Uno de los principales obstáculos es la tensión entre el derecho consuetudinario indígena y el derecho estatal, especialmente en áreas como la propiedad de la tierra y la gestión de recursos naturales. Además, persiste un debate sobre la operatividad de los principios constitucionales, es decir, si requieren legislación adicional para ser plenamente aplicables o si son autoejecutables. La aplicación efectiva de los mandatos de optimización requiere un Poder Judicial capacitado y comprometido con la protección de los derechos fundamentales, así como un compromiso continuo del Estado para respetar y promover la diversidad cultural (Bidart Campos, 2005; Gargarella, 2013; Gelli, 2022; Gil Domínguez, 2016; González de Prada, 2018; Lorenzetti, 2017).

> Conforme a ello, el Estado, en todas sus dimensiones, está obligado a proteger estos derechos. Pero esto no es solo algo que el parlamento debe asegurar mediante leyes. Es más, quien está en mejores condiciones de hacer los juicios de valor es el Poder Judicial y, mientras solo exista un medio efectivo de protección, el Estado tiene obligación de utilizarlo. Aun cuando se dicten leyes que reglamenten estos derechos, siempre la valoración de aquellas estará en poder de los jueces, fundamentando en el caso concreto sus sentencias con argumentos iusfudamentales, con firmeza y claridad, y mediante las reglas de la lógica y de la argumentación práctica y jurídica (González de Prada, 2018, p.151).

El postpositivismo y la dimensión argumentativa.

En las últimas décadas, ha surgido y evolucionado una corriente denominada postpositivismo (Atienza Rodríguez y Ruiz Manero, 2009) también conocida como constitucionalismo argumentativo (Atienza, 2013; Ferrajoli, 2011). Esta perspectiva filosófica del derecho concibe al

derecho como una práctica social con una dimensión argumentativa esencial. La tesis central del postpositivismo sostiene que existe una conexión necesaria entre la práctica jurídica y la práctica moral (Lozada 2016) lo que implica que en la argumentación jurídica no solo se manejan elementos autoritativos, sino también morales.

Para explicar esta relación, el postpositivismo ha desarrollado la categoría de principio jurídico, que actúa como una especie de enlace o puente, en términos de Alexy (2002a, 2003a, 2011), entre el derecho y la moral. Por esta razón, muchos de los principales autores postpositivistas (Alexy 2002b; Atienza, 2013; Dworkin, 1977; Ruiz Manero, 1990) han formulado sus propias versiones teóricas de los principios jurídicos

Los principios jurídicos, son definidos como mandatos de optimización, que se caracterizan porque ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas (Alexy, 2011).

Esta concepción difiere de la de las reglas, que son definitivas y se aplican de manera todo o nada. Es decir, mientras que una regla se cumple o no se cumple, un principio permite un grado de cumplimiento variable según el contexto.

En su obra, Alexy (2011) enfatiza que los principios están diseñados para ser ponderados frente a otros principios cuando entran en conflicto. Este proceso de ponderación es esencial para su teoría, ya que permite encontrar una solución que maximice la realización de ambos principios dentro de las limitaciones del caso concreto.

En este sentido, los principios no se excluyen mutuamente, sino que coexisten en un equilibrio que depende de las circunstancias específicas del caso.

Un aspecto clave en la teoría de Alexy (2003b) es la relación entre los principios y el principio de proporcionalidad. Este principio, que consta de tres subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, guía la aplicación de los principios como mandatos de optimización. Según Alexy (2003a) el principio de proporcionalidad asegura que cualquier acción jurídica tomada debe ser adecuada, necesaria y equilibrada respecto a los intereses en juego.

De esta manera, los principios se optimizan al ser realizados en la mayor medida posible, respetando los límites impuestos por la realidad jurídica y fáctica.

En cuanto a la crítica a Dworkin (1977), sostiene que su distinción entre principios y reglas es insuficiente, ya que no considera la necesidad de optimización de los principios. Para Alexy (2011) los principios no deben ser vistos solo como estándares de importancia, sino como normas que

requieren ser optimizadas (Alexy, 2008). Esta crítica resalta la importancia de los principios como elementos dinámicos y adaptables dentro del sistema jurídico.

En el ámbito del derecho constitucional, es donde los tribunales han utilizado los conceptos de Alexy (2011), para resolver conflictos entre derechos fundamentales. En estos casos, los jueces deben asegurar que cada derecho se respete en la mayor medida posible sin infringir indebidamente otros derechos. Esto subraya la importancia de la ponderación y la optimización de los principios en la búsqueda de soluciones justas y equilibradas en situaciones de conflicto.

Teoría sobre los casos difíciles y su aplicación en la interpretación de derechos constitucionales.

La teoría de Alexy (2008), sobre los casos difíciles y la distinción entre principios y reglas ofrece una herramienta invaluable para la interpretación de los derechos constitucionales reconocidos en el artículo 75 inciso 17,19,22 y 23 de la Constitución Nacional Argentina.

La aplicación de estos principios, a través de la ponderación en casos de conflicto, permite asegurar una protección adecuada de los derechos de los pueblos indígenas, en consonancia con los valores de igualdad y no discriminación que subyacen en la Constitución Nacional Argentina (Bidart Campos, 2005; García Figueroa, 1998; Gelli, 2011; Gil Domínguez, 2016; González de Prada, 2018; Sieckmann, 2006).

Entre los derechos reconocidos en este artículo se encuentran:

1. **La preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos (inc. 17)**: Este derecho reconoce que los pueblos indígenas existían antes de la formación del Estado argentino y tienen derechos específicos derivados de esta preexistencia.
2. **El respeto a su identidad (inc. 17)**: Se garantiza el respeto a la identidad cultural, social, y política de los pueblos indígenas, permitiendo el desarrollo continuo de sus tradiciones y patrimonio cultural.
3. **El derecho a una educación bilingüe e intercultural (inc. 17)**: Se establece la obligación del Estado de proporcionar una educación que respete y promueva las lenguas y culturas indígenas, asegurando que los niños indígenas reciban educación tanto en su lengua materna como en la lengua oficial del país.
4. **La personería jurídica de sus comunidades (inc. 17)**: Se reconoce la capacidad de las comunidades indígenas para ser titulares de derechos y obligaciones, permitiéndoles actuar legalmente como personas jurídicas en la defensa de sus derechos.

5. **La posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan (inc. 17)**: Este derecho garantiza que las tierras ocupadas por los pueblos indígenas sean reconocidas como de su propiedad comunitaria, lo que implica que no pueden ser enajenadas, embargadas o gravadas.
6. **La regulación de la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano (inc. 17)**: Se obliga al Estado a proporcionar tierras adicionales, cuando sea necesario, para asegurar el desarrollo integral de las comunidades indígenas.
7. **La característica de la propiedad inenajenable, intransmisible y no susceptible de gravámenes o embargos (inc. 17)**: Se establece que las tierras comunitarias de los pueblos indígenas no pueden ser vendidas, transferidas ni embargadas, asegurando su protección a largo plazo.
8. **El derecho a participar en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten (inc. 17)**: Este derecho asegura que los pueblos indígenas tengan voz y participación en la gestión y administración de los recursos naturales en sus territorios, así como en otras cuestiones que afecten sus intereses, incluyen:

a) **El derecho a la identidad y pluralidad cultural (inc. 19)**: Este subpunto establece que, además de participar en la gestión de recursos naturales, los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover su identidad cultural y a ser reconocidos como parte de una sociedad plural y diversa. Esto implica que cualquier gestión de recursos debe considerar y respetar la pluralidad cultural de los pueblos indígenas.

b) **El reconocimiento con raigambre constitucional de los derechos humanos (inc. 22)**: Los derechos de los pueblos indígenas están enraizados en el marco de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente. Esto incluye el respeto a sus derechos colectivos, la protección contra la discriminación y la garantía de participación en decisiones que los afecten.

c) **El derecho a que se garantice la igualdad real de oportunidades y de trato (inc. 22)**: Este subpunto asegura que, en la gestión de recursos y en otras decisiones que afecten a los pueblos indígenas, se garantice la igualdad real, evitando cualquier tipo de discriminación. Los pueblos indígenas deben tener las mismas oportunidades que el resto de la población en cuanto a participación en la gestión de sus territorios y recursos.

d) **El derecho al pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos (inc. 22)**: Este subpunto refuerza que los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de los derechos reconocidos tanto

por la Constitución Nacional como por los tratados internacionales de derechos humanos. Esto incluye su derecho a participar en la gestión de recursos naturales, asegurando que sus intereses sean adecuadamente representados y protegidos.

El reconocimiento de derechos subjetivos para todos los habitantes de la Nación Argentina marcó un cambio significativo en el derecho positivo, impulsando una transición hacia la constitucionalización de los derechos humanos y, en consecuencia, del derecho privado. Este avance, junto con el reconocimiento de un Estado pluricultural y la obligación del parlamento de asegurar la igualdad real de oportunidades y el pleno goce de los derechos, transformó la concepción previa del derecho (Bianchi, 2013; Bidart Campos, 2005; Ferrajoli, 2000; Gargarella, 2010; Gelli, 2011; Gil Domínguez, 2004).

Al entender estas normas como principios fundamentales, es necesario establecer si se comportan como principios o como reglas. Los principios, según Alexy (2011, 2003c), son mandatos de optimización que buscan la mejor realización posible dentro de las limitaciones jurídicas y fácticas existentes, mientras que las reglas demandan un cumplimiento absoluto en el ámbito de lo posible (Gargarella, 2013; Gelli, 2011; Gil Domínguez, 2004; González de Prada, 2018; Ruiz Manero, 1990).

Cuando se presentan conflictos entre reglas, la validez de una excluye la validez de la otra, a menos que se pueda establecer una excepción. Sin embargo, en el caso de los principios, el conflicto se resuelve a través de una ponderación, determinando cuál principio tiene mayor peso en la situación concreta. No existen precedencias absolutas, sino que estas se establecen según las condiciones específicas del caso (Bianchi, 2013; Gelli, 2011; González de Prada, 2018).

En este contexto, los incisos del artículo 75, incluyendo el inciso 17,19,22 y 23, se interpretan como principios que demandan la optimización de los derechos reconocidos. En situaciones de conflicto, se debe ponderar cuál principio prevalece, utilizando criterios que maximicen las ideas de igualdad y libertad, considerando que la igualdad requiere tratar de manera distinta a quienes se encuentran en condiciones diferentes y que la libertad está condicionada por la cultura a la que pertenecen las personas involucradas (Bianchi, 2013; Bidart Campos, 2005; Ferrajoli, 2011; Gargarella y Courtis, 2009; Gelli, 2011).

La teoría de Alexy (2011, 2008) sobre los principios como mandatos de optimización proporciona un marco teórico robusto para entender cómo se deben aplicar los principios jurídicos en contextos complejos. Su énfasis en la ponderación, el principio de proporcionalidad y la crítica a Dworkin (1986) consolidan su posición como una de las teorías más influyentes en el ámbito del derecho

constitucional contemporáneo (Bayón Mohino, 1991; Ferrajoli, 2011; Gelli, 2011; Gil Domínguez, 2016; Habermas, 2005; Lopera, 2004; Sieckmann, 2006).

Reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas en contraposición al monismo jurídico del Estado. El pluralismo jurídico y plurijuridismo.

El monismo jurídico ha sido representado por varios autores a lo largo de la historia, especialmente en la tradición del derecho positivo, cuyo énfasis es la centralización del poder estatal, Kelsen (2011), sostiene que el sistema jurídico es un conjunto de normas jerárquicamente organizadas que derivan de una norma fundamental, siendo el derecho estatal el único sistema normativo válido.

Hart, (2011) también adopta una visión monista al considerar que el sistema jurídico se basa en reglas primarias y secundarias, aunque reconoce la existencia de normas sociales fuera del derecho estatal. Austin, (1832), defiende que solo el derecho estatal, respaldado por sanciones emitidas por un soberano, constituye un verdadero sistema normativo. Por otro lado, Jellinek, (2000) sostiene que la soberanía estatal implica que todas las normas jurídicas deben emanar del Estado, consolidando así una visión monista del derecho. De manera similar, Hegel (1993) concibe al Estado como la realización última de la libertad y la racionalidad en la sociedad, donde el derecho estatal se convierte en la encarnación de la ética y la voluntad general, reforzando la idea de que el derecho estatal es la única fuente legítima de normatividad.

El pluralismo jurídico, se presenta como una crítica al monismo jurídico del Estado, cuestionando la idea de que el derecho estatal sea la única forma válida de normatividad, argumenta que el derecho es esencialmente múltiple y heterogéneo. Esta crítica ha sido compartida y ampliada por otros autores influyentes en el campo del derecho Merry, (2003) explora cómo diferentes sistemas jurídicos coexisten y se entrelazan en contextos coloniales y poscoloniales, destacando que las comunidades mantienen y desarrollan sus propios sistemas legales, desafiando así la exclusividad del derecho estatal. De manera similar, Sousa Santos, (2007), argumenta que la globalización ha intensificado la coexistencia de múltiples órdenes jurídicos, tanto dentro de los estados como en el ámbito internacional, defendiendo la necesidad de reconocer esta pluralidad para entender y transformar las realidades sociales contemporáneas. Aragón Andrade (2008) se analiza cómo las comunidades indígenas y otros grupos marginados articulan sus sistemas normativos frente al derecho estatal, defendiendo la coexistencia de múltiples órdenes jurídicos como una vía para la justicia social y el reconocimiento de la diversidad cultural. Griffiths (1986), ofrece una definición clave al argumentar que no existe una única fuente de normatividad en la sociedad, sino múltiples sistemas legales que operan simultáneamente, con el derecho estatal como solo uno entre muchos.

Canto Sáenz, (2017), plantea que el pluralismo jurídico es una respuesta necesaria a la homogeneización cultural impuesta por la globalización. Argumenta que la coexistencia de múltiples sistemas normativos dentro de un mismo territorio no solo desafía el poder y la soberanía del Estado-nación, sino que también ofrece una vía para lograr mayor justicia y equidad en sociedades culturalmente diversas.

En este sentido, el pluralismo jurídico reconoce la coexistencia de múltiples sistemas normativos dentro de un mismo territorio, donde el sistema estatal es solo uno de ellos, a menudo en competencia o interacción con otros sistemas. Ello, desafía la concepción tradicional de la soberanía y abre un espacio para el reconocimiento de derechos que trascienden el marco del Estado-nación (Carbonnier, 1994; Iturralde, 2004; Sierra, 2021; Yrigoyen Fajardo, 2000).

Esta perspectiva implica una descentralización del poder normativo y una multiplicación de las fuentes del derecho, lo que podría llevar a una mayor justicia y equidad en sociedades donde las culturas y tradiciones locales han sido históricamente marginadas por el derecho estatal

El concepto de plurijuridismo, dentro del marco del derecho privado argentino, se relaciona directamente con la creciente complejidad normativa y la necesidad de articular diversas fuentes jurídicas en un sistema coherente, dentro de un sistema de normas jerarquizadas que dan solución al conflicto, según la primacía que se les da. En la práctica, el derecho no puede reducirse a un sistema único e indivisible, ya que en la realidad social existen múltiples normatividades que operan simultáneamente (Abramovich y Courtis, 2002; Lorenzetti, 2017; Lopera, 2004).

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ha reconocido esta realidad, alejándose del modelo monista tradicional donde la ley era vista como la única fuente válida de derecho. En su lugar, se adopta una perspectiva pluralista que incluye la integración de normas constitucionales, convencionales, y de derecho internacional, junto con la legislación nacional (Abramovich y Courtis, 2002; Lorenzetti, 2017; Zagrebelsky, 2014).

Este enfoque permite enfrentar la era del desorden normativo, como lo denomina Lorenzetti (2017), donde la proliferación de leyes y la fragmentación de normas requieren una técnica de armonización, más que la simple jerarquización de fuentes. En este contexto, el diálogo de fuentes, propuesto por Prieto Sachís (1997), se convierte en una herramienta esencial para abordar las antinomias y conflictos normativos, promoviendo una interpretación que busque coherencia y respeto por la diversidad jurídica (González de Prada, 2018; Iturralde, 2004; Lorenzetti, 2017; Nino, 2013; Peces-Barba, 1991; Yrigoyen Fajardo, 2004).

El pluralismo jurídico, también plantea desafíos significativos, especialmente en la aplicación de normas que podrían justificar comportamientos contrarios a derecho. La inclusión de usos y prácticas, como fuentes normativas dentro del Código Civil y Comercial, sin cumplir plenamente con los requisitos de la costumbre jurídica, puede generar incertidumbre y abrir la puerta a interpretaciones abusivas (Bayón Mohino, 1991; Gargarella, 1995; Gil Domínguez, 2016; Sieckmann, 2006).

Sin embargo, el reconocimiento del plurijuridismo dentro del derecho argentino refleja una adaptación necesaria a la realidad contemporánea, donde las normativas ya no pueden ser vistas como sistemas cerrados y aislados, sino como partes de un todo interconectado que debe ser interpretado en su conjunto. Este enfoque pluralista no sólo fortalece la protección de derechos fundamentales al integrar principios constitucionales y convencionales, sino que también obliga a los operadores jurídicos a adoptar una postura más reflexiva y compleja al enfrentar problemas legales en un entorno normativo diverso (Depetris, 2015; González de Prada, 2018; Lorenzetti, 2017; Sagüés, 2017).

Capítulo IV. La dogmática judicial y la crítica jurídica

La aplicación de modelos de equidad.

Las teorías de equidad constituyen modelos de interpretación y análisis orientados a corregir desigualdades estructurales mediante la redistribución de derechos y recursos en favor de los sectores históricamente desfavorecidos. En este sentido, la justicia como equidad se presenta como una herramienta esencial para evaluar las decisiones judiciales relacionadas con la distribución de derechos. Sin embargo, estas teorías no pueden aplicarse de forma aislada; en sociedades multiculturales, la justicia no debe limitarse a la aplicación uniforme de normas abstractas, sino que debe integrar la diversidad cultural y reconocer las especificidades de las comunidades indígenas. Este enfoque implica una comprensión profunda de las particularidades socioculturales y una sensibilidad hacia sus necesidades y demandas históricas.

El análisis de los conflictos territoriales indígenas se ve enriquecido por la incorporación de las Teorías Críticas del Derecho, las cuales ofrecen una perspectiva fundamental para cuestionar la supuesta neutralidad del sistema judicial en la gestión de estos conflictos. Estas teorías permiten visibilizar las dinámicas de poder que subyacen en los procesos legales y ponen de manifiesto las limitaciones de un enfoque jurídico tradicional para abordar la complejidad inherente a los derechos territoriales indígenas.

En este marco, se resalta la importancia de replantear el papel del derecho no solo como un instrumento normativo, sino también como un medio para promover la justicia en contextos caracterizados por la pluralidad cultural y la histórica marginación de las comunidades.

Rawls y la equidad distributiva.

La teoría de la justicia de Rawls (1997) es un punto de referencia crucial en la filosofía política contemporánea, porque introduce la idea de la justicia como equidad y establece que las instituciones básicas de la sociedad no solo deben ser ordenadas y eficientes, sino justas. Su premisa es que, si una institución no es justa, debe ser reformada o abolida (Bobbio, 1989; Gargarella, 2013; Nino, 1992).

Uno de los pilares fundamentales de la teoría de Rawls (1996), es su crítica al utilitarismo de Bentham (1839;2008) y Milll (2001) doctrina filosófica que predominó antes de su propuesta, y que justifica sacrificios de unos pocos en beneficio de la mayoría. Rawls (1997), argumenta que el utilitarismo no protege adecuadamente los derechos fundamentales de los individuos y propone

un enfoque contractualista, basado en un contrato hipotético, donde las personas, bajo una posición original y detrás de un velo de ignorancia, elegirían principios de justicia que no favorecieron a ninguna persona en particular (Pogge, 2008).

En el contexto judicial, los postulados de Rawls (1997, 2002) forman parte de una estructura básica justa que asegura, que las desigualdades serán únicamente justificadas, si benefician a los menos aventajados. Este enfoque proporciona, una base teórica a favor de la redistribución de recursos y oportunidades como una forma de corregir injusticias históricas y desventajas sistemáticas en grupos desventajosos (Hernández Castillo, 2011; Serrano Sánchez 2008; Sousa Santos, 2014; Taylor, 1995).

La justicia social, según Rawls (1997) se articula a través de la estructura fundamental de la sociedad y la forma en que las instituciones principales distribuyen los derechos y deberes esenciales. En una sociedad bien ordenada, el diseño institucional está orientado a promover el bienestar de sus miembros y se gobierna de manera efectiva bajo una concepción pública de justicia.

> Nuestro tema es de Justicia social. Para nosotros el objeto de la justicia es la estructura básica de la sociedad, más exactamente, el modo en que las instituciones sociales más importantes distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas provenientes de la cooperación social. Por instituciones más importantes entiendo la Constitución Política y las principales disposiciones económicas y sociales (Rawls, 1997, p. 20).

Rawls (1997) introduce dos principios fundamentales de justicia que guían la organización de una sociedad justa:

> 1. **Principio de Igual Libertad**: "Cada persona ha de tener un derecho igual al más extenso sistema total de libertades básicas compatible con un sistema similar de libertad para todos" (Rawls, 1997, p. 67).
> 2. **Principio de la Diferencia y Justa Igualdad de Oportunidades**: "Las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo a tal que a la vez: (a) se espera razonablemente que sean ventajosas para todos y (b) se vinculen a empleos o cargos asequibles para todos" (Rawls, 1997, p. 68).

Estos principios buscan asegurar que cualquier desigualdad social y económica sea diseñada para beneficiar a los menos aventajados y que las oportunidades estén accesibles para todos, garantizando así una justa distribución de los recursos y ventajas (Rawls, 1997).

En la teoría de Rawls (1997) el concepto fundamental es la posición original, un marco hipotético diseñado para identificar los principios de justicia que seleccionarían individuos racionales si estuvieran en una situación inicial de igualdad, conocida como el velo de la ignorancia. En esta condición, las personas carecen de conocimiento sobre sus propias características, como su posición social, habilidades o circunstancias particulares, lo que les permite elegir principios de justicia de forma imparcial, guiados únicamente por la equidad.

> Se trata de una teoría diseñada para un tipo de objeto específico: la estructura básica de la sociedad, las instituciones sociales, políticas y económicas de una democracia constitucional moderna. Examino solamente los principios de justicia que regularían una sociedad bien ordenada, (preguntándome) ¿Cómo sería una sociedad perfectamente justa? (Rawls, 1997, p. 25).

La posición original, según Osorio García (2010), es un modelo de decisión racional que integra intuiciones fundamentales sobre la persona, considerada racional y razonable, y sobre la sociedad, entendida como un sistema de cooperación bien estructurado. Este modelo actúa también como un mecanismo de justicia procedimental del cual se derivan los principios de la justicia como equidad. Otros pensadores han desarrollado ideas similares; el imperativo categórico de Kant (1978), la teoría contractualista de Scanlon (2003) en busca de principios universalmente aceptables, la teoría de la decisión en condiciones de incertidumbre de Harsanyi y Selten (1988) y la descripción de un estado hipotético en Hobbes (1994), en el que los individuos acuerdan someterse a una autoridad para garantizar la paz y el orden.

Rawls (2002) enfatiza la importancia de tratar a las personas como fines en sí mismas y no simplemente como medios para lograr otros fines. Este enfoque, profundamente influenciado por la filosofía kantiana, sostiene que las instituciones justas deben respetar la dignidad y los derechos fundamentales de cada individuo, fomentando una cooperación social basada en la equidad y el respeto mutuo (Kant, 1978; Lafuente Guantes,2004).

> Podríamos decir que tratar a las personas siempre como fines y nunca sólo como medios significa cuando menos tratarlas tal como lo exigen aquellos principios a los que ellas darían un consentimiento en una posición original de igualdad… considerar a una persona como fin en sí misma en el diseño básico de la sociedad es estar de acuerdo en renunciar a aquellas ganancias que no contribuyan a sus expectativas (Rawls, 1999, pp. 58-59).

Este principio es fundamental para garantizar que las desigualdades permitidas en la sociedad beneficien a todos, especialmente a los menos aventajados, Rawls (1997), sostiene:

> Las desigualdades de la estructura básica de la sociedad, probablemente inevitables, a las que deben aplicar en primera instancia los principios de la justicia social. Estos principios regulan, pues, la selección de una constitución política y los elementos principales del sistema económico y social (Rawls, 1997, p. 20).

Una sociedad bien ordenada no solo promueve el bienestar de sus miembros, sino que también está eficazmente regulada por una concepción pública de justicia (Rawls, 1997).

Análisis de las teorías de la justicia después de Rawls.

Las teorías de la justicia después de Rawls, se utiliza para describir las respuestas, críticas y desarrollos teóricos que han surgido como consecuencia de la obra de Rawls (1997) Gargarella (2013), ofrece un recorrido teórico por las nuevas interpretaciones y críticas que intentan perfeccionar, corregir o incluso contradecir las ideas de justicia y equidad propuestas por Rawls.

La teoría de la justicia de Rawls (1997, 1999), ha generado dos grandes grupos de críticos, según Gargarella (2013), los que la consideran insuficientemente liberal y quienes la ven como insuficientemente igualitaria. Estas críticas ofrecen una comprensión más profunda y completa de los desafíos que enfrenta cualquier teoría de la justicia que aspire a ser tanto equitativa como efectiva (Gargarella, 2010).

- **Los críticos liberales:** Este grupo se centra en la crítica de la teoría rawlsiana desde una perspectiva liberal, argumentando que la búsqueda de igualdad de Rawls (1997) interfiere con la libertad individual. El principal representante de esta postura es Nozick (1988), quien aboga por un Estado mínimo que se limite a proteger a las personas contra

comportamientos fraudulentos o violentos y a respaldar el cumplimiento de contratos entre particulares. Para Nozick (1988), las medidas igualitaristas de Rawls (1997), representan una intromisión en la libertad individual, que debería permitir a cada persona desarrollar sus habilidades y diferenciarse del resto (Gargarella, 2010).

- **Los críticos igualitaristas:** Los críticos igualitaristas, por otro lado, sostienen que la teoría de Rawls (1997, 1999, 2002), no es lo suficientemente igualitaria. Entre los principales teóricos de esta corriente se encuentra, Dworkin (1977) quien distingue entre la existencia de circunstancias de las que los individuos no son responsables y las elecciones por las que deben asumir sus consecuencias, proponiendo que la justicia debe considerar estas distinciones. Sen (1995) sugiere que la igualdad no debe centrarse únicamente en el acceso a bienes primarios, sino también en la capacidad de cada individuo para convertir esos recursos en libertades reales. Finalmente, Cohen (1998) critica la permisividad de Rawls hacia ciertas desigualdades, considerándola incoherente con los principios fundamentales de su teoría de la justicia (Gargarella, 2010).

Nozick y el Estado mínimo.

Nozick (1988) destacado filósofo político del siglo XX, ofrece una crítica incisiva a la teoría de la justicia de Rawls (1997) desde una perspectiva liberal, valora la libertad individual por encima de la igualdad económica, postulando que cualquier forma de redistribución de recursos constituye una violación de los derechos fundamentales de propiedad. Nozick (1988) establece los principios que sustentan su crítica y su visión de un Estado mínimo, cuyo único rol legítimo es proteger a los individuos contra la violencia, el fraude y el incumplimiento de contratos (Gargarella, 2013).

Para Nozick (1988), la intervención estatal en la redistribución de recursos es inherentemente injusta, ya que implica la coerción de individuos para transferir sus bienes a otros. Este acto de redistribución forzosa es visto como una violación de la libertad individual, ya que impide a las personas utilizar sus talentos y recursos según su propio juicio y deseo. Argumenta que los individuos deben tener la libertad de desarrollar sus habilidades y disfrutar plenamente de los frutos de su trabajo sin interferencias externas que distorsionen el valor de sus esfuerzos (Gargarella, 2013).

El principio de justicia de Nozick (1988), establece que una distribución de bienes es justa si ha surgido de una distribución anterior justa mediante medios legítimos. Este principio se basa en la idea de que la justicia en la tenencia de bienes depende de cómo se adquirieron originalmente. Si los bienes fueron adquiridos sin violar los derechos de otros, entonces su posesión es justa. Este

enfoque contrasta radicalmente con la visión de Rawls (1997), quien considera que las desigualdades económicas deben ser estructuradas de manera que beneficien a los menos aventajados en la sociedad (Gargarella, 2013).

Nozick (1988) introduce el principio de justicia en la transferencia, que se enfoca en la legitimidad de las transferencias de propiedad. De acuerdo con este principio, una transferencia es justa si se realiza de manera voluntaria y sin recurrir al fraude o la coacción. Este criterio garantiza que las personas puedan transferir libremente sus propiedades y recursos, preservando así su libertad y autonomía. Cualquier intervención estatal en este proceso voluntario se considera una infracción inaceptable de la libertad personal.

Gargarella (2013), argumenta que la crítica de Nozick (1988) al principio de diferencia de Rawls (1997), se basa en la idea de que la justicia no consiste en igualar las circunstancias básicas de todos, sino en respetar los derechos de propiedad y las decisiones voluntarias de los individuos.

Dworkin y el derecho como integridad.

Dworkin, (1986) introduce el concepto de derecho como integridad, proponiendo que los jueces deben interpretar la ley como si hubiera sido escrita por una sola entidad, garantizando la coherencia de los principios subyacentes a lo largo del tiempo, criterio compartido por autores como (Atienza, 2013; Carrió 2003; Guastini 2014; Hart, 2011; Nino 2013) quienes con sus matices señalan la importancia de clarificar las ambigüedades semánticas al tratar casos difíciles en el Derecho.

Los desacuerdos en el ámbito jurídico para Dworkin (1986), deben entenderse como controversias interpretativas sobre cómo presentar el derecho de la mejor manera posible, considerando los objetivos y valores presentes en la práctica jurídica. Esta perspectiva proporciona una comprensión más profunda de los desacuerdos teóricos y la justificación moral de las decisiones judiciales (Sendra Moll, 2015).

El término aguijón semántico, es señalado por Dworkin (1986), como la idea de que no existen criterios claros y precisos para identificar lo que constituye el Derecho, es lo que obliga a los juristas a participar en un proceso interpretativo continuo y a menudo conflictivo (Sendra Moll, 2015).

Este concepto también señala que los juristas, al interpretar el derecho, no pueden limitarse únicamente a aplicar reglas, sino que deben considerar los principios y valores que guían la

práctica jurídica. Este enfoque permite una comprensión más rica y justificada de las decisiones judiciales. Según Dworkin (1986), los desacuerdos en el ámbito jurídico deben entenderse como controversias interpretativas sobre "cómo presentar el derecho de la mejor manera posible, considerando los objetivos y valores presentes en la práctica jurídica" (p. 244). Esta perspectiva proporciona una comprensión más profunda de los desacuerdos teóricos y la justificación moral de las decisiones judiciales.

El derecho, debe ser entendido como una práctica interpretativa guiada por principios de integridad, esto implica que las leyes y decisiones judiciales deben ser coherentes con los principios de moralidad política que fundamentan las decisiones colectivas de la comunidad. La integridad requiere que el derecho sea visto como una obra coherente de un autor colectivo, en la cual las decisiones legislativas y judiciales se interpretan a la luz de los principios que justifican la autoridad estatal. (Dworkin, 1986).

Dworkin (1986) argumenta que la integridad debe ser vista también, como un valor político que exige que la comunidad actúe basándose en principios coherentes y únicos, incluso cuando existen desacuerdos sobre cuáles son esos principios (Sendra Moll, 2015).

Se propone el modelo de la comunidad de principio, como una alternativa a las comunidades de hecho y de reglas. En una comunidad de principio, los miembros aceptan que sus derechos y obligaciones derivan de principios comunes y no solo de reglas establecidas por compromisos políticos (Sendra Moll, 2015).

Dworkin (1986) plantea la necesidad de adoptar su visión del Derecho como integridad, que opera en dos niveles: (a) en la legislación, donde la integridad demanda que las leyes sean coherentes con los principios subyacentes a la moralidad política de la comunidad, y (b) en la adjudicación, exigiendo que los jueces determinen lo que es la ley y sus exigencias de acuerdo con dichos principios. Así, al cumplir con estas exigencias tanto en la legislación como en la adjudicación, la integridad impone a los poderes públicos el deber de promover los valores de equidad, justicia y debido proceso, evitando actuaciones caprichosas o arbitrarias. Esto es crucial incluso cuando existen profundos desacuerdos en la comunidad política sobre las demandas específicas de estos valores (Iglesias Vila, 2006).

La concepción del derecho como integridad propone al juez que trabaje como si el derecho de una comunidad fuera la obra de un legislador racional de modo que para cada caso hubiera una respuesta correcta y sólo una (Dworkin, 1986).

El modelo de la comunidad de principios valora la integridad como un ideal político, exigiendo que el estado actúe conforme a principios coherentes y únicos, respetando los valores de justicia, equidad y debido proceso (Dworkin, 1986).

Para que la noción de integridad de Dworkin (1986), sea aplicable en un contexto jurídico específico, es esencial cumplir con dos condiciones principales. Primero, debe existir una práctica jurídica significativa, que tenga un sentido justificativo basado en principios y valores que den coherencia a las reglas establecidas. Segundo, es necesario que esta práctica jurídica se ajuste a los principios que la fundamentan, lo que significa que los valores deben tener una primacía sobre las reglas, priorizando la dimensión valorativa sobre la autoritativa del Derecho (Guest,1991; Shapiro, 2011: Waldron 1999).

La interpretación del Derecho según Dworkin (1986), tiene tres etapas que aseguran que la práctica jurídica se mantenga coherente y justificada, promoviendo la integridad como un valor central. En la primera etapa, la preinterpretativa, se identifican las normas, reglas y principios que forman el contenido provisional de la práctica jurídica, requiriendo un amplio consenso dentro de la comunidad jurídica:

> El Derecho no puede florecer como una empresa interpretativa en cualquier comunidad a menos que exista un acuerdo inicial suficiente sobre cuáles son las prácticas legales de modo que los abogados discuten sobre la mejor interpretación de lo que, a grandes rasgos, es la misma idea (Dworkin, 1986 p.74).

La segunda es la etapa interpretativa, cuyo objetivo es buscar coherencia con la práctica existente, asegurando que no se inventen nuevas reglas. Según Dworkin (1986), "la justificación no necesita adaptarse a cada uno de los aspectos o características de la práctica permanente, pero sí lo suficiente para que el intérprete pueda verse a sí mismo interpretando dicha práctica y no inventado una nueva" (p. 58).

Finalmente, en la etapa postinterpretativa o reformadora, Dworkin (1986) sostiene que aquí es donde debe determinarse qué necesita la práctica jurídica para alinearse correctamente con la

justificación identificada, ajustando la práctica para reflejar estos principios y valores fundamentales.

Sen y la idea de justicia.

Sen (2011), ofrece un marco teórico que se aparta de las visiones tradicionales centradas exclusivamente en instituciones y normas, poniendo énfasis en las capacidades y libertades reales de los individuos.

La capacidad de agencia es fundamental en la teoría de Sen (2011), ya que reconoce a los individuos como agentes activos de cambio y no meros receptores pasivos de políticas o intervenciones externas. Es fundamental que las personas tengan la libertad de tomar decisiones que afecten sus vidas, siendo un componente esencial de la justicia. La capacidad de agencia abarca no solo la capacidad de elegir entre diferentes opciones, sino también la habilidad de convertir esas elecciones en acciones significativas que reflejen los valores y objetivos personales.

Argumenta que, una sociedad justa no puede medirse únicamente por sus instituciones, sino también por las oportunidades reales que ofrece a sus ciudadanos para que puedan vivir la vida que valoran. La justicia, por tanto, debe evaluarse en términos de las capacidades de las personas para ejercer su agencia. Esto implica considerar no sólo la distribución de recursos, sino también las condiciones sociales y políticas que permiten o limitan la capacidad de agencia de los individuos (Nussbaum, 2012).

El ejemplo que presenta Sen (2011) sobre los tres niños que disputan una flauta ilustra las distintas perspectivas de justicia: Anne sabe tocarla, Bob es pobre y no tiene juguetes y Carla la fabricó. Este ejemplo destaca la complejidad inherente a la justicia y la necesidad de adoptar un enfoque pluralista que considere múltiples perspectivas y valores. Esto implica que las personas no solo deben tener la oportunidad de expresar sus opiniones, sino también la capacidad efectiva de influir en las decisiones colectivas. Cada uno tiene una razón legítima para reclamar la flauta, lo que demuestra, la justicia no puede reducirse a una sola teoría completa, sino que debe considerar diversas razones y evaluaciones (Nussbaum, 2012).

En este contexto, la capacidad de agencia permite a los individuos participar en la deliberación pública y en la toma de decisiones que afectan sus vidas, siendo esta capacidad un componente esencial de la justicia.

El concepto de desarrollo está profundamente vinculado a la expansión de las capacidades de las personas, Sen (2011), sostiene que la libertad de agencia es tanto un medio como un fin del desarrollo.

El enfoque en la capacidad de agencia lleva a una visión más holística del desarrollo, que incluye no solo el crecimiento económico, sino también la eliminación de privaciones y la ampliación de las oportunidades humanas. Esto se traduce en políticas públicas que no solo buscan aumentar el producto bruto interno (PBI), sino también mejorar la educación, la salud y la participación política, entre otros aspectos (Sen, 2001).

La idea de desarrollo de Sen, (2001) implica un enfoque centrado en el individuo que considera no sólo los resultados económicos, sino también las condiciones sociales y políticas que afectan las capacidades de los individuos.

Las implicaciones de la capacidad de agencia para la política pública son profundas, a través de esta capacidad Sen (1995), aboga por un gobierno por discusión, que requiere instituciones que sean justas en teoría, pero también en práctica, asegurando la oportunidad de participación de todos los individuos en la deliberación pública y en la toma de decisiones que afectan sus vidas.

Además, Sen (2001), subraya la importancia de la democracia deliberativa como un medio para promover la justicia, esto implica que las políticas públicas deben diseñarse no sólo para promover el crecimiento económico, sino también para ampliar las capacidades y libertades de todos los ciudadanos. El autor, enfatiza la necesidad de un enfoque inclusivo en las políticas públicas que tome en cuenta las diversas necesidades y aspiraciones de los individuos. Las políticas deben ser diseñadas de manera que permitan a todos los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, ejercer su capacidad de agencia. Esto implica, para Gargarella (2013), no sólo la provisión de recursos materiales, sino también la creación de un entorno social y político que fomente la participación y el empoderamiento de todos los individuos donde los recursos puedan traducirse en libertades reales y funcionales para cada persona (Gargarella, 2013).

Cohen, principios de comunidad y reciprocidad.

Cohen (2001) coloca énfasis en los principios de comunidad y reciprocidad, considerándolos fundamentales para una sociedad justa. Estos principios, deben guiar no solo las estructuras institucionales, sino también las interacciones cotidianas de los individuos dentro de una comunidad (Reyes Morel, 2017).

Este enfoque se aleja de las teorías predominantes del liberalismo igualitario, representadas por autores como Rawls (1997), al sugerir que la justicia no puede limitarse a la estructura social básica, sino que debe permear todos los aspectos de la vida social (Gargarella, 2013).

El principio de reciprocidad es un compromiso que va más allá de un simple intercambio de servicios; es una expresión que valora tanto el acto de servir como el de ser servido, creando un vínculo moral profundo entre los miembros de la sociedad (Reyes Morel, 2017).

Cohen (1998), también desarrolla el concepto de comunidad de justificación comprehensiva, donde las políticas y acciones deben poder justificarse ante cualquier miembro de la sociedad. Esta idea subraya la importancia de que las decisiones y políticas sean justificadas de manera que todos los miembros de la comunidad puedan aceptarlas. Si una política no puede ser justificada ante todos, entonces falla en cumplir con los estándares de justicia que Cohen (1998) considera esenciales.

El ethos social igualitario, es otro concepto clave en la obra de Cohen (1998), este ethos, que se manifiesta es esencial para que una sociedad justa funcione. La justicia no se logra simplemente a través de reglas coercitivas, sino también mediante un ethos social que moldea las elecciones individuales y colectivas, este ethos crea un entorno en el que la igualdad no solo se promueve, sino que se vive activamente en las relaciones interpersonales y en las decisiones diarias (Reyes Morel, 2017).

Cohen (1998), ofrece una crítica contundente a la tolerancia de Rawls (1997) hacia ciertas desigualdades en nombre de la justicia, considera esa idea, de aceptar desigualdades moralmente admisibles, es incoherente con los principios fundamentales de su propia teoría de la justicia.

Tolerar cualquier desigualdad, bajo el argumento de que beneficia, a los menos aventajados socava el compromiso con una igualdad verdadera y genuina (Cohen, 1998). Esta crítica pone en tela de juicio la coherencia interna de la teoría rawlsiana y su capacidad para mantener un compromiso inquebrantable con la igualdad (Gargarella, 2013).

La inclusión de la perspectiva feminista.

La inclusión de la perspectiva feminista se enmarca en las críticas igualitarias a la teoría de la justicia de Rawls (1997). La crítica feminista, representada principalmente por MacKinnon (1989), señala que la teoría de Rawls no aborda de manera adecuada las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres y a otros grupos desfavorecidos.

A través de un análisis de las normas, las sentencias de la Suprema Corte de los Estados Unidos y las prácticas de los agentes del aparato institucional, Mackinnon (1989) critica un sistema jurídico que se autoproclama justo e igualitario, pero que ignora la existencia de las mujeres, desconociendo su relación con los hombres. Su crítica desafía las construcciones jurídicas que perpetúan las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, e incluso aquellas que legitiman la violencia (Gargarella, 2013).

Mackinnon (1989) sostiene que cualquier teoría de justicia, que aspire a ser verdaderamente igualitaria, debe tener en cuenta las experiencias concretas y las opresiones específicas que enfrentan los grupos en la sociedad.

La influencia de la teoría de la justicia en las corrientes contemporáneas.

Gargarella (2013), analiza la influencia de Rawls (1997) en tres corrientes contemporáneas de la filosofía política: el marxismo analítico, el comunitarismo y el republicanismo, cada una de estas escuelas han ofrecido críticas significativas a su teoría de la justicia. La interacción entre estas corrientes y la teoría rawlsiana continúa siendo un terreno fértil para la reflexión y el desarrollo teórico, buscando siempre una comprensión más completa y equitativa de la justicia en nuestras sociedades contemporáneas (Alexy, 2002b; Bidart Campos, 2005; Gutiérrez, 1999; Nino, 1992; Waldron, 1999).

El marxismo analítico, surge en un contexto donde los filósofos marxistas comienzan a prestar mayor atención a las cuestiones de justicia y desigualdad. Esta corriente filosófica se distingue por su enfoque riguroso y analítico, tratando de integrar conceptos marxistas tradicionales con teorías contemporáneas de justicia, Elster (1984) y Cohen (2001), son dos de sus principales exponentes (Gargarella, 2013).

Como se dijo previamente, de acuerdo con Cohen (2001), la teoría de Rawls (1997), no aborda adecuadamente las raíces de las desigualdades económicas y sociales, crítica la justificación de las desigualdades permitidas aun cuando beneficien a los menos favorecidos, en razón que posición permite la perpetuación de privilegios y no desafía suficientemente las estructuras de poder que generan desigualdad.

Elster (1991), por otro lado, ha contribuido al marxismo analítico a través de su análisis de las instituciones y sus efectos en la justicia distributiva. Su enfoque se basa en la teoría de la elección racional, proponiendo que las instituciones deben ser diseñadas de manera que promuevan comportamientos justos y equitativos.

El comunitarismo, es otra corriente filosófica contemporánea, que se desarrolla en parte como una respuesta crítica a la teoría de la justicia de Rawls (1997). Los comunitaristas argumentan que el enfoque de Rawls (1997), es demasiado abstracto e individualista, pasando por alto la importancia de los contextos sociales y comunitarios en los que los individuos existen. Sandel (2011) y Taylor (1995) han sido fundamentales en este movimiento.

Sandel (2011) critica a Rawls (1997) por asumir una concepción desarraigada del yo, que no tiene en cuenta las influencias comunitarias y sociales en la formación de la identidad y los valores individuales. Sandel (2011) sostiene que una teoría de la justicia debe reconocer que los individuos están profundamente interconectados y que sus identidades se moldean en gran medida por las comunidades a las que pertenecen.

Taylor (1992) por su parte, subraya la importancia de las comunidades en la configuración de los valores y las prácticas individuales. Argumenta que Rawls (1997), no reconoce adecuadamente la dimensión moral de la vida comunitaria, donde los individuos encuentran significado y propósito y sostiene que la justicia no puede ser simplemente una cuestión de distribución equitativa de recursos, sino que debe incluir el reconocimiento y la valoración de las comunidades y culturas específicas que forman a los individuos. La visión holística de la justicia va más allá de los principios abstractos y considera el contexto social y cultural en el que se implementan.

El comunitarismo, también critica la idea de justicia de Rawls (1997), sugiriendo que cualquier teoría de justicia debe ser capaz de operar dentro de los contextos históricos y culturales específicos, reconociendo que la identidad y la moralidad de los individuos están profundamente influenciadas por sus comunidades (Gargarella, 2013).

El republicanismo, se centra en la importancia de la participación cívica y la contribución activa de los ciudadanos en la vida política. Esta filosofía política, representada por autores como Pettit (1999) y Skinner (2004) critican a Rawls (1997) por no dar suficiente peso a la dimensión participativa de la justicia.

Pettit (1999) argumenta que la libertad debe entenderse no solo como la ausencia de interferencia, sino también como la no dominación. Desde esta perspectiva, una sociedad justa es aquella en la que los ciudadanos tienen el poder y la capacidad de participar activamente en la toma de decisiones políticas, garantizando que no sean dominados por otros (Daguerre, 2010).

Skinner (2004) en su análisis histórico del pensamiento republicano, subraya la importancia de la participación ciudadana como un componente esencial de la libertad. Critica la teoría de Rawls

(1997) por su énfasis en los derechos individuales sin considerar suficientemente cómo estos derechos se ejercen en el ámbito de la comunidad política. Para los republicanos, la justicia implica no solo la protección de los derechos individuales, sino también la promoción de una cultura de participación y compromiso cívico. Esta crítica apunta a la necesidad de una teoría de justicia que fomente la participación equitativa de todos los ciudadanos en la vida pública (Quijano, 2020).

El republicanismo resalta la idea de que la justicia no puede ser entendida únicamente como una cuestión de distribución de recursos, sino también como una cuestión de reconocimiento y respeto mutuo entre ciudadanos. Una sociedad justa es aquella en la que los ciudadanos no solo tienen derechos, sino también deberes y responsabilidades hacia su comunidad. Esta perspectiva subraya la importancia de una ética de la ciudadanía, donde la justicia se logra a través de la participación y la construcción conjunta de la sociedad (Gargarella, 2013).

El humanismo, como principio fundamental de equidad.

El marco de pensamiento de Goldschmidt (1984), se articula en torno a la conjugación del humanismo y la tolerancia como fundamentos esenciales para la construcción de un sistema jurídico que aspira a ser verdaderamente justo y equitativo.

Goldschmidt (1984), postula que el principio jurídico supremo se fundamenta en el reconocimiento de la unidad del género humano. Este principio parte de la premisa de que todos los seres humanos, independientemente de sus diferencias culturales, sociales o personales, forman parte de una única comunidad humana, por lo que, la justicia debe proteger y promover el desarrollo integral de cada individuo, entendiendo que la humanidad, en su conjunto, constituye una familia en la que todos sus miembros deben ser tratados con igual dignidad y respeto (Dacal Alonso, 2005).

Este enfoque humanista, exige que las leyes y políticas públicas eviten la discriminación y promuevan activamente la inclusión y el respeto por la diversidad humana, para alcanzar el bienestar y la realización plena de cada persona (Dacal Alonso, 2005).

La tolerancia es otro pilar fundamental del principio jurídico supremo en el pensamiento de Goldschmidt (1986). Se entiende como un valor activo que implica el reconocimiento y respeto del derecho de cada individuo a ser y pensar de manera diferente. Este enfoque preserva la diversidad cultural y social, fomentando un ambiente de convivencia pacífica y respeto mutuo, elementos esenciales para la estabilidad y legitimidad de cualquier sistema jurídico (Dacal Alonso, 2005). Según Goldschmidt (1986), "la tolerancia significa que el único camino que cada uno está

dispuesto a tomar para convencer a los demás de la verdad o de la bondad de sus opiniones va a través de la razón y la convicción de los demás" (p. 190).

En su reflexión sobre la relación entre el individuo y la colectividad, Goldschmidt (1986) subraya la necesidad de proteger los derechos individuales frente a las pretensiones del poder colectivo, que no debe utilizarse para subyugar al individuo ni para justificar sacrificios en nombre del bien común, práctica que históricamente ha resultado en la opresión y la injusticia. Esta protección, es esencial para garantizar que cada persona pueda desarrollar su personalidad y ejercer su libertad sin miedo a ser sacrificada en nombre de un supuesto bien mayor (Dacal Alonso, 2005).

El desarrollo de la personalidad es, para Goldschmidt (1986), el objetivo final de la justicia. En su concepción, un sistema jurídico justo no solo protege los derechos individuales, sino que también crea las condiciones necesarias para que cada persona pueda desarrollar su personalidad de manera plena y libre. La protección de la libertad personal, la igualdad ante la ley y los derechos sociales y económicos son, por lo tanto, elementos fundamentales que el sistema jurídico debe garantizar para cumplir con su función última de facilitar el desarrollo integral de la personalidad de todos sus miembros. Como señala Goldschmidt (1986): “la función tutelar de la justicia asegura al individuo una zona de libertad, que en el orden de conductas significa un poder y en el ordenamiento normativo un permiso” (p. 189).

Señala Dacal Alonso (2005) que la protección, la promoción y la realización de los derechos fundamentales son componentes clave del principio jurídico supremo de Goldschmidt (1986), estos derechos, incluyen entre otros, la libertad personal, la igualdad ante la ley, los derechos sociales como el derecho al trabajo y la seguridad social, y constituyen la base sobre la cual se construye una justicia verdaderamente equitativa.

Finalmente, Goldschmidt (1986) reconoce el derecho a la resistencia como un componente esencial de la justicia cuando el Estado o la comunidad no protegen adecuadamente los derechos individuales. Este derecho, según Dacal Alonso (2005), puede manifestarse en formas tan variadas como la desobediencia civil, la no cooperación o incluso la revolución, se justifica en la medida en que el sistema jurídico deja de cumplir su función de garantizar la justicia. Se trata de una extensión del principio supremo de la justicia, que no solo permite, sino que exige, la acción individual y colectiva para corregir las injusticias cuando estas se producen.

Multiculturalismo y tolerancia.

El multiculturalismo emergió en las últimas décadas del siglo XX como una respuesta a las tensiones provocadas por la globalización y el aumento de la inmigración en las sociedades occidentales. Estas transformaciones sociales revelaron las insuficiencias del liberalismo clásico para integrar de manera equitativa a grupos culturalmente diversos. En particular, el liberalismo tradicional, con su énfasis en los derechos individuales y la neutralidad estatal, fue criticado por no reconocer adecuadamente las identidades colectivas y las necesidades específicas de las minorías culturales (Bengoa, 2009; García Canclini, 1993; Serrano Sánchez, 2008).

El multiculturalismo ha surgido como una respuesta necesaria a los desafíos que presentan las sociedades culturalmente diversas, a través del trabajo de pensadores como Taylor (1992) Kymlicka (1987) y Young (2000) proporcionando un marco teórico para abordar la justicia en un contexto de pluralidad cultural.

Sin embargo, sigue siendo un campo en evolución que debe responder a las críticas y adaptarse a las nuevas realidades sociales, la cuestión central, según Gargarella (2013) es cómo implementar políticas que respeten las diferencias culturales sin socavar la unidad social.

Taylor y la equidad en sociedades culturalmente diversas.

Taylor (1992), se destaca como un defensor del pluralismo, no solo en el sentido de la diversidad cultural, sino también en la importancia de una pluralidad de valores morales. Rechaza la idea de que el pluralismo debe llevar necesariamente al relativismo moral, argumentando que, al contrario, es esencial mantener una base ética en la cual se sustenta la diversidad.

Uno de los conceptos clave en la obra de Taylor (1992) es el reconocimiento, argumenta que la identidad de los individuos y los grupos se moldea en gran medida por el reconocimiento que reciben de los demás. Este proceso puede ser positivo, reforzando la autoestima y la autonomía, o negativo, cuando el reconocimiento es falso o ausente, lo que lleva a la alienación y la marginación.

El reconocimiento adecuado de la multiculturalidad es una necesidad vital para la conformación identitaria de sociedades plurales en la actualidad

Taylor (1992) critica lo que denomina el liberalismo de neutralidad, ya que considera que es incapaz de articular principios morales en la cultura moderna, generando una fragmentación social y una pérdida de sentido ético en la vida pública. En su lugar propone una forma de pluralismo que reconozca y valore las diferencias culturales y religiosas, sin caer en el relativismo (Taylor, 1992).

En un contexto donde las corrientes conservadoras están ganando terreno - como el conservadurismo tradicional de Scruton (2018)- el pensamiento de Taylor (1992), destaca la importancia del reconocimiento y la tolerancia como pilares fundamentales para construir una sociedad justa y cohesionada. A diferencia de las corrientes conservadoras, que tienden a enfatizar la preservación de valores tradicionales y nacionales, aboga por una sociedad que valore y respete las diferencias culturales y personales, promoviendo la inclusión en lugar de la exclusión o la homogeneización (Taylor, 1995; Walzer, 1983).

Kymlicka, los derechos de las minorías y la justicia interseccional.

Kymlicka (2003) se centra en la integración de las minorías culturales dentro del marco del liberalismo, proponiendo una ciudadanía multicultural que reconozca y respete las diferencias culturales sin sacrificar los principios fundamentales del liberalismo, como la autonomía individual y la igualdad.

Uno de los pilares fundamentales de su teoría, es la idea de que las democracias liberales deben reconocer y proteger los derechos de las minorías culturales mediante un sistema de derechos diferenciados en función de grupo. Asimismo, distingue entre diferentes tipos de derechos para las minorías, como los de autogobierno, los poliétnicos y los derechos especiales de representación. Cada uno de estos, responde a diferentes necesidades y circunstancias de las minorías nacionales, grupos étnicos y otras comunidades culturales dentro de un Estado.

La autonomía individual está profundamente entrelazada con la pertenencia cultural, ya que para que las personas puedan ejercer plenamente su autonomía, es esencial que estén inmersas en una cultura que les proporcione opciones significativas. Según García-Peter y Villavicencio-Miranda, (2016), la capacidad de los individuos para tomar decisiones autónomas se ve severamente restringida si no cuentan con una cultura de referencia.

La responsabilidad del Estado liberal es asegurar la viabilidad y el respeto de las culturas minoritarias, permitiendo así que sus miembros disfruten de las mismas oportunidades para el desarrollo de su autonomía que los miembros de la cultura mayoritaria (García-Peter y Villavicencio-Miranda, 2016).

Kymlicka (2003), hace una distinción importante entre los derechos de las minorías nacionales y los derechos de las minorías inmigrantes. Para las minorías nacionales, como los pueblos indígenas o las naciones dentro de un Estado multinacional, aboga por derechos de autogobierno, que

permiten a las minorías nacionales mantener sus propias instituciones políticas y culturales dentro del marco del Estado más amplio (García-Peter y Villavicencio-Miranda, 2016).

Para las minorías inmigrantes, propone derechos poliétnicos, que incluyen medidas como el reconocimiento oficial de sus festividades y costumbres, y la provisión de educación en su lengua materna. Estos se diseñan para ayudar a los inmigrantes a integrarse en la sociedad sin tener que abandonar su identidad cultural (García-Peter y Villavicencio-Miranda, 2016).

Kymlicka (2003), también ofrece una crítica significativa al liberalismo tradicional, que suele ser neutral en cuanto a las culturas. Argumenta que esta neutralidad es, de hecho, un mito, ya que las políticas estatales siempre favorecen a la cultura mayoritaria de alguna manera.

Este reconocimiento lleva a la necesidad de políticas que no sólo toleran, sino que también promuevan y protejan activamente las culturas minoritarias, garantizando que sus miembros tengan las mismas oportunidades de autonomía que los demás ciudadanos (García-Peter y Villavicencio-Miranda, 2016).

Young, la crítica a los ideales de imparcialidad y universalidad.

Young (2000) es reconocida como una de las teóricas más influyentes en el ámbito de la justicia social y la teoría política contemporánea. Su trabajo se distingue por una crítica profunda al liberalismo tradicional, particularmente en lo referente a la justicia, la imparcialidad y la universalidad. Según Young (2000), los ideales liberales tienden a ignorar o marginar las diferencias sociales y culturales, lo que limita su capacidad para abordar las necesidades reales de una sociedad diversa. En respuesta, propone un enfoque más inclusivo y crítico que reconozca la diversidad de experiencias y necesidades en el tejido social (Mira-Aladrén y Lozano-Blasco, 2022).

En este sentido, para Young (2000) “La justicia no debería referirse sólo a la distribución, sino también a las condiciones institucionales necesarias para el desarrollo y ejercicio de las capacidades individuales, de la comunicación colectiva y de la cooperación” (p. 71). Este planteamiento amplía la concepción tradicional de la justicia, incorporando dimensiones que van más allá de lo meramente distributivo y situando el foco en la importancia de las estructuras institucionales y su impacto en la vida de los individuos y las comunidades.

El ideal de imparcialidad, ampliamente defendido en la teoría política (Dworkin, 1986; Habermas, 1991; Kant, 1978; Rawls, 1997) se basa en la idea de que las decisiones deben tomarse sin influencias personales o sesgos particulares. Este principio busca garantizar que la justicia se

administre de manera equitativa, sin favoritismos. Sin embargo, Young (2000) argumenta que la imparcialidad, tal como se concibe tradicionalmente, está profundamente arraigada en una concepción particular del sujeto y la razón, que refleja los intereses de los grupos dominantes, ignorando las realidades de todos los miembros de la sociedad (Mira-Aladrén y Lozano-Blasco, 2022). En este sentido, Young (2000) afirma: "Su tendencia a restringir la discusión democrática a meros argumentos trae implícitamente aparejados prejuicios culturales que pueden conducir a exclusiones de personas o grupos en la práctica" (p. 43).

El ideal de universalidad (Habermas,1991; Kant 1978; Mill, 2001; Ralws,1997; Rousseau 2000) consiste en la aplicación de principios de justicia de manera uniforme a todos, bajo la premisa de que los seres humanos comparten una naturaleza común que puede ser regulada por reglas generales. Sin embargo, Young (2000) critica esta visión por no tener en cuenta las diferencias sociales, culturales y económicas que caracterizan la realidad humana, concluyendo que la universalidad, no es un principio inclusivo, sino que tiende a invisibilizar y marginar las particularidades de grupos que no encajan en la norma supuesta (Mira-Aladrén, M. y Lozano-Blasco, 2022).

Una premisa fundamental en la teoría de Young (2000), es que el poder social no solo se manifiesta a través de la dependencia económica o la dominación política, sino también mediante formas más sutiles, como el sentido internalizado del derecho a hablar o no hablar y la devaluación de ciertos estilos discursivos en favor de otros. Este enfoque resalta la necesidad de garantizar derechos de representación específicos para los grupos oprimidos dentro de la sociedad, reconociendo sus circunstancias particulares y experiencias diversas. La justicia, en consecuencia, debe ser contextual y relacional, adaptándose a las necesidades específicas de los distintos grupos sin imponer una falsa homogeneidad (Mira-Aladrén, M. y Lozano-Blasco, 2022).

Pluralismo y justicia distributiva.

Walzer (1996) es uno de los filósofos políticos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, su obra "Las esferas de la justicia: una defensa del pluralismo y la igualdad", introduce el concepto de igualdad compleja, teoría que contrasta significativamente con las teorías de justicia más liberales (Villasante, 2017; Zubiria 2014).

La idea central de la igualdad compleja es que, en una sociedad pluralista los diferentes bienes sociales deben distribuirse de acuerdo con los significados que estos tienen dentro de la misma. Esto implica que no hay un único criterio de distribución que pueda aplicarse universalmente a

todos los bienes (Huanca-Arohuanca, et al. 2020). La igualdad compleja significa que ningún ciudadano, situado en una esfera o en relación con un bien social determinado, puede ser coaccionado por encontrarse en otra esfera, en relación con otro bien (Walzer, 1996).

Este concepto de igualdad se contrapone a la denominada igualdad simple, la cual, según Walzer (1996), requeriría una intervención estatal constante para su mantenimiento, lo que inevitablemente conduciría a formas de tiranía. La aplicación de una igualdad simple en todas las esferas sociales provocaría la monopolización del poder estatal, transformando al Estado en el principal objeto de disputa competitiva, con el riesgo de derivar en una oligarquía.

Walzer (1996) argumenta que el monopolio de ciertos bienes, como el dinero, tiene el potencial de violar la autonomía de otras esferas sociales, como la educación y la salud. En las sociedades capitalistas, el acceso a estas esferas suele depender del poder adquisitivo en lugar de criterios como el mérito o la necesidad. Este fenómeno trasciende el ámbito de la justicia económica, convirtiéndose en una amenaza para la democracia, ya que permite que quienes poseen mayores recursos económicos ejerzan una influencia desproporcionada en otras esferas sociales (Huanca-Arohuanca et al., 2020).

La justicia distributiva (Walzer,1996) se basa en la premisa de que todos los bienes considerados por la justicia son inherentemente bienes sociales, cuyo valor no reside en sus características individuales, sino en su significado dentro de la comunidad. Esta afirmación subraya que el acto de distribución justa debe tener en cuenta el contexto social y los significados compartidos dentro de una sociedad. Por lo tanto, no es un ejercicio abstracto de asignación equitativa, sino un proceso profundamente enraizado en las normas, valores y tradiciones de la comunidad en la que se lleva a cabo (Huanca-Arohuanca, et al. 2020).

Walzer (1996), argumenta que la distribución de bienes sociales debe respetar la autonomía de cada esfera de distribución, evitando que un bien domine o invada otras esferas. En este sentido, la justicia distributiva, no sólo busca la equidad en la distribución, sino también la preservación de la pluralidad y la autonomía de las diferentes esferas sociales, garantizando que cada bien sea distribuido según su propio significado social y no sea subyugado por otros intereses (Huanca-Arohuanca, et al. 2020).

La propuesta de interculturalidad. La justicia a través del diálogo entre diferentes culturas y sistemas jurídicos.

El pensamiento filosófico de Fornet-Betancourt (1994, 2000, 2001) se erige como una respuesta a la creciente homogeneización cultural impuesta por la globalización. Su propuesta de interculturalidad busca revalorizar la diversidad cultural y crear un espacio donde las distintas identidades y tradiciones sean reconocidas y respetadas (Gutiérrez Fernández y Márquez Fernández, 2004).

Fornet-Betancourt (2001), sostiene que la interculturalidad no es simplemente un intercambio entre culturas, sino un proceso transformador que implica un reconocimiento profundo de las diferencias y una apertura a las diversas formas de racionalidad. La interculturalidad es una propuesta filosófica que se distancia de la lógica dominante de la modernidad occidental, la cual ha tendido a imponer una visión monológica del mundo (Gutiérrez Fernández y Márquez Fernández 2004). La filosofía intercultural se propone como un desafío a la hegemonía cultural de la modernidad, buscando superar la visión monológica del conocimiento. (Fornet-Betancourt, 2001).

Este enfoque implica una crítica a la racionalidad moderna, que ha privilegiado una visión universalista y abstracta del conocimiento, ignorando las particularidades culturales. La interculturalidad demanda una reconfiguración epistemológica que permita la coexistencia de múltiples cosmovisiones, cada una con su propia lógica y validez. (Fornet-Betancourt, 1994).

En un contexto globalizado, donde las dinámicas económicas y políticas tienden a uniformar las culturas, la propuesta de Fornet-Betancourt (2000), se presenta como una alternativa necesaria. La globalización, según él, no debe ser una fuerza homogeneizadora que elimine las diferencias culturales, sino que debe ser aprovechada para fomentar un diálogo entre culturas que sea enriquecedor y transformador. Este diálogo intercultural es esencial para contrarrestar las políticas hegemónicas de la modernidad que han excluido y marginado a numerosas culturas a lo largo de la historia (Escobar 2014, Gudynas 2009; Mignolo 2007; Sousa Santos, 2009). El diálogo intercultural debe estar basado en el reconocimiento de la alteridad del otro, respetando su logos histórico y cultural. (Fornet-Betancourt, 2000).

El enfoque intercultural de Fornet-Betancourt (2001) no se limita a la teoría; busca ser una praxis filosófica orientada a transformar la realidad. Según este autor, la filosofía debe involucrarse activamente en la creación de espacios que permitan el desarrollo de un diálogo intercultural (Sousa Santos, 1998). En este sentido, Fornet-Betancourt (2001) afirma: “la filosofía intercultural

debe ser un proyecto ético-político que transforme las relaciones de poder, descolonizando el pensamiento y promoviendo la justicia social" (p. 45).

El diálogo intercultural debe superar las barreras de la dominación cultural y promover una verdadera polifonía, donde cada cultura pueda expresar su logos de manera autónoma y en condiciones de igualdad. Esto implica un replanteamiento radical de cómo se estructura el conocimiento filosófico y cómo se lleva a cabo el diálogo entre culturas (Mignolo 2007; Sousa Santos, 2002). La filosofía intercultural debe basarse en un proceso dialógico donde las diferencias culturales sean vistas como fuentes de enriquecimiento mutuo y no como obstáculos a la comprensión (Gutiérrez Fernández y Márquez Fernández, 2004).

Fornet-Betancourt (1994), identifica la necesidad de crear nuevas metodologías que permitan un verdadero intercambio entre las culturas. Estas metodologías deben ser interdisciplinarias e interculturales, capaces de integrar diversas formas de conocimiento sin caer en la simplificación o en el relativismo cultural. En lugar de imponer una visión universalista, la filosofía intercultural debe reconocer y respetar las particularidades de cada cultura, permitiendo que cada una contribuya de manera significativa al diálogo global (Escobar 2014, Gudynas 2009; Mignolo 2010).

En América Latina, la filosofía intercultural debe recuperar las voces y tradiciones que han sido silenciadas por la modernidad occidental (Sousa Santos, 1998), esto incluye no solo las culturas indígenas, sino también las afrodescendientes y otras comunidades que han sido históricamente marginadas. Fornet-Betancourt (2001), propone una relectura crítica de la historia y de la filosofía en América Latina, que permita integrar estas voces en el discurso filosófico contemporáneo (Mignolo 2010; Sousa Santos, 1997).

La filosofía intercultural en América Latina debe ser una filosofía de la liberación, que no solo critique las estructuras de poder existentes, sino que también ofrezca alternativas concretas para construir una sociedad más inclusiva y democrática. Esto implica un compromiso ético con la justicia social y con la promoción de los derechos humanos, en un contexto donde las desigualdades y la exclusión siguen siendo problemas persistentes (Gutiérrez Fernández y Márquez Fernández, 2004).

La crítica al sistema jurídico desde la perspectiva de la teoría crítica.

La teoría crítica, surgida en la Escuela de Frankfurt en los años 1920, se ha consolidado como una herramienta esencial para desentrañar y comprender las estructuras sociales, económicas y

políticas que sostienen el sistema jurídico. Concebida como una respuesta crítica al positivismo y al cientificismo, esta teoría pone énfasis en la relevancia del contexto histórico-social y en las relaciones de poder que configuran tanto el conocimiento como las instituciones legales. Más allá de un mero análisis del derecho como conjunto de normas y procedimientos, la teoría crítica explora cómo el derecho puede, en ocasiones, perpetuar desigualdades y mecanismos de dominación (Frankenberg, 2011).

Los teóricos críticos, sostienen que el derecho está influenciado por las estructuras de poder y las relaciones sociales, y que debe ser analizado dentro de este contexto para desvelar sus verdaderas funciones y efectos (Fernández, 1997; Ferrater Mora, 1994; McCarthy, 1987; Requejo, 1991 Ureña, 1978). Este enfoque permite identificar y cuestionar las prácticas de exclusión y dominación presentes en los sistemas legales contemporáneos (Frankenberg, 2011).

Teoría de la acción comunicativa y su relevancia en el análisis jurídico.

La teoría de la acción comunicativa de Habermas (1992b) se fundamenta en la idea de que la comunicación racional es la base de la interacción social. La comunicación no se limita a la transmisión de información, sino que implica un proceso de entendimiento mutuo y consenso entre los participantes (Habermas 1991). En este contexto, la racionalidad comunicativa se opone a la racionalidad instrumental, la cual se centra en la eficiencia, el éxito técnico y las formas de entendimiento intersubjetivo permiten que las reglas, vistas como abstracciones, transformen y constituyan pragmáticamente la comunidad del sentido compartido (Díaz Montiel, 2007).

Este proceso de entendimiento mutuo es fundamental para la construcción de una sociedad democrática, ya que permite que las decisiones se tomen a partir del consenso y no de la imposición de poder. En este contexto, Habermas (1992b) define la acción comunicativa como: "aquellas manifestaciones simbólicas (lingüísticas y no lingüísticas) con que los sujetos capaces de lenguaje y acción entablan relaciones con la intención de entenderse sobre algo y coordinar así sus actividades" (pp. 353–354).

Habermas (1992b), aplica su teoría de la acción comunicativa al análisis del derecho, proponiendo una teoría discursiva del derecho que subraya la importancia de la deliberación democrática, el derecho moderno debe entenderse como un sistema normativo que facilita la integración social mediante procedimientos discursivos que garantizan la participación igualitaria de todos los individuos afectados por las normas jurídicas (Durán Migliardi, 2018).

La resignificación del sentido social reside en el diálogo intersubjetivo, visto como un proceso racional inherente a la práctica cotidiana de los individuos que pueden comunicarse y actuar. De esta manera, el sentido social compartido puede adoptar significados convencionales tanto idénticos como diversos (Díaz Montiel, 2007).

El entendimiento del sentido compartido de lo social puede, a través del diálogo intersubjetivo, formar una sociedad consciente de su unidad. Este proceso de creación de conciencia colectiva puede operacionalizar mediante un proyecto político que contemple el diálogo como un proceso racional subyacente a la práctica cotidiana de relaciones simétricas entre sujetos, permitiendo la constitución de sociedades más justas y humanas. En el ámbito trascendental de la intersubjetividad, debe existir un sentido comunicado y compartido que reconstruya la perspectiva de un mundo social común, donde el “yo” y los "otros" se encuentran y constituyen "nuestro" mundo social (Díaz Montiel, 2007).

En este contexto, la validez de las reglas para alcanzar el consenso presupone la capacidad de participar en una práctica pública que permita juzgar críticamente el comportamiento en cuanto a su veracidad y rectitud, a través de actos de habla orientados a establecer relaciones recíprocas donde los participantes reflejan los hechos. Así, en las pretensiones de validez que un hablante establece al realizar actos de habla, se fundan relaciones intersubjetivas que tienen la facticidad de hechos sociales (Díaz Montiel, 2007).

Este principio democrático establece que las normas jurídicas no solo deben ser justas en su contenido, sino también en su proceso de creación, asegurando que todos los individuos tengan la oportunidad de participar en la deliberación (Durán Migliardi, 2018). En este sentido, Habermas (1992b) señala que: "Todo aquel afectado por las normas jurídicas, incluidos aquellos que establecen las libertades y restricciones, deben, al menos, ser potencialmente capaces de consensuar como participantes de un discurso racional" (p. 502).

Este enfoque enfatiza la importancia del diálogo y la inclusión en los procesos normativos, destacando que la legitimidad de las normas no solo deriva de su contenido, sino también de la manera en que son formuladas. La participación activa de todos los afectados asegura un marco democrático que trasciende la mera imposición de reglas, promoviendo un consenso basado en la racionalidad y el respeto mutuo.

Habermas (1992b), argumenta que la teoría de la sociedad ya no necesita asegurarse de los contenidos normativos de la cultura burguesa, del arte y del pensamiento filosófico por vía indirecta, es decir, por vía de una crítica ideológica:

> La teoría de la cosificación tardo/capitalista, reformulada en categorías de sistema/mundo de la vida, necesita, pues, ser completada con un análisis de la modernidad cultural que sustituya a la anticuada teoría de la conciencia de clase. El objetivo de ese análisis no sería servir a la crítica ideológica, sino explicar el empobrecimiento cultural y la fragmentación de la conciencia cotidiana; en vez de andar ansiosamente tras las evanescentes huellas de una conciencia revolucionaria, su objetivo sería averiguar las condiciones que permitieran la reconexión de la cultura racionalizada con una comunicación cotidiana que ha menester de tradiciones vivas que la nutran (Habermas, 1992b, p. 502)

En su lugar, propone un enfoque que reconozca la interdependencia entre el derecho y la comunicación racional, donde la validez de las normas jurídicas se deriva de su aceptación consensuada por la comunidad afectada (Durán Migliardi, 2018).

El diálogo intersubjetivo como proceso racional puede construir nuevos mecanismos sociales que configuren fines más justos mediante medios consensuados colectivamente a través de la argumentación, para un nuevo proyecto de vida social. Los preceptos moral-discursivos que funden dicho proceso estarán dados por la fuerza del sentido intersubjetivo que permite considerar los fines de otros, logrando la integración social construida desde la voluntad general (Durán Migliardi, 2018).

La propuesta de Habermas (1996) culmina en su concepto de democracia deliberativa, según Durán Migliardi, (2018) donde el proceso democrático se basa en la deliberación pública y el consenso racional. Este modelo de democracia se opone a la visión elitista y tecnocrática del gobierno, promoviendo en cambio una participación equitativa de todos los ciudadanos en la formación de la voluntad política.

En este sentido, la teoría de Habermas ofrece una visión innovadora del derecho como un medio de integración social y emancipación. Su enfoque destaca la necesidad de un marco jurídico que

no sólo regule las conductas, sino que también fomente el diálogo y la participación democrática, reconociendo así el potencial emancipador de la comunicación (Durán Migliardi, 2018).

Es una forma de vida comunicativa que puede perfilar relaciones relevantes para la fundamentación de la moral, basada en la igualdad de derechos al emitir convicciones y necesidades. Esto incluye un repertorio público de reglas de comprensión compartidas que, en forma de reglas operativas, conlleven a principios morales de respeto y solidaridad para coadyuvar a la integración social. La formación del juicio moral en el discurso debe hacer valer principios de respeto e igualdad que, bajo crítica, puedan ser revisados, dirimiendo cualquier sesgo que imposibilite la validez de rectitud que fundamente un consenso (Díaz Montiel, 207).

De allí, la acción comunicativa, comienza a enlazarse de manera original y propositiva, en la propuesta jurídico-procedimental de Habermas (1992a). En la acción comunicativa los participantes se orientan al entendimiento o se atiene al consenso previamente alcanzado. Incluso el éxito de la acción, a que en cada caso aspiran, sólo puede alcanzarse a través del entendimiento o consenso obtenido. Cuando se logra un entendimiento, conduce entre los participantes a un acuerdo. El acuerdo no puede forzarlo ninguna de las partes; el que se produzca depende de la oferta de una y de la postura que frente a esa oferta adopte la otra. La oferta que el acto de habla de uno comporta, tendrá buen suceso si el otro la acepta. Desde el punto de la teoría de la acción no interesa en primer término el significado de un acto de habla (o de una manifestación no lingüística equivalente), es decir, no interesa tanto aquello acerca de lo cual puede producirse un acuerdo, no interesa tanto el contenido de un consenso, como las condiciones formales de la obtención de ese consenso (Habermas, 1992b). Se considera que los conflictos de acción pueden resolverse a través de juicios morales que den sentido a la validez de las normas, superando los intereses individuales. En consecuencia, el reconocimiento intersubjetivo logrado a través del diálogo puede construir propuestas de acción que, desde la racionalidad práctica del argumento, depuren ese juicio, logrando acuerdos que por consenso hagan posible la integración social (Díaz Montiel, 2007).

La Perspectiva jurídica de Horkheimer.

Horkheimer (1998), crítica la teoría tradicional por su enfoque abstracto y descontextualizado, y aboga por una teoría crítica que esté profundamente arraigada en la praxis social.

Horkheimer (1998) sostiene que la teoría crítica debe ir más allá de la mera descripción de los fenómenos sociales. Su objetivo principal es desenmascarar las contradicciones y las injusticias del sistema social. En este sentido, no puede limitarse a una observación pasiva de la realidad; debe convertirse en un instrumento activo para su transformación. La crítica, por tanto, no constituye un fin en sí misma, sino un medio para superar las injusticias sociales, estableciendo así una distinción fundamental con la teoría tradicional, que se conforma con comprender el mundo sin aspirar a transformarlo.

En este marco, Horkheimer (1937) afirma que: "la teoría crítica no posee 'ninguna instancia específica para sí que no sea el interés (...) por la superación de la injusticia social'" (p. 216). Esta perspectiva refuerza la idea de que el conocimiento no debe ser neutral, sino comprometido con la acción y el cambio, promoviendo un enfoque que prioriza la emancipación y la justicia social.

En relación con el sistema jurídico, Horkheimer (1937), argumenta que este no puede ser comprendido de manera aislada del contexto social e histórico en el que se encuentra. Las leyes y las instituciones jurídicas reflejan las relaciones de poder y las estructuras económicas de la sociedad. En este sentido, el sistema jurídico no es neutral, sino que perpetúa las desigualdades sociales y económicas, critica la visión idealista del derecho que lo considera como un conjunto de normas abstractas y universales, independientes de las condiciones materiales y sociales (Leyva, 1999).

Horkheimer (1937), sostiene que la verdadera emancipación sólo puede lograrse mediante una transformación radical de la sociedad, que implique no solo cambios en las leyes y las instituciones, sino también en las relaciones sociales y económicas subyacentes. La crítica del sistema jurídico, entonces, es parte integral de una crítica más amplia de la sociedad capitalista y de sus formas de dominación. Esta perspectiva, según Leyva, (1999) implica un rechazo de las soluciones reformistas que no abordan las raíces profundas de la injusticia.

Un aspecto central de la crítica de Horkheimer (1937) es su análisis de cómo el derecho y las instituciones jurídicas funcionan para reproducir y legitimar las relaciones de poder existentes. Para él, el derecho no es simplemente un conjunto de normas técnicas, sino una expresión de las

relaciones sociales de producción. En este sentido, las leyes reflejan y refuerzan las estructuras de poder y las desigualdades económicas (Leyva, 1999).

Horkheimer (1937), también aborda la cuestión de la legitimidad en el derecho. Argumenta que el sistema jurídico a menudo se presenta como neutral y objetivo, pero en realidad está impregnado de las ideologías dominantes que sirven para mantener el statu quo. Esta neutralidad, aparente del derecho, para Leyva (1999), es uno de los mecanismos más efectivos para perpetuar la dominación, ya que disfraza las relaciones de poder subyacentes como cuestiones técnicas o administrativas. Es por ello, que Horkheimer (1937) sostiene que la tarea de la teórica critica, es desenmascarar esta falsa neutralidad y mostrar cómo el derecho es utilizado como un instrumento de poder.

Otro punto importante en la crítica de Horkheimer (1937), es su análisis del papel de las instituciones jurídicas en la formación de la subjetividad. Las leyes y las instituciones no solo regulan la conducta externa, sino que también moldean las formas de pensar y sentir de los individuos. Este proceso de formación de la subjetividad es crucial para el mantenimiento del orden social, ya que asegura que los individuos internalizan las normas y valores que perpetúan las relaciones de dominación (Leyva, 1999).

Horkheimer (1937), argumenta que para que haya una verdadera emancipación, es necesario un cambio en las relaciones de poder que va más allá de la mera reforma legal. Esto implica una transformación profunda de las estructuras económicas y sociales que subyacen al sistema jurídico. En este sentido, la teoría crítica no se contenta con proponer cambios superficiales, sino que busca una transformación radical de la sociedad. Este enfoque radical es esencial para abordar las raíces profundas de la injusticia y crear una sociedad más justa y equitativa (Leyva, 1999).

En su crítica del derecho, Horkheimer (1937) también explora cómo la teoría tradicional fracasa en reconocer la interconexión entre teoría y praxis y entiende que: "el conocimiento no puede separarse de la praxis social, ya que es una actividad histórica que está determinada por la estructura social y las relaciones de producción" (Horkheimer, 1937, p.167).

Además, Horkheimer (1937), subraya la necesidad de una perspectiva histórica para comprender la evolución del sistema jurídico.

Este enfoque histórico permite a la teoría crítica identificar cómo las leyes han sido utilizadas para mantener y legitimar las estructuras de poder a lo largo del tiempo (Leyva, 1999).

Adorno y su dialéctica negativa.

Presenta Adorno (2002) una crítica profunda al sistema jurídico desde la perspectiva de la teoría crítica. Se sitúa dentro de su marco más amplio de análisis de la sociedad moderna y la racionalidad instrumental ya que sostiene que el derecho, al igual que otras instituciones sociales, está profundamente influenciado por una lógica instrumental que refuerza estructuras de dominación.

Se argumenta que la modernidad está caracterizada por una racionalidad instrumental que transforma todas las relaciones en medios para un fin, que no solo permea las relaciones humanas y la interacción con la naturaleza, sino también las estructuras y el sistema jurídico moderno y se refleja en la aplicación de leyes de manera abstracta y despersonalizada, contribuyendo a la preservación de relaciones de poder desiguales (Adorno, 2002; Robles, 2017).

Adorno (2002) critica la ideología subyacente al sistema jurídico, que naturaliza y legitima las relaciones de dominación. Esta ideología se manifiesta en la percepción de las leyes como justas y necesarias, ocultando su carácter instrumental y su función de mantenimiento del statu quo. El concepto de identidad, como una forma ideológica central, donde esta representa la reducción de lo múltiple a lo uno, es una característica esencial de la racionalidad instrumental, que subyace al derecho (Robles, 2017).

En su crítica, Adorno (2002) también aborda la relación entre teoría y praxis, rechaza la idea de que la teoría crítica pueda tener una aplicación directa y transformadora en la praxis social. Esto refleja su escepticismo sobre la posibilidad de una transformación social inmediata a través del derecho (Robles, 2017).

Es Adorno (2002), quien ofrece una crítica sustancial a la filosofía del derecho, que busca fundamentar un orden moral objetivo y universalista, esos esfuerzos son inherentemente problemáticos, porque ignoran las contradicciones del derecho tal como se practica y entiende en la sociedad (Robles, 2017).

La dialéctica negativa de Adorno (2002), es una herramienta central en su crítica al derecho. Esta dialéctica rechaza las totalizaciones y unificaciones positivas, enfocándose en la crítica de la identidad. La identidad es la proto-forma de la ideología, y la crítica de la ideología es filosóficamente central.

La teoría de la ideología en Adorno (2002), se centra en la crítica al pensamiento identificante, sostiene que el intercambio mercantil y la racionalidad instrumental llevan a la rectificación de las relaciones sociales, donde las particularidades son subsumidas bajo categorías abstractas. Esta reificación no solo afecta las relaciones humanas, sino que también se manifiesta en el sistema jurídico, que opera bajo estas mismas lógicas de dominación y abstracción (Robles, 2017).

Si se analizan fenómenos como el antisemitismo dentro de su crítica a la identidad, este análisis se extiende a su crítica de la modernidad, donde la identidad y la abstracción llevan a la homogeneización y la opresión. Además, aborda la relación entre naturaleza y derecho, ya que la racionalidad instrumental lleva a la dominación de la naturaleza, y esta lógica se refleja en el sistema jurídico, que instrumentaliza tanto a la naturaleza como a los individuos. Esta perspectiva crítica busca desvelar las raíces profundas de la dominación en las estructuras jurídicas (Robles, 2017).

La crítica de Adorno (2002), al sistema jurídico es una parte integral de su teoría crítica de la sociedad y su trabajo nos invita a cuestionar las bases mismas de nuestras estructuras jurídicas y a buscar formas de pensamiento y acción que puedan trascender las limitaciones impuestas por la racionalidad instrumental y la ideología dominante (Robles, 2017).

Pluralismo jurídico y crítica a la legitimidad en el derecho.

Wolkmer (2018), realiza un análisis crítico de las estructuras de poder y legitimidad en el derecho, con un enfoque particular en el contexto latinoamericano.

> En el rumbo tomado por Georg Lukács, Theodor Adorno y Max Horkheimer, radicalizando la crítica a la 'racionalización como cosificación', son unánimes en reconocer que la sociedad burguesa y su cultura iluminista, con su técnica y ciencia, produjeron un 'desencantamiento del mundo' que, en vez de conducir a la libertad y a la autonomía de los seres humanos, favorecieron el dominio de una 'razón instrumental' opresora, totalitaria y subyugadora de la vida en cuanto emancipación (Wolkmer, 2018, p. 203).

Este enfoque sostiene que el derecho estatal moderno, en su esfuerzo por establecer un sistema único de normas jurídicas integradas y respaldadas por la coerción estatal, ha servido principalmente a los intereses de la burguesía hegemónica. Este modelo jurídico se legitima a través de una ideología que presenta la legalidad estatal como la única fuente válida de derecho,

ignorando y suprimiendo otras formas de normatividad que surgen de las necesidades y prácticas sociales locales.

> El derecho estatal moderno, además de encontrar en el Estado su fuente nuclear, se constituye en un sistema único de normas jurídicas integradas ('principio de unidad'), producidas para regular, en determinado espacio y tiempo, los intereses de una comunidad nacionalmente organizada. (Wolkmer, 2018, p. 203).

En contraste con el monismo jurídico estatal, Wolkmer (2018) plantea un pluralismo jurídico que reconoce la coexistencia de múltiples sistemas normativos, tanto estatales como no estatales. Este enfoque pluralista desafía la centralidad y exclusividad del derecho estatal, promoviendo una legalidad más inclusiva y democrática que responda a las realidades y necesidades de las sociedades periféricas.

Según Wolkmer (2018), "la estructura normativa del moderno Derecho positivo formal a comienzos del siglo XXI es poco eficaz, sobre todo para solucionar y atender los problemas relacionados con las necesidades de las sociedades periféricas" (p. 207). Este planteamiento subraya la importancia de superar las limitaciones del derecho estatal tradicional y adoptar un marco jurídico que reconozca y respete la diversidad normativa, permitiendo una mejor articulación entre los distintos sistemas legales en contextos multiculturales.

Wolkmer (2018), critica el paradigma jurídico clásico por su incapacidad para abordar los problemas de las sociedades latinoamericanas en el contexto de la globalización capitalista. Propone un nuevo marco de legalidad que se basa en la emancipación y la justicia social, reconociendo y legitimando las normas extra e infraestatales que emergen de las luchas sociales y las prácticas insurgentes.

Para Wolkmer (2018), la legitimidad de cualquier sistema normativo debe evaluarse en función de su capacidad para promover la justicia y la emancipación. El autor critica con firmeza aquellas manifestaciones normativas que sirven a intereses de dominación y explotación, como las leyes producidas por grupos como la mafia o el Ku Klux Klan. Estas normativas carecen de legitimidad al no estar orientadas hacia el bien común ni respetar los derechos humanos fundamentales.

En este marco, Wolkmer (2018) trasciende el enfoque monista estatal y propone un fundamento para un pluralismo legal comunitario basado en la autoridad local y las representaciones colectivas.

Según el autor, este enfoque pluralista redefine la legitimidad normativa al anclarla en prácticas locales que reflejan las necesidades y aspiraciones de las comunidades, sin desvincularse de principios universales como la justicia y los derechos humanos.

La globalización capitalista y el neoliberalismo han exacerbado las desigualdades y contradicciones sociales, creando una crisis de legitimidad y funcionamiento en los sistemas jurídicos estatales.

> En América Latina, la nueva fase de desarrollo del capitalismo y su proceso de expansión por medio de las estrategias de dominación de las naciones más poderosas intensifica la sangría de los mercados de los países más débiles y pobres e incrementa los niveles de desigualdad y contradicción social (Wolkmer, 2018, p. 208).

En su crítica al derecho estatal, Wolkmer (2018) no aboga por la abolición del Estado, sino por una transformación de la manera en que se entiende y se practica el derecho. Propone un derecho que sea más receptivo a las necesidades y demandas de las comunidades locales y que fomente la participación democrática.

Además, Wolkmer (2018) subraya la importancia de un marco normativo que no solo sea receptivo a las necesidades locales, sino que también promueva activamente la justicia social y la igualdad. Esta perspectiva aboga por un derecho que funcione como una herramienta de emancipación, en lugar de perpetuar mecanismos de opresión. Según el autor, "el pluralismo transformador, al distanciarse de los rumbos de las antiguas formulaciones y no estar ya más vinculado con la representación individualista o estatalista del mundo social, se construye teniendo en cuenta los espacios insurgentes, comunitarios y autonómicos" (p. 203).

Este enfoque pluralista y crítico del derecho, según Wolkmer (2018), es esencial para abordar las profundas desigualdades y contradicciones sociales que caracterizan a las sociedades periféricas en la era de la globalización capitalista.

> La insuficiencia de ese paradigma jurídico basado en el principio de legalidad establecida por el Estado, que sirvió para reglamentar y legitimar los intereses de la tradición cultural burguesa y capitalista, favorece un proceso de ruptura que puede encaminar hacia la conformación de un proyecto diferenciado (Wolkmer, 2018, p. 207).

Interrelación entre derecho y sociedad. Crítica a las estructuras de poder y legitimidad.

Correas (1993) ofrece un análisis crítico de las estructuras de poder y legitimidad en el derecho, enfocándose en la estrecha interrelación entre el derecho y la sociedad. Define la sociología jurídica como una disciplina científica, subrayando la importancia de comprender cómo se configuran los discursos jurídicos y cómo estos impactan en la sociedad en su conjunto. Este enfoque permite cuestionar la aparente neutralidad del derecho, revelando su función como una herramienta de poder al servicio de determinados intereses.

El autor argumenta que el derecho no puede entenderse sin considerar las relaciones sociales que lo originan. Las ideologías y conductas de los actores jurídicos son factores esenciales para comprender tanto la creación como la aplicación de las normas. De este modo, el derecho se presenta como un reflejo de las dinámicas de poder y de las estructuras sociales existentes, desafiando la visión tradicional que lo considera un sistema autónomo y objetivo (Correas, 1993). Esta perspectiva desafía la noción de que el derecho sea un sistema cerrado y autosuficiente, proponiendo, en cambio, que está profundamente arraigado en las dinámicas sociales. Como afirma Correas (1993): "Las normas jurídicas tampoco son 'hechos'. Esta diferencia ha motivado una profusa literatura acerca de las relaciones de determinación entre hechos e ideas o ideología" (p. 29).

Un aspecto crucial en el análisis de Correas (1993) es la influencia de la ideología del legislador en la creación de normas. Según el autor, las normas jurídicas reflejan los intereses y percepciones de los grupos en el poder, moldeados por las relaciones sociales subyacentes. Este enfoque subraya la naturaleza política del derecho y su función como herramienta de dominación. Además, distingue entre la efectividad y la eficacia de las normas jurídicas, señalando que una norma puede ser efectiva sin ser eficaz, y viceversa. Esta distinción es vital para evaluar el impacto real de las normas jurídicas en la sociedad y para entender las diversas formas en que estas pueden ser implementadas o ignoradas. En este sentido, Correas (1993) sostiene que "La efectividad o inefectividad de la ley puede medirse en relación con el cumplimiento de la misma por parte de los ciudadanos, o en relación con su aplicación por parte de los funcionarios" (p. 46).

Correas (2004) también enfatiza la importancia del contexto histórico y estructural en el estudio del derecho, sugiriendo que las normas jurídicas deben analizarse en relación con los fenómenos sociales y políticos que las preceden. Explora además el papel de la voluntad y la decisión política

en la creación del derecho, argumentando que las normas jurídicas son el resultado de decisiones políticas que reflejan la voluntad de los grupos hegemónicos.

Por último, Correas (1993) aborda el pluralismo jurídico y el derecho alternativo como respuestas a la hegemonía del derecho estatal. Enfatiza la existencia de múltiples sistemas normativos y destaca la resistencia de las comunidades locales frente a las imposiciones legales externas. Este pluralismo jurídico ofrece una alternativa al modelo monista estatal, proponiendo una concepción más inclusiva y democrática del derecho que reconoce las dinámicas y necesidades específicas de las comunidades periféricas.

Parte II: Enfoque Analítico y Reflexivo

Capítulo V. La justicia en los conflictos territoriales.

En esta sección se presentan los resultados del análisis de los casos seleccionados, correspondientes a sentencias emitidas en última instancia por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Jujuy entre agosto de 2015 y enero de 2023. Los resultados han sido organizados en unidades de información accesibles, facilitando así la comprensión de los argumentos y la esencia de cada decisión judicial, este análisis permitió desglosar; los argumentos legales, los principios constitucionales y las referencias a precedentes, creando así una estructura clara para interpretar las decisiones en su contexto. Asimismo, se han identificado las categorías de análisis que abordan los principales enfoques y puntos de tensión en estas sentencias.

Los resultados muestran la consistencia y las tendencias en la interpretación y aplicación del derecho, por parte del máximo tribunal de la provincia, destacando los patrones que reflejan los enfoques predominantes y su relación con los conflictos territoriales indígenas.

Finalmente, se ofrece un análisis detallado de los precedentes y la evolución jurisprudencial en estas sentencias. Esto permite observar cómo los cambios en la jurisprudencia han influido en la interpretación y protección de los derechos territoriales indígenas, revelando tanto tendencias de cambio como de continuidad en la respuesta judicial a las demandas de estas comunidades.

A continuación, se presenta la selección de la muestra representativa de sentencias judiciales (véase Apéndice A) fundada en criterios específicos que aseguran su relevancia y pertinencia dentro del contexto de estudio. Los criterios de selección aplicados fueron los siguientes:

1. **Problemática:** Conflictos territoriales.
2. **Instancia judicial:** Última instancia dentro de la provincia, Suprema Corte de Justicia (SCJ).
3. **Sujeto involucrado:** Comunidades aborígenes como actor o demandado.
4. **Fecha de publicación:** Sentencias emitidas entre agosto de 2015 y enero de 2023.
5. **Código de identificación:** Se respetó el número asignado por el tribunal para su identificación y seguimiento en el análisis.

Tabla 1. Casos seleccionados.

UNIDAD	TRIBUNAL	ACTOR	DEMANDADO	AÑO	CODIGO
SENTENCIA 1	CSJ	ESTADO PROVINCIAL	COMUNIDAD	2022	6
SENTENCIA 2	CSJ	ESTADO PROVINCIAL	COMUNIDAD	2022	31
SENTENCIA 3	CSJ	COMUNIDAD	ESTADO PROVINCIAL	2021	111
SENTENCIA 4	CSJ	PARTICULAR	COMUNIDAD	2021	330
SENTENCIA 5	CSJ	COMUNIDAD	ESTADO PROVINCIAL	2021	226
SENTENCIA 6	CSJ	PARTICULAR	COMUNIDAD	2021	71
SENTENCIA 7	CSJ	COMUNIDAD	PARTICULAR	2019	123
SENTENCIA 8	CSJ	COMUNIDAD	PARTICULAR-ESTADO PROVINCIAL	2019	17
SENTENCIA 9	CSJ	COMUNIDAD	-	2019	30
SENTENCIA 10	CSJ	PARTICULAR	COMUNIDAD	2018	279
SENTENCIA 11	CSJ	COMUNIDAD	-	2018	152
SENTENCIA 12	CSJ	PARTICULAR	COMUNIDAD	2018	247
SENTENCIA 13	CSJ	COMUNIDAD	-	2018	261
SENTENCIA 14	CSJ	COMUNIDAD	ESTADO PROVINCIAL	2018	135
SENTENCIA 15	CSJ	COMUNIDAD	COMPAÑÍA MINERA	2018	160
SENTENCIA 16	CSJ	COMUNIDAD	COMPAÑÍA MINERA	2018	40
SENTENCIA 17	CSJ	COMUNIDAD	ESTADO PROVINCIAL	2017	167
SENTENCIA 18	CSJ	COMUNIDAD	COMPAÑÍA MINERA	2017	74
SENTENCIA 19	CSJ	PARTICULAR	COMUNIDAD	2017	253
SENTENCIA 20	CSJ	COMUNIDAD	PARTICULAR	2016	67
SENTENCIA 21	CSJ	COMUNIDAD	PARTICULAR	2016	1127
SENTENCIA 22	CSJ	PARTICULAR	COMUNIDAD	2015	536

A su vez cada sentencia, se desglosa en unidades manejables, destacando los argumentos específicos y la esencia de la decisión judicial.

Argumentos específicos y esencia de las sentencias.

Sentencia N° 1 (COD 6):

- Argumento clave: La Comunidad Aborigen S/N solicitó la nulidad de concesiones mineras, argumentando que la concesión de las minas se realizó sin su consulta previa, lo que violaba sus derechos según la normativa indígena y el Convenio 169 de la OIT. No obstante, su petición fue rechazada por considerarse extemporánea y no presentar evidencia clara de vicios en el proceso.
- Esencia de la decisión: El tribunal concluyó que la "cuestión indígena" no fue adecuadamente articulada en el proceso legal y que existían vías procesales alternativas más adecuadas para plantear estos agravios. Aunque se reconoció la importancia de los derechos indígenas, el fallo se mantuvo en la necesidad de seguir procedimientos legales estrictos, lo que llevó al rechazo de la solicitud de la comunidad.

Sentencia N° 2 (COD 31):

- Argumento clave: Se hizo lugar a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el estado provincial en relación con la paralización de un proyecto ambiental significativo, vinculado a la gestión de residuos y financiado por un organismo internacional.
- Esencia de la decisión: El tribunal consideró que la medida cautelar, que prohibía el inicio de las obras del proyecto ambiental, no se ajustaba a las circunstancias del caso. Se determinó que dicha medida excede su alcance, ya que la autorización para comenzar las obras estaba condicionada a la finalización de trámites administrativos pendientes. Como resultado, el tribunal redujo el alcance de la medida cautelar, permitiendo que el proyecto continuará en su fase administrativa, sin la prohibición general de iniciar obras.

Sentencia N° 3 (COD 111):

- Argumento clave: La Comunidad Aborigen S/N argumentó que no se le garantizó la debida participación en el proceso de concesión minera, solicitando la nulidad de dicha concesión por considerar que se violaron sus derechos de consulta y participación establecidos en el Convenio 169 de la OIT.

- Esencia de la decisión: El tribunal concluyó que la nulidad de la concesión no era la vía adecuada para proteger los derechos reclamados por la Comunidad Aborigen S/N. Se determinó que la cuestión indígena no había sido correctamente articulada en el proceso legal, y que existían vías procesales alternativas más apropiadas para plantear sus reclamos. El tribunal también señaló que el proceso de concesión minera cumplió con los requisitos legales en su momento, lo que llevó al rechazo de la solicitud de nulidad.

Sentencia N° 4 (COD 330):

- Argumento clave: Rechazo del recurso de inconstitucionalidad relacionado con una medida cautelar que afectaba a la Comunidad Aborigen S/N en el contexto de un proceso sucesorio. La medida cautelar de no innovar había sido levantada debido a la falta de promoción del proceso principal.
- Esencia de la decisión: El tribunal concluyó que el proceso sucesorio no era el contexto adecuado para tratar las reclamaciones contra la Comunidad Aborigen S/N. Además, se levantó la medida cautelar porque no se habían realizado avances en el proceso principal, y la medida ya no era necesaria para proteger los derechos de las partes involucradas.

Sentencia N° 5 (COD 226):

- Argumento clave: La Cámara Civil y Comercial declaró nula la notificación al Estado Nacional en un caso de prescripción adquisitiva presentado por la Comunidad Aborigen S/N. La cámara también excluyó al Estado Nacional del proceso, considerando que su participación no era necesaria.
- Esencia de la decisión: El tribunal superior admitió el recurso de inconstitucionalidad, argumentando que la Cámara Civil y Comercial se extralimitó en sus funciones al rechazar la demanda contra el Estado Nacional y excluirlo del proceso. El tribunal determinó que la decisión sobre la necesidad de la participación del Estado Nacional debía ser evaluada en una etapa procesal posterior, no de manera preliminar.

Sentencia N° 6 (COD 71):

- Argumento clave: Se interpone una acción de prescripción adquisitiva por parte de particulares, quienes son miembros de una Comunidad Aborigen S/N y desean usucapir un terreno que forma parte del territorio comunitario.

- Esencia de la decisión: El tribunal rechazó la petición al considerar que no se cumplían los requisitos necesarios para la usucapión. Además, se concluyó que los derechos de la Comunidad Aborigen S/N prevalecen sobre los derechos individuales en este caso, ya que el terreno en disputa forma parte del territorio de la comunidad y está sujeto a la propiedad comunitaria.

Sentencia N° 7 (COD 123):

- Argumento clave: Un juicio de desalojo entre particulares involucra la participación de la Comunidad Aborigen S/N en la demanda reivindicatoria, debido a la conexión con un territorio ancestralmente ocupado por la comunidad.
- Esencia de la decisión: El tribunal rechazó el recurso de inconstitucionalidad al concluir que el juicio de desalojo no es la vía adecuada para resolver cuestiones de posesión o dominio sobre el inmueble. Se determinó que la demanda de reivindicación no puede ser resuelta en el contexto de un juicio de desalojo, y que la Comunidad Aborigen S/N no debe ser integrada en la litis en este tipo de procesos.

Sentencia N° 8 (COD 17):

- Argumento clave: Un conflicto de competencias surgió entre la Cámara Civil y Comercial y la Justicia Federal en relación con un juicio promovido por una comunidad aborigen, que buscaba el reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de tierras.
- Esencia de la decisión: El tribunal declaró competente a la Cámara en lo Civil y Comercial para entender en el caso, basándose en la naturaleza de la demanda presentada por la Comunidad Aborigen S/N. Se argumentó que la acción no tenía una asignación de competencia específica en relación con un tribunal o juzgado, por lo que correspondía a la Cámara en lo Civil y Comercial intervenir bajo su competencia residual.

Sentencia N° 9 (COD 30):

- Argumento clave: Se deniega un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema en un caso relacionado con la defensa de los derechos de la Comunidad Aborigen S/N.
- Esencia de la decisión: El tribunal concluyó que no se configuraba un caso federal según los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, consideró que los agravios planteados no justificaban la intervención de la Corte Suprema, ya que no se presentaron argumentos novedosos o específicos de arbitrariedad que pudieran

fundamentar el recurso. Por lo tanto, se denegó la concesión del recurso extraordinario federal.

Sentencia N° 10 (COD 279):

- Argumento clave: Un caso de desalojo en el que la Comunidad Aborigen S/N intentó intervenir tardíamente en defensa de uno de sus miembros, argumentando que el territorio en disputa formaba parte de su posesión ancestral.
- Esencia de la decisión: El tribunal decidió que la intervención de la Comunidad Aborigen S/N no era válida por ser extemporánea. Además, determinó que la sentencia de desalojo no afectaba a la comunidad en su conjunto, ya que se limitaba a los derechos individuales de la demandada y no se vinculaba a la propiedad comunitaria.

Sentencia N° 11 (COD 152):

- Argumento clave: Una Comunidad Aborigen S/N argumentó que una sentencia de desalojo afectaba su propiedad comunitaria, sosteniendo que el terreno en cuestión formaba parte de su territorio ancestral.
- Esencia de la decisión: El tribunal determinó que no había suficientes pruebas para demostrar que la propiedad en cuestión pertenecía a la Comunidad Aborigen S/N. El tribunal destacó la falta de documentación y evidencia contundente que vincula de manera directa la propiedad con la comunidad, por lo cual se rechazó la solicitud de protección de la propiedad comunitaria en este caso.

Sentencia N° 12 (COD 247):

- Argumento clave: La Comunidad Aborigen S/N presentó un recurso relacionado con un juicio de desalojo, argumentando que las tierras en disputa formaban parte de su propiedad comunitaria.
- Esencia de la decisión: El tribunal confirmó la sentencia de desalojo, argumentando que la comunidad no probó suficientemente su posesión sobre el terreno en litigio. La falta de pruebas sólidas que vinculan la tierra directamente con la comunidad fue clave para la decisión de desestimar la reclamación de la comunidad aborigen.

Sentencia N° 13 (COD 261):

- Argumento clave: La Comunidad Aborigen S/N interpuso un recurso extraordinario federal en un caso relacionado con cuestiones ambientales, argumentando que se habían violado sus derechos constitucionales y tratados internacionales.
- Esencia de la decisión: El tribunal denegó el recurso extraordinario federal al considerar que no se configuraba un caso federal. Además, los argumentos presentados por la comunidad fueron vistos como una repetición de lo ya expuesto en instancias anteriores, sin aportar fundamentos nuevos o específicos que justificaran la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sentencia N° 14 (COD 135):

- Argumento clave: Un amparo precautorio fue presentado con el fin de suspender los efectos de una resolución administrativa, argumentando que los representantes reconocidos en dicha resolución no eran legítimos.
- Esencia de la decisión: El tribunal denegó el recurso extraordinario federal al considerar que no se había demostrado la existencia de un daño irreparable para la Comunidad Aborigen S/N. Además, los argumentos presentados fueron considerados insuficientes para justificar la intervención de la Corte Suprema de Justicia.

Sentencia N° 15 (COD 160):

- Argumento clave: Un amparo interpuesto por la Comunidad Aborigen S/N en contra de una empresa minera por daños ambientales y territoriales, solicitando la suspensión de los efectos de una resolución administrativa que autorizaba actividades en su territorio.
- Esencia de la decisión: El tribunal rechazó el recurso de inconstitucionalidad al concluir que la comunidad no probó de manera suficiente que las acciones de la empresa minera causarán un daño irreparable a la Comunidad Aborigen S/N. Además, la cuestión fue derivada a la vía contencioso-administrativa, declarando la incompetencia del tribunal para resolver el amparo en esta instancia.

Sentencia N° 16 (COD 40):

- Argumento clave: Un amparo interpuesto por la Comunidad Aborigen S/N en contra de una empresa minera por daños ambientales y territoriales, solicitando la suspensión de las

actividades de forestación en su territorio debido a la falta de consulta previa y la violación de derechos indígenas.

- Esencia de la decisión: El tribunal rechazó el recurso de inconstitucionalidad al concluir que la Comunidad Aborigen S/N no probó de manera suficiente que las acciones de la empresa minera causarán un daño irreparable a la comunidad. Además, se determinó que la empresa había cumplido con las normativas ambientales pertinentes y que la medida cautelar previa había sido levantada de manera justificada.

Sentencia N° 17 (COD 167):

- Argumento clave: La Comunidad Aborigen S/N impugnar un fallo argumentando que afecta sus derechos territoriales y solicita el reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras.
- Esencia de la decisión: El tribunal rechazó el recurso de inconstitucionalidad al considerar que la comunidad no presentó pruebas suficientes de su posesión territorial. Además, el tribunal determinó que el proceso debía seguir bajo el marco de la prescripción adquisitiva, lo que exigía cumplir con requisitos formales adicionales que la Comunidad Aborigen S/N no logró satisfacer.

Sentencia N° 18 (COD 74):

- Argumento clave: La Comunidad Aborigen S/N reclama la propiedad de tierras utilizadas por una empresa minera, argumentando que se encuentran dentro de su territorio ancestral y que no se respetaron sus derechos territoriales.
- Esencia de la decisión: El tribunal no admitió el recurso de la Comunidad Aborigen S/N, considerando que los derechos reclamados no fueron adecuadamente demostrados. Se concluyó que la comunidad no presentó pruebas suficientes para acreditar su posesión y propiedad sobre las tierras en disputa, lo que llevó al rechazo de sus reclamos.

Sentencia N° 19 (COD 253):

- Argumento clave: Un particular inició un juicio de desalojo contra miembros de la Comunidad Aborigen S/N, alegando que tenían derecho sobre la propiedad en cuestión y que los ocupantes no tenían título válido para continuar en el inmueble.
- Esencia de la decisión: El tribunal ordenó el desalojo al determinar que la Comunidad Aborigen S/N no logró demostrar su posesión efectiva sobre el terreno en litigio. Se

concluyó que los argumentos presentados por la comunidad no fueron suficientes para acreditar la titularidad o posesión ancestral de las tierras, lo que llevó a la confirmación de la sentencia de desalojo.

Sentencia N° 20 (COD 67):

- Argumento clave: La comunidad aborigen intentó detener un proceso de desalojo mediante la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, argumentando que la sentencia afectaba sus derechos sobre tierras consideradas de su propiedad comunitaria.
- Esencia de la decisión: El tribunal rechazó el recurso de inconstitucionalidad al considerar que no se cumplían los requisitos necesarios para su procedencia. El tribunal concluyó que la comunidad no presentó pruebas suficientes para acreditar la posesión efectiva de las tierras en litigio, y que el desalojo no implicaba una vulneración de los derechos comunitarios en este contexto.

Sentencia N° 21 (COD 1127):

- Argumento clave: Un juicio de desalojo entre particulares en el que la Comunidad Aborigen S/N intentó intervenir como tercero interesado, argumentando que el territorio en disputa formaba parte de su propiedad comunitaria.
- Esencia de la decisión: El tribunal rechazó la participación de la Comunidad Aborigen S/N como tercero interesado, argumentando que no se había acreditado fehacientemente la posesión comunitaria sobre el inmueble en cuestión. Además, se confirmó la sentencia de desalojo, concluyendo que la intervención de la comunidad no estaba justificada bajo la Ley 26.160 debido a la falta de pruebas suficientes.

Sentencia N° 22 (COD 536):

- Argumento clave: Un particular demanda a la Comunidad Aborigen S/N por la ocupación de tierras, buscando el desalojo de sus miembros, argumentando que no tenían derechos legales sobre el inmueble en cuestión.

- Esencia de la decisión: El tribunal ordenó el desalojo al concluir que la Comunidad Aborigen S/N no tenía derechos legales sobre las tierras en disputa. Se determinó que la comunidad no pudo demostrar su posesión efectiva ni acreditar su propiedad sobre el territorio, lo que llevó a la confirmación de la sentencia de desalojo.

Luego se identificaron las tres categorías de las sentencias, que fueron definidas en Capítulo I. Metodología.

Categorías de las sentencias.

Sentencia N° 1 (COD 6):

- **Argumento legal:** Nulidad de concesiones mineras solicitada por una Comunidad Aborigen S/N debido a la falta de consultas previas y la violación de sus derechos territoriales.
- **Principio constitucional:** Se invoca el principio de igualdad ante la ley, particularmente en relación con los derechos de los pueblos indígenas, tal como lo establece la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT, que subrayan la necesidad de consultas previas y participación en decisiones que afecten sus territorios.
- **Referencia a precedentes:** La sentencia hace referencia a jurisprudencia previa relacionada con concesiones mineras en territorios indígenas, donde se ha enfatizado la importancia de garantizar el respeto a los derechos colectivos de las comunidades aborígenes y la consulta previa como requisito indispensable en la toma de decisiones que puedan afectar sus tierras y recursos naturales.

Sentencia N° 2 (COD 31):

- **Argumento Legal:** Inconstitucionalidad de medidas cautelares en un contexto ambiental, específicamente en relación con la prohibición de iniciar obras en el "Centro Ambiental Puna".
- **Principio constitucional:** Protección ambiental y derechos fundamentales, en este caso, relacionados con la consulta previa a las comunidades indígenas, conforme a la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.
- **Referencia a precedentes:** Se discutieron los límites de las medidas cautelares en casos ambientales, especialmente cuando estas medidas interfieren con la ejecución de proyectos que cuentan con financiamiento internacional y cumplen con los procedimientos administrativos y legales pertinentes.

Sentencia N° 3 (COD 111):

- **Argumento legal**: Negativa a la participación indígena en el proceso de concesión minera, al considerar extemporáneo el planteo de nulidad solicitado por la Comunidad Aborigen S/N.
- **Principio constitucional**: Participación indígena en decisiones territoriales, conforme al Convenio 169 de la OIT y la Constitución Nacional, que garantizan la consulta previa y la participación en decisiones que afecten sus territorios.
- **Referencia a precedentes**: Jurisprudencia sobre la importancia de la participación indígena en concesiones mineras y la necesidad de que sus derechos sean protegidos de manera efectiva en los procedimientos administrativos y judiciales.

Sentencia N° 4 (COD 330):

- **Argumento legal:** Inaplicabilidad de medidas cautelares en un juicio sucesorio, en particular una medida cautelar de no innovar solicitada por herederos en el contexto de un proceso sucesorio.
- **Principio constitucional:** Legalidad y seguridad jurídica en procesos judiciales, asegurando que las medidas cautelares se apliquen correctamente y no afecten a terceros que no son parte en el proceso sucesorio.
- **Referencia a precedentes:** La decisión hace referencia a precedentes sobre la limitación de las medidas cautelares en procesos sucesorios, destacando la necesidad de que dichas medidas sean adecuadas y pertinentes al proceso principal y que no interfieran injustamente en los derechos de terceros.

Sentencia N° 5 (COD 226):

- **Argumento legal:** Anulación de notificación en un caso de prescripción adquisitiva, en el cual se declaró nula la notificación al Estado Nacional y se excluyó su participación en el proceso.
- **Principio constitucional:** Debido proceso en notificaciones judiciales, asegurando que todas las partes involucradas en un litigio sean debidamente notificadas y tengan la oportunidad de participar en la defensa de sus intereses.
- **Referencia a precedentes:** Facultades de las Cámaras en procesos de prescripción adquisitiva, especialmente en cuanto a la correcta inclusión o exclusión de partes en el proceso y la validez de las notificaciones judiciales. La decisión subraya la importancia de seguir las normativas procesales al determinar la participación de entidades como el Estado Nacional en litigios que afectan derechos colectivos.

Sentencia N° 6 (COD 71):

- **Argumento legal:** Prevalencia de derechos comunitarios sobre derechos individuales en un caso de prescripción adquisitiva. La Comunidad Aborigen S/N argumentó que la tierra en cuestión pertenecía a su propiedad comunitaria y no podía ser adquirida por usucapión individual.
- **Principio constitucional:** Protección de la propiedad comunitaria, de acuerdo con el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce los derechos de las comunidades indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales.
- **Referencia a precedentes:** Jurisprudencia sobre la prevalencia de derechos comunitarios en casos donde se intenta aplicar la usucapión individual en tierras que forman parte de territorios reconocidos como propiedad de comunidades indígenas. El tribunal sostuvo que la adhesión de los actores a la propiedad comunitaria impide que puedan reclamar derechos individuales sobre dichas tierras.

Sentencia N° 7 (COD 123):

- **Argumento legal:** Improcedencia del juicio de desalojo para resolver cuestiones de posesión en un caso donde la Comunidad Aborigen S/N intentó intervenir en un proceso reivindicatorio.

- **Principio constitucional:** Derecho a la propiedad, donde se establece que los procedimientos legales deben respetar las garantías de debido proceso para todos los involucrados, incluyendo comunidades indígenas.
- **Referencia a precedentes:** Se reitera la improcedencia del desalojo como vía para resolver cuestiones de posesión o dominio sobre el inmueble, haciendo referencia a jurisprudencia previa que subraya la necesidad de que tales disputas se resuelvan en procesos específicos y no en juicios sumarios como los de desalojo.

Sentencia N° 8 (COD 17):

- **Argumento legal:** Resolución de un conflicto de competencias judiciales entre la Cámara en lo Civil y Comercial y el Juzgado de Primera Instancia en un caso promovido por la Comunidad Aborigen S/N, relacionado con el reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de tierras.
- **Principio constitucional:** Competencia judicial adecuada, conforme a los principios de debido proceso y la necesidad de que el órgano jurisdiccional competente sea el encargado de resolver la causa.
- **Referencia a precedentes:** Conflictos de competencias judiciales, donde se resuelve que la competencia se determina en función de los hechos expuestos por el actor en la demanda y que, en este caso, corresponde a la Cámara en lo Civil y Comercial, en virtud de su competencia residual según el Código Procesal Civil.

Sentencia N° 9 (COD 30):

- **Argumento legal:** Denegación de un recurso extraordinario federal presentado por la Comunidad Aborigen S/N, alegando que no se configuraba un caso federal según los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- **Principio constitucional:** Acceso a la justicia, enfocado en la correcta interpretación de los requisitos para acceder a instancias superiores, en este caso, la Corte Suprema.
- **Referencia a precedentes:** La decisión hace referencia a los criterios establecidos por la Corte Suprema para la intervención en casos federales, subrayando que el recurso extraordinario debe fundamentarse en argumentos específicos de arbitrariedad y no en meras discrepancias con fallos anteriores.

Sentencia N° 10 (COD 279):

- **Argumento legal:** Desestimación de la intervención tardía de la Comunidad Aborigen S/N en un juicio de desalojo, donde se argumentaba que el territorio en disputa formaba parte de su posesión ancestral.
- **Principio constitucional:** Oportunidad procesal, que establece la importancia de que las partes actúen dentro de los plazos y etapas procesales correspondientes para garantizar la equidad y la seguridad jurídica en el proceso.
- **Referencia a precedentes:** Límites de intervención en procesos de desalojo, destacando la jurisprudencia que subraya la necesidad de que las intervenciones de terceros en un juicio de desalojo se realicen de manera oportuna para ser consideradas válidas.

Sentencia N° 11 (COD 152):

- **Argumento legal:** Falta de pruebas suficientes para demostrar la propiedad comunitaria en un caso de desalojo, donde la Comunidad Aborigen S/N argumentaba que el territorio en cuestión era de su posesión ancestral.
- **Principio constitucional:** Derecho a la propiedad, que establece la protección de la propiedad privada y comunitaria, siempre que se presenten las pruebas necesarias para acreditar dicha posesión.
- **Referencia a precedentes:** Exigencia de prueba sólida de propiedad en casos de desalojo, donde la jurisprudencia ha sostenido que las reclamaciones de propiedad comunitaria deben estar respaldadas por evidencia concreta para ser consideradas válidas en los procesos judiciales.

Sentencia N° 12 (COD 247):

- **Argumento legal**: Confirmación del desalojo debido a la falta de pruebas suficientes por parte de la Comunidad Aborigen S/N para demostrar la posesión comunitaria sobre las tierras en disputa.
- **Principio constitucional**: Seguridad jurídica, que establece la importancia de proteger los derechos de propiedad y asegurar que las decisiones judiciales se basen en pruebas sólidas y adecuadas.
- **Referencia a precedentes**: Jurisprudencia sobre la exigencia de pruebas contundentes de posesión efectiva en casos de desalojo, destacando que las reclamaciones de propiedad comunitaria deben estar respaldadas por evidencia clara para ser consideradas válidas en el proceso judicial.

Sentencia N° 13 (COD 261):

- **Argumento legal**: Denegación de un recurso extraordinario federal en un caso relacionado con cuestiones ambientales, interpuesto por la Comunidad Aborigen S/N, al no configurarse un caso federal según lo estipulado por la ley.
- **Principio constitucional**: Protección del medio ambiente, en conexión con el acceso a la justicia y la necesidad de garantizar que las comunidades afectadas por decisiones ambientales puedan defender sus derechos en instancias judiciales superiores.
- **Referencia a precedentes**: Admisibilidad de recursos extraordinarios en temas ambientales, subrayando la necesidad de que los agravios presenten argumentos novedosos y específicos para justificar la intervención de la Corte Suprema. En este caso, el tribunal concluyó que los argumentos eran una repetición de lo ya presentado en instancias anteriores, lo que llevó a la denegación del recurso.

Sentencia N° 14 (COD 135):

- **Argumento legal:** Denegación de un amparo precautorio presentado por la Comunidad Aborigen S/N, al considerar que no se habían demostrado pruebas suficientes de un daño irreparable o de difícil reparación ulterior derivado de la resolución administrativa impugnada.
- **Principio constitucional:** Protección de derechos fundamentales, en particular, la necesidad de demostrar la existencia de un daño irreparable para que proceda la acción de amparo.

- **Referencia a precedentes:** La sentencia se apoya en precedentes que establecen la necesidad de probar el daño irreparable para conceder un amparo precautorio. En este caso, el tribunal concluyó que el acto administrativo cuestionado no representaba un peligro inminente ni un daño irreparable para la comunidad.

Sentencia N° 15 (COD 160):

- **Argumento legal:** Rechazo de un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comunidad Aborigen S/N en un amparo contra una empresa minera por daños ambientales, al considerar que no se presentaron pruebas suficientes de daño irreparable.
- **Principio constitucional:** Derecho a un medio ambiente sano, que garantiza la protección de los derechos ambientales, especialmente en territorios habitados por comunidades indígenas.
- **Referencia a precedentes:** Exigencia de prueba en amparos contra empresas mineras, subrayando la necesidad de demostrar de manera clara y contundente el daño irreparable para que procedan medidas cautelares o recursos extraordinarios.

Sentencia N° 16 (COD 40):

- **Argumento legal:** Desestimación de una medida cautelar solicitada por la Comunidad Aborigen S/N para suspender las actividades de una empresa minera, alegando que estas afectan su territorio ancestral y derechos comunitarios.
- **Principio constitucional:** Protección de la propiedad privada, considerando que la empresa minera contaba con los permisos ambientales y de propiedad correspondientes para realizar las actividades en el territorio en disputa.
- **Referencia a precedentes:** Denegación de medidas cautelares sin prueba de perjuicio inminente, subrayando la necesidad de que las solicitudes de medidas cautelares presenten pruebas concretas de un daño inminente y grave para que sean admitidas.

Sentencia N° 17 (COD 167):

- **Argumento legal:** Rechazo de recurso por falta de pruebas suficientes sobre la posesión territorial en un caso donde la Comunidad Aborigen S/N reclamaba el reconocimiento de su propiedad comunitaria.
- **Principio constitucional:** Protección territorial indígena, en el marco del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT, que reconoce los derechos de las comunidades indígenas sobre sus tierras ancestrales.
- **Referencia a precedentes:** Jurisprudencia sobre la exigencia de pruebas concretas y sólidas para acreditar la posesión territorial en casos de prescripción adquisitiva y propiedad comunitaria. El tribunal sostuvo que, sin pruebas suficientes, no se puede otorgar el reconocimiento de los derechos reclamados.

Sentencia N° 18 (COD 74):

- **Argumento legal**: Negativa a la reclamación de propiedad comunitaria sobre tierras utilizadas por una empresa minera. La Comunidad Aborigen S/N no pudo acreditar adecuadamente su pertenencia a la comunidad ni demostrar el animus domini sobre las tierras en cuestión.

- **Principio constitucional**: Derecho a la propiedad, que garantiza la protección de la propiedad privada formalmente registrada, en este caso, a favor de la empresa minera.
- **Referencia a precedentes:** Protecciones a la propiedad privada frente a reclamaciones no probadas, subrayando la necesidad de pruebas contundentes para respaldar las reclamaciones de propiedad comunitaria indígena en conflictos territoriales.

Sentencia N° 19 (COD 253):

- **Argumento legal:** Orden de desalojo debido a la falta de prueba suficiente de posesión comunitaria efectiva por parte de la Comunidad Aborigen S/N. La comunidad no pudo acreditar de manera fehaciente su posesión ancestral sobre el inmueble en litigio.
- **Principio constitucional:** Derecho a la vivienda, que debe ser equilibrado con la protección de la propiedad privada y el respeto a las normas procesales.
- **Referencia a precedentes:** La jurisprudencia establece que, en ausencia de pruebas contundentes sobre la posesión comunitaria, procede el desalojo en favor de quienes acrediten títulos de propiedad válidos. El tribunal ratificó que el juicio de desalojo no es el marco adecuado para resolver la disputa.

Sentencia N° 20 (COD 67):

- **Argumento legal:** Rechazo de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto en un proceso de desalojo, en el que la Comunidad Aborigen S/N argumentaba que la sentencia afectaba sus derechos sobre tierras consideradas de su propiedad comunitaria.
- **Principio constitucional:** Igualdad ante la ley, que implica que las decisiones judiciales deben garantizar un trato equitativo a todas las partes, respetando sus derechos y obligaciones en el marco legal.
- **Referencia a precedentes:** La sentencia hace referencia a los requisitos para la procedencia de recursos de inconstitucionalidad, destacando que estos deben estar fundamentados en argumentos específicos y no en meras discrepancias con fallos anteriores, lo que llevó al rechazo del recurso en este caso.

Sentencia N° 21 (COD 1127):

- **Argumento legal:** Desestimación de la intervención de la Comunidad Aborigen S/N en un juicio de desalojo entre particulares, en el que la comunidad intentó participar como tercero interesado para evitar el desalojo de uno de sus miembros.
- **Principio constitucional:** Derecho a la propiedad, que protege los derechos de los propietarios legalmente reconocidos frente a reclamos de terceros que no logran acreditar una relación directa o suficiente con el inmueble en disputa.
- **Referencia a precedentes:** Limitaciones a la intervención de terceros en juicios de desalojo, especialmente cuando no se presentan pruebas claras que justifiquen su participación. En este caso, se rechazó la intervención de la comunidad por falta de pruebas que acreditaran la posesión comunitaria sobre el inmueble.

Sentencia N° 22 (COD 536):

- **Argumento legal:** Orden de desalojo contra la Comunidad Aborigen S/N por falta de derechos legales sobre las tierras ocupadas. La comunidad no logró acreditar su posesión

ancestral ni su propiedad sobre el terreno en disputa, lo que llevó al tribunal a confirmar el desalojo.

- **Principio constitucional:** Derecho a la propiedad privada, que garantiza la protección de los derechos de los propietarios legalmente reconocidos frente a ocupaciones no justificadas legalmente.
- **Referencia a precedentes:** Jurisprudencia sobre desalojo y titularidad de la tierra, enfatizando la necesidad de presentar pruebas sólidas para reclamar derechos sobre la propiedad, especialmente en casos de comunidades indígenas que buscan protección sobre tierras ocupadas.

Se agrupan las sentencias en las seis categorías propuestas y fundamentadas en Capítulo I. Metodología, con el detalle de sus características comunes.

Agrupamiento de sentencias por categorías.

1) **Sentencias relacionadas con la propiedad comunitaria y usucapión.**

En estos casos, el tribunal aborda la prevalencia de los derechos colectivos de la comunidad frente a los derechos individuales de los actores involucrados.

Sentencias incluidas: Sentencia N° 6 (COD 71), Sentencia N° 7 (COD 123), Sentencia N° 19 (COD 253)

Características comunes**:** Argumentos Legales: Discusión sobre usucapión y derechos de posesión comunitaria. Principios Constitucionales: Protección de la propiedad comunitaria. Referencias a Precedentes: Jurisprudencia que sostiene la prevalencia de derechos comunitarios en disputas de posesión.

2) **Sentencias relacionadas con la protección ambiental y derechos indígenas.**

Las decisiones judiciales analizan cómo las medidas ambientales impactan o protegen los derechos de las comunidades sobre sus tierras y recursos.

Sentencias incluidas**:** Sentencia N° 2 (COD 31), Sentencia N° 13 (COD 261) Sentencia N° 15 (COD 160).

Características comunes: Argumentos Legales: Procedencia de medidas cautelares y amparos en contextos ambientales. Principios Constitucionales: Protección del medio ambiente y derechos indígenas. Referencias a Precedentes: Jurisprudencia sobre protección ambiental y limitaciones de medidas cautelares.

3) **Sentencias relacionadas con desalojos y derechos de propiedad.**

En estos casos, el tribunal se enfoca en determinar la titularidad y posesión efectiva de la propiedad en cuestión.

Sentencias incluidas: Sentencia N° 10 (COD 279), Sentencia N° 12 (COD 247), Sentencia N° 22 (COD 536)

Características comunes: Argumentos Legales: Procedimientos de desalojo y evaluación de la posesión efectiva. Principios Constitucionales: Derecho a la propiedad. Referencias a Precedentes: Jurisprudencia sobre desalojo y posesión.

4) **Sentencias relacionadas con competencia judicial y procedimientos.**

Se incluye el análisis de la jurisdicción adecuada, el debido proceso, y la seguridad jurídica en los casos presentados.

Sentencias incluidas: Sentencia N° 8 (COD 17), Sentencia N° 4 (COD 330), Sentencia N° 5 (COD 226)

Características comunes: Argumentos Legales: Conflictos de competencia y procedimientos procesales. Principios Constitucionales: Debido proceso y seguridad jurídica. Referencias a Precedentes: Jurisprudencia sobre competencia judicial y aplicación de procedimientos.

5) **Sentencias relacionadas con rechazo de recursos y amparos.**

Esta agrupación incluye sentencias en las que el tribunal ha rechazado recursos o amparos debido a la falta de pruebas o al incumplimiento de los requisitos legales establecidos. En estas sentencias se examina la procedencia de las solicitudes y los criterios aplicados para admitir o denegar los recursos.

Sentencias incluidas: Sentencia N° 3 (COD 111), Sentencia N° 9 (COD 30) , Sentencia N° 14 (COD 135)

Características comunes: Argumentos Legales: Evaluación de la admisibilidad de recursos y amparos. Principios Constitucionales: Acceso a la justicia y protección de derechos fundamentales. Referencias a Precedentes: Jurisprudencia sobre admisibilidad de recursos y criterios para otorgar amparos.

6) Sentencias relacionadas con protección de propiedad privada.

El tribunal se centra en evaluar la legitimidad de los derechos de propiedad y en proteger estos derechos frente a posibles interferencias.

Sentencias incluidas: Sentencia N° 1 (COD 6), Sentencia N° 16 (COD 40), Sentencia N° 17 (COD 167), Sentencia N° 18 (COD 74), Sentencia N° 20 (COD 67), Sentencia N° 11 (COD 152) Sentencia N° 21 (COD 1127)

Características Comunes: Argumentos Legales: Defensa de los derechos de propiedad privada. Principios Constitucionales: Protección del derecho a la propiedad privada. Referencias a Precedentes: Jurisprudencia que protege la propiedad privada frente a reclamos no probados.

Se muestran los resultados sobre la gestión de los tribunales en cuanto a la consistencia y las tendencias en la interpretación y aplicación del derecho en las sentencias judiciales. Además, se exponen los patrones identificados.

Consistencia y tendencias de las sentencias.

1. Sentencias relacionadas con la propiedad comunitaria y usucapión.

En las sentencias analizadas, se observa una consistencia en la aplicación de principios constitucionales y precedentes relacionados con la protección de los derechos territoriales de las comunidades aborígenes. En todas estas decisiones, el tribunal invoca de manera uniforme el Artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que protege la identidad cultural y la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas.

La Sentencia N° 6 (COD 71) establece que: *"la recurrente no puede alegar un desconocimiento fáctico de sus pretensiones, la que comenzó con adhesión o incorporación a un programa de adjudicación de tierras dentro de una comunidad originaria y que se desarrolla en sede administrativa para luego someterse concomitantemente a la jurisdicción ordinaria... incluso manifiesta que la demanda afecta a sus derechos de posesión y propiedad comunitaria del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional"*, lo que fundamenta la improcedencia de la prescripción adquisitiva sobre dichas tierras. De manera similar, en la Sentencia N° 7 (COD 123), se afirma que: *"el no otorgarle la calidad de parte a la Comunidad Aborigen es un agravio concreto en contra del Estado que debe velar por tales pueblos originarios. Más aún cuando... se encuentra probado que la reivindicación pretende llevarse a cabo en territorio ocupado ancestralmente por*

una Comunidad aborigen". La Sentencia N° 19 (COD 253) mantiene esta línea, afirmando: *"para enervar el juicio de desalojo no es necesario que el poseedor demuestre fehacientemente su calidad de poseedor, sino que es suficiente que lo haga prima facie... siendo la posesión ancestral de las tierras el requisito para que se reconozca la personería jurídica"*.

En cuanto a la detección de tendencias, las sentencias analizadas reflejan una evolución en la jurisprudencia hacia una mayor protección de los derechos territoriales de las comunidades aborígenes, con una clara integración de normativas internacionales en el razonamiento judicial. Esta tendencia es evidente en la Sentencia N° 7 (COD 123), que subraya el papel del Estado como garante de los derechos de las comunidades indígenas y la necesidad de proteger estos derechos, lo que se alinea con la integración de normativas internacionales y la protección de los derechos territoriales: "*El Estado Provincial es garante de las comunidades indígenas. El no otorgarle la calidad de parte a la Comunidad Aborigen es un agravio concreto en contra del Estado que debe velar por tales pueblos originarios... El reconocimiento del carácter inmutable de una decisión judicial requiere la existencia de un trámite anterior contradictorio en el que se hayan respetado sustancialmente las exigencias de la garantía de la defensa en juicio*". La Sentencia N° 19 (COD 253) también refleja esta tendencia al señalar*: "Debe rechazarse la acción de desalojo si el demandado alega poseer con 'animus domini' y tal defensa no es una simple argucia para demorar la entrega del inmueble... la acción de desalojo no puede ejercerse contra el poseedor... La sentencia de desalojo no prejuzga sobre el dominio o posesión*". Esta tendencia hacia la incorporación de estándares internacionales muestra cómo se refuerza la protección de la posesión comunitaria, alineándose con los estándares internacionales.

PATRÓN IDENTIFICADO: El tribunal refuerza consistentemente la protección de los derechos territoriales de las comunidades indígenas. Este patrón subraya la priorización de los derechos colectivos en el contexto de los conflictos territoriales, integrando estándares internacionales para fortalecer esta protección acorde con la jurisprudencia nacional.

2. Sentencias relacionadas con la protección ambiental y derechos indígenas.

En las sentencias analizadas, se identifica una consistencia en la aplicación de principios constitucionales y en la jurisprudencia que trata sobre la protección ambiental y los derechos indígenas. En la Sentencia N° 2 (COD 31), el tribunal aplica el Convenio 169 de la OIT para fundamentar la protección de la comunidad indígena, enfatizando la necesidad de la participación comunitaria en las decisiones que afectan su territorio. La resolución establece que *"al no existir*

una delimitación del territorio de la Comunidad, corresponde tener por configurado dicho extremo en base a la pauta interpretativa del Convenio Nº 169 de OIT" (Número Sentencia 31).

De manera similar, en la Sentencia N° 13 (COD 261), el tribunal reitera la importancia de respetar los derechos indígenas en la gestión de recursos naturales, argumentando que *"se encuentran comprometidos derechos reconocidos en el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, tratados internacionales sobre pueblos indígenas y jurisprudencia de la C.I.D.H."*. Finalmente, en la Sentencia N° 15 (COD 160), se reafirma la importancia de la participación de las comunidades indígenas en los procedimientos ambientales, destacando que *"la acción de amparo promovida por la Comunidad Aborigen tiene como objetivo asegurar el derecho de participación y consulta previa, libre e informada en los Planes de Manejo Forestal Sustentable solicitados por las empresas demandadas"*.

En cuanto a las tendencias, las sentencias reflejan un aumento en la importancia de la protección ambiental como parte integral de los derechos territoriales de las comunidades indígenas. En la Sentencia N° 2 (COD 31), se observa una tendencia hacia la integración de estándares internacionales, para garantizar que los derechos ambientales y territoriales de las comunidades indígenas sean protegidos en los procesos judiciales. El tribunal menciona que *"la orden de no iniciar obras hasta tanto se cuente con mayor información era una medida apta y proporcional en tanto el proyecto del Centro Ambiental se encontraba en etapa de evaluación"*. La Sentencia N° 15 (COD 160) también refleja esta tendencia al enfatizar la necesidad de garantizar la participación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones que afecten su entorno, destacando que *"el amparo colectivo ambiental interpuesto por la Comunidad Aborigen busca asegurar la protección del hábitat y el ambiente que ocupa tradicionalmente la comunidad"*.

PATRÓN INDENTIFICADO: Interconexión con la protección ambiental: Se integra la protección ambiental con los derechos indígenas, garantizando la participación de las comunidades en decisiones que afectan sus territorios.

3. Sentencias relacionadas con desalojos y derechos de propiedad.

En las sentencias analizadas, se observa una consistencia en la aplicación de principios constitucionales relacionados con el derecho de propiedad, así como en la jurisprudencia que regula los procedimientos de desalojo y las reclamaciones de posesión.

En la Sentencia N° 10 (COD 279), el tribunal se enfoca en la aplicación de la Ley 26.160, destacando que *"el lanzamiento es inoponible a la comunidad indígena por no haber tenido participación en la causa"* y reafirma la protección de la comunidad en situaciones de desalojo, considerando que la sentencia no afecta los derechos colectivos de la comunidad. La Sentencia N° 12 (COD 247) también sigue este patrón, donde se evalúa la participación de las comunidades aborígenes en conflictos de desalojo, subrayando la importancia del beneficio de litigar sin gastos y asegurando el acceso a la justicia para las comunidades indígenas, como lo establece el tribunal: *"el beneficio de litigar sin gastos encuentra su fundamento en la garantía de defensa en juicio, pero también en la igualdad ante la ley"*. En la Sentencia N° 22 (COD 536), se reitera la importancia de la extensión de los efectos de la sentencia a terceros ajenos al proceso, donde el tribunal afirma que *"la sentencia es inoponible a la Comunidad Aborigen por no haber tenido participación en la causa"*.

En cuanto a las tendencias observadas en estas sentencias, se detecta un aumento en la protección de los derechos de las comunidades indígenas en contextos de desalojo. En la Sentencia N° 10 (COD 279), se enfatiza la necesidad de garantizar que los procedimientos de desalojo no vulneren los derechos de las comunidades aborígenes protegidos por la Ley 26.160, la cual se ha prorrogado para evitar el desalojo de tierras ocupadas tradicionalmente por estas comunidades. La Sentencia N° 12 (COD 247) refleja una predisposición hacia el uso del beneficio de litigar sin gastos como una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la justicia de las comunidades indígenas en disputas de desalojo. Finalmente, la Sentencia N° 22 (COD 536) refuerza esta directriz al señalar la inoponibilidad de sentencias a comunidades que no participaron en el proceso judicial, subrayando la importancia de la participación de las comunidades en estos procedimientos para proteger sus derechos territoriales y de posesión.

PATRÓN IDENTIFICADO: Las sentencias aseguran la protección de la posesión comunitaria en desalojos, facilitando el acceso a la justicia para las comunidades indígenas.

4. Sentencias relacionadas con competencia judicial y procedimientos.

En las tres sentencias, se observa una consistencia en la aplicación de principios constitucionales y en la jurisprudencia que regula los conflictos de competencia y la aplicación correcta de procedimientos legales.

En la Sentencia N° 8 (COD 17), el tribunal aborda un conflicto negativo de competencia entre distintos órganos judiciales y declara competente a la Cámara en lo Civil y Comercial, aplicando

el artículo 287 del Código Procesal Civil, que determina la competencia residual de los tribunales. Este razonamiento se repite en la Sentencia N° 4 (COD 330), donde se ratifica la decisión de levantar una medida cautelar debido a la falta de promoción del proceso principal, destacando que el sucesorio no podía ser considerado el juicio principal, ya que los actores involucrados en la medida cautelar no eran parte en ese juicio. Finalmente, en la Sentencia N° 5 (COD 226), el tribunal revoca una decisión que excluía al Estado Nacional de una demanda por prescripción adquisitiva presentada por una comunidad aborigen, argumentando que el Estado debe ser parte debido a su responsabilidad en el reconocimiento y respeto de los derechos indígenas establecidos en el Artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y la Ley N° 23.302.

En cuanto a las tendencias, estas sentencias reflejan un aumento en la defensa de los derechos procesales de las comunidades indígenas en conflictos relacionados con la competencia judicial y la aplicación de procedimientos. En la Sentencia N° 8 (COD 17), se observa una predisposición hacia la garantía de la competencia adecuada para tratar temas relacionados con la propiedad comunitaria, enfatizando que los tribunales deben considerar la naturaleza de los derechos en juego al determinar su competencia. En la Sentencia N° 4 (COD 330), se detecta una tendencia hacia la protección de la seguridad jurídica, al mantener que las medidas cautelares deben estar adecuadamente fundamentadas y vinculadas a un proceso principal, asegurando que los procedimientos no sean arbitrarios. Finalmente, en la Sentencia N° 5 (COD 226), se reafirma la necesidad de integrar al Estado en los litigios que involucren derechos indígenas, lo que refleja una tendencia hacia la ampliación de la participación de actores clave en los procesos judiciales que afectan derechos colectivos.

PATRÓN INDENTIFICADO: Acceso a la justicia en desalojos: Las sentencias aseguran la protección de la posesión comunitaria en desalojos, facilitando el acceso a la justicia para las comunidades indígenas.

5. Sentencias relacionadas con rechazo de recursos y amparos.

En las sentencias analizadas, se observa una consistencia en la aplicación de principios constitucionales relacionados con el acceso a la justicia y la protección de derechos fundamentales, así como en la jurisprudencia que regula la admisibilidad de recursos y amparos.

En la Sentencia N° 3 (COD 111), el tribunal rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Comunidad Aborigen, argumentando que *"el derecho de las comunidades indígenas debe ser abordado por todos los operadores judiciales"*, en este caso no fue articulada correctamente

dentro de los plazos procesales, lo que llevó a su inadmisibilidad. En la Sentencia N° 9 (COD 30), se denegó la concesión de un recurso extraordinario federal debido a la falta de configuración de un supuesto de arbitrariedad, afirmando que *"los argumentos del recurrente no logran evidenciar que estemos en presencia de un caso federal según la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación"*. La Sentencia N° 14 (COD 135) también siguió esta línea, donde se rechazó un recurso de inconstitucionalidad en un amparo precautorio, argumentando que no se cumplían los requisitos de procedencia del amparo ni se demostraba un peligro irreparable, lo que llevó a la desestimación de la solicitud.

En cuanto a las tendencias observadas en estas sentencias, se detecta una tendencia hacia la estricta evaluación de los requisitos procesales para la admisión de recursos y amparos. En la Sentencia N° 3 (COD 111), se enfatiza la importancia de articular correctamente las cuestiones indígenas dentro de los plazos y formas legales, reflejando una predisposición hacia la formalidad procesal en la protección de derechos. La Sentencia N° 9 (COD 30) también refleja esta predisposición, al establecer que los recursos extraordinarios deben estar bien fundamentados y no pueden basarse únicamente en discrepancias con decisiones anteriores del tribunal. Finalmente, en la Sentencia N° 14 (COD 135), se reafirma la necesidad de cumplir con los criterios pretorianos establecidos para la procedencia de amparos, destacando que el tribunal sigue una línea estricta en la evaluación de la evidencia y los requisitos legales para la concesión de medidas precautorias.

PATRON INDENTIFICADO: Seguridad jurídica y debido proceso: Se enfatiza la seguridad jurídica y el debido proceso en litigios colectivos, con un enfoque en la correcta aplicación de procedimientos. Se observa un rigor en la evaluación de recursos y amparos, exigiendo el cumplimiento de los requisitos procesales.

6. Sentencias relacionadas con la protección de propiedad privada.

En las sentencias analizadas, se observa una consistencia en la aplicación de principios constitucionales relacionados con la protección del derecho a la propiedad privada y en la jurisprudencia que protege estos derechos frente a reclamaciones no probadas. En la Sentencia N° 1 (COD 6), el tribunal reafirma la importancia del derecho a la propiedad privada al rechazar un planteo extemporáneo de la Comunidad Aborigen, subrayando que *" La falta de pruebas presentadas por la comunidad es insuficiente para justificar su demanda de posesión sobre la tierra en disputa"*. La Sentencia N° 16 (COD 40), se protege el derecho a la propiedad privada

frente a una reclamación comunitaria, destacando que *"la comunidad no ha presentado pruebas suficientes para justificar su demanda de posesión sobre la tierra en disputa"*.

En la Sentencia N° 17 (COD 167), el tribunal resolvió que el trámite de la prescripción adquisitiva es el adecuado para la acción interpuesta, destacando que *"el derecho invocado por la actora no ha sido reglamentado, por lo que el trámite elegido es razonable"*. La Sentencia N° 18 (COD 74), el tribunal rechazó la intervención de una comunidad indígena en un proceso de desalojo, afirmando que *"no se ha demostrado la existencia de un derecho preferente sobre la propiedad en disputa".* La Sentencia N° 20 (COD 67), se mantuvo la protección de la propiedad privada frente a reclamaciones de posesión comunitaria, concluyendo que *"la comunidad no logró acreditar la posesión efectiva y continua de la tierra en cuestión"*.

En la Sentencia N° 11 (COD 152), el tribunal denegó el recurso extraordinario federal presentado por la Comunidad Aborigen Las Capillas, resaltando que *"el fallo en crisis no aplica ni efectiviza las leyes 26.160 y otras que son de orden público"*. En la Sentencia N° 21 (COD 1127), el tribunal rechazó la intervención de la Comunidad Indígena en un proceso de desalojo, afirmando que *"no existe interés legítimo que justifique la intervención pretendida por la comunidad"*.

En cuanto a las tendencias, se detecta una línea hacia la protección estricta de la propiedad privada en contextos donde no se cumplen con los requisitos procesales por parte de las comunidades indígenas. En la Sentencia N° 16 (COD 40), el tribunal refuerza el valor de las pruebas y el respeto por los derechos de los propietarios, enfatizando la importancia de cumplir con las formalidades legales.

En la Sentencia N° 18 (COD 74), se refuerza la tendencia hacia la protección de los derechos de los propietarios frente a reclamaciones no fundamentadas, destacando que *"el derecho de propiedad privada no puede ser afectado sin pruebas claras y contundentes".* En la Sentencia N° 11 (COD 152), se observa que el tribunal prioriza el respeto a las leyes de orden público al denegar la intervención de la comunidad, reforzando así la aplicación estricta de la normativa vigente. En la Sentencia N° 21 (COD 1127), se subraya la necesidad de que las comunidades indígenas presenten un interés legítimo y bien fundamentado para intervenir en procesos legales relacionados con la propiedad.

PATRON IDENTIFICADO: Protección de la propiedad privada: Las sentencias protegen los derechos de propiedad privada frente a reclamaciones comunitarias, asegurando la formalidad y seguridad jurídica en estos conflictos.

Se analizan y se identifican los temas centrales que reflejan los enfoques predominantes en las decisiones judiciales dentro del contexto analizado.

- **Protección de los derechos territoriales y ambientales de las comunidades indígenas.**

Las decisiones judiciales en este ámbito evidencian una tendencia consistente hacia la protección de los derechos territoriales de las comunidades indígenas, en estrecha relación con la protección ambiental. Las sentencias analizadas muestran una aplicación robusta de normativas tanto constitucionales como internacionales, tales como el Convenio 169 de la OIT y el Artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional. Estas normativas no solo refuerzan la defensa de la propiedad comunitaria, sino que también aseguran la participación de las comunidades indígenas en la gestión de sus tierras y recursos naturales. La interconexión entre los derechos territoriales y ambientales subraya la relevancia de un enfoque holístico en la protección de estos derechos, reconociendo el vínculo intrínseco entre la tierra y el bienestar de las comunidades.

- **Acceso a la justicia y garantía de la seguridad jurídica.**

Las sentencias garantizan un acceso efectivo a la justicia para las comunidades indígenas, especialmente en el contexto de los procedimientos de desalojo, subrayan la importancia de la seguridad jurídica y el debido proceso en litigios colectivos, asegurando la correcta aplicación de los procedimientos legales. Además, se destaca la intervención del Estado como garante de los derechos colectivos, lo que refuerza la protección de las comunidades en estos contextos. Esta tendencia hacia la protección de los derechos procesales y la intervención estatal refleja un compromiso con la justicia y la equidad en la aplicación del derecho.

- **Formalidad procesal y protección de la propiedad privada.**

Se observa una insistencia en la formalidad procesal, reflejada en la rigurosa evaluación de los requisitos legales para la admisión de recursos y amparos. Las decisiones judiciales también protegen de manera consistente el derecho a la propiedad privada frente a reclamaciones comunitarias que no cumplen con los estándares probatorios requeridos. La seguridad jurídica emerge como un elemento central en la resolución de conflictos de propiedad, reforzando la necesidad de un enfoque formal y estructurado en los procedimientos legales. Esta tendencia subraya la importancia de mantener un equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la observancia de las normas procesales.

Por último, se presentan los resultados del análisis sobre la identificación de precedentes y cambios jurisprudenciales en las sentencias judiciales.

Estos resultados se visualizan de forma organizada en la Tabla 2, incluyendo únicamente las sentencias que responden a esta categorización.

Tabla 2. Identificación de precedentes y cambios jurisprudenciales.

Sentencia	Identificación de precedentes	Cambios jurisprudenciales
Sentencia 5	Se refleja una adaptación del tratamiento de notificaciones al Estado en litigios, concordando con normativas anteriores sobre la exclusión del Estado en ciertos procesos, pero ajustándose a los nuevos principios de derecho procesal y administrativo bajo el nuevo código.	Refuerza y posiblemente extiende la jurisprudencia sobre la participación estatal en litigios, adaptándose al nuevo contexto legal que el Código Civil y Comercial de 2015 establece sobre la responsabilidad y roles del Estado en procesos judiciales.
Sentencia 6	Las decisiones siguen precedentes sobre la necesidad de evidencia clara y directa en casos de usucapión, siendo coherente con la jurisprudencia preexistente tanto bajo el viejo como el nuevo código en cuanto a los requisitos de prueba.	No introduce cambios jurisprudenciales significativos, pero confirma la alta barrera de prueba para la usucapión, incluso bajo el nuevo código que busca clarificar y consolidar los derechos sobre la propiedad.
Sentencia 12	Alineada con precedentes sobre el beneficio de litigar sin gastos, destacando la necesidad de juicio judicial sobre la suficiencia de recursos del solicitante, un principio bien establecido en jurisprudencia anterior	Se continua con la interpretación del beneficio de litigar sin gastos bajo el nuevo código, que busca garantizar el acceso a la justicia de manera más efectiva.
Sentencia 16	La continuidad de la jurisprudencia sobre derechos indígenas y medidas cautelares, donde el nuevo código refuerza la protección de los derechos sobre la propiedad comunitaria.	Fortalece y posiblemente expande la interpretación de medidas cautelares en contextos de derechos indígenas y medioambientales, adaptándose al nuevo código que proporciona un marco más robusto para la protección de dichos derechos.
Sentencia 22	Reconoce y aplica los principios del nuevo código respecto a los derechos comunitarios indígenas a la propiedad, siguiendo y potencialmente ampliando precedentes sobre la interpretación de estos derechos en un marco legal más moderno.	Contribuye a un cambio jurisprudencial significativo al interpretar los derechos de propiedad comunitaria bajo el nuevo código, ofreciendo una base más sólida para futuras decisiones y posiblemente un desvío hacia una interpretación más inclusiva y protectora de los derechos indígenas.

Capítulo VI. Las Voces comunitarias.

El presente capítulo profundiza en las dinámicas de poder y resistencia que enfrentan las comunidades indígenas en su interacción con el sistema jurídico y las estructuras sociales dominantes. A partir del análisis, se examina cómo estas comunidades gestionan, desafían y resisten las imposiciones hegemónicas mediante la movilización de sus recursos culturales y simbólicos, con el objetivo de salvaguardar su identidad colectiva y su relación con el territorio. En este contexto, el derecho formal se aborda no únicamente como un conjunto de normas aparentemente neutrales, sino como un instrumento que perpetúa desigualdades estructurales al imponer un conocimiento legítimo que excluye otras formas de saber.

Desde esta óptica, la territorialidad adquiere una dimensión que trasciende lo estrictamente físico, configurándose como un espacio con significados culturales y simbólicos fundamentales para las comunidades indígenas. El territorio se erige como un ámbito de disputa donde confluyen las demandas por el reconocimiento de derechos ancestrales y los conflictos con estructuras estatales y privadas que buscan imponer sus intereses. Este escenario configura una lucha territorial entendida como una forma de resistencia activa, a través de la cual las comunidades defienden sus prácticas tradicionales y conocimientos frente al discurso jurídico que deslegitima sus modos locales de entender y gestionar el territorio.

El análisis de las narrativas revela cómo las comunidades adaptan sus estrategias organizativas y jurídicas, mostrando una capacidad significativa de resistencia y negociación. Asimismo, se pone de manifiesto cómo reconfiguran sus relaciones con el territorio, generando alternativas que desafían las dinámicas de poder que pretenden subordinarlas.

La interacción entre las prácticas sociales y las normativas legales se presenta como un proceso dinámico y bidireccional, donde las comunidades no solo redefinen su identidad y sus estrategias de defensa, sino que también producen conocimientos y construyen nuevas formas de enfrentar los conflictos. Este proceso, lejos de ser meramente reactivo, se constituye como un espacio de creatividad social, donde las comunidades movilizan sus experiencias y saberes para cuestionar y transformar el modelo jurídico dominante.

Este capítulo ofrece un análisis integral que conecta las reflexiones teóricas desarrolladas en capítulos previos con la realidad empírica de las comunidades indígenas, permitiendo un abordaje crítico de las tensiones entre las prácticas sociales y las estructuras jurídicas en la lucha por los derechos territoriales. Las experiencias recogidas evidencian no solo las estrategias de resistencia

implementadas por las comunidades, sino también los desafíos que estas enfrentan al adaptarse a las transformaciones sociales y proyectar sus reivindicaciones hacia el futuro.

De manera preliminar, se presenta el diseño de la entrevista con sus respectivas categorías (véase Apéndice B), así como el consentimiento informado utilizado en el estudio (véase Apéndice C).

A continuación, se expone el análisis de las entrevistas realizadas (véase Apéndice D), organizadas según las categorías de análisis y los temas relacionados con cada una de ellas, destacando las prácticas y los problemas detectados por las comunidades.

1. Cultura y territorio,
2. Significado y relación con la tierra,
3. Percepción y conocimiento de las sentencias judiciales,
4. Adaptaciones, cambio y perspectivas a futuro.

Tabla 3. Categorías de análisis y la relación con las prácticas y problemáticas de las comunidades.

		Categorías			
		Cultura y territorio.	Significado y relación con la tierra (o territorio)	Percepción y conocimiento de las sentencias judiciales.	Adaptaciones, cambio y perspectivas a futuro.
Prácticas y Problemáticas	Entrevista 1	Cohesión comunitaria. Actividades económicas. Ceremonias tradicionales. Relaciones intercomunitarias.	Pachamama. Identidad cultural. Sustento económico y espiritual. Supervivencia.	Conflictos. Derechos colectivos. Desconfianza judicial. Injusticia percibida.	Estrategias legales. Organización Comunitaria. Defensa de derechos. Preparación futura.
	Entrevista 2	Actividades económicas. Celebraciones espirituales. Vínculos comunitarios. Turismo.	Pachamama, Sustento natural, Cuidadores de la tierra, Preservación intergeneracional.	Conflictos de desalojo. Injusticia judicial. Influencia política. Derechos comunitarios.	Lucha por derechos. Estrategias de defensa. Resistencia comunitaria. Optimismo resiliente.
	Entrevista 3	Turismo. Artesanía. Asambleas comunitarias. Ceremonias espirituales	Energía y paz. Sentido de pertenencia. Cuidadores de la tierra. Conexión espiritual	Conflictos con terratenientes. Desigualdad de poder. Injusticia judicial. Indiferencia legal	Resiliencia comunitaria. Preparación y capacitación. Búsqueda de estrategias. Esperanza y resistencia

	Entrevista 4	Agricultura. Construcción. Artesanías. Turismo. Ceremonias tradicionales (Inti Raymi)	Vínculo emocional. Enseñanzas de mayores. Resolución de conflictos. Sabiduría comunitaria	Conflictos con terratenientes, Disputas de propiedad. Juicios ganados y perdidos. Restricciones en servicios básicos.	Restricciones de construcción. Trabajo con abogados. Búsqueda de soluciones, Resiliencia y lucha comunitaria.
	Entrevista 5	Agricultura. Artesanía. Turismo. Economía comunitaria	Cuidado de la tierra. Energía vital. Sustento. Respeto	Conflictos de tierras, Intervención policial. Disputas de propiedad. Reforma legal necesaria	Diálogo en conflictos. Restricciones en servicios básicos. Liderazgo joven. Resolución comunitaria
	Entrevista 6	Agricultura, Construcción, Turismo, Ceremonias espirituales. Carnaval	Figura maternal, Sanadora, Bienestar psicológico, Sitios arqueológicos. Cuidado del espacio	Conflictos con terratenientes, Medidas cautelares. Restricciones de construcción. Justicia sesgada, Falta de servicios básicos	Resiliencia comunitaria. Defensa del territorio. Unidad y colaboración. Estrategias legales. Persistencia en tradiciones
	Entrevista 7	Agricultura. Turismo. Trabajo informal. Celebraciones tradicionales	Conexión espiritual. Fuente de vida y energía, Espacio vital. Prácticas espirituales	Conflictos por la propiedad. Restricciones de recursos básicos. Crítica a la justicia, Derechos indígenas desatendidos.	Resiliencia comunitaria. Defensa del territorio. Organización y gestión comunitaria. Esperanza en la fortaleza colectiva.
	Entrevista 8	Artesanía. Agricultura. Turismo. Ceremonias andinas. Gestión comunitaria	Conexión personal y colectiva. Espacio sagrado. Raíces ancestrales. Identidad cultural	Conflictos de tierras. Derechos de tenencia. Frustración con la justicia. Falta de reconocimiento de derechos colectivos.	Fortalecimiento comunitario. Gestión de conflictos. Defensa territorial. Búsqueda de justicia
	Entrevista 9	Actividades económicas. Asambleas comunitarias. Celebraciones espirituales, vínculos comunitarios. Turismo	Cuidado de la tierra. Energía vital. Sustento. Respeto	Conflictos de tierras. Conflictos de tierras. Intervención policial. Derechos de tenencia.	Fortalecimiento comunitario. Defensa territorial. Resistencia.
	Entrevista 10	Artesanía, Agricultura. Turismo. Ceremonias andinas. Gestión comunitaria	Conexión personal y colectiva. Espacio sagrado. Raíces ancestrales. Identidad cultural.	Derechos de tenencia. Sentimientos de injusticia. Reconocimiento de derechos colectivos.	Fortalecimiento comunitario. Defensa territorial.

Análisis de la Tabla 3.

1) Cultura y territorio.

El análisis revela la importancia central del territorio para las comunidades indígenas de Jujuy. Las voces reflejan una concepción del territorio que trasciende la materialidad para convertirse en un componente clave de la identidad cultural, espiritual y social. Esta visión, narrada por los miembros de las comunidades, desafía la lógica jurídica y económica predominante en los marcos legales contemporáneos y ofrece una alternativa desde la experiencia indígena.

Es posible interpretar estas narrativas como un conocimiento subalterno que ha sido históricamente marginado por la hegemonía del conocimiento occidental. Para las comunidades indígenas, el territorio no es un bien económico, sino un ser vivo con el que se establece una relación de reciprocidad y cuidado mutuo, necesaria para preservar la vida comunitaria y espiritual. Esta visión contrasta con las lógicas extractivistas que ven la tierra como un recurso explotable, demostrando la necesidad de reconocer otras formas de entender la naturaleza y la propiedad.

Una de las entrevistas (Nro. 6) resume esta concepción: "*El territorio en mi caso significa todo, todo para mí.... Lo considero, todo el territorio, como mi madre y también es curativo para mí.... Es un espacio tan importante que lo conservamos y lo cuidamos día a día*". Esta narración muestra que la tierra se concibe como una entidad protectora y dadora de vida que no sólo sustenta materialmente a la comunidad, sino que también la alimenta espiritualmente. En este contexto, la noción de curación está vinculada a la integridad espiritual de la comunidad y a su equilibrio con el medio ambiente, lo que desafía las concepciones reduccionistas que separan lo material de lo espiritual.

Asimismo, la importancia de una conexión espiritual constante con el territorio se manifiesta en otro de los relatos de entrevista (Nro. 2): *"Nos conectamos espiritualmente, amamos la madre tierra porque es nuestra madre mayor. Nos conectamos todos los días porque vivimos en ese lugar, no hay forma de vivir desconectados"*. Esta expresión refleja una relación cotidiana con el territorio, donde cada interacción reafirma la identidad comunitaria. Se reconocen en estas prácticas cotidianas formas de resistencia cultural que cuestionan el impuesto por las estructuras coloniales y capitalistas, según las cuales solo el conocimiento científico tiene legitimidad.

Por otro lado, el territorio no solo se entiende como un espacio de vida presente, sino también como un legado ancestral y colectivo. Otro de los comuneros (Nro. 7) subraya: *"El territorio es de las 300 familias que vivimos ahí... No se comparte... El significado de comunidad siempre estuvo en nuestros ancestros, es significado de pertenencia a la tierra, cuidamos la madre naturaleza para las futuras generaciones"*. Esta afirmación dejar ver una concepción del territorio como un patrimonio inalienable, transmitido de generación en generación, y destinado a ser preservado para quienes vendrán. Esta visión refleja una sociología de las ausencias, al evidenciar que estas formas de propiedad comunal han sido invisibilizadas por los sistemas jurídicos hegemónicos, que priorizan la propiedad privada como norma universal.

La narrativa del Entrevistado (Nro. 1) introduce una dimensión cósmica del territorio, al señalar: *"Nuestro territorio incluye no solo la tierra, sino también el subsuelo, el aire, todo el cosmos... En nuestro territorio están nuestros ancestros y nuestros apus (espíritus), con los que mantenemos una relación constante en todos los aspectos de nuestra vida"*. Este testimonio expone una comprensión integral del territorio que trasciende las categorías convencionales del derecho, al incluir tanto lo visible como lo espiritual. Esta visión contrasta con la fragmentación impuesta por la modernidad occidental, que separa lo material de lo inmaterial, lo tangible de lo simbólico. Esta narrativa representa una ecología de saberes que permite la coexistencia de múltiples formas de conocimiento sin jerarquías (Sousa Santos, 2014).

Otro aspecto central en las narrativas es la interdependencia entre la comunidad y el territorio. Una de las entrevistas (Nro. 10) manifiesta lo siguiente: *"Nuestra relación con el territorio es muy profunda. Uno se complementa con la tierra y la tierra con nosotros. Sin la tierra no somos nada y la tierra sin nosotros tampoco"*. Esta declaración sintetiza una relación de reciprocidad radical, donde la existencia de la comunidad depende de la tierra, y viceversa. Desde esta perspectiva de interdependencia se cuestionan las lógicas capitalistas que promueven la explotación de la naturaleza, proponiendo en su lugar un modelo de convivencia basado en el respeto y el equilibrio.

Esto demuestra cómo las comunidades indígenas de Jujuy, al reivindicar su relación con el territorio, resisten las imposiciones de los marcos normativos tradicionales y proponen alternativas viables para construir una sociedad más justa y sostenible. El territorio, tal como lo conciben estas comunidades, no se reduce a un recurso explotable, sino que es un espacio de vida y espiritualidad, donde la identidad comunitaria se reafirma día a día. Esta visión desafía el modelo hegemónico de desarrollo y ofrece una crítica profunda al capitalismo global, invitando a repensar las nociones de propiedad, bienestar y progreso.

Así mismo las voces revelan cómo las comunidades indígenas de Jujuy conciben el territorio como un sujeto de derechos, cuya existencia es esencial para preservar la identidad cultural y espiritual de la comunidad. Esta concepción del territorio, al integrarse en un marco más amplio de reciprocidad y espiritualidad, ofrece una crítica profunda a las lógicas extractivistas y mercantilistas que predominan en los sistemas legales contemporáneos. El reconocimiento de estas visiones exige un cambio epistemológico y normativo que permita la coexistencia de múltiples formas de habitar y entender el mundo. Desde esta perspectiva, las comunidades indígenas no solo reivindican su derecho a la tierra, sino que también proponen un modelo alternativo de justicia social y ecológica, donde la tierra y la comunidad se complementan y sostienen mutuamente.

2) Significado o relación con la tierra.

El análisis del significado y la relación con la tierra en las comunidades indígenas nos revela una concepción del territorio que trasciende la materialidad y se constituye como un eje ontológico de la existencia comunitaria. Para estas comunidades, la tierra no es simplemente un espacio físico donde se desarrollan las actividades cotidianas, sino un ser vivo, espiritual y relacional, que organiza la identidad, la cultura y la espiritualidad de sus habitantes.

Esta forma de entender la tierra se distancia de las nociones hegemónicas impuestas por la modernidad occidental, las cuales han promovido la fragmentación y la mercantilización de la naturaleza. La relación con la tierra en estas comunidades es una forma alternativa de conocimiento y existencia, una forma de resistencia activa frente al monocultivo del saber que ha prevalecido en los sistemas normativos, jurídicos y económicos contemporáneos.

Los testimonios recopilados entienden la tierra como un sujeto relacional, con el cual la comunidad establece vínculos de reciprocidad y respeto. En la entrevista (Nro. 8) se expresa claramente esta perspectiva al afirmar: "*Nuestra relación con la tierra es de reciprocidad... No es solo tierra, es nuestra fuente de vida y espiritualidad, y por eso la cuidamos".* Esta declaración refleja que el vínculo con la tierra no es un mero acto práctico, sino una interacción profunda y constante, donde la comunidad cuida la tierra porque de ella recibe sustento material y espiritual.

En esta relación, la tierra no es simplemente un medio de producción, sino una fuente de vida en términos amplios, un espacio donde convergen la espiritualidad, la cultura y la cotidianidad.

El cuidado del territorio implica una reciprocidad activa, en la que cada acto de extracción o uso de los recursos debe ir acompañado de agradecimiento y responsabilidad. Esta visión difiere

radicalmente de las prácticas extractivistas impuestas por los sistemas económicos hegemónicos, que tienden a ver la naturaleza como una fuente ilimitada de recursos destinada exclusivamente al consumo humano. En contraste, la relación con la tierra en estas comunidades se organiza en torno a un principio ético que reconoce la agencia de la tierra como un ser vivo. La figura de la Pachamama, mencionada por los comuneros encarna y refuerza la idea de que la tierra es una entidad sagrada que debe ser cuidada y honrada para mantener el equilibrio.

Esta visión representa una resistencia epistémica frente a las estructuras normativas y económicas de la modernidad. La racionalidad hegemónica occidental ha promovido la fragmentación de la naturaleza, separando lo humano de lo no humano y reduciendo la tierra a un objeto de propiedad y explotación. Sin embargo, las comunidades indígenas de Jujuy ofrecen una concepción alternativa, en la que la tierra y la comunidad se definen mutuamente en un proceso continuo de interacción y cohabitación. Este enfoque se alinea con la noción de ecología de saberes, que sugiere la necesidad de reconocer y valorar diferentes formas de conocimiento sin subordinarse a un único marco epistémico dominante.

La tierra, en este contexto, también actúa como un vínculo intergeneracional. En la entrevista (Nro. 3) se manifiesta claramente esto: "*La tierra es nuestra identidad, sin ella no somos nada... Es donde nacimos, donde vivimos y donde queremos que nuestros hijos sigan viviendo*". Esta declaración refleja que el territorio no solo es un espacio donde habitan los miembros presentes de la comunidad, sino un legado que conecta el pasado, el presente y el futuro. Cada generación tiene la responsabilidad de preservar la tierra para garantizar su continuidad, asegurando que las futuras generaciones puedan mantener su vínculo con ella y con los conocimientos ancestrales que en ella se sostienen. Esta perspectiva también desafía las lógicas de desarrollo hegemónicas, que priorizan el corto plazo y la explotación intensiva de los recursos sin considerar sus consecuencias para las generaciones futuras.

Asimismo, la relación con la tierra no puede entenderse como un simple acto cultural o simbólico; implica una forma ontológica de existencia, en la que la comunidad y la tierra se co-construyen mutuamente. Como señala uno de los entrevistados (Nro. 9), "*nosotros somos parte integral de nuestro territorio, no podemos existir sin él... Todo lo que hacemos está ligado a la tierra, desde nuestras ceremonias hasta nuestra forma de vivir"*. Esta afirmación pone de manifiesto que la tierra es el marco que organiza cada aspecto de la vida comunitaria, desde las prácticas cotidianas hasta los rituales y ceremonias más significativos. Esta concepción también rompe con la idea

occidental de la separación entre cultura y naturaleza, al establecer una unidad indisoluble entre lo humano y lo no humano.

Desde esta perspectiva, la tierra no es solo el lugar donde se desarrollan las actividades económicas y sociales, sino un espacio sagrado y espiritual que sostiene la identidad de la comunidad. Cada lugar dentro del territorio tiene un significado especial: "*La tierra es parte de nuestra vida, es sagrada para nosotros, y cada lugar tiene su significado especial"*. Entrevista (Nro. 4). Este testimonio refleja que cada rincón del territorio tiene un valor emocional y espiritual, lo que convierte a la tierra en un componente irremplazable de la memoria colectiva y la identidad comunitaria. Esta visión implica que la pérdida del territorio no solo tendría consecuencias materiales, sino también una pérdida de identidad y de conexión espiritual.

La forma de relación con la tierra constituye una resistencia activa, ya que las comunidades indígenas no sólo protegen su territorio como un recurso material, sino como un espacio vital y espiritual que garantiza su existencia y continuidad. La preservación del territorio es, por tanto, un acto de reafirmación identitaria y una forma de resistencia frente a las presiones externas que buscan transformar la tierra en un objeto de consumo. En este sentido, sugieren la necesidad de un diálogo intercultural, donde los marcos normativos y epistemológicos contemporáneos puedan integrar estas formas alternativas de conocimiento y convivencia.

La categoría de análisis; significado y la relación con la tierra, trasciende las categorías normativas impuestas por la modernidad. Esta relación se basa en principios de reciprocidad, cuidado y gratitud, que no solo sostienen el bienestar material de la comunidad, sino también su identidad, espiritualidad y continuidad intergeneracional. Desde las narrativas se representa un conocimiento del otro, que ofrece alternativas viables para construir un futuro más justo y sostenible, donde la tierra no sea un recurso que explotar, sino un compañero vital en la existencia compartida entre los seres humanos y la naturaleza.

3) Percepción y conocimiento de las sentencias judiciales.

El análisis de la percepción y conocimiento que las comunidades indígenas de estas regiones de la provincia tienen sobre las sentencias judiciales en conflictos territoriales expone la brecha significativa entre el sistema judicial y las expectativas comunitarias. Las decisiones judiciales se perciben con desconfianza y frustración, reflejando una estructura normativa y procesal que no responde a las necesidades ni valores de las comunidades indígenas. Este distanciamiento entre la

justicia formal y las realidades comunitarias se interpreta como una forma de injusticia cognitiva, donde los saberes y modos de vida indígenas son sistemáticamente marginados por un sistema legal que impone un conocimiento único y hegemónico.

Uno de los aspectos más destacados en los testimonios es la desconfianza hacia el sistema judicial, se refleja en el relato (Ent. Nro.2): "*Nosotros sabemos que la justicia no está de nuestro lado, porque las leyes no nos entienden ni respetan nuestras formas de vida. Por eso, las sentencias no las sentimos justas"*. Este testimonio proyecta una percepción arraigada de que la justicia no es imparcial ni accesible para las comunidades indígenas, ya que las normas legales no contemplan sus realidades culturales. La exclusión refleja la imposición de un monocultivo del conocimiento, que privilegia el derecho formal y desconoce la pluralidad de saberes existentes en las comunidades.

El lenguaje técnico y especializado de las sentencias constituye otro obstáculo significativo. La declaración de uno de los entrevistados (Nro. 5) afirma: "*Entendemos poco de las sentencias porque todo es muy técnico, pero sabemos que no están a favor de nosotros. Sentimos que no se escucha lo que queremos decir",* pone de manifiesto cómo la complejidad del lenguaje jurídico genera una barrera de acceso al conocimiento, haciendo que las comunidades se sientan excluidas del proceso judicial. Esta situación evidencia lo que Sousa Santos (2002) describe como violencia epistemológica, es decir, la imposición de un conocimiento formal que silencia y subordina otras formas de entender y resolver los conflictos.

La incomprensión del lenguaje jurídico también genera una sensación de incertidumbre y vulnerabilidad: *"Las sentencias hablan de leyes y artículos que no entendemos. Solo nos queda esperar que no nos saquen de nuestras tierras, pero no sabemos si eso se puede lograr por vía judicial"* (Ent. Nro. 7) Este testimonio evidencia que, al no comprender las sentencias, las comunidades quedan en situaciones de indefensión, enfrentándose a la posibilidad de perder sus territorios sin poder intervenir eficazmente en los procesos legales. Se pone de relieve la necesidad de una traducción intercultural entre el derecho formal y los saberes comunitarios, de modo que se garantice una participación efectiva de las comunidades en los procesos judiciales.

Otro elemento relevante en los testimonios es la frustración por la falta de aplicación práctica de los derechos reconocidos constitucionalmente. Uno de los comuneros (Nro. 10) manifiesta esta frustración al señalar: "*Hemos tenido más de 10 juicios con terratenientes y hoteleros... Aunque en 1994 se reconoció nuestro derecho al territorio en la Constitución, este derecho no se aplica en la práctica"*. Su testimonio refleja la brecha entre el reconocimiento legal y la implementación

efectiva de los derechos. A pesar de los avances normativos, las comunidades perciben que sus derechos siguen siendo vulnerados debido a la resistencia del sistema judicial y a los intereses económicos en juego.

Incluso en los casos donde las sentencias han sido favorables, la desconfianza hacia el sistema judicial persiste: *"En algunos conflictos sí han salido sentencias favorables y en otras desfavorables... Y mi opinión es que con la sentencia actual... no se aplica lo que es derecho indígena"* (Ent. Nro. 3). Aunque se logren victorias puntuales, el sistema judicial sigue siendo percibido como una estructura ajena a las necesidades y valores de las comunidades. La falta de una cosmovisión consistente del derecho indígena refuerza la percepción de que la justicia es selectiva y responde más a los intereses de los sectores dominantes que a los derechos colectivos de las comunidades.

La desconfianza manifestada, refleja una injusticia estructural, donde las normas legales y los procedimientos judiciales no reconocen una diversidad epistémica, ni la pluralidad jurídica existente en las comunidades indígenas. Sousa Santos (2014) expone la necesidad de un pluralismo jurídico, que permita la convivencia de distintos sistemas normativos en un mismo espacio social, garantizando que los derechos y saberes indígenas sean igualmente reconocidos y aplicados. En este contexto, las comunidades de Jujuy exigen no solo el reconocimiento formal de sus derechos, sino su aplicación efectiva en los procesos judiciales, asegurando que sus territorios sean protegidos y que sus formas de vida sean respetadas.

La percepción de que el sistema judicial favorece a los sectores más poderosos también se refleja en los testimonios. Las comunidades consideran que las decisiones judiciales suelen responder a intereses económicos y políticos que amenazan sus territorios, como lo sugiere uno de los comuneros (Nro. 10) al mencionar los conflictos con terratenientes y hoteleros. Esta situación refuerza la sensación de exclusión y desamparo, dado que las comunidades perciben que sus derechos no son prioritarios para el sistema judicial. Es esta dinámica, la que refleja una asimetría estructural en el acceso a la justicia, donde las comunidades indígenas enfrentan barreras económicas, políticas y culturales que limitan su capacidad para defender sus territorios.

El análisis de la percepción y conocimiento de las sentencias judiciales relacionadas con conflictos territoriales muestra que las comunidades indígenas de Jujuy enfrentan obstáculos significativos en su acceso a la justicia. La complejidad del lenguaje jurídico, la falta de aplicación efectiva de sus derechos y la influencia de intereses externos refuerzan la percepción de que el sistema judicial no es un espacio de protección ni de justicia para las comunidades, lo que se pone de manifiesto

es la necesidad de repensar los marcos normativos y jurídicos, promoviendo un diálogo intercultural que integre los saberes y experiencias de las comunidades indígenas en los procesos judiciales.

4) Adaptaciones, cambio y perspectivas a futuro.

La evidencia obtenida a través de los testimonios confirma que las sentencias judiciales relacionadas con conflictos territoriales han generado transformaciones significativas en las comunidades indígenas de la provincia de Jujuy. Estas adaptaciones responden no solo a los desafíos legales a los que las comunidades se enfrentan, sino también a una voluntad activa de preservar su identidad, su territorio y sus derechos frente a un contexto jurídico adverso. Las decisiones judiciales, en lugar de ser simplemente acatadas, han impulsado cambios organizativos y estratégicos, demostrando la capacidad de las comunidades para resistir, reorganizarse y construir un camino hacia el futuro. Al mismo tiempo, existe una tensión entre la esperanza y la incertidumbre sobre el devenir de su lucha, lo que evidencia la complejidad de la situación en la que se encuentran. En consecuencia, estas adaptaciones pueden interpretarse como una expresión de agencia comunitaria, en la que los pueblos indígenas reconfiguran su organización y saberes para enfrentar un entorno jurídico y político que no siempre responde a sus necesidades y derechos.

Uno de los elementos más destacados es la reconfiguración interna de las comunidades como respuesta a las sentencias judiciales. Se enfatiza la importancia de fortalecer la organización interna, afirmando: "*Después de la sentencia, tuvimos que organizarnos mejor, asegurarnos de que todos en la comunidad sepan sus derechos y cómo defenderlos*" (Ent. Nro. 6). Este testimonio refleja cómo las sentencias han servido como un catalizador para el fortalecimiento de la cohesión comunitaria, orientando a sus miembros hacia la capacitación y difusión del conocimiento legal. Esta estrategia no solo busca responder a las decisiones judiciales presentes, sino también preparar a la comunidad para enfrentar futuros conflictos de manera más estructurada y eficiente. En este contexto, el conocimiento de los derechos se convierte en un recurso estratégico que fortalece la autonomía y la capacidad de negociación de las comunidades.

La reconfiguración interna, puede entenderse como una forma de resistencia proactiva, donde las comunidades no solo reaccionan a los desafíos externos, sino que construyen nuevas formas de ser y actuar en un contexto que las margina. Esta estrategia refleja la capacidad de las comunidades para articular saberes locales con conocimientos jurídicos modernos, integrando herramientas legales en sus prácticas cotidianas sin perder su identidad cultural. La organización interna no es

solo un medio para defenderse de amenazas externas, sino una vía para reforzar los lazos comunitarios y consolidar la identidad colectiva en un entorno cambiante.

Un aspecto crucial es el cambio en la forma de relacionarse con actores externos, como el gobierno y las empresas privadas. El Entrevistado (Nro. 4) explica: "*Nosotros tuvimos que cambiar nuestra forma de relacionarnos con el gobierno y las empresas. Ahora estamos más atentos a lo que pasa y tratamos de participar más en las decisiones que nos afectan*". Este testimonio refleja un cambio estratégico en la interacción con el Estado y los actores económicos, donde las comunidades han pasado de una actitud reactiva a una participación más activa y consciente en los procesos de toma de decisiones. Esta adaptación implica una conciencia creciente sobre la importancia de participar en los espacios públicos y políticos para influir en las decisiones que afectan directamente sus territorios y derechos.

Esta forma de interacción no es simplemente una adaptación táctica, sino una expresión de agencia política. Las comunidades han comprendido que su participación es fundamental para enfrentar los desafíos legales y políticos que se presentan en la defensa de sus territorios. La forma de participación también puede interpretarse como un acto de autonomía, donde las comunidades se posicionan como sujetos políticos capaces de dialogar, negociar y confrontar a los actores que amenazan su existencia. Esta gestión política no es solo una reacción a las sentencias judiciales, sino una forma de reconfigurar las relaciones de poder en un contexto de desigualdad estructural.

El aprendizaje continuo y la adaptación estratégica también emergen como elementos clave en la respuesta a las decisiones judiciales. Sobre la entrevista (Nro. 9) se subraya la importancia de estar preparados para enfrentar futuros desafíos: "*Las sentencias nos han enseñado que debemos estar preparados para cualquier cosa, y eso significa hacer cambios en nuestra organización y en cómo nos defendemos legalmente".* Esta declaración pone de manifiesto una estrategia de aprendizaje constante, donde cada conflicto y sentencia se convierte en una fuente de experiencia y conocimiento que permite mejorar la capacidad de respuesta de la comunidad. La capacidad de aprendizaje continuo refleja una sociología de las emergencias, en la que las comunidades desarrollan formas de saber y acción que emergen como alternativas a las estructuras hegemónicas.

El compromiso con la educación y la transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones también ocupa un lugar central en la estrategia de adaptación: *"Ahora estamos trabajando en proyectos para que nuestros hijos conozcan mejor sus derechos y la importancia de nuestra tierra, porque sabemos que los problemas no van a desaparecer"* (Ent. Nro. 2). La declaración manifiesta una preocupación intergeneracional, donde la educación se convierte en una herramienta

fundamental para asegurar que las futuras generaciones comprendan la importancia de sus derechos y territorios. Esta perspectiva se alinea con la idea de justicia intergeneracional, en la que las luchas presentes se orientan hacia la construcción de un futuro más justo para las generaciones venideras (Sousa Santos, 2014).

Finalmente, el futuro se presenta como un espacio de esperanza e incertidumbre para las comunidades indígenas de Jujuy. En los relatos se expresa esta ambivalencia al señalar: "*Nosotros vemos hacia el futuro con esperanza, pero también con preocupación. Sabemos que tenemos que seguir luchando para que nuestras tierras sean respetadas, pero no estamos seguros de cómo será el camino*" (Ent. Nro. 8). Se muestra la complejidad del proceso de adaptación, donde las comunidades reconocen que su lucha no ha terminado y que deberán enfrentar nuevos desafíos en el futuro. Sin embargo, la esperanza sigue siendo un motor fundamental para la acción, alimentando la determinación de las comunidades para seguir defendiendo sus territorios y derechos.

La combinación de esperanza e incertidumbre puede interpretarse como una forma de resistencia activa, en la que las comunidades no esperan pasivamente los cambios, sino que construyen activamente su propio futuro. La incertidumbre no paraliza a las comunidades, sino que las impulsa a prepararse y organizarse de manera más efectiva, asumiendo que la defensa de sus territorios será un proceso largo y complejo. Esta perspectiva refleja una visión de futuro abierta, en la que las comunidades reconocen que el camino hacia la justicia es incierto, pero siguen comprometidas con la lucha por sus derechos.

A partir de las sentencias judiciales muestran que las comunidades indígenas de Jujuy han desarrollado estrategias complejas de resistencia y reorganización. Estas adaptaciones reflejan no solo su capacidad para responder a los desafíos legales, sino también su determinación para preservar su identidad y autonomía. Al mismo tiempo, la transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones asegura la continuidad de la lucha por los derechos territoriales en el futuro.

Dinámicas comunitarias.

Seguidamente se presenta el análisis integral de las dinámicas comunitarias con sus interrelaciones en la Tabla 4, la cual deja en evidencia que las categorías mencionadas no operan de forma aislada, sino que están interconectadas y se relacionan mutuamente, moldeando la manera en que las comunidades indígenas enfrentan los desafíos contemporáneos, especialmente en el marco de la defensa de sus territorios.

Tabla 4: Análisis integral de las dinámicas comunitarias y sus interrelaciones.

Categorías	Prácticas y Problemáticas
Cultura y territorio.	Las comunidades mantienen una identidad fuerte basada en sus tradiciones, con una organización comunitaria activa (asambleas, festividades como el Inti Raymi y Carnaval). La tierra, el trabajo agrícola y el turismo son pilares fundamentales de la economía local y la cohesión comunitaria. Las practicas rituales y ceremonias conectan con los ancestros y consolidan el vínculo entre generaciones.
Relación con la tierra	La tierra es vista como madre y fuente de vida, con un profundo significado espiritual. La Pachamama es venerada y se entiende que el territorio es un legado intergeneracional. El uso del territorio se basa en la reciprocidad con una fuerte ética de cuidado y preservación. Esta conexión espiritual es fundamental para la identidad y bienestar comunitario, asegurando la continuidad cultural.
Percepción y conocimiento de las sentencias judiciales.	Las sentencias judiciales son percibidas con desconfianza debido a lenguaje técnico y la falta de sensibilidad cultural en el sistema legal. La mayoría de los entrevistados siente que la justicia no protege adecuadamente sus derechos y que las decisiones favorecen a actores externos como terratenientes y empresarios. Incluso en los casos con fallos favorables, persiste la percepción de vulnerabilidad e injusticia estructural
Adaptaciones cambio y perspectivas a futuro.	Las comunidades se han reorganizado para enfrentar los conflictos legales mediante la educación sobre derechos y la formación de estrategias legales propias. Han cambiado su forma de interactuar con el gobierno y las empresas, participando más activamente en los procesos de toma de decisiones. La transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones es vista como fundamental para asegurar la continuidad de la defensa territorial. Aunque existe esperanza, la incertidumbre sobre el futuro sigue presente, lo que impulsa una preparación constante.

Las categorías no funcionan de manera independiente, sino que se entrelazan de manera dinámica, influyendo mutuamente en la identidad comunitaria y en las estrategias que se implementan para enfrentar los desafíos contemporáneos. A continuación, se presenta un análisis detallado de estas interrelaciones.

Cultura y territorio ↔ relación con la tierra ↔ percepción y conocimiento de las sentencias judiciales ↔ adaptaciones, cambios y perspectivas a futuro.

Desde una perspectiva hermenéutica, la identidad cultural se consolida a través de la relación espiritual y simbólica con la tierra. El territorio es interpretado no sólo como un espacio físico, sino como un lugar sagrado que nutre la cohesión social, prácticas agrícolas y ceremoniales, como el Inti Raymi y la Pachamama, reflejan la transmisión de valores espirituales y garantizan la continuidad del legado cultural. Esta relación entre cultura y territorio evidencia que la vida comunitaria se construye y fortalece mediante la interacción simbólica con la tierra, alimentando tanto la identidad como la cohesión social.

Las percepciones sobre la justicia moldean las estrategias comunitarias para adaptarse a los desafíos legales. Las experiencias acumuladas en conflictos territoriales guían la reorganización

interna y la elaboración de estrategias legales propias. La comunidad reconoce la necesidad de prepararse para futuros litigios y reforzar la transmisión de conocimientos hacia las nuevas generaciones. La frustración por la falta de justicia no genera resignación, sino que impulsa respuestas proactivas basadas en el aprendizaje y la adaptación constante.

La hermenéutica cultural permite interpretar cómo las prácticas económicas y culturales no solo consolidan la identidad comunitaria, sino que también condicionan las opciones disponibles para enfrentar los cambios externos. La dependencia del turismo y la agricultura obliga a las comunidades a desarrollar nuevas formas de interacción con gobiernos y empresas privadas. La movilización de recursos culturales y cohesión interna se convierte en una estrategia clave para adaptarse creativamente a los desafíos legales y sociales, garantizando la continuidad del modo de vida comunitario.

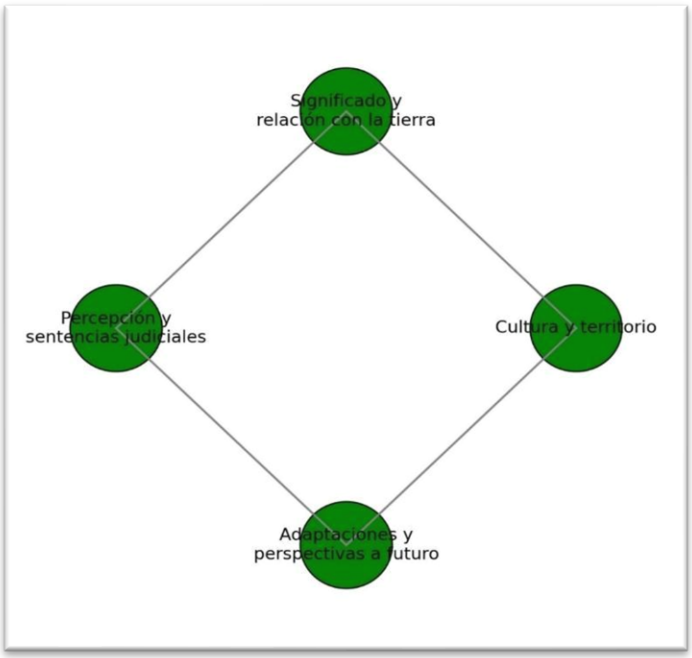
La conexión espiritual y emocional con la tierra intensifica la percepción de injusticia cuando los conflictos territoriales no se resuelven favorablemente. El territorio es interpretado como un elemento esencial de la identidad, por lo que las sentencias judiciales adversas son vividas como un ataque a su forma de vida. Esta valoración de la tierra motiva una defensa más activa y comprometida en el ámbito legal, donde los argumentos no solo se basan en criterios jurídicos, sino en el significado profundo que la tierra tiene para la comunidad. Este tipo de defensa refleja la capacidad de las comunidades para articular saberes ancestrales con herramientas legales contemporáneas.

El análisis de las interrelaciones revela que las categorías están profundamente entrelazadas y que las experiencias y prácticas comunitarias no operan de forma aislada, sino que se integran para dar forma a la identidad, cohesión y resistencia de las comunidades. Las decisiones legales, las estrategias de adaptación y las expresiones culturales se articulan en una dinámica constante, permitiendo a las comunidades reconfigurar su vida colectiva y proyectar la defensa de su territorio hacia el futuro. Esto se refleja en la Figura 4, donde las categorías muestran cómo la identidad comunitaria y la cohesión social se construyen mediante la combinación de aspectos culturales, jurídicos y territoriales, junto con una perspectiva de adaptación hacia el futuro.

Asimismo, el análisis evidencia cómo las comunidades activan conocimientos situados y elaboran estrategias propias para resistir las presiones externas y las imposiciones jurídicas. La lucha por la justicia territorial va más allá de la confrontación con el derecho formal, convirtiéndose en una negociación constante entre tradición y modernidad. En este proceso, los saberes ancestrales se

entrelazan con estrategias legales contemporáneas para asegurar la continuidad de sus valores y formas de vida.

Figura 4: Interrelación entre las categorías de análisis.



Fuente: Elaboración propia.

Nube de palabras.

A partir de las entrevistas realizadas a las comunidades indígenas de Jujuy, se analizaron las expresiones recurrentes y significativas presentes en los testimonios, las cuales se presentan en la Figura 5, utilizando una nube de palabras para ilustrar visualmente los conceptos más mencionados.

Las palabras más destacadas, como "identidad," "territorio," "Pachamama" y "justicia," condensan las preocupaciones prioritarias de las comunidades y reflejan la centralidad de estos conceptos en su cosmovisión y en sus prácticas cotidianas.

El tamaño relativo de cada palabra dentro de la nube refleja su frecuencia, proporcionando una representación visual del grado de importancia que los comuneros atribuyen a cada concepto. Esta visualización permite observar que la conexión espiritual con la tierra no se limita a una dimensión simbólica, sino que constituye una parte esencial de la organización social y cultural, fortaleciendo la identidad y cohesión comunitaria.

La prominencia del término "justicia" en la nube de palabras evidencia la percepción de injusticia estructural en los conflictos territoriales y la tensión constante entre las normativas del Estado y las concepciones indígenas del territorio. Las palabras "resistencia" y "unidad comunitaria" emergen como estrategias fundamentales que las comunidades despliegan para enfrentar las presiones externas, ya sea frente a los intereses de empresas mineras, grandes propietarios o instituciones estatales. En este contexto, la representación también refleja una forma de resistencia epistémica, al visibilizar la movilización de conocimientos y prácticas propias en la búsqueda de reconocimiento y justicia.

Asimismo, términos como "sentencias," "derechos" y "vulnerabilidad" revelan la experiencia de las comunidades en su interacción con el sistema judicial. La desconfianza hacia las decisiones legales emerge como un elemento constante, ya que los comuneros perciben que las sentencias rara vez garantizan la protección de sus derechos territoriales. Esta percepción se vincula con la complejidad del lenguaje jurídico y la preeminencia de intereses económicos y políticos que benefician a actores externos, como terratenientes y empresarios, profundizando así la vulnerabilidad de las comunidades.

La resistencia y la adaptación se consolidan como estrategias fundamentales para la supervivencia organizativa de las comunidades. Términos como "unidad," "educación" y "participación" reflejan cómo las comunidades han fortalecido su cohesión interna y su involucramiento en espacios de toma de decisiones. La educación, concebida desde una perspectiva intergeneracional, no sólo constituye una herramienta para afrontar los conflictos actuales, sino que también se proyecta como una vía para preparar a las generaciones futuras en la defensa del territorio y sus derechos.

El término "unidad" destaca el rol central de la organización comunitaria en la construcción de la resiliencia colectiva. Las comunidades han desarrollado una capacidad para articular saberes ancestrales con estrategias legales contemporáneas, poniendo en práctica lo que Sousa Santos (2007) denomina traducción intercultural, en referencia a la movilización de diversos marcos de conocimiento como respuesta a los desafíos impuestos por un sistema jurídico y económico adverso.

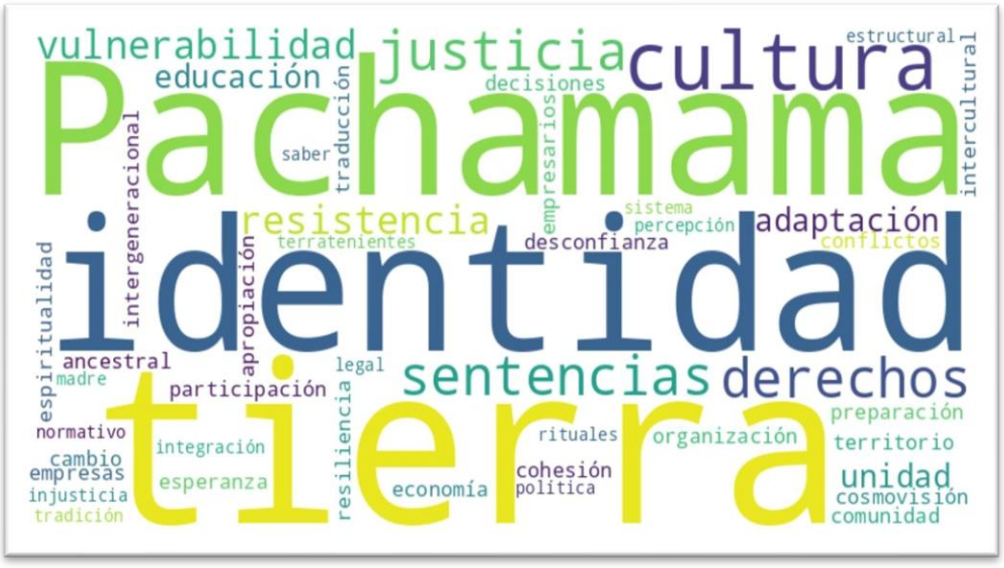
Finalmente, la nube de palabras de la Figura 5, refleja una dualidad entre esperanza e incertidumbre en torno al futuro de las comunidades. Términos como "esperanza," "preparación" y "cambio" evidencian que, pese a las dificultades, las comunidades mantienen una actitud optimista y proactiva. La preparación constante y el fortalecimiento de su estructura organizativa se perciben como elementos esenciales para asegurar la continuidad de la lucha por el territorio. No obstante,

la incertidumbre respecto a las decisiones legales futuras y la persistencia de los conflictos territoriales genera una preocupación latente, lo que impulsa una vigilancia constante y la necesidad de estar siempre preparados ante cualquier eventualidad.

La nube de palabras es más que una representación gráfica; constituye una síntesis visual del dinamismo, complejidad y riqueza de las experiencias comunitarias. A través de conceptos como identidad, tierra, justicia, resistencia y esperanza, se pone de manifiesto cómo las prácticas culturales, las luchas legales y las estrategias de adaptación están profundamente entrelazadas. La relación espiritual con el territorio no solo define la identidad de las comunidades, sino que también orienta sus acciones organizativas y legales.

Desde la perspectiva de la antropología jurídica, esta representación evidencia que la lucha de las comunidades indígenas no se circunscribe al ámbito judicial, sino que abarca múltiples dimensiones: espiritual, cultural, social y política. La nube de palabras revela un proceso continuo de adaptación y resistencia, en el cual las comunidades se reconfiguran constantemente para enfrentar los desafíos y construir un futuro más justo y sostenible.

Figura 5. Nube de palabras basada en las entrevistas comunitarias.



Fuente. Elaboración propia.

Similitudes y divergencias en las entrevistas.

Se realiza un análisis comparativo de las respuestas de los entrevistados, destacando tanto los puntos comunes como las divergencias significativas.

Categoría de análisis Nro. 1. Contexto cultural y territorial.

- **Similitudes**: La mayoría de los entrevistados comparte una relación profunda y espiritual con el territorio, viéndolo como parte integral de su identidad cultural. Las prácticas tradicionales, como las ceremonias religiosas y las actividades agrícolas, son pilares importantes para mantener la cohesión comunitaria y la transmisión de conocimientos intergeneracionales.

- **Divergencias**: Algunas comunidades se han visto afectadas por la migración y el desplazamiento forzado (Entrevistados Nro. 3, 4 y 7). Estos movimientos han impactado su capacidad de mantener prácticas culturales tradicionales y han debilitado sus lazos territoriales. Por ejemplo, los migrantes tienden a perder parte de su conexión espiritual con la tierra debido a la distancia física, mientras que aquellos que han permanecido en sus tierras ancestrales (Ent. Nro. 1, 6 y 8) mantienen un vínculo más robusto. Además, las comunidades que han experimentado una mayor interacción con empresas privadas, como mineras, han visto transformaciones en su dinámica económica, lo que ha afectado la cohesión interna (Ent. Nro. 5, 9 y 10).

Categoría de análisis Nro. 2. Significado y relación con la tierra.

- **Similitudes**: Todos los entrevistados coinciden en que la tierra tiene un significado profundo, más allá de su uso material, siendo vista como una fuente de vida y un componente espiritual esencial de su identidad.

- **Divergencias según contexto**: Sin embargo, las formas en que las comunidades experimentan esta relación varían. Los que se dedican principalmente a la agricultura y al turismo (Ent. Nro. 4, 5 y 8) ven la tierra como un recurso esencial para su sustento económico. En contraste, los comuneros que han tenido un contacto más directo con las empresas mineras o terratenientes (Ent. Nro. 6 y 7) perciben la tierra más como un espacio de resistencia, en defensa contra las amenazas externas. Además, en comunidades con mayores niveles de migración (Ent. Nro. 3 y 4), la conexión con la tierra está mediada por la necesidad de adaptarse a entornos más urbanos o alejados de sus territorios ancestrales.

Categoría de análisis Nro. 3. Percepción y conocimiento de las sentencias judiciales.

- **Similitudes**: La desconfianza generalizada hacia el sistema judicial es compartida por todos los entrevistados, quienes perciben que sus derechos territoriales no están

adecuadamente protegidos. Muchos consideran que el lenguaje técnico y complejo de las sentencias dificulta su comprensión y acceso al sistema judicial.

- **Divergencias**: Algunos entrevistados, sin embargo, han tenido experiencias más favorables debido a un mayor acceso a asesoramiento legal (Ent. Nro. 2, 6 y 9), lo que les ha permitido entender mejor ciertos aspectos de las sentencias, aunque la desconfianza persiste. Aquellos con menor acceso a recursos legales (Ent. Nro. 3 y 7) sienten una mayor indefensión y perciben las sentencias judiciales como una herramienta de poder en manos de terratenientes o empresarios.

Categoría de análisis Nro. 4. Adaptaciones, cambios y perspectivas a futuro.

- **Similitudes**: Todos los entrevistados coinciden en la necesidad de preparar a las nuevas generaciones en la defensa de sus derechos territoriales y de seguir organizándose para enfrentar los desafíos legales.

- **Divergencias**: Las perspectivas a futuro, sin embargo, están matizadas por las diferencias en las experiencias de los entrevistados. Aquellos que han enfrentado un mayor número de conflictos con empresas privadas (Ent. Nro. 6, 8 y 10) suelen expresar una mayor esperanza en su capacidad de resistencia, mientras que los que han experimentado desplazamientos forzados o pérdidas de tierras (Ent.Nro. 2, 4 y 7) muestran más escepticismo sobre el éxito de sus luchas a largo plazo. Además, en las comunidades con una organización más sólida y cohesión interna (Ent. Nro. 1 y 9), la estrategia de involucrar a los jóvenes se percibe como más viable, mientras que en comunidades más fragmentadas por las migraciones o los conflictos (Ent. Nro. 3 y 5), las expectativas a futuro son más inciertas.

Las diferencias contextuales entre los entrevistados muestran que, aunque existe una experiencia común en la defensa del territorio y la identidad cultural, las variaciones en las dinámicas de poder, el contacto con actores externos y las experiencias de migración generan respuestas adaptativas distintas. Estos matices son fundamentales para entender las estrategias de resistencia y organización de las comunidades indígenas ante las amenazas externas, destacando la necesidad de un enfoque más detallado para analizar sus demandas y propuestas de justicia territorial.

El análisis comparativo evidencia la compleja interrelación entre prácticas culturales, percepciones de justicia y estrategias de adaptación en las comunidades indígenas. Las categorías identificadas reflejan no solo similitudes estructurales que consolidan la identidad comunitaria, sino también diferencias contextuales que condicionan la manera en que cada comunidad enfrenta desafíos

jurídicos y proyecta su futuro. La conexión simbólica y espiritual con el territorio se presenta como un pilar esencial de cohesión social y cultural en todas las comunidades. Sin embargo, surgen divergencias en función de factores específicos, como el desplazamiento territorial, la migración o la interacción desigual con actores externos, que influyen directamente en las respuestas adaptativas de cada comunidad.

Desde la perspectiva de la antropología jurídica, estas dinámicas se interpretan como parte de un proceso continuo de resistencia y reorganización. Las comunidades no solo articulan sus conocimientos ancestrales, sino que también integran estos saberes con herramientas y estrategias jurídicas contemporáneas, lo que les permite enfrentar un sistema normativo que, en muchos casos, no reconoce plenamente sus demandas y cosmovisiones. Este proceso de adaptación es activo y representa una estrategia deliberada de lucha por el reconocimiento y la justicia. En este sentido, las comunidades indígenas no se limitan a reaccionar ante las dificultades impuestas por un sistema legal hegemónico, sino que despliegan estrategias organizativas y de resistencia que les permiten preservar su identidad y sus formas de vida, mientras proyectan su futuro mediante un diálogo entre saberes tradicionales y mecanismos legales modernos.

El análisis resalta la doble lucha que enfrentan las comunidades: por un lado, la defensa de sus territorios frente a intereses privados y estatales que buscan explotarlos, lo cual ejerce una presión constante sobre sus espacios de vida y amenaza la sostenibilidad de sus culturas; y, por otro, la interacción con un sistema jurídico que, debido a su formalismo y complejidad técnica, no siempre logra reflejar o integrar adecuadamente las particularidades de sus demandas. Esta situación revela una profunda brecha epistémica, donde las concepciones indígenas del territorio y los enfoques normativos occidentales se mantienen en una tensión constante. La dificultad de las comunidades para acceder a una justicia que comprenda y respete sus concepciones territoriales las coloca en desventaja en los procesos legales.

A pesar de estos desafíos, el análisis también subraya la notable resiliencia de las comunidades, manifestada en su capacidad para consolidar estructuras organizativas internas y preparar a las nuevas generaciones para continuar la lucha por sus derechos territoriales. En este contexto, la educación intergeneracional emerge como una herramienta clave, no solo para enfrentar los desafíos actuales, sino también para asegurar la continuidad de la resistencia ante presiones externas. La transmisión de conocimientos y valores fortalece la unidad y capacidad de las comunidades para mantenerse firmes en la defensa de sus derechos. Esta estrategia combina la unidad comunitaria con la participación en espacios de decisión política y legal, reforzando la

capacidad de las comunidades para articular y reivindicar sus derechos en un contexto históricamente adverso.

Este análisis no solo aporta una comprensión más profunda de las dinámicas internas de las comunidades indígenas en su interacción con el sistema jurídico, sino que también ofrece una lectura crítica sobre cómo el derecho, en su configuración actual, continúa reproduciendo formas de exclusión y marginalización. Desde la antropología jurídica, estas tensiones se interpretan como parte de un proceso más amplio de reconfiguración del campo jurídico, en el cual las comunidades no solo resisten las imposiciones del derecho formal, sino que también crean espacios para la producción de conocimientos situados, desafiando y reformulando los marcos normativos hegemónicos a través de sus propias prácticas jurídicas y culturales.

Del análisis comparativo de las entrevistas y las tensiones descritas, surgen nuevas preguntas que permiten profundizar en el análisis de las respuestas de los comuneros y entender mejor la interacción entre los actores involucrados, las percepciones de justicia y las prácticas de resistencia. Estas preguntas no solo abren nuevas líneas de reflexión, sino que también permiten abordar los problemas estructurales y culturales que enfrentan las comunidades en su lucha por el territorio.

Las siguientes preguntas guían el análisis para explorar las dinámicas subyacentes en las respuestas de los comuneros.

- ¿Cómo se manifiestan las tensiones entre el derecho indígena y el sistema judicial estatal en los procesos legales?

El derecho indígena, según Correas (1993), está en una constante tensión con el derecho estatal, que opera como una herramienta de dominación, reproduciendo relaciones de poder desiguales. Esta tensión queda reflejada en las entrevistas, donde los comuneros expresan su frustración ante un sistema judicial que no reconoce ni respeta sus derechos colectivos. Por ejemplo, en la Entrevista (Nro. 6), un comunero manifiesta su decepción al ver cómo la justicia favorece a los actores económicos privados, como los hoteleros, por encima de los derechos de las comunidades.

El pluralismo jurídico (Sousa Santos, 2014) es clave para entender estas tensiones. Aunque existe reconocimiento constitucional, sigue siendo marginados por el sistema legal estatal, que opera bajo lógicas hegemónicas. En la Entrevista (Nro. 10), un comunero enfatiza: *"la justicia no se aplica a los pueblos indígenas"*, revelando un sentimiento de exclusión y desamparo ante un sistema que perpetúa la invisibilización de sus derechos. Esta situación crea una resistencia cultural y jurídica

entre los comuneros, quienes no solo enfrentan desafíos legales, sino que también deben luchar por la validación de sus modos de vida y organización interna, ignorados por el derecho estatal.

- ¿Cómo varían las percepciones de justicia entre los comuneros según sus vivencias?

Las percepciones de justicia varían significativamente entre los comuneros en función de sus experiencias directas con el sistema judicial y las posiciones que como comunidad ocupan. En la Entrevista (Nro. 1), un comunero menciona cómo la justicia: "*no ha escuchado*" a la comunidad, a pesar de los fallos favorables, lo que refleja una sensación de desprotección y constante amenaza de desalojo. Esta experiencia se puede relacionar con la teoría de Bourdieu (2007b) sobre el habitus, que explica cómo las posiciones dentro del campo social influyen en la forma en que los actores perciben y responden a los desafíos legales.

Por otro lado, en la Entrevista (Nro. 3), un comunero expresa un agotamiento emocional al señalar que se sienten: *"cansados de luchar"* contra un sistema judicial que no reconoce ni aplica adecuadamente sus derechos. Estas diferencias en la percepción no solo se deben al rol que ocupa la comunidad, sino también a cómo han internalizado las experiencias de exclusión. Los comuneros que están más expuestos al sistema judicial tienden a desarrollar una percepción más crítica y desilusionada de la justicia, mientras que aquellos que tienen menos contacto directo con los procesos legales pueden mantener una esperanza resiliente frente a la adversidad.

- ¿De qué manera las prácticas culturales refuerzan la resistencia frente a las decisiones judiciales adversas?

Las prácticas culturales, como las ceremonias del Inti Raymi y las ofrendas a la Pachamama, no solo refuerzan su conexión con la tierra, sino que también actúan como mecanismos de resistencia simbólica frente a las decisiones judiciales adversas. En la Entrevista (Nro.5), un comunero afirma: *"sin tierra no somos nada"*, lo que refleja la profunda interrelación entre el territorio y la cohesión de la comunidad.

Desde la perspectiva de la colonialidad del poder (Quijano, 2020), estas prácticas culturales son formas de resistencia frente a un sistema judicial colonial que busca despojar a las comunidades indígenas de su territorio y su identidad. En la Entrevista (Nro. 7), el comunero expresa: *"la tierra nos da la fuerza para seguir adelante"*, subrayando cómo la espiritualidad y las ceremonias no sólo refuerzan la resistencia colectiva, sino que también les otorgan la fortaleza necesaria para continuar luchando contra las injusticias impuestas por el sistema judicial.

- ¿Cómo afecta el proceso judicial a la cohesión interna de los comuneros?

Los procesos judiciales no solo afectan la relación de los comuneros con el sistema legal, sino que también generan tensiones dentro de las comunidades, afectando su cohesión interna. En la Entrevista (Nro. 2), se menciona cómo la politización ha dividido a la comunidad, lo que generan dilemas sobre a quién apoyar: "*la política también que entra y divide a la gente a las personas eso es un mal que estamos teniendo en estos últimos tiempos mucha politización cosa que la gente mayor también es como que se ha vuelto fanática de los partidos entonces no sabe si defender a los políticos o defender a la comunidad entonces en su cabeza está un poco ese gran dilema*." Estas divisiones internas son una consecuencia directa de la intervención del sistema judicial estatal, que exacerba los conflictos y la fragmentación dentro de las comunidades.

A pesar de estas tensiones, en la Entrevista (Nro. 4) se observa un esfuerzo por mantener la unidad comunitaria, destacando: "*las nuevas generaciones están más integradas y unidas*" en la defensa del territorio. Este proceso de reorganización interna es un claro ejemplo de cómo, a pesar de las divisiones, las comunidades buscan fortalecer sus lazos internos y mantener su capital simbólico y social, resistiendo colectivamente las presiones externas. Bourdieu (2007b) explica que las comunidades que logran movilizar su capital cultural y simbólico tienen una mayor capacidad para enfrentar los desafíos impuestos por sistemas externos.

- ¿Qué nuevos desafíos surgen en la transmisión intergeneracional de la lucha territorial?

La transmisión intergeneracional de la lucha territorial es uno de los mayores desafíos que enfrentan los comuneros. En la Entrevista (Nro. 9), el comunero menciona: *"seguimos luchando y organizándonos"*, lo que sugiere que las nuevas generaciones están asumiendo un rol activo en la resistencia, aunque también heredan un conflicto territorial no resuelto que ha afectado a la comunidad por años.

Este desafío no solo se relaciona con la transmisión de conocimientos técnicos o jurídicos, sino también con la preservación de la identidad cultural y espiritual, que ha sido central en la resistencia de las generaciones anteriores. La colonialidad (Mignolo, 2010) nos permite entender cómo las nuevas generaciones deben enfrentarse no solo a la lucha territorial, sino también a la imposición de identidades coloniales que buscan desarticular su relación con el territorio. En la Entrevista (Nro. 3), un comunero menciona la importancia de: "*capacitarse y prepararse para los desafíos futuros*", lo que refleja la conciencia de que la lucha territorial implica tanto una batalla legal como la continuidad de su legado cultural.

Identificación de patrones.

A partir del análisis de las entrevistas, emergen patrones recurrentes que evidencian sentimientos, percepciones y tensiones vinculadas a la defensa del territorio. Estos patrones se manifiestan en la interacción con actores externos, como el Estado y las empresas, así como en la percepción de injusticia frente al sistema judicial. Dichas dinámicas reflejan no solo las experiencias vividas al interior de las comunidades, sino también las estrategias que estas desarrollan para enfrentar los desafíos derivados de estas interacciones.

- Sentimientos de injusticia y desconfianza

El análisis de las entrevistas revela que los sentimientos de injusticia y desconfianza de las comunidades indígenas no son aislados, sino que emergen como producto de dinámicas estructurales históricas profundamente arraigadas en las relaciones de poder que las han relegado a posiciones marginales dentro del sistema jurídico.

Desde la perspectiva de Bourdieu (2007b), el concepto de campo y habitus es clave para comprender cómo el sistema judicial funciona como un espacio de lucha simbólica, donde actores sociales con distintos niveles de capital económico y simbólico pugnan por el reconocimiento y legitimidad de sus derechos. Las comunidades indígenas, al carecer de capital simbólico –es decir, el prestigio, el reconocimiento y la capacidad de influir dentro de este espacio–, se encuentran en una posición de desventaja. La frase del Entrevistado (Nro 2): "*nosotros no somos escuchados"*, ilustra cómo esta exclusión simbólica les impide ser reconocidos como interlocutores válidos dentro del campo jurídico. En contraste, actores con mayor capital económico y simbólico, como los empresarios (Ent. Nro. 6) que logran imponer sus intereses.

Esta exclusión no solo es simbólica, sino que se refuerza con la percepción de que el sistema judicial opera de manera parcial, favoreciendo a actores externos con mayor poder. La Teoría Crítica, en particular los aportes de Horkheimer (1998) y Adorno (2002), es pertinente para comprender cómo las instituciones legales, lejos de ser neutrales, reproducen relaciones de dominación. El testimonio del Entrevistado (Nro. 5): *"sentimos que el sistema está en contra"*, refleja este malestar hacia un sistema que, bajo una fachada de legalidad, legitima la marginalización estructural de las comunidades. Esta percepción de desprotección no se refiere solo a los resultados desfavorables en los juicios, sino a la incapacidad de ser considerados sujetos de derecho con voz legítima dentro del sistema.

Los aportes de Bourdieu (2007b) profundizan este análisis, mostrando cómo la imposición de un marco legal que invisibiliza y legitima la exclusión lleva a la internalización de una narrativa de

inferioridad. Frases como *"nos trataron como si no tuviéramos derechos"* (Ent. Nro. 5) demuestran cómo perpetúa una estructura de percepción que naturaliza la subordinación de ciertos grupos. Las comunidades indígenas, sin acceso al capital simbólico necesario para disputar en igualdad de condiciones dentro del campo jurídico, experimentan una sensación constante de injusticia.

Desde la teoría de la acción comunicativa de Habermas (1996), se puede argumentar que la exclusión de las comunidades indígenas del proceso judicial no solo responde a su falta de reconocimiento simbólico, sino también a la ausencia de un espacio de diálogo inclusivo. El sistema judicial, al no garantizar que las voces indígenas sean escuchadas, refuerza la percepción de que es un espacio inaccesible y hostil. La falta de un diálogo deliberativo que incluya y valore las experiencias indígenas agrava la desconfianza estructural hacia el sistema judicial, que no solo es parcial en sus resultados, sino que también falla en crear un proceso en el que las voces indígenas puedan ser escuchadas y legitimadas.

En conclusión, los sentimientos de injusticia y desconfianza que emergen de las entrevistas son el reflejo de una exclusión estructural que opera a múltiples niveles dentro del sistema jurídico. Esta exclusión no es accidental, sino que responde a dinámicas históricas que perpetúan las relaciones desiguales de poder, reforzando la marginalización de las comunidades indígenas. El análisis interpretativo de estos sentimientos va más allá de una simple descripción de testimonios: se evidencia cómo el sistema legal reproduce una lógica de dominación y violencia simbólica que socava las posibilidades de justicia para estos grupos vulnerables, invisibilizando sus derechos y legitimando su exclusión en favor de actores más poderosos.

- Conexión espiritual y ancestral con la tierra.

El análisis de las entrevistas revela que la relación que las comunidades indígenas mantienen con su territorio trasciende una simple posesión material o económica; el territorio es el eje central en la configuración de su identidad cultural, espiritual y política. Esta conexión profunda articula tanto su supervivencia física como la transmisión de valores, conocimientos y prácticas ancestrales que aseguran la continuidad intergeneracional de su cosmovisión. Esto se evidencia en declaraciones como: *"la tierra es nuestra madre"* (Ent. Nro. 1) y *"sin tierra no somos nada"* (Ent. Nro. 4), expresiones que ilustran cómo el territorio es percibido como una fuente vital de vida y el pilar sobre el cual se construye su existencia colectiva.

Desde una perspectiva interpretativa, Geertz (1987) nos brinda una clave para entender el territorio como un sistema de símbolos cargado de significados culturales. Las ceremonias, ofrendas y rituales vinculados a la tierra no solo refuerzan la identidad cultural, sino que aseguran su

continuidad. Estas prácticas funcionan como un texto cultural que las comunidades interpretan a través de sus acciones cotidianas, donde cada ritual reafirma la sacralidad del espacio y su importancia como elemento central de su existencia colectiva. Durkheim (1990) complementa esta visión señalando que las sociedades construyen espacios sagrados que, más allá de su valor material, funcionan como epicentros de cohesión social. Las expresiones de los entrevistados muestran cómo el territorio no solo es un espacio físico, sino un lugar donde el pasado y el presente convergen, asegurando la transmisión de normas y valores a las nuevas generaciones. Este proceso de sacralización refuerza la cohesión social y asegura la continuidad de la comunidad a través del tiempo.

El territorio no solo satisface las necesidades materiales de las comunidades. Desde la perspectiva funcionalista de Malinowski (1985), las prácticas agrícolas, la gestión del territorio y las ceremonias colectivas no solo tienen un propósito utilitario, sino que también refuerzan los lazos de solidaridad dentro de la comunidad. La frase: *"sin tierra no somos nada*" (Ent. Nro. 4) refleja cómo el territorio constituye una base indispensable tanto para la subsistencia física como para la estructura social y cultural de la comunidad. A través de estas prácticas, se organiza la vida comunitaria y se asegura la transmisión de valores y conocimientos necesarios para la continuidad de la identidad cultural.

El concepto de capital social, propuesto por Ostrom (1995), permite comprender cómo las comunidades indígenas gestionan su territorio de manera colectiva, a través de redes de cooperación y confianza mutua. Para estas comunidades, el territorio no es una propiedad individual, sino un bien colectivo que garantiza la supervivencia material y cultural. Las prácticas de manejo territorial, basadas en el conocimiento tradicional y la reciprocidad, permiten mantener la cohesión interna y asegurar la preservación de los recursos naturales. El territorio se convierte en el fundamento sobre el cual se construye el entramado social y cultural de la comunidad.

Foucault (2000) aporta una perspectiva crítica sobre la relación entre territorio, poder y resistencia. El territorio no es un espacio neutral, sino un lugar donde se despliegan relaciones de poder. Las luchas territoriales de las comunidades indígenas pueden interpretarse como luchas por el control de sus formas de vida y la preservación de su autonomía frente a las imposiciones de actores externos, como el Estado o las empresas privadas. La percepción: *"el sistema está en contra"* (Ent. Nro. 5) ilustra cómo el territorio se convierte en un espacio de resistencia frente a las dinámicas de dominación que buscan despojarlas de su tierra y, con ello, de su identidad. En este sentido, el territorio no es solo un recurso material, sino también un espacio de lucha simbólica donde las comunidades defienden su derecho a existir según sus propias normas y valores.

La espiritualidad del territorio no solo refuerza la identidad cultural, sino que también actúa como un marco normativo alternativo que desafía las estructuras del derecho estatal. La sacralización del territorio, además de ser una práctica cultural, proporciona a las comunidades una legitimidad interna para resistir las amenazas externas. Este marco espiritual fundamenta sus acciones políticas y legales, permitiendo que la defensa territorial no solo se base en criterios jurídicos, sino también en valores sagrados. Este marco normativo espiritual les otorga una base ética para la resistencia legal y territorial, lo que se traduce en una reivindicación colectiva de los territorios ancestrales. La espiritualidad, en este contexto, se convierte en una justificación intrínseca para desafiar las imposiciones externas, ofreciendo un marco legal propio que contradice la mercantilización impuesta por el Estado. A través de ceremonias y rituales, las comunidades refuerzan su derecho a la tierra no sólo como un bien material, sino como un espacio sagrado que garantiza la continuidad de su existencia cultural.

Este análisis revela que la conexión espiritual y ancestral con el territorio es un pilar esencial en la construcción y reproducción de la identidad cultural de las comunidades indígenas. A través de la sacralización del territorio y las prácticas espirituales, las comunidades no solo aseguran su supervivencia física, sino que también crean un marco normativo alternativo que desafía las estructuras de poder estatales y corporativas. El territorio es, por tanto, un espacio de resistencia simbólica y legal, donde la lucha por la tierra se convierte en una lucha por la preservación de una forma de vida profundamente conectada con la tierra. Las comunidades indígenas, al defender su territorio, no solo defienden un recurso material, sino su derecho a existir conforme a sus propios valores y normas, garantizando así la continuidad cultural y social de sus formas de vida.

- Percepción de amenaza y presión externa.

El análisis de las entrevistas con los miembros de las comunidades indígenas revela una percepción constante de amenaza y presión externa sobre sus territorios comunales. Esta amenaza no se limita a la posible pérdida física de la tierra, sino que tiene una dimensión existencial que afecta profundamente su identidad cultural, espiritual y social. Las expresiones: *"nos quieren sacar de nuestras tierras"* (Ent. Nro. 3) y *"los intereses privados nos están aplastando"* (Ent. Nro. 8) ilustran el miedo persistente al desplazamiento forzado, que no solo representa la pérdida de territorio, sino también la ruptura de los lazos ancestrales que sostienen la identidad colectiva. Esta percepción de amenaza se ve agravada por un profundo sentimiento de desprotección estatal, como lo reflejan afirmaciones como: *"el Estado no nos protege"* (Ent. Nro. 9), lo que genera una sensación de vulnerabilidad y desamparo en las comunidades.

Se identifican varios actores externos que son percibidos como una amenaza, incluyendo empresarios vinculados a proyectos extractivos, como la minería, la agricultura intensiva y el turismo, así como el propio Estado. Estos actores buscan apropiarse de los territorios comunales mediante concesiones, expropiaciones o decisiones judiciales que favorecen el desarrollo económico por encima de los derechos territoriales de las comunidades indígenas. En este contexto, el Estado no es percibido únicamente como un ente negligente, sino como un agente activo que, mediante decisiones legales y políticas, facilita el despojo territorial. Las comunidades, excluidas de los procesos deliberativos, se ven expuestas a decisiones que priorizan la mercantilización de sus territorios y les niegan la posibilidad de defender sus derechos. Los desalojos forzados representan una de las amenazas más concretas, donde la tierra no es vista como un espacio culturalmente significativo, sino como un recurso económico que debe ser explotado.

Desde una perspectiva teórica, la Escuela de Frankfurt, en particular Adorno (2002), aporta una visión crítica sobre cómo las estructuras jurídicas y políticas refuerzan las relaciones de dominación y perpetúan la exclusión de las comunidades indígenas. La racionalidad instrumental, explica cómo las estructuras estatales y legales están orientadas hacia la maximización del control de los recursos, subordinando las necesidades y derechos de las poblaciones vulnerables a los intereses económicos. Esta lógica se refleja en las experiencias de las comunidades indígenas, que ven en el derecho un instrumento de despojo antes que un medio de protección para sus formas de vida. En este contexto, el sistema legal estatal no es percibido como una herramienta de justicia, sino como un mecanismo que facilita el control de actores externos sobre los territorios comunales.

El desconocimiento de los sistemas normativos indígenas por parte del Estado no es un simple error, sino parte de una estrategia deliberada para facilitar el control sobre los territorios. Las comunidades denuncian la falta de reconocimiento de sus derechos territoriales y culturales, lo que las deja aún más vulnerables frente a los intereses privados. Wolkmer (2018) introduce el concepto de pluralismo jurídico como una herramienta para comprender que la amenaza no solo está vinculada a la disputa material por la tierra, sino también a la ausencia de un marco legal que reconozca y respete las normativas propias de las comunidades indígenas. En lugar de actuar como un garante de justicia, el sistema legal estatal legitima la mercantilización de los territorios comunales al ignorar sus significados culturales y espirituales. Esta estrategia jurídica perpetúa las relaciones de poder desiguales, beneficiando a los actores externos a costa de las comunidades.

La exclusión de las comunidades indígenas de los procesos de deliberación es un factor clave en esta percepción de amenaza. La teoría de la acción comunicativa de Habermas (1992a) permite entender cómo la falta de participación de las comunidades en estos espacios socava la legitimidad

del sistema jurídico. Esta exclusión refuerza la desconfianza de las comunidades hacia el Estado y sus instituciones, aumentando su vulnerabilidad ante decisiones externas. El sentimiento de desprotección estatal refleja la ruptura en la comunicación entre las comunidades indígenas y los actores estatales, donde las decisiones sobre los territorios comunales se toman sin su consentimiento ni consideración de sus derechos. Esta dinámica de imposición y despojo perpetúa una lógica de exclusión que afecta tanto la relación con la tierra como la capacidad de las comunidades para defender sus derechos territoriales.

El control territorial implica, en última instancia, un control sobre las vidas de las comunidades indígenas, Foucault (1994) ofrece una herramienta teórica crucial para comprender cómo el control territorial se manifiesta en la capacidad del Estado y de los actores privados para ejercer dominio no solo sobre el espacio físico, sino también sobre la existencia misma de las comunidades. El desplazamiento territorial no solo implica la pérdida de la tierra, sino que también representa una amenaza a la cohesión social, la memoria ancestral y la supervivencia cultural.

Este análisis revela un conflicto multidimensional que va más allá de la disputa material por el territorio. Los actores externos, tanto estatales como privados, ejercen control sobre los territorios comunales a través de la exclusión de las comunidades de los procesos deliberativos y el desconocimiento estratégico de sus derechos normativos. El Estado, lejos de ser un protector de los derechos indígenas, es percibido como un facilitador del despojo, operando bajo una lógica de racionalidad instrumental que prioriza el control de los recursos sobre las necesidades de las comunidades. La amenaza no puede separarse de la relación espiritual y cultural que las comunidades indígenas mantienen con sus tierras, ya que el desplazamiento territorial representa una amenaza existencial que pone en riesgo no solo su supervivencia física, sino también su continuidad como entidades culturales autónomas.

- Tensión y resiliencia en la lucha por los derechos.

El análisis de la tensión y resiliencia en la lucha por los derechos territoriales de las comunidades indígenas muestra una dinámica compleja que no puede ser comprendida únicamente como una reacción pasiva ante las presiones externas. Las entrevistas revelan que la resistencia comunitaria es un proceso activo de reorganización interna, lo que fortalece tanto la identidad colectiva como la autonomía territorial. Las declaraciones: *"no vamos a rendirnos"* (Ent. Nro. 5) y *"seguimos peleando"* (Ent. Nro. 7) demuestran no solo la persistencia en la lucha, sino también la capacidad de adaptación de las comunidades frente a las dinámicas de poder que amenazan su subsistencia.

Desde la perspectiva de Foucault (2000), el control sobre las comunidades indígenas no se limita al territorio físico, sino que también afecta las formas de vida que dependen de él. Las políticas estatales y las estrategias privadas para apropiarse de los territorios se traducen en formas de dominación sobre la vida comunitaria, que incluyen el desplazamiento forzado, la imposición de nuevas normas de vida y la exclusión de los procesos de toma de decisiones. Las expresiones como: *"nos quieren sacar de nuestras tierras"* (Ent. Nro. 3) y *"el Estado no nos protege"* (Ent. Nro. 9) reflejan cómo el poder estatal y corporativo no solo amenaza la tierra como espacio físico, sino también la supervivencia cultural de las comunidades.

Sin embargo, la respuesta de las comunidades no se limita a la defensa pasiva. A través de un proceso de resiliencia activa, las comunidades lograron reorganizarse, fortaleciendo sus estructuras internas y creando nuevas formas de resistencia. La afirmación: *"estamos organizándonos más"* (Ent. N° 2) ilustra cómo las presiones externas no solo se enfrentan, sino que se transforman en oportunidades para consolidar la cohesión interna. Este proceso, interpretado como una forma de contrapoder foucaultiano, permite a las comunidades crear espacios de autonomía frente a las imposiciones externas.

Es relevante aquí profundizar en las estrategias concretas que las comunidades utilizan para reorganizarse frente a las amenazas externas. Algunas acciones colectivas incluyen la resistencia jurídica, donde las comunidades presentan amparos y reclamos legales en defensa de sus tierras. Ejemplos de ello son los recursos de amparo presentados por varias comunidades ante la justicia para frenar proyectos extractivos que afectan sus territorios. Además, las acciones comunitarias que refuerzan la identidad cultural, como la celebración de rituales y ceremonias en los territorios reclamados, también se convierten en formas de resistencia que legitiman sus reclamos y refuerzan la conexión espiritual con la tierra. Estas prácticas son clave para entender cómo la resiliencia no solo implica mantener el control sobre el territorio, sino también reafirmar la identidad y la cohesión comunitaria frente a las amenazas externas.

El pluralismo jurídico es fundamental para comprender la dimensión normativa de esta lucha. Las comunidades indígenas no solo buscan proteger sus territorios frente a la expansión de intereses privados, sino que también exigen el reconocimiento de sus propios sistemas normativos, profundamente vinculados con su identidad y formas de vida. La resistencia no se limita a una oposición física, sino que también se traduce en una demanda por la reconstrucción del marco legal estatal, para que incorpore los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas. Este proceso de lucha es tanto físico como simbólico, donde las comunidades reivindican su derecho a existir conforme a sus propias normas y valores.

La resiliencia comunitaria también se manifiesta en la capacidad de las comunidades para generar formas de organización colectiva que les permitan enfrentar las presiones externas de manera más efectiva. Este proceso de organización interna refuerza no solo la cohesión social, sino también la identidad cultural de las comunidades. El territorio, en este sentido, no es simplemente un recurso económico o un espacio físico, sino un componente esencial de la identidad comunitaria y de las prácticas culturales que garantizan la continuidad de la vida en comunidad. La lucha por el territorio se convierte, entonces, en una lucha por la supervivencia cultural y la autonomía política, donde el acto de resistencia es también un acto de reafirmación de la existencia de la comunidad como pueblo autónomo.

La tensión y resiliencia que atraviesa la lucha por los derechos territoriales, tal como lo señalan las entrevistas, es una respuesta activa frente a las presiones de los actores externos, pero también una fuente de regeneración para las comunidades. Lejos de rendirse ante las amenazas, las comunidades reorganizan sus estructuras internas y desarrollan nuevas formas de resistencia que desafían las imposiciones externas, creando espacios de autonomía y autodeterminación. Este proceso no solo les permite defender sus territorios, sino que también refuerza su identidad cultural y social, permitiendo que continúen existiendo como comunidades autónomas. La resiliencia en este sentido no es simplemente resistencia pasiva, sino un acto de creación y consolidación que garantiza la supervivencia y la continuidad de las formas de vida comunitarias.

La tensión y resiliencia en la lucha por los derechos territoriales de las comunidades indígenas revela un proceso complejo en el que la resistencia no solo preserva, sino que también transforma las estructuras comunitarias. Las comunidades enfrentan las presiones externas reorganizándose internamente, fortaleciendo su cohesión y generando nuevas formas de poder que les permiten resistir y desafiar las dinámicas de dominación impuestas por el Estado y los actores privados. Este proceso es clave para comprender cómo la lucha por el territorio no es simplemente una disputa económica, sino una lucha por la supervivencia cultural y social, donde la identidad comunitaria y el derecho a existir como pueblo autónomo están en juego.

- Confusión y desconexión con el sistema legal.

El análisis de las entrevistas revela una profunda confusión y desconexión entre las comunidades indígenas y el sistema legal estatal. Esta desconexión no solo es producto de una brecha lingüística o técnica, sino que refleja una exclusión estructural que perpetúa la marginación de las comunidades dentro de los procesos judiciales. Las declaraciones: *"no entendemos las palabras que usan"* (Ent. Nro. 6) o *"nos perdemos en los papeles"* (Ent. Nro. 8) evidencian la dificultad

constante para comprender el lenguaje técnico y las complejidades procedimentales del sistema legal. Este fenómeno genera no solo frustración, sino también una desconfianza creciente hacia un sistema que, desde su diseño, parece excluir sistemáticamente a las comunidades indígenas y dificulta su participación efectiva en la defensa de sus derechos.

Desde un punto de vista teórico, esta desconexión puede interpretarse a través del concepto de violencia simbólica de Bourdieu (2007b), que explica cómo las estructuras de poder imponen normas y valores que deslegitiman otras formas de conocimiento y excluyen a los grupos subalternos. En este sentido, el sistema jurídico occidental se convierte en un espacio de dominación simbólica donde los procedimientos legales están diseñados para aquellos que poseen el capital cultural necesario para comprender y participar en ellos. Las comunidades indígenas, al no contar con ese capital, se ven relegadas a una posición de subordinación dentro del sistema judicial. La expresión: *"las sentencias son muy complicadas"* (Ent. Nro. 3) demuestran que el derecho, lejos de actuar como una herramienta de protección, es percibido como un mecanismo de exclusión.

Un elemento clave que refuerza esta desconexión es la diferencia fundamental entre el sistema normativo indígena y el sistema estatal. Mientras que el primero está basado en valores como el respeto mutuo, la reparación y el equilibrio comunitario, el sistema estatal opera bajo una lógica de mercantilización de la tierra y el castigo punitivo. Esta disparidad provoca que las comunidades indígenas se enfrenten a un marco jurídico que ignora sus valores culturales y formas de resolución de conflictos, lo que agrava su exclusión. Los testimonios de los entrevistados revelan que el desconocimiento mutuo entre ambos sistemas es una de las principales barreras que limita la participación de las comunidades en los procesos judiciales.

La colonialidad del poder, tal como la describe Mignolo (2010), permite entender esta desconexión en términos de la imposición epistémica del sistema legal occidental como universal, deslegitimando las epistemologías indígenas. Esta imposición crea un espacio de incomprensión que aleja aún más a las comunidades del sistema judicial. En esta línea, la incapacidad de las comunidades para navegar los procedimientos legales refleja una exclusión más profunda, donde sus conocimientos y formas de vida no son reconocidos ni valorados por el marco jurídico estatal.

Las comunidades indígenas no solo se enfrentan a estas barreras estructurales, sino que también intentan navegar el sistema legal a pesar de los obstáculos. Algunos testimonios indican que las comunidades se ven obligadas a contratar abogados externos, lo que implica una carga económica y cultural considerable. Los procedimientos burocráticos complejos, los costos legales y los plazos

procesales son los principales obstáculos que enfrentan, haciendo que su interacción con el sistema judicial sea costosa y frustrante. Esta dependencia del sistema, junto con la falta de comprensión de los procesos, refuerza su exclusión y genera una sensación de impotencia ante la imposibilidad de defender sus derechos de manera efectiva.

Desde la perspectiva de Habermas (1996) y su teoría de la acción comunicativa, el sistema legal no sólo no facilita la participación de las comunidades indígenas, sino que impone barreras técnicas y lingüísticas que limitan su capacidad para ser parte activa del proceso judicial. La desconexión que surge de la falta de comprensión del lenguaje y de los procedimientos legales constituye, en última instancia, una negación del derecho de las comunidades a participar plenamente en el sistema de justicia.

Quijano (2000) aporta una dimensión histórica al destacar la continuidad de la colonialidad del poder, que sigue operando en las instituciones contemporáneas. Las declaraciones de los entrevistados como: "*el Estado no nos protege*" (Ent. Nro. 9) no reflejan solo una falta de apoyo jurídico, sino una manifestación de las relaciones coloniales que perduran hasta hoy, donde las estructuras legales, lejos de ser neutrales, responden a intereses hegemónicos y excluyen a las comunidades indígenas, perpetuando su subordinación.

Finalmente, el concepto de pluralismo jurídico propuesto por Wolkmer (2003) ofrece una solución teórica para superar esta desconexión, propone la coexistencia de múltiples sistemas normativos, lo que permitiría una mayor inclusión de las formas de vida y los sistemas normativos indígenas dentro del marco legal estatal. Sin embargo, el monismo jurídico dominante en el Estado moderno impone un único sistema normativo a todos los ciudadanos, lo que ignora la diversidad legal existente en sociedades multiculturales. La falta de reconocimiento de los sistemas de resolución de conflictos indígenas y de sus marcos normativos refuerza la exclusión de las comunidades y su desconexión con el sistema legal.

La confusión y desconexión que experimentan las comunidades indígenas con el sistema legal estatal no se limita a una cuestión de acceso técnico o comprensión del lenguaje jurídico, sino que refleja una exclusión estructural vinculada a la imposición de un sistema monista que no reconoce la pluralidad de sistemas normativos. Esta desconexión no solo refuerza la marginación estructural de las comunidades, sino que también perpetúa su subordinación en los procesos de decisión que afectan sus vidas. La transformación del sistema legal hacia un enfoque más inclusivo y pluralista es esencial para garantizar la participación efectiva de las comunidades indígenas, mejorar su

acceso a la justicia y asegurar su derecho a resistir y preservar sus formas de vida y sistemas normativos.

- Esperanza y preocupación sobre el futuro.

El análisis de la esperanza y preocupación sobre el futuro que emerge de las entrevistas revela una combinación de expectativas positivas y una profunda incertidumbre respecto a los derechos territoriales de las comunidades indígenas. La frase: *"esperamos que las cosas cambien"* (Ent. Nro. 7) muestran que existe una expectativa de mejora, aunque moderada por la experiencia histórica de exclusión y despojo. Por otro lado: *"no sabemos qué pasará con nuestras tierras"* (Ent. Nro. 1) refleja la incertidumbre ante el futuro, manifestando la vulnerabilidad que las comunidades sienten frente a las presiones externas, tanto estatales como privadas, en relación con sus territorios.

Desde una perspectiva antropológica, esta mezcla de esperanza y preocupación puede entenderse como parte de un proceso continuo de resistencia y adaptación ante las amenazas que enfrentan las comunidades. Las tensiones en torno a la lucha territorial no solo se enfocan en el presente, sino que también están orientadas hacia el futuro, como lo demuestra el compromiso intergeneracional. La frase: "*tenemos que luchar por las próximas generaciones*" (Ent. Nro.4) subraya cómo la lucha por los derechos territoriales se concibe como una misión que trasciende a la actual generación, asegurando la continuidad cultural y territorial para los descendientes.

El enfoque intergeneracional en la preservación de los derechos territoriales refleja una cosmovisión indígena en la que el territorio no solo es un bien material, sino una herencia cultural que debe ser protegida para garantizar la supervivencia física, espiritual y cultural de las futuras generaciones. Este compromiso con el futuro es una forma de resistencia frente a las estructuras coloniales que históricamente han intentado despojar a las comunidades de sus tierras, impidiendo la transmisión de sus modos de vida y tradiciones.

El pluralismo jurídico, planteado por Wolkmer (2018) ofrece una vía para comprender esta resistencia a través del reconocimiento de los sistemas normativos propios de las comunidades indígenas. En este marco, la lucha por la tierra no es solo una cuestión legal, sino un proceso de reafirmación de la identidad y de resistencia frente a un sistema que, hasta ahora, ha deslegitimado sus derechos. El hecho de que las comunidades sigan comprometidas con la defensa de sus tierras

no solo muestra su capacidad de resistencia, sino también su esperanza de que algún día sus derechos serán plenamente reconocidos.

Por su parte, Goldschmidt (1984) al hablar del derecho como herramienta para la protección de la personalidad y la autonomía, nos permite entender que la lucha de las comunidades no solo busca asegurar el derecho a la tierra en el presente, sino también preservar un entorno donde puedan continuar desarrollándose como pueblos autónomos. El derecho de resistencia se vincula directamente con esta lucha intergeneracional, donde la preservación de los derechos territoriales se convierte en una cuestión de supervivencia cultural para las próximas generaciones.

Las entrevistas revelan que la esperanza en el cambio coexiste con una profunda preocupación sobre el futuro. Las comunidades indígenas enfrentan un contexto de incertidumbre y vulnerabilidad, pero su compromiso con la preservación de sus tierras y derechos para las futuras generaciones subraya la importancia de un enfoque intergeneracional y pluralista que reconozca y respete sus sistemas normativos y su autonomía cultural. Esta resistencia no solo responde a las amenazas inmediatas, sino que busca garantizar la continuidad de la lucha y la identidad indígena en el largo plazo.

Visualizando las narrativas.

Los resultados del análisis se consolidan con la presentación del mapa jerárquico, una herramienta metodológica clave que organiza de manera visual las narrativas obtenidas en las entrevistas. Este recurso permite profundizar en las interrelaciones entre los patrones identificados a lo largo del proceso analítico, proporcionando una visión más estructurada de cómo las comunidades indígenas articulan su resistencia y reorganización frente a las dinámicas de poder y despojo territorial.

El mapa jerárquico de las narrativas de las comunidades indígenas, relacionado con territorio y justicia (véase Apéndice E), permite visualizar de manera clara y estructurada los vínculos existentes entre las distintas categorías identificadas en el contexto del análisis de los resultados de las entrevistas. A través de este recurso, es posible observar cómo los conceptos interactúan entre sí, revelando las complejidades de las experiencias vividas por las comunidades indígenas. Esta visualización refuerza el análisis al dar una estructura coherente a las múltiples voces recogidas, facilitando una comprensión más profunda y clara de las dinámicas internas y externas que afectan a estas comunidades.

Se pone en valor el carácter multidimensional del análisis y la importancia de un enfoque metodológico, que permite no sólo narrar las experiencias, sino también visualizar cómo estas interacciones constituyen el núcleo de la resistencia y la lucha por los derechos territoriales.

Capítulo VII. Las tensiones de sentido entre la justicia estatal y la cosmovisión territorial indígena.

La presente investigación ha identificado que, a pesar de los avances normativos introducidos por el Código Civil y Comercial de la Nación en 2015, la implementación efectiva de los derechos territoriales de las comunidades indígenas presenta serias limitaciones estructurales.

El análisis de las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de Jujuy entre los años 2015 y 2023, complementado con entrevistas a miembros de comunidades indígenas, permite visibilizar un panorama marcado por profundas tensiones entre las normativas estatales y las demandas comunitarias.

Las resoluciones judiciales analizadas manifiestan, en su mayoría, una tendencia a priorizar la normativa estatal y los principios del derecho privado tradicional, desestimando en gran medida los reclamos indígenas vinculados a la posesión ancestral de sus territorios. Este enfoque jurídico revela una ausencia de consideración hacia las especificidades culturales, sociales y territoriales de estas comunidades, perpetuando desigualdades históricas de carácter estructural.

En las entrevistas, los miembros de las comunidades expresan una percepción generalizada de desconfianza hacia el sistema judicial, al cual describen como distante, ajeno y poco receptivo frente a sus necesidades. Este distanciamiento se traduce en sentimientos de frustración y exclusión sistemática. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, las comunidades han intentado utilizar los mecanismos legales disponibles como estrategias de resistencia, obteniendo resultados diversos, que van desde logros parciales hasta la reproducción de su situación de vulnerabilidad.

Un aspecto central que emerge de este análisis es la concepción integral que las comunidades indígenas poseen del territorio. Para estas comunidades, el territorio no solo representa un recurso material, sino que constituye un elemento esencial de su identidad cultural, espiritual y social. Esta cosmovisión contrasta de manera significativa con la perspectiva predominante en el ámbito judicial, donde el territorio es concebido fundamentalmente bajo criterios económicos y normativos. Los hallazgos de la investigación revelan una tensión persistente entre estas dos visiones, lo que subraya la incapacidad del sistema legal vigente para garantizar una protección efectiva de los derechos territoriales indígenas en la provincia de Jujuy.

A través del análisis cruzado de las fuentes primarias (entrevistas) y secundarias (sentencias judiciales), se han identificado las tensiones más relevantes entre la visión formal del sistema judicial y las concepciones colectivas del territorio propias de las comunidades indígenas.

A continuación, se exponen los resultados de la triangulación de fuentes primarias y secundarias en las categorías de análisis presentadas en el Capítulo I Metodología:

Colonialidad del poder y dinámicas de control social.

El análisis comparativo entre las sentencias judiciales y las entrevistas realizadas evidencia que las decisiones judiciales tienden a reforzar las estructuras de poder coloniales. Este hallazgo se alinea con las percepciones de los entrevistados, quienes expresan un sentimiento de exclusión y falta de equidad en el funcionamiento del sistema legal.

Sin embargo, se observa una dualidad en las respuestas de las comunidades indígenas: mientras algunos entrevistados perciben el sistema judicial como una instancia inamovible que perpetúa la exclusión, otros identifican posibilidades de resistencia dentro de este mismo marco legal. Esta divergencia refleja una tensión entre la persistencia de la colonialidad del poder y las estrategias de resistencia que las comunidades intentan articular, lo que sugiere una percepción ambivalente sobre la capacidad de desafiar las estructuras opresivas.

En las decisiones judiciales analizadas, como la Sentencia Nro. 6 (COD 71), se observa cómo el sistema legal prioriza los derechos individuales sobre los colectivos: "*Con el hecho de censarse como integrante de una comunidad aborigen y con ello peticionar la adjudicación de las tierras en propiedad comunitaria, advierto que de algún modo la actora reconoció que el 'animus domini' sobre ellas lo ejerce la Comunidad Aborigen y no ella de manera individual*," subraya cómo el tribunal pone en cuestión la titularidad colectiva de las tierras, alineándose con la lógica de exclusión de las comunidades indígenas en el sistema legal.

De manera similar, en la Sentencia Nro. 19 (COD 253), el tribunal afirma: *"En cuanto al punto, coincido con el dictamen fiscal en tanto el proceso de desalojo no resulta ser la vía idónea para debatir ni dilucidar cuestiones relativas a la posesión o al dominio sobre el inmueble, pues son propias de otro tipo de procesos (acciones posesorias, petitorias o contractuales reivindicatorias)."* Este extracto puede interpretarse como una forma de exclusión, donde las comunidades indígenas deben adaptarse a un sistema jurídico diseñado bajo lógicas coloniales, que a menudo prioriza los derechos individuales sobre los colectivos.

Las percepciones de los entrevistados reflejan estas dinámicas de poder, un entrevistado expresó: *"La justicia no está de nuestro lado; siempre favorece a los poderosos"* (Entrevistado Nro. 4). Esta cita subraya el sentimiento de recurrente vulnerabilidad y desventaja al que son sometidas las comunidades indígenas cuando intentan buscar justicia a través del sistema legal. Otro entrevistado

mencionó: *"Nos exigen pruebas que no tenemos, pero nuestra historia está en la tierra, no en papeles"* (Entrevistado Nro. 7*)*. Este sentimiento refleja la desconexión entre las expectativas del sistema legal y las realidades de las comunidades indígenas, perpetuando así las dinámicas de exclusión.

La comparación de fuentes revela cómo las decisiones judiciales tienden a reforzar las estructuras de poder coloniales y este fenómeno se alinea con las percepciones de los entrevistados, quienes describen experiencias de exclusión y falta de equidad dentro del sistema legal. Este hallazgo coincide con lo que la antropología jurídica ha demostrado respecto al derecho como un campo de poder, en el que las normativas, lejos de ser neutrales, están profundamente imbricadas en la reproducción de relaciones sociales desiguales. Según Correas (1994), el derecho opera como una herramienta ideológica que encubre las relaciones de poder detrás de una fachada de objetividad, lo que se refleja en la manera en que las sentencias tienden a legitimar las jerarquías coloniales en lugar de cuestionarlas.

Este refuerzo de las estructuras de poder tiene raíces profundas, ya que el sistema jurídico impuesto durante la colonización sigue influenciando las dinámicas legales contemporáneas. Rivera Cusicanqui (2010) sostiene que las leyes coloniales y postcoloniales han sido diseñadas para marginar a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, perpetuando estructuras de desigualdad y explotación. En el contexto argentino, estas estructuras se manifiestan en las dificultades que enfrentan las comunidades indígenas para hacer efectivos sus derechos territoriales, a pesar de su reconocimiento formal en la Constitución. Las entrevistas revelan que, aunque los pueblos indígenas han sido reconocidos jurídicamente, siguen enfrentándose a barreras legales y administrativas que perpetúan su exclusión y marginación.

El análisis también muestra diferencias significativas en las percepciones de los entrevistados sobre su capacidad para resistir estas dinámicas. Mientras que algunos expresan un sentido de impotencia frente a un sistema legal que refuerza su exclusión, otros reconocen la posibilidad de utilizar el derecho como una herramienta de resistencia. Correas (1993) explica que, aunque el derecho funciona como un mecanismo de control social, también puede ser apropiado por sectores marginados para transformar las relaciones de poder. En este sentido, los entrevistados que ven en el derecho una posibilidad de resistencia están reconociendo que, aunque limitado, el marco legal puede ser utilizado para defender sus derechos y desafiar el control estatal.

Este fenómeno de resistencia limitada refleja una tensión inherente en la relación de las comunidades indígenas con el sistema legal. Por un lado, el derecho continúa reproduciendo la

colonialidad del poder, como lo describe Mignolo (2010), al imponer un marco normativo que no refleja las realidades vividas por estas comunidades. Por otro lado, algunos entrevistados perciben que pueden utilizar las mismas herramientas legales que los oprimen para resistir y reclamar sus derechos territoriales y culturales. Esta ambivalencia es consistente con lo que Rivera Cusicanqui (2010) señala sobre las luchas de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus derechos colectivos, que no solo se centran en la restitución de tierras, sino también en la recuperación de su identidad y autonomía.

A pesar de los avances legislativos, como las modificaciones introducidas en el Código Civil y Comercial (2015) que buscan incorporar una justicia más acorde con la diversidad cultural de un país tan extenso y plural como Argentina, persisten sectores sociales cuyas particularidades y necesidades específicas no son debidamente contempladas. En este sentido, las normas jurídicas no alcanzan un nivel de inclusión que abarque plenamente las realidades de estos grupos, especialmente en lo que respecta a las comunidades indígenas. Asimismo, la interpretación judicial de dichas normas no siempre exhibe la flexibilidad necesaria para abordar de manera adecuada las particularidades culturales y contextuales de estos casos, lo que dificulta un acceso efectivo y equitativo a la justicia para estas comunidades, perpetuando su marginación en el ámbito jurídico.

Este hallazgo es fundamental para entender la exclusión que experimentan las comunidades indígenas en el noroeste argentino, un fenómeno que se inscribe en un contexto más amplio de opresión histórica. En este sentido, el análisis histórico de Lenton (2014) sobre los debates parlamentarios ofrece un marco valioso para contextualizar estos resultados, al describir cómo, desde finales del siglo XIX, el enfoque estatal hacia los pueblos indígenas ha sido territorializador y paternalista. Esta tendencia ha consolidado, a lo largo del tiempo, dinámicas de exclusión política y jurídica. Aunque se centra en un período histórico diferente, los aportes de Lenton (2014) complementan significativamente los resultados contemporáneos de esta investigación, revelando la continuidad de estas estructuras coloniales en la Argentina actual.

Esta dinámica de exclusión también es observada por Lager (2022), quien describe patrones similares en las comunas de la costa ecuatoriana, donde la mercantilización del territorio y los procesos de privatización han debilitado las estructuras comunales tradicionales, perpetuando la exclusión frente al poder del Estado y de actores económicos externos. La conexión entre ambos contextos refuerza la validez de los resultados obtenidos en este estudio, ya que demuestra que las dinámicas de exclusión no son fenómenos aislados, sino que forman parte de una tendencia más amplia de imposición de estructuras de poder colonial sobre las comunidades indígenas en América Latina.

En el trabajo de Pragier (2021), sobre la explotación del litio en el norte argentino, también se observan las presiones a las que se enfrentan las comunidades de Susques y Salinas Grandes, de la misma manera que en esta tesis se observa que, el sistema judicial y las políticas estatales continúan priorizando los intereses económicos, lo que deja a las comunidades indígenas en una posición de vulnerabilidad frente a la explotación de sus territorios. Esta continuidad en las dinámicas coloniales evidencia que las luchas contemporáneas de las comunidades indígenas no solo se enfrentan a un sistema jurídico excluyente, sino también a un aparato estatal que perpetúa estas formas de dominación en favor de proyectos extractivos y privatizadores.

La persistencia de estas estructuras coloniales en el sistema jurídico argentino también es señalada por Yankillevich (2019a), quien sostiene que el patrón de exclusión que afecta a las comunidades indígenas refleja la colonialidad del poder, la cual sigue permeando las instituciones legales. Según Yankillevich (2019a) este poder se manifiesta en la reducción de la cosmovisión indígena a categorías jurídicas que no se ajustan a sus realidades colectivas, lo que coincide plenamente con los hallazgos de esta investigación. A pesar de que los enfoques utilizados abordan la problemática desde perspectivas diferentes, los resultados coinciden en señalar que el derecho opera como un instrumento de control y legitimación del poder, profundizando la exclusión de las comunidades indígenas en lugar de ofrecerles una vía efectiva de protección de sus derechos.

Resistencia y juridización.

Al comparar las sentencias y las entrevistas, se evidencia una tendencia en la que las comunidades indígenas intentan utilizar el sistema legal como una herramienta de resistencia, aunque con resultados mixtos. Mientras algunas sentencias muestran apoyo a sus reclamaciones, otras revelan las limitaciones inherentes a un sistema que no siempre se alinea con sus necesidades y realidades. Las entrevistas complementan esta perspectiva, destacando tanto las estrategias de resistencia como las frustraciones experimentadas en el proceso.

En la Sentencia Nro. 5 (COD 226), se observa cómo las comunidades intentan defender sus derechos a través del sistema legal: *"El recurso de inconstitucionalidad es atendible toda vez que la cámara se extralimitó en sus funciones al rechazar in limine la demanda contra el Estado Nacional. [...] corresponde admitir el recurso de inconstitucionalidad articulado por la Comunidad Aborigen*." Esto demuestra que, a pesar de las barreras, las comunidades buscan en el ámbito jurídico una herramienta de resistencia.

En contraste, en la Sentencia Nro. 17 (COD 167), a pesar de que la comunidad presentó pruebas de ocupación ancestral, el tribunal falló en su contra: *"No se pretende la adquisición del dominio*

por el transcurso del tiempo sino el reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria [...] Atento el objeto de la demanda y teniendo en cuenta que el derecho invocado por la actora no ha sido reglamentado, entiendo que el trámite que se le imprimió a la causa resulta razonable." Esto refleja los límites de la resistencia jurídica cuando se enfrenta a un sistema que no reconoce plenamente los derechos indígenas. Si bien el marco jurídico reconoce ciertos derechos a las comunidades indígenas, las barreras prácticas y el enfoque predominantemente individualista del sistema judicial continúan excluyendo y marginando las cosmovisiones indígenas, así como sus formas de vida comunitaria. Esta desconexión entre el reconocimiento formal de los derechos y su efectiva implementación evidencia una falta de adecuación del sistema legal para integrar plenamente la diversidad cultural y las particularidades colectivas que caracterizan a estos pueblos.

Los entrevistados también abordaron cómo perciben su participación en el sistema jurídico. Uno de ellos afirmó: "*Y en relación a la sentencia... tenemos algo de conocimiento y tenemos que estar más decididos... necesitamos abogados que entiendan de nuestros derechos indígenas"* (Entrevistado Nro. 2). Esta cita muestra una conciencia sobre las limitaciones del sistema legal y cómo las comunidades deben adaptarse para navegar dentro de él. Otro entrevistado expresó: *"A pesar de estos desafíos, seguimos luchando y organizándonos. La falta de justicia nos da la fuerza para encontrar otras formas de resistencia"* (Entrevistado Nro. 5). Esta afirmación resalta la persistencia de las comunidades en utilizar la resistencia jurídica como una estrategia clave, a pesar de los desafíos.

La dinámica de la interacción entre los actores indígenas y un campo jurídico es compleja y, lejos de ser neutral, está profundamente arraigado en relaciones de poder históricamente constituidas. Según Bourdieu y Wacquant (1992), el derecho opera como un campo donde diversas formas de capital movilizado por los actores sociales para legitimar sus posiciones y aspiraciones. En este contexto, las comunidades indígenas intentan valerse de su capital cultural y simbólico para desafiar las imposiciones hegemónicas del Estado y otros actores dominantes. Sin embargo, las decisiones judiciales revelan las limitaciones de este proceso, ya que el campo jurídico continúa funcionando bajo una estructura de poder que refuerza las lógicas coloniales.

El concepto de violencia simbólica (Bourdieu, 2007b) es fundamental para comprender esta resistencia limitada. Las sentencias judiciales, aunque aparentemente neutrales, actúan como mecanismos de dominación que deslegitiman o invisibilizan las prácticas culturales de las comunidades indígenas. En este sentido, el derecho se convierte en una herramienta que perpetúa las desigualdades históricas, en lugar de operar como un mecanismo de justicia equitativa. A través de esta violencia simbólica, el sistema legal reproduce las jerarquías sociales que subyugan a los

pueblos originarios, lo que restringe su capacidad de transformar su situación por medio de los canales formales del derecho.

A pesar de estas barreras, las entrevistas revelan que las comunidades no son meros sujetos pasivos dentro del sistema. El análisis del habitus de Bourdieu (1990) permite entender cómo las disposiciones sociales de las comunidades indígenas han facilitado el desarrollo de estrategias de resistencia, aunque con resultados variados. Las entrevistas recogen testimonios comunitarios que reconocen tanto las oportunidades como las limitaciones del sistema legal. En este sentido, el habitus de las comunidades, como un conjunto de disposiciones culturales e históricas, las orienta hacia el uso del derecho como un medio para defender sus territorios y derechos, a pesar de las dificultades impuestas por las estructuras dominantes.

La movilización del capital simbólico por parte de las comunidades también juega un papel crucial en este proceso. De acuerdo con Bourdieu y Wacquant (1992), el capital simbólico se refiere al reconocimiento y legitimación de ciertos valores y prácticas dentro del campo social. En el caso de las comunidades indígenas, sus reclamaciones territoriales y culturales están imbuidas de significados ancestrales y simbólicos que intentan legitimar en el campo jurídico. Sin embargo, el sistema legal, al estar basado en las lógicas del derecho occidental, a menudo no reconoce plenamente estas prácticas, lo que refuerza las dificultades que enfrentan las comunidades para obtener sentencias favorables.

La teoría de Sousa Santos (2014) sobre la pluralidad de órdenes jurídicos y la resistencia desde dentro del sistema legal es especialmente pertinente en este contexto, el autor sostiene que, aunque el derecho formal tiende a ser un espacio de reproducción de las relaciones de poder, las comunidades marginadas pueden, en ciertos casos, utilizar el mismo sistema como una plataforma para articular sus demandas y resistir. Las entrevistas indican que algunas comunidades han logrado obtener decisiones judiciales favorables, lo que muestra que, aunque limitado, existe un margen de agencia dentro del campo jurídico. Sin embargo, este margen de maniobra sigue siendo restringido por las propias estructuras del sistema, lo que explica los resultados mixtos en la resistencia legal de las comunidades.

Finalmente, la resistencia cultural y simbólica descrita por autores como Escobar (2014) y Haesbaert (1997) ofrece un marco adicional para comprender cómo las comunidades indígenas no solo buscan resistir en el ámbito jurídico, sino también en el plano cultural. Para estas comunidades, el territorio y los derechos ancestrales son más que cuestiones legales; representan una parte esencial de su identidad y cosmovisión. Las entrevistas reflejan esta dimensión simbólica

de la lucha, ya que los comuneros no solo ven sus territorios como recursos materiales, sino también como espacios cargados de significados culturales y espirituales. Esta resistencia cultural es fundamental para entender cómo las comunidades desafían las estructuras dominantes, incluso cuando las decisiones judiciales no siempre favorecen sus reclamos.

En el caso de la Sentencia Nro. 5 (COD 226), se analiza cómo una comunidad presenta un recurso de inconstitucionalidad para proteger su territorio, esta forma de resistencia es valorada positivamente en las entrevistas, ya que muestra cómo las comunidades buscan usar el sistema judicial a su favor, aun cuando este no esté diseñado para tener en cuenta sus realidades. Lenton (2014) también documenta cómo, a mediados del siglo XX, las comunidades indígenas comenzaron a apropiarse de las herramientas legales del Estado para defender sus derechos territoriales, lo que refuerza la idea de que esta resistencia ha sido una constante a lo largo del tiempo.

A pesar de las barreras, las comunidades buscan articular su resistencia dentro de un marco legal que está diseñado desde una lógica que no contempla su cultura y particularidades. Bartolomé (2017) complementa esta observación al señalar que, en México, la resistencia indígena frente al sistema legal también ha sido una estrategia ambivalente, donde las comunidades se ven obligadas a actuar dentro de un marco normativo que, en muchos casos, refuerza su exclusión.

En cuanto a la respuesta de las comunidades indígenas ante el sistema judicial, los resultados ponen en énfasis en el uso de estrategias de defensa legal y en la preparación de las nuevas generaciones para continuar la lucha por sus derechos. Los entrevistados destacan la importancia de proyectos orientados a educar a los más jóvenes sobre sus derechos, como menciona el Entrevistado Nro. 2: "*Estamos trabajando en proyectos para que nuestros hijos conozcan sus derechos*", Magallanes (2019), enfoca en cómo los conflictos territoriales también son espacios de reconfiguración de las identidades políticas y estrategias colectivas. Las comunidades indígenas no solo defienden sus tierras, sino que se consolidan como actores políticos claves en la lucha por el reconocimiento y la autonomía.

La necesidad urgente de una transformación profunda del sistema jurídico con las sentencias judiciales analizadas, que favorecen el desalojo de comunidades indígenas a pesar de reconocer sus derechos históricos sobre los territorios, ejemplifica las limitaciones del sistema para proteger efectivamente estos derechos. Magallanes (2019) también critica el enfoque fragmentado del Estado, que no logra articular una política coherente que garantice la protección de los derechos territoriales indígenas.

La identificación de la juridización como una estrategia ambivalente para las comunidades indígenas, se debe al uso que estas hacen del sistema legal a su favor, presentando recursos de inconstitucionalidad, para defender sus derechos. Tratándose de una forma de resistencia valorada positivamente en las entrevistas, como lo menciona el Entrevistado Nro. 5: "*A pesar de estos desafíos seguimos luchando y organizándonos*". Estos esfuerzos de las comunidades también son reconocidos por Yankillevich (2019a) a lo que agrega una crítica más profunda al proceso de juridización, señalando que, aunque ofrece una vía de lucha, también encierra a las comunidades en un marco legal que no está diseñado para ellas, lo que limita sus posibilidades de reivindicación

Desigualdad y justicia.

Al comparar las sentencias y las entrevistas, se observa un patrón que revela cómo la desigualdad estructural se manifiesta tanto en el ámbito judicial como en las experiencias cotidianas de las comunidades indígenas. Mientras que las sentencias tienden a reforzar estas desigualdades, las entrevistas ofrecen una visión interna de cómo las comunidades experimentan y perciben estas injusticias. La consistencia entre las decisiones judiciales y las percepciones de los entrevistados subraya la necesidad de una mayor equidad en el sistema legal.

En la Sentencia Nro. 12 (COD 247), se cuestiona la capacidad de la comunidad para cumplir con los requisitos probatorios necesarios para obtener el beneficio de litigar sin gastos, lo que podría interpretarse como un indicio de las barreras sistémicas que enfrentan las comunidades dentro del sistema judicial: "*Manifiesta que la Comunidad Aborigen no acredita los extremos de ley exigidos para su concesión.*" El fallo subraya la dificultad que enfrentan estas comunidades para presentar pruebas dentro de los parámetros establecidos por el sistema, lo que puede llevar a la desestimación de sus derechos.

En la Sentencia Nro. 14 (COD. 135), el tribunal rechazó un amparo precautorio interpuesto por la Comunidad Aborigen S/N contra el Estado Provincial, en el cual se solicitaba la suspensión de la Resolución N° 105-SPI-17. La decisión se fundamentó en la ausencia de pruebas suficientes que acreditaran la existencia de un perjuicio irreparable. Este fallo revela las profundas limitaciones que enfrentan las comunidades indígenas al intentar cumplir con los rigurosos requisitos probatorios exigidos por el sistema judicial, particularmente en relación con la demostración de un daño inminente o de difícil reparación. En este caso, la comunidad alegaba la ilegitimidad del proceso electoral que condujo a la elección de sus autoridades, debido a vicios en el procedimiento. Sin embargo, el tribunal concluyó que no se había acreditado de manera adecuada el perjuicio irreparable que la ejecución de la Resolución podría ocasionar. Esta situación evidencia las

barreras estructurales que limitan el acceso efectivo de las comunidades indígenas a la justicia, dado que los estándares probatorios impuestos por el sistema judicial resultan, en muchos casos, inadecuados para atender las particularidades culturales y organizativas de estos colectivos.

Los entrevistados también comentaron sobre su percepción de justicia o injusticia en los fallos judiciales. Un entrevistado afirmó*: "Para nosotros los coyas, la justicia no existe. Presentamos denuncias y hacemos trámites, pero parece que la justicia solo se aplica a ciertos grupos"* (Entrevistado Nro. 8). Este sentimiento refleja la percepción de desigualdad en el acceso a la justicia, la percepción de discriminación en el ámbito judicial por origen étnico y el sentimiento de insuficiencia e impotencia. A pesar de esta frustración, el mismo entrevistado señaló: "*Aunque esto es frustrante, he aprendido que estamos acostumbrados a esta lucha. Nos da fuerza para seguir adelante y buscar nuevas formas de organizarnos"* (Entrevistado N° 8). Esta cita resalta la persistencia en la lucha jurídica, a pesar de los desafíos, porque se cree que éste es el camino que deben seguir para obtener resultados amparados por la ley e irrevocables, similar a la idea de que las comunidades indígenas siguen luchando porque es su única opción.

A partir de este análisis, se observa que no solo es necesario avanzar hacia la creación de un corpus jurídico adaptado a las particularidades culturales de las comunidades que habitan en Argentina, sino también hacia una transformación en la forma en que los jueces interpretan las leyes. Este cambio es fundamental para que las decisiones judiciales puedan sentar precedentes que promuevan una justicia inclusiva y equitativa, capaz de responder de manera efectiva a las necesidades y derechos de las comunidades indígenas.

A partir del análisis de las sentencias y las percepciones de los entrevistados, se observa que el sistema judicial argentino continúa enfrentando serias limitaciones para ofrecer justicia equitativa a las comunidades indígenas. En Sentencia como la Nro. 14 (COD 135), el tribunal rechazó un amparo precautorio por falta de pruebas de un daño irreparable, lo que evidencia la falta de flexibilidad judicial para adaptar las normas procesales a las realidades de estos grupos vulnerables. Este tipo de decisiones perpetúa las desigualdades estructurales y desconecta las garantías formales de la justicia efectiva.

Del mismo modo, en la Sentencia Nro. 19 (COD 253), el tribunal falló en contra de la comunidad indígena que reclamaba tierras ancestrales, priorizando los derechos de propiedad privada y excluyendo las reivindicaciones comunitarias. Este tipo de fallos refuerza el statu quo y mantiene las estructuras de poder que históricamente han marginado a las comunidades indígenas.

Las entrevistas también revelan que las comunidades, aunque intentan utilizar el sistema judicial para mejorar sus condiciones, se encuentran con barreras que limitan su capacidad real de acceder a la justicia. Estas barreras incluyen los estrictos requisitos probatorios y la falta de comprensión de las particularidades culturales por parte de los tribunales. En este sentido, las decisiones judiciales, aunque puedan ser formalmente correctas, no necesariamente promueven una justicia inclusiva y equitativa.

El análisis de las entrevistas también revela la importancia de la perspectiva feminista en la evaluación de la justicia. Mackinnon (1989) sostiene que cualquier teoría de la justicia que ignore las experiencias concretas de grupos oprimidos, no puede considerarse verdaderamente igualitaria. En el caso de las comunidades indígenas, la etnia agrava las desigualdades, una dimensión que frecuentemente se refleja en las sentencias judiciales. Como afirmó uno de los entrevistados: "*Para nosotros los coyas, la justicia no existe. Presentamos denuncias y hacemos trámites, pero parece que la justicia solo se aplica a ciertos grupos"* (Entrevistado Nro. 8). Esta percepción refleja lo que Mackinnon (1989) describe como la invisibilización de los grupos minoritarios en la aplicación de la justicia, ya que los sistemas legales tienden a reproducir las mismas dinámicas de opresión que enfrentan estos grupos en su vida cotidiana.

Como se viene diciendo, las decisiones judiciales deberían no solo garantizar derechos formales, sino también reconocer y respetar las particularidades culturales de las comunidades indígenas, algo que las entrevistas sugieren que no siempre ocurre en la práctica, esto va de la mano con la teoría del multiculturalismo y la justicia en sociedades diversas, tal como lo desarrollan Taylor (1992) y Kymlicka (2003), subrayando que el reconocimiento de las identidades culturales es esencial para construir una sociedad justa.

Los resultados revelan las limitaciones del sistema judicial para proteger efectivamente los derechos territoriales de las comunidades indígenas, incluso cuando se reconocen sus derechos históricos, Pragier (2021) complementa este análisis al criticar la falta de implementación de mecanismos de consulta previa, libre e informada, lo que perpetúa la exclusión de las comunidades indígenas en los procesos de toma de decisiones. La ausencia de estos mecanismos refleja la desigualdad estructural que tanto en la investigación de Pragier (2021) como esta investigación subrayan como un obstáculo fundamental para la protección de los derechos indígenas.

Tanto en el contexto del noroeste argentino como en el Chaco, las comunidades se ven atrapadas en un sistema que perpetúa la exclusión, Barbetta (2019) refuerza esta observación en su estudio sobre los litigios relacionados con la tierra en la provincia del Chaco, donde se demuestra que las

decisiones judiciales a menudo favorecen a empresarios agropecuarios, marginalizando a las comunidades campesinas e indígenas. Y esto se repite en las sentencias judiciales estudiadas en esta tesis. El sistema judicial reproduce dinámicas de poder que priorizan la mercantilización de la tierra sobre los derechos ancestrales y colectivos.

En cuanto al acceso a la justicia, los resultados señalan la desigualdad estructural que enfrentan las comunidades indígenas. Los entrevistados expresan una percepción generalizada de exclusión, afirmando que el sistema legal tiende a favorecer a los grupos más poderosos. Esta percepción es compartida por las comunidades campesinas e indígenas en el estudio de Barbetta (2019), quien destaca cómo las decisiones judiciales en el Chaco rara vez reconocen plenamente los derechos posesorios de estas comunidades, inclinándose en favor de intereses empresariales. Ambas investigaciones concluyen que es necesaria una reforma estructural del sistema judicial para garantizar un acceso equitativo a la justicia y la protección de los derechos colectivos sobre la tierra.

Desde una perspectiva judicial, las comunidades indígenas enfrentan considerables obstáculos en el cumplimiento de los estrictos requisitos probatorios de forma y fondo exigidos por el sistema legal. Los requisitos de forma requieren que las comunidades cumplan con los procedimientos establecidos y presenten la documentación adecuada, lo cual resulta especialmente desafiante debido a las limitaciones estructurales, como la falta de acceso a asesoramiento legal y la escasa familiaridad con las complejidades procesales del sistema judicial. En cuanto a los requisitos de fondo, el sistema demanda la presentación de pruebas sustanciales y detalladas que acrediten de manera indiscutible la afectación de sus derechos o la existencia de un daño irreparable. Esta carga probatoria, que suele requerir evidencia técnica y peritajes especializados, coloca a las comunidades indígenas en una posición de desventaja, ya que sus capacidades para satisfacer estos estándares son limitadas. En consecuencia, estas exigencias probatorias de forma y fondo refuerzan las inequidades estructurales y perpetúan la exclusión de estos grupos del acceso pleno a la justicia. Pérez Castellón (2013) subraya que en Bolivia el sistema judicial ha sido ineficaz en la protección de los derechos indígenas, perpetuando la desigualdad y la marginación de estas comunidades.

Las dificultades prácticas que enfrentan las comunidades para acceder a la justicia, observadas en algunas sentencias, como la Sentencia Nro. 12 (COD 247), donde las exigencias probatorias resultan inalcanzables, es coincidente con la afirmación de Yankillevich (2019a), de que el sistema impone a las comunidades indígenas la necesidad de adaptarse a las lógicas del derecho estatal, lo que termina por restringir su capacidad para ejercer una resistencia efectiva.

Un aspecto clave para comprender la tensión de sentido que surge en las comunidades y el sistema judicial es la denuncia de las profundas desigualdades que afectan el acceso a la justicia para las comunidades indígenas. Las entrevistas realizadas en esta tesis revelan una sensación compartida de injusticia, como lo expresa el Entrevistado Nro. 8: "*Para nosotros los coyas la justicia no existe. Presentamos denuncias y hacemos trámites, pero parece que la justicia solo se aplica a ciertos grupos*". Este sentimiento es corroborado por la Sentencia N° 12 (COD 247), donde las barreras formales impuestas por el sistema judicial resultan insuperables para las comunidades. esta exclusión estructural, también es observada por Yankillevich (2019a), quien sostiene que el sistema legal argentino se construye sobre normas que no tienen en cuenta las realidades culturales y económicas de las comunidades indígenas, perpetuando así las desigualdades existentes

Territorio y prácticas sociales.

Al comparar las sentencias judiciales y las entrevistas realizadas, se evidencia una clara divergencia en la concepción del territorio. Mientras que las decisiones judiciales tienden a tratar la tierra como un recurso económico sujeto a las reglas formales de la propiedad privada, conforme a lo dispuesto en la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación, las comunidades indígenas conciben el territorio como una parte integral de su identidad cultural y social. Esta diferencia en la interpretación del territorio refleja las tensiones subyacentes entre el marco jurídico estatal, que prioriza la propiedad privada, y las cosmovisiones indígenas, para quienes el territorio va más allá de un bien patrimonial, constituyendo un elemento fundamental de su existencia colectiva y de sus prácticas ancestrales.

Ejemplo de eso es la Sentencia Nro. 10 (COD 279) en donde la intervención de la Comunidad Aborigen S/N en un juicio de desalojo fue rechazada por considerarse extemporánea, es decir, presentada fuera de los plazos procesales establecidos por la ley, a pesar de los reclamos de posesión ancestral que la comunidad había sostenido durante años. Esta decisión refleja cómo el sistema judicial, al priorizar los plazos formales sobre las particularidades históricas y culturales de los pueblos indígenas, limita su acceso a la justicia y perpetúa la marginalización de sus derechos territoriales.

De manera similar, en la Sentencia Nro. 22 (COD 536), aunque se reconoce el uso histórico del territorio por parte de la Comunidad Indígena, el tribunal ordena el desalojo debido a la falta de derechos legales formalizados sobre las tierras ocupadas.

Estos ejemplos ponen de manifiesto por un lado la priorización de requisitos procesales y formales sobre el reconocimiento de los derechos colectivos de las comunidades indígenas, por otro el

desconocimiento del valor cultural y espiritual del territorio, limitando su protección al ámbito de los derechos individuales y formales.

Las narrativas de los entrevistados resaltan la profunda conexión entre el territorio y las prácticas sociales. Un entrevistado afirmó: "*Nosotros somos parte de nuestro territorio, no podríamos existir sin nuestro territorio y nuestro territorio es todo, no es solamente lo que es tierra sino todo lo que es el subsuelo, el suelo, el aire, todo el cosmos porque ahí nosotros nos desarrollamos nuestra parte económica y también nuestra parte espiritual."* (Entrevistado Nro. 1*)*. Esta cita destaca la importancia del territorio no solo como un espacio físico, sino como un elemento central en la identidad y vida comunitaria. Otro entrevistado mencionó: *"El territorio en mi caso significa todo, todo para mí... es un espacio tan importante que lo conservamos y lo cuidamos día a día"* (Entrevistado Nro. 6). Este sentimiento refleja la visión del territorio como parte integral de la identidad y vida comunitaria, en contraste con la percepción del sistema legal, que lo trata de manera más restrictiva y económica sin tener en cuenta los significados simbólicos y espirituales que tiene para las personas que lo habitan.

Esta discrepancia entre la perspectiva legal y la comunal, subraya la necesidad de adaptar el marco legal para reflejar mejor las realidades y valores de las comunidades indígenas, como parte integrante del territorio argentino.

Ya que, mientras el sistema judicial tiende a tratar la tierra como un recurso económico regido por normas de propiedad, las comunidades indígenas la perciben como un componente integral de la vida, de su identidad cultural y social.

De las entrevistas a las comunidades, resalta la importancia de la dimensión social del espacio (Durkheim, 1991), siendo este más que solo un espacio físico, un ámbito cargado de significados sociales y simbólicos que refuerzan la cohesión colectiva. Para las comunidades indígenas, el territorio no es simplemente un recurso material, sino un espacio sacralizado a través de rituales y prácticas comunitarias que consolidan la identidad grupal y refuerzan las fronteras simbólicas. Esta descripción de la conexión profunda con la tierra, considerándola un elemento esencial para la existencia y las relaciones sociales y espirituales se visibiliza en cada entrevista. Además, la importancia de la tierra como un constructo cultural que se define a través de las prácticas culturales y los rituales que le otorgan significado (Geertz, 1987) es un aspecto que se revela en las entrevistas cuando las personas de las comunidades cuentan sobre los rituales y ceremonias que realizan y se relacionan con la tierra, y que refuerzan la identidad colectiva, sirviendo también, como una forma de resistencia cultural frente a la amenaza de la apropiación externa.

Las comunidades indígenas estructuran su territorio también en relación con mitos, leyendas y oposiciones simbólicas que reflejan su cosmovisión y sus estructuras sociales, y esto contribuye a la comprensión del territorio como un espacio organizado a través de estructuras simbólicas que reflejan la organización social y los valores culturales de las comunidades (Lévi-Strauss, 1990).

A todo esto, se debe agregar la mirada del territorio como espacio de satisfacción de necesidades materiales, sociales y simbólicas cruciales para el mantenimiento de la cohesión comunitaria (Malinowski,1985). Para las comunidades indígenas, la tierra no es solo un recurso económico, sino un espacio vital donde se desarrollan sus prácticas culturales, espirituales y sociales. Las entrevistas destacan la importancia de preservar el territorio no solo como fuente de sustento, sino como una base fundamental para la transmisión de valores y tradiciones a futuras generaciones.

Finalmente, el territorio en las comunidades indígenas es fundamental para la construcción identitaria, ya que, las dinámicas de resistencia y la reivindicación del territorio son esenciales para la afirmación de la identidad colectiva (Foucault, 2000). A través de la recuperación de sus saberes sometidos y la defensa de sus tierras, las comunidades indígenas desafían las estructuras de poder externas que intentan imponer una visión hegemónica sobre su identidad y su espacio.

Las diferentes percepciones sobre la importancia de la tierra para las comunidades no son excluyentes unas de otras, son todas aplicables a su territorio, ya que, para ellas, el lugar que habitan es tanto material como inmaterial, es tanto actual como ancestral y futuro, es identidad, simbolismo, pertenencia, familia, unidad, cosmovisión, religión, ceremonias y rituales. Es simple y complejamente toda la vida, mientras que para el sistema judicial la tierra es solo un espacio material susceptible de formar parte del mercado, un capital económico, sin carga emocional, y esta es la base de la tensión de sentido que surge entre los resultados de sentencias judiciales y la percepción de quienes son o fueron parte de estos conflictos por la tierra en la provincia de Jujuy.

Esta visión integral del territorio contrasta fuertemente con la lógica del derecho privado, que trata la tierra como un recurso sujeto a normas de propiedad privada y acentúa la profunda desconexión entre la concepción estatal del territorio y la cosmovisión indígena. Testimonios como el del Entrevistado Nro. 1 expresan esta diferencia*: "Nosotros somos parte de nuestro territorio... es todo el cosmos porque ahí nos desarrollamos económica y espiritualmente".* Esto también es resaltado en el análisis de Lenton (2014) desde los debates parlamentarios, en los que el territorio era visto de manera utilitaria, sin considerar el valor cultural para los pueblos indígenas, subrayando la necesidad urgente de reformar el marco normativo para reflejar de manera adecuada

las realidades territoriales y culturales de las comunidades indígenas, coincidiendo con lo expuesto en esta investigación.

Las comunidades entrevistadas expresan su frustración ante un sistema judicial que privilegia una lógica individualista, desconociendo la complejidad y profundidad de su vínculo con la tierra. Esta desconexión entre el derecho y la cosmovisión indígena revela una estructura de poder que sigue excluyendo a los pueblos originarios. De manera similar, Bartolomé (2017) aborda un fenómeno similar en México, destacando cómo los sistemas legales han sido históricamente utilizados por los Estados para consolidar el control sobre los territorios indígenas. Aunque su análisis es histórico, coincide con los hallazgos de esta investigación al mostrar cómo el sistema jurídico sigue privilegiando los derechos individuales en detrimento de las visiones colectivas y culturales de las comunidades indígenas, reforzando así las estructuras coloniales

Aunque centrada en un contexto geográfico diferente, Magallanes (2019) también identifica en su estudio sobre los conflictos territoriales en el sur mendocino, una tendencia del sistema judicial a jerarquizar la propiedad privada y advierte que los conflictos territoriales en esa región son manejados bajo criterios que privilegian los derechos individuales, lo que contribuye a la marginalización de las comunidades indígenas dentro del sistema judicial y político.

El valor cultural y espiritual que las comunidades indígenas otorgan a su territorio, a través de los testimonios recogidos revelan que la tierra es percibida no solo como un recurso económico, sino como parte esencial de su identidad colectiva y de su existencia misma. Este vínculo se refleja en la importancia del territorio para la cosmovisión indígena. De manera similar, Magallanes (2019) subraya cómo las comunidades del sur mendocino enfrentan los conflictos territoriales no solo como disputas legales, sino como oportunidades para reafirmar su identidad cultural y resistir las imposiciones de una visión hegemónica que reduce el territorio a un mero bien material. Ambas investigaciones coinciden en que la lucha por el territorio es mucho más que una cuestión legal; es una batalla por la supervivencia cultural y la autodeterminación.

Los entrevistados subrayan que la tierra es mucho más que un recurso económico, representando una parte esencial de su identidad colectiva y espiritual. Este sentimiento es compartido en el trabajo de Lager (2022), quien enfatiza que, para las comunas ecuatorianas, el territorio es el corazón de su vida comunitaria. Se coinciden en que la lucha por el territorio no es solo una cuestión legal, sino también una batalla por la supervivencia cultural y la defensa de la autonomía indígena

El enfoque judicial, al ignorar esta dimensión cultural, perpetúa la desconexión entre la justicia estatal y la cosmovisión indígena. De manera similar, Pragier (2021) subraya cómo las comunidades de Salinas Grandes rechazan la explotación del litio no solo por razones económicas, sino también porque perciben los proyectos mineros como una amenaza a su forma de vida y a su conexión espiritual con la tierra. Existe coincidencia, en que la lucha por el territorio va más allá del ámbito legal, involucrando dimensiones culturales y espirituales que el marco jurídico tradicional no está preparado para abordar.

El modelo de imposición sobre las comunidades indígenas, caracterizado por la falta de reconocimiento de sus usos y costumbres en relación con la tierra, genera una dinámica de resistencia constante. Estas comunidades, tras enfrentar la imposición inicial, recurren al sistema legal como una forma de defensa, aunque a menudo se encuentren con sentencias mayoritariamente adversas. A pesar de ello, persisten en la lucha judicial, conscientes de que en la mayoría de los casos no obtendrán un fallo favorable. Este ciclo de imposición, resistencia y derrota se convierte en un círculo vicioso que refleja un patrón repetido en muchos países de América Latina, donde las comunidades resisten y luchan sin perder su dignidad, aun frente a un sistema que históricamente no les ha sido favorable.

En esta tesis se ha investigado la manera en que las comunidades indígenas utilizan el sistema legal como herramienta para resistir el despojo y defender sus derechos, aunque con resultados mixtos. Sin embargo, existen otras maneras de resistencia Barbetta (2019), por ejemplo, observa que las comunidades campesinas de Chaco a menudo recurren a la ocupación y a otras formas de resistencia activa fuera del ámbito legal, ya que no consideran el sistema judicial una opción viable. Esta divergencia refleja las diferencias en la forma en que las comunidades enfrentan las presiones sobre sus territorios y la capacidad limitada del sistema judicial para ofrecer soluciones justas.

Crítica y Transformación.

El análisis de las sentencias y las entrevistas revela una tensión evidente entre las expectativas de justicia de las comunidades indígenas y las decisiones judiciales que, en muchos casos, perpetúan la desigualdad estructural. La crítica hacia el sistema legal no solo se expresa en las entrevistas, sino que también se refleja en las sentencias, las cuales en su mayoría se alinean con estructuras de poder que mantienen la exclusión de estas comunidades. Esta brecha entre la teoría y la práctica legal destaca la necesidad de una transformación que considere las particularidades culturales y territoriales de las comunidades indígenas para lograr una justicia más inclusiva y equitativa.

El cruce de datos entre las decisiones legales y las experiencias de las comunidades evidencia la urgencia de revisar las estructuras de poder en el sistema judicial y avanzar hacia un marco legal que no solo reconozca, sino que también proteja activamente los derechos de las comunidades indígenas.

Las entrevistas subrayan la percepción de que las leyes actuales no están diseñadas para favorecer a las comunidades indígenas; por el contrario, las excluyen de procesos justos y equitativos. Un entrevistado destacó la necesidad de *"cambiar las leyes y dar más favores a la comunidad también porque la comunidad defiende la tierra que dejó sus abuelos"* (Entrevistado Nro. 5), lo que subraya el descontento con el sistema legal actual.

En contraste, sentencias como la Sentencia Nro. 10 (COD 279) y la Sentencia Nro. 22 (COD 536) abordan temas de desalojo y muestran la imposibilidad de las comunidades indígenas de cumplir con los requisitos formales del sistema judicial, a pesar de sus reclamaciones basadas en la ocupación histórica o el uso tradicional del territorio. Esto refleja cómo el sistema legal puede desestimar reclamaciones territoriales al no adaptarse a las realidades culturales y socioeconómicas de las comunidades indígenas, perpetuando así la exclusión y reforzando la necesidad de un marco legal más inclusivo.

La limitada efectividad del derecho en los casos territoriales de Jujuy se manifiesta en que las decisiones judiciales no se fundamentan en un consenso democrático y participativo, sino que responden a una racionalidad instrumental que tiende a privilegiar los intereses económicos y empresariales, sin considerar adecuadamente la diversidad cultural del territorio argentino. El sistema jurídico debería facilitar un diálogo inclusivo entre todas las partes involucradas (Habermas, 1996). Según Habermas (1992a), este tipo de racionalidad distorsiona la comunicación auténtica, transformando el derecho en una herramienta de control más que en un mecanismo de inclusión. La frustración de las comunidades indígenas, expresada en las entrevistas, refleja esta desconexión, ya que no se sienten parte activa de los procesos judiciales, sino más bien sujetas a decisiones impuestas por actores externos.

Por su parte, autores como Horkheimer (1998) y su crítica a la legitimidad del derecho refuerzan esta idea, ya que el sistema judicial en estos casos está al servicio del capital, lo que perpetúa una estructura de dominación donde las comunidades indígenas se ven subordinadas. El derecho, lejos de ser un espacio neutral de resolución de conflictos, se convierte en un mecanismo para legitimar la explotación de los territorios indígenas en beneficio de actores con poder económico. Esta subordinación se manifiesta claramente en las decisiones judiciales que favorecen a las empresas

extractivas, alineándose con la lógica del capital en lugar de promover una justicia que considere las particularidades culturales y territoriales de las comunidades indígenas.

La frustración expresada en las entrevistas demuestra cómo el marco legal actual no respeta ni entiende las formas ancestrales de relación con la tierra, manteniendo una rigidez que, según Adorno (2002) limita la capacidad del derecho para adaptarse a la diversidad cultural. La crítica a la propiedad privada, de Adorno (2002), se debe a que, al igual que otras categorías universales, no reconocen la diversidad de concepciones sobre el territorio, en razón que esa imposición jurídica estatal, adopta una visión reduccionista y excluyente de la propiedad, que no permite la coexistencia de otras formas de organización territorial, que son fundamentales para la identidad y la vida comunitaria de los pueblos indígenas. Esta crítica resulta fundamental para cuestionar cómo el sistema judicial en Jujuy aplica un marco homogeneizante que no refleja ni responde adecuadamente a las complejidades sociales y culturales de los pueblos indígenas.

A partir de esto, teorías como la del pluralismo jurídico de Wolkmer (2018), ofrecen una salida potencial a esta rigidez y exclusión, al plantear la necesidad de romper con el monismo jurídico, que tiende a imponer un único sistema normativo desde el Estado, para dar paso a un pluralismo que permita la coexistencia de múltiples sistemas normativos. En el contexto de Jujuy, este pluralismo jurídico permitiría que las normativas indígenas, basadas en sus costumbres y cosmovisiones, fueran reconocidas y protegidas como legítimas dentro del sistema legal. Wolkmer (2003) subraya que este reconocimiento no es simplemente una concesión simbólica, sino un paso esencial hacia la justicia intercultural y el respeto por la autodeterminación de las comunidades indígenas. Sin embargo, el sistema judicial estatal en Jujuy sigue imponiendo su hegemonía sin dar entrada a este pluralismo jurídico en pleno, profundizando una crisis de legitimidad. Las comunidades indígenas perciben que sus derechos no son respetados ni sus voces escuchadas, lo que provoca una desconfianza generalizada hacia el sistema judicial.

Los resultados de esta investigación revelan que, a pesar de los reconocimientos formales de los derechos de las comunidades indígenas en el marco legal argentino, las decisiones judiciales continúan favoreciendo una lógica individualista que margina los derechos colectivos. Esta desconexión entre la justicia formal y la vivencia cotidiana de las comunidades indígenas resulta crucial para entender cómo el sistema judicial sigue perpetuando estructuras coloniales. Aunque la normativa reconoce ciertos derechos formales, las barreras prácticas y el enfoque individualista del sistema legal terminan por marginar las cosmovisiones indígenas.

De la misma manera, Pérez Castellón (2013), señala que, en muchos países de América Latina, aunque los marcos constitucionales reconocen formalmente los derechos indígenas, el sistema judicial sigue subordinado a intereses económicos y estatales. Mientras que Barbeta (2019), muestra cómo las decisiones judiciales favorecen a los sectores más poderosos, como los empresarios agropecuarios, en detrimento de los derechos colectivos de las comunidades indígenas. Estos autores coinciden con los resultados de esta investigación al mostrar cómo el sistema judicial continúa perpetuando una estructura de poder que privilegia el interés económico por encima de los derechos culturales y territoriales de los pueblos indígenas.

El análisis de las sentencias y las entrevistas revela una tensión evidente entre las expectativas de justicia de las comunidades indígenas y las decisiones judiciales, que en muchos casos perpetúan la desigualdad estructural. Este enfoque legal, carente de sensibilidad cultural, refuerza la exclusión y marginación, colocando a las comunidades en una posición vulnerable frente a la explotación de sus territorios. Los resultados de esta investigación destacan claramente esta desconexión entre las decisiones judiciales y las realidades comunitarias, evidenciando cómo el sistema judicial no actúa como un mecanismo de protección, sino como una herramienta de exclusión que perpetúa dinámicas coloniales.

De la misma manera, para Pragier (2021) las decisiones judiciales en casos de explotación de recursos naturales, como la minería en el norte argentino, tienden a favorecer los intereses extractivos sin considerar la cosmovisión y la relación cultural que las comunidades indígenas tienen con su territorio. Al igual que Lager (2022) sostiene que la desconexión entre las decisiones judiciales y las realidades culturales de las comunidades indígenas refleja una falta de voluntad institucional para tomar en cuenta las particularidades de los pueblos originarios. La imposición de un marco legal que no reconoce sus prácticas y cosmovisiones, como se observa en esta investigación, refuerza la exclusión y profundiza la desigualdad estructural.

Es urgente y necesaria una reforma estructural del sistema legal (Pérez Castellón, 2013), sin la cual será inalcanzable la justicia para las comunidades, ya que, a pesar de los avances en el reconocimiento formal de los derechos de los pueblos indígenas, éstos siguen enfrentando exclusión y desigualdad debido a la interpretación y aplicación las leyes (Barbetta, 2019; Lager, 2022; Pragier, 2021).

Los hallazgos de esta investigación revelan de manera específica y precisa cómo estas dinámicas operan en el contexto judicial argentino, y particularmente en la provincia de Jujuy

A continuación, se presentan los resultados de la misma problemática.

Tabla 5: Tensión de sentido entre sentencias judiciales y experiencias comunitarias.

Categorías	Descripción de la tensión	Referencia de sentencia	Referencia de entrevista
Colonialidad vs. Resistencia	Las sentencias refuerzan estructuras coloniales al priorizar derechos individuales, mientras que las comunidades intentan utilizar el sistema legal como una forma de resistencia, con resultados mixtos.	Sentencia Nro. 6 (COD 71): Prioriza derechos individuales.	"A pesar de estos desafíos seguimos luchando..." (Entrevistado Nro. 5).
Desigualdad vs. Justicia	Las sentencias muestran una tendencia a reforzar la desigualdad estructural, mientras que las comunidades perciben la justicia como un sistema que no aplica para ellos de manera equitativa.	Sentencia Nro. 12 (COD 247): Barreras probatorias limitan el acceso a la justicia.	"La justicia no está de nuestro lado..." (Entrevistado Nro. 4).
Territorio vs. Propiedad	El sistema judicial trata la tierra como un recurso económico sujeto a reglas formales de propiedad, mientras que las comunidades indígenas ven el territorio como un componente esencial de su identidad cultural y espiritual.	Sentencia Nro. 10 (COD 279): La tierra se ve como recurso económico.	"Nosotros somos parte de nuestro territorio..." (Entrevistado Nro. 1).

Tabla 6: Comparación entre sentencias judiciales y percepciones comunitarias.

Categorías	Sentencias judiciales	Percepciones de los entrevistados
Colonialidad del poder y dinámicas de control social	Sentencia Nro. 6 (COD 71): El tribunal prioriza los derechos individuales sobre los colectivos, cuestionando la titularidad colectiva de las tierras.	"La justicia no está de nuestro lado; siempre favorece a los poderosos" (Entrevistado Nro. 4). Refleja la percepción de exclusión y desigualdad en el sistema legal.
Resistencia y juridización	Sentencia Nro. 5 (COD 226): La comunidad intenta defender sus derechos a través del recurso de inconstitucionalidad, enfrentando barreras en el sistema.	"A pesar de estos desafíos seguimos luchando y organizándonos. La falta de justicia nos da la fuerza para encontrar otras formas de resistencia" (Entrevistado Nro. 5). Refleja la persistencia a pesar de los desafíos.

Desigualdad y justicia	Sentencia Nro. 12 (COD 247): Se cuestiona la capacidad de la comunidad para cumplir con los requisitos probatorios, reflejando barreras sistémicas.	"Para nosotros las coyas la justicia no existe. Presentamos denuncias y hacemos trámites, pero parece que la justicia solo se aplica a ciertos grupos" (Entrevistado Nro. 8). Refleja la percepción de injusticia sistemática.
Territorio y prácticas sociales	Sentencia Nro. 10 (COD 279): La intervención de la Comunidad Aborigen en un juicio de desalojo fue rechazada por considerarse extemporánea, a pesar de sus reclamos de posesión ancestral.	"Nosotros somos parte de nuestro territorio... es todo el cosmos porque ahí nos desarrollamos económica y espiritualmente" (Entrevistado Nro. 1). Refleja la conexión integral con el territorio más allá de la propiedad formal.

Conclusión. Repensar el derecho para reconocer la diversidad.

El análisis ha abordado la compleja relación entre el sistema judicial y los derechos territoriales de las comunidades indígenas en Jujuy, revelando una serie de tensiones estructurales que atraviesan tanto el ámbito legal como el social y cultural.

Este apartado final pretende integrar los hallazgos más importantes, reflexionar sobre las aportaciones realizadas al campo de las ciencias sociales, proponer nuevas líneas de acción para avanzar hacia una justicia más inclusiva y equitativa.

Recapitulación de los hallazgos principales.

Una de las conclusiones más evidentes de este estudio es la profunda desconexión entre la lógica jurídica estatal y las concepciones indígenas sobre el territorio. Mientras que el sistema judicial tiende a operar bajo una visión individualista de la propiedad, en la que el territorio es tratado como un recurso económico y mercantilizable, las comunidades indígenas lo conciben como un elemento fundamental de su identidad colectiva, que trasciende su valor material.

El sistema judicial genera en las comunidades una sensación de exclusión y desconfianza. Las instituciones estatales, son vistas como ajenas y poco receptivas a sus necesidades y cosmovisiones. La percepción de exclusión no solo responde a experiencias concretas de litigios territoriales, sino que se inserta en una narrativa histórica de despojo y marginación que ha caracterizado la relación entre el Estado argentino y los pueblos originarios.

A pesar de este escenario adverso, las comunidades indígenas han utilizado el sistema judicial como una herramienta para defender sus derechos territoriales, con resultados desfavorables en la mayoría de los casos estudiados que han perpetuado la lógica de exclusión y subordinación.

Es imprescindible que el derecho estatal reconozca no solo los derechos individuales, sino también los derechos colectivos de las comunidades indígenas, en especial los relacionados con la tierra y el territorio.

Se destaca en este estudio la agencia de las comunidades indígenas, que no son meros receptores pasivos de las decisiones judiciales, sino actores activos que han desarrollado estrategias de resistencia y lucha para defender sus territorios. Esta capacidad de agencia, aunque limitada por las barreras estructurales del sistema judicial, es un aspecto crucial que debe ser reconocido y valorado y a partir de esto surge la necesidad de avanzar hacia un sistema judicial más inclusivo y respetuoso de la pluralidad cultural.

Aportaciones al campo de estudio.

Este trabajo contribuye de manera significativa al campo de las ciencias sociales, al proporcionar un análisis integral y detallado de cómo las comunidades indígenas de Jujuy interactúan con el sistema judicial en su lucha por la defensa de sus territorios y los desafíos a los que se enfrentan.

Otro aporte es la visibilización de las tensiones entre el derecho estatal y las cosmovisiones indígenas.

Esta investigación se suma al debate sobre el pluralismo jurídico, al demostrar que la coexistencia de múltiples sistemas normativos es una necesidad imperiosa en contextos de diversidad cultural. En lugar de imponer una única visión del derecho, el sistema judicial debería ser capaz de integrar y respetar las normativas y prácticas jurídicas propias de las comunidades indígenas. En este sentido, esta investigación plantea que el reconocimiento formal de los derechos indígenas no es suficiente si no va acompañado de una transformación estructural en la forma en que el derecho estatal interactúa con las cosmovisiones indígenas.

Finalmente, este trabajo contribuye a una comprensión más matizada de las dinámicas de poder que atraviesan el sistema judicial y las relaciones entre el Estado y las comunidades indígenas.

Propuestas para el futuro.

Desde el ámbito científico, sería interesante realizar este tipo de investigación para el período anterior al planteado en esta tesis y ver si el cambio de código ha mejorado la situación de las comunidades o esto se repite desde tiempos previos. Igualmente podrían analizarse las sentencias de la etapa procesal que antecede a las diferentes Cámaras de Apelaciones de la Provincia de Jujuy.

Además, también podrían explorarse otras problemáticas que tienen las comunidades al interactuar con el sistema judicial y que no estén relacionados específicamente con la problemática territorial, para saber si los desenlaces son los mismos a los conflictos relacionados a la tierra.

En el ámbito judicial, es imprescindible que el derecho estatal reconozca no solo los derechos individuales, sino también los derechos colectivos de las comunidades indígenas. Para ello, podía plantearse la creación de tribunales especializados en derechos indígenas, que estén capacitados para entender y respetar sus cosmovisiones. Estos, podrían funcionar como instancias de mediación y resolución de conflictos, donde las comunidades indígenas tengan una participación en la toma de decisiones y se establezcan mecanismos efectivos de protección y garantía.

Por otra parte, las políticas públicas debieran de ser diseñadas reconociendo la diversidad cultural, esto implicaría una revalorización de los conocimientos ancestrales y una mayor participación en los procesos de formulación de leyes y políticas de las comunidades.

Finalmente, es necesario fomentar un cambio en la cultura judicial, para que los operadores de justicia sean más sensibles a las particularidades culturales de las comunidades indígenas. Esto podría implicar la formación y capacitación de jueces, abogados y otros actores judiciales en temas de derechos indígenas y pluralismo jurídico. La justicia no puede seguir siendo tratada como un concepto universal y abstracto, sino que debe adaptarse a las realidades específicas de las comunidades a las que sirve.

Reflexión final: Hacer justicia es una responsabilidad colectiva.

Hacer justicia y vivir la justicia no es una tarea que recaiga exclusivamente en los tribunales o en el Estado. Es, ante todo, un proceso compartido, continuo y profundamente humano que trasciende las leyes y los códigos escritos. La justicia no puede ser vista únicamente como una meta abstracta que se persigue en los marcos jurídicos; es una vivencia que se construye día a día, en las relaciones cotidianas entre individuos, comunidades y culturas. La verdadera justicia no está contenida únicamente en los textos de las sentencias, sino en la capacidad de una sociedad para escuchar, reconocer y honrar las voces de todos sus miembros, especialmente de aquellos que han sido históricamente marginados.

En el caso de los pueblos indígenas, hacer justicia implica mucho más que reconocer sus derechos legales. Implica respetar profundamente su dignidad, su historia, sus territorios y su derecho a existir como comunidades con identidad propia. Hacer justicia, en este sentido, es también un acto de reparación y de reconocimiento, una afirmación de que sus derechos no son un regalo del Estado, sino una parte intrínseca de su ser, un legado que ha sido transmitido de generación en generación.

Es necesario entender que la justicia no es estática, no se agota en el dictado de una sentencia. La justicia es, ante todo, una acción viva y constante, que involucra a todas las personas, instituciones y actores sociales. Cada uno de nosotros es responsable de sostenerla, de protegerla y de contribuir a su realización. No se trata simplemente de reformar las leyes para hacerlas más justas, sino de cambiar las prácticas y actitudes que perpetúan la exclusión, la desigualdad y la invisibilidad de aquellos que históricamente han sido relegados. En este sentido, la justicia intercultural exige un cambio de paradigma, uno que no solo respete las diferencias culturales, sino que también las valore como un componente esencial de una sociedad verdaderamente justa y democrática.

La construcción de un sistema de justicia más inclusivo y equitativo no es una tarea que pueda ser delegada exclusivamente a las instituciones formales del Estado. Se trata de un compromiso colectivo, que nos concierne a todos: al legislador que redacta las leyes, al juez que las aplica, al abogado que defiende los intereses de su cliente, pero también a cada ciudadano que interactúa con su comunidad. La justicia no es una realidad distante que solo ocurre en los tribunales; es una experiencia que se vive en el respeto mutuo, en la solidaridad y en el reconocimiento de la humanidad del otro. Este concepto de justicia vivida, más allá de la justicia dictada, es lo que define la posibilidad de construir un mundo más equitativo, donde la pluralidad no sea vista como un obstáculo, sino como una riqueza.

Este trabajo ha demostrado que el sistema judicial, tal como está estructurado actualmente, presenta limitaciones profundas para comprender y respetar las cosmovisiones indígenas sobre el territorio. No obstante, esta investigación también ha puesto de manifiesto que el camino hacia una justicia plena para las comunidades indígenas no está completamente cerrado. Existen posibilidades, espacios de resistencia y de creación, que deben ser aprovechados. Pero este camino, aunque largo y complejo, requiere un compromiso firme, una voluntad real de transformar las estructuras de poder que perpetúan la exclusión y el despojo.

Hacer justicia implica, en este contexto, mucho más que dictar sentencias favorables. Implica asumir la responsabilidad de escuchar las demandas de los pueblos indígenas, de valorar sus conocimientos ancestrales y de incluir sus voces en los procesos de toma de decisiones que afectan directamente sus vidas. La verdadera justicia no es unilateral; es un diálogo, una conversación continua entre culturas, derechos y modos de vida que debe conducirnos hacia un futuro más equitativo.

En este sentido, esta investigación no solo plantea preguntas sobre el presente, sino que también invita a reflexionar sobre el futuro. El camino hacia una justicia plena y equitativa para las comunidades indígenas es largo, sinuoso y a menudo lleno de obstáculos, pero es un desafío que debemos asumir con seriedad y compromiso. Para avanzar, es imprescindible que dejemos de ver a las comunidades indígenas como sujetos pasivos de derechos, y comencemos a reconocerlas como protagonistas de su propia historia, como guardianes de saberes y prácticas que son fundamentales para la construcción de un mundo más inclusivo y sostenible.

Solo a través de un enfoque intercultural, que reconozca la diversidad de formas de entender y vivir el derecho, podremos construir un futuro más justo para todos. Esta justicia que se vive y se

comparte no es un ideal lejano, sino una posibilidad real que puede ser alcanzada si somos capaces de ver más allá de nuestras diferencias y valorar la riqueza de nuestra diversidad.

En última instancia, hacer justicia es un acto de humanidad, un reflejo de nuestra capacidad para reconocer al otro como un igual, digno de los mismos derechos y oportunidades. Es un proceso colectivo que nos invita a repensar nuestras estructuras, nuestras leyes y nuestras actitudes, con el fin de construir una sociedad donde todos, sin excepción, puedan vivir con dignidad, autonomía y libertad.

Como abogada, mi compromiso con la justicia no es solo teórico, sino profundamente práctico, ético y en lucha, por una justicia más equitativa para las comunidades indígenas que no se limita a los tribunales, sino que se extiende a todas las esferas de la vida pública y privada.

Después de este recorrido, mi deber es continuar trabajando por un sistema legal que no solo reconozca los derechos de estas comunidades, sino que también garantice su plena implementación y protección.

Ya no será justicia. **Es JUSTICIA.**

BIBLIOGRAFIA:

Abásolo, E. (2004). La cultura jurídica indiana en el Estado de Buenos Aires: Un examen de la cuestión a partir de los diarios de sesiones de la legislatura porteña (1852-1861). Historia del Derecho, (32).

Aboslaiman, L. (2013). Las perspectivas de las distintas propuestas respecto del tratamiento interdisciplinario. Revista de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba, 4(1), 163-177.

Abramovich, V. y Courtis, C. (2002). Los derechos sociales como derechos exigibles. Trotta.

Abreut de Begher, L. (2012). La propiedad indígena. Lecciones y Ensayos, 90, 55-97. http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/90/abreut.pdf.

Acselrad, H. (Org.). (2013). Cartografía social, tierra y territorio. Rio de Janeiro: IPPUR/UFRJ. http://dx.doi.org/10.22296/2317-1529.2014v16n1p223.

Adorno, T. (2002). Dialéctica negativa. Editorial Nacional.

Agredo Cardona, G. (2006). El territorio y su significado para los pueblos indígenas. Luna Azul, 1, 5-23. https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/lunazul/article/view/105.

Aguilar Cavallo, G. (2011). Surgimiento de un derecho americano de los derechos humanos en América Latina. Cuestiones Constitucionales: Revista Mexicana de Derecho Constitucional, (24), 29-56.

Albagli, S. (2004). Territorios en movimiento: Cultura, saberes y políticas públicas. UNESCO.

Alexy, R. (2011). Deber ideal. En L. Clérico, J.-R. Sieckmann, y D. Oliver-Lalana (Eds.), Derechos fundamentales, principios y argumentación jurídica. Ensayos sobre la teoría jurídica de Robert Alexy (pp. 15-35). Comares.

Alexy, R. (2008). Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Alexy, R. (2003a). Cinco preguntas a Robert Alexy (entrevista por Diana Quintero). Precedente - Anuario Jurídico, 89-93.

Alexy, R. (2003b). Derecho constitucional y derecho ordinario. Jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria. En Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios (pp. 41-92). Universidad Externado de Colombia.

Alexy, R. (2003c). On Balancing and Subsumption: A Structural Comparison. Ratio Juris, 16(4), 433-449.

Alexy, R. (2002a). Epílogo a la teoría de los derechos fundamentales. Revista Española de Derecho Constitucional, 22(66), 13-64.

Alexy, R. (2002b). Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Anaya, J. (2005). Los pueblos indígenas en el derecho internacional. Trotta.

Ander-Egg, E. (1995). Técnicas de investigación social (24.a ed.). Editorial LUMEN. Buenos Aires.

Aparicio, M. (2007). La construcción de la autonomía indígena: Hacia el estado intercultural como nueva forma de estado. En S. Martí (Ed.), Pueblos indígenas y política en América Latina. El reconocimiento de sus derechos y el impacto de sus demandas a inicios del siglo XXI (pp. 75-96). Edicions Bellaterra.

Appadurai, A. (1996). Modernity at large: Cultural dimensions of globalization. University of Minnesota Press.

Aragón Andrade, O. (2008). Los sistemas jurídicos indígenas y los derechos humanos: Paradojas en el discurso del movimiento indio en México. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 41(123), 773-802. https://doi.org/10.22201/iij.24484873e.2008.123

Aranda, D. (2010). Argentina originaria: Genocidios, saqueos y resistencias. La Vaca Editora. https://agenciatierraviva.com.ar/wp-content/uploads/2022/10/Argentina-Originaria-Dario-Aranda.pdf.

Aranzamendi, L. (2015). Investigación jurídica (2ª ed.). Ed. Jurídica Grijley.

Aranzamendi, L. (2008). Epistemología y la investigación cualitativa y cuantitativa en el derecho (1ª ed.). Ed. ADRUS.

Ares, P., y Risler, J. (2013). El territorio en disputa. Tinta Limón.

Arias, S. (2010). Mapeo autónomo y defensivo en la Zonal Pewence. 4tas Jornadas de Historia de la Patagonia, Universidad Nacional de Comahue.

Ariza Higuera, L. y Bonilla Maldonado, D. (2007). El pluralismo jurídico. Contribuciones, debilidades y retos de un concepto polémico. Siglo del Hombre.

Arizpe, L. (1984). Pluralismo cultural y desarrollo social en América Latina: Elementos para una discusión. Pluralismo Cultural y Desarrollo Social en América Latina, 2(4), 17-28.

Arnaud, A. J., y Fariñas, M. J. (2006). Sistemas jurídicos: Elementos para un análisis sociológico. Universidad Carlos III-BOE.

Assies, W. (2006). La Media Luna sobre Bolivia: Nación, región, etnia y clase social. América Latina Hoy, 43, 87-105. Universidad de Salamanca.

Assís Clímaco, D., Lugones, M. G., Añón, V., Varela-Huerta, I., Ávila Rojas, O., Kaltmeier, O., Bidaseca, K., Gnecco, C., Restrepo, E., Gandarilla Salgado, J. G., Ochoa Muñoz, K., de Oto, A., Lepe Carrión, P., Catelli, L., Gutiérrez, R., Sánchez Mójica, D., Lustman, M., Verdesio, G., y Rufer, M. (Coord.). (2023). La colonialidad y sus nombres: Conceptos clave. CLACSO; Siglo XXI. https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/248262

Atienza Rodríguez, M., y Ruiz Manero, J. (2009). Para una teoría postpositivista del Derecho. Palestra.

Atienza, M. (2013). Curso de argumentación jurídica. Trotta.

Austin, J. (1832). The Province of Jurisprudence Determined. Hackett.

Aylwin, J. (2014). Derechos políticos de los pueblos indígenas en Latinoamérica: Avances y desafíos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. https://www.te.gob.mx/sites/default/files/cuaderno_25_je.pdf

Azaola Garrido, E. (1990). La institución correccional en México. Una mirada extraviada. Siglo Veintiuno.

Azzali, J., y Barberi, P. (2019). El derecho a la personalidad jurídica de las comunidades indígenas. Ministerio Público de la Defensa. https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/3862

Badie, B. (1995). La fin des territoires: Essai sur le désordre international et sur l'utilité sociale du respect. Fayard.

Barabas, A. (2004). La territorialidad simbólica y los derechos territoriales indígenas: Reflexiones para el estado pluriétnico. Alteridades, 14, 105-119. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.

Baranger, D. (2004). Epistemología y metodología en la obra de Pierre Bourdieu. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Barbetta, P. N. (2019). Conflictos por la propiedad de la tierra en la provincia de Chaco, Argentina: Contribuciones a una agenda de investigación. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 4(10), 223–238.

Barcesat, E. S., y Corti, A. H. (Dirs.). (2015). Derecho Público (Año IV, Número 12). Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. https://www.infojus.gob.ar

Barnetson, M. (2009). Políticas sociales y pueblos indígenas en la Argentina: una mirada crítica sobre la Seguridad Social [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Salta]. Facultad de Humanidades. http://humani.unsa.edu.ar/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10330

Barros, L. (2000). Reflexiones sobre la relación entre lugar e identidad. Documents d'Anàlisi Geogràfica, 30, 81-94.

Barth, F. (1969). Ethnic groups and boundaries: The social organization of culture difference. Little, Brown and Company.

Bartolomé, M. (2017). Etnicidad, historicidad y complejidad. Del colonialismo al indigenismo y al Estado pluricultural en México. Cuicuilco, 24(69), 33-64.

Bayón Mohino, J. C. (1991). [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Público]. Universidad Autónoma de Madrid. http://hdl.handle.net/10486/4613

Bazán, V. (2003). Los derechos de los pueblos indígenas en Argentina: Diversos aspectos de la problemática. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 36(108), 875-902. https://doi.org/10.22201/iij.24484873e.2003.108.3394

Belli, E., Slavutsky, R. y Torres, H. (2017). La demanda territorial de los pueblos indígenas de la provincia de Jujuy: Aplicación y obstáculos en la entrega de tierras. En M. Arrueta, F. Fernández, S. Peralta, y A. Rivero (Comps.), Antropolocales: Estudios de antropología en Jujuy (pp. 41-60). EDIUNJU.

Bello, Á. (2004). Etnicidad y ciudadanía en América Latina: La acción colectiva de los pueblos indígenas. Libros de la CEPAL. https://hdl.handle.net/11362/2394

Bengoa, J. (2009). ¿Una segunda etapa de la Emergencia Indígena en América Latina? Cuadernos de antropología social, 29, 7-22. https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-275X2009000100001

Bentham, J. (2008). Los principios de la moral y la legislación (Original publicado en 1789). Editorial Claridad S.A.

Bentham, J. (1839). Deontología o ciencia de la moral (Tomo I). Librería de Mallen y Sobrinos.

Bergesio, L., Golovanevsky, L. y González, N. (2018). Jujuy en su encrucijada. Recorridos socio-económicos de la provincia. S.S. de Jujuy: AveSol Ediciones.

Bernal, I. (1984). Rebeliones indígenas en la Puna. Ed. Búsqueda-Yuchán.

Bianchi, A. (2013). El control de constitucionalidad en el arbitraje de derecho. Revista Rap, Ediciones Rap. ID SAIJ: DACF170182.

Bidart Campos, G. J. (2005). Tratado elemental de derecho constitucional argentino. Ediar.

Binder, A. (2001). Entre la democracia y la exclusión: La lucha por la legalidad en una sociedad desigual. Argentina: Ediciones INECIP. Recuperado de http://www.derechoysociedad.org.

Bobbio, N. (1989). Estado, gobierno y sociedad: Por una teoría general de la política. Fondo de Cultura Económica.

Bonfil Batalla, G. (1972), "El concepto de indio en América: una categoría de la situación colonial", en Anales de Antropología, vol. IX. México: Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, pp. 105-124.

Bourdieu, P. (2007a) [1987], De las reglas a las estrategias en: Bourdieu Pierre, Cosas Dichas, Barcelona: Editorial Gedisa, págs. 67-82.

Bourdieu, P. (2007b) [1987], Espacio social y poder simbólico en: Bourdieu, Pierre. Cosas Dichas, Barcelona: Editorial Gedisa, págs. 127-142

Bourdieu, P. (2007c) Los tres estados del capital cultural en: Bourdieu Pierre, Campo del poder y reproducción social, Córdoba: Ferreyra Editor, Colección Enjeux, págs. 195-202

Bourdieu, P. (1997). Méditations pascaliennes. Paris: Seuil. English: Pascalian Meditations (Cambridge, UK: Polity Press, 2000). (Español: 1999. Meditaciones pascalianas. Madrid, España: Anagrama).

Bourdieu, P. (1991). El sentido práctico. Taurus.

Bourdieu, P. (1990) Espacio social y génesis de las clases en: Bourdieu Pierre, Sociología y cultura, México: Grijalbo, págs. 281-310.

Bourdieu, P. y Wacquant, L. (1992). An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago: The University of Chicago Press; Cambridge: Polity Press. (Español: 2008. Una invitación a la sociología reflexiva. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores).

Briñis Zambrano, A. (2017). La investigación social: Cuaderno metodológico. Talleres Gráficos UCA.

Briones, C. (2005). Formaciones de alteridad: Contextos globales, procesos nacionales y provinciales. En C. Briones (Ed.), Cartografías argentinas: Políticas indigenistas y formaciones provinciales de alteridad (pp. 11-43). Antropofagia.

Briones, C. (2002). Mestizaje y blanqueamiento como coordenadas de aboriginalidad y nación en Argentina. Runa, 23, 61-88.

Briones, C. (1998). La alteridad del "cuarto mundo": Una deconstrucción antropológica de la diferencia. Ediciones del Sol.

Briones, C. y Morita Carrasco, S. (2018). (Neo) indigenismo estatal y producciones indígenas en Argentina (1985-1999). Anuario Antropológico, 26(1), 147-167. https://periodicos.unb.br/index.php/anuarioantropologico/article/view/6791

Briones, C. y Ramos, A. (2010). Replanteos teóricos sobre las acciones indígenas de reivindicación y protesta: Aprendizajes desde las prácticas de reclamo y organización mapuche-tehuelche en Chubut. En G. Gordillo y S. Hirsch (Comps.), Movilizaciones indígenas e identidades en disputa en la Argentina: Historias de invisibilización y reemergencia (pp. 29-78). La Crujía.

Broekman, J. M. (1993). Derecho y Antropología. Editorial Civitas.

Bruner, E. (1991). The narrative construction of reality. Critical Inquiry, 18(1), 1–21.

Brunet, I. y Cincunegui, C. (2021). Una perspectiva sociológica sobre el nuevo regionalismo. Estudios económicos, 27(54), 1–28. https://doi.org/10.52292/j.estudecon.2010.852

Bulygin, E. y Mendonca, D. (2005). Normas y sistemas normativos. Marcial Pons.

Burchardt, H.-J. y Dietz, K. (2014). (Neo-)extractivismo: Un nuevo desafío para la teoría del desarrollo desde América Latina. Third World Quarterly, 35(3), 468-486.

Canessa, A. (2006). Todos somos indígenas: Hacia un nuevo lenguaje de identidad política nacional. Boletín de Investigaciones Latinoamericanas, 25(2), 241-263. https://doi.org/10.1111/j.0261-3050.2006.00162.x

Canet, V. (2006). Institucionalización de las prácticas de los pueblos y comunidades indígenas en la Argentina: Aportes a la doctrina. Revista Derecho del Estado, (18), 107-125. Universidad Externado de Colombia.

Cano-Nava, M. O. (2011). Modelo epistemológico de la teoría tridimensional del derecho. Convergencia, 18(57), 209-228.

Canto Sáenz, R. (2017). Participación ciudadana, pluralismo y democracia. Tla-melaua, 10(41). https://doi.org/10.22187/rfd2017n2a8.

Cañuqueo, L. (2015). 'Tramitando' comunidad indígena en Río Negro: Diálogos entre activismo, políticas de reconocimiento y co-gestión. Identidades. Revista del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia, 5(8), 62-80.

Carbonnier, J. (1994). Sociologie juridique. Quadrige/Presses Universitaire de France.

Cárcova, C. M. (2003). Notas acerca de la teoría crítica del derecho. Revista Jurídica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (38), pp. 187-204.

Cardoso de Oliveira, R., García Acosta, V., Melville, R., y Molina, V. (2007). Etnicidad y estructura social. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Universidad Iberoamericana, A.C., Universidad Autónoma Metropolitana. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/ciesas/20170504024623/pdf_408.pdf.

Carneiro, R. L. (1985). Reflexiones sobre el origen del Estado. Ágora: Papeles de Filosofía, 5, 5-20. Universidade de Santiago de Compostela. http://hdl.handle.net/10347/905.

Carrasco, M. (2000). Los derechos de los pueblos indígenas en Argentina. IWGIA.

Carrió, G. R. (2003). Cómo estudiar y cómo argumentar un caso. Lexis Nexis, Abeledo-Perrot.

Castelnuovo, N. (2012). Mujeres guaraníes y desarrollo en el noroeste argentino (Tesis de doctorado). Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Argentina. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180932448008.

Clavero, B. (2006). Derechos indígenas y constituciones latinoamericanas. En M. Berraondo (Coord.), Pueblos indígenas y derechos humanos. Universidad de Deusto.

Clavero, B. (1995). Derecho indígena y derecho constitucional en América. Siglo XXI. https://doi.org/10.1590/S0104-71831997000200015.

Clech Lam, M. (2004). Remembering the country of their birth: Indigenous peoples and territoriality. Journal of International Affairs, 57(2), 157-172.

Clifford, J. (2010). Dilemas de la cultura: Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna. Gedisa.

Código Civil de la República Argentina. (1869). https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texact.htm

Cohen, G. A. (2001). Si eres igualitarista, ¿cómo es que eres tan rico? Paidós.

Cohen, G. A. (1998). ¿Igualdad de qué? Sobre el bienestar, los bienes y las capacidades. En M. Nussbaum y A. Sen (Comps.), La calidad de vida (pp. 27-53). Fondo de Cultura Económica.

Colautti, C. E. (1999). Derechos humanos constitucionales. Rubinzal-Culzoni Editores.

Collier, J. F. (1995). El derecho zinacanteco: Procesos de disputar en un pueblo indígena de Chiapas (P. Rodríguez Aviñoa, Trad.). Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Comaroff, J. y Comaroff, J. L. (2009). Violencia y ley en la poscolonia. Katz Editores.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (s.f.). Sitio web oficial. Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/es/cidh/.

Congost, R. (2019). Las leyes sobre la propiedad de la tierra y el análisis histórico de los derechos de propiedad. Reflexiones a partir de algunos bicentenarios. Claves. Revista De Historia, 1(1), 121–137. https://doi.org/10.25032/crh.v1i1.6

Congreso de la Nación Argentina. (2012). Proyecto de reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación: Audiencias públicas desarrolladas ante la Comisión Bicameral. https://www.hcdn.gob.ar/sesiones/index.html

Constitución de 1819. (1819). Constituciones argentinas. Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ). http://www.saij.gob.ar/docs-f/ediciones/libros/Constituciones_argentinas.pdf

Constitución de 1826. (1826). En Constituciones argentinas. Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ). http://www.saij.gob.ar/docs-f/ediciones/libros/Constituciones_argentinas.pdf

Constitución de la Nación Argentina. (1994). Constitución de la Nación Argentina. Reformada en 1994. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/804/texto.

Corcuff, P. (2005a). Las nuevas sociologías: Construcciones de la realidad social. Alianza Editorial.

Corcuff, P. (2005b). Lo colectivo en el desafío de lo singular partiendo del habitus. In B. Lahire (Dir.), El trabajo sociológico de Pierre Bourdieu: Deudas y críticas (pp. 113-142). Siglo XXI.

Correas, Ó. (2013). La sociología jurídica. Un ensayo de definición. Crítica Jurídica Nueva Época, (12). https://criticajuridica.org/index.php/critica_juridica/article/view/256

Correas, Ó. (2007). Derecho indígena mexicano I. Ediciones Coyoacán/UNAM-CeIICH.

Correas, Ó. (2004). Pluralismo jurídico, alternatividad y derecho indígena. Ediciones Coyoacán.

Correas, Ó. (1994). Introducción a la sociología jurídica. Fontamara.

Correas, O. (1993). Alternatividad y derecho: El derecho alternativo frente a la teoría del derecho. Crítica Jurídica, 13, 51-64.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2001). Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua (Sentencia de 31 de agosto de 2001). https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_79_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2006). Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay (Sentencia de 29 de marzo de 2006). https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_146_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2020). Asociación Lhaka Honhat vs. Argentina (Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia del 6 de febrero de 2020. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_400_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (s.f.). Sitio web oficial. https://www.corteidh.or.cr/

Corte Suprema de Justicia de la Nación. (2008). Comunidad Indígena Eben Ezer c/ provincia de Salta – Ministerio de Empleo y la Producción s/ amparo (C.2124.XLI). https://phpmaker.jusrionegro.gov.ar/redjudicial/muestraprov_action_eab.php?id=842277

Corte Suprema de Justicia de la Nación. (s.f.). https://www.csjn.gov.ar/institucional/el-tribunal.

Costa, R. (2006). Entre la necesidad y la libertad: condiciones sociales del cambio en Pierre Bourdieu. Revista Estudios Sociológicos, 24(1), 167-196. El Colegio de México.

Cuche, D. (2001). La noción de cultura en las ciencias sociales. Nueva Visión.

da Silva, C. T. (2010). Los "frentes de atracción" y la (des)integración de los indios en la nación. Avá, (17). https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-16942010000200003&lng=es&tlng=es.

Dacal Alonso, J. A. (2005). La idea de justicia en Werner Goldschmidt. Revista Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, (5), 123-163. http://repositorio.lasalle.mx/handle/lasalle/319.

Daguerre, M. (2010). Sobre el valor de la amistad y su conflicto potencial con la moral: Una revisión del debate contemporáneo. Diánoia, 55(64), 47-69. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.13644/pr.13644.pdf

Das, V. y Poole, D. (2008). El estado y sus márgenes. Etnografías comparadas. En Anthropology in the Margins of the State (School of American Research Press, Santa Fe [NM], 2004). Relaciones Internacionales, (8), 1-39. https://doi.org/10.15366/relacionesinternacionales2008.8.008..

De Castro, F., Hogenboom, B., y Baud, M. (2015). Gobernanza ambiental en América Latina en la encrucijada: Moviéndose entre múltiples imágenes, interacciones e instituciones. CLACSO; ENGOV. https://doi.org/10.15517/aeca.v43i0.31561.

De la Cadena, M., y Starn, O. (Eds.). (2010). Indigenous experience today. Berg Publishers.

De Sousa Santos, B. (2014). Epistemologías del sur. Akal. https://redmovimientos.mx/wp-content/uploads/2020/08/Epistemolog%C3%ADas-del-Sur.pdf

De Sousa Santos, B. (2009). Sociología jurídica crítica para un nuevo sentido común en el derecho. Editorial Trotta.

De Sousa Santos, B. (2007). La reinvención del Estado y el Estado plurinacional. En OSAL (Año VIII, Nº 22, septiembre). CLACSO. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal22/D22SousaSantos.pdf

De Sousa Santos, B. (2003). Sociología jurídica crítica: Para un nuevo sentido común en el derecho. Editorial Trotta.

De Sousa Santos, B. (2002). Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos. El otro Derecho, 28, 59-83.

De Sousa Santos, B. (1998). La globalización del derecho: Los nuevos caminos de la regulación y la emancipación. Universidad Nacional, ILSA.

De Sousa Santos, B. (1997). Pluralismo jurídico, escalas y bifurcación. En J. Giraldo Ángel, B. de Sousa Santos, F. Gutiérrez Sanín, y J. E. Faria (Eds.), Conflicto y contexto: Resolución alternativa de conflictos y contexto social (pp. 63-78). TM Editores.

De Sousa Santos, B. (1991). Estado, derecho y luchas sociales. ILSA.

Del Río, V. y Pérez, S. (2011). Territorios en disputa: Conflictos y resistencias en comunidades indígenas. Editorial Tinta Limón.

Del Valle Escalante, E. (2013). Teorizando las literaturas indígenas contemporáneas: Introducción. A Contracorriente: Revista de Historia Social y Literatura en América Latina, 10(3), 1-20.

Depetris, C. E. (2015). Hacia un cambio en la práctica jurídica: Notas sobre el Capítulo 1 del Título preliminar del Código Civil y Comercial. http://www.saij.gob.ar/carlos-emilio-depetris-hacia-cambio-practica-juridica-notas-sobre-capitulo-1-titulo-preliminar-codigo-civil-comercialdacf150652-2015-06-01/123456789-0abc-defg2560-51fcanirtcod

Díaz Montiel, Z. C. (2007). J. Habermas: Lenguaje y diálogo, el rol del entendimiento intersubjetivo en la sociedad moderna. Utopía y Praxis Latinoamericana, 12(39), 115-128.

Díaz Polanco, H. (2006). Elogio de la diversidad: Globalización, multiculturalismo y etnofagia. Siglo XXI Editores.

Díaz Polanco, H. y Sánchez, C. (2002). México diverso: El debate por la autonomía. Siglo XXI.

Diez, J. A. (1998). Hacia una teoría general de la representación científica. En Theoria. Núm. 13. pp. 113- 139.

Dunbar-Ortiz, R. (2001). James Joyce y la traducción revolucionaria anticolonialista. Revista de la Casa de las Américas, (223), 44-59.

Durán Migliardi, M. (2018). Sociedad y derecho: La influencia de la escuela de Frankfurt y su teoría crítica en los orígenes del pensamiento de Habermas. Universum, 33(1), 84-116. https://doi.org/10.4067/S0718-23762018000100084.

Durkheim, É. (1992). Éducation et sociologie. PUF. (Edición original: París: Alcan).

Durkheim, É. (1991). De la division du travail social (2a ed.). PUF.

Durkheim, É. (1990). Leçons de sociologie: Physique des moeurs et du droit. PUF.

Dworkin, R. (1986). Law's Empire. Harvard University Press, Cambridge, 1986. Citado por la traducción en castellano de FERRARI, C., El imperio de la Justicia. Gedisa, Barcelona, 1992 (2ª edición).

Dworkin, R. (1977). Taking Rights Seriously. Harvard University Press, Cambridge. Citado por la traducción en castellano de GUASTAVINO, M., Los derechos en serio. Ariel, Barcelona (2ª edición).

Elster, J. (1991). Una introducción a Karl Marx. Siglo XXI.

Elster, J. (1984). Marxismo, funcionalismo y teoría de juegos. Alegato a favor del individualismo metodológico. Sociológica, 1(1).

Engelman Garreta, J. M. (2019). Reconocimiento estatal e identificación étnica: El caso de la "Coordinación de Pueblos Originarios de Almirante Brown" de la región metropolitana de Buenos Aires. Mana, 25(2), 337-363. https://doi.org/10.1590/1678-49442019v25n2p337.

Equipo Nacional de Pastoral Aborigen. (2014). Informe sobre la situación de los pueblos indígenas en Argentina. https://www.endepa.org.ar/

Escárzaga Nicté, F. (2004). La emergencia indígena contra el neoliberalismo. Política y Cultura, (22), 101-121.

Escobar, A. (2014). Sentipensar con la tierra: Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Editorial UNAULA.

Espósito, G. (2017). La polis colla: Tierras, comunidades y política en la Quebrada de Humahuaca. Prometeo Libros.

Espósito, G. (2014). Despojo, reconocimiento y después. En C. Fandos y A. Teruel (Eds.), Quebrada de Humahuaca: Estudios históricos y antropológicos en torno a las formas de propiedad (pp. 185-214). Universidad Nacional de Jujuy.

Fandos, C. y Teruel, A. (2012). ¿Cómo quitarles esas tierras en un día después de 200 años de posesión? Enfiteusis, legislación y práctica en la Quebrada de Humahuaca (Argentina). Bulletin de l'Institut français d'études andines, 41(2), 209-239.

Fandos, C. y Teruel, A. (2009). Procesos de privatización y desarticulación de tierras indígenas en el norte de Argentina en el siglo XIX. Revista Complutense de Historia de América, (35), 233-255.

Feierstein, D. (2007). El genocidio como práctica social: Entre el nazismo y la experiencia argentina. Fondo de Cultura Económica.

Feijóo, C. R. (2009). Los indios de Riobamba y la revolución de Quito, 1757-1814. Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia, 1(30), 109–123. https://doi.org/10.29078/rp.v1i30.127.

Fernández, F. (2017). Ellos, los otros, nosotros: Relatos y acontecimientos en los confines del Noroeste Argentino. En M. Arrueta, F. Fernández, S. Peralta, y A. Rivero (Comps.), Antropolocales: Estudios de antropología en Jujuy (pp. 61-80). Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy (EDIUNJU).

Fernández, S. (1997). Habermas y la teoría crítica de la sociedad. Cinta Moebio, 1, 27-41.

Ferrajoli, L. (2011). Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista. Doxa, 34, 15-53.

Ferrajoli, L. (2000). El garantismo y la filosofía del derecho. Universidad Externado de Colombia.

Ferrándiz Martín, F. y Feixa Pampols, C. (2004). Una mirada antropológica sobre las violencias. Alteridades, 14(27), 159-174. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.

Ferrater Mora, J. (1994). Diccionario de filosofía (4 tomos). Círculo de Lectores.

Ferrater Mora, J. (1982). Diccionario de filosofía (Tomo I). Alianza.

Ferreyra, R. G. (2015). Fundamentos constitucionales (2ª ed.). Ediar.

Ferreyra, R. G. (2014). Manifiesto sobre las garantías de los derechos: A propósito de los 20 años de la "Constitución Reformada". Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja, (13), 75-94.

Follari, R. (2000). Epistemología y sociedad. Homo Sapiens Ediciones.

Fornet-Betancourt, R. (2001). Transformación intercultural de la filosofía. Descleé.

Fornet-Betancourt, R. (2000). Interculturalidad y globalización. IKO-DEI.

Fornet-Betancourt, R. (1994). Hacia una filosofía intercultural latinoamericana. DEI.

Fos Medina, J. B. (2012). La propiedad comunitaria indígena: Algunos aspectos histórico-jurídicos. Cruz del Sur, 2(3), 261-283. https://doi.org/ISSN: 2250-4478.

Foucault, M. (2001). La hermenéutica del sujeto. Fondo de Cultura Económica.

Foucault, M. (2000). Las redes del poder. Alianza Editorial.

Foucault, M. (1994). Estrategias de poder (J. Varela & F. Álvarez Uría, Trads.). Editorial Paidós Ibérica S.A.

Frankenberg, G. (2011). Teoría crítica. Academia: Revista sobre enseñanza del derecho de Buenos Aires, 9(17), 67-84

Frites, E. (2011). El derecho de los pueblos indígenas. PNUD-Rosa Guarú-INADI. http://novedades.filo.uba.ar/sites/novedades.filo.uba.ar/files/documentos/El%20Derecho%20de%20los%20Pueblos%20Indigenas%20(1).pdf.

Gadamer, H. G. (2003). Verdad y método (Tomo I). Ediciones Sígueme.

Galeano, E. H. (2010). Las venas abiertas de América Latina (3ra ed.). Siglo Veintiuno Editores.

Garcés Pérez, G. y Figueiredo, A. (2021). Procesos de identificación étnico-culturales. Ensamblajes y desarticulaciones desde las trayectorias de jóvenes pertenecientes a pueblos indígenas. Límite (Arica), 16(1), 11. https://doi.org/10.4067/s0718-50652021000100211.

García Canclini, N. (1993). Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Editorial Sudamericana.

García Figueroa, A. (1998). Principios y positivismo jurídico. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

García Inda, A. (2001). La razón del derecho: entre habitus y campo. En Pierre Bourdieu. Poder, Derecho y Clases Sociales. Descleé de Brouwer, pp. 9-50.

García Moritán, M. y Ventura, B. (2007). Caracterización sociohistórica. En A. Brown, M. García Moritán, B. Ventura, N. Hilgert y L. Malizia (Eds.), Finca San Andrés: Un espacio de cambios ambientales y sociales en el Alto Bermejo (pp. 67-82). Ediciones del Subtrópico.

García Moritán, M., y Cruz, M. (2012). Comunidades originarias y grupos étnicos de la provincia de Jujuy. Población y sociedad, 19(2), 155-173. https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S185285622012000200002&lng=es&tlng=es.

García Veritá, G. (2015). La propiedad comunitaria indígena desde el derecho a la igualdad. En F. Kosovsky y S. L. Ivanoff (Eds.), Propiedad comunitaria indígena (pp. 129-148). Universitaria de la Patagonia, EDUPA.

García-Peter, S. y Villavicencio-Miranda, L. (2016). Alcances y límites del multiculturalismo liberal desde un enfoque de género interseccional. Convergencia, 23(72), 13-38. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352016000300013&lng=es&tlng=es.

Gargarella, R. (2013). Las teorías de la justicia después de Rawls. España: Paidós Estado y Sociedad. pp. 210.

Gargarella, R. (2010). Los fundamentos legales de la desigualdad: El constitucionalismo en América (1776-1860). Siglo XXI Editora Iberoamericana.

Gargarella, R. (1995). Crisis de representación y constituciones contramayoritarias. Isonomía: Revista de teoría y filosofía del derecho, (2), 19-45.

Gargarella, R. y Courtis, C. (2009). El nuevo constitucionalismo latinoamericano: Promesas e interrogantes. CEPAL.

Geertz, C. (2000). Available light: Anthropological reflections on philosophical topics. Princeton University Press.

Geertz, C. (1987). La interpretación de las culturas. Gedisa.

Gelli, M. A. (2022). Constitución de la Nación Argentina (6ª ed., actualizada y ampliada, Vols. 1-2). La Ley.

Gelli, M. A. (2011). Constitución de la Nación Argentina: Comentada y concordada (4ª ed., ampliada y actualizada, 3ª reimp.). La Ley.

Gianuzzi, E. (2012). El miedo en la "otredad": Mito y cultura popular en el noroeste argentino. Cuadernos Interculturales, 10(18), 77-111. Universidad de Playa Ancha.

Giarracca, N., y Teubal, M. (Eds.). (2017). Estudios rurales y movimientos sociales: Miradas desde el Sur: Antología esencial. CLACSO.

Giddens, A. (1998). La tercera vía: La renovación de la socialdemocracia. Taurus.

Gil Domínguez, A. (2016). El Estado constitucional y convencional de derecho en el código civil y comercial. Editorial Ediar.

Gil Domínguez, A. (2004). Constitución y derechos humanos: Las normas del olvido en la República Argentina. Editorial EDIAR.

Giraudo, L. (Ed.). (2008). Derechos, costumbres y jurisdicciones indígenas en la América Latina contemporánea. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Gobierno de Jujuy. (2024). Geografía. https://jujuy.gob.ar/geografia/.

Goldschmidt, W. (1986). La ciencia de la justicia (Dikelogía) (2ª ed.). Depalma.

Goldschmidt, W. (1984). El principio supremo de justicia. Editorial de Belgrano.

Gómez Suárez, Á. (2002). Movimientos indígenas en la globalización: Los Tawahka. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, 9(29), 25-43.

Gómez, M. (2002). Derecho indígena y constitucionalidad. En E. Krotz (Ed.), Antropología jurídica: Perspectivas socioculturales en el estudio del derecho (p. 245). Anthropos.

González de Prada, M. (2013). Propiedad comunitaria indígena: Análisis de las sentencias en Jujuy. La Ley, E, 1296. Recuperado de AR/DOC/3884/2013.

González de Prada, M. (2018). Contrato y reciprocidad. Astrea.

González Sassón, A. E. (2018). Artículo 18 del Código Civil y Comercial de la Nación: Un intento fallido por legislar la propiedad y posesión de los pueblos indígenas. Universidad Nacional del Nordeste, Secretaría General de Ciencia y Técnica. http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/52188

Gordillo, G. y Hirsch, S. (2010). La presencia ausente: Invisibilizaciones, políticas estatales y emergencias indígenas en la Argentina. En G. Gordillo y S. Hirsch (Eds.), Movilizaciones indígenas e identidades en disputa en la Argentina (pp. 15-38). La Crujía.

Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? Journal of Legal Pluralism, 24, 1-55.

Grimson, A. (2007). Introducción. En A. Grimson (Ed.), Pasiones nacionales: Política y cultura en Brasil y Argentina (pp. 13-48). Edhasa.

Grimson, A. y Karasik, G. (Coords.). (2017). Estudios sobre diversidad sociocultural en la Argentina contemporánea. CLACSO; PISAC. https://doi.org/10.978-987-722-252-4.

Guastini, R. (2014). Interpretar y argumentar. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Guastini, R. (2015). Interpretación y construcción jurídica. Isonomía, (43), 11-48.

Guber, R. (2001). La etnografía, método, campo y reflexividad. Grupo Editorial Norma.

Gudynas, E. (2011). El nuevo extractivismo progresista en América del Sur: Tesis sobre un viejo problema bajo nuevas expresiones. http://www.gudynas.com/publicaciones/capitulos/GudynasExtractivismoTesisColonialismo11.pdf

Gudynas, E. (2009). El buen vivir más allá del desarrollo. Ediciones Abya-Yala.

Guest, S. (1991). Ronald Dworkin. Edinburgh University Press

Guiteras Mombiola, A. y Córdoba, L. I. (2021). "Sin indios no hay industria del caucho": Los indígenas amazónicos frente a la colonización gomera. En Fundación Konrad Adenauer Stiftung (pp. 472-514).

Gutiérrez Fernández, D. y Márquez Fernández, Á. B. (2004). Raúl Fornet-Betancourt: Diálogo y filosofía intercultural. Frónesis, 11(3), 9-39. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-62682004000300002&lng=es&tlng=es.

Gutiérrez, A. (2006), La tarea y el compromiso del investigador social. Notas sobre Pierre Bourdieu en: Bourdieu Pierre, Intelectuales, política y poder, Buenos Aires: EUDEBA. págs. 7-19.

Gutiérrez, M. A. (1999). Para leer el marxismo analítico: controversias metodológicas e implicancias teóricas. En A. Borón (Comp.), Teoría y Filosofía Política. CLACSO/Eudeba.

Habermas, J. (2005). Facticidad y validez: Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso. Trotta.

Habermas, J. (1996). Conciencia moral y acción comunicativa. Península.

Habermas, J. (1992a). La teoría de la acción comunicativa I, racionalidad de la acción y racionalización social. Traducción de Manuel Jiménez Redondo. Madrid: Taurus.

Habermas, J. (1992b). La teoría de la acción comunicativa II, Crítica de la razón funcionalista. Traducción de Manuel Jiménez Redondo. Madrid: Taurus.

Habermas, J. (1991). Ética del discurso: Notas sobre un programa de fundamentación. En Conciencia moral y acción comunicativa (pp. 59-134). Península.

Hadad, G. y Gómez, C. (2007). Territorio e identidad: Reflexiones sobre la construcción de territorialidad en los movimientos sociales latinoamericanos. IV Jornadas de Jóvenes Investigadores, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. https://www.aacademica.org/000-024/152

Haesbaert, R. (1997). Des-territorialización e identidad: La resignificación del lugar en la modernidad tardía. EdUERJ.

Hall, S. (2003). Identidad cultural. Siglo XXI Editores.

Handler, R. (1986). Nationalism and the politics of culture in Quebec. University of Wisconsin Press.

Harsanyi, J. y Selten, R. (1988). A general theory of equilibrium selection. MIT Press.

Hart, H. L. A. (2011). El concepto de derecho (3ª ed.). Abeledo Perrot.

Harvey, D. (2021). Espacios del capitalismo global: Hacia una teoría del desarrollo geográfico desigual. Akal.

Harvey, D. (2019). Marx, El capital y la locura de la razón económica. Akal.

Hegel, G. W. F. (1993). Fundamentos de la filosofía del derecho. (Ed. K. H. Ilting, Trad. C. Díaz). Libertarias/Prodhufi.

Henríquez Ramírez, A. (2013). Participación indígena: Desarrollo y alcances en torno a la participación ambiental. Ius et Praxis, 19(2), 251-300. https://doi.org/10.4067/S0718-00122013000200008.

Hernández Castillo, R. A. (2011). Movimientos de Mujeres Indígenas: re-pensando los derechos desde la diversidad. En G. Espinosa y A. L. Jaiven (Coords.), Un Fantasma recorre el siglo. Luchas feministas en México 1910-1920 (pp. 309-331). UNAM-Xochimilco.

Hernández Castillo, R. A. y Flores Arreozola, R. (2024). Representación de la discriminación de la comunidad afrodescendiente en el norte de México: El caso de la comunidad mascoga. Comparative Cultural Studies: European and Latin American Perspectives.

Hernández Castillo, R. A. y Rueda, M. A. (2021). Despojo territorial y resistencia indígena: Una crítica a las políticas neoliberales en América Latina. Siglo XXI.

Herrera, M., Caramelo, D., y Picasso, S. (2015). Código Civil y Comercial de la Nación comentado. Editorial. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Infojus, 2015.

Hobbes, T. (1994). Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. Fondo de Cultura Económica.

Hobsbawm, E. y Ranger, T. (2002). La invención de la tradición. Crítica.

Hoekema, A. (2014). Hacia un pluralismo jurídico formal de tipo igualitario. En J. A. Guevara Gil & A. Gálvez Rivas (Comps. y trads.), Pluralismo jurídico e interlegalidad: Textos esenciales (pp. 349-389). Lima: Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica del Departamento Académico de Derecho (CICAJ), Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS), Pontificia Universidad Católica del Perú. Recuperado de https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Pluralismo%20juridico%20e%20interlegalidad%20Textos%20esenciales.pdf

Horkheimer, M. (1937). Traditionelle und kritische Theorie. En A. Schmidt y G. Schmid Noerr (Eds.), Gesammelte Schriften (Vol. 4, pp. 162-216). S. Fischer.

Horkheimer, M. (1998). Teoría tradicional y Teoría Crítica (1937). En Teoría Crítica (E. Albizu y C. Luis, Trad., pp. 223-271). Amorrortu. https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/40266/Theoria%2031%20113139.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Huanca-Arohuanca, J. W., Canaza-Choque, F. A., Escobar-Mamani, F. y Ruelas Vargas, D. (2020). En defensa del pluralismo latinoamericano: Las esferas de la justicia y la igualdad compleja en Michael Walzer. Un dilema pendiente por atender. Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades, (11), 97-108. https://doi.org/10.37135/chk.002.11.07.

Iglesias Vila, M. (2006). De la justicia como equidad al Derecho como equidad, en BERMEJO, J.M., RODILLA, M.A., (eds.) Jurisdicción, interpretación y sistema jurídico, Aquilafuente, Salamanca.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2022). Bases de datos del INDEC. https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos.

Iturralde, D. (2000). Las reformas constitucionales como una caja de Pandora. En M. Castro (Ed.), Derecho consuetudinario y pluralismo legal: Desafíos del Tercer Milenio. Actas del II Congreso de la RELAJU, (pp. 1051-1070). Arica, 13 al 17 de marzo.

Iturralde D. (2004). Pueblos indígenas, derechos económicos, sociales y culturales y discriminación. Revista IIDH, (39), 233-256.

Jacques, M. (1996). El fin de la política. Anagrama.

Jellinek, G. (2000). Teoría general del Estado (Reimpresión de la traducción de Fernando de los Ríos). Fondo de Cultura Económica. (Traducción de la segunda edición alemana de 1911).

Juzgado de San Carlos de Bariloche, Emilio Riat. (2004, 12 de agosto). Sede, Alfredo y otros c/ Vila, Herminia y otros s/ Desalojo (Sentencia). https://phpmaker.jusrionegro.gov.ar/redjudicial/muestraprov_action_eab.php?id=842277.

Kant, I. (1978). Crítica de la razón pura. Alfaguara. (Trabajo original publicado en 1781).

Karasik, G. (2006). Cultura popular e identidad. En A. Teruel y M. Lagos (Comps.), Jujuy en la Historia de la Colonia al Siglo XX (pp. 467-489). EDIUNJu.

Kelsen, H. (2011). Teoría pura del derecho: Introducción a los problemas de la ciencia jurídica (1ª ed.). Estructuras y Procesos.

Kemelmajer de Carlucci, A., y Boretto, M. (2017). Manual de derecho privado (Tomo I y II). Rubinzal-Culzoni.

Kennedy, D. (2004). La educación legal como preparación para la jerarquía. Revista sobre enseñanza del derecho de Buenos Aires, 3.

Kominek, A. (2007). La teoría Habermasiana: De sus herencias frankfurtianas a la superación del paradigma cartesiano. Revista Tecnología e Sociedade, 3(4), 15-32.

Krotz, E. (2002). Sociedades, conflicto, cultura y derecho desde una perspectiva antropológica. En E. Krotz (Ed.), Antropología jurídica: Perspectivas socioculturales en el estudio del derecho. Anthropos Editorial y Universidad Autónoma Metropolitana, Plantel Iztapalapa.

Kuper, A. (1999). Culture: The anthropologists' account. Harvard University Press.

Kymlicka, W. (2003). Igualitarismo liberal y republicanismo cívico: ¿amigos o enemigos? Núm. 41 Pág. 204-234. Nuevas ideas republicanas: autogobierno y libertad. Dialnet.

Kymlicka, W. (1987). Filosofía política contemporánea (J. del Hierro, Trad.). Alianza.

Lafuente Guantes, M. I. (2004). La idea de totalidad en Kant como fundamento del progreso cognoscitivo. Frónesis, 11(3).

Lager, M.-T. (2022). Autonomía y resistencia de las comunas étnicas de la costa del Ecuador: El modo de vida comunitario ¿una propuesta decolonial? [Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona]. Repositorio Digital de Documentos UAB. https://ddd.uab.cat/record/688035.

Lagos, M. y Gutiérrez, M. (2006). Dictadura, democracia y políticas neoliberales (1976-1999). En A. Teruel y M. Lagos (Eds.), Jujuy en la Historia: De la colonia al siglo XX (pp. 241-294). Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy.

Langer, E. y Muñoz, E. (2003). Movimientos indígenas contemporáneos en América Latina. Jaguar Books.

Lazzari, M. (2010). Arqueología, identidad y derechos indígenas: Una reflexión desde la Patagonia. Sociedad Argentina de Antropología.

Lefebvre, H. (1972). La significación de la comuna. En La crisis actual de la política (pp. 45-75). Rodolfo Alonso Editor.

Lemaitre Ripoll, J. (2009). El derecho como conjuro: Fetichismo legal, violencia y movimientos sociales. Siglo del Hombre Editores.

Lenton, D. I. (2018). De genocidio en genocidio: Notas sobre el registro de la represión a la militancia indígena. Revista de Estudios sobre Genocidio, (13), 7-61.

Lenton, D. I. (2014). De centauros a protegidos: La construcción del sujeto de la política indigenista argentina desde los debates parlamentarios (1880–1970). Corpus, 4(2). https://doi.org/10.4000/corpusarchivos.1290.

Lenton, D. I. (2010). Política indigenista argentina: Una construcción inconclusa. En Aportes de los Pueblos Originarios a la Educación en el Bicentenario (pp. 10-27). Olavarría.

Leone, M. (2018). Seguritización de la indigeneidad. La actual política indigenista de Argentina y Chile. Question/Cuestión, 1(59), e075. https://doi.org/10.24215/16696581e075

Leone, M. (2016). Prácticas de pastoral aborigen y juridización de derechos indígenas en Argentina: Un análisis de la región del Chaco (1965-1994). [Tesis doctoral]. Universidad Nacional de General Sarmiento-Instituto de Desarrollo Económico y Social.

Levaggi, A. (1990). Tratamiento legal y jurisprudencial del aborigen en la Argentina durante el siglo XIX. En A. Levaggi (Coord.), El aborigen y el derecho en el pasado y el presente (pp. 45-90). Universidad del Museo Social Argentino.

Lévi-Strauss, C. (1982). El hombre desnudo. Fondo de Cultura Económica.

Lévi-Strauss, C. (1990). El pensamiento salvaje. Fondo de Cultura Económica.

Ley 23.302.(1985). Ley de política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/23790/actualizacion

Ley 26.160. (2006). Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/122499/texto

Ley 26.994. (2015). Código Civil y Comercial de la Nación. Boletín Oficial de la República Argentina.https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000239999/235975/norma.htm.

Ley 340. (1869). Código Civil de la República Argentina. Buenos Aires, Argentina. http://www.saij.gob.ar

Leyva, G. (1999). Max Horkheimer y los orígenes de la teoría crítica. Sociológica, 14(40), 65-87. Universidad Autónoma Metropolitana.

Lezcano, J. M. (2015). La propiedad comunitaria indígena y su caracterización. Análisis del Código Unificado sancionado y su Anteproyecto. Revista Reformas Legislativas. Debates doctrinarios. Código Civil y Comercial, 1(2), 63. Ediciones Infojus.

Longhi, H. F. y Krapovickas, J. (2018). Población y pobreza en la Puna argentina en los inicios del siglo XXI. En Fundación Miguel Lillo (pp. 364-379).

Lopera, G. (2004). Los derechos fundamentales como mandatos de optimización. Doxa, 27, 211-243.

López Bárcenas, F. (2002). Legislación y derechos indígenas en México. Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas.

Lorenzetti, R. L. (Dir. Gral.). (2017). Código Civil y Comercial Explicado: Doctrina – Jurisprudencia (8 tomos). La Ley.

Loza, J. (2013). Construir América Latina desde las ciudades: Representaciones sobre la región y la 'nación' en los discursos de integrantes de movimientos sociales urbanos contemporáneos de Argentina, México y Uruguay (2008–2011). [Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires].

Lozada, A. (2016). El postpositivismo de la «optimización»: Sobre el concepto de principio jurídico de R. Alexy. DOXA. Cuadernos De Filosofía Del Derecho, (39), 227–252. https://doi.org/10.14198/DOXA2016.39.12.

Maceira, M. R. (2011). El Estado argentino y los pueblos originarios. El respeto por la propiedad comunitaria. Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja". http://www.derecho.uba.ar/revistagioja/articulos/R000E01A005_0034_p-d-der-humanos.pdf.

Mackinnon, C. (1989). Toward a feminist theory of the state. Harvard University Press.

Madrazo, G. (2005). Pacto étnico, rebelión y modernidad en el siglo XVIII. Andes, (16).

Magallanes, J. (2019). Políticas públicas, agencia judicial y derechos indígenas: Aportes para una comprensión de los conflictos territoriales en el sur mendocino (Argentina). Revista TEFROS, 17(2), 124-149.

Malinowski, B. (1985). Los argonautas del Pacífico Occidental. Península.

Malinowski, B. (1978). Crimen y costumbre en la sociedad salvaje. Ediciones Península.

Malinowski, B. (1975). Magia, ciencia y religión y otros ensayos. Planeta-De Agostini.

Mandrini, R. (2008). La Argentina aborigen: De los primeros pobladores a 1910 (Colección Biblioteca Básica de Historia). Siglo XXI Editores.

Manzanelli, M. del P. (2021). La propiedad comunitaria indígena como issue social: Análisis de anteproyectos de ley en Argentina (2015 a la actualidad). Postdata, Grupo Interuniversitario Postdata. https://doi.org/ISSN: 1515-209X / e-ISSN: 1851-9601

Marí, E. (1986). Racionalidad e imaginario social en el discurso del orden. Doxa, 3, pp. 93-111.

Martínez Sarasola, C. (2012). La Argentina de los caciques: O el país que no fue (2ª ed.). Editorial Del Nuevo Extremo.

Masciotra, M. (2018). Protección de datos personales y su integración en el marco de los derechos humanos. SAIJ. www.saij.gob.ar

Massey, D. (1994). Space, place and gender. University of Minnesota Press.

McCarthy, Th. A. (1987). La teoría crítica de Jürgen Habermas. Tecnos.

Mecle Armiñana, E. S. (2001). Los derechos sociales en la Constitución Argentina y su vinculación con la política y las políticas sociales. En A. Ziccardi (Comp.), Pobreza, desigualdad social y ciudadanía: Los límites de las políticas sociales en América Latina. CLACSO. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/pobreza/arminana.pdf

Medina Hernández, A. (2000). Los ciclos del indigenismo: La política indigenista del siglo XX. En N. Gutiérrez Chong, M. Romero García, y S. Sarmiento Silva (Coords.), Indigenismos. Reflexiones críticas (pp. 63-80). INI.

Méndez, C., Coka, D., Puetate, J., y Dávila, M. (2020). Filosofía hermenéutica y postmodernidad: Transiciones metodológicas para la comprensión del derecho como un fenómeno complejo. En III Jornadas Internacionales de Investigación Científica (pp. 299-313). UTN.

Meo, A. I. (2010). Consentimiento informado, anonimato y confidencialidad en investigación social. La experiencia internacional y el caso de la sociología en Argentina. Aposta. Revista de Ciencias Sociales, 44, 1-30.

Merlan, F. (2010). Indigeneity: Global and local. University of Chicago Press.

Merry, S. E. (2003). Del derecho y el colonialismo al derecho y la globalización. Derecho y Social Investigación, 28(2), 569-590.

Merry, S. E. (1991). Derecho y colonialismo. Revista de Derecho y Sociedad, 25(4), 889-922.

Meza, M. (2013). Capítulo III. El derecho internacional de los derechos humanos y los pueblos indígenas. En J. Aylwin (Ed.), Los pueblos indígenas y el derecho (pp. 441-521). LOM.

Michel, A., Quifionez, M., y Corregidor, B. (2004). Política de tierras públicas y Chaco Salteño (1880-1920). En E. Cruz y R. Paoloni (Comps.), La propiedad de la tierra en la Argentina. https://www.redalyc.org/journal/3458/345846225006/html/

Mignolo, W. (2007). Del giro decolonial. CLACSO.

Mignolo, W. (2010). Desobediencia epistémica. Ediciones del Signo.

Mill, J. S. (2001). Consideraciones sobre el Gobierno Representativo (C. Mellizo, Trad.). Alianza.

Ministerio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de la provincia de Jujuy. (2023). Informe Técnico N.º 4: Comunidades con Decreto de Reconocimiento. https://derechoshumanosypueblos.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/sites/79/2023/09/Informe-T%C3%A9cnico-N%C2%B0-4-Comunidades-con-Decreto-de-Reconocimiento.pdf

Ministerio Público de la Defensa. (2010). Informe sobre la situación de las tierras indígenas en Argentina. Defensoría General de la Nación. https://oaip.mpd.gov.ar/users/uploads/Informe_%20Anual_%202010.pdf.

Mira-Aladrén, M. y Lozano-Blasco, R. (2022). Vulnerabilidad, opresión e injusticia social: El caso de la diversidad funcional desde la perspectiva de Iris Marion Young. En-claves del pensamiento, (31), e499. https://doi.org/10.46530/ecdp.v0i31.499.

Molano, O. L. (2007). Identidad cultural: Un concepto que evoluciona. Revista Opera, 7, 69-84.

Moore, S. F. (1973). Law and social change: The semi-autonomous field as an appropriate subject of study law. Law and Society Review, 7(4), 719-746.

Murillo Masís, R. y Ruiz Umaña, Y. (2020). La participación indígena en la actividad turística en territorio Brörán-Térraba, Costa Rica, 2018. Trama. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 9(1), 171-209. https://doi.org/10.18845/tramarcsh.v9i1.5273.

Naciones Unidas. (2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Nader, L. (2002). Moving on: Comprehending anthropologies of law. En M. Goodale y J. Starr (Eds.), Practicing ethnography in law: New dialogues, enduring methods. Palgrave Macmillan.

Neiman, G. y Quaranta, G. (2006). Los estudios de caso en la investigación sociológica. En M. Vasilachis de Gialdino (Comp.), Estrategias de investigación cualitativa. Gedisa.

Nieto, A. y Fernández, T. R. (2006). El derecho y el revés: Diálogo epistolar sobre leyes, abogados y jueces (4ª reimp.). Editorial Ariel.

Nino, C. S. (2013). Una teoría de la justicia para la democracia. Siglo Veintiuno Editores.

Nino, C. S. (2005). Fundamentos de derecho constitucional. Astrea.

Nino, C. S. (1992). Fundamentos de derecho constitucional: Análisis filosófico, jurídico y politológico de la práctica constitucional. Astrea.

Nino, C. S., Maurino, G., y Fiss, O. (2007). Derecho, moral y política: Fundamentos del liberalismo político, derechos humanos y democracia deliberativa II. Gedisa.

Nizama Valladolid, M. y Nizama Chávez, L. M. (2020). El enfoque cualitativo en la investigación jurídica, proyecto de investigación cualitativa y seminario de tesis. Vox Juris, 38(2), 121–144. https://doi.org/10.24265/voxjuris.2020.v38n2.05.

Nozick, R. (1988). Anarquía, Estado y Utopía (R. Tamayo, Trad.). Fondo de Cultura Económica.

Nussbaum, M. (2012). Crear capacidades: Propuestas para el desarrollo humano. Paidós.

Observatorio de Derechos Humanos. (2023). Comunidades indígenas de Jujuy con personería. https://susepu.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/sites/79/2023/07/Comunidades-Ind%C3%ADgenas-de-Jujuy-con-Personer%C3%ADa.pdf.

Organización de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights.

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (1957). Convenio 107 sobre pueblos indígenas y tribales. Ginebra, Suiza.

Organización Internacional del Trabajo. (1989). Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Adoptado el 27 de junio de 1989, ratificado en Argentina por la Ley 24.071 en 1992. https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169.

Osorio García, S. N. (2010). John Rawls: Una teoría de justicia social. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 5(1).

Ostrom, E. (1995). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press.

Oszlak, O. (2015). La formación del Estado Argentino: Orden, progreso y organización nacional. Editorial Ariel.

Paredes Paredes, F. I. (2021). Pueblos indígenas y tribales y derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Una mirada crítica. Derecho Internacional, 21, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. https://doi.org/10.22201/iij.24487872e.2021.21.1559.

Parise, A. (2022). El paradigma liberal de la propiedad y la codificación decimonónica en la República Argentina. Autoctonía. Revista de Ciencias Sociales e Historia, 6(1), 68-88. https://doi.org/10.23854/autoc.v6i1.226.

Parolo, M. (2007). Jujuy en la historia. De la colonia al siglo XX (Reseña del libro). Población & Sociedad, (14-15), 239-241.

Peces-Barba, G. (1991). Curso de derechos fundamentales. Eudema.

Pecqueur, B., y Zimmerman, J. B. (2004). Économies de proximités. Lavoisier.

Peralta, S. y Arrueta, M. (2017). Lo indígena en América Latina, distintas facetas en su emergencia. El caso de Argentina. En M. Arrueta, F. Fernández, S. Peralta, y A. Rivero (Comps.), Antropolocales: Estudios de antropología en Jujuy (pp. 19-40). Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy (EDIUNJU).

Pérez Castellón, A. (2013). Justicia constitucional en Bolivia: Desafíos y oportunidades para la tutela de los derechos de los pueblos indígenas en conflictos socio-ambientales. Revista Catalana de Dret Ambiental, 4(2). https://doi.org/2014-038X.

Pettit, P. (1999). Republicanismo: Una teoría sobre la libertad y el gobierno. Paidós.

Pita Pico, R. (2021). La dispersión indígena y su presencia en el territorio de los blancos y mestizos en el nororiente del Nuevo Reino de Granada, siglos XVII y XVIII. Tiempo Histórico, (22), 17-38. https://doi.org/10.25074/th.v0i22.1948.

Pogge, T. (2008). ¿Qué es la justicia global? Revista de Economía Institucional, 10(19), 99-114.

Pragier, D. (2021). Las respuestas de las comunidades indígenas frente a la explotación del litio en la Puna argentina [Tesis de maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Repositorio Institucional UNSAM. https://ri.unsam.edu.ar/bitstream/123456789/1930/1/TDOC_EPYG_2021_PD.pdf.

Prats, L. (2000). El concepto de patrimonio cultural. Cuadernos De antropología Social, (11). https://doi.org/10.34096/cas.i11.4709

Prieto Sanchís, L. (1997). Constitucionalismo y positivismo. México: Distribuciones Fontamara.

Pujadas, J. J. (1990). Los estudios sobre etnicidad y nacionalismo en España, 1981-1987. En J. Cucó y J. Pujadas (Coords.), Identidades colectivas (pp. 19-40). Generalitat Valenciana.

Quijano, A. (2020). Cuestiones y horizontes: De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder (1a ed. esp.; C. Germaná, Pref.; D. A. Clímaco, Pról.). CLACSO; Universidad Nacional Mayor de San Marcos. https://doi.org/978-987-722-717-8.

Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder y clasificación social. En Cuestiones y horizontes: De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder. CLACSO. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140506032333/eje1-7.pdf

Quijano, A. (2000). "Colonialidad del poder, eurocentrismo y America latina" en Colonialidad del Saber, Eurocentrismo y Ciencias Sociales. 201-246. CLACSO-UNESCO 2000, Buenos Aires.

Raffestin, C. (1993). Por una geografía del poder. Editorial Oikos-Tau

Rawls, J. (2002). Justicia como equidad: Una reformulación (E. Kelly, Ed.; A. de Francisco, Trad.). Paidós.

Rawls, J. (1999). Justicia como equidad. En M. A. Rodilla (Trad. y Ed.), Materiales para una teoría de la justicia (pp. 1-17). Tecnos.

Rawls, J. (1997). Teoría de la justicia (M. D. González, Trad.). Fondo de Cultura Económica. (Trabajo original publicado en 1971).

Rawls, J. (1996). El liberalismo político. Crítica.

Reale, M. (1997). Teoría tridimensional del derecho. Tecnos.

Reale, M. (1967). Posición del tridimensionalismo jurídico concreto. Diánoia Revista de Filosofía, 13(13), 331.

Requejo, F. (1991). Teoría crítica y estado social. Neokantismo y socialdemocracia en J. Habermas. Anthropos.

Reyes Morel, A. (2017). El principio de comunidad en G. A. Cohen: Reciprocidad y eticidad no sustancial. Unidiversidad, 26.

Rivera Cusicanqui, S. (2010). Sociología de la imagen: Miradas ch'ixi desde la historia andina. Tinta Limón.

Robles, G. (2017). El naturalismo de la Subjektkritik de Theodor W. Adorno. Diánoia, 62(78). http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.7754/pr.7754.pdf

Rodríguez Duch, D. (2013). La incorporación de la cuestión indígena en la reforma del Código Civil. Revista Jurídica, Revista Jurídica N° 17, 232-241.

Rojo, R. E. (2005). Por una Sociología Jurídica, del Poder y la Dominación. Revista del Instituto de Filosofía e Ciencias Humanas. Universidade Federal do Rio Grande so Sul, 13, pp.36-81.

Romero Tovar, M. T. (2009). Antropología y pueblos originarios de la Ciudad de México: Las primeras reflexiones. Argumentos (México, D.F.), 22(59), 45-65. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952009000100002.

Rosatti, H. (2019). Progresividad y operatividad de los derechos económicos, sociales y culturales en una sociedad en conflicto. En VV.AA., Constitución de la Nación Argentina: A 25 años de la reforma de 1994 (pp. 31-40). Hammurabi.

Rosatti, H. (2017). Tratado de derecho constitucional (2ª ed. revisada). Rubinzal-Culzoni.

Rousseau, J.-J. (2000). El contrato social: Ó sea principios del derecho político (J. J. Rousseau, Trad.). Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. (Edición original publicada en 1836 por Imprenta de los Herederos de Roca, Barcelona).

Ruiz Manero, J. (1990). Jurisdicción y normas: Dos estudios sobre función jurisdiccional y teoría del derecho. Centro de Estudios Constitucionales.

Saba, R. (2016). Más allá de la igualdad formal ante la ley: ¿Qué le debe el Estado a los grupos desventajados? Siglo XXI Editores.

Sábato, H. (2016). Sobre la ciudadanía política en América Latina en el siglo XIX. En A. Salmerón & C. Noriega Elío (Eds.), Pensar la modernidad política: Propuestas desde la nueva historia política (pp. 435-476). Instituto Mora.

Sabsay, D. A. (Dir.), y Manili, P. L. (Coord.). (2010). Constitución de la Nación Argentina: Análisis doctrinal y jurisprudencial (Tomo 1: Artículos 1º - 35. Preámbulo. Declaraciones, derechos y garantías). La Ley.

Sabsay, D. A., y Onaindia, J. M. (2009). La constitución de los argentinos: Análisis y comentario de su texto luego de la reforma de 1994 (7ª ed.). Errepar.

Sagüés, N. P. (2017). Derecho constitucional. Astrea.

Salgado Lévano, A. C. (2007). Investigación cualitativa: Diseños, evaluación del rigor metodológico y retos. Universidad de San Martín de Porres. https://dialnet.unirioja.es

Salvatore, R. D. (2020). La Confederación Argentina y sus subalternos: Integración estatal, política y derechos en el Buenos Aires posindependiente (1820-1860). Ediciones Biblioteca Nacional.

Sánchez Zorrilla, M. (2011). La metodología en la investigación jurídica: Características peculiares y pautas generales para investigar en el derecho. Revista Telemática de Filosofía del Derecho, (14), 317-358.

Sandel, M. J. (2011). Justicia: ¿Hacemos lo que debemos? Debate.

Santi, M. F. (2016). Controversias éticas en torno a la privacidad, la confidencialidad y el anonimato en investigación social. Revista de Bioética y Derecho, 37, 5–21.

Saussure, F. de. (1945). Curso de lingüística general. Losada.

Sautu, R., Boniolo, P., Dalle, P., y Elbert, R. (2005). Manual de metodología: Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. CLACSO.

Scanlon, T. (2003). Lo que nos debemos unos a otros. ¿Qué significa ser moral? (E. Weikert García, Trad.). Paidós. (Trabajo original publicado en 1998).

Schavelzon, S. (2010). La antropología del estado, su lugar y algunas de sus problemáticas. Revista Publicar - Año VIII No IX, pp. 73-96.

Scott, J. C. (1998). Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed. Yale University Press.

Scruton, R. (2018). Conservadurismo. El Buey Mudo.

Segato, R. (2021). La crítica de la colonialidad en ocho ensayos: Y una antropología por demanda (2ª ed. revisada). Prometeo Libros.

Segato, R. (2007). La Nación y sus Otros: Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Políticas de la Identidad. Prometeo.

Seid, G. (2016). Procedimientos para el análisis cualitativo de entrevistas. Una propuesta didáctica. V Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales, Mendoza, Argentina. Memoria Académica. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.8585/ev.8585.pdf

Sen, A. (2011). La idea de la justicia. Taurus.

Sen, A. (2001). ¿Qué impacto puede tener la ética? Episteme, NS, 21(2), 107-119.

Sen, A. (1995). Nuevo examen de la desigualdad. Alianza Editorial.

Sendra Moll, J. (2015). La concepción del Derecho como integridad: Ronald Dworkin. Ciencia Jurídica, 4(8), 117. Universidad de Guanajuato, División de Derecho, Política y Gobierno, Departamento de Derecho.

Serrano Sánchez, J. A. (2008). Límites del multiculturalismo de Kymlicka para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En-claves del pensamiento, 2(3). https://doi.org/10.29105/enc201803.

Shapiro, S. J. (2011). Legality. The Belknap Press of Harvard University Press.

Sica, G., y Ulloa, M. (2006). Jujuy en la colonia: De la fundación de la ciudad a la crisis del orden colonial. En A. Teruel & M. Lagos (Comps.), Jujuy en la historia: De la colonia al siglo XX. Universidad Nacional de Jujuy.

Sieckmann, J.-R.(2006). Sobre la fundamentación de los juicios ponderativos. En C. Calderón (Ed.), El modelo de los principios (pp. 159-204). Universidad Externado de Colombia.

Sieder, R. (2011). ¿'Emancipación' o 'Regulación'? Derecho, globalización y derechos de los pueblos indígenas en la posguerra guatemalteca. Economía y Sociedad, 40(2), 239-265.

Sierra Camacho, M. T. (2004). Haciendo justicia: Interlegalidad, derecho y género en regiones indígenas. CIESAS; Porrúa Editores.

Sierra, M. T. (1996). Antropología jurídica y derechos indígenas: problemas y perspectivas. Dimensión Antropológica, 8, 55-90. http://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=1439.

Sierra, M. T. (2021). Antropología jurídica latinoamericana y pluralismo jurídico: Balances y perspectivas desde México. En Hacer ciencias sociales en América Latina: Desafíos y experiencias de investigación (pp. 131-147). FLACSO - Brasilia.

Sierra, M. T., y Chenaut, V. (2002). Los debates recientes y actuales en la antropología jurídica: Las corrientes anglosajonas. En E. Krotz (Ed.), Antropología jurídica: Perspectivas socioculturales en el estudio del derecho (pp. 113-180). Anthropos; Universidad Autónoma Metropolitana.

Silva Bascuñán, A. (2008). Reseña de Derecho civil y persona humana. Cuestiones debatidas, por H. Corral Talciani. Revista chilena de derecho, 35(2), 367-369. https://doi.org/10.4067/S0718-34372008000200008

Skinner, Q. (2004). La libertad antes del liberalismo. Taurus.

Solórzano Fonseca, J. C. (2017). La población indígena de Costa Rica en el siglo XVI al momento del contacto con los europeos. Anuario de Estudios Centroamericanos, 43, 313-345. https://doi.org/10.15517/aeca.v43i0.31561.

Soriano, R. (1997). Sociología del derecho. Ariel.

Stavenhagen, R. (2002). Identidad indígena y multiculturalidad en América Latina. Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, 4(7), 0-20. Universidad de Sevilla.

Stavenhagen, R. (2004). Derecho internacional y derechos indígenas. En J. Aylwin (Ed.), Derechos Humanos y Pueblos Indígenas: Tendencias internacionales y contexto chileno (pp. 15-26). Instituto de Estudios Indígenas.

Stavenhagen, R. (2008). Los derechos de los pueblos indígenas: Desafíos y problemas. Ponencia presentada en el XXVI Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 18-29 de agosto.

Stavenhagen, R. (2010). Los pueblos originarios: El debate necesario (N. Fernández, Comp.). CTA Ediciones; CLACSO; Instituto de Estudios y Formación de la CTA. https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20101117084419/Stavenhagen.pdf.

Svampa, M. (2008). Cambio de época: Movimientos sociales y poder político. Cuadernos del Cendes, 25(68), 134. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082008000200011&lng=es&tlng=es.

Taylor, C. (1992). “La política del reconocimiento”. Argumentos Filosóficos: Ensayos Sobre El Conocimiento, El Lenguaje Y La Modernidad. Barcelona: Paidós.

Taylor, C. (1995). “La política liberal y la esfera pública”. Argumentos Filosóficos: Ensayos Sobre El Conocimiento, El Lenguaje Y La Modernidad. Barcelona: Paidós.

Teruel, A. (2019). Tierra de indios, indios sin tierras: Los indígenas en el Jujuy decimonónico. En D. Escolar y L. Rodriguez (Comps.), Más allá de la extinción: Identidades indígenas en la Argentina criolla siglos XVIII-XX (pp. 75-94). Sb Editorial.

Toledo Jofré, M. I. (2012). Sobre la construcción identitaria. Atenea (Concepción), 506, 43-56. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-04622012000200004.

Toledo, V., y Argueta, A. (1993). Naturaleza, producción y cultura en una región indígena de México: Las lecciones de Pátzcuaro. En E. Leff y J. Carabias (Eds.), Cultura y manejo sustentable de los recursos naturales (Vol. 2, pp. 413-443). UNAM/Miguel Ángel Porrúa.

Travieso, J. A. (1996). Los derechos humanos de los pueblos indígenas. Jurisprudencia Argentina, 1996-III, 1031.

Treacy, G. F. (2011). Categorías sospechosas y control de constitucionalidad. Lecciones y Ensayos, 89, 181-216.

Trejo, R. (2016). La propiedad comunitaria indígena en el Código Civil y Comercial: Una perspectiva desde la mirada de Elinor Ostrom. Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones Ambrosio L. Gioja, 10(16), 79-97. https://doi.org/ISSN 1851-3069.

Trinchero, H. H. (2010). Los pueblos originarios en Argentina: Representaciones para una caracterización problemática. Cultura y representaciones sociales, 4(8), 111-139. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-81102010000100111.

Turner, V. (1988). El proceso ritual: Estructura y antiestructura. Taurus.

Ulloa, A. (2007). Introducción: Mujeres indígenas: Dilemas de género y etnicidad en los escenarios latinoamericanos. En L. Donato, E. Escobar, P. Escobar, A. Pazmiño, y A. Ulloa (Comps.), Mujeres indígenas, territorialidad y biodiversidad en el contexto latinoamericano (pp. 17-34). Universidad Nacional de Colombia.

Ureña, E. (1978). La teoría crítica de la Sociedad de Habermas. La crisis de la sociedad industrializada. Tecnos.

Valdivia Dounce, M. T. (2009). Políticas y reformas en materia indígena, 1990–2007. Argumentos (México, D.F.), 22(59), 127-159.

Valles, M. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social: Reflexión metodológica y práctica profesional. Editorial Síntesis.

Vázquez, H. y Bigot, M. (2021). Construcción etnopolítica de la etnicidad entre Mapuches y Qom. Papeles de trabajo - Centro de Estudios Interdisciplinarios en Etnolingüística y Antropología Socio-Cultural, (42). ISSN 1852-4508.

Veracini, L. (2011). Introducing settler colonial studies. Settler Colonial Studies, 1(1), 1-12. https://doi.org/10.1080/2201473X.2011.10648799.

Vilas, C. M. (2003). Descentralización de políticas públicas: Argentina en la década de 1990. Buenos Aires: INAP. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/inap/20171117043534/pdf_320.pdf.

Villasante, R. (2017). Michael Walzer: La igualdad compleja y ciudadanía inclusiva. Miscelánea Comillas, 75, 351-380.

Villoro, L. (2020). El desafío de una nueva comunidad y las tareas de la razón crítica. Ideas y Valores, 69(173), 103–122. https://doi.org/10.15446/ideasyvalores.v69n173.67154

Villoro, L. (1998). Estado plural, pluralidad de culturas. México: Paidós-UNAM.

Villoro, L. (1996). Los grandes momentos del indigenismo en México. 2a ed. México: El Colegio de México-El Colegio Nacional-FCE.

Wacquant, L. (2013). "Symbolic Power and Group-Making: On Bourdieu's Reframing of Class." Journal of Classical Sociology 13, no. 2 (May): 274-291. (Español: "Poder simbólico y fabricación de grupos: Cómo Bourdieu reformula la cuestión de las clases", Herramientas (Buenos Aires), 52, March 2013, pp. 117-138).

Waldron, J. (1999). Law and disagreement. Oxford University Press.

Walsh, C. (2008). Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: Las insurgencias político-epistémicas de refundar el Estado. Tabula Rasa, 9, 131-152.

Walzer, M. (1996). La política de la diferencia: Estatalidad y tolerancia en un mundo multicultural. Isegoría, 14, 37–53. https://doi.org/10.3989/isegoria.1996.i14.210.

Walzer, M. (1983). Esferas de justicia. Fondo de Cultura Económica.

Witker, J. (2015). Las ciencias sociales y el derecho. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 48(142), 339-358.

Wolfe, P. (2006). Settler colonialism and the elimination of the native. Journal of Genocide Research, 8, 387-409. https://doi.org/10.1080/14623520601056240.

Wolkmer, A. C. (2003). Pluralismo jurídico: Nuevo marco emancipatorio en América Latina. CENEJUS. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/otros/20111021100627/wolk.pdf.

Wolkmer, A. C. (2018). Pluralismo jurídico: Fundamentos de una nueva cultura del derecho (2ª ed.). Dykinson.

Yankillevich, A. (2019a). El lado ilegítimo de la legalidad: Análisis antropológico del proceso de (re)construcción jurídica de los derechos de los Pueblos indígenas en la provincia de Jujuy (1983-2003). Revista Administración Pública y Sociedad (APyS-IIFAP-FCS-UNC), 162.

Yankillevich, A. (2019b). Juridización de las identidades indígenas en la provincia de Jujuy. Análisis de los proyectos de ley remitidos al poder legislativo provincial entre los años 1983-1989. Administración Pública y Sociedad (APyS), 8, 160-177. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/APyS/article/view/25947.

Yankillevich, A. (2016). Discursos e identidad: Interacción entre el Estado de Jujuy y las comunidades indígenas de la Provincia. Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales; Nuestro NOA, 8, 35-61.

Young, I. M. (2000). La justicia y la políti-ca de la diferencia. Madrid: Cátedra. Col. Feminismo

Yrigoyen Farjado, R. (2004). Pluralismo jurídico, derecho indígena y jurisdicción especial en los países andinos. El Otro Derecho, 30, 171-196.

Yrigoyen Farjado, R. (2000). Tratamiento judicial de la diversidad cultural y la jurisdicción especial. El Otro Derecho, 25, 229-258.

Yuni, J. A. y Urbano, C. A. (2014). Técnicas para investigar: Recursos metodológicos para la preparación de proyectos de investigación (1ª ed.). Brujas.

Zagrebelsky, G. (2014). La ley y su justicia: Tres capítulos de justicia constitucional (A. Mora Cañada y M. Martínez Neira, Trads.). Trotta.

Zibechi, R. (2014). El Estado de excepción como paradigma político del extractivismo. En C. Composto y M. Navarro (Comps.), Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina (pp. 76-88). Bajo Tierra Ediciones.

Zimerman, S. (2015). Aportes para una norma que garantice el derecho a la tierra y al territorio en Argentina. En F. Kosovsky (Comp.), Propiedad comunitaria indígena. Dossier Propiedad comunitaria indígena (1ª ed.). Universitaria de la Patagonia EDUPA.

Zizek, S. (2001). El espinoso sujeto: El centro ausente de la ontología política. Fondo de Cultura Económica.

Zubiria, B. (2014). Renta básica y Estado Plurinacional: Opciones para la justicia global. Una reflexión desde las esferas de la justicia de Michael Walzer. Eidos, 21, 64-84.

Apéndice A- Sentencias judiciales.

Expediente N° CA-17740/2021.

Órgano: **Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia.**

Libro de acuerdo: **7.**

Número Sentencia: **6.**

Fecha: **15/2/2022.**

Competencia: **Recursiva.**

Voces Jurídicas: **COMUNIDADES ABORIGENES PLANTEO EXTEMPORANEO RESOLUCION ADMINISTRATIVA.**

Libro de Acuerdos Nº 7, Fº 21/25, Nº 6. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los quince días del mes de febrero del año dos mil veintidós, los señores jueces de la Sala III Contencioso Administrativa y Ambiental del Superior Tribunal de Justicia, doctores (S/N), bajo la presidencia de la nombrada en primer término, vieron el Expte. Nº CA-17.740/21, caratulado: "Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-177.598/2021 (Tribunal Contencioso Administrativo –Sala I– Vocalía 1) Apelación de resoluciones del Juzgado de Minas: "Comunidad Aborigen (S/N) c/ Estado Provincial - Juzgado Administrativo de Minas"; del cual,

La Dra. (S/N) dijo:

La Sala Primera del Tribunal Contencioso Administrativo mediante sentencia del 18 de junio de 2021 resolvió rechazar el recurso de apelación y planteo de nulidad articulado por el Dr. (S/N) en representación de la Comunidad Aborigen (S/N), impuso las costas a la apelante vencida y reguló honorarios.

Para así decidir, relató los antecedentes que resultaron esenciales para la resolución del caso. En ese orden, dijo que del análisis de las actuaciones administrativas acompañadas en formato digital, N° 0645-1981-2014, se desprendían las presentaciones de la Comunidad Aborigen (S/N) de fecha 08/05/14 solicitando la nulidad de las concesiones de las minas PUIRAS I, NOEMI, GUAYATAYOC I, RICARDO, CONRADO, PUIRAS II, EMILIA, PUIRAS III, GUAYATAYOC II, ALDEBARAN, LOS COLORADOS III, ROBERTO, al Grupo Minero (S/N) (fojas 2/5, 11/14, 20/23, 29/32, 38/41, 47/50, 56/59, 65/68, 74/77, 83/86, 92/95, 99/101). Expresó que mediante proveído de fecha 04/07/19 la titular del Juzgado declaró inadmisible la nulidad planteada por extemporánea (fojas 137 del expediente citado). Indicó que contra ella, en fecha 09/08/19 se alzó el Dr. (S/N), en representación de la Comunidad Aborigen (S/N), mediante recurso de revocatoria con apelación en subsidio (fojas 140/142). Que el primero de los remedios mencionados fue rechazado por el Juzgado Administrativo mediante Resolución Nº 02-J-2020 de fecha 06/02/2020 (fojas 146 y vuelta). Posteriormente expuso que en atención a la interposición del recurso de apelación, se dispuso la intervención de Fiscalía de Estado en los términos del artículo 130 del Código de Procedimientos Mineros. Girados los autos a dicho organismo, se pronunció por el rechazo del recurso tentado por extemporáneo (fojas 153/155).

A continuación, señaló que toda declaración de nulidad se halla condicionada a la concurrencia de los siguientes recaudos: 1) existencia de un vicio que afecte a alguno de los requisitos del acto y que le impida cumplir su finalidad (trascendencia); 2) falta de convalidación o subsanación del vicio; 3) falta de imputabilidad del vicio a la parte que impugna el acto y 4) el interés jurídico en la declaración.

Consideró que del escrito recursivo no surgía claro ni se acreditaba la existencia de vicio alguno que afecte el o los actos dictados, y menos aún el perjuicio concreto que le ocasiona. Que quien invoca la nulidad debe alegar y demostrar que el vicio le ocasiona perjuicio cierto e irreparable, que no puede repararse sino con el acogimiento de la sanción, no siendo suficiente la invocación genérica de derechos que se dicen violentados.

Asimismo, enfatizó en que el principio de trascendencia constituye uno de los pilares básicos que sustenta la institución de la nulidad (CNCiv., Sala D, 19/06/87, LL, t. 1988-A, pág. 558).

Por lo que entendió que no hay agravio cierto y actual que justifique la estimulación de esta instancia, pues a mérito de las constancias del proceso resultaba claro que mediante resolución N° 385-J-1995 de fecha 20/10/1995 se dispuso la concesión de los pedimentos a favor de la Cooperativa Mineros (S/N).

Finalmente, sostuvo que la pretensión de nulidad -de fecha 08/05/14- fue rechazada en función de su reconocida extemporaneidad, lo que consideró debía ratificarse en esa oportunidad.
En fecha 01 de Julio de 2021 se rechazó la aclaratoria interpuesta por el Dr. (S/N) por cuanto no se verificaban los extremos requeridos por el rito para la procedencia de dicho remedio procesal.

Disconforme con lo resuelto, a fs. 05/12 y vta. se presenta el Dr. (S/N), actuando en nombre y representación de la Comunidad Aborigen (S/N) e interpone recurso de inconstitucionalidad.

Luego de reseñar el cumplimiento de los requisitos formales de admisibilidad y relatar los antecedentes de la causa, expresa los agravios que el fallo ocasiona y por los cuales debe ser revocado.

En primer lugar, arguye que la sentencia presenta un error grave, manifiesto, insostenible y carente de fundamentos, en tanto violenta nuestra Carta Magna e ignora la cuestión indígena.
En apoyo a tal postura, dice que el a quo desconoce la normativa indígena en tanto la cuestión debe ser resuelta según las leyes que resultan aplicables, conforme la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos en los que la República sea parte.
En segundo lugar, se agravia en tanto considera que se ha violado la aplicación del Convenio 169 OIT, ya que no contempla lo previsto en él. En virtud de ello, trascribe textualmente los artículos que considera aplicables al caso y que no han sido tenidos en cuenta por el sentenciante.

Además, dice que el Estado Nacional y Provincial tienen la obligación de realizar las consultas al pueblo originario mediante procedimientos apropiados en cada uno de los casos en que se adopten medidas que puedan afectarlos directa e indirectamente.
Señala que en autos ello no ocurrió ni al momento de otorgamiento de la concesión ni de manera posterior hasta la fecha, ante el pedido de esta comunidad de que se dé cumplimiento con ello; tan solo se manifiesta que la petición efectuada resulta inadmisible por extemporánea. Ello pone en evidencia el desconocimiento de la cuestión indígena, la carencia de buena fe, y torna ilusorios todos los derechos y garantías previstos en la normativa ut supra citada.

Finalmente, reitera la violación a los derechos de los pueblos originarios, en tanto para ellos la posesión de un territorio y el acceso a los recursos naturales junto con sus tradiciones culturales son ejes fundamentales para su reproducción y necesarios para mantener su identidad; que al ser despojados de ellos no encuentran elementos o recursos de identificación para el mantenimiento y desarrollo de su cultura.
Hace reserva del caso federal.

Corrido traslado del recurso, a fs. 29/31 es contestado por el Dr. (S/N), en nombre y representación del Estado Provincial; solicita el rechazo por los argumentos que expone a los cuales remito en honor a la brevedad.

Integrado el Tribunal, se envían las actuaciones a los fines dispuestos por el art. 9 inc. 4º de la ley 4346. Se expide la Sra. Fiscal General Adjunto por su rechazo (fs. 35/38 y vta.), por lo que la causa se encuentra en estado de ser resuelta.

Adelantando opinión diré que comparto el dictamen fiscal y entiendo que el recurso debe ser rechazado, por las razones de hecho y derecho que a continuación expondré.
Como es bien sabido, el recurso ante esta Corte debe bastarse a sí mismo y resulta insuficiente invocar como causal de arbitrariedad la disconformidad del recurrente con el fallo, deben precisarse las causales en que se funda el recurso, demostrándose con claridad y apoyaturas suficientes cuáles son los vicios que tornan arbitraria la sentencia y en relación no sólo a las constancias de la causa sino también se debe precisar el supuesto derecho violado (cfr. L.A. Nº 38, Fº 797/800, Nº 332; Expte. Nº 4438/94: “Rec. de Cas. José Francisco Miranda c/ OSPAIL y otros”; CSN, Fallos 194-221; 303:1848).

El aludido supuesto de excepción -absurdo manifiesto- que descalifique el fallo por su marcada arbitrariedad, en modo alguno se vislumbra en esta causa, por lo que el fallo no merece la tacha de arbitrariedad. Además, resulta claro que el libelo recursivo no es más que una reiteración de los argumentos expuestos en la instancia anterior, por lo que devienen en inatendibles los supuestos agravios, que ya fueron tratados y resueltos adecuadamente por el a quo.

Aun cuando lo dicho basta para desestimar el recurso interpuesto, resaltaré lo siguiente:
En el caso en estudio, el pedido de la Comunidad Aborigen consiste en la nulidad de la concesión de las minas PUIRAS I, NOEMI, GUAYATAYOC I, RICARDO, CONRADO, PUIRAS II, EMILIA, PUIRAS III, GUAYATAYOC II, ALDEBARAN, LOS COLORADOS III, ROBERTO, al Grupo Minero Salinas Grandes, fundando tal tesitura en que el acto se dictó sin su conformidad, violentando así la cuestión indígena. Afirma ello en base al supuesto incumplimiento por parte del Estado Provincial respecto de sus obligaciones de realizar las consultas mediante procedimientos apropiados y darles la debida participación a los pueblos interesados. En el caso, la recurrente asevera no haber sido citada en su oportunidad para proteger sus derechos.

Sin embargo, tal petitorio resulta improcedente, en tanto tal como lo resaltó el a quo, existe falta de trascendencia, ya que no es posible declarar la nulidad por la nulidad misma, sino que se hace esencial demostrar la existencia de vicio que afecte el o los actos dictados, y el perjuicio cierto e irreparable, que no puede subsanarse sino con el acogimiento de la sanción, cosa que en autos no ocurrió.

Ahora bien, en relación a los agravios referidos a la falta de conocimiento y aplicación de la normativa indígena, me permito reproducir los argumentos brindados al momento de expedirme en la sentencia "Comunidad Aborigen (S/N) c/ Estado Provincial- Juzgado Administrativo de Minas" (L.A Nº 6 Nº 111), siendo una causa de similares características fácticas y jurídicas.

En aquella oportunidad sostuve que: "No puede desconocerse, como acertadamente lo afirma la parte recurrente, que el derecho de las comunidades indígenas debe ser abordado por todos los operadores judiciales. Empero, resulta que la sentencia que se impugna proviene de una apelación contra una decisión administrativa que resuelve un planteo de nulidad. En consecuencia, entiendo que la `cuestión indígena´ a la que hace referencia el apoderado de la comunidad de (S/N), en realidad no ha sido articulada, y, por ende, no puede haber sido desconocida. Existen sin duda alternativas de vías procesales -administrativas y judiciales- para efectuar los planteos que los sujetos se crean con derecho -personas humanas, jurídicas, comunidades como las que aquí se representa-, y a través de las cuales es posible actuar, pues están previstas precisamente para su correcto y adecuado ejercicio. En su caso, podrá obtenerse la atención que se reclama, para impedir así el desconocimiento, la transgresión o postergación de sus potestades y garantías constitucionales y convencionales invocadas, mediante una adecuada participación. (…)Para obtener su adecuada tutela deberá la promotora, en su caso y si así considera pertinente, ocurrir por otra alternativa procesal distinta y eficaz, pues la elegida como se viene sosteniendo, reitero, no resulta indicada para el tratamiento de los planteos efectuados".
Por lo expuesto y las consideraciones del Ministerio Público Fiscal, que tengo como parte integrante de este voto, procede el rechazo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. (S/N) y representación de la Comunidad Aborigen (S/N).

Las costas entiendo justo imponerlas por el orden causado atento a la naturaleza de la cuestión aquí planteada (artículo 102 segunda parte del Código Procesal Civil).
Propongo regular los honorarios profesionales conforme a los artículos 16, 17, 20, 29, 32 y concordantes de la Ley 6.112, correspondiendo al Dr. (S/N) la suma de pesos dieciséis mil seiscientos treinta y dos ($16.632). El importe equivale a $1980 (valor de la UMA, según Resol. Nº 11/2021 del Ministerio de Trabajo, empleo y seguridad social consejo nacional del empleo, la productividad y el salario mínimo vital y móvil) multiplicado por 12 UMA (piso mínimo de honorarios para recursos extraordinarios; Art. 32 in fine), y el 70% de él arroja la suma referida. Dicho monto en caso de mora devengará intereses desde la fecha de la presente y hasta su efectivo pago, conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina; con más el I.V.A. de corresponder. No regular honorarios al Dr. Jorge Sebastián Najar conforme lo dispuesto en el art. 22 de la Ley 6.112.

El Dr. (S/N) dijo:

Coincido con lo resuelto por la Sra. Presidente de trámite, ello en base a los argumentos que expuse al emitir mi voto en el fallo registrado al L.A. Nº 6, Fº 497/501, Nº 111.
En esa oportunidad dije: "Adhiero a la solución que propicia la Sra. Presidente de trámite en tanto la sentencia recurrida constituye derivación razonada del derecho vigente conforme a los hechos acreditados en la causa (art. 29 inc. 3º de la Constitución Provincial), sin que pueda advertirse en ella arbitrariedad alguna."

"En efecto, el Tribunal ha dado razones suficientes de su decisión y aquellas no han sido rebatidas adecuadamente por los agravios planteados."

"El recurrente invoca genéricamente las normas de protección de los derechos de las comunidades indígenas -que esta Sala no desconoce- sin indicar concretamente las razones por las cuales postula que sus derechos han sido conculcados a través de la decisión recurrida. De tal modo, incumple la carga de rebatir adecuadamente los claros y contundentes motivos de la sentencia cuestionada."

"Siendo así, cabe reiterar aquí que a los fines casatorios y/o de inconstitucionalidad, los litigantes no pueden soslayar la obligación de precisar concretamente, a través de un análisis razonado y mesurado, en qué consiste el agravio que causa el pronunciamiento, pues no basta que manifieste que el Tribunal ha violado la ley sustantiva o que omitió aplicar las reglas de la sana crítica. Ello deberá demostrarse y expresarse clara y concretamente, ya que las generalizaciones conceptuales no son idóneas para fundar estos remedios excepcionales. La doctrina es conteste en afirmar que no basta con que se cite la ley que se considera aplicable, inaplicable o infringida, sino que ha de expresarse, además, en qué consiste su infracción o inaplicabilidad (cfr. L.A. Nº 29 Fº 106/108 Nº 44)."

"Reiteradamente este Superior Tribunal de Justicia –siguiendo el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- ha dicho que la tacha de arbitrariedad no procede por meras discrepancias acerca de la apreciación de la prueba producida o de la inteligencia atribuida a preceptos de derecho común, así se estimen esas discrepancias legítimas y fundadas. Esta tacha no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que atiende sólo a los supuestos de omisiones de gravedad extrema en que, a causa de ellas, las sentencias quedan descalificadas como actos judiciales (Fallos 244:384 cita de Genaro R. Carrió –Alejandro D. Carrió. "El recurso extraordinario por sentencia arbitraria", tercera edición, pág. 29, Abeledo-Perrot, 1983), lo que no ocurre en el caso."

"Por ello, adhiero al rechazo del recurso y a la regulación de honorarios propuesta. Me aparto en punto a las costas, que deberán imponerse al recurrente porque no veo motivos para apartarse del principio general que las impone al vencido (art. 102 del CPC)."

Así voto.

El Dr. (S/N) adhiere al voto de la Dra. (S/N).

Por ello, la Sala III Contencioso Administrativa y Ambiental del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy,

Resuelve:
I.- Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. (S/N) en nombre y representación de la Comunidad Aborigen (S/N).

II.- Imponer las costas por el orden causado.

III.- Regular los honorarios profesionales del Dr. (S/N) en la suma de pesos dieciséis mil seiscientos treinta y dos ($16.632). Dicha suma llevará, para el caso de mora, el interés a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, hasta el efectivo pago, así como el impuesto al valor agregado (I.V.A.) en caso de corresponder. No regular honorarios al Dr. (S/N).

IV.- Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dra. (S/N); Dr. (S/N); Dr. (S/N).Ante mí: Dra. (S/N) – Secretaria Relatora.

Expediente N° SJ-13438/2017.

Órgano: **Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia.**

Libro de acuerdo: **4.**

Número Sentencia: **17.**

Fecha: **15/4/2019.**

Competencia: **Recursiva.**

Voces Jurídicas: **COMUNIDADES ABORIGENES - CONFLICTOS DE COMPETENCIACAMARA EN LO CIVIL Y COMERCIAL.**

TEMAS: CONFLICTOS DE COMPETENCIA. COMUNIDADES ABORÍGENES. PROPIEDAD COMUNITARIA DE LA TIERRA. CÁMARA EN LO CIVIL Y COMERCIAL. COMPETENCIA RESIDUAL.

Libro de Acuerdos Nº 4, Fº 55/57, Nº 17. En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los quince días del mes de abril del año dos mil diecinueve, reunidos los Señores Jueces (S/N) y, por habilitación, el Sr. Juez del Tribunal del Trabajo, Sala I, (S/N), bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expediente Nº SJ-13.438/17 caratulado "Cuestión de Competencia Interpuesta en el Expte. Nº B-286.170/2012 (Juzgado de Primera Instancia Nº 7 – Secretaría 13) Instrumentación del Art. 75 inc. 17 Constitución Nacional: Comunidad Aborigen (S/N) c/ (S/N) (Sucesión); y Otros" del cual:

El Dr. (S/N) dijo:

Las actuaciones se inician ante este Superior Tribunal como un conflicto negativo de competencia suscitado entre la Cámara en lo Civil y Comercial, Sala III, Vocalía Nº 9 y el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 7, Secretaría Nº 13.

Promovido la demanda ante la Cámara en lo Civil y Comercial, ésta se declaró incompetente para entender en el mismo, mediante decreto de presidencia de trámite, fundando su decisorio en la materia, ordenando a los interesados a ocurrir por ante quien corresponda.

Con posterioridad a ello, en oportunidad de pronunciarse sobre una aclaratoria, el tribunal dispuso la remisión de las actuaciones a la Justicia Federal, quedando radicadas en el Juzgado Federal Nº 2 de la Provincia de Jujuy. Dicho órgano jurisdiccional se declaró igualmente incompetente y dispuso la devolución de las actuaciones a la Cámara Civil y Comercial.

En tal oportunidad, la Cámara dispuso remitir el expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial que por turno corresponda (fs. 734), a efectos de que se pronuncie respecto de la competencia.

Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 7 se declaró incompetente en razón de la materia.

Habiéndose formulado conflicto negativo de competencia, las actuaciones son elevadas al Superior Tribunal de Justicia en su competencia originaria.

Integrado el Cuerpo, emite dictamen la Sra. Fiscal General Adjunta quien se pronuncia por la competencia de la Cámara en lo Civil y Comercial para entender en la causa.

Luego del estudio de las actuaciones, adelanto opinión, compartiendo el dictamen de Fiscalía General, en el sentido que debe encuadrarse el caso dentro de la competencia de la Cámara en lo Civil y Comercial, en razón de las siguientes consideraciones.

De las constancias de autos surge que la actora promovió juicio en contra de particulares y del Estado Provincial y Nacional, en orden al "reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria" que correspondería a la comunidad aborigen (S/N).

Planteado en tales términos la demanda, corresponde recordar que, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia, la competencia se determina en base a los hechos expuestos por el actor en su demanda y después, sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión (doctrina de la CSJN en Fallos 340:620, 330:628, 319:218, 323:470).

En sentido semejante se ha pronunciado este Superior Tribunal en fallo registrado en L.A. Nº 51, Fº 180/182, Nº 78, al sostener que "...para determinar a qué órgano jurisdiccional corresponde atribuir competencia para entender en una causa, debe estarse, en principio, a la acción ejercida, porque es ésta la que motoriza la pretensión esgrimida por el actor, determina el tipo de procedimiento a instaurar y, consecuentemente, el órgano jurisdiccional a quien corresponde entender en ella. (...) Ese es el criterio que adoptara este Superior Tribunal en dos recientes pronunciamientos (L.A. 51, Fº 130, Nº 54 y L.A. 51, Fº 146/147, Nº 60)."

En ese orden de ideas, se advierte que la pretensión articulada por la actora no se encuentra comprendida en la norma que determina la competencia de los Juzgados de Primera Instancia (art. 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Al respecto cabe precisar que la Cámara en lo Civil y Comercial al declararse incompetente realizó un desglose de las pretensiones que comprendería la acción, sosteniendo que incluiría acciones de nulidad de instrumentos públicos y reivindicación de tierras. Sin embargo, y conforme fuera destacado por Fiscalía General, de acuerdo al objeto de la demanda, en los términos en que ha sido planteado, resulta ser un caso que no tienen una asignación de competencia especifica en relación a un tribunal o juzgado, ni una tramitación especial para su desarrollo.

Es por ello que estimo que corresponde aplicar lo dispuesto por el art. 287 del Código Procesal Civil, el cual determina la competencia de carácter residual de los tribunales orales de única instancia.

En consecuencia, y luego de lo referido precedentemente, corresponde declarar competente a la Cámara en lo Civil y Comercial, Sala III, Vocalía Nº 9, para intervenir en la causa. Debiendo remitirse el presente expediente a dicho Tribunal para su radicación, previo pase a Mesa General de Entradas.

Tal es mi voto.

Los Dres. (S/N) (por habilitación), adhieren al voto que antecede.

Por todo ello el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy,

RESUELVE:

1) Declarar competente para entender en la causa a la Cámara en lo Civil y Comercial, Sala III, Vocalía Nº 9.

2) Remitir los autos, previo pase por Mesa de Entradas, a los fines de su radicación en el órgano referido en el apartado precedente.

3) Registrar, agregar copia en autos y hacer saber.

Firmado: Dr. (S/N); Dr. (S/N); Dra. (S/N); Dr. (S/N); Dr. (S/N) (Habilitado).

Ante mí: Dra. (S/N) – Secretaria Judicial.

///Hago constar que, habiendo emitido su voto, la Sra. Presidente del Superior Tribunal (S/N), no suscribe la presente resolución por encontrarse en uso de licencia. Asimismo, dejo constancia que las Sras. (S/N) no suscribieron la resolución por encontrarse en uso de licencia.

Expediente N° CF-14415/2018.

Órgano: **Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia.**

Libro de acuerdo: **4.**

Número Sentencia: **30.**

Fecha: **19/3/2019.**

Competencia: **Recursiva.**

Voces Jurídicas: **COMUNIDADES ABORIGENES DENEGACION DEL RECURSORECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL.**

(Libro de Acuerdos Nº 4, Fº 126/127, Nº 30). San Salvador de Jujuy, Departamento Dr. Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, la Sala I – Civil, Comercial y de Familia, integrada por los Dres. (S/N), (S/N) y (S/N), bajo la presidencia del nombrado en primer término, vieron el expediente Nº CF-14.415/18, caratulado: "Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº 14.47/2016 (Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Sala II Vocalía 4) Recurso de Apelación interpuesto en el expte. Nº B-216.142/2009. Desalojo: De (S/N) c/ (S/N)."

El Dr. (S/N) dijo:

En contra del fallo dictado por este Superior Tribunal de Justicia el veintitrés de octubre del año dos mil dieciocho (fs. 59/64), el Dr. (S/N), en nombre y representación de la Comunidad (S/N), interpuso recurso Extraordinario Federal del artículo 14 de la ley 48, por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fs. 68/88 vlta. de autos.

En su exposición, a la que me remito en honor a la brevedad, funda su presentación manifestando que la sentencia lesiona gravemente el derecho a la legítima defensa, quebrantando la legalidad y supremacía de dichos preceptos (arts. 31, 75 inc. 17 y 22 de la CN, convenio 169 de la O.I.T, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en particular arts. 3 y 21), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 1 y 27), la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (arts. 5 y ss.) y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 11 y 12). Asimismo, sostiene que constituye una cuestión federal compleja directa, toda vez que existe una colisión entre lo normado por la Constitución Nacional y una ley nacional de orden público (26.160) y la resolución recurrida.

Sustanciado el recurso, el mismo es contestado a fs. 95/97 por el Dr. (S/N), en nombre y representación de (S/N).

En conformidad con lo dispuesto en el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y los recaudos impuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Acordada 4/07, corresponde en esta etapa, expedirse sobre la admisibilidad del recurso.

En primer lugar, cabe señalar que los argumentos contenidos en la expresión de agravios no logran evidenciar que estemos en presencia de un caso federal en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El recurrente no arrima ningún elemento o argumento novedoso, sino que, por el contrario, se limita a esgrimir meras discrepancias con el criterio sostenido por este Superior Tribunal.

En tal sentido se ha dicho: "El Superior Tribunal de la causa además del examen de simple admisibilidad formal debe efectuar un análisis mínimo y provisional de la eventual configuración de un supuesto de arbitrariedad. No debe decidir si dictó una resolución arbitraria. Le toca profundizar en cambio, si el recurrente invoca un supuesto específico de arbitrariedad y si tal supuesto cuenta con una fundamentación seria y conectada con la sentencia pronunciada en autos. De ser así debe concederse el recurso extraordinario, de lo contrario si el recurso sólo incluye, so color de arbitrariedad, cuestiones ya sometidas y resueltas por el Superior Tribunal, su concesión debe denegarse" (L.A. Nº 28, Fº 14/16, Nº 8).

Por lo tanto y no advirtiéndose la configuración de un supuesto de arbitrariedad que haya sido introducido en el fallo de este Cuerpo, corresponde denegar la concesión del Recurso Extraordinario Federal por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En cuanto a las costas se imponen por el orden causado.

Diferir la regulación de honorarios profesionales de los letrados intervinientes hasta tanto exista base económica para efectuarla y ocurra lo propio en la instancia anterior.

Tal es mi voto.

Las Dras. (S/N) y (S/N), adhieren al voto del Dr. (S/N).

Por ello, la Sala I, Civil, Comercial y de Familia del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy,

RESUELVE:

1°) Denegar la concesión del Recurso Extraordinario Federal por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpuesto por el Dr. (S/N), en nombre y representación de la Comunidad Aborigen (S/N) y la Señora (S/N).

2º) Diferir la regulación de honorarios profesionales de los letrados intervinientes hasta tanto exista base económica para efectuarla y ocurra lo propio en la instancia anterior.

3º) Registrar, dejar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dr. (S/N); Dra.(S/N); Dra. (S/N).

Ante mí: Dra. (S/N) - Secretaria Relatora.

Expediente N° SJ-18873/2022

Órgano: **Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia**

Libro de acuerdo: **7**

Número Sentencia: **31**

Fecha: **6/10/2022**

Competencia: **Originaria**

Voces Jurídicas: **PER SALTUMTRATAMIENTO DE RESIDUOSCOMUNIDADES ABORIGENESMEDIDAS CAUTELARESREVOCACION**

(Libro de Acuerdos Nº 7, Fº 132/138, Nº 31). En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los seis días del mes de octubre del año dos mil veintidós, reunidos los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, (S/N), (S/N), (S/N), (S/N), (S/N), (S/N), (S/N) y (S/N), bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. Nº SJ-18.873/2022 caratulado "Per-Saltum interpuesto en el Expte. Nº C-205.830/2022 (Juzgado Ambiental) Amparo Genérico: Comunidad Aborigen (S/N) c/ Estado Provincial", del cual,

El Dr. Otaola dijo:

I) En fecha 18 de agosto de 2022 la señora jueza del Juzgado Ambiental dictó resolución por la que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Comunidad Aborigen (S/N) y dispuso -previa caución juratoria- ordenar la prohibición del inicio de las obras y/o trabajo de instalación del Centro Ambiental Puna bajo apercibimiento de remitir las actuaciones a la justicia del crimen. A su vez, rechazó la petición en lo que respecta a la paralización del trámite administrativo.

La magistrada tuvo por cumplidos los presupuestos para la viabilidad de la medida. Respecto a la verosimilitud del derecho dijo que, al no existir una delimitación del territorio de la Comunidad de (S/N), no existía un marco de definición de influencia del proyecto, por lo que correspondía tener por configurado dicho extremo en base a la pauta interpretativa del Acuerdo de Escazú y Convención Nº 169 de OIT. Sobre el peligro en la demora estimó la posibilidad de afectación de los derechos de la Comunidad en caso de iniciarse las obras sin haberse cumplido con su debida participación en el proceso administrativo.

Agregó que la orden de no iniciar obras hasta tanto se cuente con mayor información era una medida apta y proporcional, en tanto el proyecto del Centro Ambiental Puna se encontraba en etapa de evaluación.

II) Contra la resolución dictada por el Juzgado Ambiental, el 30 de agosto de 2022, el Estado Provincial plantea recurso de inconstitucionalidad por salto de instancia ante este Superior Tribunal de Justicia, en los términos del art. 8 bis de la ley 4346.

El demandado fundamenta la procedencia del recurso extraordinario en la trascendencia institucional y la afectación del interés público que genera la medida dispuesta ya que lo dispuesto afecta al desarrollo del proyecto con la eventual pérdida de la donación con cargo formulada por el Banco Europeo de Inversión lo cual implica no sólo la devolución de los fondos sino que además deberán reintegrarse dichos fondos con más los intereses, circunstancias que llevan a inferir que de paralizarse el proyecto no sólo se afecta al erario provincial sino que además se afecta el regular ejercicio de la función que le compete al Estado en cuanto a la gestión integral de residuos sólidos urbanos (ley 5954). Expone los antecedentes que motivan el recurso, alega la inexistencia de presupuestos necesarios a los fines de la procedencia del dictado de la cautelar en general (verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora) y en particular por tratarse de una medida contra el Estado la afectación del interés público en cuanto a la eventual pérdida de financiamiento de la obra por parte del Banco Europeo de Inversión.

III) Notificada la actora del traslado del recurso, comparece en tiempo y forma a contestarlo, solicita el rechazo del recurso extraordinario interpuesto por el Estado Provincial porque -a su entender- no se configuran los extremos que habiliten el salto de instancia (gravedad institucional, ausencia de otro remedio procesal urgente y eficaz). Dice que no hay agravio ni perjuicio que pueda generar el trámite del proceso de amparo promovido, por ser esa la vía más expedita que tiene el ordenamiento procesal y, que en caso de ser favorable a la Comunidad, lo que se produciría sería la realización de la consulta pública y la cuestión objeto de litis sería saneada.

Agrega que el Derecho de Consulta Indígena es un derecho relacionado directamente con el interés público. Expone la naturaleza del derecho de consulta indígena en el marco del Convenio 169 OIT aprobado por ley 24071 como así también su naturaleza constitucional (Art. 75 inc. 17 y 22 de la CN), refiere a la vigencia de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos Indígenas y Declaración Americana sobre Derecho de los Pueblos Indígenas.

IV) El 21 de septiembre de 2022 la Fiscalía General expide dictamen favorable a la procedencia del recurso extraordinario promovido por el Estado Provincial como así propone que se revoque la resolución dictada por el Juzgado Ambiental en lo que se refiere a la medida cautelar que prohíbe el inicio de las obras y/o trabajo de instalación del Centro Ambiental Puna, solución que se comparte por los siguientes argumentos.

V) Resulta oportuno poner de resalto que la cuestión sometida a consideración de este Superior Tribunal de Justicia se circunscribe exclusivamente a la validez de la medida que prohíbe al demandado iniciar una obra, sin que ello importe abrir juicio sobre la cuestión de fondo debatida en el proceso de amparo que tramita ante el Juzgado Ambiental.

Con ese propósito cabe en primer lugar establecer con precisión los antecedentes fácticos relacionados al Proyecto “Centro Ambiental Puna” a fin del correcto entendimiento del caso y su encuadre legal.

VI) De las constancias administrativas surge que el 9 de diciembre de 2020 se iniciaron en el ámbito del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, actuaciones a fin de obtener la afectación de un inmueble individualizado como parcela 40, rodeo 3, padrón K-837 ubicado en la ciudad de Abra Pampa Departamento Cochinoca en una extensión de aproximadamente 49 hectáreas [1]. Ello con el objeto de construir un centro ambiental en el marco del Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Jujuy y con financiamiento del Banco Europeo de Inversión (ley 5954). El expediente administrativo concluyó con el dictado del Decreto 4074-ISPTyV de fecha 15 de septiembre de 2021.

Con posterioridad, el 20 de abril de 2022, Girsu Jujuy S.E. presenta un documento de solicitud de factibilidad ambiental para el “Centro Ambiental Puna-Abra Pampa” [2], en el cual -entre otros aspectos- se exponen detalladamente los estándares ambientales y sociales del Banco Europeo de Inversión,

formándose las actuaciones administrativas correspondientes, las cuales fueron remitidas a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Ambiente de la Provincia para que emita dictamen.

La Asesora legal se expidió el 29 de abril de 2022 en sentido favorable a la continuación del trámite para la inclusión del proyecto en el procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental Detallado (Decreto Reglamentario Nº 5980/06).

En fecha 12 de mayo de 2022, el Secretario de Calidad Ambiental dicta la Resolución Nº 136-22/SCA por la cual dispuso: Artículo 1º: Incluir en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental al proyecto "Centro Ambiental Puna - Abra Pampa"…conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 5980/06 y su modificatorio Nº 9067/07…, artículo 2º: …la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental Detallado…, artículo 3º: … publicar … una Declaración que contenga la descripción sucinta de las características principales del Proyecto y que el Estudio de Impacto Ambiental Detallado se encuentra a disposición del público en general…, artículo 4º: …, artículo 5º: las disposiciones de la presente Resolución no implican autorización para el inicio de etapa constructiva y de funcionamiento del proyecto "Centro Ambiental Puna - Abra Pampa" lo que estará sujeto al resultado de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado por parte de esta Secretaría". El 18 de julio de 2022, Girsu S.E. presentó el referido estudio de acuerdo a las constancias administrativas referenciadas.

Presentado el estudio de impacto ambiental reseñado en el párrafo anterior, se dictó la Resolución Nº 249/2022-SCA, de fecha 29 de julio de 2022, por la que se convocó a audiencia pública para el día 12 de agosto de 2022 a desarrollarse bajo la modalidad mixta con el fin de dar tratamiento al proyecto "Centro Ambiental Puna - Abra Pampa, Dpto. Cochinoca Prov. De Jujuy" propuesto por la empresa GIRSU JUJUY S.E., especificando que dicho proyecto se encontraba sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental por la autoridad de aplicación provincial.

VII) El 08 de agosto de 2022, la Comunidad Aborigen (S/N) promueve amparo genérico contra el Estado Provincial en los términos del artículo 41 de la Constitución Provincial, 43 de la Constitución Nacional y ley 16986 a fin de que condene a la demandada a tomar las medidas pertinentes en relación al proyecto "Centro ambiental Puna -Abra Pampa- Dpto. Cochinoca Prov. De Jujuy" a realizarse -según manifiesta- en parte del territorio que le corresponde a esa Comunidad por no haber dispuesto ni la empresa ni el gobierno la Consulta Previa Libre e informada indígena. Agrega que ello le ha generado daños y perjuicios sobre la Comunidad manifestando además que el mismo tiene por objeto la prevención del daño, con dicho fundamento peticiona como medida cautelar de no innovar se ordene la no modificación del lugar hasta que se produzca la realización del derecho que se invoca.

Contestado el traslado de la cautelar por parte del Estado Provincial, se dicta la resolución cautelar impugnada en los términos indicados en el considerando I).

VIII) Establecidas las circunstancias de la causa, no se puede pasar por alto que la jueza ambiental, para rechazar la pretensión cautelar de paralización del trámite administrativo, realizó expresas consideraciones sobre lo dispuesto en la Resolución Nº 136/2022-SCA. De esa forma entendió que el artículo 3º de la misma establecía la manera de sociabilización del proyecto presentado. Agregó que el Estado manifestó que desde el mes de octubre de 2021 se estaba llevando adelante un proceso de socialización del proyecto y tuvo por acreditado que la actora -en base a prueba aportada por ella misma [3]- estaba en conocimiento de la posibilidad de concretar un encuentro a dichos fines, de conformidad a una nota que había sido enviada por la Secretaría de Pueblos Indígenas.

Sobre esos elementos y aplicando el estándar planteado por la CSJN en la cautelar del fallo "Barrick", la magistrada determinó que, al menos con el grado de certidumbre requerido, el proyecto se encontraba en un proceso de sociabilización y de recepción de observaciones por parte de la comunidad, por lo que entendía contradictorio paralizar los trámites administrativos.

Sin embargo, omitió realizar igual razonamiento lógico respecto a una misma resolución administrativa [4] que en su artículo 5º establece que sus disposiciones no implican autorización para el inicio de etapa constructiva y de funcionamiento del proyecto "Centro Ambiental Puna - Abra Pampa", lo que quedaba supeditado al resultado de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental por parte de la autoridad de aplicación provincial [5].

La Resolución Nº 136/2022-SCA, de acuerdo a su considerando, fue dictada dentro de las previsiones de la ley 5093 y del decreto reglamentario 5980/06 y en el marco de un procedimiento administrativo que a su vez prevé la Publicidad y Participación Ciudadana (Decreto Reglamentario 5980/06, art. 22), resultando este -en principio- un estadio apto para dar cumplimiento con la consulta previa, libre e informada, como parte del proceso de sociabilización y de recepción de observaciones que pudiera realizar la comunidad, situación tenida en cuenta por la jueza ambiental para rechazar la paralización del trámite administrativo.

Vale remarcar que -en el restringido marco de conocimiento inherente a todo proceso cautelar- los trámites seguidos a fin de poner en práctica el proyecto en cuestión, están siendo encauzados dentro de un procedimiento administrativo, al cual "cabe vincularlo con el *principio de división de poderes* porque el Poder Ejecutivo ejerce sus competencias según el marco formal (procedimiento) que le fijó el Legislador en ejercicio de su poder regulatorio. A su vez, el procedimiento debe relacionarse con el Estado de Derecho (principio de legalidad, control del poder y derechos individuales) y con el Estado Social y Democrático de Derecho (principios de participación y consenso y, a su vez, derechos sociales y colectivos)" [6].

Con esta precisión conceptual y considerando la presunción de legitimidad de la que gozan los actos emanados de la Administración, la sentencia que ordenó la prohibición de inicio de las obras y/o trabajos de instalación del Centro Ambiental Puna, se excede en sus alcances al imponer una prohibición que en sede administrativa se la impuso el propio Poder Ejecutivo al auto-limitarse, careciendo por ende de una adecuada motivación.

Resulta irrazonable el dictado de una medida que paraliza una obra, desde el momento que, por un lado, existe una resolución administrativa -que se presume legítima- que da cuenta de la inexistencia de una autorización para iniciar la construcción del centro ambiental hasta tanto se concluyan los trámites previos y, por otro lado, tampoco está demostrado ni surge de la prueba algún indicio que permita inferir el posible inicio de obras y/o trabajos de instalación del centro ambiental. Ello lleva a concluir que la medida no cumple con los requisitos mínimos exigibles a toda medida cautelar.

En ese orden de ideas, la medida ordenada por la jueza ambiental -al soslayar lo dispuesto por la propia Administración en cuanto supeditó el otorgamiento de autorización para la obra en cuestión al avance del trámite administrativo- importó asumir una competencia de la que carece, con posibilidad cierta de obstaculizar el regular ejercicio y/o desenvolvimiento de las funciones que le corresponden a otro poder (art. 8 bis, párrafo segundo de la ley 4346), que se ve reflejado -en el caso- ante la probabilidad concreta de la pérdida del financiamiento del Banco Europeo de Inversión para el proyecto ambiental propuesto por Girsu S.E.

Lo expuesto no significa emitir opinión sobre el objeto del amparo promovido por la Comunidad Aborigen (S/N), lo que deberá ser examinado oportunamente al dictarse el pronunciamiento de fondo, sino solamente que la resolución del Juzgado Ambiental -que consideró acreditado el peligro en la demora- no se ajusta a las circunstancias de la causa.

IX) En cuanto a las costas corresponde imponerlas a la vencida conforme el principio general de la derrota (art. 102 C.P.C.).

Se difiere la regulación de honorarios profesional hasta tanto exista base a tales efectos.

Los doctores (S/N), (S/N), (S/N) y (S/N), adhieren al voto del doctor (S/N).

El Dr. (S/N) dijo

Adhiero al voto del señor Presidente de Trámite, considerando prudente realizar las siguientes precisiones.

Quien debe justificar en esta excepcional vía recursiva la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora es precisamente la parte que acude a su promoción, en el caso el Estado Provincial. A mi criterio, el primero de ellos se encuentra debidamente acreditado en tanto y en cuanto el Estado Provincial resulta titular del crédito otorgado por el Banco Europeo de Inversión y de la donación con cargo otorgada por la misma entidad, los que se ven amenazados con la cautelar cuestionada; y la segunda, es decir el peligro en la demora, resulta una lógica e inexorable consecuencia de lo referenciado ut supra.

Ante ello estimo oportuno habilitar la vía excepcional del salto de instancia en esta causa.

La Dra. (S/N) dijo:

Visto los autos puestos a consideración respetuosamente disiento con la solución propuesta por los vocales preopinantes.

La presente instancia extraordinaria por salto de instancia se inaugura con motivo de la presentación efectuada por el doctor (S/N) en representación del Estado Provincial, mediante la cual solicita se revoque la medida cautelar concedida por la Juez Ambiental, en tanto ordena la prohibición del inicio de las obras y/o trabajo de instalación del Centro Ambiental Puna.

El doctor (S/N) alegó la existencia de gravedad institucional, aludiendo en tal sentido a la posibilidad de que la Provincia de Jujuy pierda un crédito de origen internacional con motivo de la medida cautelar ordenada y, además, hizo referencia a los beneficios sociales y ambientales que el proyecto tendría para la provincia y para la región en particular.

Conforme lo establece el art. 9 bis de la Ley 4346, en forma previa a disponer el traslado del recurso se declaró admisible la vía tentada por el Estado Provincial, sin perjuicio de lo cual -y en ejercicio del derecho defensa- al contestar el mismo el doctor (S/N) planteó la inadmisibilidad de la presente vía extraordinaria.

En tal sentido, sostiene que no se trata de una cuestión que revista gravedad institucional y que, por lo tanto, debió seguir la vía recursiva ante el Tribunal en lo Contencioso Administrativo.

Establecido tales antecedentes y a fin de no incurrir en reiteraciones innecesarias, respecto de los restantes argumentos planteados por las partes me remito al relato realizado en el voto de Presidencia de Trámite.

Entrando al análisis de la cuestión considero que, ante la oposición a la vía extraordinaria formulada por la parte recurrida, no existe óbice para que el Tribunal en pleno se pronuncie respecto de la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad por salto de instancia.

En relación a ello, estimo que en el caso no concurre el requisito esencial de que la cuestión planteada sea de gravedad institucional, tal como lo exige el art. 8 bis de la Ley 4346. Dicha norma precisa que aquella, para ser considerada tal, debe trascender el interés de las partes y afectar u obstaculizar el regular ejercicio y/o desenvolvimiento de las funciones de alguno de los tres poderes del Estado o vulnerar la vigencia de principios y garantías consagrados en la Constitución Provincial.

No advierto que tal exigencia se haya cumplido, dado que las alegaciones realizadas por el Estado Provincial referidas a los posibles efectos positivos a nivel social y ambiental del proyecto no son suficientes para asignar tal entidad a la cuestión, especialmente en el marco de una medida cautelar.

Del mismo modo, el argumento relativo a la eventual pérdida de un crédito de origen internacional con motivo de la medida cautelar no resulta suficientemente acreditado para habilitar la instancia. Asimismo, corresponde señalar que dicho extremo no fue introducido por el Estado Provincial en oportunidad de contestar el traslado de la medida cautelar ante el Juzgado Ambiental, siendo planteado recién en oportunidad de promover esta instancia extraordinaria.

En segundo lugar y como consecuencia de lo establecido anteriormente, el Estado Provincial omitió aportar elementos que permitan tener por cierta la probabilidad de pérdida del crédito con motivo de la medida cautelar otorgada.

Al analizar la existencia de gravedad institucional no puede soslayarse el carácter excepcional del recurso tentado, pues se trata de una vía que adelanta la oportunidad de intervención del Superior Tribunal de Justicia.

En ese sentido al analizar los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en forma previa a su recepción normativa, su doctrina ha sostenido que "… no puede sino ser de alcances sumamente restringidos y de marcada excepcionalidad. De lo contrario, se tergiversaría (…) sin serias razones que lo justifiquen, el curso regular de los procesos, trastornando la función judicial del Tribunal…" (Fallos 313:863).

La doctrina posterior a la incorporación del recurso por salto de instancia en la legislación procesal nacional -en sentido concordante con el criterio expuesto en el párrafo precedente- ha dicho que "A lo largo de los años que lleva en vigencia el recurso *per saltum*, la Corte federal se ha mostrado respetuosa del marco de excepcionalidad que le ha dado la ley y no ha exhibido ningún desvío en su aplicación" (Quadri, Gabriel H., Rosales Cuello, Ramiro y Sosa, Toribio E., Tratado de los Recursos, Tomo I, Ed. Astrea, Buenos Aires 2019, pág. 291).

En consecuencia, toda vez que se trata de un recurso de singulares características y de interpretación restringida, cabe declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad por salto de instancia por no haberse acreditado que la cuestión sea de gravedad institucional.

En el caso de compartir el criterio expuesto propongo imponer las costas por el orden causado en atención a la naturaleza de la cuestión planteada, difiriéndose la regulación de honorarios hasta tanto sean regulados los correspondientes a la instancia de grado.

Tal es mi voto.

El Dr. (S/N) dijo:

Adhiero a la solución propuesta por presidencia de este trámite tanto en lo que respecta al acogimiento del recurso de inconstitucionalidad por salto de instancia deducido por el Estado Provincial como en lo que atañe a la imposición de costas.

Estimo innecesario emitir pronunciamiento en este momento respecto de los alcances de la consulta previa, libre e informada como parte del proceso administrativo en tanto el mismo se encuentra en curso y atento al objeto de la medida.

Como bien lo señala el voto, al que adhiero con la salvedad apuntada en el párrafo anterior, el inicio de las obras se encuentra supeditado a la conclusión de los trámites administrativos previos, con lo que no existe verosimilitud en el derecho ni peligro en la demora que autoricen a su dictado.

Tal es mi voto.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia,

Resuelve:

I. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad por salto de instancia deducido por el Estado Provincial y en consecuencia revocar la sentencia de fecha 18 de agosto de 2022.

II. Imponer las costas a la parte vencida.

III. Diferir la regulación de honorarios.

IV. Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Notas al pie:

[1] Expediente administrativo N° 600-705-2020 – Iniciado por Ministerio de Ambiente Asunto: S/Afectación de Parcela en la Localidad de Abra Pampa p/construcción un centro ambiental puna - Proyecto de Gestión Integral de residuos sólidos urbanos", documento en formato digital incorporado como adjunto del Escrito Nº 334157 del Expediente Principal.

[2] Expediente administrativo Nº 1101-117-G-2022 Iniciado por GIRSU JUJUY S.E ASUNTO: S/DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL CENTRO AMBIENTAL PUNA ABRA PAMPA, DPTO. COCHINOCA PCIA. DE JUJUY", documento incorporado con el Escrito Nº 334157.

[3] Notas de fecha 27/07/22 y 28/07/22, incorporadas en formato digital con el Escrito Nº 320843 de promoción de demanda.

[4] Resolución Nº 136/2022-SCA, fs. 27/28vta. del Expediente Administrativo Nº 1101-117-S-2022 (incorporado con el Escrito Nº 334157).

[5] Secretaria de Calidad Ambiental de la Provincia de Jujuy.

[6] Tratado de Derecho Administrativo, 2da edición actualizada y ampliada, Carlos F. Balbín, Tomo III, pág. 534.

Firmado: Dr. (S/N); Dr. (S/N); Dr. (S/N); Dra. (S/N); Dra. (S/N); Dr. (S/N); Dr. (S/N); Dr.(S/N).

Ante mí: Dra. (S/N) – Secretaria.

Expediente N° CA-12363/2016

Órgano: **Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia.**

Libro de acuerdo: **3.**

Número Sentencia: **40.**

Fecha: **10/4/2018.**

Competencia: **Recursiva.**

Voces Jurídicas: **COMUNIDADES ABORIGENES FORESTACION LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES.**

NOTA: Ver también Aclaratoria (L.A. Nº 3; Fº 314; Nº 76).

TEMAS: **PROHIBICIÓN DE INNOVAR. LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. COMUNIDADES ABORÍGENES. FORESTACIÓN. HECHO NUEVO. PLANTEO EXTEMPORÁNEO. PRUEBA DOCUMENTAL. DESGLOSE.**

(Libro de Acuerdos Nº 3, Fº 163/180, Nº 40). En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los diez días del mes de abril del año dos mil dieciocho, los señores jueces de la Sala III Contencioso Administrativa y Ambiental del Superior Tribunal de Justicia, doctores (S/N), (S/N) y (S/N), bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. Nº CA-12.363/16, caratulado "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C- 054.618/2015 (Cámara en lo Civil y Comercial -Sala II- Vocalía 4) Cautelar- Prohibición de innovar: Comunidad Aborigen (S/N) c/ Compañía Minera (S/N), (S/N), (S/N) y (S/N)" y,

El Dr. (S/N) dijo:

En los autos de la referencia, el día 28 de diciembre de 2015 se dictó la sentencia ahora en crisis que acogiera el reclamo ante el cuerpo deducido por Compañía Minera (S/N). en contra de la providencia que dispuso originariamente una prohibición de innovar a su respecto, para permitir la implantación de doscientos cincuenta mil plantines de eucaliptos en la Finca (S/N). Intimó a la cautelante a prestar fianza real suficiente bajo apercibimiento de dejar sin efecto la medida y dispuso su remisión a la Vocalía 4 de la misma Sala, en la que tramita el expediente Nº 56.529/15, correspondiente a la acción de amparo. Impuso las costas por el orden causado y difirió la regulación de honorarios profesionales.

Narra el a quo que la Compañía fundó su pedido en que es propietaria del inmueble denominado "(S/N)" (Matrícula A-46.118) desde el año 1998, sin que pueda ignorarse la posesión pública, pacífica y continua que ejerce. Se agravió afirmando que la cautelar dictada es abusiva puesto que su amplitud paraliza los trabajos que se venían desarrollando, implicando un perjuicio real y actual superior al millón de pesos ante la pérdida de los plantines y gastos que se tornaban improductivos como consecuencia de la prohibición de innovar despachada con sólo fianza personal de la letrada de la actora, que considera insuficiente ante la envergadura de los daños que se ocasionarían en caso de persistir en ella.

Sigue diciendo que el recurrente expresó que los trabajos fueron planificados como mejoras para el ordenamiento predial y el cumplimiento del plan de forestación que no va en desmedro de la propiedad sino

que le otorga valor. No importa, además, peligro en la demora que pueda afectar el proceso principal, a la vez que la cautelante no acredita de modo cierto y actual un derecho sustantivo.

Conferida participación al Estado Provincial, el mismo dio cuenta de que la Secretaría de Gestión Ambiental celebró con la Compañía un convenio en el marco de la ley 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, y de la Ley 5676, de aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial Adaptativo para las Áreas Boscosas, por el cual la empresa recibe fondos nacionales para el enriquecimiento y conservación de los bosques nativos, haciendo un manejo sostenible de los mismos, habiéndose conferido por la Dirección Provincial de Desarrollo Sustentable la Factibilidad ambiental y aprobado el Informe de Impacto Ambiental. El Estado otorgó los permisos de forestación.

En el ínterin se denuncia la promoción de la acción de amparo ya relacionada.

Expresa el a quo para resolver como lo hizo que el proceso cautelar es provisional y las medidas que en él se dictan mantienen su eficacia en tanto dure la situación fáctica que las motiva, por lo que el órgano jurisdiccional se encuentra habilitado a modificarlas y las partes con la facultad de requerirlo.

Indica que el 9 de setiembre de 2015, presidencia de trámite dictó prohibición de innovar sobre los inmuebles allí identificados, haciendo saber a los cautelados que habrían de abstenerse de realizar cualquier acto que implique la modificación de la situación de hecho existente en los mismos.

Expone además que se encuentra acreditado que Compañía (S/N) es la dueña del inmueble Mat. A-46.118 (fs. 193/194 vta.); que acreditó la negociación realizada con Mora Huaico SRL para la compra de 150.000 plantines de eucaliptos cuya entrega se concretaría entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 (fs. 316) y que encargó 100.000 plantines más a la Dirección Provincial de Desarrollo Agrícola y Forestal, quien expresó que los mismos debían ser retirados en diciembre de 2015 (fs. 338) y plantarse inmediatamente a fin de evitar su pérdida.

También apunta el Tribunal que no advierte cuál sería el peligro en la demora en la resolución del proceso principal ni el perjuicio que irrogaría la plantación toda vez que el objetivo perseguido por la cautelada es la reforestación del bosque nativo y no su deterioro o destrucción.

Observa asimismo, que el Estado Provincial indicó a fs. 337 que el emprendimiento se encuentra adecuado a las normas aplicables a la materia, cuenta con las autorizaciones respectivas e incluso tiene aprobado el Informe de Impacto Ambiental todo lo que indica el desarrollo sustentable al que se propende, estando lejos de advertirse eventual daño al ambiente o comunidad actora.

Alude también al perjuicio económico que sufriría la empresa en la eventual pérdida de los plantines y los gastos producidos para su implantación.

Indica, además, que ante la magnitud de los posibles daños que pueda irrogar la cautelar, la fianza personal otorgada por la actora resulta insuficiente por lo que deberá mejorarla constituyendo fianza real suficiente bajo apercibimiento de dejar sin efecto la medida.

Respecto de lo resuelto, deduce recurso de inconstitucionalidad la Dra. (S/N) en representación de la Comunidad Aborigen (S/N).

Alude que la objetada es sentencia equiparable a definitiva y que los derechos de defensa en juicio, debido proceso y adecuado servicio de justicia se ven comprometidos, siendo el recurso la única oportunidad para su adecuada tutela porque causa a sus mandantes agravios de imposible reparación ulterior.

Describe que los mismos tienen como actividad principal el pastoreo de animales y la siembra comunitaria y en el lugar donde desarrollan su actividad ancestral es donde los demandados están alambrando, limpiando y despojando a la comunidad para la realización de su proyecto de explotación privada.

Desarrolla antecedentes en términos a los que remito en mérito a la brevedad (fs. 19), entre los que se destaca el reconocimiento de la personería de la Comunidad por Resolución 2 de la Secretaría de Pueblos Indígenas del Gobierno de la Provincia (fs. 393/394 de los autos principales).

Refiere a la ley 26.160 y a la conformación, en su marco y en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, de un Equipo Técnico Operativo (ETO) que tiene como función primordial realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de los territorios ocupados por distintas comunidades. Sobre el territorio de Las Capillas, el ETO realizó la mensura y constató la ocupación tradicional, actual y pública de la comunidad aborigen según plano agregado a fs. 39.

Señala que, luego de la época en que se sembraba maíz y tiempo atrás, los administradores de la finca decidieron alambrar, creando potreros sin utilidad y privando de ese cultivo.

Al concretar agravios expresa que la sentencia se encuentra viciada de nulidad por resultar arbitraria, violatoria de la ley y de principios sustanciales de orden público y por falta de fundamentación por cuanto no aborda ni explica satisfactoriamente los derechos indígenas y ambientales, haciendo un mínimo e insuficiente análisis de los mismos.

En el segundo agravio refiere a la ausencia de fundamentación para considerar a la medida como vejatoria o excesiva con relación al resultado que se quiere asegurar.

Sostiene que, al levantar parcialmente la medida cautelar, el a quo realiza un análisis dogmático y subjetivo a favor de Cía. Minera (S/N) sin valorar los argumentos que esgrimiera al interponerla y la contestación de la vista que le fuera conferida en aquella oportunidad.

En su análisis, se hace referencia a la propiedad del terreno sin considerar si la empresa realiza actos posesorios sobre ella y que los mismos constituyen un despojo para los miembros de la comunidad violando la ley 26.160 (art. 2) y sus prórrogas vigentes, y sin hacer mención al relevamiento jurídico catastral realizado por el INAI en el territorio. En mérito de ello -sostiene- debe suspenderse el proyecto de forestación.

Indica que las empresas demandadas se encuentran en infracción a la ley 26.331 porque solicitaron sus beneficios en violación del art. 19 de la Ley de Bosques que preceptúa que “Todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupan esas tierras.”

Cita jurisprudencia que entiende en apoyo de su postura.

En el tercer agravio refiere a la pertenencia del inmueble a la Cía. Minera (S/N) negándola en términos a los que remito en mérito a la brevedad.

Sostiene que los supuestos derechos de propiedad de Minera (S/N) no pueden ser acreditados con ningún medio fehaciente de prueba, que no se acredita la existencia de actos posesorios y tampoco surge de las pruebas aportadas si se dio cumplimiento al art. 12 de la ley 26.737, de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

Con respecto a la afirmación de la sentencia relativa a la inexistencia de perjuicio por la implantación pretendida (en tanto el objeto perseguido es la reforestación y no la destrucción del bosque nativo), indica que no se trata de un proyecto de reforestación porque el lugar donde está alambrándose no fue nunca forestado, o sea sembrado con especies foráneas como el eucalipto, creando monocultivo. Se trata de un bosque nativo de churquis, piquillines, chañares, tipas, ceibos y diferentes especies autóctonas de árboles, donde también en épocas determinadas se encuentran los animales.

Afirma que existe error grave al aseverar que hay enriquecimiento del bosque, entendiendo por ello la técnica de restauración destinada a incrementar el número de individuos, especies o genotipos en un bosque nativo, a través de la plantación o siembra de especies forestales autóctonas entre la vegetación existente. Los eucaliptos no son especies forestales autóctonas en los términos de la reglamentación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos, sino por el contrario, son especies foráneas que provocan la pérdida del bosque nativo y la biodiversidad del lugar.

Postula que el problema central es el despojo a miembros de la comunidad originaria, instalando un proyecto inconsulto en zona de pastoreo comunitario para lograr de esa forma que las personas deban abandonar el lugar, lo que consta en las sucesivas denuncias penales y civiles que dice realizadas. Afirma

que la limpieza produce que la gente de la comunidad se vea impedida de usar la madera para leña porque la compañía la quema o retira del lugar haciéndoles saber expresamente que no pueden utilizarla, pese a que se trata de una zona sin gas natural y que las familias no tienen luz eléctrica.

Refiere aspectos de la cosmovisión andina y especifica que en la acción de amparo solicitan se ordene a las empresas demandadas la visibilización de la Comunidad (S/N) y su zona de pastoreo, y la participación de la misma en los trámites administrativos de planes de ordenamiento predial, manejo forestal, forestación sustentable, etcétera.

En el agravio siguiente alude a la afirmación de que el emprendimiento forestal se encuentra adecuado a las normas aplicables en la materia, cuenta con las autorizaciones respectivas e incluso el informe de impacto ambiental.

En el punto refiere que el proyecto se encuentra aprobado conforme a la ley 25.080 pero no de acuerdo a la normativa de protección de derechos humanos de los pueblos indígenas, ni concuerda con los preceptos del actual art. 240 del Código Civil y Comercial y a los arts. 41 y 43 de la Constitución Nacional en términos a los que remito (fs. 26 vta. y 27).

Reitera que la factibilidad ambiental del plan de manejo sostenible se encuentra aprobada en clara vulneración a la normativa de protección de los pueblos indígenas y que no existe beneficio alguno para la comunidad aborigen en los términos de la Constitución Nacional y el Convenio de la OIT art. 15.1. que sostiene que los derechos de los pueblos interesados en los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente y que esos derechos comprenden el de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos respectivos. Alude también a la norma protectora del art. 4 del Convenio aludido.

Con respecto al perjuicio económico al que alude el decisorio que sufriría la empresa indica que no existe prueba de él, dando razones a las que remito.

Enuncia que la medida debe mantenerse hasta que se implementen los derechos de consulta y participación en los proyectos forestales.

En punto a la solicitud de fianza real, alude primero a las Reglas de Brasilia, para afirmar que la orden del a quo se dirige a desalentar a la actora en el mantenimiento de la cautelar. La Comunidad no tiene inmuebles a su nombre, ni cuenta bancaria con la cual garantizar con fianza real suficiente a criterio del Tribunal los perjuicios que dice sufrir la minera.

Apunta que el amparo que corre por el principal se tramita con beneficio de justicia gratuita conforme la ley 4442 y a las normas de protección judicial de los pueblos indígenas (art. 12 del Convenio 169 de la OIT y art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos) y a jurisprudencia que entiende en apoyo de su postura (fs. 29 vta.).

También dice incumplida entonces la medida cautelar en términos a los que remito en mérito a la brevedad (fs. 30).

A fs. 34 consta la excusación del Sr. Vocal de la Sala I, Vocalía 1 de este Superior Tribunal, lo que motivó que, el 22 de febrero de 2016, los autos fueran llevados a la Vocalía 2 de la misma Sala conforme carátula del expediente. A fs. 30, el 16 de marzo de 2016, la Dra. (S/N) apoderada de la comunidad- solicita que los presentes tramiten en esta Sala por cuanto la medida cautelar involucra proyectos de forestación, que incluyen bienes naturales materiales e inmateriales -ambiente- donde preexiste la comunidad, lo que así se ordenó (fs. 36), habiendo sido recibidos los expedientes en esta Vocalía a mi cargo el 15 de abril de 2016.

Dispuse entonces, atento a la naturaleza de la medida cautelar objeto del proceso principal y dejando a salvo la cuestión relativa a la competencia de esta Sala conforme a la ley 5879 y acordadas reglamentarias, avocarme al conocimiento del presente. Asimismo, y advirtiéndose que el codemandado en el proceso principal, (S/N) no había sido notificado de la medida cautelar dispuesta, previo a todo trámite ordené la devolución del principal a fin de que el Tribunal de grado proveyera lo que por derecho correspondiera.

A fs. 40 la Dra. (S/N) dedujo aclaratoria respecto de lo así resuelto, a lo que no se hizo lugar (fs. 41), decisorio que quedó firme y consentido y, remitidos los autos a origen el 1 de junio de 2016, el 11 de octubre se requirió informe a la Sala acerca del trámite seguido, por lo que el 13 de octubre los autos fueron remitidos en devolución (fs. 44).

El 18 de octubre (fs. 45), la Dra. (S/N) solicitó la acumulación del presente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto respecto de la acción de amparo bajo expediente CA-12.867/2016, solicitando se corriera traslado de ambos recursos a Cía. Minera (S/N) y (S/N) y el Estado Provincial.

El 19 de octubre formuló denuncia de hecho nuevo e incumplimiento de la medida cautelar (fs. 54).

Ambas presentaciones motivaron el informe actuarial y la providencia de fs. 55 en los que se dio cuenta de los actos seguidos ante el Tribunal de grado para producir la notificación para la que fuera enviado, se dispuso el traslado del presente recurso, se denegó la acumulación pedida por tratarse de distintos objetos procesales y se mandó ocurrir a la presentante por la vía que corresponde con relación a la denuncia de hechos nuevos, providencia que, debidamente notificada, fue objeto de aclaratoria por parte de la Dra. (S/N) (fs. 67), que también fuera rechazada (fs. 73). En el ínterin los codemandados fueron presentándose, reponiendo aportes y solicitando, en su caso, suspensiones de plazo en función de la indisponibilidad del expediente.

A fs. 77 compareció (S/N), demandado en el principal, con el patrocinio del Dr. (S/N), declinando notificación por haber hecho lo propio en los autos principales en tanto su vinculación con el mismo no es a título personal.

A fs. 80/85 evacua el traslado el Dr. (S/N) en representación de Compañía Minera (S/N), solicitando su rechazo, con costas.

Al contestar el recurso refiere en primer término a la ausencia de cuestión suficiente en tanto la expresión de agravios no encuadra en la causal de arbitrariedad sino que refiere al criterio con que el tribunal decidió así como a cuestiones de hecho y prueba que, a más de no ser ciertas, resultan irrevisables en esta instancia.

Indica que las alegaciones de la contraria al punto III de su recurso, para fundar la causal del mismo y sus agravios, no se compadecen con el objeto de la demanda principal, amparo, cuyo resultado tiende a asegurar, lo que marca sus límites y justificación; aquel está circunscripto a los términos de la demanda respectiva, esto es, "…hacer efectivos los derechos de participación y consulta a fin de expresar el consentimiento previo, libre e informado con relación a los planes de ordenamiento predial y Planes de Manejo…" y no otra cosa. De tal modo, asevera, resultan inconducentes las argumentaciones relativas a supuestos e inexistentes actos de despojo o desalojo en su contra.

Asimismo, apunta que el Plan de Forestación con eucaliptos "dunni" que fuera aprobado por la Autoridad Ambiental y se está llevando a cabo, así como las labores de corte y raleo de pino forestado que se concretaron hasta que la cautelar lo impidió son y fueron ejecutados íntegramente en terrenos de su propiedad y en lugares que desde antiguo estuvieron cercados y alambrados, que jamás fueron poseídos ni a título individual ni comunitario por terceros ni comunidad aborigen alguna. Afirma que es falso que no haya acreditado mediante la prueba ofrecida que la forestación de pinos pertenece a la Finca y que obra agregado como prueba en el expediente del amparo que esa plantación de pinos data de hace más de 50 años y fue realizada por los propietarios a través del plan IFONA. Por el contrario, no existe en autos prueba real y concreta de ocupación efectiva y animus domini de los terrenos por persona o grupos de personas distintos de la propietaria.

Afirma que ningún relevamiento genérico realizado por terceros y en el que no participara puede resultarle oponible menos aún cuando evidencia, en su opinión, insuficiencia, ligereza, generalidad y abstracción alarmantes, sustentado teóricamente sobre hechos históricos inconexos con la realidad.

Indica que en el caso nada tiene que ver la ley 26.160 y sus prórrogas ya que el Plan de Forestación tiene como objeto llevar a cabo laboreos de implantación de eucaliptos en lugares que pertenecen a su representada, que estuvieron anteriormente cercados y alambrados y sobre los que la recurrente no acredita posesión efectiva.

Da razones para sostener que su calidad de propietario registral y poseedor de la finca resulta incontrovertible.

Sostiene que, en definitiva, puede observarse que la recurrente pretende servirse de este proceso para fines distintos de los pretendidos en la acción principal de amparo, impidiendo el uso y goce de su propiedad por su representada. Deja introducida la cuestión constitucional.

Apunta también a lo resuelto en caso análogo por este Superior Tribunal en expediente Nº 8.752/2012 (L.A. 56 Nº 446), sentencia a la que aludiré luego.

Solicita el inmediato y total levantamiento y cese de la prohibición de innovar.

A fs. 95/98 evacua el traslado del recurso el Dr. (S7N) en representación del Estado Provincial.

Alude a la participación del mismo en el principal en los términos ya reseñados y agrega en la oportunidad que, en respuesta a los requerimientos que efectuara a las áreas administrativas competentes y en intercambio con la Secretaría de Pueblos Indígenas, le fue informado que la Comunidad Aborigen (S/N) cuenta con reconocimiento de personería jurídica mediante resolución Nº 002-SPI-2016 del 25 de enero de 2016 otorgada por el Registro Provincial de Comunidades y Organizaciones de Pueblos Indígenas de la Provincia. Asimismo, y en cuanto a la situación territorial de la Comunidad, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas creó mediante Resolución Nº 587/07 el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.Ci) mediante el cual se ha reconocido a la misma la "ocupación actual, tradicional y pública de su territorio", mediante Resolución Nº 1-E-2017 del 4 de enero de 2017, luego de efectuar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de acuerdo a lo establecido por la ley 26.160.

Refiere que también le fue informado que, a propuesta de la Secretaría de Pueblos Indígenas y con acuerdo de las Comunidades y Pueblos, se ha generado un espacio en el ámbito del Ministerio de Ambiente a los fines de garantizar el ejercicio de la consulta libre, previa e informada en la revisión y ajustes a los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos, reconocido expresamente en el Convenio 169 de la OIT y que consiste en la participación en la toma de decisiones que pudieran afectar intereses legítimos de las comunidades y sus miembros.

Sin perjuicio de lo expuesto, afirma que no resulta menos cierto que con anterioridad a los actos de reconocimiento de personería y territorial de comunidades indígenas (Re.Te.Ci), Minera (S/N) presentó Plan de Ordenamiento Predial en Finca (S/N) (Mat. A-46118 Padrón A-3803) el que fue aprobado por la Dirección de Desarrollo Sustentable (fs. 169 a 192). Del mismo modo, esa Dirección autorizó la Factibilidad Ambiental de Minera (S/N) a fin de que ejecute los trabajos de reforestación en la finca en un período de cinco años en zonas que fueron forestadas años anteriores por encontrarse además dicha área en "Categoría II y Área transformada en el Ordenamiento Territorial Adaptativo para Áreas Boscosas." Es decir –concluye- que no existió impedimento para otorgar la Factibilidad Ambiental por cuanto la zona destinada a reforestación se encuentra categorizada en el Plan de Ordenamiento Predial con Transformada, lo que significa ausencia en el lugar de bosque nativo (fs. 97 vta.).

También resulta del expediente principal que la Dirección Provincial de Desarrollo Agrícola y Forestal firmó con la minera el acta por medio de la cual se comprometió a entregarle 100.000 plantas de eucaliptos.

A fs. 104/108 evacua el traslado del recurso el Dr. (S/N) en representación de (S/N) y (S/N) y(S/N), solicitando su rechazo.

En punto al recurso propiamente dicho sostiene que el decisorio es totalmente ajustado a derecho. El Tribunal evaluó en su momento el contrato celebrado con la empresa "S/N" para la compra de plantines que, de no utilizarse en tiempo, generarían su pérdida y, como contracara, que no se advierte cuál sería el peligro en la demora del proceso principal ni el que irrogaría su implantación. Formula otras consideraciones a las que, por haber sido expuestas anteriormente, remito (fs. 107) relativas a las autorizaciones y adecuación de los proyectos a la normativa ambiental aplicable.

Indica que la cuestión hoy es abstracta porque se cumplió el fin por el cual la cautelar fue morigerada (implantación), además de que el recurso contra las medidas cautelares se concede siempre con efecto

devolutivo y la cautelante no ha prestado la caución real que debía para que no se dejara sin efecto íntegramente la medida cautelar.

Refiere la existencia de abundantes pruebas en el principal para su morigeración y que se dispuso fundadamente para permitir que se cumpla un plan de forestación aprobado por la autoridad competente y que ningún daño ocasiona a los recurrentes. No existe razón para sostener que la resolución es infundada y arbitraria.

Dice que el planteo es incongruente porque el escrito recursivo menciona hechos (alambrados, deforestación de especies nativas, etc.) que son cuestiones debatidas en el principal pero no están relacionadas con la reforestación.

Repuestos los aportes profesionales intimados al letrado y acreditada la personería por (S/N) SRL, a fs. 133 compareció el Dr. (S/N) en representación de la comunidad aborigen. Solicita participación en autos y franqueo de los mismos.

A fs. 139/179 el Dr. (S/N) formula denuncia de hechos nuevos y graves daños que le están causando a su representada tendientes a impedir legítimamente que la misma disponga de su propiedad por lo que reitera la necesidad del urgente levantamiento de la totalidad de la medida cautelar ordenada en autos.

Integrado el Tribunal, los autos fueron llevados a dictamen de la Fiscalía General, que se expide a fs. 183/188 por el rechazo del recurso en términos que, por compartirlos, transcribiré luego.

Finalmente, debo destacar que, encontrándose a estudio los autos principales, la Dra. (S/N) en representación de la Comunidad actora e invocando el dictado de sentencia en el expediente de la Sala Penal PE-12.794/16 de este Superior Tribunal (a cuyos términos remito por encontrarse publicada en la página web institucional) formuló un nuevo planteo de hechos nuevos pretendiendo en ese momento la incorporación de la carpeta técnica producida por INAI, de marzo de 2017. Indicó que la misma contenía información relevante para la dilucidación del caso y la aplicación de la ley 26.160.

En ese marco, dado el carácter extraordinario de este remedio, en tanto el hecho invocado refería a la sentencia penal dictada, ajena a este proceso, a fs. 190 se mandó a la misma ocurrir por la vía que corresponda.

A fs. 194, el Dr. (S/N), instó el dictado de sentencia insistiendo en la necesidad del levantamiento total de la medida cautelar y alegando en la oportunidad el dictado de nuevas resoluciones en su perjuicio por la Secretaría de Desarrollo Sustentable que acompañó a fs. 191/193.

A fs. 195/218 la Dra. (S/N) formula nueva presentación en la que alega la existencia de hecho nuevo. Adjunta constancias de AFIP, declaración jurada, informes de Secretaría de Pueblos Indígenas y censo actualizado.

A fs. 219 se agrega la documentación incorporada por la Dra.(S/N) con noticia de partes y, proveyendo a la presentación del Dr. (S/N), se ordenó estar a lo así resuelto.

A fs. 220 el Dr. (S/N) se opone a la agregación de documental y pide que se ordene su desglose y devolución. Indica que la documentación agregada es un informe elaborado por la Secretaría de Pueblos Indígenas a solicitud de la propia letrada recurrente, cuyo contenido, a todas luces parcial, subjetivo y direccionado, constituye y viene a enmascarar bajo el ropaje de informe nada más ni nada menos que un alegato a favor de su causa en el que se pretende puerilmente ingresar por la ventana, aprovechándose de la buena fe del Tribunal y que, de ser admitido y/o meritado por esta Sala, vendrá a conculcar de modo exorbitante y enorme el debido proceso adjetivo y el derecho de defensa de su parte, vulnerando garantías constitucionales.

Expresa que la Secretaría de Pueblos Indígenas es un organismo que por su propia naturaleza y funciones responde al solo interés de un sector o parte, y si bien como integrante del Estado sus actos gozan de presunción de legitimidad, esta presunción no es absoluta y cede en casos como el presente en el que queda patentizada su evidente parcialidad. Pone énfasis en que este organismo ha venido dictando sucesivos actos

administrativos tendientes a "purgar" las inconsistencias, irregularidades y defectos de la acción judicial. Así, frente a sus planteos defensivos, con total desprecio por el derecho de los particulares y del orden constitucional, extemporáneamente reconoció como Comunidad Aborigen a este grupo de personas que representaba la Dra.(S/N) y elaboró unilateralmente y sin intervención de los particulares afectados un relevamiento territorial que no es otra cosa que una simple gráfica carente de toda seriedad sustentada en lo que nomina como "autodefiniciones", "autoatributos", "autoidentidades", "autoreconocimientos" y ocupaciones inexistentes, todo lo cual ahora se pretende conjugar y sintetizar a través de la documentación agregada para influir a favor del interés de la recurrente. Pide se imprima a su presentación el carácter de reclamación ante el Cuerpo.

A fs. 221/226 la Dra. (S/N) formula nueva presentación, esta vez, de aclaratoria, indicando que –a raíz de la presentación del recurso extraordinario federal en el expediente penal ya relacionado- tomó conocimiento de que el INAI concluyó el relevamiento territorial de la Comunidad y le otorgó la carpeta técnica según resolución Nº 2017-1-APN-INAI que agrega en copia simple. Indica que el relevamiento concluyó con posterioridad a la interposición del recurso y de la medida cautelar, tiene directa relación con la cuestión ventilada y no fue interpuesto en ninguna oportunidad por lo que solicita que la misma, cuya incorporación fue denegada en la providencia del 26 de setiembre, se tenga presente. Alude nuevamente a la ley 26.160.

Atento al estado del trámite, la complejidad que revistió el mismo dadas las distintas etapas de las que se da cuenta en el relato, a fs. 227 dispuse la abreviación de los plazos a efectos del tratamiento de estos planteos, oportunidad en la que se corrió vista del reclamo ante el Cuerpo deducido por el Dr. (S/N) a las restantes partes del proceso; también a fin de conferir mayor celeridad al trámite y un mejor ordenamiento, dispuse reconducir la postulación de la Dra. (S/N), teniendo por interpuesto reclamo ante el Cuerpo y corriendo vista del mismo, al mismo tiempo y de igual modo.

Con posterioridad, en presentación agregada a fs. 228, el Dr. (S/N) produjo manifestación en términos análogos a los del reclamo del Dr. (S/N) y solicitó el desglose de la documentación agregada por la Dra. (S/N), por su tenor, es tratada conjuntamente con las que ahora nos ocupan.

Vencido el plazo de dos días para evacuar la vista, conferido simultáneamente a todas las partes, a fs. 234 la evacua el Dr.(S/N).

Destaca en la oportunidad que no es verdad que la Dra. (S/N) no hubiere conocido la existencia del relevamiento al que refiere la documentación que pretende agregar a la causa so pretexto de hecho nuevo, pues ello surge contradicho por el informe del INAI del 4 de setiembre de 2015, agregado a fs. 52/57, de los autos principales, por lo que nada nuevo hay con esto.

Afirma, además, que la documentación emanada de INAI proviene de actos irregulares y arbitrarios que no le resultan oponibles en tanto no se le confirió participación alguna en los procedimientos respectivos, violando el debido proceso legal y el derecho de propiedad garantizados en los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional.

Sin perjuicio de ello, refiere que nada tiene que ver en el caso la ley 26.160 y sus prórrogas pues el Plan de Forestación aprobado por la autoridad de aplicación tuvo y tiene por objeto llevar a cabo laboreos de implantación de eucaliptos en lugares que le pertenecen a su representada, los que estuvieron anteriormente cercados y alambrados y sobre los que ningún derecho posesorio "real y actual" tiene comunidad aborigen alguna y, aunque la hubiere, nadie pretende llevar a cabo ningún desalojo, de modo que el invocado hecho nuevo y la documentación que se pretende agregar no son otra cosa que cuestiones relativas a otra causa como así también el producto de una mera "ficción" administrativa del INAI, inadmisible y carente de validez en este proceso, resultando por ende inoficiosa. Concluye afirmando que las cuestiones planteadas no solo son ajenas a esta instancia extraordinaria sino a la causa.

A fs. 235/236 evacua la vista el Dr. (S/N) en representación del Estado Provincial destacando que, al contestar el traslado del recurso, manifestó que la Comunidad cuenta con el reconocimiento de su personería jurídica y que, en lo que refiere a su situación territorial, el INAI ha reconocido en enero de 2017 la ocupación actual, tradicional y pública de su territorio (Resolución Nº 1-E/2017). Indica que oportunamente se dispuso el desglose de las copias respectivas que su parte incorporara. Consintió aquella resolución puesto que la documentación que oportunamente agregó fue con clara intención de llevar a conocimiento

del tribunal la totalidad de los antecedentes que circunscriben la cuestión debatida en autos, sin perjuicio de que ratificó el contenido de la presentación efectuada por su mandante a fs. 337 –de los autos principales- en cuanto a la legalidad con la que procedió el Ministerio de Ambiente de la Provincia al momento de dictar las Resoluciones Nº 048/15-DPDS (fs. 169/170 del principal) y 013/15-DPDS (fs. 175/182), sin perjuicio de las circunstancias sobrevinientes respecto del reconocimiento de personería jurídica y de relevamiento aludidas.

A fs. 237/238 contesta el Dr. (S/N) la vista del reclamo deducido por la Dra. (S/N) solicitando su rechazo, con costas. Refiere que su planteo nada altera. El documento presentado es atinente a hechos invocados en el recurso y no probados y aceptarlo importaría violar la garantía del debido proceso legal y el principio de preclusión.

Afirma por otro lado que las actuaciones en las que supuestamente se dictó la resolución datan del año 2015 y no tienen relevancia alguna respecto de la medida que decidió el levantamiento parcial de la cautelar de no innovar.

La resolución que ahora invoca es del 24 de enero de 2017 ("hace ocho meses") y la recurrente no puede invocar ni puede admitirse que recién tomó conocimiento de ella. Hacerlo sentaría un precedente muy peligroso para la seguridad jurídica por razones que explica.

Refiere que, además, se cita la ley cuyos alcances no han sido cuestionados y no son relevantes para el thema decidendum. Esencialmente, sus mandantes no han sido parte en aquellas actuaciones ni han sido consultados.

Afirma que está claro que ni la resolución ni la ley afectan el derecho de propiedad de sus representados y la morigeración de la medida cautelar y la existencia de fianza tienden a resguardarlo hasta tanto se dirima la situación en conflicto. Formula reserva si se pretendiera sostener que el relevamiento importa desconocimiento liso y llano de los derechos de propiedad de todos aquellos que han adquirido legítimamente propiedades en la zona, propietarios, poseedores y ocupantes previos, y menos si no se ha dado participación alguna ni se han verificado los títulos ni los derechos que tienen basándose todo el relevamiento solamente en interrogatorios a los interesados. Formula otras consideraciones a las que remito.

A fs. 239 evacua la vista del reclamo del Dr. (S/N) y formula expreso allanamiento al mismo, solicitando eximición de costas.

Finalmente, a fs. 240/243 evacua la vista la Dra. (S/N) Refiere al reconocimiento de la personería jurídica y al relevamiento territorial en términos que ya han sido expuestos.

Detalla la documentación obrante en esa "carpeta técnica del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas", diciéndola de valor trascendental para la causa y que no fue presentada con anterioridad porque se encontraba en trámite, por lo que formuló un hecho nuevo. Reitera que tomó conocimiento de ella al deducir el recurso extraordinario federal correspondiente a las actuaciones penales a las que también he hecho alusión. Su presentación en esta instancia fue rechazada.

Alude nuevamente a las circunstancias de hecho del caso y, en lo que hace al reclamo refiere al derecho por el que la documental debe ser aceptada, invocando el art. 15 del CPC en punto a las facultades investigativas del juez para el mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos y a jurisprudencia que entiende en apoyo de su postura.

Reitera también su remisión a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y a las normas del Decreto Nº 79-6-15, de creación de la Secretaría de Pueblos Indígenas del Gobierno de la Provincia de Jujuy y decreto 1122/07, reglamentario de la ley 26.160, en términos a los que remito.

Concluye que, en la causa que nos ocupa, si bien en el escrito de interposición de la cautelar y del recurso de inconstitucionalidad incoado, expresó que el relevamiento territorial de la comunidad se encontraba en trámite, el mismo fue finalizado en enero de 2017, en resolución Nº 1-E/17 del INAI y, mediante resolución Nº 0084/SPI tomó conocimiento la Secretaría de Pueblos Indígenas en marzo de 2017 que, previo registro, la remitió al Boletín Oficial a sus efectos.

De modo que procede, entonces, pronunciarnos respecto del recurso.

En punto a la competencia de esta Sala para el dictado del presente, cabe estar a lo oportunamente resuelto por este Superior Tribunal, en anterior composición y en sentencia de la que no participé pero cuyo temperamento comparto en el punto, en la que se sostuvo que "las medidas cautelares pueden ser dictadas aún por juez incompetente si la urgencia así lo justifica (art. 22 inc. 2º del C.P.C. y 269 del C.P.C.)" (L.A. Nº 60 Fº 67/71 Nº 33).

En el caso, ha quedado expuesto el modo en que el recurso que nos ocupa, que versa sobre una medida cautelar, fue oportunamente remitido a esta Sala y que la naturaleza de la medida fue la razón de mi avocamiento así como lo que motiva ahora su resolución.

Cabe señalar que, tal como surge del Sistema Integral de Gestión Judicial, el recurso deducido respecto del amparo que constituye el principal al que esta cautelar accede, fue oportunamente elevado a resolución de este Alto Cuerpo en pleno conforme auto interlocutorio registrado al L.A. 2 Fº 22 Nº 8 (Expediente del registro de este Superior Tribunal de Justicia Nº CA-12.867/2016 "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. C-056.529/15 (Cámara en lo Civil y Comercial -Sala II- Vocalía 4) Amparo - Comunidad Aborigen (S/N) c/ Compañía Minera (S/N)) precisamente a efectos de resolver la cuestión relativa a la competencia de las Salas conforme previsiones de la ley 5879 y acordadas reglamentarias, quedando resuelta la cuestión en resolución registrada al L.A. Nº 2 Fº 111/113 Nº 38.

Tal como lo indica el dictamen de la Fiscalía General, la sentencia cuestionada no es definitiva, ni se equipara a tal al no resolver la cuestión de fondo, ni encuadrar el caso en alguno de los supuestos de excepción que justifique apartarse de la regla prescripta por el art. 8 de la ley 4346.

Reiteradamente el Superior Tribunal de Justicia ha sentado su criterio en este sentido al resolver que "las medidas cautelares son esencialmente provisionales y sujetas a revisiones permanentes a través de posibles levantamientos, modificaciones y/o sustituciones, por lo que en principio, las decisiones que versan sobre dicha materia no revisten el carácter de definitivas a los fines de los recursos de casación e inconstitucionalidad y excepcionalmente ha abierto el recurso extraordinario en casos vinculados a medidas cautelares de extrema gravedad institucional, a vicios normativos o a lo que se denomina sentencia ruinosa, para no convertir a esta Corte en un tribunal de tercera instancia, subvirtiendo su estructura constitucional." (L.A. Nº 38, Fº 1174/1176 Nº 738 y L.A. 53 Fº 266/267 Nº 88).

Entiende que en el caso no se configuran esos supuestos, toda vez que los argumentos esbozados por la recurrente no revelan la existencia de vicios graves en el pronunciamiento atacado, sino que, por el contrario, solo exteriorizan meras discrepancias con lo resuelto en la instancia previa, lo que descarta sin más la posibilidad de darle favorable andamiento.

El hecho de que la cuestionada no sea sentencia definitiva permite descartar de plano los agravios articulados por la recurrente por cuanto, dado que las medidas cautelares son esencialmente provisionales, las partes en cualquier estado del proceso se encuentran facultadas para solicitar su modificación, sustitución o levantamiento siempre que medie ante tal pedido la debida justificación de los hechos y del derecho invocado que avale la pretensión.

Entiende acreditadas tales condiciones en autos conforme lo expuesto por el a quo ya que las circunstancias probadas consistentes en: la acreditación de la propiedad del inmueble A-46.118 en cabeza de Compañía Minera (S/N) (fs. 193/194 y vta.), la compra de ciento cincuenta mil plantines de eucaliptos a la empresa (S/N) a entregarse entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 (fs. 316), el encargo de plantines a la Dirección Provincial de Desarrollo Agrícola y Forestal que debieron retirarse en diciembre de 2015 (fs. 338), que el proyecto cuenta con la debida aprobación estatal en virtud de estudios ambientales oportunamente valorados, y el posible perjuicio económico que causaría no plantarlos, en terrenos que a priori se consideran de propiedad de la empresa, no podían ser soslayadas a la hora de resolver el pedido de levantamiento de la medida de no innovar dispuesta preliminarmente, la que fue concedida de manera parcial al solo y único efecto de la implantación de aquellos manteniéndose en lo demás la medida cautelar dispuesta a favor de la comunidad.

Sostiene que el levantamiento parcial de la medida consulta favorablemente los derechos de ambas partes, pues tiende a evitar un perjuicio económico a la empresa y al Estado Provincial mismo, dadas las negociaciones concretadas para obtener los plantines comprados y encargados, y a su vez, perseguir la reforestación del bosque nativo, contrariamente a lo que sería su destrucción o deterioro, lo que no ocasiona perjuicio concreto y actual que amerite decidir lo contrario. El levantamiento de la medida es al solo y único fin de la plantación de los eucaliptos, quedando vedado a la demandada el ejercicio de cualquier otra actividad que afecte el estado del terreno, tal como fuera oportunamente dispuesto.

Refiere también el dictamen de la Fiscalía General, que los planteos expuestos en el recurso, resultan inocuos e ineficaces para descalificar la sentencia cuestionada por la causal de arbitrariedad en los términos concebidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que no debe olvidarse que nos encontramos ante un proceso de naturaleza cautelar en el que no solo se destaca la cualidad de provisionalidad de las medidas en él dispuestas, sino que además el análisis de las cuestiones de fondo se encuentra acotado solo a lo que resulta pertinente respecto de la medida solicitada, pues la amplitud de conocimiento y prueba están previstos para el proceso principal, que debe desarrollarse por su vía, para lo cual el tribunal de grado también dispuso la remisión de los presentes a aquél (Expte. Nº 56.529/15 "Acción de amparo: Comunidad Aborigen (S/N) c/ Compañía Minera (S/N) y derivados y otros…"), donde habrá de resolverse –en su caso- el planteo de fondo.

Con relación a lo denunciado a fs. 177 y vta. por el apoderado de Compañía Minera (S/N) respecto a que ya se ha cumplido con la implantación y su posterior destrucción, oportunidad en la que –añado- reitera su pedido de levantamiento total de la cautelar ordenada, indica que es materia que excede la que es objeto de tratamiento en esta instancia, por lo que el presentante deberá ocurrir por la vía y ante quien corresponda para obtener un legítimo pronunciamiento al respecto. Es menester aclarar que el mismo no dedujo recurso alguno en esta instancia relativo a la extensión con que se hiciera lugar a su reclamo ante el cuerpo por lo que su planteo no puede ser motivo de tratamiento.

Finalmente, propicia el dictamen rechazar el agravio erigido respecto de la obligación de prestar fianza real suficiente a criterio del tribunal en tanto el juzgador ha valorado correctamente la circunstancia de que la medida dispuesta podría ocasionar posibles perjuicios a las partes cauteladas con lo que la sustitución implica un justo resguardo de los derechos de ambas partes.

Añado a las consideraciones precedentes lo siguiente.

Este Superior Tribunal, en anterior composición y en tratamiento de un caso cuyas consideraciones son predicables, mutatis mutandis al presente (Cftr. L.A. 56 Fº 1482/1484 Nº 446), sostuvo no solo el carácter no definitivo de la sentencia en crisis sino que en casos como el que nos ocupa se encuentran en pugna dos derechos "de los cuales el de la cautelante es sólo verosímil y en expectativa en tanto el de los cautelados es cierto, pues no hay dudas de que a todo propietario le asiste el derecho de usar, gozar y disponer libremente de sus bienes."

Se afirmó entonces en el voto de la Dra. (S/N) al que adherí que "no puede coartarse el ejercicio del derecho cierto para dar protección cautelar a aquel que, por el momento, sólo cuenta con una acción en trámite dirigida a su reconocimiento" lo que, como lo indicara, no es siquiera un extremo que se invoque en el presente y sin que ello implique formular valoración alguna de los relevamientos producidos por la autoridad de aplicación con relación a la invocada posesión de la comunidad porque también exceden el objeto de este expediente.

Es por ello que propicio el rechazo del reclamo ante el Cuerpo formulado por la Dra. (S/N) para que se incorpore la carpeta del relevamiento técnico formulado por el INAI. No solo su incorporación al presente y la invocación de que se trata de hecho nuevo es extemporánea a la luz de las constancias que la misma recurrente aporta (Cftr. nota del 21 de marzo de 2017 (fs. 223/224) de entrega de la carpeta a la comunera (S/N) y escrito de solicitud de incorporación al presente del 25 de setiembre de 2017 (fs. 189), sino que, tal como lo refiere la propia recurrente, la resolución respectiva se encuentra publicada en el Boletín Oficial y, como lo expresa el Estado Provincial, dio cuenta de su dictado al momento de contestar el traslado respectivo.

Por otra parte, esencialmente excede con claridad el objeto de la cuestión ahora en estudio, por lo que la providencia respectiva debe ser confirmada. Destaco que la pretensión fue esgrimida "atento a que en expte. PE-12.794/16 medida cautelar de desalojo a miembros de la Comunidad Aborigen (S/N), interpuse recurso extraordinario federal", invocando genéricamente gravedad institucional y sin alegación alguna respecto de la pertinencia de su incorporación al presente.

Postulo, sin embargo, asumir distinto temperamento en punto al reclamo deducido por el Dr. (S/N), al que adhiere en su manifestación el Dr. (S/N) y, en su mérito, revocar la providencia que dispone la agregación de la documental de fs. 195/217, con noticia de partes. Ello en tanto las constancias de AFIP acompañadas datan, como allí se indica, de mayo de 2016 con lo que su incorporación en este momento deviene extemporánea y la restante documental cuya agregación pretende o bien ha sido relacionada y materia de adecuado tratamiento, o se trata de cuestiones, como las notas emitidas por la Secretaría de Pueblos Indígenas y constancias censales que acompañan, así como una declaración jurada de inexistencia de bienes que no se indica en qué condiciones ni a qué fines fuera emitida y que se incorpora en copia certificada, que habrán de ser objeto de tratamiento eventualmente en la acción principal, excediendo ampliamente el objeto de la cautelar que nos ocupa.

Entiendo menester destacar aquí la excepcionalidad de la introducción de esta clase de planteos toda vez que se trata de una instancia extraordinaria, temperamento reiteradamente observado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Cftr. De Santo, Víctor, Tratado de los Recursos, Tomo II, Recursos extraordinarios, Tercera edición actualizada, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2004, págs. 290 y 291), no obstante lo cual adhiero a la postura de Gladis E. de Midón en tanto sostiene que no debe extrañar que el poder-deber que asiste a la jurisdicción para "estar en claro" alcance no sólo a los jueces de grado sino también a los tribunales de los recursos extraordinarios, postura que apunta de viejo abolengo también en la doctrina judiciaria de nuestra Corte Suprema y de casi unánime aceptación por los autores. (Cftr. aut. citada, La casación. Control del "juicio de hecho"., Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2001, págs. 194/195).

No obstante, en modo alguno ha quedado demostrada en autos la pertinencia de su incorporación, lo que justifica la solución que se propone.

Resuelta la cuestión, y volviendo al tratamiento de la materia propia del recurso, destaco que del propio relato de la recurrente en aquel y de una lectura detenida de las constancias del Expte. C-54.618/2015 "Cautelar…", se advierte que la situación de coexistencia de los miembros de la comunidad con los titulares registrales no es reciente. Es particularmente ilustrativa la reseña producida por los actores en la copia certificada de la demanda de amparo que obra a fs. 357/369 de los autos principales.

El primer agravio sostiene que el decisorio es nulo por no abordar satisfactoriamente los derechos indígenas ni ambientales mas no explica en modo alguno de qué manera los entiende conculcados.

En el segundo y tercer agravio, alude a la ausencia de fundamentación, considerando a la medida vejatoria o excesiva con relación al resultado que se quiere asegurar. Refiere a la propiedad y posesión del terreno, cuestiones que merecen –en el acotado marco de esta medida y atendiendo a los elementos particulares de este expediente- análoga solución a la se confiriera en el fallo reseñado anteriormente.

La alusión incluida en el mismo, relativa a la necesidad de suspender el proyecto de forestación, excede claramente el ámbito de la medida cautelar.

Es la recurrente quien afirma que en la acción de amparo solicitan a las empresas demandadas que visibilicen a la Comunidad, su zona de pastoreo y su participación en los planes de ordenamiento predial, manejo forestal y forestación sustentable con lo que ningún elemento de análisis lleva a considerar que lo resuelto por el tribunal de grado resulta arbitrario y, por tanto, descalificable como acto jurisdiccional.

Por lo expuesto, propongo: a) rechazar el reclamo ante el Cuerpo deducido por la Dra. (S/N) y, consecuentemente, confirmar la providencia del 26 de setiembre de 2017 (fs. 190), mandando desglosar y devolver a su presentante la documental de fs. 221/224 acompañada a esa presentación; b) hacer lugar al reclamo ante el Cuerpo deducido por el Dr. (S/N) y, en consecuencia, revocar la providencia del 28 de

setiembre de 2017 (fs. 219) mandando a desglosar y devolver a su presentante la documental de fs. 195/217 y c) rechazar el recurso de inconstitucionalidad tentado.

Atendiendo a que la imposición de costas por el orden causado establecida en la instancia anterior fue consentida y en tanto las constancias del proceso demuestran que la recurrente ha litigado con algún derecho y de buena fe, las costas de esta instancia también se imponen por el orden causado, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales (art. 102, 2º párrafo del CPC).

El Dr. (S/N) dijo:

Disiento respetuosa y parcialmente con el voto que antecede, en lo atinente con la caución real debatida en la especie. Corresponde, a tal efecto, dar por reproducida la relación de antecedentes.

1) Ahora bien, de conformidad a la providencia de fs. 36 de estos autos, quedando a salvo la cuestión de competencia suscitada en los autos principales, como una primera cuestión a examinar relativa a la admisibilidad del acto impugnativo de la parte actora cautelante, "Comunidad Aborigen (S/N)", se advierte que si bien la sentencia recurrida no es definitiva en los términos del art. 8 de la ley 4346 y sus modificatorias, sin embargo es excepcionalmente equiparable a tal, en la medida en que el decisorio recurrido puede ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior. Desde este aspecto procesal, el recurso ha sido interpuesto en término procesal idóneo y en contra de una sentencia formalmente revisable por esta vía.

2) Así, incumbe delimitar, en concreto, la materia del recurso de inconstitucionalidad en análisis. Conforme a las constancias de estos autos, sólo se encuentran controvertidas, respecto al decisorio de grado recurrido, dos cuestiones, a saber: por un lado, a) el levantamiento parcial de la medida cautelar, en cuanto autorizó a la empresa demandada a emprender la forestación de 250.000 plantines de eucaliptos, y, por otro lado, b) la exigencia de dar una garantía real suficiente en cabeza de la parte actora (Comunidad Aborigen (S/N)), para el mantenimiento de la medida de no innovar dictada en los autos incidentales principales.

Importa resaltar, por eso, que la parte demandada no ha planteado recurso de inconstitucionalidad en contra de la sentencia del Tribunal de grado, como lo remarca, también, el voto precedente; al tiempo que la cuestión relativa a la legitimación activa de la parte actora -Comunidad Aborigen (S/N)- ha quedado diferida para el momento en que se dictara la sentencia definitiva en los autos principales.

3) En el marco jurídico concreto de la cuestión, cabe analizar que a fs. 317/320 de los autos incidentales principales Nº C-054.618/15, la empresa Compañía Minera (S/N), dedujo reclamación ante el cuerpo pidiendo, en esa oportunidad, el inmediato levantamiento de la medida cautelar de no innovar otorgada por el Tribunal de grado; para cuestionar el objeto de la cautelar, expresó a fs. 319 textualmente que:

"…dada la amplitud de la medida, la PARALIZACIÓN TOTAL de los trabajos que venía realizando en la heredad (venta de trocillos de pino forestado a PAPELERA (S/N), como lo venía haciendo con regularidad en función de un acuerdo comercial celebrado en la misma (adjunto las facturas correspondientes de las entregas que se venían haciendo quincenalmente), para lo cual debía llevar adelante los trabajos de corte de dicha madera. Asimismo se vio impedida de llevar adelante los laboreos preparatorios para la implantación de 250.000 (Doscientos cincuenta mil) plantines de eucaliptos cuya siembra le fue encargada a terceros para su posterior transplante…" (sic).

Lo expresado, reconocido y probado con las facturas de venta de la empresa Compañía Minera (S/N) (fs. 244/271 de los autos Nº C-54.618/15, y cuyas copias simples no fueron cuestionadas en su autenticidad) no coincide, ni con lo expresado y reconocido por el propio Estado (cfr. fs. 337 y vta. de los autos incidentales principales Nº C-054.618/15), sobre las autorizaciones administrativas respectivas, ni con los fundamentos brindados en la sentencia interlocutoria recurrida. Pues, en efecto, el a quo ha sostenido, para hacer lugar al levantamiento parcial e indirectamente para la exigencia de caución real para la medida cautelar controvertida (cfr. fs. 383 vta. y fs. 384) que:

"…no advertimos cuál sería el peligro en la demora en la resolución del proceso principal, ni tampoco el perjuicio que le provocaría la implantación de esos plantines, toda vez que el objetivo perseguido por la parte cautelada es la reforestación del bosque nativo y no su destrucción o deterioro (…) Conforme lo indicó el Estado Provincial a fs. 337 el emprendimiento forestal se encuentra adecuado a las normas aplicables a

la materia (…) todo lo cual nos indica el desarrollo sustentable al que propende y lejos está de advertirse un eventual daño al ambiente y/o a la comunidad actora. Por el contrario, se trata de un "enriquecimiento", entendiendo por ello "la técnica de restauración destinada a incrementar el número de individuos, de especies o de genotipos en un bosque nativo, a través de la plantación o siembra de especies forestales autóctonas entre la vegetación existente" (cfr. Art. 1º de la Reglamentación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.631: Decreto Nº 91/2009)…" (sic).

Los fundamentos así estructurados en la sentencia recurrida, lucen el vicio de arbitrariedad. Pues, del decisorio impugnado no emerge una adecuada y razonable apreciación del objeto y de las constancias de los autos incidentales donde obra la medida de no innovar discutida. En la medida en que en los autos incidentales principales surge probado y reconocido por Compañía Minera (S/N), que la alegada forestación ostenta un propósito comercial.

Someter una decisión como la del sub lite, a la autorización estatal, no es suficiente, porque ello no deja nada esclarecido de que la especie de árboles probados que implantará la empresa Compañía Minera (S/N), y su actividad comercial, persiga la protección autóctona de Bosques Nativos, tal como resalta y sugiere, no sólo la demandada y el Estado, sino esencialmente el decisorio recurrido. Cuestión de fondo ésta, no obstante, que corresponde tratar en definitiva al Tribunal competente de la causa.

Dicho de otro modo, lo que torna arbitrario el decisorio cautelar impugnado en la especie, focalizado en la exigencia de una caución real suficiente, es la fundamentación del a quo, que para formar esa decisión, se orienta a una cuestión que es básicamente de índole ambiental, anudada a la idea del enriquecimiento de Bosques Nativos, cuando se arguyó la posibilidad de perjuicios patrimoniales respecto a una actividad mercantil de no esclarecida relación con un puro enriquecimiento del Bosque Nativo.

Por ello, y con cuanta mayor trascendencia aún en esta materia, las pretensiones de las partes deben quedar circunscriptas a la calificación que corresponda según la naturaleza de las relaciones sustanciales comprometidas en el proceso (cf. L.A. Nº 45, Fº 588, Nº 260); pues, como sostuviere también la CSJN, DT 1988 A 757: "…es deber de los jueces analizar los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando de modo autónomo a la realidad fáctica y sustentándola en normas jurídicas que la rigen con prescindencia de los fundamentos que enuncian la partes…" (sic); y en tal trayectoria este Superior Tribunal de Justicia también sostuvo: "…el actor no tiene la obligación de indicar por su nombre técnico la acción que deduce, ni siquiera la de citar las disposiciones legales en que funda la pretensión, pues la primera resultará de la exposición de los hechos y la segunda la hará el magistrado con prescindencia de la calificación hecha por el actor. El silencio o error de éste no tiene ninguna consecuencia…" (L.A. 42, Fº 799/802, Nº 284, entre otros).

Es necesario, en razón de lo que se ha analizado, que los autos vuelvan al Tribunal de grado que resulte competente para que se realice una apreciación acabada y acorde a la materia e instituciones jurídicas comprometidas, en torno de la verosimilitud de derechos e intereses difusos involucrados en el sub lite y del periculum in mora que pudiera llegar a ocasionar una vulneración de ellos y a la razonabilidad de exigir una fianza real suficiente.

Por los fundamentos expuestos, me pronuncio por hacer lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto en autos y en consecuencia cabe revocar la sentencia de grado respecto a la fianza real suficiente a criterio del tribunal de la causa, ordenando que vuelvan los autos al tribunal de origen para que se emita un nuevo pronunciamiento; en tanto que de acuerdo a lo establecido en el art. 103 del Código Procesal Civil, las costas de la presente instancia extraordinaria deben imponerse por el orden causado.

Tal es mi voto.

La Dra. (S/N), adhiere al voto del Dr. (S/N).

Por ello, la Sala III Contencioso Administrativa y Ambiental del Superior Tribunal de Justicia,

Resuelve:

1. Rechazar el reclamo ante el Cuerpo deducido por la Dra. (S/N) y, en consecuencia, confirmar la providencia de presidencia del trámite del 26 de setiembre de 2017, mandando desglosar y devolver a su presentante la documental de fs. 221/224.

2. Hacer lugar al reclamo ante el Cuerpo deducido por el Dr. (S/N) y, en consecuencia, revocar la providencia del 28 de setiembre de 2017 mandando a desglosar y devolver a su presentante la documental de fs. 195/217.

3. Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por la Dra. (S/N)en representación de la Comunidad Aborigen (S/N), respecto de la sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial del 28 de diciembre de 2015.

4. Imponer las costas por el orden causado y diferir la regulación de los honorarios profesionales.

5. Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dr. (S/N); Dr. (S/N); Dra. (S/N).

Ante mí: Dra.(S/N) – Secretaria Relatora.

Expediente N° CF-11696/2015

Órgano: **Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia.**

Libro de acuerdo: 1.

Número Sentencia: **67.**

Fecha: **22/8/2016.**

Competencia: **Recursiva.**

Voces Jurídicas: **COMUNIDADES ABORIGENESDERECHOS INDIVIDUALES DESALOJO.**

TEMAS: DESALOJO. COMUNIDADES ABORÍGENES. DERECHOS INDIVIDUALES. PROPIEDAD COMUNITARIA DE LA TIERRA. RECHAZO DE LA DEMANDA. POSEEDOR. OBLIGACIÓN DE RESTITUIR. TIERRAS FISCALES.

(Libro de Acuerdos Nº 1, Fº 221/226, Nº 67). En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, la Sala I - Civil y Comercial y de Familia - del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, integrada por los Dres. (S/N), (S/N) y (S/N), bajo la presidencia del nombrado en primer término, vieron el Expte. Nº CF-11.696/15, caratulado: "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en 14.068/2015 (Cámara de Apelaciones Civil y Comercial -Sala II- Vocalía 3) Desalojo: (S/N) en representación de la Comunidad Aborigen (S/N), Departamento de Cochinoca c/ (S/N); (S/N); (S/N); (S/N), (S/N); (S/N); (S/N)"

El Dr. (S/N) dijo:

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, en sentencia de fecha 20 de mayo del 2015 resolvió hacer lugar al recurso de apelación deducido y revocar la sentencia de desalojo dictada por el juez de primera instancia en fecha 11 de noviembre del 2014. En su mérito rechazó la demanda de desalojo, con costas a la vencida.

Para así resolver, Presidencia de trámite ponderó, que el Banco de la Nación Argentina, por Decreto Nº 926 del 16 de enero de 1952, adjudicó en usufructo vitalicio individual a don (S/N), abuelo de los demandados, la parcela ubicada en Angosto del campo denominado "Ugsara", departamento Cochinoca y que en el mismo documento, consta el titular designado como continuador de la adjudicación para el caso de su fallecimiento, don (S/N), lo que se encuentra inscripto en el Registro Inmobiliario de la Provincia de Jujuy.

Agregó que el Decreto Nacional Nº 926 del 16 de enero de 1952 aprobó el reglamento para la adjudicación de tierras expropiadas por Decreto 18.341/49 y en sus considerandos estableció que era menester hacer efectiva la asistencia crediticia al aborigen. Asimismo que entre los derechos que en el art. 4 se le reconocían a los usufructuarios se incluyó: posesión y goce pacífico de la tierra, designar para el caso de fallecimiento la persona a quien deberá adjudicarse la tierra a fin de continuar su explotación siempre que reúna las condiciones legales, inembargabilidad de los frutos del suelo, animales y útiles de labranza, por deudas contraídas con posterioridad al otorgamiento del título, salvo el derecho que corresponda al Banco.

Señaló el tribunal sentenciante que la reglamentación dispuso que el usufructo constituye una concesión administrativa de uso y goce de la tierra que el Estado acuerda dentro de este régimen especial de colonización por lo que, no son aplicables las disposiciones del derecho real de usufructo contenidas en el Código Civil.

Determinó que el abuelo materno de los demandados se encontraba incluido en el régimen por el cual la Nación propiciaba el reconocimiento de derechos a los pobladores aborígenes que ocupaban la tierra expropiada y quienes indebidamente fueron privados de su uso y fue el primer usufructuario, sucediéndolo su yerno, padre de los demandados. Tanto por vía materna como paterna los ascendientes de los apelantes, fueron ocupantes aborígenes de las tierras objeto del presente juicio, desde antes del 1 de agosto de 1949.

Sostuvo que mediante Escritura pública del 21/12/06 el Estado Provincial cedió gratuitamente a título comunitario las tierras que la Comunidad aborigen ocupaba, en cumplimiento del art. 75 inc. 17 de la Constitución de la Nación Argentina, en el marco del programa de Regularización y Adjudicación de Tierras a la Población Aborigen de Jujuy, por lo que la ocupación de las tierras en disputa en el presente juicio pasó a ser propiedad de la Comunidad Aborigen (S/N), quien en ejercicio de tal derecho, pretende desalojar a los demandados por considerarlos intrusos.

La Sala sentenciante refirió que las normas contenidas en la Ley 26.160 y Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por Ley 24.071 reconoce los derechos de las comunidades indígenas pero también protege los derechos de las personas que son integrantes de esas comunidades.

Que en observación de las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, el Poder judicial debe asegurar que se les reconozca ejercitar con plenitud sus derechos sin discriminación alguna que pueda fundarse en su origen o identidad.

Aclaró que tanto la actora como titular de un derecho comunitario, como la parte demandada, esgrimen derechos que no tienen origen ni causa en los derechos e instituciones del derecho civil. No se encuentra en discusión el derecho de dominio, ni la posesión ni la simple tenencia de las cosas.

Interpreta el ad quem que el art. 391 del C.P.C. adquiere una nueva dimensión en casos como el de autos, en tanto que la actora como los demandados no invocan derechos de dominio o posesión. Sin prejuzgar sobre el derecho o no de la posesión comunitaria que invocan los demandados, deja expedita la vía para que las partes promuevan la demanda a que se crean con derecho y ocurran eventualmente a los organismos pertinentes.

Ponderó que está acreditado que los demandados pertenecen a una comunidad indígena, pues son descendientes directos de los pobladores que habitaban el territorio nacional en los términos del art. 2 de la ley 23.302.

Agregó que la identidad es un derecho humano y personalísimo, su condición les pertenece por herencia de sus ancestros y por la vocación de mantenerla y continuar como miembros de la comunidad, con independencia de la inscripción en un padrón, en tanto la registración no los hace parte de un pueblo aborigen sino únicamente constata el hecho de la pertenencia a la comunidad. Ello de igual modo que las comunidades aborígenes son preexistentes a la personería jurídica que les pueda otorgar el organismo pertinente.

Por último desestimó la calidad de intrusos que la actora atribuyó a los demandados y revocó la sentencia de desalojo. Ello sin perjuicio que las partes hagan valer sus derechos en el marco de la propiedad comunitaria, respetando el derecho de autogobierno de la comunidad y las garantías y derechos a la igualdad

que gozan cada uno de los integrantes de los pueblos originarios y a la no discriminación por parte del Estado, las comunidades aborígenes y los individuos que la componen.

Por su parte la Dra. (S/N), al adherirse al voto de presidencia, formuló consideraciones a las que me remito aclarando simplemente que refirió que los demandados demostraron ser familia indígena del lugar, dijeron sentirse indígenas y pertenecientes a la comunidad que los demandó para excluirlos. Asimismo que el sentido de pertenencia e identidad no es un resorte exclusivo de las autoridades de la comunidad cuando sus miembros reconocen la pertenencia de los individuos al grupo y cuando ellos individualmente así se sienten.

Por último, determinó la improcedencia del desalojo no sólo porque los demandados demostraron "prima facie" la posesión de los predios sino porque mediante esta acción la Comunidad les está negando el derecho a pertenecer a la Comunidad.

En contra de este pronunciamiento, a fs. 14/31 de autos la Dra. (S/N) en su calidad de apoderada de los Sres. (S/N) y (S/N), quienes actúan en representación de la Comunidad Aborigen de (S/N) Departamento de Cochinoca, con personería jurídica otorgada por el Ministerio de Bienestar Social de la Provincia de Jujuy mediante resolución 001633-BS de fecha 17 de abril del 2001, deduce recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria.

Sostiene que el resolutorio recurrido vulnera preceptos constitucionales y principios establecidos en el Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, ratificada por Ley Nº 24.071, apartándose de disposiciones que no pueden ser desconocidas en el proceso sin lesionar el derecho de los mismos.

Agrega que la sentencia posee vicios de gravedad, consistentes en razonamientos arbitrarios y groseramente ilógicos, apartamiento palmario de las circunstancias de hecho que rodearon el proceso y de la normativa que rige la materia, y carencia absoluta de fundamentación.

Se agravia porque el sentenciante reconoce a los accionados la calidad de ocupantes aborígenes desde agosto de 1949, avanzando en el vicio procesal ultra petita, por cuanto genera una situación de inequidad entre las partes, violando derechos constitucionales y avanzando en vicios procesales.

Entiende que en la sentencia se desconoce la aplicación de los principios rectores de la propiedad comunitaria indígena pues la Comunidad Indígena de (S/N) es propietaria del inmueble objeto de la litis lo que debe traducirse en un ejercicio efectivo de la posesión.

Se agravia sosteniendo que el tribunal, al señalar que está acreditado que los demandados pertenecen a una comunidad indígena y son descendientes directos de los pobladores que habitaban el territorio nacional, realiza juicios de valor que exceden el objeto de la demanda, tornándose arbitraria y constituyendo un vicio procesal, esto es ultra petita, cuando es sabido por regla general que todo juez debe limitarse a decidir con base en lo pedido en la demanda, cuyo objeto es un desalojo por intrusión y no la pertenencia o no a una comunidad indígena.

Se agravia porque no se encuentra acreditada la calidad de pobladores del lugar, ni la ocupación ancestral de los demandados ya que de la prueba documental surge que los mismos nunca fueron pobladores del lugar, ni siquiera desde su nacimiento.

En definitiva se agravia por la meritación de la prueba al determinar la calidad de pobladores del lugar de los demandados cuando no lograron acreditar la posesión sobre el territorio de la comunidad aborigen.

Por último refiere que los ocupantes ilegítimos son meros intrusos que carecen de título alguno que justifique su permanencia en el inmueble, quienes se han introducido en la propiedad de manera ilegítima y clandestina. Asimismo que la Sala sentenciante se excede al resolver y declarar abiertamente la pertenencia de los demandados como familia indígena del lugar, desconociendo los procesos comunitarios y administrativos tendientes a reconocer formalmente dicha pertenencia.

Corrido el traslado del recurso, a fs. 48/53 de autos contesta el Dr. (S/N) en representación de los Sres. (S/N), (S/N), (S/N) y (S/N), solicitando su rechazo por los argumentos que expone y a los que me remito en mérito a la brevedad.

Integrado el Tribunal, a fs. 66/70 de autos emite dictamen el Sr. Fiscal General, propiciando la desestimación del recurso.

Examinados los antecedentes obrantes en la causa y el fallo atacado, me pronuncio por el rechazo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

Como lo dije en otras oportunidades el recurso de inconstitucionalidad es un remedio extraordinario y excepcional que excluye, en principio, el análisis de cuestiones de hecho y prueba porque los jueces son soberanos para meritar la prueba rendida ante ellos.

El recurrente se agravia por entender que existió una inadecuada e insuficiente apreciación de la prueba desconociendo los derechos de la propiedad comunitaria y su autogobierno.

En relación a los agravios que remiten a cuestiones de hecho y prueba, reiteradamente este Superior Tribunal, en consonancia con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sentado que resultan ajenas –como regla y por su naturaleza- al recurso extraordinario, cabe hacer excepción, cuando el a quo ha interpretado erróneamente prueba agregada a la causa y, ha prescindido sin dar razón alguna, de la oportunamente producida y que aparece conducente para el real esclarecimiento de los hechos invocados (L.A. Nº 46, Fº 188/190, Nº 71; CSJN Fallos, 287:463; 302:998; 303:434; 304:239; 320:2101; entre otros), conculcando claramente el derecho de defensa en juicio y la garantía al debido proceso legal, lo que no se advierte en autos.

Entrando al análisis del caso, diré que, la actora Comunidad Aborigen S/N al demandar, invocó su calidad de propietaria del inmueble en cuestión, legitimación activa que resulta suficientemente acreditada por los fundamentos esgrimidos en la sentencia. Asimismo invocó como causal de desalojo que los accionados revestían la calidad de intrusos.

Es de destacar que la presente causa tiene particularidades propias pues la actora es una comunidad aborigen mientras los accionados sostienen detentan el inmueble en su calidad de poseedores ancestrales. Más allá de tal discusión, de la prueba acumulada y debidamente ponderada por el tribunal ad quem resulta que no son "meros intrusos" habiendo logrado justificar que no existe una obligación de restituir a los fines de este proceso.

Cabe señalar que nuestra Constitución Nacional en su art. 75 inc. 17 indica entre las atribuciones del Congreso de la Nación "reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respecto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan."

Por otra parte en consonancia con el art. 16 de dicha Carta Magna y la doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la ley debe ser igual para los iguales en igualdad de circunstancias. Con lo cual el análisis e interpretación a realizarse al resolver la contienda debe ser teniendo en cuenta estas particularidades pues al reconocer el Estado la preexistencia de pueblos indígenas, con estatuto propios y diferenciados en razón de su etnia y cultura cabe considerar la propiedad comunitaria y la identidad de los pueblos originarios.

Tan es así que Gelli sostiene "El reconocimiento de la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas argentinos, con los caracteres de no enajenable, intransmisible, inembargable y no tributable modifica los principios propietarios consagrados en el Código Civil para la propiedad privada, a fin de favorecer el resguardo de la tierras como factor aglutinante de la comunidad… El reconocimiento del derecho a la propiedad comunitaria implica la preservación de una forma cultural al mismo tiempo que el aseguramiento de derechos patrimoniales diferentes y con un estatuto especial" (Cfr. María Angélica Gelli, Constitución de la Nación Argentina, Concordada y comentada, 3ª Edición, Ed. La Ley, Pág. 684/685).

Por otra parte, también el art. 18 del Código Civil y Comercial vigente a partir de agosto del 2015 establece los derechos de las comunidades indígenas reconociendo el derecho a usar y gozar de la propiedad que se les asigne, lo que para algunos parecería crear una nueva forma de derechos reales a favor de las comunidades indígenas pues no es una propiedad individual sino comunitaria (Cfr. Alberto Bueres, Código Civil y Comercial de la Nación, Analizado – Comparado y concordado, T. I, Ed. Hammurabi, Pág. 76).

Con este nuevo prisma se debe analizar la doctrina ya sentada y el art. 391 del C.P.C. que expresamente dispone "Aun cuando el demandado invocase la calidad de propietario o de poseedor legítimo no se detendrá el trámite del juicio. La sentencia, sin prejuzgar sobre el dominio ni la posesión, hará lugar o no al desalojo dejando expedita la vía para que las partes promuevan la demanda a que se crean con derecho".

Por su parte, la doctrina de este Cuerpo ha sentado al respecto: "la pretensión de desalojo solo implica la invocación, por parte del actor, de un derecho personal a exigir la restitución del bien, de manera que excede el ámbito del proceso analizado toda controversia o decisión relativa al derecho de propiedad o de posesión que puedan arrogarse las partes… La sentencia mediante la cual este culmina… no implica prejuzgamiento acerca de la posesión o del dominio, de manera que tanto el actor cuya demanda es rechazada cuanto el demandado condenado a desalojar puedan posteriormente lograr a través de la interposición de una pretensión posesoria o reivindicatoria el pronunciamiento de un fallo que disponga la restitución del bien" (L.A. 38 Fº 1170 Nº 491; L.A. Nº 38, Fº 1179/1181, Nº 491; L.A. Nº 39, Fº 692/695, Nº 375; L.A. Nº 46, Fº 724/726, Nº 289; L.A. Nº 52, Fº 248/251, Nº 88, entre muchos otros).

También así se sostuvo en relación a la "obligación de restituir" que debe existir en cabeza de los accionados, que si el demandado invoca y "prima facie" prueba su calidad de poseedor, la demanda, no puede prosperar (Cfr. Lino Palacio, T. VII, Pág. 91; Expte. 7570/04).

En igual sentido "Cabe destacar que la acción de desalojo no procede contra el inmueble de quien se dice poseedor, cualquiera sea el vicio de su posesión: el afectado debe recurrir a las acciones reales o personales. No procede discutir dentro de la órbita del procedimiento sumario el mejor derecho de poseer ni la posesión misma (Cam. Civ. 1ª, La Plata, La Ley, V. 19, P. 766, entre otros Cfr. Augusto Morello, Juicios Sumarios, T. II, Ed. Platense, Pág. 127).

En consideración a ello, resulta que con la prueba acompañada y valorada por el tribunal ad quem se logró acreditar que los accionados son descendientes directos de los pobladores originarios del lugar y "prima facie" acreditaron la posesión en el inmueble, independientemente de su vocación de pertenencia a la comunidad, para lo que quedan expeditas las vías pertinentes.

Ello no implica desconocer los derechos indígenas como comunidad, ni la posesión y propiedad de las tierras que previamente ocuparon pues también se debe respeto a los indígenas como personas individuales, con identidad cultural, derechos que pueden reclamar por sí y para sí mismos (Cfr. Gelli, ob.cit., Pág. 686).

Esta es la solución que mejor concilia los intereses en juego, atento el marco del proceso de desalojo, sin que las consideraciones formuladas impliquen declaraciones de derechos que deben requerirse y probarse en otros procesos. Cabe recordar, que la sentencia de desalojo no prejuzga sobre el dominio ni sobre la posesión, por lo que la actora tiene a salvo las acciones pertinentes con miras a demostrar eventualmente el dominio o derecho posesorio, a que se cree con derecho (artículo 391 Código Procesal Civil).

De lo expuesto considero que la sentencia recurrida realizó una valoración razonable y pormenorizada de la prueba incorporada al proceso por lo que no puede ser descalificada como acto jurisdiccional válido.

Por tales motivos, opino que corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido.

Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la parte vencida (art. 102 del Código Procesal Civil). Asimismo corresponde regular los honorarios profesionales de los Dres. Carolina Susana Pérez y Leo Javier Navarro por su actuación en la presente instancia extraordinaria, conforme Acordada 96/16 de este Superior Tribunal de Justicia, en las sumas de $2.800 y $3.500 respectivamente, con más el impuesto al valor agregado en caso de corresponder.

Las Dras. (S/N) y de (S/N) adhieren al voto del Dr. Jenefes.

Por lo expuesto, la Sala I –Civil y Comercial y de Familia- del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy,

Resuelve:

1) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por la Dra. (S/N) en representación de los Sres. (S/N) y (S/N) en representación de la Comunidad Aborigen (S/N).

2) Imponer las costas de esta instancia recursiva al recurrente vencido.

3) Regular los honorarios profesionales de los Dres. (S/N) y (S/N) por su actuación en la presente instancia extraordinaria, en las sumas de $2.800 y $3.500 respectivamente, con más el impuesto al valor agregado en caso de corresponder.

4) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dr. (S/N), (S/N); Dra. (S/N)

Ante mí: Dra. (S/N) - Secretaria Relatora.

Expediente N° CF-16607/2020

Órgano: **Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia.**

Libro de acuerdo: **6.**

Número Sentencia: **71**.

Fecha: **19/3/2021.**

Competencia: **Recursiva.**

Voces Jurídicas: **COMUNIDADES ABORIGENESPRESCRIPCION ADQUISITIVATEORIA DE LOS ACTOS PROPIOS.**

TEMAS: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. RECHAZO DE LA DEMANDA. TEORÍA DE LOS ACTOS PROPIOS. COMUNIDADES ABORÍGENES. ANIMUS DOMINI.

Libro de Acuerdos Nº 6, Fº 257/262, Nº 71. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil veintiuno, reunidos los Señores Jueces de la Sala I, Civil y Comercial y de Familia, del Superior Tribunal de Justicia, doctores (S/N), (S/N) y (S/N), bajo la presidencia de la nombrada en primer término, vieron el Expte. Nº CF-16.607/20 "Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-011.167/13 (Cámara en lo Civil y Comercial -Sala II- Vocalía 5) Prescripción Adquisitiva de Dominio: (S/N) c/ Estado Provincial"; del cual,

La Dra. (S/N), dijo:

La Sala Segunda de la Cámara en lo Civil y Comercial, mediante sentencia dictada el 22/05/20, resolvió rechazar la demanda por prescripción adquisitiva promovida por (S/N), (S/N), (S/N), (S/N), (S/N), (S/N) e (S/N), en su calidad de herederos de (S/N), en contra del Estado Provincial.

Impuso las costas a la actora y difirió la regulación de los honorarios profesionales.

Para decidir de tal manera, estimó aplicable el Código Civil anterior y demás disposiciones vigentes por entonces, en virtud de lo dispuesto por el art. 7º del CCyCN y porque la posesión veinteañal invocada transcurrió con anterioridad a su entrada en vigencia.

Precisó que con la sanción de la Ley Nº 14.159 y su posterior reforma por decreto Ley Nº 5.756/58, el proceso de prescripción es contencioso, que su sentencia declarativa hace cosa juzgada material respectó de su anterior propietario "erga omnes" cuando en el juicio se cita y emplaza a todo posible interesado en el inmueble a prescribir.

Adujo que se deben considerar dos cuestiones, la existencia de un actuar inerte por parte del titular registral y el positivo accionar del poseedor junto al hecho que por encima de los intereses particulares de uno y otro, se encuentra el interés superior de la comunidad.

Manifestó que es carga procesal de la actora acreditar la posesión a título de dueño "animus domini" del inmueble durante veinte y más años en forma ostensible y continua y demostrar los requisitos exigidos por el Decreto Nº 5.765/58 y la Ley Nº 5.486 (modificatoria del C.P.C.).

Destacó que de las pruebas producidas en autos, los oficios dirigidos a la Municipalidad de Humahuaca, EJESA, Gasnor y Agua de los Andes, informan la falta de registros en sus bases de datos, y que el informe socioambiental da cuenta de la falta de colindantes, encontrándose el inmueble en una zona desértica.

Resaltó que al analizar las pruebas adjuntadas en los Exptes. C-26.807/17; Nº 0248-MÑ-79-año2005 y Nº 0248-MÑ-71-año 2008, la parcela a prescribir se encuentra dentro del territorio de la Comunidad Aborigen (S/N), conforme el Programa de Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena, y que la misma había adquirido la Personería Jurídica el 26/06/2008 (fs. 11 del Expte. Nº 0248-MÑ-71-año 2008).

Puntualizó específicamente que a fs. 68/69 del Expte. 0248-MÑ-71-año 2008 obra el "Formulario de Opción por TIERRA COMUNITARIA" suscripto por (S/N) como Jefa de Familia y que en el censo comunitario figuran como integrantes del grupo, algunos de sus hijos: (S/N); (S/N) e (S/N), lo que denota una clara contradicción siendo aplicable la teoría de los actos propios.

Añadió por último que de la declaración testimonial de (S/N) surge que (S/N) y sus hijos siempre vivieron allí, la actora pertenecía a la Comunidad Aborigen, y que pagaba un canon por derecho territorial; a la vez agregó que, del recorrido a la Inspección Ocular, el Tribunal se encontró con obreros viales que manifestaron estar haciendo el camino para la Comunidad de (S/N), y que al realizar la inspección apreciaron que nadie detenta la posesión efectiva.

Juzgó que, conforme lo señalado, los actores no detentan actos posesorios, ya que Rosa Salas fue integrante de la Comunidad Aborigen (S/N) y solicitó la tierra en carácter comunitario (fs. 69 Nº 0248-MÑ-79-año2005).

Concluyó que, merituando la prueba producida sobre las reglas de la sana crítica, la demanda no puede prosperar.

Disconforme con este decisorio, a fs. 333, los Sres. (S/N) y (S/N), con el patrocinio letrado del Dr. (S/N), interponen recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria.

Se agravian expresando que violenta las garantías constitucionales del debido proceso e igualdad ante la ley, en tanto se sustenta en fundamentación aparente y en una aplicación errónea del encuadre legal.

Manifiestan que se eludió cualquier tratamiento a la rigurosidad legal con la que actúa la parte actora y que en su contra se tomó documental peregrina y elíptica arrimada por la contraria.

Formula que la aplicación de la teoría de los actos propios no puede haberse traído para fundar el rechazo de la acción, siendo automatizada y laxa, afectándose el derecho constitucional de libertad y de propiedad, haciéndose valer en una renuncia tácita o más bien "presumida renuncia" a derechos que habría tenido lugar a través de formularios, ajenos a la cuestión previa de tenencia antigua, con justo título y ánimo de dueño.

Alega que el haber adherido la Sra. (S/N) a su condición de miembro de la Comunidad (S/N), firmando para ello un formulario de membresía o afiliación, no puede considerarse como una exteorización de voluntad dirigida a modificar o extinguir derechos de propiedad.

Refiere que la Comunidad (S/N) inició el procedimiento de su reconocimiento con el número de personería jurídica 181, pero para septiembre de 2.005 ya se estaba dividiendo en dos entidades distintas (conforme fs. 02 del Expte. Nª 0248-MÑ-79-de la Sec. de Derechos Humanos), formándose otro grupo de miembros de esa comunidad.

Se agravia expresando que "por falta un análisis exhaustivo de la figura puesta en cabeza de la peticionante inicial y también por la ausencia de sus requisitos por ser extrajudicial; es claro entonces que la sentencia en crisis, está avalando una injusticia y … se estaría avalando el facilismo, que se esconde detrás de una automatización arbitraria".

Manifiesta que el hecho de que los magistrados no llegaran a destino, impedidos en avanzar por el terreno, sin encontrar la cantera de lajas, ni el cartel indicativo o, en su caso, la indecisión o la falta de voluntad del Tribunal en adentrarse a los cerros, no implica que los actores no posean el terreno en cuestión.

Enuncian que simplemente la ubicación de la fracción a prescribir se encuentra a más de cinco kilómetros del pueblo de Coraya.

Refiere a cuestiones fácticas y de prueba, como a las manifestaciones de testigos, Inspección de visu, etc.

Expone mayores argumentaciones jurídicas a las que remito en honor a la brevedad; cita jurisprudencia; formula reserva del caso federal y peticiona.

Corrido traslado de ley a fs. 25, sin que el Estado Provincial contestase y cumplidos los demás trámites procesales, la Sra. Fiscal General Adjunto emitió dictamen, aconsejando rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido (fs. 37/40) por lo que el mismo se encuentra en estado de resolver.

Adelantando opinión y compartiendo la solución brindada por el Ministerio Público Fiscal, considero que el remedio tentado debe ser rechazado.

El recurso de inconstitucionalidad debe desestimarse ya que los agravios expresados por el recurrente no presentan la suficiente entidad como para refutar los fundamentos vertidos por el Tribunal a-quo en relación a la cuestión a revisión. Se encausan en una mera discrepancia con lo decidido.

Las críticas expuestas resultan insuficientes para habilitar esta vía de excepción, según reiterada doctrina de este Superior Tribunal de Justicia. Tal excepcionalidad impone una aplicación del recurso en extremo restrictiva; así es que se sostuvo: “el vicio de arbitrariedad -que alcanza para descalificar el fallo- debe ser grave y tiene que probarse, y no cabe respecto de sentencias meramente erróneas o que contengan una equivocación cualquiera, si no padecen de omisiones y desaciertos de gravedad extrema, que la descalifiquen como pronunciamiento judicial” (L.A. Nº 38, Fº 1390/1393 Nº 534).

No obstante ello, lo cual bastaría para el rechazo del remedio tentado, advierto que el fallo recurrido -a mi entender- es el resultado de una correcta interpretación de las constancias de la causa y ajustado a derecho.

Es que, en primer lugar y como el a-quo lo sostuvo, de los exptes. Nº C-26.807/17; Nº 0248-MÑ-79-año2005 y Nº 0248-MÑ-71-año 2008, surge indubitablemente que Rosa Salas, junto a sus hijos Griselda Puca, Celia Puca e Hilda Puca integran la Comunidad Aborigen de (S/N); además, la primera suscribió un formulario de opción por tierra comunitaria.

En segundo término, la heredad a prescribir se encuentra comprendida dentro de los límites referidos a la delimitación y mensura otorgado por el Programa de Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena (PRIPCI).

Siendo así, la recurrente no puede alegar un desconocimiento fáctico de sus pretensiones, la que comenzó con adhesión o incorporación a un programa de adjudicación de tierras dentro de una comunidad originaria y que se desarrolla en sede administrativa, para luego someterse concomitantemente a la jurisdicción ordinaria de este Poder Judicial con el fin de pretender un reconocimiento de un derecho individual (no comunitario) sobre las mismas tierras.

Consecuentemente la acción de prescripción pretendida respecto del inmueble Lote 135, Circunscripción 1, Sección 3, Padrón J-762, Matricula J-3252, ubicado en Finca Mocote y Zapana, Departamento de Humahuaca, Provincia de Jujuy, recae sobre un fundo integrativo de las tierras de la Comunidad; por lo que, tampoco puede manifestar que las mismas se encuentran a más de cinco kilómetros del pueblo de Coraya, toda vez que ello resulta irrelevante en el caso.

De tal manera, no puede ahora la actora desconocer su propio actuar, por lo que resulta inadmisible que un litigante pretenda fundamentar su accionar aportando hechos o razones de derecho que contravengan sus propios actos. Esta prohibición importa una limitación del derecho, que deriva del principio de buena fe y que, como corolario sancionador, prevé el rechazo de la pretensión.

Éste es el criterio sostenido por doctrina y jurisprudencia. Puede citarse al efecto el fallo dictado por la C. NAC. CIV., sala J, 13/09/2011- P.,A. v. S.,A.C.: ”Las partes no pueden contradecir en juicio sus propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces, son inadmisibles las pretensiones que ponen al pretensor en contradicción con sus propios comportamientos anteriores, jurídicamente relevantes. La doctrina de los propios actos importa una barrera opuesta a la pretensión

judicial, por la cual se impide el obrar incoherente que lesiona la confianza suscitada en la otra parte de la relación e impone a los sujetos un comportamiento probo en las relaciones jurídicas, pues no es posible permitir que se asuman pautas que susciten expectativas y luego se contradigan al efectuar un reclamo judicial (conf. Esta sala, in re "Repetto José M.D. v. Club Náutica Acoja", del 30/04/1996, entre otros). La jurisprudencia ha señalado que "nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, y toda pretensión formulada dentro de una situación litigiosa, por una persona que anteriormente ha realizado una conducta incompatible con esta pretensión, debe ser desestimada" (Corte Sup.,17/03/1998, LL1998-E-425;íd.25/11/1997,DJ 1998-2-232; esta sala, 09/2/2000, LL2000-E-716; C.Nac.Civ., sala B 21/09/1999, ED 185-845).".

La doctrina de los actos propios prohíbe así la sorpresa, la volubilidad en el actuar y la emboscada, preservando el ámbito del litigio judicial, pero también el de las relaciones contractuales de los cambios bruscos de conducta, sean estos culposos o malintencionados.

Se ha resuelto que la doctrina de los propios actos importa una barrera opuesta a la pretensión judicial, por la cual se impide el obrar incoherente que lesiona la confianza suscitada en la otra parte de la relación e impone a los sujetos un comportamiento probo en las relaciones jurídicas, pues no es posible permitir que se asuman pautas que suscitan expectativas y luego se autocontradigan al efectuar un reclamo judicial.[1]

Ahora conviene tener presente que siendo la adquisición de dominio por usucapión un medio excepcional, se exige que la prueba sea directa, adecuada, suficiente, clara, indubitable y plena con relación a la individualización del inmueble, a los actos posesorios invocados y al número de años que se ha poseído a título de dueño. Y todo ello debe estar recíprocamente relacionado e integrado con las demás pruebas para evitar quedarnos, solamente con la inspección de visu y/o testimonial, lo que lleva a desestimar la acción. Por lo tanto la prueba debe manejarse con un criterio estricto y riguroso (cfr. Libro de Acuerdos Nº 58, Fº 3902/3906, Nº 1097).

Además, "Dado el carácter excepcional que reviste la adquisición del dominio por el medio previsto en el art. 2.524, inc. 7° del Código Civil (art. 4.015 del mismo) la realización de los actos comprendidos en el art. 2.353 y el constante ejercicio de esa posesión deben efectuarse de manera insospechable, clara y convincente" (Fallos: 316:2297).

Con el hecho de censarse como integrante de una comunidad aborigen y con ello peticionar la adjudicación de las tierras en propiedad comunitaria, advierto que de algún modo la actora reconoció que el "animus domini" sobre ellas lo ejerce la Comunidad (S/N), y no ella de manera individual.

Tampoco existen informes de las diferentes reparticiones que sostuvieran los dichos enunciados en la demanda inicial, ni se acreditaronactos posesorios durante el período que se dice poseer; sólo se desprende que hubo un cartel indicativo y del Informe Socio-Ambiental que no existe colindantes, además que el inmueble se encuentra ubicado en una zona desértica.

Si en el sub-examen estuvieren acreditados actos posesorios durante la extensión de plazo para usucapir, pero en el transcurso de dicho momento se reconoce indubitablemente que la fracción de terreno se encuentra comprendida en los dominios de otro, tal hecho amerita desvirtuar los requisitos exigibles para otorgar la titularidad de un inmueble a quien lo peticiona desde que habrá puesto en evidencia que no lo posee a título de dueño en forma exclusiva y excluyente.

Es más, tanto es que no posee en forma exclusiva y excluyente que la propia Comunidad Aborigen (S/N) lo niega; incluso, manifiesta que la demanda afecta a sus derechos de posesión y propiedad comunitaria del art. 75, inc. 17, de la Constitución Nacional (ver fs. 77/79 vta. del Expte. Nº C-26.807/14 "Incidente de Hecho Nuevo…", agregado por cuerda).

Por todo ello, y siendo -como lo expresara Mariani de Vidal- que el fundamento de la prescripción adquisitiva, al igual que el de la liberatoria, es consolidar situaciones fácticas, como medio de favorecer la seguridad jurídica, liquidando situaciones inestables, dando certeza a los derechos y poniendo en claro la composición del patrimonio, con lo cual se propende a la paz y el orden social, estimo que el fallo puesto en crisis no merece reproche alguno de arbitrariedad.

En consecuencia y atento a no haberse dado cumplimiento acabado con los extremos necesarios para usucapir, no probándose la posesión real y efectiva por el tiempo necesario, y de encontrarse efectivamente acreditado el reconocimiento en otra persona (jurídica) la intención de dominio, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por los Sres. (S/N) y (S/N), con el patrocinio letrado del Dr. (S/N).

Las costas se imponen a la parte recurrente vencida (cfr. principio objetivo de la derrota; art. 102 del C.P.C.) y se difiere la regulación de honorarios profesionales hasta tanto sean determinados en la instancia anterior.

Finalmente, no puedo eludir que el Dr. (S/N), en el escrito recursivo, no mantuvo un adecuado estilo forense en su redacción, en especial, respecto de las aseveraciones agraviantes en contra de la investidura de los magistrados (por ej. los dichos de fs. 14 vta. in fine y 15 de autos), excediéndose en distintas consideraciones y valoraciones carentes de fundamento jurídico e, incluso, absolutamente extrañas al proceso principal y a la cuestión traída en recurso, quebrantando así el orden, respeto, decoro y moralidad que debe prevalecer en todas las actividades jurisdiccionales (art. 15; L.O.P.J.), por lo que cabe formularle un llamado de atención, haciéndole saber que, para el futuro, deberá mantener una adecuada mesura y dignidad en el estilo, y que, de persistir en tal conducta, se le aplicará sanciones más severas (arts. 17 y 18 del íbidem).

Es que "… Si, precisamente, son los abogados y procuradores, quienes incurren en actitudes procesales disvaliosas, deben ser reprimidos con el debido rigor, pues de dichos profesionales no es dable esperar sino una estricta observancia de los deberes que les incumben como auxiliares de la Justicia. Ello así pues 'el ejercicio profesional de la abogacía constituye un servicio necesario e indispensable para la realización en plenitud de la justicia. Nuestro ordenamiento legal así lo ha entendido y reconocido expresamente al exigir para los abogados trato similar al de los magistrados' (CSJN, 4/10/94, del voto en disidencia de los Dres. Fayt, Nazareno, Moliné O'Connor y Boggiano). Pero por esa misma razón, la condición del letrado, antes que relevarlo, lo constriñe aún más a acatar los principios que rigen el litigio judicial…" (cfr. L.A. Nº 49, Fº 233/246, Nº 92).

Y cabe destacar que es irrelevante que haya actuado en el carácter de "letrado patrocinante" de la parte recurrente, ya que, al momento de suscribir aquél escrito, tenía a su cargo la defensa de los intereses de su cliente y en función de ello le brindaba su asistencia técnica, de modo que las expresiones allí contenidas pueden reputarse vertidas o, cuanto menos, supervisadas y conformadas por él.

Los Dres. (S/N) y (S/N), adhieren al voto que antecede.

Por ello, la Sala I, Civil y Comercial y de Familia, del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy,

Resuelve:

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por (S/N) y (S/N), con el patrocinio letrado del Dr. (S/N).

2º) Imponer las costas a la recurrente vencida.

3º) Diferir la regulación de honorarios profesionales.

4º) Llamar la atención al Dr. (S/N) en los términos detallados en los considerandos.

5º) Registrar, dejar copia en autos y notificar por cédula.

Nota al pie:

[1] López Mesa, Marcelo J.; "La doctrina de los actos propios: esencia y requisitos de aplicación"; Ed. Vniversitas Nº 119; 2009, Colombia; pág. 6.

Firmado: Dra. (S/N); Dr. (S/N) ; Dr. (S/N).

Ante mí: Dr. (S/N) – Secretario Relator.

MERB

Expediente N° PE-12794/2016

Órgano: **Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia.**

Libro de acuerdo: **2.**

Número Sentencia: **74.**

Fecha: **29/8/2017.**

Competencia:

Voces Jurídicas: **COMUNIDADES ABORIGENESDESALOJOMEDIDAS CAUTELARES.**

TEMAS: USURPACIÓN. MEDIDAS CAUTELARES. DESALOJO. SUSPENCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE. COMUNIDADES ABORÍGENES. VOTO EN MAYORÍA.

Libro de Acuerdos Nº: 2, Fº 311/320, Nº: 74). En la ciudad de San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los veintinueve días del mes de agosto de dos mil diecisiete, los señores jueces integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, doctores (S/N), (S/N) y (S/N) -bajo la presidencia del nombrado en primer término- vieron el Expte. Nº PE-12.794/16, caratulado "Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C/184/15 (Cámara de Apelaciones y Control) Recurso de apelación interpuesto por el Dr. (S/N) en el Expte. Nº P-114.830/15 (JC Nº 4 - FIP Nº 8) caratulado: F, S.; A., M. p.s.a. de usurpación. Palpalá".

El doctor (S/N) dijo:

Estas actuaciones se inician con la denuncia [1] efectuada por J. J. C., encargado de (S/N), de propiedad de la Compañía (S/N), contra M. E. A. y S. J. F. por la ocupación [2], presuntamente indebida, de una porción de terreno que excede los límites del que les fuera otorgado mediante un contrato de comodato celebrado el 02/08/2010 [3].

El Agente Fiscal, previa intimación, imputó a los nombrados la supuesta comisión del delito de usurpación [4] (artículo 181 inciso 2º del Código Penal) y requirió el desalojo [5] de la superficie del lote en lo que supera la del comodato; pedido que fue despachado por el Juez de Control [6] y, posteriormente, ejecutado [7].

Más adelante, el Agente Fiscal ante la presentación de la Comunidad (S/N) del pueblo Ocloyas, solicitó que se deje sin efecto el desalojo [8] con fundamento en la Ley Nº 26.160 [9]. Y, a su turno -casi 2 meses después-, el Juez de Control [10] suspendió la ejecución de su anterior pronunciamiento.

Luego, la Cámara de Apelaciones y Control (fojas 259/264 y 270), al admitir la apelación deducida por la Compañía Minera (S/N), revocó la "suspensión del lanzamiento" y, en consecuencia, confirmó el desalojo. Para así resolver -en síntesis- consideró inaplicable, al caso, la Ley Nº 26.160 porque los imputados no habían acreditado la pertenencia a la comunidad aborigen (S/N); tampoco el animus domini. Además señaló que no podían suspenderse los efectos de una medida cautelar -lanzamiento- que había sido acabadamente cumplida.

Disconforme con ese fallo, la defensora técnica de los encartados interpuso el recurso de inconstitucionalidad en examen (fojas 14/26). Sostiene que la orden de lanzamiento es nula porque no existe coincidencia en el objeto del desalojo: entre lo que pidió el Agente Fiscal ("excedente" del terreno dado en comodato) y aquél sobre el que se emitió la orden judicial (predio entregado en comodato: 3.564 m²).

De otro ángulo, señala que los derechos de la Comunidad Aborigen (S/N) sobre las tierras en cuestión se encuentran en discusión en la acción de amparo que tramita ante la Cámara Civil y Comercial [11] por lo que "debe aplicarse al caso de marras la prejudicialidad civil" (sic, fojas 17 vuelta, primer párrafo del apartado 1). También afirma que los imputados son miembros censados de la referida comunidad y que ésta cuenta con personería jurídica otorgada por la Secretaría de Pueblos Indígenas del Gobierno de Jujuy,

Resolución SPI 02/2016, por lo que -concluye- mal podía la cámara aseverar que no encuadraba en las previsiones de la Ley Nº 26.160.

Niega que sus defendidos hubiesen usurpado el predio porque al ser miembros de la Comunidad (S/N) se encuentran ocupando legítimamente el territorio en cuestión según relevamientos realizados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable dependiente del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Jujuy.

Corrido el traslado pertinente, se presentó a contestarlo la Compañía (S/N), querellante particular [12], por intermedio de su letrado (S/N), a cuyos términos corresponde remitir por razones de brevedad (fojas 38/50).

Integrada la Sala Penal del Superior Tribunal, los autos fueron enviados al Ministerio Público de la Acusación, quien se expidió en sentido favorable a la pretensión de los recurrentes (fojas 65/70).

I) Ab initio, conviene precisar que la cuestión a dilucidar consiste en determinar si existieron elementos que permitan reintegrar el inmueble al denunciante en el marco de un, inconcluso, proceso penal por usurpación. Se trata, simplemente, de analizar si las piezas de convicción existentes hasta el momento son suficientes para confirmar la medida cautelar despachada siempre con miras a evitar que el presunto delito siga produciendo sus efectos dañosos (Fallos 319:2325) y conforme a los derechos que el ordenamiento jurídico le reconoce a la víctima (artículos 340.6 y 159.7 del Código Procesal Penal).

Además, es forzoso señalar que la solución que aquí se adopte no implica juzgar la responsabilidad penal de los imputados, aspecto que se decidirá en la etapa oportuna del juicio penal y tampoco los derechos que eventualmente pudieran corresponderle a la comunidad sobre las tierras involucradas, extremo que se dilucidará en sede civil una vez que se promueva la acción correspondiente. Por lo que la prejudicialidad civil que alega la defensa es irrelevante para impedir la restitución realizada -provisoria si se quiere- a quien aparece como titular registral.

A fin de poner las cosas en su justo lugar, se impone una aclaración: los imputados, en su escrito recursivo, afirman que la acción de amparo que tramita por expediente C-056.529/15 tiene por objeto el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena. Sin embargo, tal aserción es inexacta ya que la referida causa tiene una pretensión diferente, esto es: que se hagan efectivos los derechos de participación y consulta por los integrantes de la comunidad con relación a los planes de ordenamiento predial y de manejo forestal sustentable solicitados por la Compañía Minera (S/N) y otros [13].

II) Así las cosas, cuadra ingresar al análisis de la nulidad articulada. Pues bien, dicho planteo debe ser desestimado ya que si bien es cierto que, en la resolución del juez de control que ordenó el desalojo, se hizo referencia a la porción de terreno objeto del contrato de comodato (3.564 m²), no lo es menos que el lanzamiento se ejecutó exclusivamente sobre el excedente, tal como fue requerido por el Agente Fiscal, de acuerdo al croquis de fojas 19 y a la intimación de fojas 22 (del principal).

Entonces, no obstante, el error material que contiene el fallo, es dable sostener que el acto no ocasionó perjuicio alguno a los encartados, a tal punto que ni siquiera fue cuestionado en las primeras presentaciones de la defensa (fojas 56, 58, 121/125, ídem). Máxime cuando la propia empresa (S/N).- reconoció expresamente que el contrato de comodato mantiene su plena vigencia (ver fojas 152 ante último párrafo, ibídem; fojas 44, segundo y tercer párrafo y fojas 45 y vuelta del presente). Es decir, aquella medida no afectó, en absoluto, esa parte del terreno; porción que, conviene precisar, es utilizada por los imputados para pastoreo de ganado (extremo reconocido a fojas 16, segundo párrafo del recurso).

III) Ahora bien, la restitución provisional del uso y goce de la fracción en litigio al denunciante aparece ajustada a derecho a poco que se tenga en cuenta que, según surge de las constancias de la causa, los elementos de juicio colectados hasta el momento conducen, razonablemente, a demostrar la verosimilitud del derecho de la compañía minera.

A saber: a) la Compañía Minera (S/N)., es la titular registral y poseedora del terreno en cuestión; circunstancia que justifica un interés actual, independientemente de lo que se decida, eventualmente, sobre la propiedad comunitaria en la sede judicial correspondiente; b) el contrato de comodato celebrado entre la

razón social a favor de los aquí encartados tiene por objeto, exclusivamente, una superficie de 3.564 m² y c) el efectivo desapoderamiento realizado por S. J. F. y M. E. A. en el terreno que supera aquella superficie.

IV) Sin perjuicio de lo expuesto y dado que los encartados alegan, en apoyo de su pretensión, las disposiciones de la Ley Nº 26.160 -sancionada en noviembre 1º de 2006, promulgada en noviembre 23 y publicada el 29 del mismo mes y año-, es preciso efectuar las siguientes aclaraciones.

En la aludida norma el Congreso declaró, por el término de 4 años, la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que "tradicionalmente ocupan" las comunidades indígenas originarias del país y ordenó la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de aquellas tierras, bajo ciertos requisitos: las comunidades indígenas deben contar con personería jurídica inscripta en el registro nacional o provincial competente o aquellas preexistentes y la posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada (artículos 1º y 2º). Aquel plazo fue prorrogado hasta el 23 de noviembre de 2017 mediante Ley Nº 26.894.

Si bien se mira, el precepto está previsto para supuestos de hecho distintos a los aquí ventilados; esto es, para aquellos casos en que las comunidades indígenas ostenten, al tiempo de la sanción, la posesión tradicional de las tierras con el deliberado propósito de que el INAI pueda completar el relevamiento de las tierras y las comunidades que las ocupan y dar, así, cumplimiento a la manda constitucional (artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional).

Más aún, cabe sostener que, la ley no ampara a aquellas personas que tratan de obtener la propiedad o la posesión por vías de hecho; tal como se desprende del debate parlamentario: "En la legislación argentina existen los remedios y las vías apropiadas para esto; no es esta norma la que permite accionar en ese camino inadecuado, indebido e ilegítimo" (expresiones del diputado Carlos Daniel Snopek). Con mayor elocuencia, lo señaló la senadora Sonia Margarita Escudero: "Con eso estamos dando un mensaje claro a los jueces de que ésta no es una ley para justificar usurpaciones de campos".

Ergo, la Ley Nº 26.160 es inaplicable con miras a suspender el desalojo de los imputados respecto del sobrante del terreno dado en comodato, como lo pretende la defensa.

En consonancia con lo expresado y como pauta de interpretación, conviene recordar la categórica redacción del artículo 2239 del Código Civil y Comercial: "Un título válido no da la posesión o tenencia misma, sino un derecho a requerir el poder sobre la cosa. El que no tiene sino un derecho a la posesión o la tenencia no puede tomarla; debe demandarla por las vías legales" (cursiva añadida). En suma, es claro que la protección posesoria se confía a los medios judiciales y no a la propia autoridad del poseedor. "El ordenamiento jurídico repudia las vías de hecho, tanto para el mantenimiento del estado de hecho actual como para su restablecimiento" [14].

Admitir un temperamento opuesto llevaría al absurdo de sostener que aquél que actúa por mano propia, puede ampararse en la ley; conducta que -como se dijo- está terminantemente prohibida por el Derecho.

Por lo expuesto corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por la doctora (S/N), defensora técnica de S. J. F. y M. E. A., con costas (artículo 102, primera parte, del Código Procesal Civil); regular los honorarios profesionales de la letrada mencionada en la suma de pesos dos mil ochocientos ($2.800) y los del doctor Arturo Pfister Puch en la cantidad de pesos tres mil quinientos ($3.500), en base a la doctrina de los honorarios mínimos y Acordada Nº 96/16. A esos montos se les adicionará el impuesto al valor agregado si correspondiere.

La doctora (S/N) dijo:

I.- Comparto los fundamentos y conclusiones expuestos en el voto del Sr. Presidente de Trámite, por cuanto las razones fácticas y jurídicas precisadas en el mismo, representan la solución justa para la cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal, sin perjuicio de lo cual, me permito efectuar las siguientes consideraciones.

II.- Ab initio conviene señalar, que la materia en examen se circunscribe -exclusivamente- al acotado margen de revisión de la medida provisoria de restitución del inmueble al denunciante, dispuesta y ejecutada en el proceso seguido contra S. J. F. y M. E. A. imputados por la presunta comisión del delito de Usurpación (Art. 181 del C.Penal), aún cuando no puede perderse de vista que la causa se encuentra en plena Investigación Penal Preparatoria.

2.1.- En ese contexto, el Art. 340, inc. 6) del C.P.Penal, dispone expresamente que uno de los fines de aquella etapa es –justamente- "Impedir que el delito cometido produzca consecuencias ulteriores".

Entonces bien, si como lo indica la norma citada, debe procurarse que cesen las consecuencias o los efectos del supuesto ilícito, en el sub examine (delito de usurpación por despojo), el único modo para cumplir con aquel objeto, era disponiendo lo necesario para que la posesión del inmueble fuese restituida a quien era considerado damnificado directo del injusto, ya que de lo contrario, la víctima seguiría sufriendo las consecuencias de aquél, que es –precisamente- lo que se debe evitar.

Es que, "Es obligación del juez que interviene en la investigación de un delito cuyos efectos permanecen en el tiempo hacer cesar y/o evitar que se incrementen aquellos efectos provocados por el injusto, cuando el ilícito se encuentra en principio acreditado" (Hornos, Roberto E. El reintegro en el proceso penal de inmuebles usurpados. Publicado en: LA LEY 2001-E, 936).

En este sentido, se ha juzgado acertada la previsión legal de una medida que permita, en tiempo oportuno y dentro del marco del proceso penal, la recuperación del uso y goce del derecho que le asiste al damnificado por supuesta usurpación de inmueble, en procura de hacer efectivo el ejercicio del derecho fundamental previsto por el art. 17 de la Constitución Nacional, pues no sólo deben tutelarse los derechos del imputado, sino también los de la víctima.

2.2.- No resulta en vano aclarar, que la medida provisoria de restitución del inmueble puede ser dictada en cualquier estado del proceso o la investigación, siempre –claro está- que se encuentren reunidos los requisitos que hacen procedente su dictado, extremos que –a criterio del Ad-quem- se encontraban verificados en autos, por lo que entendió que existía el mérito de probabilidad provisorio requerido para su despacho favorable.

En efecto, la resolución ahora impugnada (fs. 259/264 del expediente principal) sostiene –en sus considerandos- que: "…la figura del delito de usurpación ha quedado debidamente acreditada en autos, en virtud del dolo directo que demostraron los imputados utilizando como medio comisivo el abuso de confianza, quienes mediando un contrato de comodato entre M. E. A. y J. J. C., aprovechándose de esa vinculación decidieron permanecer en el inmueble usurpando el mismo bajo el argumento de pertenecer a una comunidad aborigen, y a sabiendas que se trata de un inmueble de ajena posesión."

De esta manera, los sentenciantes admitieron la probable comisión del delito investigado, situación que autoriza a proceder como lo ordena la norma supra mencionada.

2.3.- Por otra parte, vale recordar que la examinada constituye una medida cautelar y de carácter urgente.

Es cautelar, porque -al decir de Carnelutti- "…en vez de ser autónom[a], sirve para garantizar (constituye una cautela para) el buen fin de otro proceso (definitivo)" (Instituciones del Proceso Civil, trad. Santiago Sentis Melendo, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1959, pág. 86). De ello se siguen la instrumentalidad y provisionalidad que las caracteriza, y cuyo fin está enderezado a evitar, tanto la frustración de la decisión jurisdiccional que sobre el fondo se dicte, como la persistencia o agravamiento de los daños que estén provocándose, durante el transcurso del proceso.

Además, es una medida urgente porque –según ha entendido la doctrina y la jurisprudencia- en los casos de usurpación el peligro en la demora es evidente, pues se está ante un delito instantáneo de efectos permanentes, y éstos deben ser suprimidos lo antes posible, ya que –de lo contrario- el damnificado se vería obligado a esperar una eventual sentencia condenatoria, causándole la usurpación mayor perjuicio con el paso del tiempo, lo que –a todas luces- aparece como injusto.

Es que, no puede desconocerse que la sustanciación del proceso en el que se acopian los elementos de juicio necesarios para adoptar una decisión de fondo, que –además y fundamentalmente- garantice el adecuado ejercicio de los derechos de las partes, demanda un tiempo considerable que puede conspirar contra la efectiva realización del futuro mandato judicial. A fin de evitar dicha frustración, es que se han previsto medidas cautelares como la que analizamos.

Entonces, si –como señalara- el objeto de la medida de desalojo es asegurar uno de los fines de la Investigación Penal Preparatoria, impidiendo que el delito supuestamente cometido produzca consecuencias ulteriores, no resulta razonable demorar el desalojo y el reintegro del inmueble al denunciante, ya que -de lo contrario- se afectará indudablemente esa finalidad.

III.- A más de ello, agrego que en nada obsta la introducción -en esta instancia- del otorgamiento de la personería jurídica de la Comunidad (S/N) como hecho nuevo, pues –tal como lo sostuvo nuestro Máximo Tribunal Nacional- no cabe confundir el objeto de las pretensiones que integran un reclamo relativo a la propiedad comunitaria de las tierras implicadas, con los hechos investigados en la causa penal por el supuesto delito de usurpación de ellas.

Esto así, porque en la primera se persigue el reconocimiento del derecho de propiedad o dominio sobre los terrenos involucrados, en tanto la segunda se vincula con el despojo "de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él", por lo que la suspensión de esta última causa hasta tanto exista pronunciamiento en aquélla -basado en el posible riesgo de sentencias contradictorias- resulta improcedente; pues "el eventual reconocimiento del inmueble en cuestión en cabeza de la Comunidad aborigen, permitirá en tal caso el ejercicio de las acciones tendientes a hacer efectivos los derechos emergentes de la sentencia que pudiera dictarse a su favor". (CSJN: "Comunidad Indígena (S/N) c/ Formosa, Provincia de y otros s/ medida cautelar", Expte. CSJ 528/2011 (47-C), 07 de Abril de 2015).

IV.- Cabe por último, analizar la supuesta nulidad de la orden de lanzamiento emitida por el Juez de Control que, en su planteo recursivo, esgrime la ocurrente.

Entiendo que no corresponde anular dicha resolución, porque, si bien es cierto que en ella existe un yerro relativo a la extensión del objeto de la medida, no lo es menos que, de las constancias de la causa surge claramente que ésta fue ejecutada y efectivizada sobre la porción de terreno que excedía la comprendida en el contrato de comodato celebrado por las partes, tal y como fuera solicitado por el Agente Fiscal, por lo que ningún perjuicio ha aparejado aquel error material.

En este sentido, considero –también- que no se ha acreditado detrimento alguno para los imputados que permita -en este estadío- variar lo decidido por la Cámara de Apelaciones y Control, máxime, si se tiene en cuenta el reconocimiento de la continuidad y plena vigencia del contrato de comodato que une a las partes, y sobre cuya extensión no existe controversia.

De hecho, los imputados continúan –en función de la vigencia del contrato mencionado- ocupando aquella originaria fracción, circunstancia que descarta el presupuesto necesario para la procedencia del planteo esgrimido.

No es ocioso recordar que en materia de nulidades, el criterio de interpretación es restrictivo, por lo que sólo cabe declararla cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia (Fallos 325:1404), postura que –invariablemente- viene sosteniendo esta Sala (L.A. Nº 1 (PE), Fº 46/49, Nº 17; L.A. Nº 1 (PE), Fº 91/97, Nº 30; L.A. Nº 1 (PE), Fº 128/129, Nº 38, L.A. Nº 2 (PE), Fº 26/33, Nº 8; L.A. Nº 2 (PE), Fº 119/124, Nº 31, entre otros).

Es que, "La nulidad por vicios formales carece de existencia autónoma dado el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal; exige, como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho, de otro modo, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público." (Fallos 331:994).

V.- Finalmente, advierto que los imputados no han sido aún citados a prestar declaración indagatoria, a pesar del tiempo transcurrido (la causa ha iniciado el 16 de Julio de 2015, por denuncia de fs. 1 del expediente principal), razón por la cual corresponde exhortar al Sr. Fiscal interviniente, para que cumpla con lo dispuesto por el Art. 364 y concordantes del C.P.Penal, a fin de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de defensa de los recurrentes y la pronta sustanciación de la causa.

VI.- En relación a las costas y honorarios, adhiero a la propuesta efectuada en el voto que antecede.

Tal es mi voto.

La doctora (S/N) dijo:

I. La Cámara de Apelaciones y Control hizo lugar al recurso de apelación incoado por el representante de la compañía minera (S/N) y revocó la decisión del señor juez titular del Juzgado de Control Nº 4 que había suspendido los efectos de la resolución que ordenaba el lanzamiento de los imputados M. E. A. y S. F. de un predio de 3.564 m2, ubicado en la intersección de la bifurcación de los caminos a Campo Largo y Las Escaleras en la Finca “Las Capillas”.

En contra de lo decidido se alza la defensora de los imputados interponiendo recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria. Sostiene en primer término que la resolución que ordenó el lanzamiento de sus representados es nula porque no se encuentra debidamente fundamentada. Explica que el agente fiscal peticionó el desalojo del terreno excedente del predio prestado por la compañía minera a sus defendidos, empero la resolución judicial ordenó el desalojo del inmueble dado en comodato. Resalta que sus representados nunca fueron citados a prestar declaración indagatoria y que tampoco fueron notificados de la orden de lanzamiento.

Se agravia después porque los jueces consideraron que la comunidad aborigen (S/N) no tiene existencia como persona jurídica y juzgaron inaplicables al caso las disposiciones de la ley 26.160. Reitera que omitieron considerar que el agente fiscal intimó y peticionó el desalojo del terreno excedente del inmueble de 3.564 m2 entregado en comodato y que el juez ordenó el desalojo de toda la fracción. En apoyo de sus asertos cita lo razonado por el señor fiscal de cámara en su dictamen y se queja de lo argumentado respecto de la configuración del delito de usurpación. Agrega finalmente que la acción típica del delito investigado es la de despojar, conducta que advierte, no se encuentra acreditada y por último denuncia como hecho nuevo, que con fecha 25 de enero del año 2016, la Secretaría de Pueblos Indígenas del Gobierno de la provincia de Jujuy, le otorgó a la comunidad aborigen (S/N), su personería jurídica.

Sustanciado el recurso, el representante de la compañía minera (S/N), en base a los argumentos que expone y a cuya lectura remito por razones de brevedad, se pronuncia en sentido adverso a la procedencia del remedio intentado (fs. 38/50). Llamado a dictaminar el Fiscal General de la Acusación, considera que se debe hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa de S. F. y M. A. Argumenta en ese sentido que el desalojo dispuesto por el juez de control es prematuro porque existe una notable orfandad probatoria que lo sustente, defecto que atribuye a la etapa inicial por la que transita la investigación y de la que resalta por su trascendencia, la circunstancia de que nunca se haya tomado declaración a los imputados. Pasa revista después, a las medidas probatorias que a su entender resultan indispensables llevar a cabo para una adecuada solución de la controversia y remarca que no se vislumbran en el caso, los requisitos básicos que justificarían una medida cautelar de la entidad de un desalojo. Finalmente analiza la legislación procesal que posibilita su dictado y concluye que se debe dejar sin efecto la decisión que ordena el lanzamiento de los recurrentes hasta se acrediten los extremos que la legitimarían (fs. 65/70).

II. El análisis respecto de la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, da cuenta de que pueden tenerse por verificados sus requisitos, sin embargo me permito efectuar algunas consideraciones relativas a la exigencia de que la resolución que se impugna por esta vía sea definitiva.

Nuestro ordenamiento ritual establece que el recurso de inconstitucionalidad sólo podrá deducirse contra las sentencias definitivas (art. 8 de la Ley 4346). Sentencia definitiva es la que dirime la controversia poniendo fin al pleito o haciendo imposible su continuación (Imaz, Esteban y Rey, Ricardo E., El Recurso Extraordinario, Edición de la Revista de Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, 1943, pág. 178). La resolución que se impugna no es definitiva, sin embargo es equiparable a ella porque al revocar la decisión

del juez de control que suspendió el desalojo, es susceptible de causar un agravio irreparable al cobrar inminencia el lanzamiento de los recurrentes. El criterio que postulo ha sido adoptado por este Alto Cuerpo a partir del precedente registrado en L.A. Nº 58, Fº 4154/4159, Nº 1177.

III. Efectuado el control de admisibilidad considero necesario realizar una reseña de los antecedentes del caso, pues de su análisis surgen elementos que estimo de relevancia para abordar la cuestión planteada.

III.1. Inauguró este proceso penal la denuncia de J. J. C. realizada el 16/7/2015. Sostuvo que es el encargado de la finca "Las Capillas", propiedad de la compañía minera (S/N) y que en su representación celebró en la fecha 2/8/2010 un contrato de comodato con la señora M. E. A. en razón del cual le cedió un terreno de 3.564 m2. Agregó que al estar la finca adherida al plan de manejo forestal sustentable, había colocado en la periferia del sector donde se encuentran A. y su esposo S. F., dos carteles con esa referencia entre otras [15]. Señaló que esos dos carteles "…fueron sustraídos del lugar y sospecha que los mismos fueron sacados por S. F. debido a que cuando el dicente se presentó con el escribano (…) a colocar los carteles se opuso a que se plantasen los mismos…". Denunció además que en la fecha al presentarse en la finca, advirtió que existe una nueva cerca delimitando aproximadamente una hectárea con puntales, alambres nuevos y un cartel reclamando la propiedad de la Comunidad Aborigen (S/N) (fs. 1).

III.2. En el expediente consta además, que efectivos policiales pertenecientes a la Comisaría Seccional Nº 23 de la ciudad de Palpalá, al arribar a la finca constataron que:

"…el lugar se encontraba delimitado con un alambre con puntales nuevos estando a unos 5 metros uno de otro, como así también se observa otros puntales viejos que estaban por la parte de adentro de la nueva delimitación como así también una casa precaria con un cartel que decía Comunidad Aborigen (S/N)…" (fs. 18).

Es visible en el croquis que acompaña el acta de constatación, una casa y dos delimitaciones con alambre, la primera, más cercana a la construcción, es referenciada con la letra "x", el número 1 y la mención "Puntales de madera"; la segunda también es singularizada con una letra "x", pero lleva el número 2 y la especificación "Nuevos puntales de madera 1 Hectárea" (fs. 19).

III.3. En fecha 18 de julio del año 2015, el Sub-Comisario (S/N) y (S/N), de acuerdo a las directivas impartidas por el agente fiscal, intimaron a M. A. a:

"retirar el cercado constituido con alambres y postes de madera que se le indica en esta oportunidad y el cual abarca una superficie aproximadamente de una Hectárea, limitándose a ocupar únicamente el sector que le fue autorizado oportunamente y que consistiría en un predio de 3654 m2 aprox. en consecuencia deberán retirar todos aquellos elementos de su propiedad que estén fuera de éste último…" [16] (Subrayado me pertenece).

III.4. Con posterioridad, el representante de la vindicta pública imputó a S. F. y a M. A. la supuesta comisión del delito de usurpación en los términos del inciso 2º del art. 181 del Código Penal (fs. 48), en otras palabras, la usurpación por destrucción o alteración de los términos o límites de un inmueble. Asimismo, al momento de requerir su desalojo al juez de control, describió el siguiente hecho:

"Que en fecha 2 de agosto de 2010, se celebró entre la razón social Minera (S/N) y la imputada M. A. un contrato de comodato, teniendo como objeto un predio de 3564 m2, ubicado en la intersección de la bifurcación de los caminos a Campo Largo y Las Escaleras en la finca "Las Capillas", pero es que en fecha 16 de julio de 2015, es que el Sr. J. J. C., encargado de Finca "Las Capillas" de propiedad de la razón social antes mencionada es que verificó que los imputados S. F. y M. A., previo a remover el alambrado existente y sacar dos carteles que delimitaban e indicaban la propiedad del predio sometido a comodato según el contrato de mentas, es que colocaron un nuevo alambrado y ocuparon sin autorización del propietario del inmueble, una extensión de terreno individualizada conforme el croquis de fs. 19, siendo que en fecha 18 de julio de 2015, siendo aproximadamente las 9:35 horas, la prevención actuante labró un acta de intimación para proceder en un plazo de 24 horas al desalojo y desocupación del predio como así también el retiro del cercado construido, negándose a recibir el acta en cuestión la imputada M. A., habiendo transcurrido el plazo intimado continuando con la ocupación hasta el presente" [17] (Subrayado me pertenece).

IV. El inciso 2 del art. 181 del Código Penal establece que será reprimido con prisión de seis meses a tres años, “el que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites del mismo”. Respecto del objeto de protección de este dispositivo legal, se explica que:

“Los términos son los hitos que permiten individualizar el bien con la lectura de los linderos o los mojones o señales permanentes colocadas para demarcar los confines espaciales de los fundos; los limites son los que se corresponden con las demarcaciones que se establecen entre inmuebles vecinos o los signos permanentes, naturales o artificiales, continuos o discontinuos, que conforman la línea divisoria entre dos o más inmuebles” (Código Penal y leyes complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, AAVV, dirigido por Raúl Zaffaroni y David Baigún, y coordinado por Marco A. Terragni, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2009, T. 7, p. 766).

En tanto que:

“El deshacimiento o eliminación del término o límite (destrucción) o su cambio de lugar o corrimiento (alteración) sólo son usurpatorios si borran el lindero anterior y el autor los consuma para apoderarse de todo o parte del inmueble” (Nuñez, Ricardo C., Manual de Derecho Penal, Parte Especial, 4ta. Ed., Lerner Editora S.R.L, 2009, Córdoba, pág. 356).

Siguiendo estos lineamientos, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en el precedente “Dapuetto de Palo, Miguel A.” [18] juzgó que:

“De allí se sigue que el delito no se configura cuando se produce la destrucción parcial de un cerco o alambrado, "sin que con ello se borre el límite" (v. Fontán Balestra, Carlos, "Tratado...", cit., t. VI, p. 218), ni cuando "existen otros elementos aptos destinados a la demarcación, porque los términos o límites no han sido destruidos" (confr. Fontán Balestra, Carlos, "Tratado...", cit., t. VI, p. 218). En otros términos, la destrucción parcial que permite seguir estableciendo con precisión la delimitación de los inmuebles, no consuma el tipo" (confr. Creus, Carlos, "Derecho penal. Parte especial", 6ª edición actualizada y ampliada, 2ª reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 1999, t. 1, p. 563). La doctrina jurídica ilustra esta clase de situaciones mencionando, entre otras, la hipótesis de quien destruye los postes y se lleva el alambrado, pero deja los hoyos, y la de quien destruye los árboles y setos vivos, pero deja los raigones (confr. Núñez, Ricardo C., "Derecho...", cit., t. V, p. 509)”.

V. Ahora, de la confrontación del hecho singularizado por el fiscal con las constancias de autos, advierto que no obstante el señalamiento de que F. y A., removieron el alambrado existente y colocaron uno nuevo, lo cierto es, que de la denuncia efectuada por C., el acta de inspección, el croquis, como inclusive de los términos de la intimación que se le efectúa a A., emerge claro que existen dos delimitaciones bien demarcadas, ambas con alambres; la primera, con viejos puntales encerraría la superficie de 3564 m2 objeto de un contrato de comodato, la otra con nuevos puntales, más abarcadora, incluiría además de esa superficie una franja de terreno que la excede y que junto a ella integrarían una hectárea aproximadamente.

En estas condiciones, no se puede sino coincidir con el Fiscal General de la Acusación cuando dictamina que el lanzamiento se decidió sin prueba suficiente que lo justificara, no sólo por las razones que esgrime, sino porque las pocas evidencias que se presentan en su respaldo, contradicen la premisa que de ellas se infiere, esto es, que se haya removido el alambre que delimita la heredad dada en comodato, lo cual a mi modo de ver, conforme a la inteligencia que debe darse al dispositivo legal mencionado, repercute en la tipicidad de la conducta que se reprocha.

VI. En otro orden de ideas, observo que el agente fiscal requirió al juez de control Nº 4 ordenara el desalojo y el reintegro “…del predio rural excedente (…) del inmueble objeto del contrato de comodato e individualizado a fojas 19 cercado y delimitado con alambrados…” [19] , y que la autoridad requerida resolvió “…ordenar el lanzamiento en el inmueble individualizado como un predio de 3.564 m2 ubicado en la intersección de la bifurcación de los caminos a Campo Largo y las Escaleras en la finca Las Capillas…” (fs. 54 vta.). Surge claro entonces que se requirió el desalojo de un inmueble y que el juez lo ordenó pero respecto de otro. El fiscal pretendía el lanzamiento de la superficie “excedente” de los 3564 m2 prestados por la compañía minera, sin embargo el juez ordenó el lanzamiento del inmueble dado en comodato.

VII. El juez de control al ordenar el desalojo de un inmueble distinto del que motivó la denuncia y de aquel que integró el pedido del fiscal, trascendió del ámbito trazado por la propia controversia jurídica, alteró la esencia misma del contradictorio e incurrió en un intolerable ejercicio jurisdiccional extra o ultra petita.

VIII. Así las cosas, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de M. E. A. y S. F. debe tener favorable acogida. Corresponde entonces declarar la nulidad de la resolución del señor juez de control Nº 4 que ordenó el desalojo (fs. 52/55), en tanto que al alterar el contradictorio y no sustentarse en las constancias de autos, aparece desprovista de fundamentos y vulnera por ello las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio (arts. 18 C.N, 176, 2 párr., 222, 2 párr., C.P.P.). Importa esta declaración, la nulidad de la decisión posterior del juez que resolvió suspender el desalojo y la de la Cámara de Apelaciones y Control que revocó esta última (art. 226, C.P.P.).

Deberá cargar con las costas de esta instancia extraordinaria la parte vencida (art. 102 C.P.C.) Consecuentemente justiprecio los honorarios profesionales de la doctora (S/N) y (S/N), en las sumas de pesos tres mil quinientos ($3500) y pesos dos mil ochocientos ($2800) respectivamente, conforme doctrina sobre honorarios mínimos sentada por este Superior Tribunal de Justicia (Acordada Nº 96/2016), con más I.V.A. (Impuesto al valor agregado) en caso de corresponder.

Así lo voto.

Por ello,

la SALA PENAL

del SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por la doctora (S/N), defensora técnica de S. J. F. y M. E. A., con costas.

2º) Regular los honorarios profesionales de la doctora (S/N) en la suma de pesos dos mil ochocientos ($2.800) y los del doctor Arturo Pfister Puch en la cantidad de pesos tres mil quinientos ($3.500) con más el impuesto al valor agregado si correspondiere.

3º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Notas al pie:

[1] Julio 16 de 2015.

[2] Aproximadamente, julio 10 de 2015; confrontar acta notarial obrante a fojas 31/34 del expediente principal.

[3] El contrato de comodato -celebrado entre la señora M. E. A. y la Minera (S/N).- se pactó sobre una superficie de aproximadamente 3.564 m², ubicado en la intersección de la bifurcación de los caminos a Campo Largo y Las Escaleras en la Finca Las Capillas, ver fojas 2/5 del expediente principal; en tanto, con la ocupación que se denuncia, habrían abarcado en total 1 ha. (superficie que incluye la del objeto del contrato), ver fojas 19, ídem.

[4] Fojas 22 y 48, respectivamente, del expediente principal.

[5] Agosto 25 de 2015, fojas 50/51, ídem.

[6] Septiembre 1 de 2015, fojas 52/55, ibídem.

[7] Septiembre 2 de 2015, acta de lanzamiento de fojas 70, ibídem.

[8] Septiembre 25 de 2015, fojas 119 ibídem.

[9] La norma -en síntesis- declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país.

[10] Octubre 30 de 2015, fojas 191/195 del principal.

[11] Expediente C-056.529/15, caratulado "Acción de Amparo: Comunidad Aborigen (S/N) c/ Cía. Minera (S/N) y otros".

[12] Ver fojas 214, punto 3º, del expediente principal.

[13] Según los términos de la demanda en el expediente C-056.529/15, caratulado "Acción de Amparo: Comunidad Aborigen (S/N) c/ Cía. Minera (S/N) y otros", que se tuvo a la vista.

[14] CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN COMENTADO. Ricardo Luis LORENZETTI, Director. Rubinzal – Culzoni Editores. Santa Fe, 2015. Tomo X. Nota al artículo 2239.

[15] El Cartel dice: Finca Las Capillas, Propiedad Privada, Mensura Aprobada 17/09/1972 - Dominio Libro XV, Folio 142, Asiento 9421 Capital, Padrón A3803 - Dominio Libro XV, Folio 143, Asiento 9422, Capital, Padrón A3804 - Dominio Libro XV, Folio 282, Asiento 524 Ledesma, Padrón E308 - Mensura Actualizada Aprobada 27/04/2015, Dominio A, 46118, Circunscripción 4, Sección 2, Parcela 429 y 430, Padrón A3803. Adherida a Ley Nacional 26331/Provincial - 5676/Resolución 81/2009 - Adherida al Plan de Manejo Forestal Sustentable, Prohibido: Cazar y Pescar - Hacer Fuego y Acampar sin autorización - El ingreso a Personas No Autorizadas - El Retiro de Productos Vegetales y Animales.

[16] Fs. 22 del Expediente Nº P-114.830.

[17] Fs. 50/50 vta. del expediente Nº P-114.830.

[18] LLC, 2004-918.

[19] Fs. 50/51 del Expediente Nº P-114.830.

Firmado: Dr. (S/N); Dra. (S/N); Dra. (S/N).

Ante mí: Sr. (S/N) – Prosecretario (Por Habilitación).

Expediente N° CA-17190/2021

Órgano: **Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia.**

Libro de acuerdo: **6.**

Número Sentencia: **111.**

Fecha: **8/11/2021.**

Competencia: **Recursiva.**

Voces Jurídicas: **COMUNIDADES ABORIGENESPLANTEO EXTEMPORANEORESOLUCION ADMINISTRATIVA**.

Libro de Acuerdos Nº 6, Fº 497/501, Nº 111. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, los señores jueces de la Sala III Contencioso Administrativa y Ambiental del Superior Tribunal de Justicia, Dra. (S/N), Dres. (S/N) y (S/N), bajo la presidencia de la primera de los nombrados, vieron el Expte. Nº CA-17.190/21, caratulado: "Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expte. Nº C-162.098/2020 (Tribunal Contencioso Administrativo, Sala I, Vocalía 2) Apelación de Resoluciones del Juzgado de Minas. Comunidad Aborigen (S/N) c/ Estado Provincial – Juzgado Administrativo de Minas"; del cual,

La Dra. (S/N), dijo:

El Tribunal Contencioso Administrativo mediante sentencia del 8 de octubre de 2020 rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Comunidad Aborigen (S/N), con costas.

En cuanto resulta relevante, en el decisorio se analizó que la Jueza Administrativa de Minas declaró formalmente inadmisible por extemporáneo el recurso de apelación articulado por la Comunidad Indígena (S/N), en contra del pedido de nulidad de la concesión de la Mina "Evelia".

Juzgó que la nulidad que se plantea se refiere al procedimiento administrativo y que la comunidad arguye que durante el trámite de concesión de la Mina Evelia, mediante expediente Nº 21-CH-1986, no se le garantizó la debida participación.

Al respecto, expresó que tanto la resolución Nº 17-J-2019 (fs. 48) como la del 5 de diciembre de 2018 (fs. 38), solo contemplan el aspecto formal de la nulidad, es decir, respecto a la tempestividad del planteo al rechazarlo por extemporáneo, atento a que no se dedujo la nulidad dentro de los 5 días de conocido el acto cuestionado, conforme está dispuesto en el artículo 181 del CPC.

Agregó que "en ese sentido, si bien la decisión cuestionada es formalmente acertada y válida, además existen razones sustanciales que hacen a la improcedencia del pedido de nulidad. La recurrente argumenta que no se le concedió la debida participación en el trámite de la concesión de la Mina Evelia, afectándose sus derechos. Asimismo, agrega que el reconocimiento de la personería jurídica (lo que ocurrió el 27/08/2004, mediante resolución Nº 959-BS-2004, obrante a fs. 19 del expediente Nº 1994-C-2014) tiene efecto declarativo y que la comunidad aborigen (S/N) existe con anterioridad a ese reconocimiento estatal". Que "bajo esa tesitura, resulta infundado el vicio alegado toda vez que la resolución del Juzgado de Minas Nº 137-J-1988, de fecha 31/8/1988, por la cual se otorga la concesión de la Mina Evelia (fs. 36/37 del expediente Nº 21-CH-1986) se encuentra debidamente publicitada a través de edictos publicados en el diario 'El Tribuno de Jujuy' en fechas 17, 19 y 21 de octubre de 1988 (fs. 41, 43/45)".

Argumentó que, luego de ello, se ordenaron los trámites de mensura pertinente, brindándose de nuevo la misma difusión a través de periódico local los días 3, 4 y 5 de abril de 1989 (fs. 52/55). Que ello permite afirmar que "la autoridad administrativa de minas ha dado cumplimiento con el procedimiento vigente al momento de su otorgamiento, garantizando la publicidad de sus actos. Frente a ello, la simple alegación de que se ha vulnerado el derecho a participar en el procedimiento de concesión minera no es ajustada a la realidad, pues la propia recurrente es quien se mantuvo inactiva durante años…".

En contra de la sentencia el Dr. (S/N) en representación de la Comunidad Aborigen (S/N) dedujo recurso de inconstitucionalidad a fojas 5/13 de estos autos.

Luego de relatar los antecedentes de la causa y de argumentar sobre la posibilidad que la sentencia que recurre sea revisada por esta Sala del Superior de Tribunal de Justicia, esgrime los siguientes agravios: en primer lugar, que la decisión transgrede "totalmente" la carta magna provincial e ignora la cuestión indígena. Dice al respecto que dicha cuestión está vinculada con las comunidades originarias y sus miembros, y, a su vez, se relaciona con su cultura, sus reclamos, sus derechos específicos y su situación diferencial frente al resto de los ciudadanos.

Aduce que una cuestión indígena debe ser resuelta según las leyes que resulten aplicables, según la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos en los que la república sea parte (Convenio OIT 169) y conforme la finalidad de la norma, las leyes análogas, los principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento y mediante una resolución fundada. Sostiene que el primer error de la sentencia es precisamente haber ignorado la cuestión indígena.

Se explaya luego para afirmar que el tribunal de grado aplicó las normas del derecho civil de manera restrictiva y tomó en cuenta los plazos procesales fatalmente, sin distinguir la mencionada cuestión indígena. Aduce que el Convenio OIT 169 posee plena operatividad, y brinda los argumentos que sostienen su afirmación, los que doy por reproducidos aquí.

Como segunda queja dice de transgresión a la aplicación del Convenio 169 de la OIT y tilda de "aparente" a la sentencia.

Asevera que el tribunal de grado no contempló lo previsto en el artículo 6º de dicho convenio respecto a que los gobiernos deben consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular mediante sus instituciones representativas, cada vez que prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlas directamente y que dichas consultas deberán efectuarse de buena

fe y de una manera apropiada a las circunstancias con la finalidad de llegar a un acuerdo o consentimiento acerca de las medidas propuestas. Dice que lo mismo dispone el artículo 15 por el cual se establece el derecho de los pueblos interesados en los recursos naturales existentes en sus tierras, y el derecho a la utilización, administración y conservación de dichos recursos. Señala que los gobiernos deben establecer y mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados. Brinda más fundamentos sobre estas normas, a los que también remito en homenaje a la brevedad.

Por último, se queja por el desconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.

Desde esa óptica, describe que la tierra, el territorio y los recursos naturales que lo componen, no tienen para los pueblos originarios un valor económico, sino uno mayor que es el valor espiritual, que constituye un principio filosófico-religioso. Se extiende en más consideraciones en torno a dicho principio, las que tengo por reproducidas aquí. Cita la Resolución 587/07 del Instituto de Derechos Indígenas en Argentina y efectúa más argumentaciones sobre los derechos y concepción de los pueblos originarios, para concluir en que la sentencia que pone en crisis omite la "consideración de la cuestión y de la normativa indígena en la sentencia para la solución de la causa", y que "los jueces no pueden prescindir de la aplicación de normas indígenas con jerarquía constitucional y de Convenios Internacionales, que permiten apreciar extremos probatorios, en tanto fueren conducentes y susceptibles de incidir en una diversa solución final del pleito…" (sic).

Luego de integrarse el Tribunal, se remitieron los autos al Ministerio Público Fiscal, expidiéndose a fojas 44/47 la señora Fiscal General Adjunta quien propicia el rechazo del remedio extraordinario interpuesto.

Firme el llamado de autos para sentencia, la causa quedó en estado de resolver.

Luego, y como consta a fojas 50, como medida saneadora, del presente recurso se corrió traslado al Estado Provincial; pese a encontrarse debidamente notificado no respondió, de modo que así se decretó a fojas 53.

Ahora bien, yendo al estudio de los agravios, debo decir que comparto la posición de la Fiscalía General, de modo que también propongo el rechazo del recurso de inconstitucionalidad articulado por el Dr. (S/N) en representación de la Comunidad Aborigen (S/N), por las siguientes razones.

No puede desconocerse, como acertadamente lo afirma la parte recurrente, que el derecho de las comunidades indígenas debe ser abordado por todos los operadores judiciales. Empero, resulta que la sentencia que se impugna proviene de una apelación contra una decisión administrativa que resuelve un planteo de nulidad. En consecuencia, entiendo que la "cuestión indígena" a la que hace referencia el apoderado de la comunidad (S/N), en realidad no ha sido articulada, y, por ende, no puede haber sido desconocida. Existen sin duda alternativas de vías procesales -administrativas y judiciales- para efectuar los planteos que los sujetos se crean con derecho -personas humanas, jurídicas, comunidades como las que aquí se representa-, y a través de las cuales es posible actuar, pues están previstas precisamente para su correcto y adecuado ejercicio. En su caso, podrá obtenerse la atención que se reclama, para impedir así el desconocimiento, la transgresión o postergación de sus potestades y garantías constitucionales y convencionales invocadas, mediante una adecuada participación.

En el caso que nos ocupa, como se relató al principio, se trata de la pretensión de un pedido de nulidad de una concesión minera otorgada en el año 1988, (Mina Evelia), con sustento en que la comunidad Aborigen (S/N), emplazada aparentemente en dicho sector, no fue citada en su oportunidad para que pueda hacer valer sus derechos.

No caben dudas que el otorgamiento de la concesión minera data de mucho tiempo atrás, del tal modo, no es aceptable que sea una cuestión que nos ocupe en la discusión. Por ello, entiendo que la nulidad de dicha concesión no es apta para materializar las garantías que se reclaman, y en especial las reconocidas en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Para obtener su adecuada tutela deberá la promotora, en su caso y si así considera pertinente, ocurrir por otra alternativa procesal distinta y eficaz, pues la elegida como se viene sosteniendo, reitero, no resulta indicada para el tratamiento de los planteos efectuados.

Como bien destaca el Ministerio Público Fiscal en su dictamen, rige el principio de trascendencia, común a todas las nulidades, esto es, que no existe nulidad por la nulidad misma. Y es este el caso, precisamente, porque, repito, no puede aceptarse que el pedido de nulidad de una concesión de mina otorgada hace mucho tiempo atrás con el debido cumplimiento de todos los requisitos legales, sea la única y exclusiva manera de ejercer los derechos que se declaman.

Por las razones expuestas, la sentencia pronunciada por el Tribunal de grado debe confirmarse porque constituye un acto jurisdiccional que no admite reproche de arbitrariedad en tanto aplica el derecho en forma adecuada y con estricto ajuste a las constancias de la causa.

Entonces, procede el rechazo del recurso de inconstitucionalidad articulado por el Dr. (S/N), en representación de la comunidad aborigen (S/N). Las costas entiendo justo imponerlas por el orden causado atento a la naturaleza de la cuestión aquí planteada (artículo 102 segunda parte del código procesal civil). La retribución profesional propongo se determine conforme honorarios mínimos, es decir, en la suma de pesos dieciséis mil ciento veintiocho ($16.128) para el Dr. (S/N). Tal importe resulta del valor de una UMA según Resolución Nº 6/2021 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que multiplicado por 12 (piso mínimo de honorarios para recursos extraordinarios conforme artículo 32 in fine ley 6112), y de allí se obtuvo el 70% para la vencida. Dicha suma llevará para el caso de mora, el interés a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, hasta el efectivo pago; así como el impuesto al valor agregado (I.V.A.), en caso de corresponder.

El Dr. (S/N) dijo:

Adhiero a la solución que propicia la Sra. Presidente de trámite en tanto la sentencia recurrida constituye derivación razonada del derecho vigente conforme a los hechos acreditados en la causa (art. 29 inc. 3º de la Constitución Provincial), sin que pueda advertirse en ella arbitrariedad alguna.

En efecto, el Tribunal ha dado razones suficientes de su decisión y aquellas no han sido rebatidas adecuadamente por los agravios planteados.

El recurrente invoca genéricamente las normas de protección de los derechos de las comunidades indígenas -que esta Sala no desconoce- sin indicar concretamente las razones por las cuales postula que sus derechos han sido conculcados a través de la decisión recurrida. De tal modo, incumple la carga de rebatir adecuadamente los claros y contundentes motivos de la sentencia cuestionada.

Siendo así, cabe reiterar aquí que a los fines casatorios y/o de inconstitucionalidad, los litigantes no pueden soslayar la obligación de precisar concretamente, a través de un análisis razonado y mesurado, en qué consiste el agravio que causa el pronunciamiento, pues no basta que manifieste que el Tribunal ha violado la ley sustantiva o que omitió aplicar las reglas de la sana crítica. Ello deberá demostrarse y expresarse clara y concretamente, ya que las generalizaciones conceptuales no son idóneas para fundar estos remedios excepcionales. La doctrina es conteste en afirmar que no basta con que se cite la ley que se considera aplicable, inaplicable o infringida, sino que ha de expresarse además, en qué consiste su infracción o inaplicabilidad (cfr. L.A. Nº 29 Fº 106/108 Nº 44).

Reiteradamente este Superior Tribunal de Justicia –siguiendo el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- ha dicho que la tacha de arbitrariedad no procede por meras discrepancias acerca de la apreciación de la prueba producida o de la inteligencia atribuida a preceptos de derecho común, así se estimen esas discrepancias legítimas y fundadas. Esta tacha no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que atiende sólo a los supuestos de omisiones de gravedad extrema en que, a causa de ellas, las sentencias quedan descalificadas como actos judiciales (Fallos 244:384 cita de Genaro R. Carrió –Alejandro D. Carrió. “El recurso extraordinario por sentencia arbitraria”, tercera edición, pág. 29, Abeledo-Perrot, 1983), lo que no ocurre en el caso.

Por ello, adhiero al rechazo del recurso y a la regulación de honorarios propuesta. Me aparto en punto a las costas, que deberán imponerse al recurrente porque no veo motivos para apartarse del principio general que las impone al vencido (art. 102 del CPC).

Tal es mi voto.

El Dr. (S/N) al voto de la Dra. (S/N).

Por ello, la Sala III Contencioso Administrativa y Ambiental del Superior Tribunal de Justicia,

Resuelve:

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. (S/N) en nombre y representación de la comunidad aborigen (S/N).

2º) Imponer las costas por el orden causado, y regular los honorarios profesionales en la suma de pesos dieciséis mil ciento veintiocho ($16.128) para el Dr. (S/N). Dicha suma llevará, para el caso de mora, el interés a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, hasta el efectivo pago; así como el impuesto al valor agregado (I.V.A.), en caso de corresponder.

3º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dra. (S/N); Dr. (S/N); Dr. (S/N).

Ante mí: Dra. (S/N) – Secretaria Relatora.

Expediente N° CF-14493/2018

Órgano: **Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia.**

Libro de acuerdo: **4.**

Número Sentencia: **123.**

Fecha: **10/6/2019.**

Competencia: **Recursiva.**

Voces Jurídicas: **ACCION REIVINDICATORIACOMUNIDADES ABORIGENES INTEGRACION DE LA LITIS.**

(Libro de Acuerdos N° 4, F° 533/538, N° 123). San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los diez días del mes de junio del año dos mil diecinueve, la Sala I - Civil y Comercial y de Familia - del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, integrada por los Dres. (S/N), (S/N) y (S/N), bajo la Presidencia del nombrado en primer término, vieron el Expte. Nº CF-14.493/18, caratulado: "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº 15.042/2017 (Cámara de Apelaciones Civil y Comercial – Sala II- Vocalía 3): caratulado: Recurso de Apelación en Expte. Nº B-241.949/2010, Acción Reivindicatoria en Expte. B-133.014/05: (S/N) c/ Estado Provincial, Comunidad Aborigen (S/N)".

El Dr. (S/N) dijo:

La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, en sentencia de fecha 22 de diciembre del 2017, resolvió hacer lugar al recurso de apelación deducido y revocar la resolución de fecha 20 de marzo del 2017, que rola a fs. 223 de la causa principal. Impuso costas a la apelada y difirió la regulación de honorarios profesionales de los letrados intervinientes.

Para así resolver señaló, que en la resolución apelada se dispuso de oficio integrar la litis con la Comunidad Indígena (S/N) -como parte demandada- por considerar el juez a quo que integra un litis consorcio pasivo necesario.

Agregó la Sala sentenciante que en Expte. Nº 10.113/08 "Sumarísimo por Deslinde, Amojonamiento y Mensura: (S/N) c/ Estado Provincial", los actores promovieron acción de deslinde, amojonamiento y mensura en contra del Estado Provincial, con el fin de que se delimite el límite este de la Finca Cortaderas, perteneciente a los actores, que se encuentra en La Banda - Depto. de Tilcara. Que el Estado Provincial se opuso al progreso de la acción por entender que el límite no es confuso, que surge del título y que es el

legítimo dueño, en virtud del art. 2342 del C.Civil, en razón de haber operado la prescripción adquisitiva a su favor, por la posesión pública, pacífica y continua por más de veinte años.

Ponderó que en sentencia dictada por dicha Sala, el 19 de setiembre del 2008, se resolvió "por consiguiente en el caso de autos corresponde que a ella se le de un plazo para que deduzca la acción a que se considere con derecho (art. 522 C.P.C.C.), bajo apercibimiento de desaprobarse la operación pericial realizada en autos. Interpuesta la misma, y como el procedimiento se ha controvertido por efecto de la oposición del demandado, en trámite ordinario, deberá continuar el mismo con los pasos procesales faltantes y resolver la acción que se haya deducido, conforme a las pruebas aportadas en la causa".

Por ello entendió la Sala sentenciante, que el presente juicio ordinario, es consecuencia de lo resuelto en aquella acción de deslinde, conforme art. 522 del C.P.C. Agregó que el juicio de deslinde y el presente proceso reivindicatorio, son juicios conexos, donde las partes son las mismas.

Destacó además, que la Comunidad Aborigen (S/N) dio cuenta que no fue citada como tercero ni tampoco es parte. Asimismo que a fs. 208 de la causa se dejó sin efecto su participación, lo que fue consentido por las partes y la Comunidad(S/N). Con posterioridad, se dictó nueva resolución disponiendo lo contrario.

Por último, el Tribunal ad quem entendió que la Comunidad Aborigen no es parte necesaria en este proceso.

A continuación, en fecha 8 de febrero del 2018, la Sala sentenciante aclaró la sentencia del 22 de diciembre del 2017 sosteniendo que debe leerse "En el juicio de deslinde la Comunidad no interviene como tercero y en este juicio de reivindicación tampoco corresponde su intervención ni en esa calidad ni como parte".

Disconforme con este pronunciamiento, a fs. 10/16 vta. de autos la Dra. (S/N), en su carácter de Procurador Fiscal, en representación del Estado Provincial, interpuso recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria.

Luego de señalar antecedentes de la causa, sostiene la arbitrariedad de la sentencia al no integrarse la litis con la Comunidad Aborigen (S/N), por ser colegitimarios de imprescindible presencia, sujetos particulares que poseen dominio e incluso son poseedores, tenedores del inmueble objeto de la presente acción y que –eventualmente- los efectos de la sentencia será extensivo. De no darles participación estos interesados podrían pedir la nulidad de la sentencia recaída en autos.

Se agravia de la sentencia recurrida porque el Estado Provincial es garante de las comunidades indígenas. El no otorgarle la calidad de parte a la Comunidad Aborigen es un agravio concreto en contra del Estado que debe velar por tales pueblos originarios. Mas aún, cuando el Estado Provincial ha mencionado en su contestación de demanda la falta de legitimación pasiva y que se encuentra probado que la reivindicación pretende llevarse a cabo en territorio ocupado ancestralmente por una Comunidad aborigen. Agrega que de no ser oída la Comunidad se estaría configurando una grave violación a la garantía del debido proceso y derecho de defensa, ambos principios de raigambre constitucional.

Expresa que existe un antecedente de suma importancia el Expte B-245.401/10 caratulado "Desalojo: (S/N) c/ (S/N), Comunidad Indígena (S/N)" en donde quedó establecida la correcta integración de la litis, con la Comunidad, como parte. Cita acciones llevadas a cabo por la Comunidad como el Expte. Nº B-241.418/10 caratulado "Prohibición de innovar: Comunidad Aborigen (S/N) c/ (S/N)". Que además existe una sentencia firme dictada en Expte. Nº 10.417/09 caratulado "Medida Autosatisfactiva de Desalojo: (S/N) c/ (S/N) en donde se reconocen acreditados los requisitos de personería jurídica y posesión ancestral de las tierras para la aplicación de la Ley 23.302.

Por tanto, entiende, no puede desconocerse que la Comunidad habita las tierras que se pretende reivindicar, amén de ello, la sentencia debe dictarse útilmente, razón por la cual la litis debe quedar debidamente integrada.

Agregó que el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo reza en su art. 14.1 que "Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan". De ello surge que el INAI creó mediante Resolución Nº 587/07 el Programa Nacional "Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas Ejecución de la Ley Nacional Nº 26.160 mediante el cual se ha reconocido a la Comunidad Aborigen (S/N) "ocupación actual, tradicional y pública

de su territorio, mediante Resolución Nº 466, de fecha 27 de mayo de 2014. Por último formula reserva del caso federal.

Sustanciado el recurso, a fs. 22/28 de autos lo contesta la Dra. (S/N) en representación de los Sres. (S/N) y (S/N) solicitando su rechazo por los fundamentos que esgrime y a los que me remito en honor a la brevedad. Formula reserva del caso federal.

A fs. 29 de autos se ordena la acumulación del Expte. Nº 14.511/19 al presente recurso.

A fs. 61 de autos el Dr. (S/N), en representación de la Comunidad Indígena (S/N) interpone recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria.

Se agravia por la resolución aclaratoria sosteniendo que se falló extra petita pues, la cuestión a tratar era, únicamente, la citación de oficio del juez a su parte. Agrega que el ad quem no puede producir en su decisorio la apreciación y valoración de la intervención de un tercero cuando la base temática de la litis no contenía dicho temario ni la propia comunidad ha tenido instancia alguna para defender su interés.

Sostiene una lesión a la garantía del debido proceso y del derecho de defensa e igualdad. Entiende se le niega el derecho a presentarse en el futuro sin fundamentación válida alguna.

Concluye sosteniendo que debe hacerse lugar al recurso debiendo el fallo limitarse a resolver sólo la citación de oficio del juez a quo y no avanzar en el decisorio sobre el derecho a presentarse como tercero interesado a futuro. Formula reserva del caso federal.

Sustanciado el recurso a fs. 135/140 de autos contesta la Dra. (S/N) en representación de los actores oponiéndose a la procedencia del recurso con expresa imposición de costas. Formula reserva del caso federal.

A fs. 148 de autos se integra la Sala del Superior Tribunal de Justicia.

Sustanciado el recurso deducido por la Comunidad Aborigen, a fs. 162/163 vta. la Dra. (S/N), en representación del Estado Provincial, contesta el recurso considerando que los agravios deben ser atendidos disponiendo, que no corresponde vulnerar el derecho de la Comunidad a presentarse como tercero interesado en cualquier etapa del proceso. Formula reserva del caso federal.

A fs. 169/179 de autos emite dictamen la Señora Fiscal General Adjunto, por lo que la causa se encuentra en estado de resolver.

Adelanto opinión, compartiendo el dictamen fiscal, en el sentido que corresponde rechazar los recursos de inconstitucionalidad deducidos.

En cuanto al recurso deducido por el Estado Provincial resulta que se agravia porque el Tribunal ad quem, en la sentencia recurrida, resolvió revocar la resolución del juez a quo de fecha 20 de marzo del 2017 en donde ordenó de oficio la integración de la litis de la parte demandada con la Comunidad Indígena (S/N).

Para la adecuada resolución del recurso deducido es conveniente analizar los antecedentes de la causa.

Que por Expte. Nº B-133.014/05 caratulado “Sumarísimo por Deslinde, Amojonamiento y Mensura: (S/N) “ los actores pretenden reglar definitivamente el límite controvertido (Naciente: con terminación de las Lomas Bajas del Cañón de la Quebrada del Rodeo) del inmueble ubicado en el Departamento de Tilcara, Dto. La Banda, Finca Cortaderas. Al contestar demanda el Estado Provincial opone –entre otras- excepción de falta de legitimación pasiva por falta de integración de la litis, litis consorcio necesario, haciendo referencia a los titulares registrales que tienen derecho a la defensa de sus límites, posesiones y demás derechos adquiridos. Opone entre otras defensas excepción de prescripción adquisitiva, por ser el legítimo dueño de las tierras cuyo dominio detenta, por haber operado la prescripción adquisitiva veinteañal.

Que en sentencia de fecha 19 de setiembre del 2008 la Cámara de Apelaciones resolvió hacer lugar al recurso y revocar la sentencia del juez a quo disponiendo que, de conformidad al art. 522 y 527 del C.P.C., el juez que entiende en la causa establezca un plazo prudencial para que el actor deduzca en dichos autos la acción que se considere con derecho, bajo apercibimiento de que si no lo hiciere se desaprobarían las

operaciones de pericia realizadas. En 20 de noviembre del 2012 dicha Sala dispuso "Ordenar la acumulación a la presente causa del Expte. Nº B-241.949 "Demanda Reivindicatoria en Expte. B-133.014/05…" debiendo continuar el trámite según su estado y resolver conforme a los hechos acreditados en la causa en una sola sentencia las pretensiones deducidas en las dos acciones instauradas. Por ello se encuentran acumuladas ambas causas.

Ahora bien, a fs. 399 del Expte. Nº B-133.014/05 se presentó el Dr. (S/N), en representación de la Comunidad Aborigen (S/N), solicitando franqueo de la causa para ejercer la defensa técnica de su mandante y, en fecha 16/12/2013 se lo tuvo por presentado y por parte. Deducida aclaratoria por parte de la Dra. (S/N), en fecha 21 de febrero del 2014 el juez a quo resolvió, revocar el proveído, por asistirle razón a la Dra. (S/N) ya en los obrados, no es parte la Comunidad Aborigen (S/N) ni fue, al menos hasta la fecha, citada como tercero (fs. 406). Proveído firme y consentido.

Por otra parte, por Expte. Nº B-241.949/10 los actores dedujeron demanda reivindicatoria en Extep. B-133.014/05 contra el Estado Provincial. Al contestar demanda el Estado Provincial opone falta de legitimación pasiva por falta de integración de la litis pero, no hace mención ni cita a la Comunidad Aborigen.

A fs. 198 de la causa principal se tiene por presentado al Dr. (S/N) en representación de la Comunidad Aborigen (S/N) y se franquean las actuaciones. A fs. 207 de autos la Comunidad Aborigen dio cuenta que no se presentó como tercero, ni fue citada como tercero y no es parte por lo que, la sentencia no resultará extensiva a su parte. Por ello, en proveído de fecha 18 de abril del 2016 el juez a quo dejó sin efecto la participación de la Comunidad (fs. 208), proveído firme y consentido.

Recién con posterioridad, en fecha 20 de marzo del 2017 el juez a quo resuelve, en virtud de las consideraciones realizadas en el Expte. Nº B-245.401/10 caratulado "Desalojo: (S/N) c/ (S/N)" revocar por contrario imperio el proveído de fecha 18/04/16 y, en virtud de los dispuesto por el art. 295 del C.P.C., ordenó de oficio la integración de la litis de la parte demandada con la Comunidad Indígena (S/N), ordenando la recaratulación de la causa.

En la sentencia que es motivo del recurso de inconstitucionalidad, la Cámara de Apelaciones dejó sin efecto el proveído recurrido y la integración con la Comunidad Aborigen.

Que el Estado Provincial en su memorial de agravios formula los mismos argumentos que en la instancia anterior, pretendiendo la participación de la Comunidad Aborigen, sin hacerse cargo de los fundamentos de la sentencia recurrida, resultando insuficiente la mera disconformidad con lo decidido por el juzgador para sustentar el recurso.

Por lo demás, el Tribunal ad quem ha expresado fundamentos fácticos y jurídicos suficientes para sustentar sus conclusiones, sin que las alegaciones del recurrente, tengan entidad suficiente para habilitar esta vía excepcional.

Cabe señalar que la resolución de la Cámara de Apelaciones es consecuencia de proveídos firmes y consentidos por las partes por lo que no se puede volver sobre cuestiones ya resueltas en virtud del principio de preclusión procesal.

Por otra parte, ambas causas son conexas y la posición asumida por el Estado Provincial aparece contradictoria con la contestación de demanda que formulara en el juicio de mensura.

En cuanto a la sentencia recaída en el juicio de desalojo, que cita el juez de primera instancia, no resulta contradictoria con lo resuelto en el presente. En primer término porque dicha sentencia, como lo dijimos en numerosas oportunidades, no prejuzga sobre el dominio o posesión, pues rechaza el desalojo dejando expedita la vía para que las partes promuevan la demanda a que se crean con derecho (art. 391 del C.P.C.). Más aún si bien el juez consideró la posibilidad que le asiste a la accionante de la presente causa de requerir la integración de la litis en la demanda reivindicatoria, con todos aquellos que considere que han realizado actos de desapoderamiento, en el caso, tanto la actora como la Comunidad Aborigen se oponen a tal integración.

Mas aún, conforme quedó trabada la litis y las postulaciones procesales de las partes no es posible volver sobre el planteo efectuado.

Lo resuelto de ninguna manera contradice la sentencia dictada por este Superior Tribunal de Justicia, en voto de mi presidencia, registrado en L.A. Nº 2, Fº 908/910. Nº 253 puesto que, allí no se cuestionaba la integración de la litis por parte de la Comunidad Aborigen. Por otro lado el juicio de desalojo no resulta la vía idónea para debatir ni dilucidar cuestiones relativas a la posesión o dominio sobre el inmueble.

En definitiva, conforme lo señalado, la sentencia recurrida de ninguna manera afecta el debido proceso legal de las partes.

Lo dispuesto tampoco implica desconocer los derechos de las comunidades indígenas con identidad cultural conforme lo reconoce el art. 75 de la Constitución Nacional.

Por todo ello, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por la Dra. (S/N), en representación del Estado Provincial, confirmando la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial en fecha 22 de diciembre del 2017 y su aclaratoria.

Imponer las costas a la recurrente vencida.

En cuanto al recurso deducido por la Comunidad Aborigen no se advierte un perjuicio atendible y actual puesto que, el recurrente oportunamente dio cuenta que no se presentó como tercero, ni fue citado como tercero ni es parte por lo que, la sentencia no le resultará extensiva.

En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho “Cabe señalar que cuando los efectos de la cosa juzgada ha de extenderse a otro interesado, corresponde su participación en la causa ya que el reconocimiento del carácter inmutable de una decisión judicial requiere la existencia de un trámite anterior contradictorio en el que se hayan respetado sustanciamente las exigencias de la garantía de la defensa en juicio” (Fallos 238:18; 2:55; 261:322) y sentencia de este Superior Tribunal de Justicia -en su anterior integración- registrada en L.A. Nº 58, Fº 1894/1900, Nº 536; L.A. Nº 58, Fº 3994/3995, Nº 1127; entre otros.

Para la admisibilidad del recurso el agravio debe ser actual y no meramente futuro o conjetural (Cfr. Luis A. Rodríguez Saiach, Teoría y Práctica de las Nulidades y Recursos Procesales, T. 2, Ed. Gowa, Pág. 183).

Conforme lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por el Dr. (S/N), en representación de la Comunidad Aborigen (S/N), confirmando la resolución de la Sala II, de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial y su aclaratoria.

En cuanto a las costas se imponen al recurrente vencido. Asimismo corresponde diferir la regulación de honorarios profesionales de los letrados intervinientes hasta tanto exista base económica para efectuarla y ocurra lo propio en la instancia anterior.

Las Dras. (S/N) y (S/N) adhieren al voto del Dr.(S/N).

Por ello, la Sala I -Civil y Comercial y de Familia- del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy,

RESUELVE:

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por la Dra. (S/N), en representación del Estado Provincial, confirmando la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial en fecha 22 de diciembre del 2017 y su aclaratoria.

2º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por el Dr. (S/N), en representación de la Comunidad Aborigen (S/N).

3º) Imponer las costas de ambos recursos a los recurrentes vencidos.

4º) Diferir la regulación de honorarios profesionales de los letrados intervinientes hasta tanto exista base económica para efectuarla y ocurra lo propio en la instancia anterior.

5º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dr. (S/N); Dr. (S/N); Dra.(S/N).

Ante mí. Dra. (S/N)- Secretaria Relatora

Expediente N° CA-14163/2017

Órgano: **Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia.**

Libro de acuerdo: **3**.

Número Sentencia: **135.**

Fecha: **26/9/2018.**

Competencia: **Recursiva.**

Voces Jurídicas: **COMUNIDADES ABORIGENESRESOLUCION ADMINISTRATIVAAMPARO PRECAUTORIO.**

TEMAS: COMUNIDADES ABORÍGENES. AMPARO PRECAUTORIO. ELECCIÓN DE AUTORIDADES. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA.

Libro de Acuerdos Nº 3, Fº 529/533, Nº 135. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho, los señores jueces de la Sala III Contencioso Administrativa y Ambiental del Superior Tribunal de Justicia, doctores (S/N), (S/N) y (S/N), bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. Nº CA-14.163/2017 caratulado: Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en C-095.712/2017 (Tribunal Contencioso Administrativo -Sala I-Vocalía 2) Amparo precautorio: Comunidad Aborigen (S/N) c/ Poder Ejecutivo – Secretaría de Pueblos Indígenas".

El Dr. (S/N) dijo:

1º) Que, la Sala I del Tribunal Contencioso Administrativo resolvió, en fecha 25 de Septiembre del 2017, rechazar la acción de amparo precautorio interpuesta por la Comunidad Aborigen (S/N) en contra del Estado Provincial y con el fin de suspender la Resolución Nº 105-SPI-17.

2º) Que, para así decidir, el a-quo sostuvo que no se advertía la existencia de un perjuicio irreparable o de difícil reparación ulterior susceptible de ser removido por la vía del amparo precautorio.

El sentenciante entendió que el acto en crisis no afectaba ni vulneraba los derechos de la Comunidad Aborigen (S/N) en cuanto la misma podía seguir ejerciendo los actos que considerare oportunos.

3º) En contra de ese pronunciamiento, a fs. 9/18 de autos, la Dra. (S/N), en nombre y representación de la Comunidad Aborigen (S/N), interpone recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria.

Se agravia en primer lugar por considerar que el sentenciante ha hecho una apreciación desacertada respecto de la procedencia del amparo, vulnerando, dice, la doctrina existente sentada por este Superior Tribunal de Justicia en relación a los recaudos de procedencia de las medidas cautelares.

Entiende que el acto impugnado, no obstante su carácter declarativo, posee amplios efectos jurídicos pues constituye el reconocimiento viciado de las autoridades comunales que surgen de un proceso electoral nulo con sustento en un estatuto inválido.

Prosigue manifestando que concurren en el caso los presupuestos de procedencia de la presente acción y en particular el peligro de daño irreparable o de difícil reparación ulterior en caso de ejecutarse el acto impugnado. Alega que la sentencia omite considerar este peligro ya que, dice, en el caso surge que la decisión de la Secretaría, no obstante tratarse de una toma de conocimiento de un acto eleccionario comunal, a la luz del derecho indígena, surte plenos efectos jurídicos, agravándose el conflicto interno de la

comunidad. Relata hechos de violencia que a su entender son fruto del acto dictado por la Secretaría de Pueblos Indígenas.

En su segundo agravio, la recurrente manifiesta que la inexistencia de perjuicio irreparable o de difícil reparación ulterior como sustento de rechazo de la medida cautelar implica arbitrariedad de la sentencia por absurda apreciación y valoración de la prueba.

Considera que existen omisiones y desaciertos de gravedad extrema en lo atinente a la conclusión arribada por el a quo, a quien, dice, de manera alguna se le ha solicitado la solución de conflictos internos y menos aún cuestionado el otorgamiento de personería jurídica aborigen. Manifiesta en tal sentido que sólo se había indicado la existencia de los mencionados conflictos como una prueba del vicio que ostenta el acto irregular de reconocimiento de autoridades comunales, cuya suspensión cautelar fuera solicitada.

Entiende que la Resolución Nº 105-SPI-17 dictada por la Secretaría de Pueblos Indígenas es nula, constituyéndose, dice, el amparo precautorio en la vía judicial idónea para suspender los efectos de un acto administrativo viciado. Considera que se ha soslayado considerar que la Resolución en crisis vulnera principios generales administrativos como el de debido procedimiento previo, del debido proceso adjetivo y de verdad objetiva o material. Ello, manifiesta, pues se ha vulnerado el proceso electoral ya que se ha partido de la premisa que las autoridades convocantes del mismo no revestían la calidad de autoridades legítimamente elegidas. Alega que cabe colegir la nulidad del acto objeto del recurso en razón del incumplimiento del procedimiento de contralor del proceso eleccionario de las supuestas nuevas autoridades comunales llevado a cabo por la Secretaría de Pueblos Indígenas.

En su tercer y último agravio, la recurrente manifiesta que la sentencia es arbitraria por vulnerar el principio del debido proceso y de defensa y de tutela judicial efectiva.

Entiende que al verse imposibilitada su parte de participar de manera útil en el procedimiento se le ha impedido la tutela judicial efectiva, implicando así, dice, una clara afrenta por tratarse de una cuestión indígena, omitiendo adoptar una decisión cautelar con la urgencia y celeridad que la problemática planteada ameritaba.

4º) Agregado el juicio principal, se corrió traslado del recurso, el cual fue contestado por la Dra. (S/N) en representación del Estado Provincial (fs. 27/29 vta.).

Previa narración de los antecedentes del recurso, solicitó se rechace el mismo por las fundamentaciones vertidas, a las cuales se remite para abreviar.

5º) Remitidos los autos al Ministerio Público Fiscal, emite dictamen el Sr. Fiscal General, Dr. (S/N), quien propicia rechazar el recurso de inconstitucionalidad tentado (fs. 34/37 vta.).

6º) Integrada la Sala, corresponde resolver la cuestión traída a debate.

7º) En lo que interesa, de las actuaciones administrativas agregadas por cuerda separada se desprende el procedimiento seguido a fin de elegir autoridades en el seno de la Comunidad Aborigen (S/N).

En tal sentido, se realizó la convocatoria a Asamblea Ordinaria a efectuarse el día 15 de Enero del 2017 a los miembros de la comunidad (fs. 14/40 y fs. 47). Asimismo, se acompañaron planillas del censo correspondiente al año 2017 a efectos de tener conocimiento de aquellos miembros habilitados para emitir su voto.

Mediante acta Nº 633, acompañada en las actuaciones administrativas, se procedió a la elección de las autoridades del Consejo Comunitario el día 15 de Enero del año 2017.

El Registro Provincial de Comunidades y Organizaciones de Pueblos Indígenas aconsejó dictar el acto administrativo con el objetivo de tomar conocimiento de las nuevas autoridades de la Comunidad Maymaras (fs. 134).

Finalmente, la Secretaría de Pueblos Indígenas resolvió, en fecha 19 de Mayo del 2017, tomar conocimiento de la elección realizada por la Comunidad Aborigen (S/N) con respecto a sus nuevas autoridades (Resolución Nº 105-SPI-17).

En fecha 22 de Mayo del 2017 se presentó en las actuaciones administrativas la Sra. Rita Mamaní, quien manifestó en dicha oportunidad ser Presidente de la Comunidad Aborigen (S/N), acompañanado fotocopia de acta de elección de autoridades, de convocatoria a los miembros censados, entre otros documentos.

Posteriormente, en fecha 31 de Mayo del 2017, la Sra. (S/N) presentó recurso de revocatoria contra la Resolución Nº 105-SPI-2017, invocando que la misma vulneraba garantías, derechos, principios y el procedimiento administrativo. En su recurso, la actora alegó que la Secretaría de Pueblos Indígenas emitió una resolución que avaló una comisión ilegítima en tanto, dice, la Resolución Nº 033-SDDHH-15, dictada por la Secretaría de Derechos Humanos, había tomado conocimiento de que ella era la presidenta de la Comunidad Aborigen (S/N). Recalca que su parte no tuvo intervención alguna en el procedimiento instaurado por la Sra. (S/N) y que derivara en la resolución atacada.

En fecha 14 de Junio del 2017, la Secretaría de Pueblos Indígenas rechazó el recurso de revocatoria interpuesto contra la Resolución Nº 105-SPI-2017 por entender que las causales invocadas para pedir la revocación del acto administrativo atacado no se encontraban establecidas en el artículo 119 de la Ley Nº 1886 (legitimidad u oportunidad).

La parte actora interpuso recurso jerárquico ante el Sr. Gobernador, el cual, teniendo en cuenta la probanza de autos, se encuentra en trámite de resolución.

Finalmente, la Sra. (S/N) interpuso demanda de amparo precautorio a los efectos de suspenderse los efectos de la resolución Nº 105-SPI-2017.

Ante ello, el Tribunal a quo –como se indicó- determinó que no se reunían los requisitos exigidos para la acción de amparo precautorio establecidos pretorianamente por este Superior Tribunal de Justicia. Específicamente, el sentenciante consideró que no se advertía la existencia de un perjuicio irreparable o de difícil reparación ulterior susceptible de ser removido por la vía del amparo precautorio.

Contra el resolutorio del a quo, la Comunidad Aborigen (S/N) interpuso el presente recurso, enfatizando que los requisitos ut supra indicados se encontraban satisfechos, por lo que debía hacerse lugar a su requisitoria, lo que constituye la materia ahora a resolver.

Corresponde recordar que, en el marco de la figura del amparo precautorio a que se refirió este Alto Cuerpo en autos "(S/N) c/ Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy", del 8 de noviembre de 1990 (L.A. Nº 39, Fº 214/217, Nº 94), se hizo mérito a que así como los particulares que hubieran agotado la vía administrativa y recurrieren a los estrados judiciales podían solicitar la suspensión del acto administrativo mediante una petición judicial contemporánea a la acción contenciosa administrativa (artículo 30 de la Ley Nº 1888/48), del mismo modo debían tener esa posibilidad cuando no hubiere agotado la vía, recurriendo en este caso al amparo precautorio. En la sentencia se mencionaron para ello los siguientes requisitos: 1) no encontrarse franqueada la vía contencioso administrativa; 2) que se demuestre peligro de daño irreparable o de difícil reparación ulterior para el caso de ejecutarse el acto; y 3) que se preste fianza suficiente.

Es dable recordar también que esta misma sala, en un fallo reciente, ha dejado en claro que "para que proceda el dictado de una cautelar en el marco de un amparo, deben verse cumplidos los recaudos de toda medida cautelar, debiendo tener los argumentos y pruebas que arrima el peticionante una consistencia tal que permita al juez valorar la razonable probabilidad que tal derecho exista" (L. A. Nº 1, Fº 162/165, Nº 52). Así lo exige el artículo 8 de la ley Nº 4442/89 (reglamentaria de la acción de amparo) al admitir medidas cautelares "para hacer cesar los actos aparentemente lesivos, con el objeto de evitar un perjuicio inminente y de consecuencias irreparables".

Es necesario verificar si estos extremos se encuentran reunidos en autos.

El Tribunal a quo ha concluido que la recurrente no había logrado probar el perjuicio irreparable que la ejecución de la Resolución Nº 105-SPI-17 traería aparejado a su comunidad. Y dicha valoración fue sustentada por el sentenciante en base a la prueba obrante en los autos principales y en las actuaciones administrativas acompañadas pertinentemente.

El acto administrativo dictado por la Secretaría de Pueblos Indígenas, a través del cual tomó conocimiento de las nuevas autoridades elegidas en la Comunidad Aborigen (S/N) -que se encuentra cuestionado por la

recurrente-, es evidentemente diferente del acto eleccionario propiamente dicho cumplido en esa comunidad. En lo que interesa, de las actuaciones que obran por cuerda separada al presente recurso no se observa impugnación alguna contra esta elección de autoridades. Ni tampoco se invoca que esa impugnación haya sido efectuada. En estas condiciones, un acto administrativo que "toma conocimiento" no resulta ser "aparentemente lesivo" de derecho alguno. Tal como lo decidiera el sentenciante de grado, no se encuentra probado el peligro de daño irreparable o de difícil reparación ulterior en la resolución atacada, con lo que no procede hacer lugar a un amparo precautorio.

En este punto fundamental, los argumentos vertidos por la recurrente en su libelo que da inicio a este recurso tampoco contienen una crítica razonada y concreta al contenido de la sentencia en crisis. Constituyen, apenas, la expresión de una mera disconformidad, con lo que no resultan idóneos para habilitar esta instancia extraordinaria de acuerdo a doctrina sentada por este Superior Tribunal de Justicia. Sabido es que la tacha de arbitrariedad sólo se justifica en los supuestos de pronunciamientos dictados en apartamiento inequívoco de las normas que rigen el caso, desprovistos de todo fundamento o emitido en abierta contradicción con las constancias de la causa; nunca puede tener favorable acogida cuando en el decisorio se han expresado fundamentos suficientes con aplicación a las circunstancias acreditadas en la causa.

Por todo ello, debe rechazarse el recurso de inconstitucionalidad incoado en contra de la sentencia de fecha 25 de Septiembre del 2017.

Con respecto a las costas del presente recurso, las mismas deben imponerse a la recurrente vencida, de acuerdo a lo establecido en el art. 102 del Código Procesal Civil, principio general del que no encuentro razón para apartarme.

Propongo que los honorarios se regulen conforme lo dispuesto en L.A. Nº 21, Fº 05/07, Nº 03, es decir en la suma de $5000 para Fiscalía de Estado y de $3500 para la Dra. (S/N). A dichas sumas deberá añadirse el impuesto al valor agregado, en caso de corresponder.

Tal es mi voto.

El Dr. (S/N) dijo:

No habiendo participado en el dictado de la sentencia registrada al L.A. 1, Fº 162/165, Nº 52 y no siendo esta la ocasión de fijar postura respecto de los recaudos necesarios para la procedencia del amparo precautorio, adhiero al relato de los hechos y solución propuestos por el Sr. Presidente de trámite por los fundamentos expresados por el Tribunal de grado, que constituyen una derivación razonada del derecho vigente, conforme los hechos acreditados en la causa.

Tal es mi voto.

La Dra. (S/N) adhiere al voto del Dr. (S/N).

Por lo expuesto, la Sala III Contencioso Administrativa y Ambiental del Superior Tribunal de Justicia,

Resuelve:

I. Rechazar el recurso de inconstitucionalidad incoado por la Dra. (S/N), en representación de la Comunidad Aborigen (S/N), en contra de la sentencia de fecha 25 de Septiembre del año 2017.

II. Imponer las costas de la presente instancia a la recurrente vencida.

III. Regular los honorarios profesionales de Fiscalía de Estado y de la Dra. (S/N) en las sumas de $5000 (pesos cinco mil) y $3500 (pesos tres mil quinientos), respectivamente, más el impuesto al valor agregado en caso de corresponder.

IV. Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dr. (S/N); Dr. (S/N); Dra.(S/N).

Ante mí: Dra. (S/N) – Secretaria Relatora.

Expediente N° CA-12363/2016.

Órgano: **Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia.**

Libro de acuerdo: **3**.

Número Sentencia: **152.**

Fecha: **24/10/2018.**

Competencia: **Recursiva.**

Voces Jurídicas: **COMUNIDADES ABORIGENES DENEGACION DEL RECURSORECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL.**

(Libro de Acuerdos Nº 3, Fº 605/607, Nº 152). San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, los señores Jueces de la Sala III Contencioso Administrativa y Ambiental del Superior Tribunal de Justicia, doctores (S/N), (S/N) y (S/N), bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. Nº CA-12.363/16, caratulado: "Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expte. Nº C-054.618/2015 (Cámara en lo Civil y Comercial - Sala II - Vocalía 4) Cautelar – Prohibición de innovar: Comunidad Aborigen (S/N) c/ Compañía Minera (S/N) y (S/N)" y,

El Dr. (S/N) dijo:

La sentencia de este Superior Tribunal registrada al L.A. 3, Fº 163/180, Nº 40 (fs. 246/263) rechazó el recurso deducido por la Comunidad Aborigen (S/N) confirmando la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara Civil y Comercial.

A su respecto, deduce recurso extraordinario federal la Dra. (S/N) (fs. 71/79).

Refiere que la sentencia atacada niega lisa y llanamente los derechos federales planteados por su parte al disponer el levantamiento parcial de la medida de no innovar. Señala que de esa forma el decisorio atacado no aplica ni efectiviza las leyes 26.160 y 27.400, que son de orden público y que instrumentan el Convenio 169 de la OIT.

Sostiene que la cuestión planteada en el presente, es de naturaleza federal en los términos del artículo 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, y que las medidas cautelares son susceptibles de apelación extraordinaria cuando producen un perjuicio de imposible reparación ulterior. Así el fallo en crisis vulnera nuestra carta magna y diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional tornando al mismo de arbitrario.

Indica que, al rechazar la presentación de la declaración jurada, este Tribunal deja de lado las disposiciones constitucionales y de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, toda vez que dicha presentación es a los fines de acreditar la ausencia de bienes muebles e inmuebles de la Comunidad Aborigen (S/N). Por lo tanto es imposible dar cumplimiento con una caución real para el mantenimiento de la medida cautelar. Además realiza otras consideraciones a las que me remito para ser breve.

Corrido el traslado, a fs. 305/312 de autos contesta el Dr. (S/N) en nombre y representación de Compañía Minera (S/N).

Luego de hacer referencia a los antecedentes fácticos de la causa, señala que el recurso extraordinario no puede prosperar toda vez que el decisorio impugnado no es definitivo ni asimilable a tal, ya que este recae sobre una medida cautelar, que tiene siempre carácter provisional.

Sostiene que los agravios expresados por la recurrente se centran en la valoración de la prueba –la cual resulta irrevisable en esta instancia- y en meras discrepancias con lo decidido, con lo cual de ningún modo alcanzan para admitir el remedio tentado.

A fs. 324 contesta traslado la Dra.(S/N), en representación del Estado Provincial, en términos a los que me remito por razones de brevedad.

A fs. 326 de autos, comparece a evacuar el traslado conferido el Dr. (S/N) –que a su vez lo hace en carácter de apoderado de (S/N)- solicitando la denegación del remedio federal con expresa imposición de costas a su promotor.

Corresponde entonces que este Superior Tribunal se expida con relación a su admisibilidad, constatando si reúne los requisitos formales necesarios al efecto y si cuenta con fundamentos que justifiquen la habilitación de la instancia extraordinaria.

En virtud del análisis de los extremos previstos en la Acordada Nº 4/2007 de nuestro Máximo Tribunal y adelantando opinión, diré que debe denegarse la concesión del remedio.

Así, señalo que el mismo ha sido interpuesto en término y su extensión no supera los límites fijados al efecto en la norma de mención.

No obstante ello, resulta de aplicación lo resuelto de modo reiterado por nuestro Máximo Tribunal: la doctrina de la arbitrariedad no cubre las discrepancias de las partes con el resultado del litigio sino que requiere, por su carácter excepcional, el apartamiento inequívoco de la solución normativa o una decisiva carencia de fundamentos (CS, 7/5/85, Rep. ED, t. 19, p. 1139, Nº 498). No tiene por objeto, entonces, abrir una tercera instancia ordinaria donde puedan discutirse decisiones que se estimen equivocadas (Fallos, 302:1565; 304:268; 304:376) ni pretende en manera alguna sustituir el criterio de los jueces de la causa por el de la Corte (Fallos 290:95), por lo que se justifica la solución propiciada.

Las costas habrán de imponerse por el orden causado (art. 102, 2º párrafo del C.P.C.) difiriendo la regulación de los honorarios profesionales.

El Dr. (S/N) dijo:

Disiento respetuosamente con el voto que antecede del Sr. Presidente de trámite.

Conforme a la competencia que este Superior Tribunal de Justicia tiene para efectuar un juicio de admisibilidad formal (segundo párrafo del art. 257 del CPCCN) dentro de la finalidad del Recurso Extraordinario Federal previsto en la ley 48 para abrir la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su función revisora de las sentencias de los tribunales inferiores, cabe considerar que se han cumplido los recaudos para su favorable concesión a la parte recurrente.

Las cuestiones expuestas en el recurso constituyen un supuesto que verifica una cuestión federal que abre camino a la procedencia formal de admisibilidad del Recurso Extraordinario Federal. Sin que ahora deba realizarse un nuevo examen de lo resuelto, se observa que se encuentran en ellas involucradas de modo directo el ambiente, cuestiones vinculadas al derecho de comunidades aborígenes y la protección de bosques nativos. Así, en el decisorio impugnado están en juego el alcance aplicativo de normas constitucionales como los arts. 41, 43 e inc. 17 del art. 75 de la CN, junto a disposiciones de las leyes 26.160 y 26.331 que son regulaciones de aquellas cuestiones constitucionales, y, por eso mismo, las normas tienen una relación inmediata y directa con las cuestiones que fueron traídas a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia.

Corresponde remarcar que por medio del Recurso Extraordinario Federal concierne a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la última palabra sobre la interpretación de las normas de la Constitución Nacional (cf. Fallos 1:34; 154:5, entre muchos otros).

Tal comprobación es suficiente para hacer lugar a la concesión del Recurso Extraordinario Federal interpuesto en contra de la sentencia L.A. Nº 3, Fº 163/180 Nº 40 de fs. 246/263, por la parte actora cautelante.

Tal es mi voto.

La Dra. (S/N) adhiere al voto del Dr. (S/N).

Por ello, la Sala III Contencioso Administrativa y Ambiental del Superior Tribunal de Justicia,

Resuelve:

1. Denegar la concesión del recurso extraordinario federal tentado por la Dra. (S/N) respecto de la sentencia registrada al L.A. 3, Fº 163/180, Nº 40.

2. Imponer las costas por el orden causado y diferir la regulación de los honorarios profesionales.

3. Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dr. (S/N); Dr.(S/N); Dra.(S/N).

Ante mí: Dra. (S/N) – Secretaria Relatora.

GM

Expediente N° CF-12867/2016

Órgano: **Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia.**

Libro de acuerdo: **3.**

Número Sentencia: **160**.

Fecha: **6/7/2018.**

Competencia: **Recursiva.**

Voces Jurídicas: **ACCION DE AMPARO COMPETENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA COMUNIDADES ABORIGENES.**

TEMAS: ACCIÓN DE AMPARO. COMUNIDADES ABORÍGENES. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. COMPETENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. BOSQUES. CITACIÓN DE TERCEROS.

(Libro de Acuerdos Nº 3, Fº 620/623, Nº 160). San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los seis días del mes de julio de dos mil dieciocho, la Sala I -Civil, Comercial y de Familia- del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los Dres. (S/N) , (S/N) y (S/N), bajo la presidencia de la nombrada en primer término, vieron el Expte. Nº CF-12.867/16, caratulado: "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-056.529/15 (Cámara en lo Civil y Comercial -Sala II- Vocalía 4) Amparo: Comunidad Aborigen (S/N) c/ Compañía Minera (S/N), (S/N) y (S/N)".

La Dra. (S/N) dijo:

La Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial en sentencia de fecha 12 de mayo de 2.016, resolvió hacer lugar a los planteos de los Dres. (S/N) y (S/N); revocar el tercer párrafo del proveído del 10 de febrero de 2.016 y en consecuencia admitir la excepción articulada, declarar la incompetencia del Tribunal y disponer que la Comunidad Aborigen (S/N) ocurra por la vía contencioso administrativa que corresponda. Impuso costas a la vencida y difirió la regulación de honorarios profesionales.

Para así resolver, en lo que aquí interesa, sostuvo al señalar los antecedentes de la causa, que la actora dedujo acción de amparo en contra de las firmas "(S/N)", "(S/N) y (S/N)." y de (S/N), solicitando "se ordene a los demandados hacer efectivos los derechos de participación y consulta a fines de expresar el consentimiento previo, libre e informado por parte de los integrantes de la Comunidad Aborigen con relación a los Planes de Ordenamiento Predial y Planes de Manejo Forestal Sustentable solicitados por las empresas demandadas ante la Secretaría de Gestión Ambiental de la Provincia de Jujuy en el territorio determinado por el equipo técnico del INAI a través de la Ley 26.160 y sus prórrogas". Agregó que el proyecto de Ordenamiento Predial y Planes de Manejo Forestal requeridos por las empresas ante Medio Ambiente, había sido desconocido al no respetar las pautas del Plan de Ordenamiento Territorial Adaptativo

para Áreas Boscosas de la Provincia (Resolución Nº 81/2009 de la Dirección de Políticas Ambientales y Recursos Naturales). Que por todo ello, requirió al Tribunal, se arbitren los mecanismos necesarios para efectivizar el derecho de participación en los expedientes administrativos, en los procesos administrativos iniciados o a iniciarse.

Sobre la base de los hechos expuestos y el derecho invocado por la actora como fundamento de su pretensión, determinó que la cuestión era de competencia administrativa, por cuanto los Planes de Ordenamiento Predial y Planes de Manejo Forestal Sustentable y todo procedimiento administrativo referido a ello en los cuales se pretendía tomar participación, devenían de una decisión administrativa, de actos y/o procedimientos de la autoridad de aplicación ambiental provincial (ex Dirección de Desarrollo Sustentable) encontrándose el derecho subjetivo que se manifestaba lesionado establecido por normativa administrativa preexistente (Resolución Nº 81-DPAyRN-2009).

Consecuentemente, el Tribunal declaró su incompetencia para entender en la causa, a mérito de lo previsto en el art. 25 del C.P.C., art. 4 inc. b Ley N º 4.222 [1] , art. 70 L.O.P.J., art. 2 de la Ley Nº 5.015, art. 4 de la Ley Nº 5.607, Resolución Nº 81/09 de la DPAyRN, ordenando a la presentante ocurrir por la vía contencioso administrativa.

En contra de este pronunciamiento, la Dra. (S/N) el representante legal de la Comunidad Aborigen (S/N), interpuso recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria.

Manifiesta que interpuso amparo colectivo ambiental ante la Cámara Civil y Comercial, a los fines de que se ordene a los demandados la "visibilización" de la Comunidad Aborigen (S/N) en los planes de ordenamiento predial, permisos de forestación, y toda otra acción administrativa iniciada o a iniciarse en la Ex Secretaría de Gestión Ambiental, actual Ministerio de Ambiente, para lograr la participación, consulta y consentimiento de los pueblos originarios según Convenio de la OIT ratificado por Ley 24.071.

Afirma que el ordenamiento predial y los permisos presentados por las empresas ante la autoridad administrativa de aplicación, son violatorios de la normativa nacional e internacional de protección de D.D.H.H. de los Pueblos Indígenas, Ley 26.331 de Protección del Bosque Nativo, Ley 25.675 de Protección del Ambiente y de la Resolución Nº 81/09, porque omite mencionar en la declaración jurada la existencia de la comunidad aborigen, lo que no refleja la realidad social del territorio que pretenden ordenar.

Se agravia porque el a-quo preliminarmente rechazó la incompetencia como excepción previa, para luego sí hacer lugar al planteo de fondo de incompetencia interpuesta en el reclamo ante el cuerpo, pero al sentenciar dispuso admitir la excepción articulada, siendo que la ley 4.442 prohíbe el planteo de excepciones previas, lo cual –según entiende la actora- los priva de los derechos constitucionales de acceso a la justicia, debido proceso legal, y de los derechos consagrados en los arts. 41, 43 de la Constitución Nacional y 29 de la Constitución Provincial.

Señala que lo que se ataca son las acciones de despojo material e inmaterial que realizan las empresas demandadas contra los miembros de la Comunidad Aborigen (S/N) y que se encuentran debidamente acreditadas en el plexo probatorio.

Expresa que la Cámara Civil y Comercial es competente porque debe impartir justicia, haciendo cesar los derechos vulnerados de su mandante por parte de las personas jurídicas y físicas demandadas, evitando un inminente desalojo de las tierras que ocupan en (S/N).

Aclara que no se demanda al Estado Provincial, porque la vía administrativa ya fue iniciada ante la ex Secretaría de Gestión Ambiental y ante el Ministerio de Ambiente; además la Secretaría de Pueblos Indígenas se encuentra "protegiendo" los derechos de la comunidad como surge del informe que acompaña como "hecho nuevo" que da cuenta de la suspensión de los proyectos aprobados hasta tanto se actualice el ordenamiento territorial de bosque nativo.

Expresa que al tratarse de la protección del hábitat y ambiente que ocupa tradicionalmente la comunidad, el art. 25 del C.P.C. no es encuadrable al caso, y afirma que se aplican los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, Convenio 169 de la OIT, Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas

y Ley Gral. de Presupuestos Mínimos de Protección del Ambiente que disponen el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales sin restricciones. En tal sentido, cita doctrina de la Corte Suprema (Caso: Salas, Dino y otros c/ Salta, provincia de y Estado Nacional s/ amparo. Juicio Originario S.C., S. 1144. XLIV).

Alega que al no estar en funcionamiento el fuero especializado en materia ambiental, correspondía a la Cámara Civil y Comercial el entendimiento de la causa al tratarse de un amparo "entre particulares", afirmando que la competencia originaria de ese tribunal surgía en razón de la pretensión plasmada en la demanda.

Considera que el decisorio impugnado es nulo, porque carece de fundamentación y resulta contradictorio entre lo considerado y resuelto, al decir que las empresas no plantearon la excepción de incompetencia como de previo pronunciamiento sino como derecho de fondo.

Alega que la protección de los Bosques Nativos y de la Reserva de Biosfera de Yungas declarada de interés provincial conforme decreto Nº 5981/2002 es una cuestión que "compete" directamente a la Cámara Civil y Comercial.

Cuestiona la carga en costas a su parte, considerando que mal puede imponerse que una Comunidad Aborigen resulte vencida, entendiendo que se violó normativa constitucional de protección de los pueblos indígenas y el acceso a la jurisdicción.

Por otra parte, formula hecho nuevo y solicita la citación como tercero interesado a la Secretaría de Pueblos Indígenas creada por el ejecutivo provincial mediante decreto Nº 79-G-2015 y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Plantea reserva del caso federal.

A fs. 35 la Dra. (S/N), apoderada de la comunidad indígena, solicita la asignación del recurso a la Sala Ambiental, ya que se trata de un amparo ambiental incoado contra particulares, por lo que dispuse el 23 de septiembre de 2.016 remitir a la Vocalía Nº 5 de la Sala III en lo Contencioso Administrativo y Ambiental de este Tribunal, las presentes actuaciones para su acumulación al Expte. Nº 12.363/16 caratulado: "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en C-054.618/15 (Cámara en lo Civil y Comercial –Sala II- Vocalía 4) Cautelar –Prohibición de Innovar- Comunidad Aborigen (S/N) c/ Compañía Minera (S/N) y (S/N), (S/N) y (S/N)".

Como la Sala III en lo Contencioso Administrativo y Ambiental de este Superior Tribunal, solicitó la reunión del Cuerpo en pleno para dirimir la cuestión de competencia en razón de la materia para entender en el presente recurso, ello motivó de esta Corte en Acuerdo Plenario el dictado de la Resolución registrada en L.A. Nº 2, Fº 11/113, Nº 38, del 5 de diciembre de 2.017 obrante a fs. 51/52, por la cual se declara la competencia de la Sala I Civil y Comercial del S.T.J. para intervenir en el expediente Nº 12.867/16 arriba mencionado.

Recibidos los autos y sustanciado el recurso, a fs. 63/67 vta. el Dr. (S/N) en representación del Sr. (S/N) y (S/N), se opone al progreso del mismo por las razones que indica y a las que remito en honor a la brevedad.

A fs. 78/83 vta. de autos contesta el Dr. (S/N) en representación de Compañía Minera (S/A). solicitando su rechazo por los fundamentos que esgrime.

Integrado el Tribunal, y habiéndose expedido el Sr. Fiscal General, la causa se encuentra en estado de ser resuelta.

Adelanto opinión, apartándome del dictamen del Ministerio Público Fiscal, en el sentido que el recurso deducido no puede prosperar.

Si bien en el caso las pretensiones del amparo han sido interpuestas en contra de particulares, sin que se haya demandado al Estado Provincial, persiguiendo la modificación de los planes de ordenamiento predial presentados por las empresas a fin de que procedan a "visibilizar" la existencia de la Comunidad actora ante el Ministerio de Medio Ambiente, situación que afirma estaría prevista en el art. 9 de la Resolución Nº

81-DPPA y RN-2009 [2], estimo que en la presente causa resulta competente el Tribunal en lo Contencioso y Administrativo.

Ello así, por cuanto el reclamo de la amparista de tomar participación en los Planes de Ordenamiento Predial y Planes de Manejo Forestal Sustentable y todo procedimiento administrativo referente a ello, depende de una decisión administrativa del ente estatal, de actos y/o procedimientos de la autoridad de aplicación ambiental, existiendo en la litis la aprobación de los planes de ordenamiento territorial y en su caso de factibilidad ambiental a nombre de los demandados mediante Resolución Nº 53/14-DPDS de fecha 7 de julio de 2.014 a fs. 267/270 del expte. Nº C-056.529/2015 y Resoluciones Nº 13/2015-DPDS de fecha 13 de febrero de 2.015 a fs. 174/177 y Nº 48/2015-DPDS de fecha 13 de marzo de 2.015 a fs. 169/171 del expte. Nº C-054.618/15 que tengo a la vista, otorgados por la ex Dirección de Desarrollo Sustentable de la entonces Secretaría de Gestión Ambiental.

La naturaleza administrativa de la cuestión propuesta y el carácter público de las normas a aplicar, son los elementos que permiten concluir que ante el fuero administrativo debe discurrir el debate, cualquiera sea la suerte de la pretensión.

Por estas razones, y lo dispuesto por el inciso b) del artículo 4º de la Ley Nº 4.442 que regula el proceso de amparo, la competencia en razón de la materia le corresponde al Tribunal Contencioso y Administrativo.

De lo que resulta que la sentencia recurrida es derivación razonada del derecho vigente conforme constancias obrantes en la causa.

Cabe agregar en referencia al agravio del recurrente por la imposición de costas, que es materia reservada a los jueces de la causa y ajena a esta instancia extraordinaria, y si bien es cierto que tal principio no es absoluto (L.A. N° 44, F° 89/72 N° 37; ídem, 725/726, N° 292; L.A. N° 45, F° 127/130, N° 55; L.A. N° 52, F° 46/49, N° 19) no se configura en autos algún supuesto de excepción que autorice apartarse del principio general contenido en el art. 102 del C.P.C.

Finalmente la pretensión de tratamiento del informe incorporado en las actuaciones administrativas iniciadas por la actora que acompaña como “hecho nuevo” y la citación de la Secretaría de Pueblos Indígenas de la Provincia y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como terceros interesados, debe ser rechazada por improcedente en esta instancia de excepción y a fines de salvaguardar el debido proceso y derecho defensa de los accionados.

Por las razones aludidas, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por la Dra. (S/A) en representación de la Comunidad Aborigen (S/N).

Las costas de esta instancia, deben ser impuestas a la parte recurrente en su carácter de vencida (artículo 102, primera parte del C.P.C.). Diferir la regulación de los honorarios profesionales hasta tanto sean regulados en la instancia anterior.

El Dr. (S/N) y la Dra. (S/N) adhieren al voto que antecede.

Por lo expuesto, la Sala I -Civil, Comercial y de Familia- del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy,

Resuelve:

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por Dra. (S/A) en representación de la Comunidad Aborigen (S/N). Confirmar la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara Civil y Comercial del 12 de mayo de 2.016.

2º) Imponer las costas a la recurrente vencida.

3º) Diferir la regulación de honorarios profesionales hasta tanto sean regulados en la instancia anterior.

4º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Notas al pie:

[1] Por un error de tipeo se consignó Ley Nº "4.222" cuando en realidad quiso decir 4.442 (ley de amparo).

[2] Resolución Nº 81/2009 SGA art. 9: El plan de ordenamiento territorial puede ser modificado a propuesta del titular del predio cuando a criterio de la Autoridad de Aplicación las modificaciones son procedentes.

Firmado: Dra. (S/N); Dr. (S/N); Dra.(S/N).

Ante mí: Dra. (S/N) – Secretaria Relatora

Expediente N° CF-12500/2016

Órgano: **Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia.**

Libro de acuerdo: **2.**

Número Sentencia: **167.**

Fecha: **29/6/2017.**

Competencia: **Recursiva**.

Voces Jurídicas: **COMUNIDADES ABORIGENES PRESCRIPCION ADQUISITIVA PROPIEDAD COMUNITARIA DE LA TIERRA.**

TEMAS: PROPIEDAD COMUNITARIA DE LA TIERRA. COMUNIDADES ABORÍGENES. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS. TRÁMITE. FALTA DE REGLAMENTACIÓN. PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA.

(Libro de Acuerdos Nº 2, Fº 585/587, Nº 167). San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los veintinueve días del mes de junio de dos mil diecisiete, los Sres. Jueces de la Sala I, Civil, Comercial y de Familia del Superior Tribunal de Justicia, Dres. (S/N), (S/N) y (S/N), bajo la presidencia de la nombrada en primer término, vieron el Expte. Nº CF-12.500/16, caratulado: "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº C-054.464/15 (Cámara Civil y Comercial – Sala III – Vocalía 9) Prescripción Adquisitiva de Inmuebles: Comunidad Aborigen (S/N) c/ (S/N) y otro".

La Dra. (S/N) dijo:

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial en fecha 22 de febrero de 2.016, dictó resolución mediante la cual confirmó el decisorio de fs. 259.

Para así resolver, sostuvo que lo dispuesto por Presidencia de Trámite en fecha 30 de noviembre de 2.015 resulta conforme a derecho en tanto no se aparta de la aplicación del artículo 287 del C.P.C. por cuanto al trámite de la prescripción adquisitiva también se le imprime las normas del juicio ordinario oral.

Afirmó que aún cuando la acción promovida en esta causa no es la que deriva de la prescripción adquisitiva contemplada en el Código Civil, el derecho invocado por la actora reconocido en la Constitución Nacional no ha sido objeto de reglamentación, por ello entendió que el trámite que mejor se compadece con la naturaleza de la acción ejercida es la que prevé la ley provincial Nº 5486.

En contra de lo resuelto y su aclaratoria, a fs. 2/4 vuelta de autos, la Dra.(S/N) en representación de la Comunidad Aborigen (S/N) interpone recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria.

Relata la recurrente que si bien la resolución impugnada reconoce expresamente que la pretensión de su mandante no es la de prescripción adquisitiva, sino la instrumentación del artículo 15 inciso 17 de la Constitución Nacional, reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria, luego se aparta de dicha afirmación para ordenar se imprima el trámite correspondiente a la prescripción adquisitiva, con el sólo fundamento de que es el que mejor se corresponde con la naturaleza de la acción interpuesta, omitiendo valorar no sólo el derecho de fondo aplicable a la cuestión planteada sino también el derecho de forma, obligando a su mandante a que lleve un proceso que no es el de la acción que promovió.

Afirma que de tramitarse por un juicio ordinario de prescripción adquisitiva, se condena a su parte a abonar los gastos y honorarios de los servicios de un asistente social, escribano y lo más oneroso, un agrimensor para la confección del plano de mensura para la prescripción adquisitiva, que no serían indispensables en el caso que se tramitara mediante el juicio ordinario oral.

Alega que no se pretende la adquisición del dominio por el transcurso del tiempo sino el reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria, es decir no se persigue la constitución de un derecho sino su reconocimiento en los términos del art. 75 inc. 17 de la C.N., art. 11 del Convenio 169 de la O.I.T., y art. 18 del Código Civil y Comercial.

Manifiesta que la Comunidad Aborigen (S/N) posee un croquis de georeferenciamiento elaborado por el programa PRATPAJ, posteriormente PRIPCI, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia.

Señala que la resolución que se cuestiona obliga a realizar no sólo mayores erogaciones, sino también a realizar dos veces el mismo esfuerzo procesal, desconociendo la especialidad de los técnicos.

Integrado el Tribunal, a fs. 45/46 de autos, se expide la Sra. Fiscal General Adjunta, por lo que la causa se encuentra en estado de resolver.

Adelanto opinión adversa al progreso del recurso. Comparto los fundamentos dados por el Ministerio Público Fiscal en su dictamen.

Cabe precisar, que la resolución impugnada, en la cual se confirma que al proceso se le dará el trámite de la prescripción adquisitiva al que también se le imprime las normas del juicio ordinario oral (fs. 275 del expte. ppal.) no reviste el carácter de definitiva, ni puede ser equiparable a tal, por cuanto no sólo no concurre un supuesto de violación a lo dispuesto en el art. 287 del Código Procesal Civil, que afecte en forma directa el derecho de defensa en juicio del recurrente sino que tampoco tal derecho exige una consideración inmediata, que permita al presente recurso extraordinario constituirse en la única oportunidad para su adecuada tutela.

Que los agravios de la recurrente refieren al examen de cuestiones de derecho procesal, materia propia del Tribunal de la causa y ajena al recurso extraordinario, máxime cuando como en el caso, la decisión recurrida se sustenta en argumentos suficientes, que más allá de su acierto o error, bastan para excluir la tacha de arbitrariedad invocada.

Por otra parte la recurrente no logró acreditar el gravamen irreparable que dice se derivaría de la resolución cuestionada, circunstancia que lo torna abstracto e improcedente.

Concretando el análisis del caso resulta que con la demanda se pretende la instrumentación del art. 75 inciso 17 de la Constitución Nacional para el reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ancestralmente posee la Comunidad Aborigen (S/N), en contra del Estado Provincial y Nacional, en su carácter de obligados al cumplimiento de la Ley 24.071 que ratifica el Convenio 169 de la O.I.T. Sobre Pueblos Indígenas y Tribales Independientes y la Ley 23.302 (fs. 171/224).

Atento el objeto de la demanda y teniendo en cuenta que el derecho invocado por la actora no ha sido reglamentado, entiendo que el trámite que se le imprimió a la causa, resulta razonable (Ley Nº 5486).

Más aún no puedo dejar de señalar que la Cámara expuso, que “El supuesto de autos guarda estricta coincidencia con lo resuelto en Expte. B-196.280/08 Comunidad Aborigen (S/N) c/ (S/N), en donde con idénticos argumentos esgrimidos en el decisorio cuestionado se imprimió el trámite objetado”.

En cuanto al agravio referente a la mayor erogación por gastos y honorarios que derivarían de la tramitación por un juicio ordinario de prescripción adquisitiva, considero que tal argumento resulte inatendible, ya que no pueden soslayarse los requisitos previstos en el art. 528 y cctes. del C.P.C., que la parte actora debe cumplir, tal como fuera ordenado por Presidencia de trámite a fs. 259, máxime cuando se necesita conocer la verdadera situación jurídica del bien objeto de demanda, sus antecedentes, el resguardo de derechos de terceros etc., ello sin perjuicio de que la Comunidad haya acompañado un croquis de georeferenciamiento (fs. 136), el que será meritado por el tribunal de la causa en la oportunidad del pronunciamiento definitivo.

Como bien lo sostiene la Sra. Fiscal General Adjunta "… en esos términos entiendo que la decisión de la Cámara de aplicar al caso el juicio ordinario oral se compadece con lo preceptuado por la normativa procesal ut supra transcripta. Ello aún cuando optó el órgano jurisdiccional por el proceso de la usucapión (ley 5486) sólo en tanto se observen los requisitos formales que hagan al objeto de la acción instaurada, obviando –claro está- las disposiciones de la referida ley de carácter sustancial, que no coinciden con la acción deducida en el principal y la pretensión del actor".

Propongo entonces rechazar el recurso deducido en autos y confirmar el resolutorio impugnado.

Las costas de esta instancia se imponen a la recurrente vencida (art. 102 primera parte del C.P.C.).

Los honorarios profesionales de la Dra.(S/N) se regulan en las sumas de $2.800, conforme Acordada Nº 96/2.016 del S.T.J., con más el impuesto al valor agregado si correspondiere.

Los Dres. (S/N) y (S/N), adhieren al voto que antecede.

Por lo expuesto, la Sala I -Civil, Comercial y de Familia- del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy,

RESUELVE:

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en autos por la Dra. Noelia Beatriz Cruz en representación de la Comunidad Aborigen (S/N). En consecuencia confirmar la resolución dictada por la Sala III de la Cámara Civil y Comercial de fecha 22 de febrero de 2.016.

2º) Imponer las costas de esta instancia extraordinaria a la recurrente vencida.

3º) Regular los honorarios profesionales de la Dra. (S/N), en la suma de $2.800 con más el impuesto al valor agregado si correspondiere.

4º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dra. (S/N); Dr. (S/N); Dra. (S/N).

Ante mí: Dra. (S/N) – Secretaria Relatora.

Expediente N° CF-16803/2020

Órgano: **Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia.**

Libro de acuerdo: **6.**

Número Sentencia: **226**.

Fecha: **12/8/2021.**

Competencia: **Recursiva.**

Voces Jurídicas: **COMUNIDADES ABORIGENESDEMANDAS CONTRA EL ESTADO ESTADO NACIONAL.**

TEMAS: COMUNIDADES ABORÍGENES. DEMANDAS CONTRA EL ESTADO. ESTADO NACIONAL. INTEGRACIÓN DE LA LITIS. FACULTADES DE LAS PARTES. RECHAZO IN LIMINE. REVOCACIÓN.

(Libro de Acuerdos Nº 6, Fº 812/813, Nº 226). En la ciudad de San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los doce días de agosto de dos mil veintiuno, los señores jueces de la Sala Civil Comercial y de Familia del Superior Tribunal de Justicia, (S/N) (por habilitación), (S/N) y (S/N) -bajo la presidencia del nombrado en primer término- vieron el expediente Nº CF-16.803/20, caratulado: "Recurso de inconstitucionalidad

interpuesto en el Expte. Nº B-234.087/2010 (Cámara en lo Civil y Comercial – Sala II – Vocalía 6) Prescripción adquisitiva de inmuebles: (S/N) c/ (S/N), (S/N) y otros".

El doctor (S/N):

La Cámara en lo Civil y Comercial (fojas 1084/1085 del principal), al admitir la pretensión del doctor (S/N), en su carácter de Subdirector de la Procuración del Tesoro de la Nación, declaró nula la notificación del traslado de la demanda al Estado Nacional (artículos 166, 155 inciso 1º y 156 segundo párrafo del Código Procesal Civil). No obstante ello, revocó la citación del Estado Nacional por considerarla innecesaria e inconducente en el marco de una prescripción adquisitiva contra un particular y a fin de evitar mayores dispendios en la causa (cabe aquí una aclaración, el Estado Nacional fue "demandado" por la Comunidad Aborigen (S/N) [1]).

Disconforme con ese pronunciamiento el doctor (S/N) en representación de la Comunidad Aborigen (S/N) interpuso el recurso de inconstitucionalidad bajo examen (fojas 4/9). Objeta, en primer lugar, la declaración de invalidez de la notificación toda vez que fue articulada por una vía inadecuada y porque a su entender, el Estado Nacional, se encuentra debidamente emplazado. Y, en segundo término, cuestiona que se haya dejado sin efecto la citación al Estado Nacional y sostiene que es el justiciable el que elige a quién demandar. Luego añade que es imprescindible la participación del Estado Nacional toda vez que debe responder por la obligación de reconocimiento y respeto de los Pueblos Indígenas (artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y Ley Nº 23302 sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes).

En atención a que la propia actora (ahora recurrente) había consentido que la notificación al Estado Nacional se efectuase conforme a la normativa citada por el Subdirector de la Procuración del Tesoro Nacional[2] y con apoyo en la doctrina de los actos propios, se rechazó in limine el recurso de inconstitucionalidad en lo referente a la "declaración de nulidad de la notificación" (fojas 13 vuelta apartado III y 14), a la par que se continuó el trámite de la impugnación por el reparo dirigido a cuestionar la "exclusión del Estado Nacional".

Integrada la Sala, los autos fueron remitidos a dictamen del Ministerio Público Fiscal, quien aconsejó admitir el remedio tentado (fojas 38/40).

Pues bien, el recurso de inconstitucionalidad es atendible toda vez que la cámara, se extralimitó en sus funciones al rechazar in limine la demanda contra el Estado Nacional.

Tal es la consecuencia que, en los hechos, implica la exclusión del Estado Nacional de la presente litis.

Y una advertencia se impone: la decisión a la que aquí se arriba no significa abrir juicio alguno sobre la necesidad de la participación y responsabilidad del Estado Nacional; extremo que será materia de juzgamiento por el tribunal a quo en la etapa procesal adecuada.

Con tal comprensión, corresponde admitir el recurso de inconstitucionalidad articulado por la Comunidad Aborigen (S/N), con costas por el orden causado (artículo 102, segunda parte, del Código Procesal Civil) y diferir la regulación de honorarios profesionales hasta tanto sea practicada en la instancia que antecede.

La doctora (S/N) y el doctor (S/N) adhieren al voto que antecede.

Por ello,

la SALA CIVIL COMERCIAL Y DE FAMILIA del SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1º) Admitir el recurso de inconstitucionalidad articulado por la Comunidad Aborigen (S/N), con costas por el orden causado.

2º) Diferir la regulación de honorarios profesionales.

3º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Notas al pie:

[1] Ver ampliación de la demanda obrante a fojas 605/606; también, fojas 692/693 (sentencia que resuelve tener por ampliada la demanda) y 856 (decreto en el que se ordena correr traslado de la demanda al Estado Nacional), todas del expediente principal.

[2] Ver fojas 984 vuelta, párrafo final, ídem nota anterior.

Firmado: Dr. (S/N); Dra.(S/N); Dr. (S/N).

Ante mí: Sr. (S/N) – Secretario.

Expediente N° CF-14511/2018.

Órgano: **Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia.**

Libro de acuerdo: **3.**

Número Sentencia: **247.**

Fecha: **10/10/2018.**

Competencia: **Recursiva.**

Voces Jurídicas: **BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOSCOMUNIDADES ABORIGENESRECLAMACION ANTE EL CUERPO.**

Libro de Acuerdos Nº 3, Fº 923/924, Nº 247. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los diez días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, la Sala I Civil y Comercial y Familia del Superior Tribunal de Justicia, de la Provincia de Jujuy, integrada por los señores Jueces doctores (S/N), (S/N) y (S/N), bajo la presidencia del nombrado en primer término, vieron el expediente Nº CF-14.511/18, caratulado: "Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expte. Nº 15.042/2018 (Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Sala II Vocalía 3) Recurso de Apelación en expte Nº B-241.949/2010: (S/N), (S/N), (S/N), (S/N) y (S/N) c/ Estado Provincial – Comunidad Aborigen (S/N)".

Considerando:

Que, a fs. 91/92 se presenta la Dra. (S/N), en representación de (S/N), (S/N), (S/N), (S/N) y (S/N), deduce reclamación ante el Cuerpo en contra del decreto de fecha 26/06/2018 (fs. 88) que dispone conceder a la comunidad aborigen (S/N), el beneficio de justicia gratuita y contra la resolución de su aclaratoria de fecha 13/08/2018 (fs. 79).

Manifiesta que la Comunidad Aborigen no acredita los extremos de ley exigidos para su concesión.

Solicita, que se revoquen ambas providencias denegándose el beneficio otorgado y se tenga por no presentado el recurso de inconstitucionalidad deducido.

Con relación al presente planteo, es preciso recordar, en primer término, que está librada a la apreciación judicial la determinación de la suficiencia o insuficiencia de los recursos del solicitante del beneficio de litigar sin gastos para hacerse cargo de las expensas del proceso (conforme Lino E. Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. I, p. 271, Nº 117) sin que "cuadre una interpretación estricta del instituto que desaliente su procedencia en todo supuesto en que no concurra una indigencia absoluta, pues ello equivaldría a una frustración a priori de las aspiraciones de justicia del peticionario (CN., sala B, La Ley, 1982-D-403, fallo 81.248) (L.A. 84, Nº 34).

Asimismo la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que: "La concesión del beneficio de litigar sin gastos, queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúna los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas, pues, el legislador ha omitido referencias tasadas sobre dicho concepto, ya que por ser contingente y relativo, presenta insalvables dificultades para definirlo con un alcance

genérico que abarque la totalidad de las circunstancias que puedan caracterizar a los distintos casos a resolver".

Nuestro Alto Tribunal de Justicia, ha sostenido que, "el beneficio de litigar sin gastos encuentra su fundamento en la garantía de defensa en juicio, pero también en la igualdad ante la ley, ambos preceptos de raigambre constitucional, habida cuenta de que por su intermedio se asegura la prestación de los servicios de justicia, no ya en términos formales, sino con un criterio que se adecua a la situación económica de los contendientes" (CSJN expte.: "Ahumada, Lía Isabel c. Provincia de Buenos Aires y otros" del 25/09/2001).

Por este motivo, y resultando inconducentes los argumentos esgrimidos por la reclamante para variar lo decidido por presidencia de trámite el día 29/06/2017 (fs. 72) y su aclaratoria de fecha 13/08/2018 (fs. 79), propiciamos no hacer lugar al reclamo deducido por la Dra. (S/N).

Por lo expuesto, la Sala I Civil, Comercial y de Familia del Superior Tribunal de Justicia, de la provincia de Jujuy;

RESUELVE:

1º) Desestimar la reclamación ante el Cuerpo formulada por la Dra. (S/N) a fs. 91/92. de autos y en consecuencia confirmar el proveído de presidencia de trámite de fecha 29/06/2018 (fs. 72) y su aclaratoria de fecha 13/08/2018 (fs. 79).

2º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dr. (S/N); Dra. (S/N); Dra. (S/N).

Ante mí: Dra. (S/N) - Secretaria Relatora.

Expediente N° CF-13364/2017.

rgano: **Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia.**

Libro de acuerdo: **2.**

Número Sentencia: **253.**

Fecha: **27/9/2017.**

Competencia: **Recursiva.**

Voces Jurídicas: **COMUNIDADES ABORIGENES DESALOJO RECHAZO DE LA DEMANDA.**

(Libro de Acuerdos Nº 2, Fº 908/910, Nº 253). En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, los señores jueces de la Sala I, Civil, Comercial y de Familia del Superior Tribunal de Justicia, Dres. (S/N), (S/N) y (S/N), bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. Nº CF-13.364/17, caratulado: "Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº 14.729/2016 (Cámara de Apelaciones Civil y Comercial – Sala I – Vocalía 1) Recurso de Apelación interpuesto en el Expte. Nº B-245.401/2010, Desalojo: (S/N), (S/N); (S/N); (S/N); (S/N); (S/N) c/ (S/N); Comunidad (S/N)".

El Dr. (S/N) dijo:

La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, mediante sentencia dictada el 29 de diciembre del 2016, resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Dra. (S/N), en representación de los actores; en consecuencia confirmó la sentencia de primera instancia de fecha 15 de julio de 2015 que a su turno rechazó la demanda de desalojo; impuso las costas de la alzada a la recurrente vencida y difirió la regulación de honorarios profesionales hasta que se fijen los mismos en primera instancia.

Para así pronunciarse, destacó que los actores exigen la restitución del bien con sustento en su condición de herederos de los adquirentes del mismo, y la demandada resiste la pretensión de desahucio invocando su posesión “animus domini” ancestral en el inmueble motivo de la acción de desalojo; teniendo ello en cuenta señaló que “para enervar el juicio de desalojo no es necesario que el poseedor demuestre fehacientemente su calidad de poseedor, sino que es suficiente que lo haga prima facie …” (Exptes. 10.246/08, 10.569/09, 10.927/09).

Seguidamente destacó lo resuelto en el Expte. Nº 10.417/09, caratulado: “Medida Autosatisfactiva de Desalojo: S/N), (S/N); (S/N); (S/N); (S/N); (S/N) c/ (S/N); Comunidad (S/N)”, -suscitado entre las mismas partes del presente caso y respecto del mismo bien inmueble-, en el cual la Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, expresó en sentencia que devino en firme y consentida, que “El requisito es haber sido reconocida como Comunidad Indígena ante el organismo pertinente y la posesión actual, tradicional y pública de las tierras en las que se asienta. Siendo la posesión ancestral de las tierras el requisito para que se reconozca la personería jurídica (Const. Nacional art. 75 inc. 17; art. 2 Ley 23.302; art. 2 Resolución Nacional 4811/96 y art. 6 inc. a) Decreto Provincial Nº 6256/98), ambos se encuentran debidamente acreditados en autos y procede la aplicación de la ley, que es de orden público.”

En miras a ello, entendió que la posesión que alega la comunidad demandada se encuentra prima facie acreditada, y por lo tanto, no es procedente el juicio de desalojo incoado en su contra. Agregó que conforme lo tiene resuelto en otros precedentes “Debe rechazarse la acción de desalojo si el demandado alega poseer con "animus domini" y tal defensa no es una simple argucia para demorar la entrega del inmueble, sino una posición seria … pues la citada pretensión puede ejercerse contra el locatario, el sublocatario, el tenedor precario, el intruso y todo otro ocupante cuyo deber de restituir sea exigible -art. 680, Cód. Procesal, texto según ley 22.434 (Adla, XLI-B, 2802)-, es decir, contra quienes reconocen en otro titularidad del dominio, mas no contra quien posee animus domini"… La acción de desalojo no puede ejercerse contra el poseedor … cualquiera sea el vicio de la posesión, pues no pueden resolverse en el juicio de desahucio los derechos relativos a la posesión o dominio, para cuya dilucidación resultan inexcusables las formas más amplias del proceso ordinario (CNCiv, Sala H, LL. 2004-C, 1056)” (Expte. Nº 10.569/09).

Concluyó expresando que “en el juicio de desalojo el recurso de apelación `procederá en relación y en efecto suspensivo´ (art. 387 del C.P.C.). En la apelación en relación, no se admiten ni documentos ni posiciones (art. 226 del C.P.C.); resultando por lo tanto totalmente improcedente el ofrecimiento de prueba como la invocación de constancias de expedientes que no fueron ofrecidos como prueba en la etapa procesal correspondiente, y que no pueden ser valoradas por la Alzada (art. 47 del C.P.C.)”.

En contra de lo decidido, presenta recurso de inconstitucionalidad la Dra. (S/N), en nombre y representación de (S/N).

Luego de reseñar los requisitos formales de admisibilidad y los antecedentes de la causa, expresa los agravios que el fallo le ocasiona.

Califica a la sentencia de arbitraria por vulnerar garantías y preceptos constitucionales, apartándose de disposiciones de gran importancia en el proceso y que no pueden ser desconocidas sin lesionar el derecho de su mandante a la legítima defensa.

Asevera que el sentenciante realiza aseveraciones sin que exista prueba alguna en los autos principales de la posesión por parte de la supuesta comunidad aborigen, ni de su ancestralidad respecto de las tierras de su mandante.

Destaca que en el Expte. Nº P-31.861/13 se formuló requerimiento de elevación a juicio de la causa que por usurpación se sigue contra los integrantes de la supuesta comunidad entre los cuales se encuentra el Sr. Raúl Ramos en su calidad de presidente anterior de la misma y la actual presidente (S/N) (hoy con pedido de procesamiento).

Aduce que el requerimiento de elevación a juicio se hizo fundado en que existen sobradas pruebas de que esta supuesta comunidad no tiene ancestralidad, ni lugares comunes, ni nada que demuestre que haya estado habitando en forma pacífica y pública como tal en dichas tierras en forma previa a los antepasados de sus mandantes, que poseen escritura pública que data del año 1917.

Hace reserva del caso federal y solicita se revoque el fallo cuestionado.Corrido traslado, es contestado por el Dr. (S/N) en nombre y representación de la Comunidad Aborígen (S/N) y de (S/N). Solicita el rechazo del recurso por los fundamentos que expresa y a los que me remito en honor a la brevedad (fs. 55/69).

Integrado el Tribunal (fs. 77 y vta.) se remiten las actuaciones a la Fiscalía General. Emite opinión adversa al progreso del remedio tentado el señor Fiscal General (fs. 79/82 vta.), solución que, adelantando opinión, comparto.

Cabe reiterar en esta oportunidad que a los fines casatorios y/o de inconstitucionalidad, los litigantes no pueden soslayar la obligación de precisar concretamente, a través de un análisis razonado y mesurado, en qué consiste el agravio que causa el pronunciamiento, pues no basta que manifieste que el Tribunal ha violado la ley sustantiva o que omitió aplicar las reglas de la sana crítica. Ello deberá demostrarse y expresarse clara y concretamente, ya que las generalizaciones conceptuales no son idóneas para fundar estos remedios excepcionales. La doctrina es conteste en afirmar que no basta con que se cite la ley que se considera aplicable, inaplicable o infringida, sino que ha de expresarse además, en qué consiste su infracción o inaplicabilidad (cfr. L.A. 29 Fº 106/108 Nº 44).

Analizadas las constancias de la causa estimo que los agravios y fundamentos explicitados por la recurrente no son suficientes para refutar los argumentos de hecho y derecho sostenidos por el Tribunal al fallar.

En relación a las causas de desalojo la doctrina de este Superior Tribunal de Justicia ha sostenido que: "…la pretensión de desalojo solo implica la invocación, por parte del actor, de un derecho personal a exigir la restitución del bien, de manera que excede el ámbito del proceso analizado toda controversia o decisión relativa al derecho de propiedad o de posesión que puedan arrogarse las partes… La sentencia mediante la cual este culmina… no implica prejuzgamiento acerca de la posesión o del dominio, de manera que tanto el actor cuya demanda es rechazada cuanto el demandado condenado a desalojar puedan posteriormente lograr a través de la interposición de una pretensión posesoria o reivindicatoria el pronunciamiento de un fallo que disponga la restitución del bien" (L.A. Nº 38, Fº 1170, Nº 491; L.A. Nº 38, Fº 1179/1181, Nº 491; L.A. Nº 39, Fº 692/695, Nº 375; L.A. Nº 46, Fº 724/726, Nº 289; L.A. Nº 52, Fº 248/251, Nº 88 y más recientemente L.A. Nº 1, Fº 221/226, Nº 67). En cuanto al punto, coincido con el dictamen fiscal en tanto el proceso de desalojo no resulta ser la vía idónea para debatir ni dilucidar cuestiones relativas a la posesión o al dominio sobre el inmueble, pues son propias de otro tipo de procesos (acciones posesorias, petitorias o contractuales, reivindicatorias).

Por los fundamentos expuestos, considero que no existe la arbitrariedad alegada, por lo que propongo el rechazo del recurso interpuesto por la Dra. (S/N), en nombre y representación de (S/N), en contra de la sentencia dictada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial el 29 de diciembre de 2016.

No existiendo motivo para apartarme del principio general de la derrota, propicio que las costas sean impuestas a los recurrentes en su calidad de vencidos (art. 102 del C.P.C.), debiendo diferirse la regulación de los honorarios profesionales, hasta tanto se cuente con base y se haga lo propio en las instancias anteriores.

Las Dras. (S/N) y de (S/N) adhieren al voto que antecede.

Por ello, la Sala I, Civil, Comercial y de Familia del Superior Tribunal de Justicia,

Resuelve:

1º) Rechazar el recurso interpuesto por la Dra. (S/N), en nombre y representación de (S/N), en contra de la sentencia dictada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial el 29 de diciembre de 2016.

2º) Imponer las costas a la recurrente vencida.

3º) Diferir la regulación de los honorarios profesionales, hasta tanto se cuente con base y se haga lo propio en las instancias anteriores.

4º) Registrar, agregar copia en autos, notificar por cédula.

Firmado: Dr. (S/N); Dra. (S/N); Dra. (S/N).

Ante mí: Dra. (S/N) - Secretaria Relatora.

Expediente N° CF-12867/2016

Órgano: **Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia.**

Libro de acuerdo: **3.**

Número Sentencia: **261.**

Fecha: **16/10/2018.**

Competencia: **Recursiva.**

Voces Jurídicas: **COMUNIDADES ABORIGENES- DENEGACION DEL RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL**

(Libro de Acuerdos Nº 3, Fº 965/966, Nº 261). San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil dieciocho, la Sala I -Civil, Comercial y de Familia- del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los Dres. (S/N), (S/N) y (S/N), bajo la presidencia de la nombrada en primer término, vieron el Expte. Nº CF-12.867/16, caratulado: "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-056.529/15 (Cámara en lo Civil y Comercial -Sala II- Vocalía 4) Amparo: Comunidad Aborigen (S/N) c/ Compañía Minera (S/N) y (S/N), (S/N)".

La Dra. (S/N) dijo:

En contra del fallo dictado por este Superior Tribunal de Justicia el seis de julio de dos mil dieciocho registrado en L.A. Nº 3, Fº 620/623, Nº 160 (fs. 105/108), la Dra. (S/N) representante legal de la Comunidad Aborigen (S/N) interpuso Recurso Extraordinario Federal del artículo 14 de la ley 48 por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fs. 114/125 de autos.

En su exposición a la que remito en honor a la brevedad, considera que la cuestión federal está dada por haberse violado garantías y derechos reconocidos en el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, ley 26.160, tratados internacionales sobre pueblos indígenas, y jurisprudencia de la C.I.D.H., supuesto que habilitaría la instancia recursiva ante el máximo tribunal.

ega que la sentencia atacada es arbitraria por omitir aplicar los derechos indígenas sobre acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad.

Señala además, que se trata de un supuesto de relevancia institucional, toda vez que se encuentra comprometido el debido cumplimiento por parte del Estado Nacional de sus compromisos asumidos en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos.

Corrido el traslado del recurso, comparece a contestarlo el Dr. (S/N) en representación del Sr. (S/N), quien actúa por derecho propio y como apoderado de (S/N), solicita su rechazo por los fundamentos que esgrime y a los que remito por razones de brevedad (fs. 132/137 y vta. de autos).

A fs. 143/151 de autos contesta el Dr. (S/N) en representación de Compañía Minera (S/N), oponiéndose a su progreso por las razones que indica.

En conformidad con lo dispuesto en el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y los recaudos impuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Acordada Nº 4/2007, corresponde que este tribunal se expida sobre la admisibilidad del recurso.

Al respecto, la recurrente omitió efectuar en la carátula la decisión que se pretende, es decir, la declaración sobre el punto debatido que procura obtener de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuestión que por aplicación del art. 2º inc. i) y del art. 11 de esas reglas ha sido satisfecho de modo deficiente. Además se advierte, que no se ha consignado la fecha y firma de la letrada.

Por otro lado, el escrito recursivo supera –en varias de sus páginas- los veintiséis (26) renglones (art. 1º).

Ahora bien, en cuanto a los agravios que sustentan el remedio tentado, la C.S.J.N. dispuso que, "En caso de encontrarse en juego resoluciones por las cuales los jueces de la causa deciden acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad de recursos extraordinarios por arbitrariedad, si bien incumbe exclusivamente a la Corte Suprema juzgar sobre la existencia o no de dicho supuesto, ello no exime a los órganos judiciales de resolver circunstancialmente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta respecto de cada uno de los agravios que la originan con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso de inequívoco carácter excepcional como lo es el de arbitrariedad" (Fallos: 310:2701).

En el caso, considero que los agravios propuestos no logran evidenciar que estemos en presencia de un caso federal. La recurrente no arrima argumentos novedosos, al contrario, constituyen la reedición de los ya ensayados en la instancia anterior que sólo trasuntan una mera discrepancia con lo decidido, y en una temática de índole procesal como lo es la resolución de la competencia, la que no reviste calidad de sentencia definitiva, en principio insusceptible de revisión mediante la vía extraordinaria contemplada por el art. 14 de la ley 48.

En tal sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación reiteradamente sostuvo: "La tacha de arbitrariedad no autoriza a sustituir el criterio de los jueces de la causa en materia que les son propias en tanto hayan fundado suficientemente sus pronunciamientos" (CS, 1982/10/07; Lopardo, Rubén O. c. Municipalidad de la Capital; L.L., 1983-B,146), tal como acontece en estos autos.

Por lo expuesto, no advirtiendo la configuración de caso federal, ni supuesto de arbitrariedad, corresponde denegar la concesión del Recurso Extraordinario Federal por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpuesto por la Comunidad Aborigen Las Capillas –Pueblo Ocloya.

Las costas se imponen a la recurrente vencida, conforme principio objetivo de la derrota (art. 102 del C.P.C).

Se difiere la regulación de honorarios profesionales, hasta tanto existan pautas para efectuarla y ocurra lo propio en la instancia anterior (cfr. lo dispuesto en la sentencia aquí recurrida).

El Dr. (S/N) y la Dra. (S/N) adhieren al voto que antecede.

Por ello, la Sala I -Civil, Comercial y de Familia- del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy,

Resuelve:

1°) Denegar la concesión del recurso extraordinario federal por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpuesto por la Dra. (S/N) representante legal de la Comunidad Aborigen (S/N).

2º) Imponer las costas a la recurrente vencida.

3º) Diferir la regulación de honorarios profesionales.

4º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dra. (S/N); Dr. (S/N); Dra. (S/N).

Ante mí: Dr. (S/N) – Secretario Relator.

Expediente N° CF-14415/2018.

Órgano: **Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia.**

Libro de acuerdo: **3.**

Número Sentencia: **279.**

Fecha: **23/10/2018**.

Competencia: **Recursiva.**

Voces Jurídicas: **COMUNIDADES ABORIGENES DESALOJO LANZAMIENTO.**

TEMAS: COMUNIDADES ABORÍGENES. DESALOJO. LANZAMIENTO. COSA JUZGADA. INOPONIBILIDAD A TERCEROS.

(Libro de Acuerdos N° 3, F° 1033/1038, N° 279). San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, la Sala I - Civil y Comercial y de Familia - del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, integrada por los Dres. (S/N), (S/N) y (S/N), bajo la Presidencia del nombrado en primer término, vieron el Expte. Nº CF-14.415/18, caratulado: "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº 14.647/2016 (Cámara de Apelaciones Civil y Comercial – Sala II- Vocalía 4): Recurso de Apelación interpuesto en el Expte. Nº B-216.142/2009, Desalojo: De (S/N) c/ (S/N)".

El Dr. (S/N) dijo:

La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, en sentencia de fecha 11 de diciembre del 2017 resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Sra. (S/N) y la Comunidad Aborigen (S/N) por intermedio de su apoderado Dr. (S/N) con patrocinio letrado de la Dra. (S/N). En consecuencia, suspendió el lanzamiento ordenado, en providencia de fecha 14 de abril del 2016 (fs. 359), en los términos de la Ley 26.160 -y sus prórrogas Ley 27.400- hasta el 23 de noviembre del 2021. Impuso costas por el orden causado y difirió la regulación de honorarios profesionales.

Para así resolver señaló, que desde los inicios de la acción, en oportunidad de contestar demanda, la Comunidad indígena invocó tener derechos sobre el territorio pretendido en el desalojo. Asimismo que la accionada contestó fuera de término la demanda, pero la Comunidad -invocando su representación- contestó oportunamente pero, se resolvió que no podía intervenir, ni siquiera como tercero interesado. Seguidamente el Juzgado de Primera instancia dictó la sentencia de desalojo haciendo lugar a la acción instaurada en contra de la demandada.

Agregó que, firme la sentencia, se presentó la Comunidad indígena y la demandada solicitando la suspensión de la ejecución de la sentencia -en los términos de la Ley 26.160- a lo que el juzgado, no hizo lugar. En contra de dicho proveído se promovió recurso de apelación entendiendo la Sala I de la Cámara de Apelaciones que el planteo resultaba extemporáneo, por ser consecuencia de resoluciones firmes.

Evaluó la Sala sentenciante que, vueltos los autos al Juzgado de Primera Instancia, y en oportunidad de disponer el lanzamiento, nuevamente se presentó la Comunidad indígena y la accionada solicitando, dado que las tierras pertenecen a la comunidad y la demandada es miembro de la misma, la aplicación de la Ley 26.160 y la suspensión del proceso, a lo que no se hizo lugar, con fundamento en que la discusión se limitó a derechos individuales, y que como no tuvo participación, no se puede hacer lugar a su petición. Luego estableció que lo que se resolvió no es oponible a la Comunidad indígena en cuestión.

Precisó el Tribunal ad quem que si bien la acción se dirigió individualmente a la Sra. (S/N), en su calidad de ocupante del territorio, la Comunidad indígena, invocando su representación, pretendió siempre acceder a la participación del proceso, manifestando tener posesión ancestral sobre ese territorio. Que sus intentos fueron frustrados en el sentido que no se la dejó nunca tener participación. Agregó que en ningún momento la defensa se centró en invocar que la ocupación de la demandada fuera individual y obtener un reconocimiento de derechos individuales, sino siempre comunitarios, es decir, en su calidad de miembro de la comunidad aborigen y la comunidad en su calidad de poseedora ancestral.

A continuación sostuvo la Sala sentenciante que los derechos de los pueblos indígenas participan de un doble carácter en el sentido que son comunitarios e individuales a la vez, no son derechos que se opongan, sino que se complementan en el sentido que los individuales se realizan en lo comunitario.

Agrega que en el caso, la demandada se encuentra censada en la Comunidad Aborigen (S/N), conforme constancias que certifican actualización de los censos. Asimismo la Comunidad tiene personería jurídica reconocida desde el 20 de julio del 2001, mediante Resolución Nº 000846-BS-01 y a la fecha tiene relevamiento territorial, cuya localización territorio surge de las coordenadas que da cuenta el informe de

fs. 422. Todo informado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Registro Provincial de Comunidades y organizaciones de Pueblos indígenas.

Señala que la ley 26.160 declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país siendo dicha ley de orden público. Asimismo que la legislación se enmarca dentro del art. 75 de la Constitución Nacional y Convenio 169 de la OIT ratificado por la Nación Argentina que dispone que los gobiernos deben tomar medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente.

Al aplicar tales conceptos al caso, concluyó en que, como bien resolvió la juez en el proveído que se recurre, el lanzamiento es inoponible a la comunidad indígena, por no haber tenido participación en la causa. Por lo tanto, la sentencia aquí dictada no produce efectos respecto de la comunidad pues, no se extienden los efectos de la cosa juzgada a quien no ha tenido participación en la causa.

En consecuencia, determinó que, tratándose de una demandada que pertenece a la comunidad aborigen, disponer su lanzamiento importaría el desalojo de la Comunidad, lo que está vedado por la Ley 26.160 y sus prórrogas hasta el 23 de noviembre del 2021.

Disconforme con este pronunciamiento, a fs. 10/15 de autos el Dr. (S/N) en representación de la Sra. (S/N) interpuso recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria.

Luego de señalar antecedentes de la causa, sostiene la arbitrariedad de la sentencia por violar las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio, por contradecir constancias de la causa firmes, consentidas y pasadas en autoridad de cosa juzgada y por último, por violación al principio de preclusión procesal.

Expresa que el pronunciamiento atacado prescinde, sin razón plausible alguna, de las constancias de la causa dictando un resolutivo totalmente contradictorio con la sentencia firme y consentida, pasada en autoridad de cosa juzgada. Agrega que si bien la Sra. Farfán es integrante de la comunidad aborigen, no quiere decir que no pueda ser desalojada de un predio que no pertenece a la comunidad. La accionada está usurpando un predio de propiedad privada, sujeta a condominio y cuya división de condominio está tramitando por Expte. Nº C-62.176/16 “División de condominio: (S/N) c/ (S/N) y otros”. Agrega que desalojar a la accionada implica desalojar a una persona que ocupa un inmueble con la obligación de restituir.

Manifiesta que la alteración perjudicial de la defensa de derechos del justiciable provocada por la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones conculca el derecho de propiedad de la actora.

Por último sostiene, que en la sentencia se realizan afirmaciones dogmáticas dando un fundamento solo aparente pues -en el caso- no se dan los presupuestos de la Ley 26.160 ya que el inmueble no es propiedad comunitaria, es un inmueble cuya propiedad la adquirió su mandante por sucesión de su padre y de su abuelo. Por último formula reserva del caso federal.

Sustanciado el recurso, a fs. 37/40 vta. de autos lo contesta el Dr. (S/N) con patrocinio letrado de la Dra. (S/N) en representación de la Sra. (S/N) y la Comunidad Aborigen (S/N) solicitando su rechazo por los fundamentos que esgrime y a los que me remito en honor a la brevedad. Formula reserva del caso federal.

Integrado el Tribunal, a fs. 54/58 de autos se expide la Señora Fiscal General Adjunto, por lo que la causa se encuentra en estado de resolver.

Adelanto opinión, apartándome del dictamen fiscal, en el sentido que corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido.

Para la adecuada resolución del recurso es conveniente analizar los antecedentes de la causa.

En fecha 4/09/2009 la actora, en su carácter de condómina del inmueble en cuestión, acompañando los títulos de condominio pertinentes, promueve demanda de desalojo en contra de la accionada invocando su carácter de intrusa.

A fs. 93 de la causa principal, atento la presentación extemporánea, se tiene por decaído el derecho de la Sra. (S/N) de contestar demanda. Asimismo a fs. 189 de dicha causa el juez a quo resuelve, rechazar la intervención de la Comunidad Aborigen (S/N) como tercero, por no existir interés jurídico tutelable a los fines de su intervención, toda vez que el desalojo es una acción personal, en la que está vedado prejuzgar sobre el dominio o la posesión, sin perjuicio de las acciones petitorias o posesorias a que se crea con derecho, proveído firme y consentido.

En fecha 16 de abril del 2012 el juez a quo dicta sentencia en la que se hace lugar a la demanda de desalojo. Deducido el recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en representación de la accionada y la comunidad, es rechazado por la Sala I de la Cámara de Apelaciones, en sentencia de fecha 24 de octubre del 2012, por extemporáneo, por resultar el proveído recurrido consecuencia de resoluciones dictadas con anterioridad, que se encuentran firmes y consentidas.

A continuación el expediente es remitido a archivo entre los expedientes terminados del año 2015. En fecha 17/02/2016 -por requerimiento de la actora- encontrándose firme la sentencia de desalojo, se intima a la demandada a hacer entrega del inmueble, bajo apercibimiento de lanzamiento.

En fecha 14 de abril del 2016 (fs. 359) el juez a quo rechaza la pretendida aplicación de la Comunidad Aborigen de la Ley 26.160, ordenando el lanzamiento de la demandada Sra. (S/N) del inmueble objeto de la litis, dejándose aclarado, que los efectos de la sentencia, no alcanzan a la nombrada Comunidad ni se extienden a ella, siendo -por el contrario- inoponible por no haber tenido intervención en la causa.

Ahora bien, en la sentencia que ahora se recurre, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial –Sala II - resolvió hacer lugar al recurso de apelación deducido, suspendiendo el lanzamiento ordenado en la providencia recurrida, en los términos de la Ley 26.160 y sus prórrogas hasta el 23 de noviembre del 2021. Entendió que tratándose de una demandada que pertenece a la comunidad aborigen, su lanzamiento importa el desalojo de la comunidad, lo que esta vedado por la ley de orden público citada.

Con el detalle de los antecedentes de la causa, queda en evidencia que en ningún momento, ni la accionada Sra. (S/N) ni la Comunidad Aborigen, vieron conculcada su participación ni vulnerado su derecho al debido proceso legal.

En el caso de la Comunidad Aborigen, si bien solicitó su intervención en sucesivas oportunidades, lo hizo de manera extemporánea, consintiendo cada uno de los proveídos que –definitivamente- quedaron firmes por lo que, razonablemente se resolvió -tanto el Juez a quo como la Sala sentenciante- que los efectos de la sentencia de ninguna manera la alcanzaban y la misma le resulta inoponible. No intervino ni como parte ni como tercero citada, por ello sus efectos no se extienden a ella y la orden de lanzamiento no se dirige en su contra.

En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho “Cabe señalar que cuando los efectos de la cosa juzgada ha de extenderse a otro interesado, corresponde su participación en la causa ya que el reconocimiento del carácter inmutable de una decisión judicial requiere la existencia de un trámite anterior contradictorio en el que se hayan respetado sustanciamente las exigencias de la garantía de la defensa en juicio” (Fallos 238:18; 2:55; 261:322) y sentencia de este Superior Tribunal de Justicia -en su anterior integración- registrada en L.A. Nº 58, Fº 1894/1900, Nº 536; L.A. Nº 58, Fº 3994/3995, Nº 1127; entre otros.

Por ello, al declararse que la sentencia es inoponible a la mentada Comunidad aborigen, no se advierte un agravio atendible y actual.

En relación a la revocación de la orden de lanzamiento de la accionada -Sra. (S/N)- entiendo la sentencia recurrida aparece arbitraria por afectar el debido proceso legal, vulnerar el principio de preclusión procesal al existir actos firmes y consentidos y la cosa juzgada.

Digo ello porque la accionada pudo ofrecer prueba de su posesión “prima facie” y así repeler la acción de desalojo pero dejó vencer el plazo para contestar demanda sin hacerlo, encontrándose la sentencia que ordena el desalojo en su contra firme y consentida. Ello independientemente de su vocación de pertenencia a la comunidad aborigen. Ello porque conforme el principio de disciplina de las formas no puede darse un procedimiento especial distinto para la substanciación del proceso.

Que es cierto que la Ley 26.160 declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país (art. 1). Es una norma de orden público y fue prorrogada sucesivamente hasta el dictado de la Ley 27400 que prorroga el plazo hasta el 23 de noviembre de 2021.

Asimismo el art. 2 de la ley 26.160 suspende el plazo de ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1, cuando la posesión sea actual, tradicional, pública y se encontrase fehacientemente acreditada.

La normativa responde a la obligación del Estado Nacional de cumplir con el art. 75, inc. 17 de la CN y el Convenio 169 de la OIT (especialmente su Parte II, referida a las tierras de los pueblos indígenas), ratificado en el 2000. Estas normas supralegales reconocen "la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que estos pueblos tradicionalmente ocupan", lo que explica la importancia de completar el relevamiento dispuesto por la ley 26.160.

En decir la ley 26.160 pretende evitar que se consoliden nuevas situaciones de despojo a fin de respetar y garantizar derechos constitucionales de los pueblos indígenas en aras de dar cumplimiento a un conjunto de compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por el Estado Nacional (C.S.J.N. “Martínez Pérez, José Luis c. Palma, América y otros s/ medida cautelar s/ casación”, 10/11/2015).

Y si bien de las constancias agregadas con posterioridad resulta que la Sra. (S/N) es miembro de la Comunidad Aborigen (S/N) no se logró acreditar que la Comunidad tenga pretensiones de propiedad comunitaria sobre el inmueble en cuestión, confirmándose que sólo se discutieron derechos individuales y no colectivos.

Más aún, ponderando el informe y croquis de fs. 422 de la causa principal, no se puede determinar ni se acreditó que la comunidad aborigen esté asentada en terrenos de propiedad de la actora. Tampoco se probó que la accionada ejerciera posesión en forma comunitaria ni existe constancia alguna de dicha pretensión en el Registro Inmobiliario.

Por lo demás, el Estado Provincial, declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación 206 has. 4.957 m1 del inmueble en cuestión (fs. 22 de autos) de titularidad de la actora.

Conforme las constancias de la causa no se acreditó que la orden de lanzamiento dispuesta en contra de la accionada, afecte el derecho de la comunidad a la posesión y propiedad comunitaria indígena ni su supervivencia como pueblo organizado con una cultura diferente (a contrario sensu C.S.J.N. fallo citado).

Lo dispuesto de ninguna manera implica desconocer los derechos indígenas como comunidad, ni como personas individuales con identidad cultural conforme lo reconoce el art. 75 de la Constitución Nacional. Cabe recordar que la sentencia de desalojo no prejuzga sobre el dominio ni la posesión por lo que, la accionada tiene las acciones pertinentes con miras a demostrar eventualmente el dominio o derecho posesorio a que se crea con derecho (art. 391 C.P.C.)

Más aún no puede desconocerse que la actora invoca la titularidad y posesión del inmueble en cuestión justificando con constancias registrales que el inmueble pertenecía a sus antecesores, primero a su abuelo y luego a su padre.

En definitiva la argumentación del Tribunal ad quem no se condice con las constancias obrantes en la causa resultando su fundamentación meramente aparente y afectando derechos de la actora amparados por garantías constitucionales.

Por todo ello, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por el Dr. (S/N), en representación de la Sra.(S/N) y, en su mérito, revocar la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial en fecha 11 de diciembre del 2017.

En consecuencia, rechazar el recurso de apelación deducido por el Dr. (S/N) con patrocinio letrado de la Dra. (S/N) en representación de la Sra. (S/N) y la Comunidad Aborigen (S/N), confirmando la resolución del juez de primera instancia de fecha 14 de abril del 2016 (fs. 259 de la causa principal).

En cuanto a las costas de ambas instancias se imponen por el orden causado. Asimismo corresponde diferir la regulación de honorarios profesionales de los letrados intervinientes hasta tanto existan base económica para efectuarla y ocurra lo propio en la instancia anterior.

Las Dras. (S/N) y (S/N) adhieren al voto del Dr. (S/N).

Por ello, la Sala I -Civil y Comercial y de Familia- del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy,

RESUELVE:

1º) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por el Dr. (S/N), en representación de la Sra. (S/N) y, en su mérito, revocar la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial en fecha 11 de diciembre del 2017.

2º) En consecuencia, rechazar el recurso de apelación deducido por el Dr. (S/N) con patrocinio letrado de la Dra.(S/N) representación de la Sra.(S/N) y la Comunidad Aborigen (S/N), confirmando la resolución del juez de primera instancia de fecha 14 de abril del 2016 (fs. 259 de la causa principal).

3º) Imponer las costas de ambas instancias por el orden causado.

4º) Diferir la regulación de honorarios profesionales de los letrados intervinientes hasta tanto exista base económica para efectuarla y ocurra lo propio en la instancia anterior.

5º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dr. (S/N); Dra. (S/N); Dra.(S/N).

Ante mí: Dra. (S/N) - Secretaria Relatora.

Expediente N° CF-16360/2020

Órgano: **Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia.**

Libro de acuerdo: **6.**

Número Sentencia: **330.**

Fecha: **22/10/2021.**

Competencia: **Recursiva.**

Voces Jurídicas: **COMUNIDADES ABORIGENESFALTA DE INTERPOSICION DE LA DEMANDALEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES.**

(Libro de Acuerdos Nº: 6, Fº 1205/1207, Nº: 330). En la ciudad de San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los veintidós días de octubre de dos mil veintiuno, los señores jueces de la Sala Civil Comercial y de Familia del Superior Tribunal de Justicia, doctores (S/N) (por habilitación), (S/N) y (S/N) -bajo la presidencia del nombrado en primer término- vieron el expediente Nº CF-16.360/20, caratulado: "Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expediente Nº 15.931/19 (Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Sala II, Vocalía 4) caratulado: Recurso de apelación en C-038.137/2015 caratulado: Cautelar prohibición de innovar: (S/N); (S/N) c/ (S/N); (S/N)".

El doctor (S/N) dijo:

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, al rechazar el recurso articulado por los actores, confirmó la decisión del juez de primera instancia que -a pedido de los cautelados- había ordenado el levantamiento de la medida cautelar de no innovar dispuesta el 03/03/2015 contra la Comunidad Aborigen (S/N), su presidenta (S/N) y la comparsa denominada (S/N)" (fojas 588/589, fojas 467/472 y 151 del principal, respectivamente).

Para así resolver, la alzada, adhirió a los fundamentos del a quo (conforme lo autoriza el artículo 47 del Código Procesal Civil, CPC en lo sucesivo) que, en síntesis, había dispuesto el aludido levantamiento por la falta de promoción del proceso principal en los términos del artículo 270 del CPC y en el entendimiento de que el juicio sucesorio de (S/N)Y (S/N) (en el cual los actores revisten la calidad de herederos) no podía ser considerado el "expediente principal" porque, en la especie, la medida cautelar había recaído sobre terceros que no son parte en aquél.

Disconforme con ese pronunciamiento la doctora (S/N), en representación de (S/N)-heredero y administrador judicial de la sucesión referida- articuló el presente recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria. Objeta que se hubiese concedido participación en el trámite de la cautelar a la Secretaría de Pueblos Indígenas, organismo dependiente del Estado Provincial cuando ninguno de ellos fue demandado y solicita el desglose del escrito presentado por esa dependencia. Alega que el sucesorio constituye el juicio principal pues la medida fue concedida para preservar el acervo hereditario cuya partición y adjudicación fue suspendida hasta tanto se resuelva la demanda de deslinde, amojonamiento y mensura y la acción de reivindicación, ambas articuladas contra el Estado Provincial (expedientes Nº B-13.3014/05 y Nº B-241.949/10, respectivamente). También precisa haber iniciado un juicio por daños y perjuicios contra (S/N) y (S/N) (expediente C-120.356/18). También hace hincapié en el incumplimiento reiterado de la cautelar por lo que resulta incomprensible -a su modo de ver- que el magistrado en vez de castigar los abusos y violencia de los cautelados disponga el levantamiento de la medida y deje en total desprotección a sus representados. Finalmente objeta la imposición de costas a sus mandantes.

Corrido el traslado del recurso, la contraparte no se presentó a contestarlo pese a estar debidamente notificada (fojas 59).

Integrada la Sala y luego de haberse expedido la señora Fiscal General Adjunta (fojas 61/65), la causa ha quedado en condiciones de resolver.

I. Pues bien, en coincidencia con el dictamen antes aludido, conviene adelantar que los reparos dirigidos a cuestionar el levantamiento de la medida cautelar de no innovar son inadmisibles toda vez que no se dirigen contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal, como lo exige el artículo 8º de la Ley Nº 4346. Y si bien es cierto que este principio cede en determinadas circunstancias no lo es menos que, en el caso, no se configura un supuesto de excepción que permita apartarse de dicha regla.

Solo resta añadir -como lo manifestó el Ministerio Público en línea con la decisión de los jueces anteriores en grado- que el sucesorio no puede ser considerado el "juicio principal" en los términos del artículo 270 del CPC toda vez que quien soporta la medida, comunidad indígena (S/N), no es parte de aquél, como tampoco lo es en las otras acciones contenciosas articuladas por los actores (en las cuales se demandó al Estado Provincial). Y, por lo demás, la acción por daños y perjuicios contra la comunidad indígena, no está enderezada a lograr el reconocimiento de la propiedad o posesión del inmueble en cuestión.

Conclusión que se impone a poco que se tenga en cuenta que toda medida cautelar tiene por objeto asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un determinado proceso.

Sin perjuicio de ello conviene señalar que nada obsta a que la actora promueva una nueva medida cautelar a fin de resguardar los derechos de sus mandantes -sobre el inmueble en cuestión- como accesoria a un juicio principal dirigido contra la comunidad indígena.

Al respecto viene bien recordar que las medidas cautelares se caracterizan por su "provisionalidad", es decir, subsisten mientras perduren las circunstancias sobre cuya base se decretaron y llegado el caso en que se alteren los presupuestos, podrán modificarse, suprimirse o bien replantearse.

II. En lo que atañe al escrito presentado por la doctora (S/N) en su carácter de Secretaria de Pueblos Indígenas de la Provincia, cuadra precisar que el juez de grado no le concedió la calidad de parte en el proceso ni valoró la documental acompañada en su decisión (ver fojas 467/472 del principal); motivo suficiente para rechazar la queja en torno al punto.

III. Por último y en lo que a la imposición de costas se refiere, los reproches formulados deben desestimarse ya que -como es sabido- lo relativo a la asignación de las mismas constituye, por su carácter fáctico y procesal, materia reservada a los jueces de la causa salvo supuestos de arbitrariedad; circunstancia ausente

en el caso. En efecto, el artículo 102 -primera parte- del CPC consagra el principio rector en materia de costas, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota. Sobre esa base, la decisión de la cámara de imponer los gastos causídicos al vencido, resulta ajustada a derecho.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la doctora (S/N) en representación de (S/N), con costas (artículo 102, primera parte, del CPC) y regular los honorarios profesionales de la letrada en la suma de pesos dieciséis mil ciento veintiocho ($16.128) por aplicación de las previsiones sobre honorarios mínimos de la Ley de Aranceles Nº 6112 (artículos 29, 32 y concordantes)[1] , con más el impuesto al valor agregado si correspondiere.

La doctora (S/N) y el doctor (S/N) adhieren al voto que antecede.

Por ello,

la SALA CIVIL COMERCIAL Y DE FAMILIA

del SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la doctora (S/N) en representación de (S/N), con costas.

2º) Regular los honorarios profesionales de la doctora (S/N) en la suma de pesos dieciséis mil ciento veintiocho ($16.128), con más el impuesto al valor agregado si correspondiere.

3º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Nota al pie:

[1] Sobre la base del valor UMA de $1920 según la Resolución Nº 11/2021 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Consejo Nacional del empleo, la productividad y el salario mínimo, vital y móvil.

Firmado: Dr. (S/N); Dra.(S/N); Dr. (S/N).

Ante mí: Sr. (S/N) – Secretario.

Expediente N° 10791/2014

Órgano: **Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia.**

Libro de acuerdo: **58.**

Número Sentencia: **536.**

Fecha: **7/9/2015.**

Competencia: **Recursiva.**

Voces Jurídicas: **COMUNIDADES ABORIGENESEXTENSION DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIATERCERO AJENO AL PROCESO**.

TEMAS: INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESIÓN. EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA. COMUNIDADES ABORÍGENES. TERCERO AJENO AL PROCESO. COSA JUZGADA.

(Libro de Acuerdos Nº 58 Fº 1894/1900 Nº 536). En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil quince, los señores jueces del Superior Tribunal de Justicia, doctores (S/N), (S/N), (S/N), (S/N) y (S/N), bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. Nº 10.791/14, caratulado: “Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº

13563/14 (Sala II – Cámara de Apelaciones Civil y Comercial) Interdicto posesorio de recobrar: (S/N), (S/N) c/ (S/N); (S/N); (S/N)".

El Dr. (S/N) dijo:

La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial –mediante sentencia dictada el 5 de mayo de 2014 y sólo respecto a lo que interesa para resolver el presente- hizo lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 1137/1141 por la Comunidad Indígena (S/N); revocó la orden de lanzamiento dispuesta en la resolución de fecha 26/04/13 obrante a fs. 1083/1084 en relación a cualquier otro ocupante, por ser inoponible la sentencia dictada en autos a la recurrente.

Para así pronunciarse, consideró que desde los inicios de la causa, los demandados manifestaron pertenecer a la Comunidad Indígena (S/N), hecho no desconocido por la parte actora, a tal punto que se dictaron sentencias de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y del Superior Tribunal de Justicia en las que se resolvió que en los autos se encontraban controvertidos derechos individuales y no colectivos y -en ese sentido- se reconoció su existencia, pero nunca se citó a la Comunidad Indígena a comparecer a la causa, siempre con el argumento que sólo se controvertían derechos individuales.

Entendió que no habiendo tenido participación en el proceso, ni en carácter de parte ni de tercero citado, la sentencia no la puede alcanzar, pues sus efectos no se extienden a ella. Dejó sentado que para que los actores puedan hacer efectiva alguna sentencia en contra de la Comunidad Indígena (S/N), deben hacer un proceso judicial que culmine en su contra con una sentencia que la condene a entregar el inmueble; de lo contrario, dirigir el lanzamiento a una persona jurídica que no ha sido parte del proceso judicial en el que se dictó la sentencia de la que ése es su ejecución, afecta las mas elementales garantías constitucionales que hacen al debido proceso legal.

Por último, consideró que el recurso presentado por la Comunidad Indígena no ha devenido en abstracto, más allá de que en los convenios exista alguna confusión sobre si la participación del abogado Aguilar haya sido en el carácter de patrocinante de los demandados y también por la Comunidad Indígena, pues ella no reconoció que no ejercía su posesión ancestral, siempre dejó sentado que en virtud de ese derecho disponía la reubicación del demandado (S/N). Respecto a los demandados, entendió que la orden de lanzamiento ha devenido en abstracto, pues ellos han manifestado su voluntad de retirarse del inmueble en cuestión, por lo que no tiene sentido librar respecto de ellos el lanzamiento y que no ocasiona agravio que la juez a quo haya homologado los convenios, pues produce ese efecto la presentación judicial conforme art. 838 del Código Civil.

En contra de lo decidido, presenta recurso de inconstitucionalidad la Dra. (S/N) en nombre y representación de los actores, (S/N) y (S/N).

Luego de reseñar los requisitos formales de admisibilidad y los antecedentes de la causa, expresa los agravios.

Califica a la sentencia de arbitraria por ser un pronunciamiento que ilegítimamente vulnera el principio de preclusión y cosa juzgada. Hace alusión a que la Cámara ha dictado un fallo contrariando sus decisiones anteriores; antecedentes que cita y transcribe.

Destaca que la sentencia de primera instancia quedó firme y consentida, luego de recorrer las instancias procesales; y luego, a más de un mes la Comunidad (S/N) pretende lograr su participación y la suspensión de un lanzamiento que consintió; además, como bien lo ha dicho la jueza de primera instancia, en audiencia de fs. 344 han limitado su conocimiento a las partes, al decir que se trata de una cuestión entre particulares.

Insiste en que la Comunidad (S/N) tuvo participación en autos, puesto que de las constancias surge que su Presidente en ese momento –(S/N)- expresó que se trata de un inmueble fiscal y que pertenece a la Comunidad Aborigen (S/N) y además que no sólo intervino en la audiencia como testigo sino también estuvo presente en la audiencia donde se limitó la cuestión a los particulares, por lo tanto consintió el acto.

Aduce que el ad quem omitió valorar la prueba obrante a fs. 1160, 1161 y 1166 y las incorporadas y plasmadas en la sentencia de primera instancia, como ser el testimonio de fs. 642 de la Sra. (S/N) quien responde que las tierras son de la Comunidad Aborigen (S/N), que los terrenos fueron ocupados por (S/N)

y (S/N) en el año 2003, cuando comenzaron a construir, dentro de los tres meses de la adjudicación efectuada por la Comunidad. Que esto no coincide con la documental de fs. 505 –informe del PRATPAJ- a quien correspondía otorgar la adjudicación de tierras a las comunidades aborígenes, el que informa que en ningún momento la institución entregó dichas tierras a la Comunidad (S/N)) y que el inmueble de referencia no es territorio reclamado por la misma según croquis del territorio presentado por los miembros de la Comunidad. Hace referencia también que ésta presentó un listado de familias que optaron por la propiedad individual donde aparece el lote en disputa, con lo que queda probado que la cuestión se debatió entre particulares y que en ningún momento la institución entregó dichas tierras a la Comunidad Indígena.

Alega que la sentencia es arbitraria y causa un gravamen irreparable a sus representados toda vez que afecta gravemente la garantía de defensa en juicio, principio que no impone a los litigantes que deban ser oídos y tengan derecho a producir su prueba en cualquier momento. Que la Comunidad introdujo prueba que afecta el derecho de defensa de su parte, a la que ha colocado en un franco estado de indefensión y que fue admitida por la propia Cámara de Apelaciones (prueba extemporánea de fs. 1064 y 1070) en violación palmaria del derecho de defensa en juicio y que tuvo en cuenta para dictar su sentencia.

Reitera que el fallo padece de arbitrariedad y causa agravio a sus mandantes por la omisión de valorar hechos notorios, en el caso, la participación de la Comunidad (S/N) en autos, a través de sus miembros, representantes, abogado y presidente. Aduce que el fallo se sustenta en prueba inexistente e introducida en forma extemporánea, que lo descalifican, como el acta del Juez de Paz de Maimará (fs. 1201/1231) que registró dichos de los recurrentes que no han sido constatados, constituyendo esto otra violación al debido proceso y a la garantía constitucional de defensa en juicio. Insiste que el representante de los accionados -en franca contradicción- expresa que sus mandantes son miembros de la Comunidad Aborigen (S/N), por lo tanto poseían pleno y acabado conocimiento de la situación, de manera que la sentencia le es oponible toda vez que conocían con certeza absoluta el devenir de los acontecimientos.

Dice de la contradicción y apartamiento de las constancias de autos, aduciendo que quedó probado con el acta del Juez de Paz que la Comunidad (S/N) poseía cabal conocimiento del juicio toda vez que fue el mismo apoderado de los accionados quien expresa que sus representados han concurrido como miembros de ésta, por lo que no se entiende que no les sea oponible la sentencia si ellos mismos pidieron concurrir como miembros de la Comunidad Aborigen que dicen pertenecer. Por otro lado, expresa que su parte en la contestación del recurso de inconstitucionalidad alegó que quedó probado que los accionantes se presentaron en el juicio en el carácter personal, por derecho propio (iure propio) y no como miembros de la comunidad, calificación que por la altura de los acontecimientos ha quedado firme y consentida al no ser cuestionada en el momento procesal oportuno.

Alega la extemporaneidad del recurso, porque a su entender surge de manera palmaria y evidente que la Comunidad Indígena tuvo pleno conocimiento de la sentencia y orden de desalojo, por lo que sus representados formularon denuncia policial en contra de algunos miembros y de la comunidad, por lo que fue el momento procesal oportuno en que debieron utilizar la vía recursiva si consideraban afectados sus derechos y no a más de un mes de haber tomado conocimiento de la situación.

Invoca el exceso ritual manifiesto que se trasluce –a su criterio- en la sentencia, toda vez que se pretende frustrar la aplicación de una sentencia, impidiendo conocer la verdad real, beneficiando a los demandados que durante todo el proceso se han valido de medios fraudulentos, violando el deber de probidad y buena fe. Aduce que aquellos no se retiraron del inmueble, continúan ocupándolo, circunstancia que debió ser corroborada por el ad quem al resolver que el lanzamiento en contra de los demandados ha devenido en abstracto. Solicita se dicte sentencia confirmando la de primera instancia y ordene el lanzamiento contra cualquier ocupante y la posesión del inmueble en cuestión a sus mandantes.

Dice de las normas constitucionales violadas, insistiendo que le causa agravio que la sentencia sea inoponible a la Comunidad Aborigen, puesto que no fueron parte del proceso, en tanto que pudiendo solicitar su participación oportuna, no lo hicieron y recién pretenden, en un proceso de ejecución de sentencia -de manera totalmente arbitraria y extemporánea- obtener su participación, impidiendo el cumplimiento de la misma y la restitución de la posesión a sus mandantes.

Hace reserva del caso federal, ofrece pruebas y peticiona.

Corrido traslado, es contestado por la Dra. (S/N) en nombre y representación de la Comunidad Indígena (S/N). Solicita el rechazo del recurso, por los fundamentos que expresa y a los que me remito en honor a la brevedad (fs. 56/68 vta.).

Integrado el Tribunal (fs. 71 y vta.) se remiten las actuaciones a la Fiscalía General a los fines dispuestos por el art. 9 inc. 4º de la ley 4346. Emite opinión adversa al progreso del remedio tentado, la señora Fiscal General Adjunto (8fs. 73/76 vta.), solución que adelantando opinión comparto.

Cabe reiterar aquí que a los fines casatorios y/o de inconstitucionalidad, los litigantes no pueden soslayar la obligación de precisar concretamente, a través de un análisis razonado y mesurado, en qué consiste el agravio que causa el pronunciamiento, pues no basta que manifieste que el Tribunal ha violado la ley sustantiva o que omitió aplicar las reglas de la sana crítica. Ello deberá demostrarse y expresarse clara y concretamente, ya que las generalizaciones conceptuales no son idóneas para fundar estos remedios excepcionales. La doctrina es conteste en afirmar que no basta con que se cite la ley que se considera aplicable, inaplicable o infringida, sino que ha de expresarse además, en qué consiste su infracción o inaplicabilidad (cfr. L.A. 29 Fº 106/108 Nº 44). En efecto, las razones expresadas en los agravios no son suficientes para refutar los argumentos de hecho y derecho alegados para llegar a la decisión cuestionada (Fallos: 304:1444; 308:818 y 317:1365).

No existe discusión alguna que la Comunidad Indígena (S/N) resulta ajena a esta causa. Así lo ha dejado sentado la juez de primera instancia en la sentencia dictada el 15 de marzo de 2011 al expresar que "en autos nos encontramos ante una acción entre particulares, sin que surja que la referida Comunidad aborigen fuera demandada, ni citada como tercera en esta causa…". Esta sentencia fue confirmada por la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial mediante fallo dictado el 30 de septiembre de 2011 y luego por el Superior Tribunal de Justicia el 8 de agosto de 2012 (Cfr. L.A. Nº 55 F1º 1728/1736 Nº 550). Aquí se hizo referencia a que "los demandados jamás justificaron la representación o pertenencia que dicen ostentar respecto de la Comunidad (S/N) y que el a quo ha tratado adecuadamente la falta de legitimación pasiva opuesta por los demandados con fundamento en que han concurrido como miembros de la comunidad aborigen a la que dicen pertenecer.

En suma, reitero, la cuestión se encuentra limitada a la controversia de derechos individuales y no colectivos, ya que la parte actora no demandó a la Comunidad Indígena en cuestión (cfr. fs. 185 donde la Dra. (S/N) al ser intimada a expresar contra quien dirige la demanda contestó contra (S/N), (S/N) y (S/N). Tampoco fue citada como tercero por ninguna de las partes ni a integrar la litis por el director del proceso.

Habiendo dejado sentado quienes fueron las partes del proceso, en consonancia con lo oportunamente postulado por las partes y resuelto por la juez -lo que luego fue consentido por las mismas y hace cosa juzgada respecto de ellas-, resulta contradictoria la afirmación de la recurrente respecto a que la Comunidad Aborigen (S/N) tuvo participación en autos, con fundamento que su presidente expresó que el inmueble pertenece a la comunidad y que éste no sólo intervino como testigo sino también participó en la audiencia donde se limitó la cuestión a los particulares. Dichas consideraciones se revelan a todas luces como dogmáticas y contrarias al principio de congruencia que impone que la sentencia definitiva se refiera estrictamente al objeto procesal planteado como pretensión de las partes.

No hay controversia entre éstas respecto a que la sentencia que se intenta ejecutar se encuentra firme y consentida, sí difieren respecto del alcance que se le debe dar a la cosa juzgada. Entiendo que rige al respecto la máxima romana "res inter allios judicata allius nec nocere prodesse potest" (lo que haya sido juzgado entre dos o mas personas no aprovecha ni perjudica a terceros). Se colige de lo dicho la regla general según la cual, por derivación del principio de congruencia "subjetiva" la decisión adoptada en la sentencia resulta inoponible a los terceros que no hayan tomado intervención en la causa, afectando sólo a las partes y a los terceros que se insertan en el proceso mediante un trámite prescripto a tal fin. Esto es consecuencia necesaria de la garantía de juicio previo, debido proceso regular y legal o tutela judicial efectiva (art. 18 de la C.N.). Ello es así por cuanto, a tenor de la aludida prerrogativa constitucional, el juzgamiento de los derechos justiciables debe ser el corolario de la íntegra sustanciación del "debido proceso", es decir aquel que auspicie una suficiente y razonable oportunidad al justiciable para actuar con "utilidad" en la causa, con el fin de obtener una decisión tempestiva, eficaz y fundada de su pretensión. Por otra parte, además, la alteración (perjudicial) de la defensa de derechos del justiciable provocada por la

sentencia dictada sin que el interesado haya intervenido en el proceso antecedente, conculcaría el derecho de propiedad (art. 17 C.N.). (Cfr. Ferrer, Sergio E., "La cosa juzgada en el proceso colectivo", publicado en LLC 2008 (noviembre), 1059. CITA Online: AR/ DOC/2771/2008).

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que "Cabe señalar que cuando los efectos de la cosa juzgada han de extenderse a otro interesado, corresponde su participación en la causa (fallos t. 256, p. 198 –Rev. LA LEY, t. 111, p. 413-) ya que el reconocimiento del carácter inmutable de una decisión judicial requiere la existencia de un trámite anterior contradictorio en el que se hayan respetado sustancialmente las exigencias de la garantía de la defensa en juicio (Fallos, t. 238; p. 18; t.2 55, p. 162; t. 261, p. 322 –Rev. LA LEY, t. 88, p. 92; t. 118, p. 438- entre otros).

Por lo demás, entiendo que la prueba presentada por la Comunidad Aborigen en cuestión y que la recurrente califica de extemporánea, no intenta de ninguna manera modificar la sentencia ya consentida por los que fueron partes en el proceso. El ad quem, no cambió la sentencia ni la dejó sin efecto en violación a la cosa juzgada, sólo determinó los alcances de ésta, la que de ninguna manera resulta oponible a quien no fue parte en la controversia.

Por los fundamentos expuestos, propongo el rechazo del recurso interpuesto por la Dra. (S/N) en nombre y representación de (S/N) y (S/N) en contra de la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial el 5 de mayo de 2014.

No existiendo motivo para apartarme del principio general de la derrota, propicio que las costas sean impuestas a los recurrentes en su calidad de vencidos (art. 102 del C.P.C.). En cuanto a los honorarios profesionales, siguiendo el criterio adoptado por este Tribunal respecto a los montos mínimos con que debe retribuirse la labor profesional de abogados y procuradores en "Hirmas c/ Estado Provincial" (L.A. 39 Fº 427/431 Nº 169), "Argentores c/ Video Bar Luisiño" (L.A. 39 Fº 994/996 Nº 382) y "Baudillo Lobos c/ Iturbe" (L.A. 44 Fº 1239/1242 Nº 542), y los fijados en la acordada Nº 17 Fº 355/356 Nº 193/14 rectificatoria de la Acordada 179/14, propongo regular los que corresponden a las Dras. (S/N) y (S/N) las sumas de dos mil pesos ($ 2.000) y mil seiscientos pesos ($ 1.600) respectivamente, teniendo en cuenta que ambas actuaron en el doble carácter y revisten, en esta instancia, el rol de vencedora la primera y de vencida la segunda. A esos importes se les sumará el impuesto al valor agregado, de corresponder.

Los Dres. (S/N), (S/N), (S/N) y (S/N), adhieren al voto que antecede.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia,

Resuelve:

I. Rechazar el recurso interpuesto por la Dra.(S/N) en nombre y representación de (S/N) y (S/N) en contra de la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial el 5 de mayo de 2014.

II. Imponer las costas a la recurrente vencida.

III. Regular los honorarios de las Dras. (S/N) y (S/N) Ruiz las sumas de dos mil pesos ($ 2.000) y mil seiscientos pesos ($ 1.600) respectivamente. A esos importes se les sumará el impuesto al valor agregado, de corresponder.

IV. Registrar, agregar copia en autos, notificar por cédula.

Firmado: Dr. (S/N); Dra. (S/N); Dr. (S/N); Dra. (S/N); Dr. (S/N).

Ante mí: Dra. (S/N) – Secretaria Relatora.

Expediente N° 11498/2015

Órgano: **Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia.**

Libro de acuerdo: **58.**

Número Sentencia: **1127.**

Fecha: **11/4/2016.**

Competencia: **Recursiva.**

Voces Jurídicas: **COMUNIDADES ABORIGENES DESALOJO INTERVENCION DE TERCEROS.**

TEMAS: DESALOJO. COMUNIDADES ABORÍGENES. INTERVENCIÓN DE TERCEROS. TERCEROS AJENOS. PROPIEDAD COMUNITARIA DE LA TIERRA.

(Libro de Acuerdos Nº: 58, Fº 3994/3995, Nº: 1127). En la ciudad de San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los once días de abril de dos mil dieciséis, los señores jueces del Superior Tribunal de Justicia, doctores (S/N), (S/N), (S/N),(S/N) y, por habilitación, (S/N) –bajo la presidencia del nombrado en primer término-, vieron el expediente Nº 11.498/15, caratulado "Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expte. Nº 13.899/14 (Sala II – Cámara de Apelaciones Civil y Comercial) Desalojo: (S/D) c/ (S/D)", del cual,

El doctor (S/N) dijo:

Una vez firme la sentencia de desalojo y ordenado el lanzamiento de (S/N) del inmueble ubicado en la localidad de Tilcara, Padrón I-2277, y su entrega a los herederos de (S/N) (fs. 246/249 y fs. 309), se presentó la "Comunidad Indígena (S/N)" para solicitar su admisión como tercero interesado en la causa y la suspensión del lanzamiento del demandado.

La comunidad sustentó su pretensión en la Ley 26.160, modificada por la 26.894, que prevé la suspensión, hasta el 23 de noviembre de 2017, de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que "tradicionalmente ocupan" las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el registro nacional o provincial competente o aquellas preexistentes y siempre que la posesión actual, tradicional y pública se encuentre "fehacientemente acreditada" (artículos 1º y 2º).

La jueza de grado rechazó aquella solicitud y dicha decisión fue confirmada, por mayoría, por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (fs. 404/407 y 547/552).

Disconforme, la vencida interpuso el recurso de inconstitucionalidad en examen (fs. 14/19). El mismo fue contestado por el doctor (S/N)d en representación de la sucesión de (S/N) (fs. 32/36); en su escrito expresa las razones por las que pide el rechazo del mismo, con costas.

Integrado el Superior Tribunal, los autos fueron llevados a opinión del Ministerio Público Fiscal, quien se expidió en sentido adverso al remedio tentado (fs. 58/60).

En consonancia con lo expresado por la señora Fiscal General Adjunto en el dictamen antes aludido, el presente recurso de inconstitucionalidad es inadmisible.

En efecto, la razón por la que se admitió el desalojo y se ordenó el lanzamiento de Dionisio Montoya fue el vencimiento de contrato de arriendo cuya existencia fue reconocida por éste al contestar la demanda (confrontar sentencia de fs. 246/249, confirmada por este Superior Tribunal en L.A. 55, Nº 692 y L.A. 56, Nº 161 y fs. 64 en la contestación de demanda). Acreditado, entonces, que el demandado ostenta sólo la tenencia del inmueble en cuestión con la consecuente obligación de restituir, resulta aquí irrelevante el dato, aportado por la comunidad para justificar su intervención referido a que Dionisio Montoya es miembro de ella; carácter que, curiosamente, nunca invocó el propio demandado.

Y más allá del mentado reconocimiento del accionado de ser arrendatario en la finca, corresponde tener en cuenta que la jueza de grado –según lo dejó sentado en la sentencia de fs. 404/407- a través de las inspecciones oculares pudo constatar que (S/N) no ejerce posesión alguna en forma comunitaria.

Ahora bien, tampoco surge de las constancias de la causa otros elementos de prueba que conduzcan, razonablemente, a concluir que la comunidad indígena tenga la posesión sobre dicho inmueble; la que

conforme al artículo 2º de la Ley 26.160 debe “encontrarse fehacientemente acreditada” y, por cierto, esta no es la vía para hacerlo.

Por lo tanto, descartada la aplicación al caso de la ley antes mencionada cabe afirmar que no existe interés legítimo que justifique la intervención pretendida por la COMUNIDAD (S/N).

En tales condiciones corresponde, rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por la doctora (S/N), en representación de (S/N) en su carácter de presidenta de la “Comunidad Indígena (S/N)”; imponer las costas por el orden causado (artículo 102, segundo párrafo, del Código Procesal Civil) atento a las particulares circunstancias de la causa y regular los honorarios de la profesional antes nombrada y los del doctor (S/N) las sumas de pesos mil seiscientos ($ 1.600) y dos mil ($ 2.000) respectivamente -conforme a la doctrina de los honorarios mínimos y Acordada Nº 179/14-, con más el impuesto al valor agregado si correspondiere.

Los doctores (S/N), (S/N) y (S/N) adhieren al voto que antecede.

Por ello,

el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por la doctora (S/N), en representación de (S/N), en su carácter de presidenta de la “Comunidad Indígena (S/N)”.

2º) Imponer las costas por el orden causado y regular los honorarios de la profesional antes nombrada y los del doctor (S/N) en las sumas de pesos mil seiscientos ($ 1.600) y dos mil ($ 2.000) respectivamente, con más el impuesto al valor agregado si correspondiere.

3º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dr. (S/N); Dra. (S/N); Dr. (S/N); Dra.(S/N); Dr. (S/N) (Habilitado).

Ante mí: Sr. (S/N) – Prosecretario (Por Habilitación).

Apéndice B- Diseño de Entrevista.

Información de Contexto: Se explica el propósito de la entrevista y cómo se utilizará la información recopilada. Se obtiene previamente el consentimiento informado de los participantes. Se hace saber sobre cómo se utilizará la información recopilada y cómo se protegerá su anonimato.

Contexto Cultural y Territorial

Preguntas Introductorias:

¿Dónde nació?

¿Cuántos años tiene?

¿Dónde vive?

¿A qué comunidad pertenece?

¿Como se forma la comunidad?

¿Quiénes la integran?

¿Cuántas personas conforman la comunidad?

Relación con el territorio de vida:

¿Cuáles son las principales actividades económicas de la comunidad (agricultura, comercio, artesanía, ganadería…pastoreo…)?

¿Poseen otro sustento económico?

¿Cuál es su trabajo?

¿Cuáles son las actividades no económicas que desarrollan en comunidad?

¿Cómo se relaciona con el territorio donde vive?

¿Qué relación tiene la comunidad con el entorno donde vive?

¿Qué significado tiene para usted el territorio donde vive?

¿Comparte estos significados con su comunidad?

¿Con que otras comunidades o grupos no comunales, comparte el territorio?

¿Existen conflictos internos en la comunidad? Y con los vecinos?

Sentencia Judicial y Territorio.

Conciencia Legal:

¿En su comunidad hubo experiencias de intervención de la justicia? ¿Cuáles?

¿Conoce sobre sentencias judiciales relacionadas con su territorio?

¿Sabe por qué se llevaron a cabo? ¿Qué conocimiento tiene sobre ese tema?

¿Qué opinión tiene sobre el sistema legal en relación con su comunidad?

Impacto de la Sentencia:

¿Cómo ha afectado la sentencia judicial a usted, su familia y la comunidad?

¿Ha habido cambios en las prácticas tradicionales o en la relación con la tierra después de la sentencia?

¿Qué tipo de cambios?

¿Cree que el resultado de la sentencia judicial ha sido beneficioso para la comunidad?

Percepciones y Cambios.

Percepciones Comunitarias:

¿Como ha impactado en usted el resultado de la sentencia judicial?

¿Sabe, de qué manera lo percibieron los miembros de su comunidad?

¿Se han generado discusiones o debates dentro de la comunidad acerca de esta sentencia? ¿Cuáles?

Adaptaciones Culturales:

¿La comunidad ha debido adaptar prácticas culturales luego de la sentencia?

¿Ha cambiado la manera de gestionar el territorio luego de la sentencia?

Futuro y Reflexiones.

Perspectivas Futuras:

¿Cómo ve la relación de la comunidad con las tierras luego de la sentencia?

¿Qué desafíos y oportunidades ve en relación con la gestión de su territorio?

¿Quiere decir algo más sobre los desafíos que enfrenta su comunidad con respecto al territorio y las sentencias judiciales?

Cierre de la Entrevista

Se pregunta si hay algo más que deseen agregar y si tienen alguna pregunta adicional.

Apéndice C- Consentimiento Informado

Mi nombre es Emilce Daiana Schindler, soy abogada y estudiante de la Universidad Nacional de Jujuy. Me contacto con usted para la realización de una entrevista, en el marco de mi Tesis Doctoral, denominada: La cuestión indígena: De juicios y tierras. Análisis de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Jujuy (2015-2023) de la Carrera De Posgrado, Doctorado En Ciencias Sociales, Facultad De Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional De Jujuy.
El objetivo general de la investigación es: Analizar los términos y tratamientos jurídicos utilizados por el Tribunal Superior de Justicia ante las demandas territoriales de las comunidades indígenas, y las tensiones de sentido que resultan de los fallos judiciales dictados en la provincia de Jujuy, durante los años 2015 al 2023.

Antes de empezar, necesito que manifieste si está de acuerdo con participar, luego de notificarse de algunas cuestiones que se le detallan a continuación:

Su participación en esta entrevista es totalmente voluntaria y gratuita, y no tendrá beneficio, ni riesgo, personal o comunitario. No implicará para usted ningún tipo de perjuicio si decide no participar, así como tampoco le generará responsabilidad alguna, si decide interrumpir su participación en cualquier momento una vez comenzada la actividad, si usted así lo desea.

La confidencialidad de sus datos está garantizada por la Declaración de Helsinki y todas sus enmiendas, y por la ley de Habeas Data N° 25.326 y sus modificaciones de protección de datos personales, de modo tal que no pueda identificarse lo que usted plantee con su nombre. Si decide participar, debe saber que la información que proporcione será desgravada y analizada, sin que su nombre figure en ningún momento.

Podrán ubicarme en mi domicilio legal constituido: Patricias Argentinas N° 437 en Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, en horario de 15:00hs a 21:00 hs. La persona responsable de este estudio es: Emilce Daiana Schindler.

Si hay algo que no le quedó claro o tiene alguna duda puede preguntarme, ahora o en cualquier momento de la entrevista. En caso de estar de acuerdo, comenzamos.

¿Está de acuerdo? SI _____ NO _____ (marque con una X)

Persona participante: Firma: ……

Aclaración……

Fecha..... de.....de 2023

Apéndice D - Lista y desglose de entrevistas a comuneros.

Entrevista Nro. 1

- Bueno yo nací en zapalla que es un paraje de Hornaditas del departamento de Humahuaca.
- 44 en la actualidad.
- Ahora bueno yo vivo en Tilcara en villa florita que es territorio de la comunidad S/N.
- La comunidad, nosotros somos 93 familias 300 personas alrededor.
- La comunidad tiene varias actividades económicas hay algunas personas que trabajan en el estado por ejemplo la municipalidad como docentes son como una parte minoritaria, después los varones por lo general trabajan en lo que es el trabajo de albañilería, ellos trabajan como albañiles y otro sector de las mujeres ahí donde me incluyo trabajamos en artesanía. Y también dentro de la comunidad hay un circuito que se llama cuevas del wuayra y ahí trabajan 15 familias es un circuito turístico.
- Nosotros hacemos ceremonias por ejemplo el inti Raymi y ceremonias que se van programando de acuerdo a nuestras fechas de calendario por ejemplo que es el inti Raymi el coya Raymi y otras ceremonias que se hacen cuando la luna esta luna llena y de acuerdo a la necesidad que tengamos de hacer ceremonias y después también se hacen mucho menos pero si se hacen por ejemplo señaladas se comparten los carnavales juntamos yacen las marcadas son actividades asi para el carnaval también nos juntamos y ahí compartimos también.
- Y nosotros somos parte de nuestro territorio ósea no podríamos existir sin nuestro territorio y nuestro territorio es todo no es solamente lo que es tierra sino todo lo que es el subsuelo el suelo el aire todo el cosmo porque ahí nosotros nos desarrollamos nuestra parte económica y también en nuestra parte que es cuando el tema de nuestra agua de nuestra espiritualidad también porque en nuestro lugar están nuestro espíritu de los que se han ido de nuestra comunidad pero que siguen en el lugar y también están nuestros espíritus nuestras guacas, nuestros espíritus, están en el lugar entonces nos relacionamos de esa manera en todos los aspectos de nuestra vida.
- La comunidad tiene a ver relaciones con otras comunidades a la vez también pertenece a lo que es el departamento (S/N), pero bueno tiene relaciones con otras comunidades toda la provincia y bueno de esa manera también hacemos actividades juntos si una comunidad hace una señalada nos invita o hace su festejo de carnaval del inti Raymi también nos invita y en este último tiempo también se está intentando armar que sea como una mesa coordinadora con otras comunidades.

- Y para nosotros el significado de nuestro territorio es como nuestra mamá nuestra Pachamama y por eso es que también es lo que nos duele tanto que también se vea en este sistema q es como sistema muy capitalista se vea que lo único que importa es la plata y lo que se denomina desarrollo sin importar que se está destruyendo a nuestra madre y que después un día nos va a afectar a todos a los que vivimos en cualquier lado de la ciudad o el campo los pueblos los ricos nos va afectar a todos por el tema del agua.
- Nosotros no, en este momento en nuestra comunidad que se llama (S/N) y tiene su territorio que está delimitado, pero no compartimos en este momento.
- Son como muy mínimos osea existen conflictos internos, pero no son de gran envergadura como para quebrar o para desarmar la organización de la comunidad son no sé que la gallina de uno se paso a la parte del otro, que el perro ataco a la ovejita del otro, son problemas así que son internos muy chicos.
- Si tengo, si tuvimos y seguimos teniendo conflictos de nuestro territorio por nuestro territorio, tenemos conflictos civiles. Tuvimos conflictos civiles tuvimos conflictos penales también. Luego uno de los conflictos civiles que tuvimos civiles fue también por el tema de intento de desalojo que se le armo a un miembro de nuestra comunidad que se en contra miembros de nuestra comunidad.
- Si si en ese conflicto si bueno yo creo que bueno es bastante largo el conflicto empezó en el 2003 cuando el presidente de ese tiempo el cede los espacios para que las familias más jóvenes hagan su casa entonces en eso, en ese tiempo en esa gestión se dan lotes a varias familias jóvenes de la comunidad y en el 2005 aparece una señora, perdón en el 2001 se le dan los lotes y en el 2005 aparece la señora ahora dice que ese lugar es de ella cuando ya las familias de la comunidad tenían su casita y ahí empieza el juicio y bueno.
- Si ya en el 2012 salió la primera sentencia que salió en contra de la comunidad que salió en contra de los miembros de la comunidad, no en contra de la comunidad salió como individual salió en contra de las familias de la comunidad y bueno después ahí nosotros con los abogados nuestros doctores en ese tiempo hicimos estrategias judiciales hicimos la presentación y también porque se hizo la sentencia en contra de las familias individuales no de toda la comunidad pero en la sentencia de desalojo dice la jueza (S/N) que se iba a desalojar a todo el que este dentro del territorio y todo el que territorio se refería a la comunidad entonces ahí nuestros doctores ellos actuaron y bueno hicieron un hicimos un conjunto una estrategia y bueno la sentencia finalmente en el 2015 sale a favor de la comunidad de que no se desaloje a los miembros de la comunidad.

- Bueno para mi esa sentencia es positiva y esa sentencia es positiva, pero nosotros de ahí tenemos mucho más tenemos muchos más mas juicios y nos parece como muy extraño porque a la actualidad la señora q perdió el juicio sigue volviendo a intentar osea sigue volviendo desde la justicia está volviendo a hacer el juicio de nuevo.
- Claro entonces no entendemos porque ya tenemos una sentencia ganada y a la fecha osea la justicia está volviendo a dar curso a la señora que perdió el juicio después de tantos años y entendimos que fue con todos los argumentos pero que ahora está volviendo a hacer todo está volviendo a hacer presentaciones está volviendo a hablar con nuestros abogados por ejemplo dice no que ella quiere hacer un trato y está volviendo a hacer todo lo que son denuncias y la justicia lo toma entonces esa parte nosotros también ya decimos bueno fue una sentencia un juicio que ha pasado tanto tiempo y que hemos ganado y que aun así hoy en día no estamos con toda la seguridad de que eso digamos este firme porque la señora vuelve a intentar hacer juicios osea la señora que perdió la señora.
- Esta sentencia en particular esta sentencia digamos fue como fue demasiado larga y fue demasiado desgaste de energía en todo lo que ha sido los años y a la familia de la comunidad por ejemplo puso mucho y tuvieron mucha angustia mucha desesperación porque ya era el desalojo un día y después no después fue como demasiado traumático porque incluso una de las señoras que es Ester a ella no tenía un hijito y no tenía más nadie no tenía otra casa entonces fue muy muy traumático para ella porque este muy angustiante tener tu casa haberla hecho de base y después de un día que te digan, tenés que irte a la calle como fue muy traumático.
- Nosotros entendimos a partir de ahí que nos espera un largo proceso de un largo proceso de lucha y también entendemos que tenemos que ir más organizado porque como que en esa sentencia entendimos que tenemos que tener haber más cuidado con todo porque la justicia no nos osea la justicia no nos ha brindado desde el primer momento no nos ha escuchado desde el comienzo porque al principio de esa sentencia al principio de esa causa se nuestro presidente había presentado que somos una comunidad y que somos una comunidad y eso tenía que ser una causa que está dirigida o afectando a la comunidad y pero no salió sentencia a particular y salió la sentencia solo como personas individuales y no colectivas
- Después de eso después de la sentencia nosotros nos vimos más involucrados osea entendimos que tenemos que tener más conocimiento sobre tuvimos que a la fuerza tener más conocimiento de en cuanto a los juicios como son las instancias estar atentos porque

eso fue como una cachetada que nuestro presidente no se la veía venir porque no osea como que no entendía el cómo salió la sentencia en contra si somos una comunidad esta vigente la ley 26.160 esta vigente el articulo 75 inciso 17 donde los territorios son inajenables que no se pueden haber desalojos para las comunidades y como es que salió el desalojo a la comunidad entonces eso fue muy para todos nosotros fue muy feo.

- Después de todo lo, después de estar al borde del desalojo la sentencia fue bien recibida a pesar de todo lo que nos ha costado fue bien recibida esa sentencia fue bien recibida.
- Si se generaron en ese tiempo algunas discusiones algunos no entendían mucho bueno algunos no entendían mucho y todo también no sé si discusión, sino que todos teníamos como la certeza de que eso estaba cerrado ya pero después cuando volvieron a surgir todas de nuevo las denuncias como que todos de nuevo decimos otra vez el proceso y Ester otra vez estuvo como triste angustiada.
- Si si si ya fuimos más estuvimos como más despiertos estuvimos como más atentos a todo lo que nos pasa y como todo el tiempo entendiendo o queriendo entender cómo funciona el sistema porque osea para nosotros que vivimos d no se sembrar la papa o de hacer las artesanías como todo un desafío este entender el lenguaje judicial porque es como muy tiene palabras en también en latín y como que hay cosas que no entendemos entonces el termino judicial es muy difícil para nosotros pero eso, eso , esa tendencia nos llevó a que nosotros estemos más atentos sobretodo.
- Si si nos planteó lo positivo es que nosotros ahora entendemos que tenemos que tener estrategias que tenemos que tener estrategias que también tenemos que tener estrategias y ir d la mano con nuestros abogados porque si no también si no tenemos nuestros abogados va a ser muy difícil también ir solos así dejamos porque nos hacen denuncia tenemos otros juicios entonces como nos defendemos si no tenemos algún abogado. Eso por un lado por otro lado también la parte espiritual tiene gran importancia y esta la parte de las energías y la parte también de los nuevos líderes que van surgiendo ósea es un desafío que vayan surgiendo nuevos líderes que vayan teniendo todo nuestro conocimiento de lo que estamos viviendo y también nuestra parte espiritual o sea es para nosotros ese es el desafío que nuestra espiritual se siga desarrollando, que tengamos nuevos líderes y que tengamos que armemos estrategias.
- Y en relación a la sentencia solamente a la sentencia no, en relación a la sentencia nosotros como bueno estamos, estamos, como casi seguro que bueno que van a volver a iniciar otra vez las demandas todos y ahora nosotros ya tenemos que estar más decididos digamos

ahora tenemos algo de conocimiento y tenemos que estar más decididos a cortar de una pero bueno eso es necesitamos todo una cuestion también de abogados que entiendan de actores que entiendan de nuestros derechos indígenas y que también porque no entendemos mucho que están todas nuestras leyes que no haya mucha más respuestas muchas más concretas más definitivas.

Entrevista Nro. 2

- Yo nací en zapagua departamento de Humahuaca
- 42
- En Tilcara zarahuaico
- Y somos 300 personas entre niños adultos y jóvenes. Si comunidad (S/N).
- Y hay mucho muchos dependen del estado como empleados municipales otros son agricultores otros son albañiles otros guía de turismo en mi caso yo soy guía de turismo.
- Y las no económicas serian celebraciones inti raymi fiesta madre tierra fiesta agua al viento eso son después trabajamos comunitarios también no recibimos dinero sino que son inclusive invertimos plata por las ceremonias tenemos que comprar los vinos la chicha la comida bebida entonces para mi yo entiendo que eso sería pero nosotros siempre la espiritualidad se dice que la madre tierra nos está dando todo entonces a veces no los políticos no nos dan la plata quien nos da es la madre tierra está haciendo que se yo la zanahoria la papa la haba es la madre tierra entonces por eso se hace la ofrenda a la madre tierra.
- Y es muy integro la relación porque nos conectamos espiritualmente amamos la madre tierra amamos porque es nuestra madre mayor nos conectamos todos los días porque vivimos en ese lugar nos conectamos espiritualmente energéticamente físicamente en todos sentidos vivimos no en el lugar entonces no hay forma d vivir desconectados.
- Y siempre hay conexión porque tenemos que ir a comprar la mercadería al pueblo al centro tenemos que relacionarnos con otras comunidades que están alrededor tenemos que generar vínculos con la gente que no depende de la comunidad también ¿no? y pensar en una comunidad mucho más grande al fin y al cabo yo sé que no se designan comunidad indígena, pero vivimos en comunidad no nos podemos aislar porque tenemos vínculos diarios, cotidianos.
- Ese vínculo enmarca la tierra.

- El significado de comunidad siempre estuvo en nuestros ancestros abuelos tatarasabuelos es significado de pertenencia de la tierra pertenecer tampoco, es que somos dueños. Solamente es que estamos cuidando la madre naturaleza porque para las futuras generaciones también ese es el significado que le damos a la tierra y que le damos cono un ser vivo también no es que está muerto.
- El territorio no, porque el territorio es de las 300 familias que vivimos ahí hay un mapeo tiene una x cantidad de hectáreas entonces eso no compartimos no entra otra comunidad ahí. No se comparte.
- Si existen bastante conflicto interno ya sea por la política también que entra y divide a la gente a las personas eso es un mal que estamos teniendo en estos últimos tiempos mucha politización cosa que la gente mayor también es como que se ha vuelto fanática de los partidos entonces no sabe si defender a los políticos o defender a la comunidad entonces en su cabeza está un poco ese gran dilema de.
- Con vecinos también vecinos que no comparten el pensamiento de comunidad indígena y viven más en el pensamiento individual, si hay bastante conflicto.
- Yo estoy viviendo en carne propia, a mí me están por desalojar mi casa donde estoy viviendo donde ya ocho años estoy viviendo ahí esa tierra me lo cedió la comunidad y hay un hotelero, que me quiere sacar desalojar y es duro vivir porque cae viernes las citaciones orden de desalojo y eso.
- Si tuvo que intervenir la justicia estamos actualmente pagando nuestro abogado.
- Si tuvimos sentencia, está en el tribunal superior ahora nuestra causa por desalojo que nos hizo el hotel (S/N), no está la respuesta definitiva.
- Y la sentencia de antes mi opinión es yo opino que no está bien no porque son tierras de las comunidades y como nos van a desalojar hay gente con discapacidad viviendo ahí, mi compañera es quien tiene su discapacidad entonces yo tengo que salir de esa casa y ella va a quedar sola ahí entonces nos dice que no hay lógica en estos juicios no entendemos.
- Claro a la comunidad la afecta porque nos tenemos que reubicar darnos otro lugar y es un lio para la comunidad es un dolor de cabeza.
- Nosotros seguimos con los juicios con las presentaciones después si emocionalmente.
- No, no eso no seguimos con nuestras ceremonias nuestras costumbres todo.
- Si es caos es bastante caos tristeza dolor más que todo incertidumbre
- Si se echó la culpa a cierto sector, se produjo la división, sentencia negativa afecta a todos.

- No por ahora no igual no está firme la sentencia entonces por ahí se sigue teniendo optimismo sobre todo va a salir bien pero igual es duro vivir así con constante amenaza con que te están sacando te están botando, de tratarte como el usurpador tratarte como un delincuente eso es lo doloroso aparte la gente de los hoteles te lo dicen en la cara que somos usurpadores que somos malos que esto que aquellos entonces convivir con eso es duro.
- Y si, si hay que confiar hubo algunos casos que si ganamos como comunidad el caso se dio vuelta en un juicio, pero bueno muchos sacrificios tuvimos que hacer trasladarla a ella hacer la casa otro lado y no quisiera nosotros pasar por eso.
- Se repite de nuevo tenemos que volver a eso es algo angustiante todo esto.
- Si veo oportunidad positiva se ve con toda la estrategia y sino también salir a cortar la ruta como siempre, eso nos dio resultados poner el cuerpo nos metieron preso nos metieron balas de goma tengo dos cicatrices acá de la última represión porque yo tenía que salir a la ruta porque está en juego mi casa que lo arme invertí mucha plata, tiempo la comunidad también entonces tenemos que salir a poner el cuerpo llegar a ese extremo, no tendríamos que llegar a ese extremo tendría que haber pasos antes.

Entrevista Nro. 3

- Nací en San Salvador de Jujuy.
- 38 años.
- En Tilcara.
- Si pertenezco comunidad (S/N).
- Aproximadamente entre 300 personas abuelos, abuelas, jóvenes, niños.
- Si buenos nosotros en mi caso trabajo lo que es el área de turismo y después también nos dedicamos a vender artesanías, hay agricultura también es variado la actividad económica que tenemos dentro de la comunidad algunos se dedican al comercio independiente, pero si es variado el trabajo de cada uno y cada una que tenemos.
- Las actividades no económicas serian buenos las asambleas que tenemos mensualmente las ceremonias, ofrendas que realizamos a los dadores de vida, a la pachamama, a todo lo que tiene que ver con nuestra conexión con nuestros ancestros y ancestral.
- Me relaciono sintiéndome parte del territorio y el territorio también es parte de mi interno externamente.
- Y tiene una relación de convivencia a veces armónica a veces también desarmonica porque a veces también la sociedad le cuesta entender también el hecho de que nosotros también

pertenecemos a una comunidad y de vivir en comunidad hay mucha gente que no nos reconoce como integrante o como comunidad y hay otra parte que si lo hace entonces por ahí es complejo al menos desde mi perspectiva socializar con todo nuestro entorno y en si con la sociedad.

- Y tiene mucho significado energético mucho significado de amor, de paz, de tranquilidad que tal vez otras personas no lo ven, no lo sienten y es como decían días atrás el sentido de pertenencia que tenemos que tener nosotros dentro de la tierra ser parte de la tierra.
- En ese sentido por ahí cuando nos reunimos a hacer ceremonias con otros hermanos de comunidades también con visitantes turistas en el caso de nosotros que trabajamos con el turismo también invitamos a visitantes de otra provincias acá de Jujuy como de otra provincias acá de Argentina a ser partícipes también de ese entorno comunitario.
- No, lo que es territorio lo que es tierra no compartimos, el hacer ceremonias el hacer encuentros si.
- Si los existen como en todas comunidades siempre existen conflictos internos.
- Con los vecinos que nosotros tenemos actualmente en la parte del territorio donde vivimos si, que son los dueños del hotel, siempre hemos tenido desde que hemos decidido vivir en ese espacio que es territorio comunitario si hemos tenido hasta el de hoy enfrentamiento con los dueños del hotel (S/N).
- Buenos nosotros actualmente tenemos conflictos con los supuestos terratenientes y con los dueños del hotel.
- Si, si tuvo que intervenir.
- En algunos conflictos si han salido sentencias favorables y en otras desfavorables.
- Y mi opinión bueno con la sentencia actual que lleva aca mi compañero creo que no se no se aplica lo que es derecho indígena no se aplica muchas cosas lo que es la palabra justicia porque siempre se termina beneficiando al que más poder económico tiene en esta caso bueno los dueños del hotel.
- Y que es demasiado desastroso desmadrado como le digo yo porque ya han pasado bastante años siglos y seguimos como viviendo así en una total indiferencia por parte de lo que es la justicia lo que roban esa la palabra justicia es indiferencia total.
- Y a nosotros en lo personal es la cuestión psicológica emocional porque eso demanda una baja autoestima y en lo personal y a nivel como intelectual inferior también porque nos sentimos a veces desganados cansados de luchar y ver que la justicia la policía y todo los que engloba eso se desvirtua.

- No
- Usted dice en relación asi a relacionados vinculados
- No no hay cambios pero con el tiempo sí creo que es necesario ir haciendo un proceso de esa sentencia favorable desfavorable y llevando haciendo un proceso para ir viendo estrategias o soluciones para poder llevarlo adelante, sacar adelante esas sentencias.
- Y es la incertidumbre la preocupación el desgano a veces de esperar resultados positivos y a veces la justicia no te los da.
- Si sobre esto y sobre bueno otra situaciones más, otras cuestiones judiciales que tenemos legales que tenemos.
- Discusiones comunitarias buscando siempre primar la solución buscar alternativas estrategias para como vos decías como el integrante que falleció siempre buscar salir de esa situación.
- Hasta el momento esta así tranquilamente pasivamente. Si seguimos normal
- A futuro veo que nosotros tenemos que sentirnos y sentir el sentido de pertenencia por nuestro territorio nadie más lo va a hacer yo creo que por más acompañamiento que tengamos a veces de los abogados las abogadas sabemos que bueno que el sistema también es muy burocrático muy cruel actualmente con todo lo que esta pasando aca en Jujuy sobre todo con las comunidades entonces creo que nosotros tenemos que más que nada sentir ese amor a la tierra al territorio creo que ese es el inicio para que nosotros podamos también prepararnos y dar la batalla tal vez no es una batalla bueno es necesario también nosotros prepararnos es la obligación también de nosotros prepararnos para dejar a las futuras generaciones, yo digo estudiando capacitándonos entiendo ese sentido de pertenencia ese amor y empezar a ver, buscar estrategias para dar vuelta toda esta situación. Yo creo que lo vamos a lograr es cuestión de unión de paciencia de también volcarnos nosotros a nuestras ceremonias a todo lo que tenemos el lugar donde nosotros vivimos es muy energético y a veces nadie más que nosotros que vivimos ahí en el territorio que la sufrimos el día a día la falta de agua un montón de cosas las medidas cautelares las persecuciones el hostigamiento todo la criminalización también que nos hacen yo siento que nosotros tenemos que ser el inicio de eso nuestros abuelos y abuelas ya tuvieron su etapa ahora nos acompañan pero ahora nosotros como jóvenes es seguir eso y así las futuras generaciones también vendrán y seguirán ese mismo cambio creo que desafío es, es muy grande pero también es necesario desde nuestra parte el sentimo parte y eso también es parte de nosotros.

- Muchas gracias.

Entrevista Nro. 4

- Tilcara
- 27
- Si
- Si pertenezco Comunidad (S/N).
- Y 100-150 familias. 100 familias
- Económicas vivimos de la agricultura. Gran parte de la familia vive de trabajo de construcción también hace artesanías. Que mas, artesanías y bueno turismo también.
- Si, tenemos diferentes, claro relacionado a eso tenemos por ejemplo inti Raymi, tenemos ceremonias de sol, de agua del viento todo eso lo que nos dejaron nuestros abuelos no, para curar el cuerpo y nada más, no tenemos otras actividades, después de lo cotidiano si lo que hace la gente seria lo deportivo nada mas
- Yo, yo por ejemplo la relación que tengo no se quiero mucho al lugar donde vivo, abuelos a la familia que siempre estamos ahí digamos la relación es muy linda mucha sabiduría como comunidad.
- Claro lo mismo. Si.
- No, es una comunidad después hay diferentes comunidades pero están, claro compartimos de compartir si a veces cuando tenemos que unirse. Con tierra no cada uno su parte.
- No, no a veces, pero no se arregla somos una comunidad muy implementada con muchos abuelos entonces ellos nos enseñan como arreglar esos conflictos que a veces se generan.
- Si siempre hay conflictos, pero conflicto a gravedad no como para ir a la policía ni nada de eso no si hay conflictos, pero no graves.
- Si hubo bueno, si tengo conocimiento, de hecho sigue esa digamos hay terratenientes que dicen ser dueños de la comunidad y bueno sin papeles ni nada sino que bueno hay partes tios y tias, algunos familiares de la comunidad misma que tiene papeles de algún lugar de que pertenecen a la comunidad no, tiene papeles pero hay otras personas que tiene papel de un lugar y piensan que es todo de ellos pero ya está conformada la comunidad.
- Si intervinio
- Si también.
- A favor si tenemos varios juicios ganados y otros creería que no todavía no se sabe.
- No, no se.

- Si a la comunidad si afecto por ejemplo la medida cautelar no se puede poner agua ni luz nada de lo que es esencial para vivir entonces estamos privados de eso la nueva por ejemplo si alguien pide un terreno no puede construir entones la comunida da el terreno pero no puede construir hasta que salga.
- Claro no podemos ya construir nada completamente estamos
- Si cambio totalmente.
- No, no hasta ahora no tuve charla.
- Claro eso sí, si siempre buscamos la manera de solucionar los problemas y bueno se está trabajando.
- Bueno ahora no mucho no porque también ha bajado la mano el terrateniente también no, capaz que seguro está haciendo papeles por algún lado, pero si seguimos trabajando con abogados y todo eso
- Si actúan diferente si por ejemplo antes que se yo tenias un plazo de 3 años por ejemplo para recibir un terreno y si vos lo necesitas urgente por ejemplo una familia ya mama papa no pueden tener a la pareja al hijo va entones habla con la comunidad y tiene que esperar 5 años para recibir el terreno si porque no le puede, con estos problemas no le dan rápidamente.
- Se levante esa medida porque si construyen igualmente es problema para la comunidad no podemos construir entonces le daría el terreno seria para nada no pueden construir directamente entonces si igualmente se les da la garantía que tiene su terrenito esa familia que lo necesita.
- Yo por los cambio de política todo no se no espero mucho por el tema de como habla las presidenta vice presidenta el presidente no los que están postulancia ahora bueno algunos están con las comunidades, lugares comunitarios y otros no entonces estamos ahí si bien o mal entonces no se que pensar que se vendrá y bueno lo único que queda es seguir nomas luchando por lo nuestro y cuidar el lugar nada mas.
- No.

Entrevista Nro. 5

- Tilcara
- 29
- En Tilcara.
- Si Comunidad (S/N).

- Si como 100 familias.
- Bueno ahí hacemos lo que es la agricultura, la artesanía también no eso y el turismo también.
- No económico, no.
- Bien. Yo siento que cuido mucho la tierra porque nos da mucha energía y es también donde construimos.
- Que, significado la tierra, bueno no se qué significado.
- Con ninguno compartimos.
- Puede ser, sí.
- Y hablando haciendo juntando reuniones y charlando.
- Yo que sepa si, muchos tiene.
- En algunos conflictos si, si llego la policía, pero esa era por un tema de tierras viste que la gente se agarraba el territorio, el terreno y quería construir nosotros en la comunidad siempre pagamos una cuota siempre todos los meses para tener una tierra.
- Claro la comunidad somos todos pagamos una cuota cada mes tenemos una reunión.
- Yo que sepa si.
- Positiva y negativamente. Las dos
- Yo opino que tiene que cambiar las leyes y dar más favores a la comunidad también porque la comunidad defiende la tierra que dejo sus abuelos, nosotros también hacemos lo mismo nuestros abuelos también los cuidaron.
- Si nos afecta mucho.
- Bueno nosotros tenemos conflictos más que no podemos poner el agua no podemos poner la luz tampoco.
- Si digamo que cambio un poco porque el tema años más atrás yo que sepa era más difícil pero ahora si cambio un poco
- Ahora no es tan fácil, pero si cambio. Antes no, era mucha pelea con los vecinos, con todo venia alguien de otro lado se agarraba terreno tenia que salir la comunidad a defender al familiar para que no le quiten el terreno pero ahora ya no es así ahora todo se hace hablando así como dicen si vos no sos de la comunidad no te podes acercar ni asentar tampoco.
- Claro para defendernos.
- No sabría decirte. Claro no se yo que sepa no tenemos el mismo pensamiento.
- Comunitario si.

- Si siempre, claro siempre hay discusiones siempre hay desacuerdos también por eso siempre hay discusiones.
- Si siempre se llega para no tener problema siempre se llega.
- Yo que sepa si cambio un poco.
- Porque bueno antes las cosas eran más difíciles las cosas eran más diferentes, ahora ya tenemos diferente presidente son más joven tienen otro pensamiento.
- Resuelven más rápido piensan más bien las cosas antes no pasaba eso.
- Yo hasta ahora digo que nada seguimos en lo mismo casi, seguimos en la lucha peleamos por los derechos yo desde que naci sigue lo mismo no se como será mas a futuro.

Entrevista Nro. 6

- Nací en Tilcara
- Tengo 42 años.
- Si pertenezco a la Comunidad (S/N) del departamento de Tilcara.
- Si el último censo que se hizo arrojo 100 familias.
- Hoy nuestra comunidad uno de los ingresos son nuestros hombres son albañiles en su gran mayoría, agricultores y agricultoras, artesanas, artesanos también que trabajan las mujeres en la lana y los hombres en madera, tenemos, este, una gran parte también que trabaja en dependencia del estado, una parte salud, municipio, docentes, también otro de los ingresos es el trabajo en el circuito cuevas del huayra, el trabajo de turismo.
- Y tenemos muchísima nuestra comunidad es una de las que más practica en cuanto lo que es la ceremonia espiritual, la comovision andina donde tenemos el inti ayu y donde ahí realizamos diferentes ceremonias en ese lugar y también en nuestro hogares y en nuestra casa comunal como ser ceremonia a la Pachamama, ceremonia a la abuelita agua, ceremonia al abuelo fuego, a la luna y también en esa ceremonia en agradecimiento y también pidiendo alguna situaciones especiales donde estemos necesitando, también ahora esta prontamente lo que es el día de todos santos y día de los muertos donde realizamos ofrendas y bueno otras de las actividades también tenemos en nuestra cultura lo que es el carnaval muy importante tenemos nuestra comparsa los barreños ahí que es parte de la comunidad que es un hecho muy importante y bueno eso son nuestras actividades que tenemos en nuestra comunidad.
- El territorio en mi caso significa todo, todo para mí no, desde en mi caso por ejemplo actualmente trabajo como guía entonces en el mismo circuito tenemos lo que es las cuevas

donde llevamos ofrecemos nuestro guiado y yo a ella a todo el territorio le considero a la cuevitas por ejemplo que ella es mi jefa que ella es la que me da trabajo la considero todo ese espacio mi madre y también es sanadora para mi es parte como una psicóloga para nosotros y es todo sin nuestro espacio no podemos estar ahí nos sentimos en mi caso con mi familia nos sentimos tranquilos, contenidos, es un espacio tan importante que lo conservamos y lo cuidamos día a día no además de en lugares de zona de pastoreo también es un lugar donde uno puede hablar, tenemos sitios ancestrales, sitios arqueológicos entonces nos conecta mucho con la tierra el lugar y las energías que tiene todo ese espacio nuestra comunidad.

- Si lo compartimos y también tenemos miradas diferentes tal vez un poquito más un poquito menos, pero en todo porque antes de iniciar un trabajo comunitario, antes de iniciar nuestra caminata a las cuevas como guías uno siempre pide permiso al lugar y eso si lo compartimos entre todos.
- No, en ese caso solamente nuestro territorio está bien delimitado y solamente de nuestra comunidad.
- Si, si existen muy pocos digamos y que bueno digamos cuesta un poco resolverlo, pero a veces bueno estos conflictos nacen a partir de los problemas de los juicios de los litigios que tenemos y que no son resueltos a partir de eso nacen los conflictos que son muy pocos pero que lo tenemos.
- Con los vecinos no, tenemos una buena relación con las áreas de limites tenemos buena relación.
- Si, tenemos conflictos ya desde el año 2000 en adelante tenemos conflictos varios que a lo largo de los años hasta el 2023 se han ido sumando uno y otros y que constantemente tenemos, el que nos tiene más preocupados es la medida cautelar que continua desde el 2015 que se ha intentado bajarla y tener otra respuesta que nos den lugar favorable pero ese es uno de los que más nos tiene preocupados porque una que no podemos construir no tenemos acceso a los servicios básicos desde ese año y desde ese año se han formado muchísimas familias que hoy en día son independientes.
- Si.
- Actualmente mi opinión personal es lo que, que sentimos nosotros, sentimos que, siento que es una decepción de la justicia porque actúa y favorece a con las personas que están en este caso nosotros tenemos este la otra parte que dice menciona ser dueña entonces vemos el favoritismo para todo a esa familias que reclaman tenemos un ejemplo que dentro de

nuestra comunidad en un límite tenemos dos, vemos dos cada vez que subimos a los cerro tenemos dos miradas una un hotel que es el canto del viento que si no me equivoco es un hotel de cuatro estrellas y a lado esta y muy pegado a ese hotel cruzando una quebrada esta la otra realidad de nosotros que no tenemos acceso al agua a la luz que no llega el agua tenemos este lamentablemente que por ahí aun con cañerías clandestinas igual tampoco llega el agua entonces son, no que te duele o sea mi mirada la mía, es que me canse o sea es una decepción que te cansa que cada vez que vos decís acá hay gente y somos este gente jujeña, argentina a veces hay una discriminación por los hermano boliviano pero nos tratan como si no somos de acá, que nosotros somos los usurpadores pero vienen gente de otras provincias a poner un hotel y si es bien visto pero nosotros no entonces es una realidad dura que uno que causa mucho dolor a veces lo que pasa en nuestra comunidad no hay un crecimiento social, nosotros nos encantaría crecer socialmente nuestra comunidad y una de las barrera es que no podemos construir entonces no podemos continuar con nuestras casa con nuestra casa comunal que es de toda la comunidad y eso mucha bronca, mucho dolor y a veces te encontras sin esperanza, sin esperanza porque actualmente la justicia todavía es más dura, peor y menos favor, o sea no sentimos que nos responden con justicia sinceramente y sentimos que no es justicia eso actualmente y todo lo que hemos vivido hasta todo este año veintitrés que no lo esperamos que fue un golpe durísimo para las comunidades y como que sentimos que cada vez es como tenemos que seguir viviendo como venimos viviendo y ya siento que no hay luz de justicia en nuestra provincia.

- Si porque claro aparte de la medida cautelar también tenemos juicios penales acusaciones o sea falsas y eso todavía se sigue sobrellevando del otro lado y es cómo y nosotros sabemos que es una gran mentira de lo que nos acusan y las acusaciones son muy graves las que hace este hotel en complicidad con la persona que se cree dueño de todo ese espacio.
- No, lo que hacemos es actuar en un momento como que nos caemos un poco que vemos que no hay respuestas positivas, pero tratamos como sea de levantarnos todo y quienes a veces son las que más nos levantan son nuestras abuelas nuestra gente mayor adulta que nos dice tengan valor tenga fuerza y arriba porque hay que cada día hay que levantarse a seguir viviendo y a seguir cuidando y defendiendo el territorio. Hemos tenido una sola sentencia favorable que el caso de Esther y Sr. lo cual es una tranquilidad un poquito y ahí decimos bueno hay que seguir luchado como fue en esa ocasión y también seguir dando fuerza a nuestros asesores legales pero hoy es como decir hoy aunque sigan saliendo más juicios más contravenciones por defender la lucha por defender nuestros derechos decidimos sobreponernos y continuar adelante pero nunca, nunca volvernos o bajarnos o

quedarnos quietos y no hacer nada o sea se hace legamente pero también se hace la otra parte de seguir estando en el territorio y no abandonar.

- No, no todo lo contrario solo que quien por ahí las prácticas tradicionales como ceremonias fortalecernos tal vez nos detuvo un poquito lo que fue la pandemia, por la sentencia no porque tenemos que seguir de pie.
- Si, hay debate, pero al final es seguir unidos juntos y seguir defendiendo y sosteniendo y seguir sobre todo defendiendo hoy me imagino si llegan a como esta toda la situación en la provincia y de ultima es poner el cuerpo no porque a veces entran las notas entran los papeles y no te dan ha lugar no te los habeas corpus no dan a lugar no dan a lugar entonces de ultima es poner el cuerpo y te digo en todo este tiempo hay varones, mujeres en nuestra comunidad que están decididos a dar su vida por defender el territorio es muy fuerte pero ellos están decididos a que si tiene que pasar algo sea por defender ellos no dudan en poner su vida en defensa del territorio porque no queda otra porque sentimos que ya no somos escuchados ni por un papel ni con el dialogo no es como que a veces tenemos que hacer lo que dice el juez lo que dice el funcionario y si no haces bueno automáticamente la represión automáticamente sos detenido tenes causas otros tratan que de usurpador cuando nosotros venimos tenemos nuestras raíces tenemos nuestro sitios ancestrales, nuestro antigales, nuestros sitios arqueológicos y luego están nuestro abuelos y actualmente estamos nosotros que ya estamo grandes y vienen nuestros jóvenes y niños.
- Nosotros como desde el lugar de la tierra desde adentro de la tierra el territorio vemos que continua lo veo mi visión mi mirada es de continuar, es de entra una comisión sale otra comisión entran jóvenes se van despertando más jóvenes van sintiendo más, tal vez ahora con más responsabilidades algunos jóvenes los mayores siempre de pie o sea en ningún momento dejar ni dejar de gestionar nada pero si veo de nuestra parte que vamos a seguir construyendo en la parte de la parte espiritual de la parte nos encantaría poder construir libremente hacer muchas cosas libres pero nos impiden cierta cosas pero lo que hoy nos impide la medida cautelar no nos impide tener la fuerza adentro o sea nos puede decir montón de cosas pero tenemos la fortaleza adentro en nuestro corazón y en nuestra mente para continuar seguir defendiendo el territorio y con respecto a la mirada que tengo de la justicia actualmente es este, no es positiva es como engañable si decir no vamos cambiar o sea hoy, hoy cual que pasa si vos estas con el gobierno tenes muchos accesos hasta capaz que se te levantan las medidas cautelares y todo pero nosotros como comunidad seguimos y decidimos ser honestos ir por las vías que correspondan y porque una vez que te vendes ya no hay vuelta atrás no, también si tenes esa posibilidad pasa que también perdes la

confianza de las otras comunidades entonces es como es mejor continuar como podamos aunque el gobierno la justicia sea desfavorable pero continuar siendo honesto y continuar luchando eso y defendiendo lo único que nos queda.

- Que en la actualidad por ejemplo hay dos parte hay comunidades independientes autónomas que hemos continuado en todo este camino pero y somos muy unidas somos estamos muy unificados talvez por una nota no nos pongamos de acuerdo pero a la hora de salir y defendernos y unirnos y cuidarnos lo hacemos la gran parte de las comunidades no digo todas pero si la gran parte, y bueno lo positivo también que veo a mi comunidad que en este tiempo en este 2023 que escuche mucho lo bueno es de la comisión directiva de los abuelos de la familia que todo está más integrado que todo está más unido y que hay internas menores pero no hay nada que nos separe porque he viste en otro lados como que están divididos en tres por partidos políticos por otros intereses pero en nuestro caso lo bueno es que estamos todos muy integrados muy unidos y tenemos el objetivo que el objetivo es seguir defendiendo nuestro territorio.

Entrevista Nro. 7

- En Tilcara
- 39
- 98 familias en el último censo. Si Comunidad (S/N)
- bueno la mayoría tiene trabajo informal, debe ser poco un porcentaje que tiene trabajo formal en el municipio la mayorías también informal albañiles algunas personas que venden, vendedores en un plaza y muchos trabajan en el turismo también en el sector turístico.
- las no económicas por ejemplo bueno nosotros tenemos las asambleas que son mensuales nuestros trabajos comunitarios tenemos por supuesto no nuestras celebraciones importantes por ejemplo ahora todos santos que se viene o día de las almas que es una de las principales fiestas los inti raymi y cada solsticio, equinoccio tenemos las pachamamas que en nuestra comunidad son todo los 29 de agosto fijo una de las principales y creo que también nuestra actividad es más bien sobre todo las marchas nosotros siempre estamos ahí bajando a la ciudad y demás también nuestras reuniones.
- Yo creo que uf! la voy a hacer muy profunda, yo creo que se complementa uno se complementa con el territorio y la tierra y al revés y uno sin la tierra no es nadie y la tierra sin nosotros es… es una complementacion no, por ejemplo hace poco me toco ir a un despacho de alma y los despacho de alma, bueno cuando alguien fallece a los nueve días

se despacha el almita en el cementerio el cuerpo físico, no, pero después nosotros tenemos nuestro sentir no sé si llamar creencia o nuestra costumbre de que en los cerritos el alma de esa persona se despacha así que yo siempre me pongo a pensar que aparte de donde vivo ahí me desarrollo con mi casa en mi comunidad y hasta cuando no este mi almita también va a estar ahí, es inevitable la relación nosotros cuando damos de comer a la pacha o sea yo todos los alimentos que como por más que no lo siembro pero viene de la tierra.

- Si es más yo creo que uno desde ahí o sea la comunidad no sería comunidad sin el territorio.
- Con varias comunidades.
- No (compartimos)
- Si no? Yo creo que todo grupo social es lógico cualquiera familia, pareja, todo sea o no sea comunidad los conflictos que tiene cualquier grupo social por supuesto que siempre mediante las asambleas tratamos de consensuar pero siempre va a haber conflictos internos.
- Sí, si más de 10 juicios con terratenientes, hoteleros.
- Si. A grandes rasgos.
- Yo creo que, haber no, yo siempre me digo esto, es la gran deuda del estado argentino hacia nosotros son los títulos comunitarios no, o sea como todos sabemos en el 94 como dicen no, fue la última reforma a la constitución hace ni 30 años reconoce el estado recién pero nosotros habitábamos hace más de 10 mil años y yo la verdad que siento que esta 30 años no es nada está pero no se aplica no, la verdad está ahí pero siento que la justicia para el coya sobre todo para nuestros indios primero que es medio inalcanzable segundo no se aplica los hechos hoy en día nosotros tenemos una cautelar nos negaron un derecho tan básico como es el derecho al agua o sea yo por ejemplo en mi casa yo no puedo construir no tengo derecho a algo tan básico como al ser humano que es el agua entonces la justica.
- Y afecta tu desarrollo social o sea no podes, yo por ejemplo como voy a desarrollar como voy a sembrar si no tengo acceso al agua o sea que vida…
- Se ven super limitadas o sea nosotros no podemos mas con esta economía no podemos construir no o sea hasta la vida personal de uno porque queres desarrollarte yo si quiero tener familia si no tengo acceso al agua si no puedo construir si no tengo un baño digno.
- Gran parte porque no tener acceso a luz y agua y no poder construir es el derecho básico humano.
- Si por supuesto nosotros hemos presentado varios pero bueno sigue todo estancado más con esto de la reforma pero bueno venimos antes de la reforma también la pasamos mal con o sin reforma.

- No yo creo que uno más se arraiga y como uno o sea, ella es la que nos da la fuerza la tierra cada vez que uno da la pachamama, la vida que sería sin la tierra, es inevitable.
- Yo creo que más allá de la justicia o no yo creo que tenemos nosotros la capacidad de organización tenemos y la capacidad de gestión por supuesto es deber de las instituciones del estado cumplir pero más allá de eso ojala los tiempos cambien no, pero creo que eso no nos limita creo que más allá de todas las cuestiones hace poco lo que ha pasado la unidad de las comunidades ha demostrado que se puede bajar cierto poderes que podemos organizarnos y el proceso sigue en eso en organizarnos gestionar mas alla del estado de mas podemos ir con otras instituciones con otras cuestiones pero bueno hace 500 años estamos y vamos a seguir.
- Mire, no sé si sirve de mucho, pero a mí me contaron sobre la dictadura militar y lo he leído. Durante la lucha de los pueblos indígenas contra la construcción de una ruta que atravesaría nuestro territorio, sentí lo que es vivir en una dictadura, con persecución y represión. Cuando fui a la Corte Suprema en Buenos Aires, me di cuenta de que la justicia no se aplica a los pueblos indígenas. Para nosotros, los coyas, la justicia no existe. Presentamos denuncias y hacemos trámites, pero parece que la justicia solo se aplica a ciertos grupos. Ojalá algún día la justicia también se aplique a nuestros pueblos indígenas.
- Para mí, es un vacío ver cómo los jueces de la Corte Suprema no aplican algo tan fundamental. No entiendo cómo este país puede existir si la Constitución no tiene valor para todos. Es como si la justicia existiera para algunos argentinos, pero no para los argentinos coyas. Aunque esto es frustrante, he aprendido que estamos acostumbrados a esta lucha. Nos da fuerza para seguir adelante y buscar nuevas formas de organizarnos.
- Lo interesante es que, independientemente de que la justicia exista o no para nosotros, seguiremos existiendo. Aunque haya proyectos que amenacen nuestro territorio, seguiremos luchando. Con o sin agua, seguiremos defendiendo nuestro territorio. El territorio es lo que nos permite estar aquí hoy. Sin él, no podríamos vivir. La tierra nos da todo, y sin ella, no somos nada.

Entrevista Nro. 8

- Naci en el Aguilar
- 41
- Y son más de 100 familias.Si Comunidad (S/N).

- Bueno ahí están con las artesanías hay muchas familias que trabajan con artesanías después también se administra un circuito de las cuevas que también es económico y ahí también trabajan mas de 10 familias de la comunidad, y después hay gente que también hace agricultura y bueno hay también una parte que son que trabajan en la municipalidad que trabajan en el estado.
- Ceremonias, también de acuerdo al calendario que va al calendario andino que se va dando por ejemplo 21 de junio que es inti Raymi y así van dando las ceremonias que van haciendo Pachamama también en agosto, después también se hace ceremonias al agua, ceremonias, una ceremonia que es la búsqueda de visión que también se hace que también en un sector de la comunidad que se destino para hacer ceremonias y se hace eso la búsqueda de visión después tenes también hay fiestas religiosas también para santos que es patronos que porque tambien hay gente que cree en la iglesia.
- Bien digamos mas que todo bueno de como nos identificamos como comunidad es diferente por ahí un poco diferente digamos a que no fueras de una comunidad, porque no es lo mismo capaz, que cuando uno pertenece a una comunidad tiene como ciertos aspectos digamos de que identifican digamos a las comunidades; claro con una identidad, a partir de que uno se auto reconozca va digamos a pertenecer o algo.
- Si uno como que se auto reconozca capaz que si uno hasta ahora no se auto reconozca por más que tenga el color de piel que tiene uno que capaz que yo me identifico como coya digamos, pero hay gente que es coya, pero no se identifica y tampoco quiere pertenecer a una comunidad y ellos dicen los coyas los indios pero siendo que esa persona tiene la misma piel la misma sangre y hasta puede ser mi hermano mi familiar digamos mi primo y el no se quiere identificar no quiere porque por ahí es discriminado porque por muchas cosas factores que pueden no querer identificarse.
- Si siempre están por ejemplo cuando están trabajando con turismo también tuvieron que comunicarse con otras comunidades que también quieren hacer el trabajo ese de la actividad de turismo entonces por ejemplo si están en tal comunidad después aca como que y luego con el centro ceremonial también como que están ahí ahí podrían ir de diferentes comunidades a hacer las ceremonias también.
- No. Si esta delimitado.
- Si varios.
- Mas que todo por el territorio por los papeles decir que no que juicios por los papeles de las tenencias digamos títulos, por el titulo

- Si y no, porque como todavía el derecho indígena no está bien o sea como que no se da bien digamos como que recién se está hablando entonces y por ese lado es difícil capaz llevar digamos la justicia por ese lado porque siempre que se ha tomado se le toma a la persona individual no como miembro de una comunidad para hacer el juicio para la sentencia, entonces ahí donde esta el conflicto porque no se tomó a la persona como miembro de una comunidad entonces ahí es diferente como deberían tratarse cuando se le toma ala persona de manera individual ahí es como se le pudo llevar como ya no se habla por eso de derecho indígena.
- Sentencia una o dos creo. Una que salió a favor que quedo una sentencia que se quedó a favor y la otra todavía no salió.
- En el momento cuando salió la sentencia que era a favor bueno estábamos como más relajados digamos decimos bueno si que es lo que implicaba eso era que bueno se venía un desalojo se venía un desalojo incluso porque se tomó a la persona de la comunidad como individual entonces se venia el desalojo, por eso salió el desalojo entonces cuando se dio la sentencia bueno dijimos estábamos más tranquilos porque bueno no va a haber desalojo pero que paso, paso el tiempo y como que la sentencia como que la otra parte que estuvieron en el juicio volvieron a querer dar vuelta la sentencia o estaban todavía ahí y ahí de nuevo estaban preocupados porque dijimos como si ya estaba la sentencia se puede volver puede volver a afectarte.
- Creo que la, con todos los juicios con toda la sentencia y todo lo que se dio la comunidad lo que se hace crecer más digamos vamos creciendo tomando experiencia capaz porque capaz que sino no, no podes vos saber cómo defenderte si no te toca en este caso es creo que más experiencia.
- Si en su momento si, se hablo si se hablo porque bueno es un tema que como para ver como se sigue con los demás juicios porque son varios tenemos como 12 por ahí son un montón de juicios.
- Si si, en gran parte porque como nosotros no es lo mismo que no tengas nada digamos ningún juicio tenemos varios como sentencia digo no es lo mismo entonces si se cambia siempre esta expectantes, siempre estar en contactos con los abogados.
- Se estaba construyendo y en un momento si estuvo parado y como que como cuando dijo se viene el desalojo entonces había una persona que tenía que construir y no construyo quedo todo ahí.

- Y en desafío poder defenderse como, como comunidad ver la manera porque hasta ahora no se dio algo así bien que se pueda uno se toma lo hecho, pero por lo individual no como este colectivo porque como decíamos no se puede desalojar a una comunidad o no se puede meter preso a la comunidad o sea como que lo ven como algo individual, eso es lo que no se es un desafío es ver la manera de cómo podemos nosotros defendernos, pero como comunidad
- Si por ahí bueno seria bueno que se vea esa parte digamos con las comunidades si porque muchos casos están así muchas comunidades que están más allá digamos de que hasta ahora lo que están haciendo estamos resistiendo no se estamos defendiendo, porque tenemos nosotros todo el tiempo nos están atacando por el territorio entonces que hacemos nosotros apenas nos defendemos resistimos pero ahora que si podríamos nosotros digamos defendernos lo que hacemos hasta ahora es resistir nada más porque es lo que tenemos seria bueno porque para nosotros es injusto que se den las cosas así pero que podemos hacer no podemos hacer más nada porque bueno estamos como atados mas allá de que nos den nos vengan y nos digan si mira te damos los territorio entregamos los títulos pero también decimos que no van a entregar los títulos igual te pueden porque te dan la tierra no te dan el territorio en si.

Entrevista Nro. 9

- Yo nací en Cusi Cusi, un pequeño pueblo del departamento de Santa Catalina.
- Ahora tengo 42 años.
- Actualmente vivo en la Comunidad (S/N).
- Nuestra comunidad está formada por aproximadamente 80 familias, unas 250 personas en total. Dentro de la comunidad, hay varias actividades económicas. Algunas personas trabajan para el estado, por ejemplo, en la municipalidad y como docentes. Sin embargo, la mayoría de los hombres se dedican a la agricultura y a trabajos de albañilería. En cuanto a las mujeres, muchas de nosotras trabajamos en la artesanía y en el turismo. Tenemos un proyecto turístico donde participan 12 familias, ofreciendo recorridos por nuestros paisajes y cultura.
- Realizamos diversas ceremonias, como la Pachamama y el Inti Raymi, así como otras que se programan de acuerdo con nuestro calendario, como el Kolla Raymi y ceremonias durante las noches de luna llena. Estas ceremonias se hacen según las necesidades y la espiritualidad de nuestra comunidad. También celebramos el carnaval, donde organizamos señaladas y marcadas, compartiendo en comunidad.

- Nosotros somos parte integral de nuestro territorio, no podemos existir sin él. Nuestro territorio incluye no solo la tierra, sino también el subsuelo, el aire y el cosmos. Aquí desarrollamos nuestra vida económica y espiritual. En nuestro territorio están nuestros ancestros y nuestros apus (espíritus), con los que mantenemos una relación constante en todos los aspectos de nuestra vida.
- La comunidad tiene relaciones con otras comunidades y también pertenece al departamento de Santa Catalina. Tenemos vínculos con otras comunidades de la provincia y realizamos actividades conjuntas. Si una comunidad organiza una señalada o una ceremonia del Inti Raymi, nos invita a participar. Últimamente, estamos intentando formar una mesa coordinadora con otras comunidades para fortalecer nuestra colaboración.
- Para nosotros, el territorio es como nuestra madre, la Pachamama. Nos duele ver cómo el sistema capitalista prioriza el dinero sobre la tierra, destruyendo a nuestra madre tierra, lo que eventualmente nos afectará a todos, sin importar dónde vivamos.
- En nuestra comunidad, los conflictos internos son mínimos, cosas pequeñas como que un animal cruce al terreno de otro. Sin embargo, sí hemos tenido conflictos mayores por nuestro territorio, tanto civiles como penales. Un ejemplo es un intento de desalojo que comenzó en 2004. En ese entonces, se otorgaron terrenos a varias familias jóvenes para construir sus casas. En 2006, una persona externa reclamó esos terrenos, iniciando un juicio que duró muchos años. Aunque ganamos la sentencia en 2013, la persona sigue intentando recuperar el terreno, lo que nos mantiene en una constante lucha legal.
- Esta lucha ha sido agotadora y nos ha enseñado la importancia de estar organizados y de tener apoyo legal. La sentencia fue una victoria, pero seguimos enfrentando nuevas demandas. Nos hemos educado en temas legales para poder defendernos mejor y mantenernos unidos en esta lucha.
- A pesar de todo, hemos aprendido a estar más atentos y a trabajar juntos para proteger nuestro territorio. La lucha por nuestros derechos y territorios es larga, pero con organización y apoyo podemos lograrlo. También es fundamental mantener nuestras tradiciones y espiritualidad vivas, ya que nos dan la fuerza para seguir adelante.

Entrevista Nro. 10.

- Yo nací en Casabindo, un pequeño pueblo en el departamento de Cochinoca. Actualmente tengo 51 años.
- Vivo en comunidad en el territorio de la Comunidad (S/N).

- En nuestra comunidad, según el último censo, somos alrededor de 90 familias, lo que equivale a unas 280 personas. La mayoría de nosotros trabaja en empleos informales. Algunos trabajan en el sector público, pero es una minoría. Muchos hombres se dedican a la agricultura y la albañilería, mientras que algunas personas venden sus productos en el mercado y muchos también trabajan en el sector turístico.
- Además de las actividades económicas, realizamos actividades no económicas como asambleas mensuales y trabajos comunitarios. Celebramos festividades importantes como Todos Santos, el Inti Raymi y cada solsticio y equinoccio. También hacemos ofrendas a la Pachamama, especialmente el 1 de agosto, que es una de nuestras ceremonias principales. Además, participamos en marchas y reuniones para defender nuestros derechos y territorios.
- Nuestra relación con el territorio es muy profunda. Uno se complementa con la tierra y la tierra con nosotros. Sin la tierra, no somos nada, y la tierra sin nosotros tampoco. Hace poco participé en un despacho de alma, que es una ceremonia que hacemos cuando alguien fallece. Despachamos su alma en los cerros, lo que refuerza nuestra conexión con el territorio. Cuando alimentamos a la Pachamama, todos los alimentos que consumimos vienen de la tierra, incluso si no los sembramos nosotros mismos.
- Nuestra comunidad no existiría sin nuestro territorio. Tenemos relaciones con varias comunidades y trabajamos juntos en muchas actividades. Sin embargo, como en cualquier grupo social, también tenemos conflictos internos, pero siempre intentamos resolverlos a través del consenso en nuestras asambleas.
- Hemos tenido más de 10 juicios con terratenientes y hoteleros por cuestiones de territorio. Creo que esta es una gran deuda del Estado argentino hacia nosotros: la falta de títulos comunitarios. Aunque en 1994 se reconoció nuestro derecho al territorio en la Constitución, este derecho no se aplica en la práctica. Aún hoy, nos niegan derechos básicos como el acceso al agua. Por ejemplo, en mi casa no puedo construir porque no tengo acceso al agua, lo que afecta nuestro desarrollo social y económico.
- La falta de acceso a servicios básicos como el agua y la luz limita nuestra vida personal y colectiva. No podemos construir viviendas dignas ni desarrollar nuestras actividades productivas. Hemos presentado varias denuncias, pero todo sigue estancado, más aún con la reciente reforma.
- La tierra nos da la fuerza para seguir adelante. Aunque no siempre recibimos justicia del Estado, tenemos la capacidad de organizarnos y gestionar nuestros recursos. Hemos

demostrado que podemos enfrentar el poder y seguir adelante, organizándonos con otras comunidades y buscando soluciones alternativas.

- Durante la lucha por nuestros derechos, he sentido la represión y la dificultad de hacer escuchar nuestra voz. Al visitar la Corte Suprema en Buenos Aires, me di cuenta de lo difícil que es obtener justicia para los pueblos indígenas. A pesar de estos desafíos, seguimos luchando y organizándonos. La falta de justicia nos da la fuerza para encontrar otras formas de resistencia. Seguiremos existiendo y defendiendo nuestros territorios, con o sin agua, porque el territorio es lo que nos permite estar aquí hoy. Sin la tierra, no podríamos vivir. Por eso, continuamos nuestra lucha para proteger lo que es nuestro.
- A pesar de todo, seguimos luchando y organizándonos. La falta de justicia nos da la fuerza para encontrar otras formas de resistencia. Seguiremos existiendo y defendiendo nuestros territorios, con o sin agua, porque el territorio es lo que nos permite estar aquí hoy. Sin la tierra, no podríamos vivir. Por eso, continuamos nuestra lucha para proteger lo que es nuestro.

Apéndice E: Gráfico jerárquico de las narrativas de las comunidades indígenas sobre territorio y justicia

